ESTUDIOS PÚBLICOS

Nº 76 PRIMAVERA 1999

Carlos Alberto Montaner
El reñidero intelectual: La revolución cubana y sus últimos alabarderos

Rafael Berástegui
Crónica de la indefensión

Enrico Mario Santí
Mi reino por el caballo: Las dos memorias de Lisandro Otero

Jorge Edwards
Cuba: Cuarenta años después

Nieves Olcoz
Delitos y sueños de Reinaldo Arenas

Joseph Raz
Autonomía, tolerancia y el principio del daño

Leon Sheleff
Comentario al artículo de Joseph Raz

C. L. Ten
Comentario al artículo de Joseph Raz

Mary Ann Glendon
Derecho y familia

Sol Serrano
La definición de lo público en un Estado católico

Pilar González Bernaldo de Quirós
Literatura injuriosa y opinión pública en Santiago de Chile

Bárbara Eyzaguirre
Una mirada a la reforma curricular

Harold W. Stevenson y James W. Stigler
¿Por qué los escolares de Asia oriental tienen alto rendimiento académico?

Manuel Krauskopf
Los doctorados en Chile

Fernando Fuentes H. y Jorge Marshall R.
Eficiencia de las instituciones y desempeño económico

Gonzalo Contreras
Guía básica para leer a Henry James

Antonio Daher *El Estado terrateniente: Gestión de bienes nacionales*

CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS

EL REÑIDERO INTELECTUAL: LA REVOLUCIÓN CUBANA Y SUS ÚLTIMOS ALABARDEROS

Carlos Alberto Montaner

¿Por qué la Revolución cubana se convirtió en el centro de una polémica que dividió a los intelectuales occidentales durante casi tres décadas? ¿Cuáles son las razones por las que aún hay intelectuales dispuestos a defender el régimen de La Habana? ¿Qué tipo de revolución ha sido la cubana, y cuáles han sido verdaderamente sus logros? ¿Qué decir, por ejemplo, de los resultados en materia de salud pública? ¿Qué peso ha tenido el embargo norteamericano en la situación de Cuba, y quiénes y por qué están detrás del embargo? Junto con abordar éstas y otras preguntas, Carlos Alberto Montaner se refiere a las opciones que hoy enfrenta el régimen castrista y sus eventuales consecuencias para el pueblo cubano.

No quedan muchos intelectuales occidentales en las filas de Fidel Castro. Y los que quedan no permanecen junto al viejo dictador por las mismas razones. Alguno, como Günter Grass, que no tiene militancia comunista, parece dejarse arrastrar por una visión esquemática y simplista, que le permite encontrar explicaciones o justificaciones para la tiranía cubana en el hecho de que, aparentemente, se trata de una pobre isla acosada

CARLOS ALBERTO MONTANER. Ensayista, escritor y periodista cubano, residente en Madrid. Su libro más reciente es *Viaje al corazón de Cuba* (Barcelona: Plaza y Janés, 1999).

y amenazada por Washington. Otros, como Mario Benedetti, Eduardo Galeano o Ariel Dorffman lo hacen desde un ángulo tercermundista clásico, en el que se trenzan el análisis marxista, el odio a los Estados Unidos y una minuciosa incomprensión de los verdaderos fenómenos económicos y sociales que afectan a América Latina y dan origen a la pobreza, la desigualdad y los atropellos que sufre una buena parte de ese atribulado universo.

Por último, hay una pequeña categoría de castristas que, a estas alturas, no son apologistas del régimen, pero mantienen intacta su lealtad por el Máximo Líder. El abanderado de esa extraña militancia antropológica acaso sea Gabriel García Márquez, conocedor a fondo de los males que aquejan al pueblo cubano y de las aberraciones de la burocracia comunista, pero defensor a ultranza de su *amigo*, el patriarca Fidel Castro, a quien no le parece elegante abandonarlo en la hora postrera de su otoño inexorable.

En el bando contrario, en cambio, la nómina de los intelectuales críticos se ha ido abultando hasta adquirir un peso abrumador. En España, con la excepción de Rafael Alberti, no hay, prácticamente, ningún escritor de prestigio que alce su voz para respaldar al gobierno de La Habana. En Estados Unidos las voces indignadas de escritores como Susan Sontag, Irving L. Horowitz, o el desaparecido Allen Ginsberg, han hecho inaudibles los aplausos cada vez más desalentados de escritores de la línea de Chomsky. En Francia sólo parecía quedar Regis Debray, pero desde el fusilamiento de su amigo, el coronel Tony de la Guardia, en el verano de 1989, aunque con otros argumentos, pasó a engrosar las filas anticastristas enérgicamente capitaneadas por Fernando Arrabal, B. Henri Levi, Jorge Semprún, J. F. Revel, Ionesco, E. Manet y un larguísimo etcétera en el que no han faltado figuras extraordinariamente populares y queridas, como fue el inolvidable Ives Montand.

Y si en Francia o España el repudio al castrismo es unánime —al extremo de que un escritor como Xavier Domingo no vaciló en acudir personalmente a Cuba a auxiliar a los disidentes—, en América Latina es posible afirmar que es *casi* unánime. Mexicanos de diferente signo ideológico, como son Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, coinciden, sin embargo, en la condena a Fidel Castro. Lo mismo puede decirse de argentinos como Sábato, Juan José Sebreli o Jacobo Timmerman. A hombres tan disímiles como Jorge Amado, Germán Arciniegas y Jorge Edwards les ocurre algo similar. Afortunadamente, ya pasaron los tiempos en que intelectuales como Vargas Llosa, Octavio Paz, Carlos Rangel, Juan Goytisolo o Plinio Apuleyo Mendoza tenían que enfrentarse a la ira de la *izquierda*

divina por denunciar el arresto, maltrato y humillación del poeta Heberto Padilla. Y ya nadie, desde Bogotá o Lima, responde airado a un demoledor artículo anticastrista publicado en Madrid por Federico Jiménez Losantos, en Barcelona por Alberto Míguez o en Roma por Valerio Riva, quien es (junto a Laura Gonsález, esa incansable luchadora por los derechos humanos) el mayor de los expertos italianos en el tema cubano, y quizás por eso uno de los más lúcidos críticos del 'Comandante en Jefe' en el Viejo Continente.

La revolución cubana como dilema

En todo caso, a ningún lector puede sorprenderle este fenómeno. Castro lleva cuarenta años al frente de su gobierno y su discurso político está totalmente agotado. Tras la caída del muro de Berlín y el desplome de los gobiernos comunistas de Europa, es imposible continuar gritando impunemente en el Caribe 'marxismo-leninismo o muerte'. Especialmente en un país devastado por el hambre y empobrecido por la ineficiencia de su burocracia administrativa hasta unos niveles increíbles. Lo asombroso, pues, no es que el castrismo esté totalmente desacreditado en los medios intelectuales, sino que aún queden vivos algunos oficiantes de la secta, dispuestos a seguir coreando las consignas de La Habana.

Sin embargo, al margen de ese fatigado debate —Castro sí/Castro no— en el que enseguida entraremos, hay un aspecto previo a esta cuestión que merece ser examinado con cuidado para poder llegar a conclusiones válidas: ¿por qué se ha producido este debate? ¿Por qué la revolución cubana se convirtió en el centro de una apasionada polémica que ha dividido a los intelectuales durante más de tres décadas? ¿Por qué hay que tomar partido junto a Castro o frente a Castro?

Por una razón de singular importancia: porque 'el caso Cuba dejó de ser un fenómeno político particular, acaecido en una isla remota del Caribe, y pasó a convertirse en un dilema moral con ribetes universales. Algo parecido a lo que sucedió con España entre 1936 y 1939. En aquellos años la Guerra Civil de la Península dividió en dos bandos a los intelectuales del mundo entero: los que estaban con la República —la inmensa mayoría— y los que respaldaban a los insurgentes.

En Cuba, Castro, desde el inicio de la revolución, provocó deliberadamente una situación de esta índole, invitando a la Isla a personalidades como Sartre y Simone de Beauvoir, iniciando desde entonces una suerte de *turismo revolucionario*, pero no con el objeto de plantear un serio debate

sobre las bondades de su sistema, sino para forjar una base de apoyo internacional a cuanto acontecía en el país.

Esto es conveniente destacarlo, porque los intelectuales que apoyan a las dictaduras suelen descansar en la dulce superstición de que ese acto no es más que una manifestación sin consecuencias de cierta manera de pensar, pero eso no es verdad. El comunismo, el fascismo, y todas las tiranías que sistemáticamente han buscado el apoyo de creadores e intelectuales respetados, no lo han hecho por amor al arte o por devoción a los artistas, sino en procura de un elemento de propaganda que les permitiera ahogar las denuncias de las víctimas, oscurecer las censuras de los críticos y ocultar los ribetes dictatoriales de esos gobiernos.

Cuando el argentino-chileno Dorffman, el italiano Gianni Miná —persona del mundo del espectáculo, no de la literatura— o el brasilero Fray Betto apoyan públicamente a la revolución cubana, ese apoyo pasa a formar parte de la supuesta carga de legitimidad política con que cuenta Castro para continuar ejerciendo su despotismo. Ese apoyo, junto a las manifestaciones multitudinarias convocadas en las plazas y parques del país, es el sucedáneo con que las tiranías totalitarias reemplazan la democracia, el multipartidismo, el imperio de la ley y los procesos electorales libres. Ese apoyo de intelectuales extranjeros prestigiosos y esas movilizaciones masivas domesticadas son los símbolos con los que se silencian las protestas, se descalifica a la oposición y se justifica *toda* la revolución. Y esa palabra —*toda*— no sólo incluye los hospitales y las escuelas (que no necesitan defensores porque son, obviamente, elementos benéficos), sino también las cárceles, los paredones, los ametrallamientos de balseros, la censura del pensamiento, los juicios arbitrarios, la persecución de disidentes y el demencial clima policíaco de delaciones, temores y torturas que se vive en el país.

Obviamente, si esos gobiernos tuvieran, efectivamente, legitimidad democrática, e hicieran bien sus tareas, y se pudiera constatar sin coacciones la verdadera voluntad popular, no sería necesario buscar el respaldo de los intelectuales extranjeros mediante costosas operaciones de *public relations* revolucionarias, o tratar de demostrar el fervor popular en mítines al aire libre y en consignas repetidas mil veces a través de todos los medios de comunicación.

¿Qué revolución?

Esto nos precipita a enfrentarnos con un problema que pertenece tanto a la fenomenología como a la política: cuando los defensores de Castro hablan de la *revolución cubana* ¿a qué se están refiriendo? ¿En qué

piensa el arcangélico Fray Betto cuando piensa en la revolución? ¿Piensa en una escuelita rural y unos niños aseados y estudiosos que aprenden el alfabeto cogidos de la mano, o piensa en una familia desesperada que se echa al mar atada a unas tablas para tratar de escapar del horror? ¿Es capaz Mario Benedetti, cuando piensa en Cuba, de pensar en otro Mario, en Mario Chanes, compañero de Fidel Castro en el asalto al Moncada y compañero de Fidel Castro en el desembarco del Granma, lo que no impidió que cumpliera 30 años de cárcel por un delito político que nunca le pudieron probar porque nunca lo cometió? ¿Es capaz Saverio Tutino —uno de los últimos alabarderos de Castro en Italia— de sortear la fascinación que le produce Fidel Castro, entrar en la casa miserable de una familia cubana hambrienta, sin electricidad dieciséis horas al día, sin agua corriente la mitad de la semana, sin esperanzas nunca, y tras ese espantoso recorrido reexaminar entonces la figura de su ídolo a la luz de las patéticas escenas de la vida cotidiana cubana?

Lo grave, lo terriblemente grave de los intelectuales que aplauden a Castro, es ese esquematismo moral, simplón, desinformado, carente de matices, con el que intentan construir una Cuba que en nada se parece a la espeluznante realidad por la que tienen que pasar los cubanos.

Cuba no es una pequeña y pobre isla del Caribe a merced de las agresiones de Estados Unidos. Es un país del tamaño de Austria y Suiza juntas, que no debiera estar pasando hambre, porque el 80% de su suelo es extraordinariamente fértil, el régimen de lluvias suele ser generoso, y su población no llega a los once millones de habitantes.

No es el de Castro un gobierno tranquilo y laborioso que intenta construir en paz un modelo político distinto al de sus vecinos, sino se trata de una dictadura deliberadamente calcada del viejo modelo soviético, que llegó a poseer el noveno ejército del mundo, cuyos soldados fueron empleados como gurkhas de las más largas guerras de conquista (quince años en Angola y Etiopía) en las que jamás ha participado un país del continente americano. Una dictadura que en 1968 aplaudió la invasión soviética a Checoslovaquia, y en 1999, treinta y un años más tarde, respaldó el genocidio serbio en Kosovo o el indonesio en Timor oriental, como para demostrar su permanente adhesión a los tiranos poderosos si ello conviene a sus intereses geopolíticos, más allá de cualquier consideración ética o de principios.

Esa pobre Cuba de las oraciones de Fray Betto, aún hoy, en medio de una espantosa situación económica, tiene un ejército regular de 325.000 hombres, una implacable policía secreta de 75.000 temidos agentes, más milicias de distinto tipo que exceden el millón de conscriptos, mientras los

miembros del Partido Comunista forman parte de turbas de asalto, las temibles Brigadas de Respuesta Rápida golpean, humillan y acosan constantemente a los disidentes o a quienes se atreven a mostrar su inconformidad con el sistema. Y es verdad que ese gobierno ha sido el blanco de los ataques de la CIA y de sus adversarios políticos, pero sería un acto de cinismo no decir, al mismo tiempo, que durante 32 años, mientras duró el apoyo de la URSS, Cuba fue un nido de terroristas y secuestradores, posada y fonda para guerrilleros del mundo entero, y centro de entrenamiento de todos los movimientos revolucionarios que durante tres décadas pusieron en jaque a numerosos gobiernos de Occidente, primero, coordinados por la tristemente célebre Tricontinental, y luego por el recientemente desaparecido general Piñeiro, 'Barbarroja', desde el Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista.

Porque los benedetti y los galeano que denuncian las 'constantes agresiones de Estados Unidos contra Cuba', jamás han dicho una palabra de las agresiones de Cuba contra la Venezuela de Rómulo Betancourt, que luchaba penosamente por consolidar la democracia tras la dictadura de Pérez Jiménez, o contra el papel desestabilizador e imprudente que desempeñaron los cubanos en el Chile del primer Frei, y luego durante el pinochetismo, siempre apostando por las fórmulas más radicales e irritantes. Los tutino y los alberti invariablemente quieren presentar la batalla de Cuba como una guerra sin cuartel de Washington contra La Habana, olvidando que el gran esfuerzo subversivo de Cuba, su gran enemigo, fue la democracia latinoamericana: el Perú de Prado, el Uruguay de Bordaberry, la Colombia de Barco, la Argentina de Illía y así hasta llegar a la absurda canallada de entrenar costarricenses y jamaicanos castristas para derrocar 'dictaduras' que ¡ni siquiera tenían ejércitos!

¿Puede ignorar cualquier persona medianamente informada los vínculos entre la DGI cubana y los movimientos terroristas y guerrilleros tales como los tupamaros uruguayos, los miristas chilenos, los montoneros argentinos, el Frente de Liberación Nacional de Colombia, los 'macheteros' puertorriqueños, los 'chinchoneros' hondureños, la ETA española y hasta las brigadas rojas italianas? ¿Dudan estos defensores de la *pobrecita* Cuba de las relaciones entre la revolución cubana, el narcotráfico, Robert Vesco, y cuanto tahúr se ha acercado a La Habana a proponer un sucio negocio lucrativo para 'combatir el imperialismo'? Cuando Gianni Miná escribió su lamentable libro sobre/con y para Castro ¿se le ocurrió pensar que su admirado entrevistado fue quien transformó en terrorista a un hombre como Feltrinelli, y que fue en La Habana donde aquel confundido editor de ideas marxistas decidió utilizar bombas para cambiar el destino democrático de

los italianos e instalar en su país el *glorioso* modelo político de Cuba, Bulgaria y Albania? ¿No es el cuerpo destrozado de Feltrinelli una metáfora final y definitiva de lo que realmente significa la revolución cubana: muertes absurdas e inútiles, comportamientos irracionales, utopías sangrientas? ¿Tiene más peso, más entidad, para juzgar a la revolución la imagen de los *logros* —escuelas y hospitales— que la de los *destrozos*: presos, fusilados, exiliados, miseria, opresión? Examinemos rápidamente unos y otros para llegar a conclusiones.

La revolución como utopía

Hay varios puntos de partida en la militancia castrista, pero el más frecuentado es el que tiene que ver con los *logros de la revolución.* Y lo que nos proponen estos devotos del Comandante puede concretarse de la siguiente manera: 'En Cuba, es cierto, hay problemas, pero la revolución ha hecho un descomunal esfuerzo por educar a los cubanos, poniendo punto final al analfabetismo, enviando decenas de miles de estudiantes a las universidades y creado una de las poblaciones más cultas y preparadas de América Latina'.

Luego el argumento se extiende al terreno de la salud: 'tampoco puede negarse que los índices sanitarios y las expectativas de vida de los cubanos están entre los más altos del mundo'. Y enseguida despliegan las estadísticas sobre niños vivos, número de médicos por millar de habitantes y los datos *oficiales* de la Organización Mundial de la Salud como prueba irrefutable de que la revolución es, fundamentalmente, buena.

Un tercer *logro* también suele enunciarse como apoyo y justificación de la opción positiva que ellos —los defensores del sistema— han elegido: los triunfos deportivos. Las medallas ganadas en las Olimpíadas y en los Juegos Panamericanos. La lista de boxeadores y corredores triunfantes. '¿No es una proeza —se preguntan retóricamente— que la *pobre* Cuba, en medio de las amenazas yanquis, sea una *potencia deportiva*, de la misma manera que es una *potencia médica* o una *potencia académica*?'

Como corolario de esos axiomas revolucionarios —que, como todos los axiomas, no necesitan demostración—, el razonamiento se remata con comparaciones selectivas en las que se contrasta el fulgurante panorama cubano con la tétrica realidad de América Latina: '¿Es mejor el gobierno de Castro, con todos sus defectos, pero con jóvenes sanos y educados y atléticos, o el de Brasil, con niños hambrientos ametrallados por la policía por el solo delito de dormir en las calles?' '¿Es mejor el gobierno de Castro o el

de Haití, en el que la esperanza de vida de los niños, cuando nacen, es veinte veces menor que en Cuba?' Y así siguen hasta el infinito las comparaciones con las que los últimos intelectuales procastristas blindan su conciencia ética.

Veamos. Lo primero que se nos propone viene a ser una fórmula moral para enjuiciar a los regímenes políticos que puede enunciarse de la siguiente manera: *a los gobiernos se les debe juzgar por sus resultados en el campo de la educación, la salud y los deportes. Eso es lo que importa. Todo lo demás es secundario.*

Bien: de acuerdo con esa regla los intelectuales castristas deberían comenzar una campaña de santificación en favor de Pinochet y una peregrinación anual al Santuario de Taiwan, porque el salto cualitativo dado en Chile y en la antigua Formosa, precisamente en los campos de la salud y de la educación, son notablemente más importantes que los ocurridos en Cuba, entre otras cosas, porque el punto de partida era más bajo. Al mismo tiempo, deberían plantear una campaña de emulación del gobierno kenyata o etíope, dado que los mejores corredores de fondo del mundo parece que es en África oriental donde consiguen desarrollar sus habilidades con más destreza. Y, ya instalados en ese continente, y guiados por los mismos mecanismos lógicos, los intelectuales castristas muy bien podrían componer odas de salutación al gobierno sudafricano, porque, al fin y al cabo, la esperanza de vida de los niños negros nacidos en Sudáfrica, como consecuencia de la dominación centenaria de los blancos, es dos veces más alta que la de sus vecinos de Angola y Mozambique.

Probablemente el señor Benedetti, el señor Miná, el señor Dorffman o el señor Galeano no lo hayan advertido, pero cuando reivindican ciertos *logros* de la revolución para justificar *toda* la revolución, lo que están haciendo es reiterar un viejo discurso totalitario al que han recurrido todas las dictaduras de este siglo. Franco y Salazar también exigían el respeto universal a cuenta de escuelas, hospitales y represas inaugurados. Mussolini encontraba en la puntualidad de los trenes y en el fin de las huelgas la perfecta coartada del fascismo italiano. Hitler pudo exhibir, como prueba de las bondades del nazismo, una impecable red de carreteras, el fin de la inflación y una drástica disminución del desempleo. Lo que equivale a decir que juzgar un modo de gobierno por aspectos selectivamente aislados es un acto de negligencia intelectual o de debilidad moral en el que no debe incurrir ninguna persona que pretenda vivir bajo la autoridad de la verdad.

Pero si absurdo es el primer axioma de los intelectuales castristas, el segundo es todavía más vergonzoso. ¿Por qué las atrocidades cometidas en Rio de Janeiro o en Sao Paulo contra los niños sirven para justificar el

modelo político de Cuba? ¿Es que el estalinismo es la única manera de evitar que unos policías asesinos cometan crímenes absurdos? Ni en Montevideo, ni en Buenos Aires, ni en Santiago de Chile, ni en Quito, ni en otras cincuenta capitales es necesario instaurar una tiranía ineficaz y espantosamente represiva para evitar que unos sujetos envilecidos maten niños en las calles. Ese razonamiento es tan absurdo que serviría para pedir la conversión de la Alemania actual al modelo que tenía la desaparecida República Democrática Alemana, con el objeto de impedir que varios miles de *skin heads*, estúpidos y agresivos, continúen atentando contra inocentes inmigrantes de origen turco.

¿Por qué estos intelectuales al servicio de Castro empobrecen el debate hasta el extremo de plantear que la única opción frente a la miseria y la brutalidad de ciertas sociedades es la otra miseria y la otra brutalidad que ofrece el socialismo? ¿Es tan difícil mirar, por ejemplo, el caso costarricense, y descubrir una sociedad democrática regulada por leyes, sin paredones ni exiliados, con índices de sanidad y de escolaridad semejantes a los de Cuba, y en la que no hay 'escuadrones de la muerte', ni miseria extrema? ¿No se dan cuenta estos nostálgicos del comunismo, aferrados a Cuba como náufragos de un cataclismo ideológico que los barrió de nuestra época, no se dan cuenta —repito— que los treinta países más prósperos, más desarrollados, más educados, son precisamente, treinta democracias de corte liberal? ¿No han descubierto estos intelectuales, después de tantos años de lecturas y observación de la realidad, que la libertad es el componente básico para la creación de riqueza y para el perfeccionamiento de la sociedad en que vivimos y no un obstáculo para alcanzar estos objetivos?

Buscar la justificación de Castro en el porcentaje de desempleados en Bolivia o de asesinatos entre los indígenas de Guatemala es una falsificación de la verdad que debiera escandalizar a toda persona inteligente. En Cuba era perfectamente posible haber logrado avances envidiables en todos los terrenos sin necesidad de recurrir a un régimen de terror y sin enfrentarse en una batalla absurda a los Estados Unidos y al resto de las democracias latinoamericanas.

La Cuba prerrevolucionaria

Al fin y al cabo, ni siquiera resultaba difícil haber mejorado la salud, la educación y los deportes en la Isla, dado que el punto de partida era altísimo para la época en que Castro tomó el poder. Y no es ocioso aportar ciertos detalles, porque otro de los argumentos recurrentes para apoyar al

castrismo consiste en remitirse a la Cuba prerrevolucionaria y mostrarla como una abyecta combinación entre la pobreza de Haití, la barbarie gangsteril del Chicago de los años treinta y la corrupción prostibularia de Shangai. Y eso, sencillamente, no es cierto, y basta remitirse a las publicaciones de la época para probarlo.

Según el profesor H. T. Oshima de la Universidad de Standford, en un estudio de 1953, "el ingreso per cápita del pueblo cubano era del mismo orden de magnitud de los ingresos per cápita señalados para Italia y la Unión Soviética por Gilbert y Koravis en su *Comparación internacional de productos nacionales y capacidad de compra de las monedas*, y por Bornstein en *Comparación de las economías de los Estados Unidos y la Unión Soviética*. En la década de los cincuenta, mientras Cuba tenía 520 dólares per cápita, Yugoslavia y Bulgaria no alcanzaban los 300, mientras China apenas excedía de los 50".

En ese período, Cuba tenía un automóvil por cada 40 personas, y en América Latina sólo la aventajaban ligeramente Venezuela y Puerto Rico. Contaba con un teléfono por cada 38, mientras en México el porcentaje era de uno por 72 y en Brasil uno por 68. En ese entonces ningún país latinoamericano alcanzaba —como Cuba— la cifra de un televisor por cada 25 personas, y ninguno —con la excepción de Cuba— contaba con emisiones en colores.

En 1959, cuando Castro toma el poder, el 24% de la fuerza laboral se dedicaba a la industria, mientras que el promedio latinoamericano apenas llegaba al 17. En esa década, en la Isla había una extraordinaria densidad comercial de un establecimiento por cada mil personas, lo que tal vez explica que Cuba fuera entonces el primer consumidor de energía eléctrica per cápita en América Latina y el número 24 en todo el mundo.

¿Cómo estaba distribuida esa riqueza? Según el economista (marxista) mexicano Noyola: "los contrastes entre miseria y riqueza son mucho menos marcados aquí. De hecho, yo diría que Cuba es uno de los países, con excepción tal vez de Costa Rica y Uruguay, donde menos mal está distribuido el ingreso en América Latina".

Era cierto. El ecuatoriano A. Díaz, en un estudio publicado en *Política* (Caracas, 1961), calculaba la clase media cubana en un 33 por ciento de la población, mientras Goldemberg, citando a los profesores Mac Gaffey y Barnett (1962), afirma que "es indudablemente cierto que ese grupo de ingresos en Cuba era el mayor de Latinoamérica. Esto podía confirmarlo cualquiera que caminase con los ojos abiertos a través de las mejores secciones y viese los nuevos suburbios de la clase media, que estaban brotando como hongos".

En materia educativa y de sanidad, la República precastrista podía exhibir *logros* tan impresionantes como los que luego reivindicara la revolución. De acuerdo con el Atlas de Ginsburg, publicado en aquellos tiempos, el nivel de alfabetización de la Isla era del 80%, semejante al de Chile y Costa Rica, y superior al de España. Para una población total de 6.000.000 de personas, en el sector público había 30.000 aulas primarias y 34.000 maestros titulados que les daban clases a 1.300.000 niños, mientras más de 1.000 escuelas privadas educaban otros 200.000 estudiantes. Y según el *Anuario Estadístico de las Naciones Unidas* (1959), Cuba, Argentina, Uruguay y México ocupaban los primeros lugares en toda Latinoamérica en materia de educación universitaria.

De acuerdo con el citado Ginsburg, entre 122 países analizados —prácticamente todo el 'mundo' en aquel entonces— Cuba ocupaba el rango 22 en materia sanitaria, con 128,6 médicos y dentistas por 100.000 habitantes, *por delante* de países como Holanda, Francia, Reino Unido y Finlandia. Y acaso por esto la tasa de mortalidad de Cuba era de las más reducidas del mundo (5,8 anuales por 1.000 habitantes; Estados Unidos 9,5), dato que se compadecía con uno de los más bajos índices de enfermedades venéreas, lo que objetivamente desmiente que la Isla fuera un 'prostíbulo de los americanos' o de nadie.

La prueba de las migraciones

La verdad es otra. En los años cincuenta Cuba era una nación de desarrollo económico medio, desdichadamente sometida a una condenable dictadura militar latinoamericana clásica, con una pujante clase empresarial, situada en el pelotón de avanzada en América Latina, junto a Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela. No era Haití ni Bangladesh. Y la más elocuente demostración de este aserto era la situación migratoria del país. En la década de los cincuenta, Cuba recibía miles de inmigrantes procedentes de países del occidente de Europa, mientras muy pocos nacionales abandonaban la Isla por razones económicas. Al extremo de que Fernando Bernal, diplomático de la revolución, cuenta que en 1959, cuando se hizo cargo de las oficinas consulares en Roma, le esperaban 12.000 solicitudes de italianos que querían emigrar a Cuba en busca de un mejor destino. Ese mismo panorama se podía observar en Galicia y Asturias, regiones de España que a lo largo del siglo XX remitieran a la Isla *centenares de miles* de emigrantes que marchaban en procura de una situación mejor que la que dejaban a sus espaldas.

Este dato —la dirección del movimiento migratorio—, casi nunca tenido en cuenta por los científicos sociales para juzgar la calidad de una sociedad, suele ser totalmente revelador, porque refleja las complejas decisiones, racionales y voluntarias, de muchísimas personas que tienen que evaluar concienzudamente lo que abandonan y lo que desean hasta arribar a la conclusión de que deben cambiar el sitio en el que viven por otro mejor.

Obviamente, no se conocen movimientos migratorios voluntarios en los que la población se desplaza hacia sitios más pobres y menos prometedores. Si a principios de siglo los italianos navegaban hacia Argentina, era porque la nación austral resultaba mucho más próspera, hospitalaria y auspiciosa que la vieja patria europea. Pero si a fines de siglo los argentinos vuelan a Italia, es porque Italia tiene hoy un nivel de desarrollo y unas condiciones de vida mucho mejores que los que ofrece Argentina. Cuba, por supuesto, no escapa a esta secreta prueba migratoria. Desde el inicio de la República en 1902, y hasta la llegada al poder de Castro, Cuba fue una tierra receptora de trabajadores del mundo entero —especialmente de España—, pero a partir de la mítica revolución el fenómeno se ha invertido: más de un millón de cubanos ha escapado de ese país por cualquier medio disponible, mientras prácticamente nadie —ni siquiera los más fervientes nostálgicos del comunismo avecindados en Europa Oriental y Rusia— se animan a instalarse en la Isla. ¿No es ese detalle un valiosísimo elemento para juzgar a la Cuba que ha creado Castro? ¿No es un hecho evidente para cualquiera que quiera evaluar la naturaleza del castrismo y decidir si se trata o no de un ‘experimento’ valioso?

¿Hay realmente un bloqueo americano?

Pero, al margen de esa valiosa *prueba de la emigración*, una de las consecuencias más notorias del éxodo masivo de los cubanos hacia Estados Unidos, ha sido la creación en ese país de una poderosa minoría que alcanza los dos millones de personas de este origen —un millón que se duplicó a lo largo del exilio—, y que hoy cuenta con una pujante fuerza dentro de la estructura de poder americana. Es importante acercarse a este fenómeno para luego poder entender qué es el embargo americano —caballo de batalla de los defensores del castrismo— y por qué se mantiene pese a las incesantes presiones internacionales encaminadas a que sea levantado.

En efecto, esos emigrantes, que llegaron, como casi todos, pobres y desamparados, en el curso de una generación han alcanzado los niveles de desarrollo económico de la clase media americana, y constituyen el grupo

étnico hispano más poderoso del país, aunque su número sea inferior al de los mexicoamericanos o al de los americanos de origen puertorriqueño.

Los *cubanamericans* tienen tres representantes en el Congreso americano, y una considerable fuerza en la política del estado de Florida, especialmente en el condado de Dade, megalópolis que incluye a la ciudad de Miami. Tener en cuenta estos datos es vital para comprender la siguiente afirmación: no existe un bloqueo americano contra Cuba. Lo que existe es un embargo contra el gobierno de Castro, que tuvo su inicio en los años sesenta, cuando la revolución nacionalizó sin compensaciones las propiedades norteamericanas, pero ese embargo hoy sólo se sostiene por la presión que ejerce la población cubana radicada en los Estados Unidos sobre el gobierno de Washington.

Me explico: el mal llamado *bloqueo americano,* esgrimido con ira por los intelectuales castristas en su afán de justificar los fracasos de la dictadura —ignorando que todo el bloque comunista era un total desastre aun cuando esos países no sufrieran embargo alguno—, consiste, en esencia, en una prohibición de comerciar con Cuba que afecta a las empresas americanas. No hay barcos 'bloqueando' nada, y cualquier país o empresa que desee comprarle o venderle a Cuba, darle crédito o realizar inversiones en la Isla, puede hacerlo sin otra limitación que la que dicte su instinto comercial o su sentido común. Eso explica que Cuba deba a Occidente más de once mil millones de dólares, y a lo que fue el bloque del Este más de veinticinco mil, cifra que convierte a la Isla en el país más *endeudado* per cápita de América Latina. ¿Cómo pueden los Fray Betto de este mundo decir que el 'bloqueo americano' le cierra a Cuba el camino del progreso o del financiamiento internacional? ¿No será que nadie le presta a Cuba porque desde 1986 —tres años antes de la caída del Muro de Berlín y cinco antes de que terminara el subsidio soviético— Castro había ordenado que no se pagara la deuda externa?

Al mismo tiempo, un recorrido por los hoteles de Cuba, por las tiendas para diplomáticos y por los hogares de los miembros de la *nomenklatura*, muestra que no hay producto americano inaccesible al gobierno de La Habana cuando decide adquirirlo a través de Canadá, Panamá, Venezuela, República Dominicana o Colombia, 'shopping-centers' favoritos de los agentes de Castro en el exterior. Desde coca-colas hasta IBM se logran ver con facilidad en cualquier zona de 'área dólar' reservada para turistas extranjeros o cubanos privilegiados. ¿Se puede, en serio, hablar de un 'bloqueo americano'? Por otra parte, ¿hay algún producto que Cuba necesite que no pueda encontrar en Japón, Europa o América Latina? ¿No insistió Castro, durante años, que los males de la sociedad cubana eran la

consecuencia de los desiguales términos de intercambio con los Estados Unidos? Antes los problemas se producían porque los yanquis explotaban a Cuba. Ahora porque se niegan a explotarla.

No obstante, conviene aclarar que, de la misma manera que es impropio hablar de 'bloqueo', también debe desecharse la creencia de que se trata de un castigo *americano* contra Castro por las confiscaciones ilegales de los años sesenta. Eso pudo ser cierto hasta la década de los setenta, porque hasta entonces la minoría cubana no había cobrado peso dentro de la maquinaria política de Estados Unidos, pero a partir de entonces los cubanos exiliados fueron adquiriendo relevancia y se les fue tomando en cuenta, lo que en Estados Unidos quiere decir que fueron asumiendo una cuota de poder y hoy si hay un *castigo*, no es de los americanos. Es de los propios cubanos avecindados en Estados Unidos.

¿Cómo han ganado los republicanos tres de las cuatro últimas elecciones presidenciales en Florida? Elemental: volcando el 80% del voto cubano en su favor. ¿Cómo consiguió elevar ligeramente el apoyo cubano el presidente Clinton en los últimos comicios? Mostrándose enérgico contra Castro y apoyando la 'Ley Torricelli', una legislación que *endurece* el embargo. ¿Qué hicieron ambos partidos en las elecciones de 1996? También sencillo: mantuvieron una política *dura* contra Castro que satisfizo los intereses de los votantes cubanos no sólo en Florida, sino también en New Jersey y en California. Exactamente lo mismo que comienzan a hacer Bush y Al Gore a las puertas de las elecciones del año 2000.

Es obvio: quienes hoy mantienen el embargo contra el gobierno de Castro son los cubanos. La clase política norteamericana, pragmática y sabedora de que esas medidas, en la práctica, dada la ruina total del gobierno de Castro, no consiguen gran cosa, salvo servirle a Castro de coartada, seguramente lo hubiera levantado, pero no lo va a hacer porque —como ocurre con el caso de Israel— las *razones* electorales prevalecen.

Por otra parte, es totalmente comprensible que la mayoría de los exiliados cubanos defiendan la línea dura contra su archienemigo. En el exilio, literalmente, hay decenas de miles de personas que han padecido la cárcel, o que han tenido que huir en balsas. Muchas de ellas perdieron sus propiedades y todas tuvieron que marchar al destierro sin un centavo en los bolsillos. Abundan las familias en las que hay fusilados, desaparecidos en alta mar o muertos en las absurdas guerras africanas: ¿cómo extrañarse de que esas personas pidan medidas hostiles contra quien les ha hecho tanto daño? ¿No es eso mismo —un embargo comercial— lo que Mandela solicitaba contra el gobierno opresor de Sudáfrica? ¿No era eso lo que demandaba su partido de manera casi unánime, contra el criterio de quienes

decían que el embargo perjudicaba al pueblo sudafricano? Hay que entender la lógica de las víctimas para poder entender la posición de los cubanos exiliados con relación al embargo. Es probable que el levantamiento del embargo hubiera debilitado la posición política de Castro al privarlo de su excusa favorita, mas para la conciencia de una persona brutalmente herida por los atropellos de una dictadura, esa sutileza suele tener un peso más bien escaso.

Lo que queda de Cuba

No habrá, pues, probablemente levantamiento del embargo americano hasta que en Cuba se establezca un régimen democrático, situación que provoca la más curiosa de las paradojas: el único hombre que puede levantar el embargo es Fidel Castro. Clinton no puede, porque lo derrotarían en el Congreso, y no quiere, porque carece de sentido político malquitarse con el electorado cubanoamericano por un problema —a estas alturas— escasamente importante de la política exterior americana. Para Washington, Cuba es ya —y lo será por varias décadas— un asunto doméstico americano y no una cuestión de relaciones con el extranjero.

Pero, ¿qué puede ocurrir si en la Isla, tan cerca y tan lejos de Estados Unidos, no se inicia cuanto antes el tránsito hacia la democracia y hacia otro tipo de organización del Estado? Va a ocurrir lo peor: el país se irá empobreciendo cada día más. La cuenta es muy simple: al desaparecer el subsidio soviético, el cacareado 'modelo cubano' se ha hecho totalmente inviable. Los supuestos *logros* eran una ilusión. Formaban parte de un espejismo creado por las cuantiosas donaciones soviéticas y no por la escasa producción de los cubanos. El régimen castrista, minuciosamente ineficiente, sólo podía subsistir gracias a los generosos sobreprecios pagados por el azúcar, el níquel y los cítricos que los soviéticos le asignaban, mientras le vendían el petróleo a costos preferenciales, y le regalaban hasta más de tres millones de toneladas al año. Ese increíble subsidio —al que Castro se empeña, tozudamente, en llamar "precios justos de intercambio"– alcanzaba la cifra de cinco mil millones de dólares todos los años, y la suma acumulada excede los cien mil millones de dólares. Es decir, una cantidad varias veces superior al monto del legendario Plan Marshall con que Europa despegó tras la Segunda Guerra Mundial.

Para sobrevivir con el sistema ineficiente que Castro se niega a cambiar, Cuba necesita aumentar sus exportaciones del actual nivel de 1.700 millones anuales —incluidos los ingresos por turismo— a los 8.200

que tenía en 1991. Pero como ese brusco descenso en sus disponibilidades de divisas le impide importar materias primas y petróleo en cantidades suficientes para seguir funcionando, el país cada vez produce menos, reduce día a día su capacidad exportadora, y limita progresivamente sus posibilidades de comprar en el exterior los 700 productos básicos que necesita, y —entre ellos— más del 50% de los alimentos que debe consumir y que no genera localmente por la torpeza casi asombrosa del sistema.

Las consecuencias de esta catástrofe económica se han hecho patente a lo largo de la década que ahora termina. En 1990 la desnutrición de los cubanos provocó una deficiencia de vitamina A y una epidemia de enfermedades oftalmológicas. En 1992 y 1993, cuando se redujo el suministro de huevos, y el agua de azúcar se convirtió en la fuente principal de energía, le tocó el turno a la carencia de vitamina B y a la aparición del beriberi, con sus secuelas de neuritis ópticas y periférica que ya ha afectado a más de 60.000 cubanos, dejando a muchos de ellos parcialmente ciegos o inválidos, mientras Castro continúa en la Plaza de la Revolución repitiendo su cruel consigna de *socialismo o muerte*. A fines de 1999 aumenta el ritmo de la salida ilegal de balseros desesperados por llegar a sitios en los que ganarse la vida decentemente no sea considerado un delito.

Y tienen razón: se multiplicarán las penas de miles de cubanos si Castro no abandona el socialismo, se muere de una vez o si la sociedad no consigue sacudirse a este empecinado dictador. Cuba hoy es un infierno de incomodidades, hambre, insalubridad, tensiones sociales y desesperación. El sueño de todos los jóvenes es escapar a bordo de cualquier cosa que flote o vuele. El de los viejos es morirse de una vez para no sufrir más, o para no tener que ver el final probablemente sangriento de esta absurda tragedia. “Qué terrible dolor —le confesó uno de los jerarcas comunistas a su hija exiliada— haber luchado toda mi vida por una Cuba mejor, por un paraíso socialista, y comprobar, al cabo de la vejez, que he contribuido a crear el peor de los infiernos”. Eso es Cuba. Eso es lo que queda de Cuba. Eso es lo que insensiblemente defienden los últimos alabarderos del castrismo. □

CRÓNICA DE LA INDEFENSIÓN

Rafael Berástegui

Un reciente documento de trabajo de presbíteros de las provincias orientales de Cuba, destinado a analizar la situación casi dos años después de la visita del Papa, advierte la existencia de un "síndrome de indefensión" inducida por la propaganda del gobierno, que hace que las personas asuman que el cambio es imposible o que desembocaría en caos. Según el documento, el síndrome se extiende a la jerarquía católica cubana y para revertirlo se debe "despertar la creatividad y alentar la participación de la población".

Rafael Berástegui comparte el diagnóstico. Sin embargo, recalca que, en las condiciones específicas de Cuba, aplicar el remedio resulta más difícil de lo que parece. Al respecto, narra experiencias poco conocidas de los años 1987-1989, cuando, al calor de las reformas de Mijail Gorbachov en la ex Unión Soviética, creatividad y participación flamearon por un corto período en la isla. La relativa facilidad con que las autoridades sofocaron entonces el movimiento ilustra algunas características de la indefensión cubana y de los recursos de contención de que dispone el gobierno. Se plantea que, pese a estar disminuidos por las nuevas condiciones internas y externas, esos recursos siguen siendo poderosos.

RAFAEL BERÁSTEGUI. Periodista y analista político cubano. Ex editor internacional de Radio Rebelde. Salió de Cuba en 1990 y reside en Chile desde entonces. Profesor de la Universidad Arcis.

Estudios Públicos, 76 (primavera 1999).

Las dificultades de la lenta recomposición del tejido social en Cuba pueden hacer pensar que allí la tortuga nunca conseguirá alcanzar la liebre. Funcionan variadas agrupaciones cívicas independientes. Pero son minúsculas, fraccionadas e inexpertas: se requiere mucho más para conquistar espacios significativos. En especial, si del otro lado hace resistencia un orden político muy singular, fundido con lo nacional y con un líder carismático de las dimensiones del Presidente Fidel Castro. Según el discurso gubernamental, cualquier cambio de fondo en el modelo pondría en riesgo las conquistas sociales y la nación cubana. Un reciente documento de presbíteros de las provincias orientales[1], que analiza la situación en Cuba después del Papa, denuncia un "síndrome de indefensión o desesperanza" inducido y generalizado, el cual estaría afectando también a la Iglesia católica. El polémico texto explica así la instrumentación de la visita del Sumo Pontífice (enero 21-25, 1998) por el gobierno fidelista para sus fines de propaganda exterior y reafirmación del inmovilismo.

Tiempos de *perestroika*

Si, como indican los presbíteros, el estado de indefensión se configura a partir de que las personas asumen que es imposible el cambio, o que el cambio acabará en caos, era muy diferente el período l987-1988 que viví en Cuba. La *perestroika* provocaba taquicardias políticas cuando concluí mis tres años como corresponsal en Centroamérica de la emisora cubana Radio Rebelde (RR) y me reincorporé, en 1987, al cargo de editor internacional y comentarista. En Managua, las cartas de familiares y amigos me habían mantenido al tanto del entusiasmo que despertaba Gorbachov en la población. Los cubanos creían que el cambio estaba al doblar de la esquina. A través de los funcionarios de la misión diplomática de mi país en la capital nicaragüense, también conocí el creciente malestar del Partido Comunista de Cuba (PCC) con el recorte paulatino de la ayuda soviética a los movimientos de liberación de América Latina y el descompromiso con Centroamérica, en particular con la Nicaragua sandinista. De vuelta en La Habana supe que eran muchas más las razones del malestar del PCC y que caldeaban sus pasiones. El tema fijo de las reuniones periódicas de editores de medios con encargados de la línea ideológica del partido era el chequeo de las medidas para contrarrestar la influencia en Cuba de la *perestroika*,

[1] "Cuba después del Papa", publicado por el *Miami Herald*, 29 de septiembre de 1999, p. 29A. Véase texto en anexo al final del artículo.

cuya nocividad se equiparaba en esos encuentros con las emisiones desde Miami de Radio Martí. A la salida de las reuniones en el Palacio de la Revolución, sede del Comité Central del PCC, los editores nos guardábamos turnos en la fila para comprar el semanario *Novedades de Moscú* o las revistas *Sputnik* y *Tiempos Nuevos* antes de que se agotaran en los quioscos.

Los cables de la agencia oficiosa cubana Prensa Latina, de los cuales se nutrían los periódicos y noticieros de TV habaneros, privilegiaban las declaraciones y actividades de Egor Ligachev, por entonces el principal oponente de Gorbachov. El Departamento de Orientación Revolucionaria del partido, que fijaba y controlaba la línea editorial del conjunto de los medios, concedía alguna autonomía a RR, vocera revolucionaria fundada por Che Guevara en 1958 en la Sierra Maestra. Tal autonomía complementaba una programación basada en revistas y noticieros atractivos, con vasta cobertura periodística nacional e internacional y gran potencial difusor, que la mantenían entre las preferidas del público.

El corresponsal de RR en Moscú era el periodista Víktor Ampílov, líder hoy de los comunistas rusos más ortodoxos, cuyos despachos eran tendenciosamente antirreformistas. Como en el resto de los medios cubanos, los acontecimientos en la Unión Soviética acaparaban buena parte del tiempo dedicado a los asuntos del mundo. La emisora balanceaba la óptica de Ampílov con la divulgación de noticias moscovitas procedentes de fuentes diversas y comentarios elaborados en nuestra redacción. Estos comentarios evitaban resaltar demasiado a Gorbachov y sus llamados a la *glasnost* y la *perestroika*, a la vez que buscaban ampliar la cultura política del radioescucha. El análisis de la coyuntura soviética solía dar pie a que se expusieran en la radio —por primera vez en Cuba socialista— las ideas de pensadores como el teórico comunista italiano Antonio Gramsci (1891-1937) y de Nikolai Bujarin (1888-1938), intelectual bolchevique ejecutado durante las purgas estalinistas. Los comentarios de RR abordaban temas que no eran ya tan relevantes en el contexto de la discusión en la URSS gorbachiana, pero que posibilitaban un pronunciamiento parabólico sobre aspectos tabú de la realidad cubana (culto a la personalidad, hipercentralización del poder, etc.).

Fidel, que sentía su protagonismo constreñido y una desviación capitalista en ciernes, había comenzado poco antes a multiplicar las comparecencias televisadas en actos de masas. Convocó al Proceso de Rectificación de Errores que liquidó el ensayo de reforma económica contemplado en el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía Nacional (SDPEN, 1976-1985). La reforma, que disminuyó un poco la centralización económica, autorizó algunos mecanismos de mercado, autofinancia-

miento de las empresas basado en créditos bancarios y expansión de los incentivos económicos. A pesar de que el SDPEN tuvo defectos de implementación y expandió el déficit en la balanza comercial, mejoró la alimentación y el consumo.

El pago de horas extras servía a las empresas para paliar el incumplimiento de las metas de producción o servicios. Sin embargo, antes y después del SDPEN los administradores disponían de colecciones de instrumentos para ocultar la gestión deficiente. Por lo demás, las horas extras remuneradas aportaban racionalidad al ámbito laboral. Porque los capaces y eficientes ganaban más y recibían prestigio social, en detrimento de quienes disimulaban insuficiencias o flojeras tras el activismo político. Estos últimos saludaron la tabla de salvación que significó el ataque de Fidel a las 'prácticas capitalistas' en las empresas. Se anunció el reemplazo del SDPEN por un modelo recentralizador que, aunque nunca llegó a ponerse en práctica, se asoció con la disminución del crecimiento económico, con otro giro hacia los apelativos ideológicos como motor de la economía y la vuelta al desabastecimiento. Los descontentos rebautizaron el Proceso de Rectificación como 'Proceso de Ratificación de Errores'.

Menos problemas se tuvieron con la Iglesia católica, considerada por el gobierno la principal fuente potencial de oposición. Probablemente se contaba con que el clima nacional de improvisación y provisionalidad afectaría por igual a la jerarquía eclesiástica, donde recién se instalaban obispos dialoguistas poco avezados en las relaciones con el Estado. Este último, mientras tanto, asimilaba las experiencias positivas y negativas de los nicaragüenses con sus obispos, las congregaciones y la Teología de la Liberación. A semejanza de su homóloga en el Frente Sandinista, una Oficina de Asuntos Religiosos del PCC hacía el seguimiento nacional de Iglesias y cultos. Otras dependencias del partido se encargaban de los religiosos del resto de América Latina. Hacia 1988 la atención del equipo político cubano se volcó por completo hacia las consecuencias previsibles de la visita de Juan Pablo II para hacer las recomendaciones pertinentes. El libro *Fidel y la religión* del religioso izquierdista brasileño Fray Betto, que vendió 600.000 ejemplares en cinco meses, había dado la señal de partida para la apertura religiosa previa al recibimiento del Papa. Cuando el hecho ocurrió, el PCC tenía la certeza de sacar provecho. El documento de referencia de los presbíteros orientales confiesa que, a continuación de la visita papal, la Iglesia no supo qué más hacer y formula una velada crítica al miedo de la jerarquía a llegar demasiado lejos, "que nos lleva a sobreproteger a nuestra gente y a frenar su compromiso profético"[2]. El planteamiento

[2] Véase nota 1.

suscribe la línea de firmeza y autonomía del arzobispo de Santiago de Cuba, Pedro Meurice, que los observadores contraponen a la del Arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega.

Hijos de Guillermo Tell

La discusión sobre la *perestroika* prohijó en Cuba la emergencia de una conciencia generacional difusa. La organización creada por Fidel para asaltar el cuartel Moncada fue denominada 'Generación del Centenario' (por el centenario del natalicio de José Martí, 1853-1953), para rescatar una modalidad de identificación muy importante en nuestra historia política republicana. Sin embargo, esta modalidad se desactivó luego. El proyecto de democracia sustantiva de modelos como el fidelista, alternativos a la democracia representativa, supone liquidar mediaciones entre los gobernados y el Estado paternalista y benefactor. El Estado, a su vez, se confunde con el partido único y las organizaciones de masas bajo su control, quienes funcionan como intermediarios exclusivos. Los partidos, Iglesias, asociaciones y perspectivas que fraccionan la masa de los gobernados son disueltos, o limitados y severamente controlados. El esquema, analizado en detalle por los sociólogos, puede acelerar la modernización en una primera fase antes de descomponerse, evolucionar o transformarse de manera más o menos prolongada.

Los que éramos adolescentes al ocurrir en 1959 el triunfo revolucionario, nos hicimos adultos juntos, en las trincheras, a la espera de la invasión norteamericana y sin tener pelo largo, jeans, Bob Dylan ni Beatles. A continuación, en los sesenta y los setenta, juntos tarareamos a Silvio, nos volvimos responsables, reflexivos y leímos *Pensamiento Crítico*, Marx, Weber, Mariátegui, Gramsci y Marcuse en buenas y baratas ediciones cubanas (algunas de acceso restringido y recogidas después, es cierto). Fue una lástima que en los ochenta, apenas nos acercábamos a identificar los lazos comunes y comenzábamos a acceder a cargos importantes, no tuvimos la astucia para aprovechar que uno de nosotros se convertía en el sucesor natural de Fidel. Se especula que las ambiciones prematuras de Carlos Aldana en la Secretaría del Comité Central del PCC, donde acumuló Relaciones Internacionales, Prensa, Ciencia, Cultura e Ideología (1986-1992), motivaron su jubilación anticipada. Supongo que el único cuarentón, aislado en la dirección superior del PCC perdió el equilibrio en alguno de los constantes malabarismos políticos, obligatorios para evadir zancadillas de los viejos 'históricos'. Aldana era inteligente, analítico, capaz y contra-

dictorio. Emitía en privado directrices casi pluralistas en sus áreas de competencia, mientras sostenía en público el discurso de intransigencia dura que erosionó su credibilidad. Los nacidos después de la revolución, que representan el 55% del total de la población, desconfiaban de Aldana y los suyos. Preferían entenderse con el Secretario General de la Unión de Jóvenes Comunistas, Roberto Robaina, que estaba a mitad de camino en edad. Los muchachos de los 80, que en la actualidad conforman el principal grupo de emigrantes de la isla, leían más literatura que ciencias sociales, ofrendaban el corazón a Gorbachov y se perfilaron mejor como generación. Si no consiguieron modificar las reglas, estremecieron el juego en Cuba con la demanda un tanto desmesurada que sintetizaba la canción-símbolo de uno de ellos: "Guillermo Tell no comprendió a su hijo/que un día se aburrió de la manzana en la cabeza/Echó a correr y el padre lo maldijo,/ ¿pues cómo entonces iba a probar su destreza?/Guillermo Tell: tu hijo creció, quiere tirar la flecha./Le toca a él probar su valor usando tu ballesta/ A Guillermo Tell no le gustó la idea/ y se negó a poner la manzana en la cabeza,/diciendo que 'no era que no creyera,/ ¿pero qué iba a pasar si sale mal la flecha?...' ".

La ejecución del general Arnaldo Ochoa y otros tres inculpados en un controvertido proceso (julio, 1989) es el acontecimiento terrible y emblemático que clausura una etapa. Se ha dicho que, con ello, la revolución cubana perdió su inocencia. En verdad, la inocencia empezó a perderse en la década anterior en Angola. A diferencia de Granada y Nicaragua, donde predominaron misiones civiles, o de Etiopía, donde se libraron batallas tradicionales de blindados, una porción significativa de los 300.000 cubanos que pasaron por Angola (1975-1988) se involucró a fondo en la guerra civil. En los ratos libres de un curso intensivo en Cuba para jefes de unidades pequeñas de infantería, mis compañeros veteranos de Angola evocaban a menudo episodios del aplastamiento de la rebelión del comisario político superior de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola (FAPLA), Nito Alves. En 1977, Alves, un comandante negro con hazañas legendarias en la lucha contra los portugueses y muy popular en la tropa, protestó sin resultados por la excesiva presencia de Cuba y la discriminación que ejercía la minoritaria elite mulata angolana. Encabezó en Luanda, la capital, un alzamiento que hubiera triunfado si no fuera por la intervención de los cubanos. Algunos de mis compañeros, que estuvieron entre quienes capturaron y ejecutaron a Alves y a sus principales colaboradores, contaban que en las FAPLA la simpatía por Cuba nunca volvió a ser igual. Sin embargo, sus peores recuerdos se referían al comportamiento con los civiles de las aldeas durante las operaciones contrainsurgentes del ejér-

cito cubano en el sur de Angola. Por orden del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Raúl Castro, los jóvenes cubanos con estudios secundarios que cumplían el servicio militar obligatorio en operaciones contrainsurgentes en Angola ingresaban sin más trámites a la Universidad. Fueron a la Universidad e hicieron valer el principio no escrito de que el derecho a criticar en Cuba se gana en combate. Lo común era que familiares, administradores o profesores interrumpieran a los jóvenes cuando ellos esbozaban observaciones críticas. Les enrostraban su escasa trayectoria, que contrastaban con las batallas en la Sierra Maestra, o las bombas en las ciudades de sus mayores, en la lucha contra la tiranía de Fulgencio Batista (1952-1958).

Final de partida

El comportamiento parabólico, o sea, la añeja práctica de apuntar para un lado y disparar para otro, alcanza un desarrollo impresionante en mi país. No obstante, en el corto período de definiciones que relato, fue abandonado por los muchachos del 80 que actuaban como si la batalla por la transparencia estuviera ganada. Tomaban poética por política. Primaban en ellos convicciones de que la fórmula de los problemas radicaba en una reunión con Fidel, donde fundamentarían las bases de la *perestroika* en Cuba y si no eran escuchados los soviéticos la impondrían. Los profesionales que coincidíamos con los jóvenes en muchos aspectos, no creíamos en una solución desde afuera. Sospechábamos que Fidel era el principal escollo a vencer. No encontrábamos viable desafiarlo abiertamente: el obstáculo habría que vadearlo mediante una combinación de cautela, paciencia, tiempo, suerte y todos los aliados posibles. Visto en perspectiva, era utópico el objetivo de crear un clima de opinión y una convergencia de fuerzas que doblegara al Presidente cubano. A cada centro de trabajo o estudio conflictivo se había asignado un oficial del Departamento de Seguridad del Estado que coordinaba una red de informantes. No obstante, intentamos algo en pequeña escala. Se sobreentendía que no ayudaban los anticuerpos que la experiencia soviética generaba en sectores que tenían que ser sumados a la causa. Propusimos a un grupo de universitarios agitar con la política de rectificación fidelista y tratar de dotarla de contenido renovador. Moverse dentro de la ortodoxia más estricta tendría la ventaja adicional de facilitar el sondeo de figuras de peso en el gobierno y el PCC. Los estudiantes engancharon y pusimos mano a la obra. Todo se vino abajo cuando los muchachos se consideraron en el deber de protestar ante un alto dirigente por el acentuado culto a la personalidad en Cuba, durante una sospechosa

reunión citada de un día para otro y con carácter obligatorio, en el Palacio de la Revolución. En lo más tenso del debate, apareció de improviso Fidel, quien la emprendió a gritos contra los jóvenes. La anécdota tuvo reediciones sin participación de Fidel, que fueron el preludio de sanciones, expulsiones y restricciones.

El medio millón de habaneros que recibió en abril de 1989 al Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, tenía ya el júbilo apagado, programado y controlado por las autoridades locales. Gorbachov tampoco se salió del libreto y dijo lo que ya se sabía: la Unión Soviética no presionaría por reformas. En Cuba, Fidel tenía siempre la última palabra y el año se había iniciado con el discurso de la frase "Socialismo o Muerte". Por si quedaban dudas de a cuál socialismo se refería, añadió, enfatizando con voz rasgada: "¡Marxismo-Leninismo o Muerte!".

Con mis amigos presentía que Fidel estaba por decir algo semejante, aunque no esperábamos que lo dijera con ese énfasis. Significaba el fin de las expectativas de reformas desde arriba, típicas de los modelos monopartidistas, que era lo realista entonces. Llamados, como el que formulan los presbíteros en las conclusiones del texto aludido, a "despertar la creatividad y alentar la participación", pueden tener validez en condiciones nuevas, aunque las incógnitas acerca del 'cómo' no están despejadas tampoco en el presente. El socialismo caribeño fue más benefactor, igualitario, popular, movilizador y masificador que los implantados en la ex Unión Soviética y el este de Europa. Gracias a ello, dispuso desde los inicios de recursos superiores de coacción, suficientes para neutralizar sin aspavientos las amenazas.

La indefensión nos paralizó en cuanto el gobierno optó por apretar amarras. Se redujo la autonomía para comentarios radiofónicos sugestivos, se suspendió la circulación de publicaciones soviéticas y se llenaron las iglesias para rezar por la venida del Papa. Mientras terminaban de entrenarse las Brigadas de Acción Rápida, que permiten enmascarar la cosa mediante el empleo de contingentes civiles, la policía se encargó en persona de castigar conciertos de rock, tertulias literarias y exposiciones plásticas irreverentes. Creíamos desaparecidas con la dictadura de Batista aquellas golpizas policiales en plena calle. Varias funciones de 'police as usual' ocurrieron a vistas de exiliados sudamericanos, tan sorprendidos como los espectadores cubanos. Cada cual tendió a reaccionar en la ocasión de acuerdo a sus reflejos condicionados: el sudamericano a reclamar al policía y proteger al golpeado, el cubano a desentenderse y apretar el paso. En resumen: Guillermo Tell no se puso la manzana en la cabeza y los cubanos, sin *perestroika*, se lanzaron a la espera estoica.

ANEXO

CUBA DESPUÉS DEL PAPA*

Introducción

En los días previos a la visita del Papa a Cuba todo el mundo esperaba algo. La Iglesia, mayores espacios para realizar su misión; los presos, la libertad; las amas de casa, que se les diera más comida; el pueblo, que se le resolvieran sus problemas. Pero también se sospechaba que las enormes expectativas no serían satisfechas con la visita papal. Ahora bien, año y medio después de esa histórica visita papal a Cuba, sí podemos preguntarnos: ¿dónde estamos y qué conseguimos con la visita del Papa a nuestro país? A eso pretendemos responder con las siguientes reflexiones.

Sugerencias y positivas críticas papales

Todas las expectativas generadas encontraron eco y encarnación en una frase que, para muchos, sintetizó y concretó el mensaje del Pontífice a Cuba y a los cubanos: "Cuba debe abrirse al mundo, el mundo debe abrirse a Cuba". La frase resultaba certera, pues se refería al doble bloqueo que padece la población cubana: el interno, impuesto por el sistema comunista, y el externo, que se sintetiza en el embargo comercial norteamericano a la isla. Para los que sólo afirman la importancia del primero, el problema de Cuba se resuelve a partir del cambio interno, con la evolución, transformación o disolución del actual sistema. Para los que culpan de todo al bloqueo externo, con su levantamiento (decisión que depende de un gobierno foráneo), se alcanzaría la solución del actual y dificilísimo estado de la nación.

Bastaría una mirada desapasionada y objetiva para descubrir que nuestros problemas son de tal calibre, que involucran decisiones internas y externas, personales y colectivas, de dentro y de fuera de Cuba.

Otra 'idea-motor' del Santo Padre fue que los cubanos debíamos ser los protagonistas de nuestra propia historia. Esta exhortación al protagonismo de la gente encierra una doble crítica: por una parte, al paternalismo que nos hace esperar todo 'desde arriba'; por otra, al inmovilismo que nos

* Material de trabajo que sirvió para un encuentro de presbíteros de las diócesis de Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo-Manzanillo y Guantánamo. Publicado en *Miami Herald*, Miami, 26 de septiembre de 1999, p. 29A.

lleva a esperar soluciones 'desde afuera', a cruzarnos de brazos para que sean otros 'los que nos saquen las castañas del fuego'. La solución vendrá desde dentro y desde adentro: de nuestro pueblo y del corazón de nuestra gente, o no será solución. Ahora bien, cabría preguntarnos, ¿qué nos ha impedido, o impide, tomar en nuestras manos las riendas de nuestra vida y nuestra historia? Para responder a esta pregunta debemos analizar, aunque sea brevemente, el fenómeno del totalitarismo en el que hemos estado inmersos, de una u otra forma, en los últimos 40 años.

Los comunistas cubanos no inventaron el sistema totalitario, sencillamente adaptaron su versión marxista-leninista y se 'beneficiaron' de la larga experiencia existente el respecto. Al enfrentarse a EE.UU., la única puerta que quedaba abierta al gobierno cubano era la de una alianza estratégica con el bloque contrario a los americanos: el oriental, liderado por la Unión Soviética.

Si la matriz de la que ha brotado el totalitarismo es la guerra, la violencia, el objetivo que persigue es el de la destrucción y reconstrucción total de una sociedad de masas a partir de postulados ideológicos y mediante mecanismos de organización y control que utilizan los más modernos artificios de la ciencia y de la técnica. Moviliza las fuerzas históricas hacia una meta: el establecimiento de un poder político absoluto, en manos de un partido único, que reina sobre 'un pueblo unido que jamás será vencido'.

Estamos pues ante un control tan absoluto sobre los espíritus y los cuerpos de los hombres que tal vez ningún monarca o gobierno ha tenido la posibilidad de un control así sobre la gente, ni pareja capacidad de planificación y control sobre los individuos y sobre las sociedades. La radio y la televisión permiten además un control indirecto y sofisticado que 'programa' las conciencias desde dentro y sin que apenas lo perciban los mismos individuos programados. Todo esto hace al sistema totalitario de una eficacia diabólica en el dominio de la gente.

El síndrome de indefensión aprendida o 'no se puede hacer nada'

En un segundo momento conviene analizar las consecuencias que provoca en los seres humanos una continua y prolongada exposición a las políticas del sistema totalitario. Lo llamaremos con el nombre de 'síndrome de indefensión aprendida' o de 'desesperanza inducida'. Así, la propaganda generada por el régimen va encaminada a convencernos de que es imposi-

ble el cambio, o de que el cambio acabará en caos; esto es, que no hay salida posible para la actual situación.

Pero estas ideas, actitudes y situaciones que configuran un estado de indefensión, sólo funcionan si son asumidas por aquellos que las padecen. Cuando el síndrome de indefensión aparece en los seres humanos, está sustentado por ideas, actitudes y experiencias repetidas.

La Iglesia ante la encrucijada del presente y del futuro

Hace 40 años, cuando comenzó la experiencia comunista en el país, la Iglesia levantó la voz y se enfrentó a la nueva realidad.

El enfrentamiento de la Iglesia que denuncia la presencia comunista en la revolución y su giro hacia una izquierda radicalizada, tuvo como consecuencia el desmantelamiento de la Iglesia, sus medios de acción y sus instituciones. Quizás hubo error de cálculo acerca de la 'fuerza' de la Iglesia que en los cincuenta primeros años del siglo había podido crecer en número, presencia y prestigio en la vida nacional, como dijo monseñor Pedro Meurice en su discurso de bienvenida al Papa. El corto e intenso período de enfrentamiento fue acompañado de una 'política' de desalojo involuntario y voluntario del país. Se aconsejó a los fieles por algunos pastores que se fueran de Cuba, y los mismos agentes de pastoral alertados por sus superiores, o por decisión propia, comenzaron a abandonar el país. Sin embargo, hay excepciones a nivel de laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes. A los que no se fueron, el gobierno los fue dejando a la Iglesia en estado de sobrevivencia.

Cuando la Iglesia comienza a reconstruir sus fuerzas y reiniciar su trabajo se enfrenta a una realidad que no sólo le es hostil, sino que domina todo el espectro de la vida socioeconómica, cultural y política del país.

Como sabemos, en 1980 la Iglesia inicia un proceso de renovación interna con la Reflexión Eclesial. Este proceso, que culmina con el ENEC (Encuentro Eclesial Nacional Cubano), se caracteriza por la búsqueda de nuestra identidad y vocación histórica y existencial a la luz del Evangelio y al servicio de nuestro pueblo.

Todo el pueblo de Dios, a través del documento final del ENEC y los obispos, como pastores de la Iglesia, en repetidas ocasiones y de modo directo con el gobierno, ante la crisis generada por la caída del marxismo en Europa, y ante la profunda y crítica situación del país, propusieron un 'diálogo nacional', que respetando la diferencia y competencia de las partes, incluidos los cubanos en el exilio, diera paso a soluciones audaces,

amplias y eficaces que movilizaran las fuerzas morales y materiales de la nación. Era darnos un voto de confianza los unos a los otros, y desde ahí 'poner proa al futuro'. Los comunistas cubanos ante la grave alternativa de 'conservar el poder o salvar la patria' han elegido lo primero, reforzando los comportamientos totalitarios de vivir en la mentira y manteniendo los paralizantes esquemas de indefensión que ya analizamos, aun sabiendo que por ese camino no se llegaba a ninguna parte, como lo demostraba la experiencia de sus antiguos socios del bloque comunista. Fue entonces cuando los obispos, después de una espera larga y reflexiva, se decidieron a publicar su carta "El amor todo lo espera". La acogida de esta carta por parte del pueblo cubano marcó un giro en la historia reciente del país. Una parte considerable del pueblo se vio reflejado en las palabras de los obispos, sus esperanzas, sus angustias, sus problemas… Los caminos para una posible solución quedaron recogidos en aquella carta sabia y valiente, que supo conjugar genialmente prudencia y audacia.

El gobierno hizo 'oídos sordos' al clamor del pueblo expresado proféticamente por boca de los obispos. La Iglesia continuó con sus esfuerzos por lograr una salida pacífica y negociada a la situación que no excluyera a nadie. Para muchos, la dificultad más grave de llevar adelante esta propuesta es no sólo la falta de voluntad de diálogo del gobierno y el partido, sino además la inexistencia en el país de una contraparte organizada: sociedad civil, movimientos sociales o grupos políticos que asuman ese papel de contraparte, de interlocutores válidos del Estado, que se mantiene típicamente totalitario (o postotalitario). El discurso oficial mantiene esta tesis, haciendo resaltar la debilidad de la disidencia y el hecho de que está penetrada por los cuerpos de seguridad estatal y que, además, depende de apoyos foráneos para su sobrevivencia.

La disidencia, eminentemente pacífica, no tiene ni reconocimiento ni un apoyo firme por parte de la jerarquía, al menos no lo percibimos así. El máximo esfuerzo por desbloquear la realidad cubana lo hizo la Iglesia con la visita del Papa a Cuba en enero de 1998. La movilización del pueblo, el impacto a nivel de nación, ciudad, barrio, familia y corazón de esos cinco días no han tenido precedente en nuestra historia como Iglesia.

El pueblo apoyó a la Iglesia, escuchó al Pontífice y vibró con el mensaje evangélico que él transmitió a lo largo de esos días. Nadie, ni dentro ni fuera de Cuba, niega el éxito de esa visita papal. La pregunta que nos estamos haciendo desde el inicio de nuestro encuentro, sigue sin embargo en pie: ¿qué ha pasado después?

La improvisación como talante y la actitud paternalista

La improvisación y la provisionalidad se han convertido en parte integrante del 'ser nacional' y han 'infiltrado' a la Iglesia y a nuestra pastoral. Sin darnos cuenta, el desgaste de esta situación nos marca con su sello. Esto es hasta cierto punto inevitable en una situación como la nuestra: vivimos en un país sin futuro donde la cotidianidad —entendida en su forma más rastrera— se vuelve el horizonte. Pero, precisamente por eso, la Iglesia debe insistir, con su gente, en esa necesaria proyección de miras e identificación de objetivos. Hijo de la improvisación, el cansancio puede agotar nuestras fuerzas.

En esta edificación del hombre según el modelo de Jesucristo, tendríamos que plantearnos el grave problema del paternalismo que se manifiesta en las relaciones de nuestros obispos con nosotros y de nosotros con nuestros laicos en no pocas ocasiones. Es ese miedo a que lleguen demasiado lejos, que nos lleva a sobreproteger a nuestra gente y a frenar su compromiso profético. Debemos recordar que por bastante tiempo muchos de nosotros nos hemos sentido 'seminaristas que celebran misa', y que nada colabora más con la maduración y el compromiso de los sacerdotes en un presbiterio, o de los laicos en una comunidad, como el sentirse responsable de las decisiones que se han discutido y tomado en común.

Edificación de la Iglesia y servicio al pueblo

A veces escuchamos voces que dicen: 'No debemos arriesgar todo lo que hasta ahora hemos logrado'. Esta afirmación recuerda aquel relato de Karel Capec en su libro *Apócrifos*. Capec fabula en torno a la sicología de Lázaro, el amigo del Señor, después de salir del sepulcro: la experiencia de la muerte fue tal, que Lázaro le coge miedo a la vida, y lo que ésta comporta de riesgo. Vive una vida de absoluto temor, rehuyendo ese compromiso que siempre supone algo de riesgo. No creemos que nadie medianamente sensato quiera volver al año 61, al tiempo de las confrontaciones. Pero al mismo tiempo, no podemos renunciar al compromiso que nos supone la situación del país: no podemos quedarnos callados ni de brazos cruzados.

Para los que oprimen a los pueblos, sean del color que sean, cualquier acción de la Iglesia en pro del respeto a los derechos humanos, a la justicia y a la libertad, será interpretada como 'meterse en política'.

Monseñor Meurice lo expresó muy claramente en su discurso de recepción del doctorado honoris causa en la Universidad de Georgetown:

> Por otra parte, mientras el pueblo sufra alguna injusticia o limitación, por pequeña que sea, la Iglesia debe hacer de esas necesidades y dolores de su pueblo un punto cardinal del contenido de sus relaciones con el Estado. De lo contrario, la Iglesia sólo reclamaría lo que pudiera ser considerado como sus derechos institucionales o concernientes a su vida interna, pero para los seguidores de Jesucristo estas demandas nunca pueden estar separadas de los derechos de sus gentes.
> Cuando el pueblo sufre no ya 'alguna' sino tanta injusticia o limitación, la responsabilidad de la Iglesia se hace incomparablemente mayor.

La pobreza en la Iglesia y el éxodo de los cristianos

> Un tema que no podemos dejar de tocar es el del éxodo, que una vez más amenaza a nuestra gente. En el éxodo encontramos la respuesta individualista tradicional que los cubanos hemos dado a los problemas del país. La Iglesia debe tener el valor de denunciar esta actitud descomprometida con la suerte del pueblo. Debemos también enfrentar el éxodo de los sacerdotes que tantas veces hemos achacado de manera superficial a razones de índole material, sin cuestionarnos si nuestra Iglesia estaba motivando suficientemente el compromiso de sus miembros, clérigos y laicos. Para conseguir salir de la indefensión inducida es elemento esencial el compromiso personal, el lento camino de la conversión y de la entrega. Una Iglesia que no sea capaz de despertar ese espíritu de sacrificio, esa militancia martirial, jamás será luz en la oscuridad totalitaria. Pero no todo está perdido… 'si alguien viene a ofrecer su corazón'.

Finalmente… el diálogo

El diálogo ha sido el tema siempre recurrente en los últimos 20 años de vida de nuestra Iglesia. Desde comienzos de la REC, a principios de los 80, hemos propuesto una y otra vez el diálogo como el único camino de salir de nuestra situación. Recientemente, en su intervención ante la XXVII Reunión Interamericana de Obispos, en febrero del 99, monseñor Adolfo Rodríguez Herrera volvería a insistir en el tema. Y con razón.

Pero hay una contradicción esencial en la proclamación del 'diálogo nacional' como salida a la actual situación del país y la implícita dejación de ese diálogo en manos de un Estado que lo ha negado repetidas veces en

el plano de los hechos e incluso del derecho. Entonces la propuesta del diálogo se convierte en una trampa de la que no podemos salir, porque ni siquiera hemos podido entrar en ella… Llega el momento en que nos debemos preguntar sobre las condiciones de posibilidad y la necesidad misma de iniciar un diálogo nacional en que pueda participar la sociedad civil, en los niveles en que ya está organizada (iglesias, asociaciones fraternales, grupos autónomos diversos…), con carácter civilista, no directamente político.

Juan Pablo II tuvo la audacia de cumplir, y con creces, teniendo en cuenta su estado físico y sus condiciones de salud, el compromiso de venir a Cuba y de darnos el mensaje que, a su entender, permitiría a esta Iglesia y a este pueblo retornar en propias manos las riendas de su destino. Nuestra Iglesia supo preparar su visita: con las misiones, llegando al pueblo casa por casa. El pueblo respondió al llamado de la Iglesia, y ésta demostró tener una capacidad de convocatoria que ni ella misma sospechaba.

Pero después de la visita no supimos qué más hacer

Nos da la impresión de que no teníamos preparada la respuesta si se daba lo que de hecho se dio: que el gobierno aprovechó la visita como propaganda exterior y como confirmación interna del statu quo. Decir que esto era lo que esperábamos no es decir verdad. Sin embargo, era perfectamente previsible. Lo triste es que pudiendo prevenirlo, no fuimos capaces de buscar alternativas, proponer otras salidas, generar procesos que dieran protagonismo al pueblo y una esperanza a nuestra gente. Pensamos que el quid de la cuestión reside en descubrir quién es el destinatario de nuestro mensaje, el verdadero interlocutor de ese diálogo que estamos proponiendo: el pueblo como protagonista de su destino, que decide caminar con sus propios pies, que se organiza y es capaz de luchar con los demás y por los demás… ‘con todos y para el bien de todos’. Aquí estamos para descubrir juntos cómo podemos lograrlo. El silencio de nuestra Iglesia ante las nuevas leyes represivas y por la suerte corrida por los cuatro disidentes que redactaron “La patria es de todos” es, cuando menos, preocupante.

El mensaje que demos de compromiso y esperanza de acción y de optimismo, de lucha paciente y de formación constante debe nacer de nuestro propio compromiso con la suerte de nuestra gente, de un análisis profundo de nuestra realidad y de una pedagogía liberadora. No hay libertad verdadera que no pase por el misterio de la Encarnación y por la experiencia de la Cruz. Todos somos responsables. El análisis del síndrome de

indefensión aprendida demuestra que es el trabajo, persona a persona, que es desde la toma de conciencia personal y desde el compromiso de cada uno como se puede superar la indefensión. Hay que analizar los mecanismos, los mensajes, las actitudes que provocan indefensión. Hay que promover acciones concretas, hay que enseñar a la gente a pensar y a tener sentido crítico, hay que despertar la creatividad, generar procesos de participación: sólo entonces saldremos del temor y aportaremos lo mejor de nosotros mismos: la edificación del reino de verdad, justicia, paz, amor, como nos lo enseña Jesús en las Bienaventuranzas (Mateo 5, 1-12 y Lucas 20-23); y como poéticamente lo describe José Martí en su Rosa Blanca. □

MI REINO POR EL CABALLO: LAS DOS MEMORIAS DE LISANDRO OTERO*

Enrico Mario Santí

Enrico Mario Santí coteja en este artículo las dos versiones del libro *Llover sobre mojado*, del influyente escritor, periodista y diplomático cubano Lisandro Otero. Las manifiestas diferencias entre las dos versiones —la primera publicada en La Habana en 1997, y la segunda en México en 1999—, señala Santí, hacen pensar que Otero tiene dos 'memorias': una dentro de la Revolución, destinada para el 'consumo interno' (Cuba), y otra fuera de la Revolución, ya que no contra ella, para el consumo externo (sobre todo en México). Para Santí, con todo, lo más grave y notorio de ambas versiones son los olvidos inexplicables y las verdades a medias de quien es hoy, posiblemente, el intelectual más importante del régimen castrista. Con esa mutilación de la memoria histórica —se pregunta—, ¿puede lograrse la 'generosa conciliación' de la mancomunidad cubana que, al parecer, Otero desea? Para ello —afirma Santí— Otero tendría que estar dispuesto a asumir su responsabilidad y abandonar la premisa que atraviesa su carrera y su memoria: la persistencia de la Utopía.

ENRICO MARIO SANTÍ. Nació en 1950 en Santiago de Cuba. Ph.D. en literatura latinoamericana, Universidad de Yale. Actualmente es profesor de literatura española y portuguesa en la Universidad de Georgetown (Washington D.C.). Premio Clark de Enseñanza Distinguida de la Universidad de Cornell. Director académico de la Fundación Octavio Paz.

* A propósito de *Llover sobre mojado. Una reflexión personal sobre la historia* (La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1997) y *Llover sobre mojado. Memorias de un intelectual cubano (1957-1997)* (México: Editorial Planeta Mexicana, 1999).

Estudios Públicos, 76 (primavera 1999).

El infierno de los tibios es el equívoco.
Octavio Paz

La trama *visible* de *Llover sobre mojado* abre con una alegoría resonante. Sentado en su jardín, el escritor admira "el sentido de responsabilidad" de los colibríes que acuden a libar. Ellos le hacen reflexionar "sobre los hechos transcurridos", y también sobre "cómo valoramos el tiempo con el temor —más o menos encubierto—, de haber malgastado la única y preciosa existencia que nos fue dado disfrutar". La alegoría intenta una apología: Otero insiste en haber actuado, como el colibrí, de manera responsable en la época que le tocó vivir. Sólo que a diferencia del animal, al escritor le asaltan dudas. "Me alivio al verlos porque admiro el inexorable método con que emplean el tiempo". El escritor ve la naturaleza como espejo, pero su reflexión nunca penetra el espejismo. El ser pensante no es, no puede ser, como los pájaros. El colibrí actúa por instinto, no por decisión. Por eso, las dudas que asaltan al escritor surgen precisamente del abismo que separa al hombre de esa naturaleza irreflexiva pero que a la postre él reprime eficazmente. La alegoría resulta, por tanto, lo contrario de lo que su justificación requiere. La naturaleza será su espejo, pero lo que revela en el escritor, como en el colibrí, no es el sentido de responsabilidad sino el instinto de supervivencia.

La alegoría abre un marco en estas memorias publicadas en México que no se cierra sino catorce capítulos después, luego que Lisandro Otero narre cuarenta años de una vida y obra en la que dice haber "estado inmerso en la revolución cubana... un fenómeno totalizador que me ha ocupado cada minuto". En efecto, Otero (La Habana, 1932) ha sido uno de los más fieles colaboradores del régimen de Fidel Castro en materia cultural y demás. Periodista, escritor, editor, funcionario, diplomático, y aspirante a político, representa casi perfectamente lo que Gramsci llamó "el intelectual orgánico". ("No me cupo duda que la inteligencia era de izquierda", dice). Describe una formación burguesa y lecturas marxistas, también el sombrío despertar a una izquierda urbana que recibía consignas de Europa, y especialmente de París, adonde Otero va a estudiar a los 22 años. Su regreso, en 1957, lo encuentra de camarada de gente como Armando Hart y Haydée Santamaría, inmerso en la clandestinidad urbana contra Batista, a cuyo colapso asistió en 1959 y tras el cual pasó a ocupar cargos de creciente importancia, o poder. "En el periódico *Revolución* asumí la conducción de la página editorial", reza el primero de muchos galardones a los que pasará lista. Tras la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en 1961, a la zaga de las notorias "Palabras a los intelectuales" de Fidel

Castro, Otero es electo "para la secretaría de actividades culturales" y lo hacen el primer director de *La Gaceta de Cuba,* primera de varias jefaturas que ocupa. En 1963, el mismo año que asume la dirección de la revista *Cuba* ("edad de oro del periodismo revolucionario"), gana el premio Casa de las Américas con *La situación,* su cuarto libro y primera novela.

Para entonces Otero ha internalizado sus modelos: el escritor de acción (Hemingway, Malraux) y el intelectual sesudo y comprometido (Greene, Sartre). Su creciente importancia en el escenario cubano se refleja en las múltiples tareas que se le asignan en 1966, cuando el entonces Ministro de Educación José Llanusa le propone que asuma "la vicepresidencia del Consejo Nacional de Cultura". El cargo equivalía a un comisariado "cuyo vasto plan", según recuerda, "los obstáculos de la lucha ideológica impidieron realizar cabalmente". Ese mismo año asume la dirección de otra revista, *Revolución y cultura.* Y al siguiente, una encuesta realizada por los jóvenes comunistas de *El caimán barbudo* desata una polémica alrededor de *Pasión de Urbino,* su segunda novela, del poeta Heberto Padilla, quien con imprudente honestidad la tildó como un "salto a la banalidad", y de Guillermo Cabrera Infante, ya para entonces exiliado en España y autor de *Tres tristes tigres,* el libro que el Premio Biblioteca Breve, y de paso Padilla, favorecieron sobre el de Otero. Será apenas el primer capítulo de lo que en 1971 pasa a la historia como el 'caso Padilla': el poeta será arrestado, su autocrítica extraída, y una ruptura de la izquierda liberal con el régimen de La Habana consumida. El 'caso' dará lugar, ese mismo año, a que el régimen transforme la rutinaria reunión de educación para maestros de ese año en un excepcional congreso internacional en el que se sentaran las bases de la futura estalinización de la cultura y vida cubanas. Pero a pesar de todos estos antecedentes en los hechos del 'caso Padilla', Otero alega haber tenido una "casi nula participación". Raúl Roa, canciller de Cuba a la sazón, le "propuso que pasara al servicio exterior", aunque a la postre sería destacado no adonde Otero deseaba viajar (Italia) sino al Chile de la Unidad Popular. Hacia allá Otero viaja, según recuerda, con asombrosa precisión, "el lunes 22 de febrero de 1971".

En 1973, semanas antes del golpe contra Allende, Otero regresa a una Cuba donde ya "se consolidaba un período de gran ortodoxia". Era lo que Ambrosio Fornet, correligionario de Otero, cierta vez llamó con el mote minimizador de "quinquenio gris", terror ideológico que había desatado la estela del 'caso Padilla' y la política que emanó del Congreso de Educación y Cultura. En la trama visible de estas memorias, es aquí donde se inicia un primer cambio psicológico en nuestro protagonista y donde por primera y única vez en todo su texto invoca su 'error': "Me decía que nos

hallábamos en una etapa de trabajo seco, duro, de consolidación económica". En unos años, "dejaríamos entonces de concentrar las energías y dedicar los mejores hombres al manejo de los asuntos públicos. Estaba equivocado, desde luego. La pasión por la ideología es inseparable del sistema comunista de gobierno".

Se inicia entonces un periplo fuera de Cuba: misiones diplomáticas que le permiten escribir por lo menos tres novelas más y varios libros de ensayos, viajes por Europa, África y Asia, destacado en Londres y Moscú. Así, recordará conversaciones, recepciones, viajes, tragos, comidas, *soirées* con una constelación internacional: Ernesto Guevara, Ilya Ehrenburg, Andre Malraux, Graham Greene, Régis Debray, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Margo Glantz, K. S. Karol, Ekaterina Furtseva, Italo Calvino, Mijail Gorbachov, Fidel Castro, entre otros. La impresión final que nos deja toda esa mareante tournée es la misma que a Otero le produce Guimaraes Rosa: un "congresista profesional" que "hablaba con lugares comunes y en un vacío teórico que no permitía vislumbrar las dimensiones de su genio". Todo esto (Otero no precisa la cronología) más o menos hasta 1987, cuando regresa a La Habana. Para entonces dice traer consigo aires de *perestroika,* a cuyo origen dice haber asistido —el llamado 'foro de Issyk Kul' convocado por Gorbachov en 1986 que constituía "una iniciativa para encauzar a los intelectuales en una campaña en favor de la 'nueva mentalidad'". Salto hasta abril de 1989, cuando "saludé de nuevo a Gorbachov en La Habana", y otro, enseguida, a Berlín, 1990, adonde llega ya no en misión diplomática, sino como becario del DAAD alemán, justo a tiempo para atestiguar la caída del Muro, lo que a su vez ocasiona una larga reflexión sobre el fracaso del socialismo real y sus repercusiones en Cuba.

Los últimos dos capítulos, donde Otero despliega una suerte de crítica de la política del régimen y narra sus últimas desavenencias, cierran el marco. Con la entrada en la crisis del socialismo hacia 1986 y la parálisis de la economía cubana, una "toma de conciencia" permite en Cuba que "los reformistas [ganen] la partida, al menos en ese instante". (Pero no menciona sus nombres.) Critica que el gobierno tratase de "solucionar problemas económicos con medidas políticas"; le indigna que "un cubano no puede invertir en su propia patria"; y luego enuncia otra no menos aguda observación: "Es probable que el gobierno tema la formación de un poderoso sector privado que pueda convertirse en una fuerza política, amenazadora del control absoluto del partido único". Reparte palos por igual a la Ley Helms-Burton y al exilio 'duro' —al que él llama, por etapas, "los revanchistas de Miami" y "los gángsters mafiosos"— para recomendar, finalmente, "un puente sin choques entre el autoritarismo y la democratiza-

ción", lo que en su primer capítulo se anuncia como "generosa conciliación". He aquí la naturaleza de la utopía que su primer capítulo invoca en medio de una suerte de expiación pública que Otero ostenta, pero cuyas razones no explica hasta el final.

Según revela, sus dificultades con el régimen comenzaron en abril de 1992, cuando publica un artículo en *Le Monde Diplomatique* en el que señalaba "la necesidad de abrir el espacio político a un pluralismo de ideas y, también, la necesidad de renovar los cuadros de dirección". Por publicar ese artículo, en Cuba fue "marginado y agraviado, se ha querido silenciarme, y me he alejado de la vida cubana". A esto le siguió un período de hostigamiento en Cuba: se le niega otra salida a España, se le exige una explicación oficial sobre su crítica publicada en el extranjero ("Les entregué un documento de seis páginas respondiendo a su requerimiento"), le suspenden conferencias y la presentación de una novela, lo despiden del trabajo, le niegan acceso a un trabajo pagado en dólares, lo jubilan antes de tiempo, el "Ministro de Cultura" dedica "un largo discurso a cubrirme de improperios y calumnias", lo ingresan enfermo, y, por si fuera poco, un editorial en *Granma* alude, sin nombrarlo, a su "pose contestataria". Afirma, finalmente, que "no he querido romper mis vínculos con la revolución, pese a las coyunturas propiciatorias a un desgajamiento". En junio de 1992 sale rumbo a España, donde permanece dos años. Desde entonces vive en México, donde, según entrevistas recientes, se gana la vida como periodista y ha adoptado la ciudadanía mexicana.

Sólo al llegar al último capítulo es que el lector comprende el primero. Es ahí donde Otero se autojustifica y dramatiza la escena de su escritura: un intelectual revolucionario desilusionado —*ma non troppo*. Su coartada: la Utopía apoyada en la convicción religiosa: ("Eran los profetas de los tiempos nuevos, los predicadores de la Arcadia encontrada, cumplían con el apostolado que les venía impuesto por la historia; la hora de nuestra génesis había sonado"). Dos preguntas lo asedian: "¿Era posible lograr en Cuba una consolidación del triunfo revolucionario ante tantos obstáculos sin recurrir a métodos expeditivos?" Y luego: "¿Quién no era un exaltado de la izquierda durante la década del sesenta?" Sus múltiples e inmediatas respuestas formarán parte de un rosario de confesiones que quieren ser abyectas y, por ende, fidedignas: "Me comporté de acuerdo con los módulos de la época, me ubiqué en una intransigencia inflexible y me abandoné al arropamiento épico tan propio de los tiempos". Su molino de viento: el Partido: "Cuando tuve la certidumbre de que esta aceptación del partido no tendría lugar el impacto fue terriblemente paralizante. Vi mi vida transcurrida como la del niño disciplinado, obediente, que aspira a recibir las

condecoraciones al final del curso [...] La reiterada negativa a dejarme entrar al partido era una clara manifestación de que no se me consideraba como uno de ellos". Analiza el efecto que tuvo en él el rechazo del Partido como un avatar del rechazo de su padre, psicodrama que a su vez transfiere a su vida pública. "Aspiraba al reconocimiento social porque buscaba la aquiescencia de mi padre [...] a la vez me sentía frustrado como escritor: no había escrito lo que debía, ni en cuantía ni en calidad, porque empleé mi tiempo en tareas revolucionarias. No era un cuadro de la revolución ni tampoco un escritor maduro. El rechazo del partido me confinó, ya para siempre, a mi perpetua inestabilidad. Debí resignarme a la desubicación permanente". El psicodrama produce, a su vez, esa política desubicada e inestable ("equidistante", la llama en otro momento) bajo la anunciada égida de una generosa conciliación, suerte de maridaje de socialismo y economía de mercado que en la versión que da Otero de una Cuba futura sostendría la mancomunidad de cubanos de la isla y del exilio.

II

Antes de responder a la pregunta "¿Ante quién soy responsable?",
tienen que hacerse la pregunta "¿Quién soy?"
Eso es lo primero que se preguntaron hace un año o dos:
"¿Quién soy?", "¿Soy político o intelectual?"
Agnes Heller (1990)

La trama *invisible* de *Llover sobre mojado*, en cambio, dice otra cosa y desborda este resumen. También tiene otro, u otros, sentido(s). Lisandro Otero sería el típico intelectual revolucionario desengañado. Ha sido maltratado injustamente por el mismo régimen comunista al que sirvió con obediencia durante toda una vida y a pesar de su obra. Su texto es un ajuste de cuentas: justifica su devoción a una causa, denuncia los excesos del socialismo, y de paso algunos del castrismo, y finalmente asciende a una altiplanicie, plena de sabiduría, en base de la cual formula una política híbrida que a su vez propicie, como dice, "otra vez la utopía": la "generosa conciliación". Sin embargo, todo esto equivale, en términos de su alegoría inicial, menos al espejo que al espejismo. Se trata del deseo de Lisandro Otero, no de su realidad. El espejo devuelve una imagen más compleja, o al menos mucho más borrosa.

Empezando por las dos versiones de su texto. Evito por el momento decir 'memorias' porque el propio Otero desautoriza el término, a partir de

la primera versión, publicada hace dos años en La Habana, con el subtítulo de "Una reflexión personal sobre la historia" y que él quiso conservar en la edición mexicana. En *Excelsior*, hace poco (16 de abril, 1999, 28-A), se quejó de que Planeta le hubiese cambiado el subtítulo original "sin mi consentimiento —y de manera desafortunada— a 'Memorias de un intelectual cubano'. Yo quise borrar todo lo referente a matrimonios, hijos, encuentros personales, no obstante que hay muchas vivencias personales, pero todas en relación a la historia, las cuales ayudan a reflexionar sobre el momento histórico determinado". La queja es contradictoria: lo *personal* de la reflexión hubiese dado cabida a la dimensión íntima o privada, en cambio, el término 'memorias', al menos como definición genérica, es lo que precisamente articula la historicidad del sujeto y lo sitúa en relación con el tiempo, la cultura y el cambio. Todas las 'memorias' son históricas y culturales, y ésta ciertamente aspira a serlo.

Pero se entiende que publicar un libro de 'memorias' significa un riesgo, aun cuando la "reflexión personal" que Otero publicó en La Habana en 1997 es mucho más cauta que las "memorias" que saldrían después. Al parecer, Otero tiene dos memorias: una dentro de la revolución y otra fuera, ya que no contra ella. Llamar un texto "reflexión personal" equivale a invocar algo como 'licencia poética': sobre gustos no se discute. Y sabemos que en Cuba hoy, nadie, ni siquiera alguien con el historial de Lisandro Otero, tiene licencia para establecer la historia. Si estas 'vivencias personales' están en relación con la historia, llamarlas 'memorias' las revestiría de una responsabilidad que el autor, al parecer, no está dispuesto a asumir.

El rechazo de esa responsabilidad se manifiesta de otras maneras, algunas ingeniosas. Un cotejo de las dos versiones revela, primero, que la versión cubana no contiene ni la crítica de la política del régimen ni la descripción del hostigamiento oficial que, según Otero, empezó a padecer a partir de abril de 1992. Faltan las últimas 21 páginas. Como en la versión mexicana su crítica al régimen completa la autocrítica del primer capítulo, explicando así las razones materiales del cambio psicológico, moral, y tal vez político, su ausencia de la versión cubana produce un sentido distinto. En las "memorias" el efecto es el de una suerte de conversión, en la "reflexión personal" es el de una autocrítica, tan abyecta o más que la que el régimen le impuso a Heberto Padilla hace casi cuarenta años. Para efectos de consumo interno, en su "reflexión" Otero aparece como oveja descarriada, arrepentido de su pose contestataria desde el extranjero, y ahora de regreso al redil... o casi. Para efectos de consumo externo —sobre todo en

México, 'país hermano'— las "memorias" dan la imagen de un disidente moderado, capaz de hacerle la crítica al régimen pero inmune al 'veneno' de la ruptura. En otras *addenda* Otero hace afirmaciones que en la Cuba actual no podría sostener. Rechaza la acusación de que fue "un escritor oficial del poder cubano" (pp. 20-91); describe su raigambre aristocrática en la alta burguesía cubana (pp. 36-38); afirma que "el famoso Boom no hubiese existido de no ser por la Casa [de las Américas] y la revolución" y sostiene que la Casa defendía "la más absoluta libertad de creación" (pp. 127, 141); narra su experiencia en Chile, y cómo su libro *Razón y fuerza de Chile*, escrito en 1973, a raíz del golpe, y basado en su experiencia chilena, fue censurado hasta 1980 (pp. 216-217); describe su experiencia en la Unión Soviética y los cambios políticos y sociales que dieron lugar al ascenso de Gorbachov (pp. 229-240). Nada de esto aparece en la versión cubana de 1997.

La "reflexión personal" tiene más en mente al lector cubano que está familiarizado con el folklore interno. Narra varias escenas más de la lucha clandestina contra Batista. Describe anécdotas, algunas chistosas, sobre personajes de la farándula cultural como Cabrera Infante, Virgilio Piñera, Otero Silva, Carpentier (una, de muy mala leche, es genial y tiene punta: Lezama Lima abraza a Armando Hart y le susurra al oído: "¡Qué lejos has llegado, Armandito!"). Cuenta el origen de varias de sus novelas. Pero Otero también relata incidentes que, dados a conocer fuera de Cuba, resultarían políticamente incorrectos. Por ejemplo: en 1965 hubo una protesta de intelectuales contra la caza de brujas de homosexuales de las UMAP (pp. 111-114); en reuniones con aprendices de revolucionarios latinoamericanos los cubanos se jactaban de que ellos sí "habían profundizado más en su actitud revolucionaria" (p. 126); tuvo una gran vida social en Londres, cuando fungía de diplomático, y asistió a elegantes *soirées* con gente como Roberto Matta y Carpentier (pp. 222-228); critica al nuevo Berlín unido y al peligroso parecido físico entre Kohl y Bismarck (pp. 262-267). Fuera de Cuba estos relatos resultarían o bien comprometedores o podrían empañar la imagen de revolucionario ascético de Otero. Pero una pregunta fundamental recurre a través de la lectura: si Lisandro Otero está desengañado del régimen, decide irse del país, se aleja del contexto cubano, se hace ciudadano mexicano, y luego escribe unas memorias donde critica la política pública y el maltrato personal, ¿por qué entonces publica una versión censurada en Cuba? Que Otero tiene el derecho a hacerlo nadie se lo niega. Que su memoria desdoblada crea grandes dudas tampoco se puede negar.

III

Protégete de los vacilantes
porque un día sabrán lo que no quieren.
Heberto Padilla

Varias veces a lo largo de sus textos Otero se queja de los "ajustes de cuentas" que se le han sacado en cara desde que se fue de Cuba y siguió publicando sus puntos de vista sobre la situación cubana. En un libro anterior *(La utopía cubana desde dentro*, 1993) recuerda cómo un ensayo suyo en el *Washington Post* fue criticado por exiliados cubanos, quienes aprovecharon para recordarle su pasado como funcionario del régimen: "Se atrincheraron en su terco aborrecimiento y su anacrónico apego al pasado. Una vez más sacaron a relucir sus sicilianos ajustes de cuentas" (p. 105). En las "memorias" dice: "Cuando algún periodista se remite a mis antecedentes suele referirse a mi supuesto dogmatismo de entonces, a mi celo jacobino, a mi adhesión lineal a los principios, no dejo de sonreír ante tanta superficialidad. Sólo quien desconoce el torbellino de una revolución y el ritmo envolvente de ese tiempo histórico puede no entender el clima religioso que fuerza a una devoción más allá de toda racionalidad" (p. 20). Dejo a un lado por el momento esta última justificación para señalar otra cosa: que Otero nunca llega a plantearse la razón por la cual tales ajustes de cuentas, sicilianos o no, resultan necesarios. En el caso que cita, Otero habla sobre las "serias consecuencias en [su] vida profesional" que tuvo el hostigamiento dirigido contra él. Nunca repasa, en cambio, su pasado como colaborador del régimen, ni asume la responsabilidad por aquellos daños que sus acciones, o substracciones, tuvieron sobre personas específicas, o sobre la vida pública. *Llover sobre mojado* constituye, en efecto, un ajuste de cuentas, escrito, entre otras razones, para ahuyentar de una vez por todas esos demonios sicilianos que acosan a su autor y ponga la fiesta en paz. Sólo que con semejante trama invisible, y con tal mutilación de la memoria histórica, ¿cómo diablos hacer que el exorcismo funcione?

Por eso el libro contiene, además, otra trama, ni visible ni invisible sino, como he dicho, *transparente*. Consiste no tanto de lo que dice como de lo que deja de decir: los olvidos en que caen muchos datos que Otero vivió pero que decide pasar por alto, o que cuando sí comenta cae en contradicciones de una torpeza casi tierna. "Romper la cronología, mezclar", le confesó Otero a Fogel y Rosenthal en 1990, "es adaptarse al hecho de que debe haber vacíos. Al contar la historia de Cuba no puedo decirlo todo" *(Fin de siglo en La Habana*, Buenos Aires: TM Editores, 1994,

p. 476). Pero entonces Otero se refería a una de sus novelas, *Árbol de la vida, y* estaba congelado en Cuba. ¿Por qué hacer lo mismo ahora en una "reflexión personal" y ya a salvo en la cálida altiplanicie?

La narración de su vida intelectual comienza con el capítulo 3, correspondiente a 1953, cuando viaja por primera vez a Madrid y al año siguiente a París. Se refiere varias veces a penurias económicas y a la camaradería que encontró entre empobrecidos compatriotas. Sin embargo, no dice lo que todo el mundo en Cuba sabía entonces: que pudo costearse el viaje y la estancia de cuatro años en Europa gracias a una 'botella' (sinecura en Cuba) que se consiguió entonces. Es notable que, casi como un regreso de lo reprimido, páginas antes de narrar su estancia parisina Otero defiende al actual régimen y observa que "la ineficiencia de la administración pública es un mal menor comparado con las malversaciones y la incuria de los gobiernos del pasado" (p. 24).

Es cierto que a su regreso Otero se distinguió pronto por su excelente trabajo como periodista en *Bohemia*, que él llama con razón una revista "oposicionista". Pero olvida llamarla también liberal y anticomunista, que era lo que verdaderamente distinguía a *Bohemia* dentro del escenario nacional. Después del primero de enero, Otero pasa, en efecto, a trabajar de redactor en *Revolución*, el diario que dirigía Carlos Franqui. Pero no es cierto, como ahora dice, que "asumiese la conducción de la página editorial" (p. 76). *Revolución* no tenía página editorial. Si se revisan viejos números de *Revolución* se verá que lo más parecido era la diaria columna "Zona rebelde" en primera plana, no en sección aparte, y que estaba a cargo de varios otros redactores, como Euclides Vásquez Candela y Franqui. Los olvidos de Otero sobre *Revolución* son, por cierto, múltiples y manifiestos. Por ejemplo: la invitación a que Sartre visitase La Habana en 1960 vino por el periódico, no el gobierno. Igual ocurrió con la invitación a Pablo Neruda, cuya presencia en La Habana, por cierto, despertó tantos recelos entre viejos estalinistas del Partido Socialista Popular (sobre todo Guillén 'el malo') que terminaron saboteando el recital masivo que daría el poeta chileno en la llamada Plaza de la Revolución.

Otero dedica un par de páginas a su actuación durante la invasión de Playa Girón en abril de 1961. No recuerda, sin embargo, un dato que todo el mundo también sabe: que durante los primeros días de la invasión él y su entonces esposa, Marcia Leiseca, fueron denunciados por el Comité de Defensa de su barrio como "gusanos" (la suegra de Otero acababa de solicitar asilo en una embajada); que fueron detenidos durante 48 horas por la policía junto con otros cien mil sospechosos que el régimen recogió; y que sólo fue cuando Otero llamó a Carlos Franqui para que los rescatara

que la pareja salió libre. Las razones de esa sospecha oficial no provenían precisamente del asilo de la suegra. Era la filiación batistiana y burguesa de su familia. Tanto fue así que cuando Otero participa en la lucha clandestina contra Batista, que él narra en parte, la tarea más importante que le asignó el Movimiento 26 de Julio fue la de sostener contacto con la embajada de Estados Unidos. Igual ocurrirá después del triunfo, durante la reunión de Punta del Este, a la que acudieron varios jefes de la revolución, como Ernesto Guevara u Osvaldo Dorticós, presidente títere. Antes de partir, este último tomó la precaución de vetar la presencia de Otero en el cuerpo de periodistas porque la policía aseguraba que trabajaba para la CIA.

Sobre el *affaire P.M.*, el inocente corto de 1961 que sirvió de pretexto para imponer la censura, Otero dice, con razón, haberse puesto de parte de los liberales. Pero no saca la única conclusión incómoda que se deriva de esa crisis: que *P.M.* era sólo el anzuelo para eliminar *Lunes de Revolución* y a su grupo porque su influencia era una amenaza. Como recién ha dicho Alfredo Guevara, con su habitual elocuencia: "*P.M.* no es *P.M. P.M.* es *Lunes de Revolución*, es Carlos Franqui" *(Revolución es lucidez*, La Habana, 1998, p. 89). Como tampoco recuerda que parte de lo que él mismo llama su "quizás excesivamente prolongada intervención" en esa notoria reunión atribuyó las dificultades de intelectuales y artistas con el régimen a que la revolución no había creado un "Foro de Yenán" que sirviera de guía. (Según cuentan, Fidel Castro recordaría esa observación como "sesuda y erudita".)

En su capítulo 5 narra algunos de los hechos de su nombramiento a la "vicepresidencia del Consejo Nacional de Cultura", lo que en aquel momento equivalía a la posición relativamente poderosa de Director de Cultura. También habla del célebre Salón de Mayo de julio de 1967. Sólo que al narrar los dos acontecimientos en secuencia inversa (pp. 90-91), desecha su parte de la responsabilidad en la organización del Salón, y de paso obvia una vez más a Franqui, quien fue el de la idea de traer el Salón a Cuba desde Francia. Tan estrecha era la relación entonces entre Otero y el Ministro Llanusa —y tanto compartían el poder en materia de cultura— que en una entrevista reciente Antón Arrufat recordó a Otero no por el cargo oficial que entonces ocupaba sino por lo que significaba: "en esa época Lisandro era el secretario privado de José Llanusa, el ministro de Educación que tenía a su cargo el Consejo Nacional de Cultura cuando todavía no se había creado el Ministerio" *(Crítica, Revista Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla*, Nueva Época, Vol. 65, abril-mayo, 1999, p. 61). No sabemos si fue ésta la posición más poderosa que Otero alcanzó. Lo cierto es que en sus memorias apenas lo menciona y se escabu-

lle hábilmente del cargo. *Et pour cause.* Fue bajo su dirección que la incipiente política cultural del régimen comenzó a implementarse y que desembocó, al final de su plazo, en el Congreso Nacional de Educación y Cultura de 1971, donde se tomaron las medidas de represión fascista que imperan hasta hoy día[1]. Pero de este tema tampoco habla. Hay testimonios, además, de que, en su puesto de Director de Cultura, Otero quiso mandar a detener a Jorge Camacho y Agustín Cárdenas a su arribo a Cuba, dos artistas cubanos ya residentes en París que participarían en el Salón. Años antes, Camacho y Cárdenas habían aprovechado becas del nuevo gobierno para estudiar en París pero nunca habían regresado (situación análoga a la del escritor Severo Sarduy). Por fortuna, la intervención de otros funcionarios lo impidieron. Pero poco después el Director tendría más suerte.

Tras su visita a La Habana y participación en el Salón de Mayo los artistas invitados donaron sus obras, que pronto se acogieron en un nuevo Museo de Arte Moderno, situado en La Rampa, en el edificio de la antigua Funeraria Caballero. El 13 de marzo de 1968, conocido como el Día de la Ofensiva Revolucionaria, Fidel Castro pronuncia un discurso que marca el comienzo de la definitiva estalinización del país. A partir de ese momento se confiscan todos los pequeños negocios, desaparecen los artesanos y pequeños oficios, se declara una 'Ley seca', y se clausuran bares, cafés y hasta las populares *guaraperas.* Una de las contribuciones de la Dirección de Cultura a esta nueva 'ofensiva' fue enviar, al día siguiente del discurso, una brigada de policías a que destruyesen a hachazos las piezas que los artistas invitados al Salón habían donado y que guardaba el Museo. No era la primera vez que el arte moderno se consideraba 'degenerado'. Otero no menciona ni el discurso ni este otro conocido incidente, suerte de *Kristallnacht* en La Rampa, ni el cierre definitivo del Museo, que ocurrió poco después. En realidad, no habla apenas de su gestión como Director de Cultura, que ocupó durante cuatro años. Aunque es cierto que en el primer capítulo sí reconoce que "insensiblemente me fui convirtiendo en un fanático. Me deje arrastrar por un radicalismo, muy a tono con los tiempos" (p. 23).

Sí aborda, en cambio, y con lujo de detalles, la polémica de mayo de 1967 en *El caimán barbudo* sobre *Pasión de Urbino* y *Tres tristes tigres* a que antes aludí. Pero si se revisan los textos de aquella polémica se verá que el resumen que ahora ofrece peca de imprecisión. Es equívoco alegar, por ejemplo, que al criticar la novela de Otero y elogiar la de Cabrera

[1] Ese mismo año Otero estuvo a cargo de la primera recopilación de documentos justificatorios de esa política; véase *Política cultural de Cuba* (París: UNESCO, 1971).

Infante "Padilla llevaba el debate literario al terreno político" —a menos que piense que criticar la novela de un Director de Cultura y elogiar la de un colega emigrado que ganó el premio por el que ambos compitieron fuese un expreso delito. Dice además que "la polémica quedó suspendida por una decisión política". Pero no dice por qué fue suspendida ni quién tomó la decisión. Lo que ocurrió fue que la polémica causó tanto revuelo que fue despedida la redacción completa de *El caimán barbudo*, entre ellos el escritor Jesús Díaz, su fundador. Resulta imposible creer que, habiendo ocupado en ese momento la Dirección de Cultura, Otero no recuerde quién fue el responsable de terminar de ese modo tan drástico la polémica en la que él mismo fue protagonista. En cambio, sí se esmera, a propósito del 'caso Padilla', en señalar la cronología entre este primer episodio de 1967 y el arresto y autocrítica de Padilla cuatro años después. "He puesto tanto énfasis en las fechas", dice, "porque son muy importantes para seguir esta polémica. A menudo se omite la secuencia temporal y se hace ver que Padilla criticó el libro de un funcionario, quien se vengó prohibiéndole la obra y lo hizo encarcelar por haberla escrito [...] no hay relación de causa y efecto, salvo la creciente irritación que producía Padilla con su actitud" (p. 99). El "funcionario", bien entendido, es el propio Otero. Y si no es él, entonces ¿por qué invocar la tercera persona?[2] Pero si observamos bien, la cronología que ahora ofrece no contradice en realidad esa sospecha, al contrario, el tono defensivo la confirma. Al resumir los hechos del 'caso', Otero afirma, una vez más, su "casi nula participación en ellos" (p. 98). Ha de ser un "casi" muy grande. Jorge Edwards recordó, en *Persona non grata* (1973), que cuando se produjo el incidente de *Fuera del juego* a fines de 1968, oyó a Lisandro Otero exclamar: "Ahora vamos a poder romperle los cojones a Padilla". Otero recuerda, además, que a principios de noviembre de 1968 "comenzaron a salir en la revista *Verde Olivo*, órgano de las fuerzas armadas, una serie de artículos firmados con el seudónimo de Leopoldo Ávila". En esa fecha, Otero vivía en Cuba, era el Director de Cultura y dirigía no una sino dos influyentes revistas del régimen. Pero Otero no especula sobre la identidad del tal "Leopoldo Ávila" y evita decir lo más importante. Esos artículos, publicados a raíz del premio UNEAC de ese

[2] En un artículo anterior sobre el mismo tema, Otero recurre a una fórmula parecida: "En las múltiples deformaciones que se han hecho del llamado 'caso Padilla', la más común consiste en omitir la cronología de los acontecimientos, de lo cual se deduce que Padilla criticó a un alto funcionario que se vengó prohibiéndole un libro y que se le encarceló por haberlo escrito". Véase *Disidencias y coincidencias en Cuba* (La Habana: Editorial José Martí, 1984), p. 94, primero publicado en *Excelsior* (17 y 19 de octubre, 1983). Fogel y Rosenthal afirman, en un libro donde también se entrevista a Otero, que él fue "el autor de la principal acusación contra el poeta Heberto Padilla", p. 475.

año a *Fuera del juego,* de Padilla, y *Los siete contra Tebas,* de Antón Arrufat, no es que "acusaban a la literatura cubana de despolitización". En realidad, eran ataques a los dos escritores. Entre las muchas revisiones a que se sometieron estas "memorias" para su nueva publicación, ¿no podía Otero haber aclarado este pequeño detalle para beneficio de su lector mexicano? Un último dato sobre la cuenta defensiva: la mala memoria que afecta a Otero en otros pasajes se vuelve prodigiosa al recordar tanto el día exacto del arresto de Padilla ("veinte de marzo" de 1971, p. 99), como, 77 páginas después, el de su partida hacia Chile ("el lunes 22 de febrero salí hacia Santiago", p. 176). Todo lo cual demuestra que, cuando es cuestión de protegerse, ¡no hay nada como echar números!

Lo que definitivamente comprueba que Otero sí estaba al tanto de lo que ocurría en Cuba con Padilla es la conocida carta que el 28 de mayo de 1971 le escribe a J. M. Cohen, el mismo J. M. Cohen "arrogante inglés" a quien Otero ahora acusa de "poca ética y tanta doblez" (p. 98) por haber declarado públicamente su preferencia por Padilla cuando en 1968 fungía como miembro del jurado que le otorgó el premio a *Fuera del juego.* Tres años después, cuando Padilla cae preso, Cohen le escribió a Otero en Santiago de Chile pidiéndole que intercediese por él. En el resumen del incidente que hizo Carlos Alberto Montaner: "Otero temió que la carta hubiera sido abierta por Seguridad del Estado y se llenó de terror. La respuesta que le envió al buen Cohen es, a un tiempo, una increíble bajeza y una ingenua muestra de su pánico [...] Otero hizo copias para Seguridad del Estado, la UNEAC, Casa de las Américas y cuanto organismo exigía pruebas de la más sumisa lealtad. Esas copias circularon en Cuba" *(Informe secreto sobre la Revolución cubana,* Madrid: Sedmay Ediciones, 1976, p. 130). No cito de esa respuesta. Basta reproducirla en un apéndice.

Habla después, con franca nostalgia, "de la edad de oro del periodismo revolucionario" cuando dirigía la revista *Cuba,* hasta 1968, y que él se propuso reformar "con las técnicas norteamericanas de periodismo [...] La revista debía ser, tal era mi propósito, una vitrina para lo mejor de nuestra cultura, en el sentido más amplio de la palabra" (pp. 86-87). La revista *Cuba* fue, en efecto, la versión cubana de *Life* que vendía la imagen de la joven revolución para el extranjero. Pero fue también una publicación que el régimen utilizó de diversos modos para usos de propaganda, más allá de la cultura. Otero no menciona lo que tiene que haber sido el caso más notorio de falsificación en toda la historia del periodismo cubano y que se debe precisamente a esa publicación cuando él la dirigía —el blanqueamiento de la figura de Carlos Franqui de la foto de Fidel Castro llamando a la huelga general el lº de enero de 1959 en Palma Soriano. En esta conocida

foto histórica, que luego pasó a ser la portada del libro *Retrato de familia con Fidel* (1981), Fidel Castro aparece hablando por Radio Rebelde, órgano del Movimiento 26 de Julio, por un micrófono que sostenía en la mano Jorge F. Mendoza, uno de los locutores. En la foto original, el perfil barbado de Franqui, director a la sazón de Radio Rebelde, aparece entre los dos hombres; en la versión que en 1968 publicó la revista *Cuba* (Año VII, No. 78, octubre 1968, p. 106, foto 242), la imagen de Franqui desaparece. No era para menos: para entonces Franqui, influyente dirigente histórico del 26 de Julio, compañero de Fidel Castro, y antiguo director del periódico *Revolución*, ya se había ido del país y había roto con el régimen. Personas así ya no podían existir en la memoria histórica, y la revista *Cuba* se prestaba para hacerlas desaparecer. ¿Tenía Otero en mente esta foto cuando habló de las técnicas del periodismo norteamericano que él quiso incorporar a la revista, o como ejemplo de "lo mejor de nuestra cultura"?

Hay otras lagunas en la memoria de Lisandro Otero que intrigan al lector. ¿Por qué defiende su participación en la famosa carta de 1966 contra Pablo Neruda a sabiendas que se trataba de una intriga personal de Nicolás Guillén, enemigo personal del poeta chileno? Guillén, a su vez, era un instrumento del régimen, que quería criticar al Partido chileno a través de Neruda por su falta de solidaridad con el nuevo Partido cubano, recién fundado. También evita mencionar, excepto de pasada, a Carlos Fuentes, a quien él y Ambrosio Fornet acusaron de fascista cuando en 1968 publicó *Cambio de piel.* Por otra parte, ¿por qué saca Otero de la versión mexicana la extensa discusión sobre las UMAP, los campos de concentración para homosexuales, que sí abunda en la versión cubana (pp. 109-111), y luego reduce esas tres páginas a un refilón con Graham Greene (p. 208) donde, por cierto, llama a Somerset Maugham "homosexual vergonzante"? (Otero por cierto dedica varias páginas a Greene en sus memorias, qué raro que Greene no mencione a Otero en las suyas.) No revela Otero nada, tampoco, sobre sus labores como 'consejero cultural' de la embajada cubana en Chile. Durante esos dos años tiene que haber intimado con Antonio de la Guardia, uno de los dos mellizos que en 1989 Fidel Castro ejecutaría junto al Comandante Arnaldo Ochoa Sánchez, pero que en ese entonces estaba encargado por el régimen de la seguridad de Salvador Allende. De hecho, el 'caso Ochoa', que ocurre en 1989, cuando Otero aún vivía en Cuba, y antes de su estancia en Berlín, y que conmovió al país y al continente, también brilla por su ausencia. Como también está ausente la persecución, exilio interno y posterior deceso de José Lezama Lima, en 1976, sobre quien, en un ensayo de 1983, durante su anterior encarnación como vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Otero escribió intentando minimi-

zar la inquina del régimen hacia Lezama en respuesta a las críticas del exilio ("Para una definición mejor de Lezama Lima", en *Disidencias y coincidencias en Cuba*, pp. 96-103). Tampoco recuerda Otero su asistencia como jefe de la delegación de Cuba al Congreso Internacional de Intelectuales y Artistas en junio de 1987, que conmemoró el cincuentenario del II Congreso Antifascista. ¿Acaso recordaría cinco años después, en medio del hostigamiento del régimen, las palabras que pronunció en aquella intervención?: "La consolidación de la revolución ha permitido el surgimiento de una democracia institucionalizada. Los derechos civiles y políticos de los ciudadanos están plenamente garantizados en nuestro país [...] Existen además otros derechos que no existen en otros países, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la salud, a la igualdad ante la ley con independencia de raza, el derecho a la educación, el derecho a la crítica" (*Congreso Internacional de Intelectuales y Artistas*, ed. Joan Álvarez Valencia; Valencia: Generalitat Valenciana, 1987, III, p. 924.)

El olvido más flagrante de todo el libro es sin duda el intento fallido de Otero por acceder a la presidencia de la UNEAC en 1987, cuando se le ordena que regrese a Cuba de su puesto en la embajada en Moscú. Para entonces Nicolás Guillén, presidente de por vida de la UNEAC, está enfermo de cáncer y necesita un relevo. Según Fogel y Rosenthal (p. 475), Otero regresó de "presidente interino", pero la carátula de la versión mexicana afirma que fue "presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba". Los mismos autores señalan que "en 1988 Aldana deseaba que él fuera el presidente de la UNEAC" (p. 476). Se refieren a Carlos Aldana Escalante, antiguo secretario del Comité Central del Partido y poderoso director del Departamento de Orientación Revolucionaria, hoy en desgracia. Aldana, de fama reformista, fue por un tiempo el número tres en la jerarquía política del régimen, al igual que Ochoa lo había sido en la militar. Pero en cuestión de meses esos dos números tres se convirtieron en ceros —a la izquierda, desde luego.

Desde su puesto apadrinado, en 1987 Otero intentó una reforma democrática de la UNEAC y amplió una membresía que, de paso, reforzara su candidatura a la presidencia. Pero nunca anticipó ni que Aldana ya estaba en la mirilla ni que sus propios enemigos dentro de la UNEAC le harían una campaña negativa que terminarían descarrilándolo. Una "Banda de cuatro" —los escritores Osvaldo Navarro, Raúl Luis, David Buzi y Gustavo Eguren, el anti-Otero— fue tan eficaz que la noticia del escándalo llegó a oídos de Armando Cristóbal Pérez, el hombre del Partido en la UNEAC, quien informó en detalle. La controversia alrededor de la candidatura de Otero iba en contra de los intereses del Partido. En una reunión

preliminar de la UNEAC, Armando Hart, Ministro de Cultura, se hizo eco de los problemas, y al final terminó señalando a Abel Prieto como su candidato a la presidencia. Prieto no tenía, ni tiene, las credenciales ni la obra de Otero. Pero sí era hombre de confianza del Partido y también, al decir del poeta Fernández Retamar, "un hombre de transición". (¿Será por eso que luego lo hicieron Ministro de Cultura?) El congreso celebrado a fines de enero de 1988 sólo confirmó la decisión. En el discurso de cierre, Carlos Rafael Rodríguez, viejo estalinista miembro del Comité Central, dio a entender la justificación pública de la destitución: "Lenin descubrió el origen de esa reserva instintiva de los trabajadores hacia los hombres del arte y de la cultura cuando aludió al 'señoritismo intelectual' que afecta a la mayoría de ellos" *(Granma*, 29 de enero, 1988, p. 3). Era el viejo "pecado original" del que había hablado el Che, cuya expiación los intelectuales sólo podían lograr con el suicidio, y del cual Otero aún padecía.

Considerando su vasta hoja de servicio, la destitución tiene que haberla sentido como un desplome. Sobre todo, porque su agente activo había sido nada menos que Armando Hart, entonces Ministro de Cultura, quien, según Otero, prácticamente le debía la vida por el incidente durante la lucha clandestina contra Batista que cuenta en el capítulo 2. (La revancha se resiente más en la versión cubana de las memorias: es ahí donde cuenta la pulla de Lezama contra Hart.) En el rejuego político, sobre todo la asociación con Aldana, las cosas fueron de mal en peor. De ahí la decisión de Otero de ausentarse del país en 1990, no ya con un cargo oficial sino como becario de la DAAD en Berlín, donde fue testigo de la caída del Muro. Para cuando Fogel y Rosenthal entrevistan a Otero en La Habana, a su regreso en 1991, confiesa que "Ya soy incapaz de encontrar la concentración para escribir una novela. Por eso me puse a escribir mis memorias" (p. 476). Se trata de un personaje en busca de un papel: "Yo mismo, soy consejero del ministro, con un salario alto. Pero en la realidad soy un hombre aislado" (p. 477).

Es esta crisis moral la que desemboca en la otra, más decisiva, de abril de 1992, cuando Otero publica el célebre ensayo en *Le Monde Diplomatique*, donde pedía, según ahora resume, "una renovación del sistema" (p. 257). Sin embargo, "la publicación de ese artículo fue el punto de partida de una nueva coyuntura en mi existencia". Según Otero *(La utopía cubana desde dentro*, p. 57), el artículo se publica a petición de Ignacio Ramonet, director del mensuario francés. En abril de 1992 aparece en París con un cintillo tronante: "Manifiesto por una renovación política" y con un título semejante: "Lo que debe absolutamente cambiar en Cuba". En el artículo habla, entre otras cosas de la necesidad de abrir espacios políticos,

reformar la economía y reemplazar el liderazgo luego de tres decenios de mando. Pero a su llegada a Puerto Rico, a principios del mismo mes, se sorprendió ante la acogida de su artículo: negó que fuera un disidente, insistía en que era "un escritor revolucionario", y alegó que la traducción francesa tenía errores de interpretación. En una entrevista en *Proceso* (Nº 812, 25 de mayo, 1992, pp. 40-43), a su regreso a La Habana, todavía insistía en que la llamada remoción de Fidel Castro había sido un error de traducción ("dije 'funcionarios' y el traductor escribió: 'dirigentes'"). Pero sobre todo se extrañaba por el revuelo que su artículo había causado en Cuba ("no es la primera vez que escribo esto"), y afirmaba que por haber lanzado esas opiniones "no he sido condenado a la hoguera. En Cuba hay mucho más margen de discrepancias de lo que se suele admitir en el exterior".

Su extrañamiento estaba total e íntegramente justificado. Otero no era el único que había lanzado esas críticas. Las había lanzado el propio Partido, en el foro de su cuarto congreso, pocos meses antes de que se publicara el artículo. Una 'puesta sobre el tapete' formaba parte entonces de la estrategia de 'rectificación' del régimen, suerte de versión barata de la *glasnost* soviética que ayudara a contener el dique de los nuevos cambios. Además, un año antes, en junio de 1991, Otero estaba sobre aviso: ya había sobrevivido otra crisis, la de la *Carta de los Diez*, en la que un grupo de escritores criticaba la censura del gobierno. Otero primero se negó y después accedió a firmar una contra-carta de la UNEAC contra esos disidentes alegando, precisamente, "un intento de manipulación desde el extranjero" *(Fin de siglo en La Habana*, p. 478). Al revuelo del artículo en *Le Monde* no dejó de contribuir, por cierto, el propio exilio que ávido lo leyó como la ruptura de un desafecto. Los que insistieron en semejante lectura no se fijaron, como escribí oportunamente *(Vuelta*, 189, agosto de 1992, pp. 70-71) en que en un pasaje Otero mencionaba a "la Unión Soviética" cuando esa entidad política había dejado de existir hacía más de seis meses. Todo lo cual demostraba que su reacción no podía haber sido una protesta espontánea. En realidad, se venía cocinando desde mucho antes por órdenes del régimen. Franqui dio en parte del clavo cuando reaccionó diciendo que trataba de "crear una falsa atmósfera de tolerancia en la isla con vistas a la próxima visita de Castro a España para asistir a la segunda cumbre de países iberoamericanos". No era para menos. Poco antes, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra había condenado al régimen, y la visita de Castro se esperaba no sólo en la cumbre de Madrid, que coincidía con el V centenario del Descubrimiento, sino en la Expo de Sevilla, donde iba a pronunciar un discurso el 26 de julio. Muchas cosas estaban en juego. Otero preparaba el terreno.

Lo que no era evidente entonces, sobre todo para Otero, era que todo había sido una trampa —o para decirlo en buen cubano: 'que le hicieron la cama'. La hoguera que él se afanaba en negarle a *Proceso* en mayo de 1992, empezaba a arder. El mismo día en que se publicaba esa entrevista en México, Abel Prieto, presidente de la UNEAC, decía en *Granma* que "ha habido traidores, gente que se está prestando abiertamente al juego de la campaña contra Cuba". Dos días después, volvió a la carga: "defender un espacio para el debate no significa tolerar el uso de tribunas para los que coquetean con posiciones ambiguas, atacan la solidaridad con Cuba y tratan de crearse una supuesta imagen heterodoxa en medios de prensa foráneos en francas actitudes oportunistas". Ese mismo día (27 de mayo) "El ministro de Cultura [léase: Armando Hart] dedicó un largo discurso a cubrirme de improperios y calumnias delante de una vasta asamblea de escritores y artistas". (Por cierto: si no son ciertas ¿por qué Otero no aprovecha la ocasión ahora para desmentirlas?) Finalmente, cita la sentencia que publica el *Granma* del 28 de mayo, al informar sobre la reunión de la UNEAC: "lo inaceptable que resulta la pretensión de influir en el debate interno con poses contestatarias, desde órganos de prensa extranjeros". No dice Otero lo más importante, o tal vez lo más doloroso: que fue Carlos Aldana, su antiguo padrino, el que las dijo en el discurso de clausura. Fogel y Rosenthal revelan que en ese discurso Aldana también pidió a los asistentes, citando la Biblia, "ser benevolentes frente a uno de ellos, Lisandro Otero" (p. 625). Sólo que para entonces, según los mismos autores, muchos de esos mismos asistentes ya pensaban que Aldana también "trataba de limpiarse". Poco después, *Aldanov* caería destituido en un bizantino caso de corrupción. El Partido lo expulsa el 24 de octubre. Para entonces, ya Otero no vivía en Cuba. "En junio", suspira, "pude salir del país".

IV

Si on l'avait seulement écouté,
ce mot qui commence comme reve et finit comme destruction.
Régis Debray

No es descabellada la hipótesis de que Otero fue traicionado por las mismas fuerzas que él aprendió a servir. Fue el mismo caso de Arnaldo Ochoa, un año después, devorado por los leones tras su abyecta confesión. Mejor dicho: es el mismo caso de siempre. Después de destituido de la

presidencia de la UNEAC, Otero no cejó en buscar el poder y encontró, a los cuatro años, una oportunidad, acaso sugerida por el propio Aldana, para echarle una mano a una crisis del régimen. Ni él ni Aldana pensaron que los tiros saldrían por la culata. Mucho menos que ellos mismos eran la carnada. Después de echada esa suerte, sólo quedaban dos opciones: quedarse atrapado, como Aldana, o escapar, como Otero. Sólo que Otero, funcionario menor, siempre podía alegar, como de hecho ha ocurrido, que lo que debería cambiar en Cuba "eran los funcionarios, no los dirigentes", y que él no rompería "sus vínculos con la revolución, pese a las coyunturas propiciatorias a un desgajamiento". Por eso, una vez que conocemos estas memorias, ¿quién quita que este dirigente no pueda cosechar éxitos aún mayores en su futura carrera?

En un final, el caso de Otero interesa menos por sus pormenores que por las preguntas que plantea. A saber: ¿Podemos creer a un intelectual con semejante comportamiento? ¿Puede construirse una política a partir de la radical 'desubicación' que practica su texto? ¿Puede lograrse, como al parecer él mismo desea, la "generosa conciliación" de la mancomunidad cubana habiendo mutilado la memoria histórica como él lo hace? Para afirmar estas respuestas haría falta asumir una responsabilidad que Otero todavía desconoce. Y aún más, abandonar la premisa que atraviesa su carrera y su memoria: la persistencia de la Utopía. La escribo con mayúscula para resaltar su carácter mítico y, por tanto, manipulable. No la confundo con los valores de generosidad, caridad y fraternidad que a muchos nos interesan. Ni tampoco con la subordinación de la historia y, sobre todo, de vidas de carne y hueso, a justificaciones huecas y, casi siempre, sangrientas.

Debe ser triste, en efecto, llegar a "los años de la declinación" y descubrir que se ha malgastado la vida negando la realidad. Por eso, lo dejo recordando un viejo refrán: *más vale tarde que nunca.* Y también con un aviso, hoy por cierto muy de moda en Cuba: *No es fácil.* □

CUBA: CUARENTA AÑOS DESPUÉS*

Jorge Edwards

Jorge Edwards reseña en este artículo tres testimonios aparecidos en los últimos tres años sobre la Revolución cubana. Sin habérselo propuesto, señala Edwards, las memorias de un ex lugarteniente del Che Guevara en Bolivia (Daniel Alarcón Ramírez), de un ex miembro de la nomenclatura cubana (Jorge Masetti) y de un escritor y ex cronista oficial de la Revolución (Norberto Fuentes) coinciden en un punto: la revolución ha sido un ejercicio descarnado de la más pura 'política de poder', al servicio del Número 1, y suicidio para los demás. Acorralada y atemorizada, la dictadura cubana aplica una mano cada día más dura, en una especie de huida hacia adelante... Y todo ocurre en la más completa indiferencia internacional. Si el desenlace del régimen soviético ha sido patético, afirma Edwards, el del régimen castrista podría llegar a ser una de las grandes tragedias latinoamericanas.

JORGE EDWARDS. Escritor y ensayista. Autor de varios libros de cuentos y de las novelas *El peso de la noche, Persona non grata, El museo de cera* y *Convidados de piedra,* entre otras. Su novela más reciente es *El origen del mundo* (Barcelona: Tusquets Editores). En 1994 recibió el Premio Nacional de Literatura. Recientemente ha sido distinguido por el gobierno de Francia con el grado de Caballero de la Legión de Honor.

* Jorge Edwards se refiere en este artículo a los libros de Daniel Alarcón Ramírez, *Memorias de un soldado cubano. Vida y muerte de la Revolución* (edición e introducción de Elizabeth Burgos; Barcelona: Tusquets Editores, 1977); de Jorge Masetti, *El furor y el delirio. Itinerario de un hijo de la Revolución cubana* (edición a cargo de Elizabeth Burgos; Barcelona: Tusquets Editores, 1999), y de Norberto Fuentes, *Dulces guerreros cubanos* (Barcelona: Seix Barral, 1999).

Estudios Públicos, 76 (primavera 1999).

Cuarenta años es mucho para una revolución. Si la restauración no llega a tiempo, la revolución envejece mal, demasiado mal. Se pone conservadora en el peor sentido de la palabra, y al parecer sin vuelta posible. El caso de la restauración en Rusia, por ejemplo, con su mafia, con el descalabro de su economía, con su gobierno errático y que no ha perdido ninguno de los peores tics dictatoriales, con el genocidio de Chechenia, tolerado por Occidente con vergonzosa hipocresía, es patético. El caso de Cuba, el de una revolución en estado de decrepitud y sin salida visible, sin alternativa, es todavía peor. Cuba se sumerge en la desesperanza, en la idea colectiva de ganar tiempo, y de hacerlo para nada, esto es, para seguir ganando tiempo. Y esto sucede en medio de la más completa indiferencia internacional. Los entusiastas del castrismo de hace diez o más años, los turistas políticos, los intelectuales de izquierda de Occidente que hacían su peregrinaje anual o de dos o tres veces al año a las fuentes isleñas, miran para otros lados con el mayor cinismo, como si ellos no tuvieran la culpa de nada, como si no tuvieran el deber de darle explicaciones a nadie. Otra revolución que fracasó, y a otro asunto. ¡Cada día tiene su cuidado! Ahí está Chiapas, o ahí está el proceso a Pinochet. Son útiles para doblar la página e iniciar otras campañas.

En los últimos dos o tres años han salido testimonios importantes, en algún sentido espeluznantes, sobre la revolución cubana y su deterioro. Son testimonios de personas que vivieron la experiencia revolucionaria a fondo, desde puestos de observación privilegiados, y que se decepcionaron tarde, en cierto modo a la fuerza, a pesar de ellos mismos, y con evidente peligro para ellos. Daniel Alarcón Ramírez, cuyo nombre de guerra ha sido Benigno, era un joven campesino analfabeto de las cercanías de la Sierra Maestra en los años de la guerrilla contra Batista. Fue reclutado por azar, después de sufrir en su familia la crueldad del régimen batistiano, y se transformó al cabo de pocos años en uno de los lugartenientes del Che Guevara. Estuvo con él en el Congo y nunca llegó a entender las razones que habían tenido para meterse en esa parte del mundo. La aventura congoleña fue un perfecto ejemplo de ineficiencia, de caos administrativo y militar, de acción sin objetivos y que produjo evidentes retrocesos para la causa revolucionaria. El Che Guevara y su grupo ya tenía desde antes, pero confirmó a partir de entonces, una decidida antipatía por la Unión Soviética. El comunismo soviético, por su lado, perfeccionó un diagnóstico que ya se había pronunciado: el Che Guevara representaba una forma peculiar, latinoamericana, de la desviación trotskista. En otras palabras, era, en la práctica, el enemigo principal. El más peligroso de todos. Entendemos muy

bien, a partir de aquí, que haya sido empujado a Bolivia, y que a partir de su ingreso con un pequeño grupo de guerrilleros a territorio boliviano estuviera condenado. Fidel movió los hilos con audacia, con la mayor frialdad, con el más perfecto disimulo. Alinearse en forma seria en la línea soviética implicaba sacrificar al Che. Pero Fidel Castro, en este aspecto, habría podido darle lecciones a José Stalin. En lugar de mandar asesinar a Guevara, permitió que lo asesinaran sus enemigos y le preparó un pedestal de héroe.

Benigno, sin duda, no es ni pretende ser un escritor, y uno puede preguntarse por el alcance que ha tenido la intervención de Elizabeth Burgos en su texto, la ex pareja de Regis Débray y ex colaboradora con los servicios cubanos. Da la impresión de que Elizabeth Burgos prefirió ayudar a publicar el testimonio de otros y mantener el suyo en silencio. El libro de Benigno, *Memorias de un soldado cubano* (1977), interesante en todos sus capítulos, es esencial para conocer uno de los episodios más sombríos de la historia revolucionaria contemporánea: el de la expedición de Ernesto Che Guevara a Bolivia y su rotundo fracaso. Es la crónica de una muerte no anunciada, postergada, pero en definitiva inevitable. La historia de las traiciones al grupo, la de los errores garrafales de seguridad cometidos por ellos mismos, provocan verdadero asombro. Según el retrato de su lugarteniente, el Che en Bolivia era un hombre deprimido, enfermo, en el límite de las fuerzas, enteramente abandonado por el gobierno de Cuba. Sin duda, se daba cuenta de la situación. No podía no darse cuenta. Pero necesitaba hacerse ilusiones, tanto para poder continuar él mismo como para mantener la moral de sus seguidores. El objetivo era poder pasar de Bolivia al norte de Argentina e iniciar desde ahí la revolución continental. ¡Nada menos! No olvidemos que el trotskismo era la doctrina de la revolución permanente, el reverso de la idea stalinista de proteger la revolución en un solo país. Al darle la espalda al Che y aliarse en forma incondicional con la Unión Soviética, Fidel, para todos los efectos prácticos, había escogido la alternativa stalinista. La cosa parece evidente, pero pocos, en ese momento y ahora, han sido lúcidos a este respecto.

Las memorias de Daniel Alarcón, Benigno, no incurren, desde luego, en mayores teorizaciones políticas. Sin embargo, la descripción de los detalles y el retrato del Che visto de cerca son convincentes. En algunas páginas, apasionantes. Guevara queda como un hombre solitario, irascible, protector de sus incondicionales, pero capaz de gran dureza y crueldad. Lo redime hasta cierto punto el hecho de que las terribles exigencias que hace a los demás se las impone también a sí mismo. Al final de la empresa, el personaje es un animal acosado, en medio de la indiferencia de los campesinos de la región, que debieron constituir, de acuerdo con la teoría, su base

de apoyo revolucionario, y que no constituyeron dicha base en ningún momento. En definitiva, el Che actuaba cegado por el voluntarismo y con escasa noción de la realidad. Era un Quijote político enloquecido, destemplado, incapaz de escuchar a los Sancho Panzas que lo rodeaban, pero que, además, para desgracia suya, le tenían demasiado miedo y no le decían las cosas.

Los seis o siete sobrevivientes de la disparatada empresa, Benigno entre ellos, lograron salir por tierra a Chile y obtuvieron ayuda para regresar a Cuba del gobierno chileno de Eduardo Frei Montalva, de la dictadura griega y del gobierno francés del general De Gaulle. El gobierno soviético, en cambio, se negó tercamente a darles una visa y sólo permitió, al fin, un rápido cambio de aviones en el aeropuerto de Moscú. En La Moneda, en las oficinas del Ministerio del Interior, el presidente Frei les preguntó: "¿Cómo se explica que, siendo ustedes comunistas, Grecia, que es un país con un gobierno de derecha, les dé visa de tránsito, y que, sin embargo, sus amigos los rusos les nieguen hasta una visa de tránsito?" Lo único que atinó Benigno a contestar fue que Frei no lo entendía "porque no es comunista", lo cual equivalía, como se ve, a no contestar nada. Salvador Allende, entonces presidente del Senado, acompañó al grupo en su viaje a Tahiti, territorio francés, con escala en la Isla de Pascua. Eran tiempos de grandes entusiasmos y de grandes confusiones. En Atenas, a pesar de la dictadura, miles de simpatizantes del Che fueron a vitorear al grupo. En París fueron invitados a tomar desayuno por el general De Gaulle. En el aeropuerto de Moscú, en cambio, fueron recibidos con la mayor frialdad por funcionarios de la KGB y embarcados en diez minutos en un avión que los esperaba con los motores en marcha. Parece, para hacer una paráfrasis de Jorge Luis Borges, que la historia política de nuestro siglo también fuera, a veces, una rama de la literatura fantástica.

Las conclusiones de Daniel Alarcón Ramírez, Benigno, hoy exiliado en Francia, son lapidarias. "Lo que sí verdaderamente me duele", escribe en la última página de su libro, "es haber sido parte del atropello al que se ha sometido al pueblo cubano, y por eso hoy me siento totalmente arrepentido de haber seguido a un hombre de las ideas de Fidel".

El caso de Jorge Masetti es muy diferente al de Benigno, a pesar de que las conclusiones de ambos, amargas, desencantadas, tienden a confluir. Desde luego, Masetti pertenece a la segunda generación revolucionaria. Es, además, hijo de un intelectual y de un héroe de la revolución, lo cual le hizo convivir desde su infancia con la nomenclatura cubana en sus escalones más altos y recibir la formación del revolucionario perfecto. Su padre fue Ricardo Masetti, fundador de la agencia de noticias cubana, Prensa

Latina, y que después intentó formar un foco guerrillero en la región de Salta, Argentina, lugar donde murió en circunstancias desconocidas en 1964. Jorge está casado, por otra parte, con Ileana de la Guardia, hija de Tony de la Guardia, uno de los principales implicados en el célebre proceso de narcotráfico de 1989 y que culminó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, héroe de la guerra de Angola, y con el del mismo Tony, aparte de la condena a treinta años de cárcel de su hermano gemelo Patricio de la Guardia. Después de aquel simulacro de proceso y del fusilamiento por órdenes directas de Fidel Castro, Jorge e Ileana intentaron durante más de un año salir de Cuba. Al fin fueron autorizados para residir en México, pero con la condición bastante extraña de no salir de ahí. La pareja sostiene ahora que la seguridad mexicana, o por lo menos algunos de sus miembros, los sometían a un seguimiento muy estrecho y les impedían salir de México, en connivencia con la seguridad del Estado de Cuba. Es sorprendente, para decir lo menos, pero cuando conozcamos más a fondo, a lo largo de los años, el accionar de Cuba en el exterior, iremos, sin duda, de sorpresa en sorpresa. Los Masetti consiguieron por fin, con la ayuda de Elizabeth Burgos, obtener una visa española, salir de México y de los tentáculos de la policía política del castrismo e instalarse a vivir en Madrid.

Las memorias de Jorge Masetti (*El furor y el delirio*, 1999) están mejor escritas que las de Benigno. Incluso tienen páginas notablemente concisas y ágiles. No revelan tanto conocimiento de la realidad cubana interna, pero completan el cuadro. Demuestran, desde luego, un fenómeno que nosotros, fuera de Cuba, todavía no terminamos de asimilar. Cuba ha intervenido en la política de toda América Latina, con audacia ilimitada, poniendo a disposición de la causa ‘internacionalista’, como les gusta mucho decir, todo el aparato del Estado isleño. Las dimensiones de la ambición continental de Fidel Castro fueron asombrosas, no menores, dentro de la diferencia del momento histórico, de las que trajeron al Nuevo Mundo los conquistadores del siglo XVI español. No me extrañaría que uno de los grandes momentos de esta intervención castrista en el sur se haya producido en el Chile de Allende. El MIR fue uno de los instrumentos, en forma consciente o inconsciente. Jorge Masetti, nacido en 1955, era demasiado joven en aquellos años y no conoció demasiados detalles. Lo que sí se sabe es que Tony de la Guardia se ocupó del adiestramiento militar del GAP y que se encontraba en La Moneda, al parecer en compañía de su hermano gemelo Patricio, el día 11 de septiembre de 1973. Su técnica de guerrillero y de hombre de los servicios especiales le permitió escapar ileso y salir en pocas horas de Chile.

Las páginas mejores de Jorge Masetti son las que describen la formación de un revolucionario en un lugar misterioso, cercano a La Habana, que se llama Punto Cero. Vemos en acción la exaltación de la fuerza física, de la acrobacia, de la buena puntería, del uso de pistolas, ametralladoras, granadas, 'fierros' de todo orden. Un jefe, para que el joven recluta no se aburra, le lleva tres libros: *Obras militares*, de Lenin; el *Anti-Dürhing*, de Engels, y *Sobre la guerra*, de Clausewitz. ¡Qué programa! No había dónde perderse acerca de la verdadera naturaleza de la revolución, a pesar de que tanta gente se perdía y, en algunos casos, sigue perdida. Como dijo ya en 1970 el agrónomo francés René Dumont, acusado de inmediato de agente de la CIA por este motivo, era una "dictadura militar socializante". Pero, además, a diferencia de otras, era una dictadura con grandes propósitos expansivos y que la llevaron a meterse en el África y en América Central y del Sur.

El testimonio de Masetti es interesante, además, en todo lo que se refiere al esfuerzo de la revolución en decadencia, en los comienzos del llamado 'período especial', para obtener medios de subsistencia mínimos. Los servicios especiales se orientan al narcotráfico, al contrabando de todo orden, al comercio de marfiles en operaciones triangulares con África y Europa, a operaciones financieras capaces de dar un poco de oxígeno a una economía agotada. Cuando la red de narcotráfico y de contrabandos varios está a punto de ser sorprendida por los norteamericanos, Fidel Castro, el Número Uno, hace una de sus jugadas maestras. Mata varios pájaros de un solo tiro. El único héroe militar capaz de hacerle algo de sombra es su amigo Arnaldo Ochoa, quien ha tenido dificultades con Raúl Castro, Ministro de las Fuerzas Armadas, y ha hablado con excesiva libertad de temas tan escabrosos como Gorbachev y como la perestroika en círculos influyentes. Inicia el proceso contra Ochoa, los hermanos De la Guardia y algunos otros, los visita en la cárcel, da la impresión de que está dispuesto a ser clemente a condición de que no hablen demasiado durante el juicio, y al final fusila a los principales acusados entre gallos y medianoche. La lectura de este libro me da la impresión de que todos terminan por entender. Tuve la misma impresión en años recientes, cuando volví a la diplomacia por un breve período y volví a tratar con diplomáticos cubanos. Parece que todos entienden y que todos saben. Pero ya es demasiado tarde. Y el régimen, acorralado, atemorizado, sin márgenes para negociar nada, aplica una mano cada día más dura, en una especie de huida hacia adelante. Todavía falta el episodio final, y podría ser una de las grandes tragedias latinoamericanas. No sabemos si alguien, en algún sector, reflexiona en serio sobre este desenlace que se acerca a pasos agigantados.

Las conclusiones del libro de Masetti no son más luminosas que las de Benigno. “Me percaté entonces, escribe en la página 268, de que, desde el origen, desde 1959, y quizás desde la Sierra Maestra, más que una traición a la revolución, la revolución había sido una gran estafa. Fidel Castro empezó decapitando su propio movimiento para apoderarse del poder, hasta convertirlo en un poder absoluto”. No hay restauración a la vista, en consecuencia, y no hay cambio posible. Fidel Castro sabe que el cambio tendría que comenzar con él mismo, y se empeña con todas las fuerzas que todavía le quedan en detener este proceso, en congelar la historia.

Norberto Fuentes, autor del recién aparecido *Dulces guerreros cubanos* (1999), es una figura muy diferente, a su vez, de las dos anteriores. Desde luego, es un verdadero escritor, en buena medida un escritor profesional. Escribe con decididas pretensiones literarias, cosa que a menudo oscurece su escritura o la vuelve algo lenta y preciosista. Consigue, por otro lado, en sus mejores páginas, efectos notables de ambientación. En este libro uno ‘entra’ en la casa secreta de Fidel Castro, con sus jardines de lujo, con su sistema complicadísimo de seguridad, o en los gestos y los mecanismos mentales del Número Uno. En este aspecto, *Dulces guerreros cubanos* es un testimonio irremplazable. Es el equivalente sin ficción, y en alguna medida superior a la ficción, de *El otoño del patriarca*, de García Márquez. En algunas páginas cuesta creer en lo que dice, pero ya se sabe que la ficción casi siempre queda por debajo de la realidad.

Antes de seguir con el comentario del libro, creo interesante relatar mi primer encuentro con la literatura de Norberto Fuentes y después con él mismo. En el mes de enero de 1968 fui miembro de un jurado que debía decidir sobre el Premio de Casa de las Américas, organismo cultural del régimen cubano, en el género de cuento. Había dos manuscritos que me interesaron. Uno de ellos era un testimonio personal, escrito desde el interior, sobre las UMAP, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, campos de concentración mal disimulados y donde se encerraba a los homosexuales y a otros sujetos considerados por la revolución como “lacras sociales”. Era un conjunto de relatos impresionante, pero carecía de mayor sutileza literaria. El segundo libro era una colección de cuentos, *Condenados de Condado*, obra de un autor entonces muy joven y corresponsal en la lucha contra las guerrillas insurgentes del Escambray, José Norberto Fuentes. Eran cuentos muy bien logrados, que evitaban la visión maniquea, la división en buenos y malos, y que tenían una semejanza buscada con un gran libro de los comienzos de la época soviética, *Caballería roja*, de Isaac Babel. Babel fue liquidado por Stalin con prontitud, pero Fuentes, que comenzaba su carrera como un disidente, logró sobrevivir como escritor en

el interior de Cuba durante alrededor de treinta años. Muchas veces pensé que mi insistencia en darle el premio a los cuentos de Fuentes, a pesar de la obstinada resistencia de los miembros oficialistas del jurado, fue el comienzo de mis problemas con el castrismo. Un par de años después, cuando se produjo la autocrítica pública de Heberto Padilla, José Norberto fue el único de los escritores llamados al estrado y que se negó terminantemente a declararse culpable. Él me había visitado en mi hotel en La Habana, en compañía de Padilla y de un periodista italiano, pocas horas antes de que Padilla fuera encarcelado. Eran signos ominosos, y yo no daba mucho, al salir de La Habana en marzo de 1971, por la carrera e incluso por la seguridad física del joven autor de cuentos. Años después supe que se había integrado al sistema y que se había transformado en un colaborador de los servicios especiales. Me pareció lamentable, pero la verdad es que no me sorprendió demasiado. En Cuba se había convertido en costumbre comprar la libertad por medio de la delación. Fuentes ingresó de inmediato en los círculos más exclusivos del poder, en los de Fidel y Raúl Castro, y trabó estrecha amistad con el general Arnaldo Ochoa y con los gemelos Tony y Patricio de la Guardia. Desempeñó misiones en diversos lados —Angola, los países del Este, México—, y pasó a ser algo así como el cronista oficial de la revolución, un André Malraux cerca de su general De Gaulle, con la salvedad de que Fidel Castro no es Charles de Gaulle, de que él está muy lejos de ser Malraux y de que tampoco la isla de Cuba es Francia. Cometió después la grave imprudencia de advertirles a sus amigos Ochoa y Tony de la Guardia sobre la peligrosa acusación que se preparaba contra ellos. Fuentes fue capturado a fines de 1993, al tratar de escapar en una balsa de Cuba, y llevado a prisión. Poco tiempo después de salir de la cárcel inició una huelga de hambre. Consiguió escapar de la isla en 1994, con ayuda del gobierno mexicano y de Gabriel García Márquez.

Como decía, los malabarismos literarios, la confusión no muy bien resuelta entre los géneros de la novela y de la crónica, perturban en algunos párrafos la lectura de este libro. Norberto Fuentes tiene mucho mayor dominio verbal que en sus primeros cuentos, pero su noción de la estructura del relato me parece menos segura. En cualquier caso, el libro tiene momentos sorprendentes. Fidel Castro, por ejemplo, está retratado con humor agrio y lúcido. Entendemos bien su machismo, su visión de pistolero de las luchas revolucionarias, su primitivismo ideológico y a la vez su enorme astucia y olfato, tanto a nivel interno como internacional. De pronto le pide a García Márquez, su gran amigo, que le diga a Felipe González, cuando era Presidente del gobierno de España, que es “un maricón”. También le pide que le diga a Omar Torrijos, de Panamá, que “es un maricón”. ¿Por

qué? Porque Felipe González había pedido la libertad de unos presos políticos españoles. Porque Torrijos no se atrevía a establecer las relaciones diplomáticas entre Panamá y Cuba. García Márquez me dio una vez un recado de Fidel Castro y me pareció una broma. Fidel Castro me mandaba decir que la independencia de Cuba con respecto a la Unión Soviética sólo se conocería cuando cesara el bloqueo cubano. El bloqueo, como se puede notar, siempre sirvió para justificar todo: para un barrido y un fregado.

Es curioso que yo haya vacilado en 1968 entre premiar los cuentos de *Condenados de Condado* y una colección de relatos de una víctima de las UMAP. En *Dulces guerreros cubanos*, Norberto Fuentes nos habla de las atroces torturas y de los asesinatos que se cometían en las UMAP, en los primeros años de la revolución, con unos pobres jóvenes homosexuales. Llega en esos días de visita Graham Greene, el novelista inglés, y le habla del asunto a Fidel Castro. Fidel invita a su amigo 'Graham' a visitar dos de esos campos. Poco antes ordena que los limpien, que los desmantelen, que devuelvan los perros a los criaderos del Ministerio del Interior. "De todas maneras", declara, en presencia del bien impresionado 'Graham', "me cierran esto y mandan a estos niños para sus casas. Se acabaron las UMAP". Así se procede en las dictaduras de verdad, en las duras: se cierran prisiones por un lado, para impresionar a la opinión internacional, y se abren por otro.

Lo que se desprende de este libro, más allá de los detalles y las atmósferas, es la crueldad absoluta de un sistema en el que siempre el fin, la revolución, el poder revolucionario, ha justificado todos los medios. Parecía, en los tiempos mejores de la alianza con el bloque soviético, que la Unión Soviética tenía que preocuparse de la economía, de la logística, por así decirlo, y de que el poder cubano tenía que actuar como vanguardia revolucionaria en todos los lugares donde fuera necesario. Era una situación delirante y que no podía dejar de provocar el deterioro y el derrumbe del bloque. Lo extraordinario es que la isla y Fidel hayan conseguido resistir, aun cuando no sabemos por cuánto tiempo.

En todo caso, a diferencia de lo que sostuvo en su célebre alegato después del asalto histórico al Cuartel Moncada, ahora comenzamos a vislumbrar que la historia no absolverá a Fidel Castro, que no podrá absolverlo. En el mundo de la pobreza y de la injusticia de América Latina, sobre todo en los años cincuenta, la revolución tenía un sentido. Era quizás inevitable, además, que estallara por algún lado. El episodio de Sandino en la Nicaragua de los años treinta y los de Guatemala a comienzos de los cincuenta fueron precursores. A mí me tocó ver la Revolución cubana por dentro en un momento negro, después del fracaso de la zafra de los 10

millones de toneladas de azúcar a fines de 1970, pero entonces no creí que estuviera irremisiblemente condenada. Me pareció que su influencia en el Chile de Allende era desastrosa, destructiva, pero no llegué a pensar que el fenómeno en sí mismo fuera puramente negativo. Ahora entendemos, en cambio, a través de testimonios concordantes y contundentes, que la revolución partió mal desde sus comienzos, con arrogancia, con locura, con enorme fragilidad intelectual, con ambiciones desproporcionadas y con franco desprecio de los hechos. "Seremos malos para producir, pero para pelear sí que somos buenos", me dijo Fidel Castro en mi primera noche en La Habana como representante chileno, en los primeros días de diciembre de 1970. Lo decía como una gracia, casi con coquetería, pero la verdad, la inapelable verdad, es que era una tontería perfecta. Un gobernante, revolucionario o no, debe conseguir que su país produzca y que se vea envuelto en peleas y guerras lo menos posible. Los tres libros que he comentado coinciden, sin habérselo propuesto, en un punto: el mejor revolucionario, según los cánones castristas, es el que maneja mejor los 'fierros', el de mejor puntería, el que más se parece a James Bond o al viejo John Wayne. Pues bien, esto no es política marxista ni revolucionaria en ninguna tierra: es política de poder puro para el Número Uno y de suicidio para los demás. Estar cerca del poder en Cuba, como se desprende de todos estos testimonios, ha sido desde los primeros momentos, desde hace ya cuarenta años, un peligro mortal. Cuba, para su desgracia, ha sido el país de los fusilados, de los exiliados de mala manera, de los suicidas 'suicidados'. La lista, a estas alturas, es impresionante, aterradora. Graham Greene, "Graham", como le decía Fidel, fue un perfecto ingenuo, y todos nosotros fuimos demasiado 'Grahams' en alguna etapa. Algunos todavía parecen serlo, pero cuesta demasiado creer hoy día en su buena fe. □

DELITOS Y SUEÑOS DE REINALDO ARENAS*

Nieves Olcoz

Reinaldo Arenas constituye un caso estigmático de escritura, una subjetividad de modos heterogéneos de difícil sobrevivencia en la evolución de los términos significantes de la década del sesenta, que fueron su primera escena de escritura. Su obra fue un intento de autopoética, en términos equivalentes a la ausencia de padre y la negación genealógica, acogido al barroco cubano como mejor teatro del lenguaje. *El mundo alucinante* (1967) es el más intenso y representativo de sus sueños libertarios como sueño de otros, donde el autor despliega un archivo textual de los orígenes del discurso que es su oferta simbólica de nuevas políticas de la lengua para el universo colectivo. Un estado de memoria de interesada oportunidad para la lectura de nuestro fin de siglo.

NIEVES OLCOZ. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid y Ph. D. por Yale University, con especialidad en literatura latinoamericana y teatro. Visiting Scholar en la Universidad de Harvard (1995-1996), ha desempeñado tareas docentes y de investigación en diversas universidades de Europa y América del Norte. Ha publicado artículos (1994-1999) en numerosas revistas especializadas y es autora de *El texto narcisista: Mito e historia en el teatro latinoamericano del siglo XX* (Editorial Complutense) y "El cuerpo del dolor: teatro de mujer y fin de siglo en América Latina" (Yale University) actualmente en prensa.

* Reinaldo Arenas. Destacado escritor cubano, autor de *Celestino antes del alba, El mundo alucinante, Otra vez el mar*, entre otros libros. Nació en 1943. Disidente del régimen castrista, fue condenado a prisión en 1973. Logró salir de Cuba en 1980 y se radicó en Estados Unidos, país donde falleció en 1990. (N. del E.)

Estudios Públicos, 76 (primavera 1999).

En busca de un sueño,
se salta al vacío.
(Silvio Rodríguez, *Descartes*)

Aunque lo reconozcamos como lugar común del arte, es el primer hecho de autor en Reinaldo Arenas decir que su relación con la escritura fue la de una fascinante ensoñación. Arenas pagó con una atormentada biografía y una turbulenta escritura su vicio de soñar. De soñar solo, mucho, libremente. Abandonado por el padre, Arenas será un hijo maldito. De otro género. Huérfano real de la revolución. Hijo maldito del *boom.* Siempre otra dificultad más para el sentimiento del lugar, como nota del árbol de la vida. Su lugar propio, sus ganas de ser otros —desde su vida sexual al infinito de la escritura— convirtió su existencia en un teatro de obstáculos vencido a páginas escritas en una isla sin papel. Su insularismo —huella de carácter heredada de otros exilios internos como el de Lezama— invistió el barroco cubano de una diferencia entusiasmada, con la defensa más histriónica, más apasionada posible, del imaginario. Dispuesto a pagar la escritura con la vida, su dificultad de escribir dio un archivo delirante de arte escrito (once novelas, con ensayo, poesía y teatro) sin ubicuidad posible, en permanente fuga libertaria o palabra contra el padre. Arenas cultivó todo género de escritura, pero dejó sobre todo una tremenda narrativa infatigable. *Celestino antes del alba* o *Cantando en el pozo* (1964/1967), primera novela, la más pegada a la intimidad de la infancia (mundo parcialmente recreado en *El mundo alucinante*, regresado en las memorias, huido a la poesía también), crea la matriz de imagen y estructura que gobernará el resto de su producción. La infancia es ese absoluto miserable pero libre que llena con su esplendor radical los cuentos de Arenas. Celestino escribiendo en los árboles su eterno poema perseguido por el hacha del abuelo es Arenas soñando su alto combate de escritura y persistente represión. El artista nace criado por la realidad como un escándalo incesante de mujeres solas. Allí empiezan el horror y las apariciones o el fantasma estremecedor de la autoridad. También la literatura como desagravio, el hábito del niño que inventa al padre en el árbol. Al "andarse por las ramas" en el gusto de Elena Garro, el personaje de Arenas descubre el arte como armonía superior, ritmo callado de la sensibilidad entre el dolor y sobre la insignificancia. La historia del artista adolescente, Léolo sureño, continúa en la denominada pentagonía de su novelística (Arturo, Fortunato y más soldados de plomo; Ette, 1992, p. 111). Inmune a la fatiga, el cuerpo se sostiene por la emoción renovada de conocer al otro. Celestino y Arturo de estrella más

brillante, Arenas visita sus interpósitos desde la cálida privacidad o primera crueldad del sueño materno que es su ópera prima, siguiendo un itinerario escalado por la historia nacional de la adolescencia y madurez del reciente mapa cubano, deportado en el Mariel y abjurando de la Florida caribeña. Arenas repelió el simulacro de autoridad con todo el peso infernal de su arte o su vida y desarrolló un furor creativo de volúmenes y magnitudes a la altura del cerco de dolor y envilecimiento que hostigó su biografía. Su individualismo trágico, como un romanticismo estético, constituyó un contradiscurso patrio de un dolor poderoso y valiente de soledades inextinguibles y solidaridades artísticas asombrosas en el tiempo y el espacio. Reescribió la época clásica de todos los mundos (Orientes y Occidentes), revisitó el siglo XIX enamorado de la madre, la economía doméstica, la nación negra, mujer, esclava, cocina de la patria, contando el romance más cautivo de Cecilia Valdés en *La loma del ángel* (1987). Entró con las prisas en la neovanguardia del siglo XXI, con los carteles políticos de *Otra vez el mar* (1969/1982)[1] la literatura visual de *El palacio de las blanquísimas mofetas* (1969/1980) y la pintura, que postmodernamente está pasando, en *Voluntad de vivir manifestándose*[2] (1989), el poemario del pequeño formato. En *El color del verano* (1990/1999) se alía con voces amigas y enemigas, de José Martí a Avellaneda pasando por todo el glosario literario capaz de afectar la contemporaneidad, para levantar la arquitectura más condensada y desgarrada del drama nacional de la isla, una opereta de difícil teatralidad (huir con todos) que deja varada la isla en el marasmo de su falta de consenso o relato compartido.

Reinaldo Arenas constituye un valioso, incierto capital simbólico para el fin de siglo. Quien puso en su momento fin al sueño total del deseo en los setenta, luce en los últimos minutos de nuestro tiempo histórico con vital mortalidad o su saber malquerido de que el deseo era otro. Su fiebre de heteronomía —más infiel, menos pensada que la de Pessoa— llevó su escritura a un sueño de metamorfosis, a un arte de figuración que será poetizado y traicionado a su vez por Sarduy. Severo dejará un último texto *Pájaros de la playa* (1994) de un Arenas revertido a la pesadilla del cuerpo y al dolor del cuerpo como última esperanza creativa. Ambos morirán en el duelo del SIDA, con pocos años de diferencia. Severo muere en París en el

[1] La aventura política de los textos de Arenas con la censura nos obliga, por un criterio de fidelidad a la creación, a dar la fecha de redacción y la de triunfal publicación para las obras anteriores al exilio cubano. Recuérdese el Arenas que reescribe un manuscrito abrumador como *Otra vez el mar*, incautado tres veces y tres veces regenerado con un empecinamiento comparable al de Borges *versus* la ceguera.

[2] En su vocación por la imagen, Arenas realizó una versión cinematográfica de *Paradiso* de Lezama Lima para Peter Lilienthal (Ette, 1992, p. 70).

93, Arenas había optado por el suicidio en Nueva York la primavera del 90, luchando hasta última línea por la integridad moral de la escritura o el sueño del cuerpo, testimoniado en sus memorias de *Antes que anochezca* (1996). Atrapado en el mal perfecto de una enfermedad incurable y estigma social, el suicidio fue una penúltima fidelidad al cuerpo libre y su tentación más serena. *El color del verano, Antes que anochezca* y la versión final del poemario *Leprosorio* se trabajan conjuntamente como corpus de escritura terminal entre los años 1987 y 1990 y definen una escritura del umbral, un marco de ficción negativo de revelación ante la muerte, en el tono de los sueños de Boecio, Petrarca, Bernat Mege, en la treta del débil de *Artemio Cruz* o *El coronel no tiene quien le escriba*. Con la autoridad que junta al ángel y el demonio, logro artístico de la escritura de Arenas, el autor se despide del patriarca con un coraje perturbador, dispuesto a crecer sobre su propia carne.

Sobre la polémica estela que deja la obra de Reinaldo Arenas queda la bendición del imaginario, una colorida tentación del cuerpo que despierta la materia para empaparla de nostalgia, ácidas esperanzas de los amantes, hombre y tierra de celos, agravios familiares, risa, llanto, traición, mucha traición, celebración de la masacre, el escándalo de la ternura, la soledad por heridas, infierno, mucho infierno. Pero todo ello constituyó una empresa literaria coherente, una gran novela-río del destino individual y social, de enorme esfuerzo técnico sobre la visceralidad y avalado por un saber profundo del texto de cultura. Como muestra de esta operación de escritura, elegiremos la entrada en materia de la más universal de las narrativas de Reinaldo Arenas, *El mundo alucinante* (1967), puesta en escena del sueño panamericano del autor, donde Arenas fue cronista. La historia del relato americano como reo de causas, engendro cautivo tergiversado y todavía no escrito, fábula de identidad que es cuerpo de escritura, sueño de prohibición.

Los padres

"¿Puede un nuevo mito hacer inteligible el Nuevo Mundo?" Con esta pregunta inicia Roberto González Echevarría, en *Myth and Archive* (1990, p. 6), sus reflexiones sobre la dependencia entre literatura e historia latinoamericanas. Con ella se podría enunciar también una de las grandes formaciones discursivas que vinculó a la narrativa latinoamericana durante la década de los sesenta y que supuso una de las máximas internalizaciones de la literatura latinoamericana y uno de sus más férreos destinos patrios. Carlos Fuentes ha descrito en *La nueva novela hispanoamericana* (1980) la

posición desde la que estos narradores pudieron dar salida a una nueva conceptualización de lo americano:

> Todos ellos regresaron a las raíces poéticas de la literatura y a través del lenguaje y la estructura, y ya no merced a la intriga y la psicología, crearon una convención representativa de la realidad que pretende ser totalizante en cuanto inventa una segunda realidad, una realidad paralela, finalmente un espacio para 'lo real', a través de un mito en el que se puede reconocer tanto la mitad oculta, pero no por ello menos verdadera de la vida, como el significado y la unidad del tiempo disperso. (p. 19)

Fuentes parece estar haciéndose eco de la euforia estructuralista que aportó al discurso de nuestra época la sensación de haber encontrado un lenguaje *total* capaz de integrar todo lo existente y explicarlo. Las grandes novelas emblemáticas de esta década en Hispanoamérica participan del carácter devorador de lo totalizante como modo de representación. Se ofrecen como un comentario global de sujeto y mundo que reinventa el universo semántico. La causa literaria de *Los pasos perdidos* a *Cien años de soledad* es la de la autoconfrontación, la búsqueda del origen a través de las propias versiones culturales y la reescritura de sus mitos, donde la ficción latinoamericana —a propuesta de González Echevarría— se hace eco de la imaginación estructural antropológica. Es el momento del discurso letrado sobre el discurso de la ley. El país imaginario reinventa la nación, la utopía social, lo que no fabula el estado. Podríamos decir, con el trasfondo teórico de Clifford Geertz (1988), que lo que aproxima a la antropología y a la literatura como escritura es la sugerencia en ambas de que las prácticas del discurso constituyen la posibilidad de pensar cierto tipo de verdad. La novela contemporánea latinoamericana se vale del discurso antropológico para inventar y legitimar una identidad, de un discurso literario etnográfico concebido como acto de imaginación desde la crisis de la ideología del discurso referencial y de su presuposición de un significado para la representación.

Esta crisis de escritura procede en la ausencia del padre, en la modernidad irredenta de las culturas latinoamericanas como nutriente de otra ficción retrospectiva. Reinaldo Arenas entra en este relato nacional alternativo que fue el *boom* del Caribe, desde la herencia patricia de Virgilio Piñera y José Lezama Lima, maestros tutelares desde la isla del espacio público que avalaron nombres como Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Donoso, Augusto Roa Bastos, Julio Cortázar entre las figuras de

mayor exposición editorial. Piñera y Lezama engendran una estirpe oscura de esta edad de oro de las letras americanas (la última quizás en la que puedan pensarse en un esfuerzo conjunto), padres imposibles, autores-ombligo, de una perturbada noción de la palabra, en texto que, como los borgeanos, nacen antiguos. Mucha de esta narrativa de la década del sueño cubano (del capítulo VI de *Paradiso* a *Artemio Cruz* o la gran novela del dictador) se construye sobre el debate del padre o el efecto de lo real. De aquella empresa narrativa caen epígonos o jóvenes autores —Arenas, Sarduy— que toman la fábula de la representación como motivo autobiográfico. Severo huye hacia delante con sus ensayos de simulación, Arenas hacia atrás hasta los primeros derechos del sueño. Hijo de la medianoche de la revolución cubana, la biografía del autor es la del sueño colectivo del sesenta. Nonato, va a llegar al mundo como el sueño del padre. Sobre el volumen ingente de su producción, podríamos decir no obstante que Arenas escribió repetidamente el mismo argumento: la novela de formación como seña de identidad, el rito del nacimiento fuga y muerte del artista, de la ansiedad de su genealogía y de su trascendencia remota. La trama del padre es una de sueño y delito en el árbol de la vida. Desde Celestino, poeta en la corteza de los árboles, a Servando, voz mayor frente al estado, la escritura es un delito que mata al padre. *El mundo alucinante* define el canon de Arenas, obra total del cuerpo en movimiento. La novela de Arenas puede leerse como hagiografía desaforada de la diferencia del sujeto. El sujeto diferente o desmesurado, asfixiado en las condiciones menores de la isla. De esta reducción de lo inteligente a la indiferencia, nace el relato redentor barroco: el santo imaginario o cuerpo sagrado de última trascendencia en Arenas. En este texto del primer escritor está todo el universo desarrollado en una larga obra: la infancia que es contenido de materiales de memoria, proporcionando el estilo hagiográfico; la novela del dictador trayendo la voz histórica, el delito y la prisión como marcos de la escritura; la biblioteca, repertorio de exilio para la reescritura del archivo; la venganza política o la redención literaria, la esperanza del cuerpo trascendente o la muerte biográfica.

La genealogía nunca basta en este proyecto de escritura. Los padres siempre son pocos. Se necesitan todos los textos para llegar a mi texto. Arenas, becario del partido, se lee toda la Biblioteca Nacional de La Habana o el tesoro humanístico de María Teresa Freyre de Andrade (1963-1966). Descubre un insólito alter ego en el indómito Fray Servando Teresa de Mier que hizo temblar a los señores de la Colonia y escapó al imperio del saber de su tiempo. Reo, prófugo y potestad, inventó el paraíso. El

ejercicio literario de Arenas llegará hasta el primer dios del lugar, hasta el último trauma de una escritura, a todos los sueños perdidos, al primer deseo del imaginario.

El carácter fundacional que narradores y cronistas de Indias pueden tener como investigación primera de un auténtico *modelo del origen*, la identificación con sus prácticas textuales y modelos de discurso como forma de identidad, es el ejercicio más hondo que constituye *El mundo alucinante* (1969), y uno de sus intereses textuales más ignorados por el análisis crítico en torno a la obra de Reinaldo Arenas[3]. La novela de Arenas toma cuerpo como gran ficción archival que actualiza toda una serie de mediaciones discursivas capaces de descentrar lo reconocido de una convencional visión del mundo hacia una identidad más auténtica. La identidad es una cuestión de género, de *representación*. A través de su archivo *El mundo alucinante* rastrea el lenguaje de la alteridad, las razones del nombre y de la voz, los fundamentos antropológicos de la "escena de escritura" (Geertz, 1988, p. 12) donde empieza a articularse el discurso americano. La estrategia retórica que permite este rito de pasaje por la textualidad del archivo es lo que se daría en llamar, con préstamo de Lezama (1969), la indagación de la *era imaginaria*. El conjunto que se quiere denominar con este término daría unidad a las palabras que Fuentes quiso poner en juego: estructura, realidad paralela, mito y tiempo disperso. La era imaginaria es para *El mundo alucinante* la estructura entreverada en la que se plantean lo que Foucault llamó "las cuestiones sobre el ser humano, la conciencia, el origen y el sujeto" (1970, p. 27). González Echevarría ha definido esta noción lezamiana conectada a la novela de Arenas como "un universo histórico hecho de una causalidad metafórica" (1983, p. 256), que otorgará al relato antiheroico de Servando la legitimidad de una nueva fabulación híbrida, inconclusa, sin homólogo político. La escritura aventura un cuerpo para la visibilidad, para la extensión metafórica que dé oportunidad a la lógica poética de lo disperso, al poder de la autonomía literaria. *El mundo alucinante* es la renovación textual del acontecimiento americano: el momento del conocimiento y la independencia, la oportunidad del ser imagi-

[3] La intertextualidad historiografía/novela en *El mundo alucinante* (todo el conjunto de citas literales de las *Memorias* y *Apología* de Fray Servando, sus estudiosos y biógrafos) ha sido estudiada por Rozencbaig (1986); de la misma autora junto a Hernández Miyares (1990). Véase también para un enfoque postmoderno de la red de textualidad de *El mundo alucinante*, Béjar (1987). Juan José Barrientos (1987) estudia la obra de Arenas dentro del género de la novela histórica hispanoamericana contemporánea y especialmente frente a Carpentier. Para el carácter conceptual del imaginario de Arenas, Aída M. Beaupied (1984). Uno de los estudios documentales más completos sobre el autor, bajo la edición de Ottmar Ette (1992).

nario e histórico, para entender el verdadero mecanismo de las visiones limítrofes que posibilitan la tecnología de la representación de una cultura.

En el teatro del lenguaje de la Colonia, donde *El mundo alucinante* acude a representarse, las resonancias entran en un juego vertiginoso de implicaciones. Rescatar esa primera escena de escritura supone aventurarse a los vericuetos del archivo: se trata a su vez de abrir las páginas de la tardía Edad Media y su recurrencia barroca que crearon y prolongaron la visión alternativa, la imagen del mundo americano. *El mundo alucinante* busca en la cárcel de sentido de la voz mediada del cronista, escribidor de pago, escritura mercenaria que traiciona la ley con la tentación lírica, cuerpo contaminado por otra realidad física que no le pertenece. Pero el paradigma antropológico opera además sobre las páginas tapadas de otros textos de cultura como el imaginario indígena de la poética del códice, el documento del discurso, el 'monumento' (diría Foucault) de su historia. La misión del archivo es la descripción intrínseca de esos documentos fundacionales (y sus proyecciones cervantinas, gracianescas), textualizarlos para experimentar sus mecanismos de síntesis del sujeto, para arrancar el secreto de esa imagen confusa, apresurada y estigmática, irreconciliable con lo que somos. Dicho desde *La arqueología del saber:*

> El análisis del archivo comporta, pues, una región privilegiada: a la vez próxima a nosotros, pero diferente de nuestra actualidad, es la orla del tiempo que rodea nuestro presente, que se cierne sobre él y que lo indica en su alteridad; es lo que, fuera de nosotros, nos delimita. (1970, p. 222)

El archivo devuelve el proyecto imaginario que es lo que somos. Es la recursividad que entra en juego con estos primeros narradores de lo americano la que puede construir una ficción moderna como *El mundo alucinante*, la que puede cuestionar el discurso hegemónico, reconciliar la tradición, dar espacio a la representación que se representa: "¿Hasta cuándo vamos a permanecer en perpetuo descubrimiento por ojos desconocidos?" (EMA, p. 117). La ambición de *El mundo alucinante* no es otra que la de investigar el imaginario del 'tiempo disperso', melancolía de Fuentes, para poder reescribirlo. Y entonces, Fray Servando —nuevo emblema de la conciencia mítica que se busca a sí misma— podrá calmar su desasosiego, una exigencia de presente, una *mínima moralia* en queja de Adorno:

> ¿Esto es el fin? ¿Esta hipocresía constante, este constante repetir que estamos en el paraíso y de que todo es perfecto? Y, ¿realmente estamos en el paraíso?, ¿y realmente… existe tal paraíso? Y si no existe, ¿por qué tratar de inventarlo? ¿Para qué engañarnos? ¿*Acaso*

> *hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido? ¿Acaso ya hemos visto el consuelo y el descanso? ¿Acaso ya no hay más que desear?* (EMA, p. 232)

Fray Servando, por su mítica condición rebelde, por su disidencia imperecedera, es la figura elegida para atravesar ese mundo-laberinto, ese espacio-tiempo de dispersión de múltiples medios, donde el hecho americano como *pre*texto de sueño colectivo se ha ido realizando, y acabado como ausencia[4]. Al final de su particular odisea, como el héroe de la novela de la prueba descrito por Bajtín (1989, p. 258), la aventura no habrá modificado a Servando, lo habrá verificado en su constancia libertaria: libertad como discurso anárquico contra el poder y sus símbolos institucionales (EMA, pp. 48, 63); libertad como proyecto político de cuerpo mixto, criollo (pp. 109, 153, 177); en el reto de sí mismo, del deseo como necesidad simbólica: "como te has de ver toda la vida: siempre en busca de lo que huyes. Pues bien sé yo que tú deseas lo que rechazas" (p. 28). Lo inconfesado en el archivo es la necesidad del Otro para definirnos, que requiere a su vez una revisión y cuestionamiento de la alteridad que va a darnos un nombre. Se trata de colaborar en una tremenda mutación epistemológica de la historia que Foucault consigna como un vencer "el miedo de pensar el Otro en el tiempo de nuestro propio pensamiento" (1970, p. 20), tantas veces dramatizado en la novela de Arenas: "Pero en cuanto eché a correr lo primero que hice fue chocar contra el espejo que me devolvió mi imagen rota" (EMA, p. 112). Es por ello que ese tiempo y espacio de dispersión que marcará la peregrinación de Servando es acontecimiento, verticalidad convergente, actualidad y no memoria: "Y ya iba a desprenderme hacia otros sitios remotos, a habitar un tiempo donde no existía la memoria, sólo un presente desdoblado. El principio. La revelación" (EMA, p. 241). Pues esa inagotable materialización palimpséstica que es *El mundo alucinante* tiene como función, en palabras de Foucault, descubrir "los límites de un proceso, el punto de inflexión de una curva, la inversión de un movimiento regulador, los límites de una oscilación, el umbral de un funcionamiento, el instante de dislocación de una causalidad circular" (p. 14). De ahí que *El mundo alucinante*, como *Cien años de soledad*, sea un libro con creación y apocalipsis, cuya primera palabra de comienzo ideal la da el archivo. La contestación de Arenas es una investigación artística e histórica al aparato político de los discursos.

[4] La "tradición de ausencias posibles" cuya vinculación a Fray Servando en *La expresión americana* de Lezama Lima (1969, p. 166) dio a Arenas el pie para su libro.

Los sueños

Viene usted de un lugar
que pronto existirá.
El mundo alucinante.

Todo archivo necesita un texto fundacional, un origen contenido que signe su sentido epistemológico. Para el mundo alucinante de Arenas, como para el pensamiento occidental, este texto es la *Odisea*. La era imaginaria de Fray Servando toma la palabra desde un desafío lúdico al consagrado texto de cultura. Las posibilidades de una contestación paródica a las viejas categorías de pensamiento están en la mediación de los *Diarios* de Colón. En su regreso hacia la mirada de Occidente, Fray Servando sigue la ruta del almirante en el retorno del primer viaje y revive el paso de esa gran frontera para una nueva *episteme* que es la proximidad del Mar de los Sargazos:

> El día passado, cuando el Almirante iva al río del Oro, dixo que vido tres serenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara; dixo que otras vezes vido algunas en Guinea en la Costa Manegueta. (*Diarios*, pp. 111-112)

La importancia del momento puede estar, como Levi-Strauss señala, en confirmar a Adán y Ulises, en verificar "la última barrera mística" por la cual se sella el límite del Paraíso Terrenal y el Nuevo Mundo queda "al margen de las agitaciones de la historia" (1992, p. 76). Pero parece que *El mundo alucinante* entiende en los cómicos ribetes del episodio del almirante un diálogo más polémico con la versión homérica del viaje del saber. Los *Diarios* se convierten en un mediador en el debate entre historia y mito que comunica las formas del Viejo Mundo con el nuevo modo de América. Son el testimonio de una locura patriarcal, el cuaderno delirante del primer imaginario perseguido en América.

Fray Servando (capítulo 9, versión tercera) se insinúa además como un travestismo de Ulises. En la Rapsodia XII de la *Odisea*, Ulises, por consejo de Circe, se hace atar al mástil de su embarcación mientras sus compañeros se taponan los oídos con cera para no escuchar el canto de las sirenas. En el canto total de las sirenas, en el poema absoluto cuya llamada no se puede resistir, hay la intuición de una presencia mortal. La metáfora de Ulises atado al mástil se forja en profecía de Occidente: la inviolabilidad del secreto del conocimiento. Aquel que escuche el canto de la criatura

mítica perecerá pues llega a conocer *la otra voz*, el contracanto que enajena al yo. La misión de Ulises es defender con la previsión de la historia la fatalidad del mito. Fray Servando convierte la prudencia y astucia del héroe griego en entrega placentera ("Pero no te tapaste los oídos", EMA, p. 54). No hay identidad perdida ni irrecuperable que salvaguardar, porque en el código del mundo alucinante la historia es la verdadera traición y su reserva una trampa de oscuras jerarquías. El mito, sin embargo, promete un lenguaje emblemático, "representación que se representa" por fin (Fuentes, 1980, pp. 56, 85), irreconciliable con la realidad como convención, pero camino hacia lo real en sí que pasa por el encuentro ineludible de la otredad. Fray Servando participa en la secuencia de una voracidad de imágenes que alegorizan el éxtasis de la unión, del encuentro definitivo magnificado en la cópula de tritones, serpientes devoradoras y otras legendarias "criaturas de misterio":

> Y desde allí viste de nuevo el juego de luces de las que volvían a ser para ti criaturas de misterio. Criaturas de un solo ojo en medio de la cabeza.
> […]
> Criaturas en celo, que corren voluptuosas entre gritos y resuellos que se apagan ante burbujas hasta descender al fondo donde concluye la unión. Y fue la batalla vulgar de la vida. (EMA, pp. 59, 60)

Todo el pasaje es de una entonación hiperbólica que recrea la fiesta del reconocimiento desde la atracción sensual, profundamente misteriosa del Otro. El cuadro se cierra con el triunfo apoteósico de la serpiente, la gran figura mitológica de la transgresión, que hunde el arca de la supervivencia e inaugura una era sin paraísos no deseados. La escena se repite en *Paradiso* con el rito de iniciación del artista, fiesta marina de íntima tragedia, secreto anticipado del cuerpo para Fronesis y José Cemí. Fray Servando queda como náufrago fatigado de ese espectáculo del furor de los tiempos; suerte de antihéroe preferible en el rito de pasaje que contiene la culpa y la justicia poética, la elegía del universo textual que exige cada nueva visión del mundo y su intento de verbo. En este proceso de la expresión americana, en palabras de Lezama:

> Todo tendrá que ser reconstruido, invencionado de nuevo, y los viejos mitos, al reaparecer de nuevo, nos ofrecen sus conjuros y sus enigmas con un rostro desconocido. La ficción de los mitos son nuevos mitos, con nuevos cansancios y terrores. (1969, p. 20)

Cansancios que acusan las imágenes de Arenas como eco de las tensiones de una página de Piere d'Ailly o los esfuerzos de un Pedro Mártir

de Angleria por traducir tapires, manatíes y tiburones a bestias monstruosas de rango mítico. El pasado cuenta las estrecheces del presente y el libro se arma para el alto combate de las épicas. Las páginas del archivo inspiran y velan las lógicas modernas.

La experiencia homérica de Servando tiene finalmente trazos de un acto consciente y caracterizado de desmitificación, donde quedan implicados los grandes mitos del pensamiento épico clásico y del judeo-cristiano (adanismo), cuna de la conciencia de Occidente. Mircea Eliade explica en su obra *Mito y realidad* la necesidad de este proceso en la mitología griega para superar y a un tiempo preservar la visión mítica hacia el descubrimiento de la historia "para acceder a la fuente primera de donde brotó lo real, para identificar la matriz del Ser" (1983, p. 119). En virtud de ese prestigio de los orígenes, del principio, de la *arché*, esa descategorización del mito representa lo esencial en una situación primordial, pre-histórica y reencuentra la cosmogonía como problema ontológico. El pensamiento se esfuerza por identificar y comprender el comienzo absoluto.

El capítulo 9 de *El mundo alucinante* entra entonces en la trascendencia del discurso antropológico, aquel que tiene por objeto el lenguaje y el mito. González Echevarría (1990, p. 13) ha señalado la importancia de esta mediación en la novela latinoamericana moderna, síntesis del lenguaje del origen (mito) y la historia entendida como 'historia del Otro'. La antropología permite a la autoridad discursiva traducir a su propio lenguaje la cultura ajena y por la conciencia del Otro llegar a la pretensión del origen del ser, del autoconocimiento. El mundo post-colonial proporcionó el modelo para el comienzo, y *El mundo alucinante* de Arenas utiliza ese momento de reducción como materia prima de su asunto. La novela participa, en una primera serie de su archivo, en el sentido que González Echevarría quiere de identidad cultural: "La novela moderna latinoamericana transforma la historia latinoamericana en un mito oroginario para verse a sí misma como otra" (p. 15). De esta primera instancia de la escritura americana, que podríamos cifrar en los nombres de Colón y Pané, *El mundo alucinante* como ficción archival ha extraído la averiguación más arriesgada del lenguaje: el que reorganiza el sentido del tiempo y modifica los rasgos de representación del sujeto para sostenerlo en conflicto permanente con el relato. Se ha puesto en práctica la primera ansiedad del drama retórico del cronista: el mito como legitimación, como apertura para expandirse, abismarse en un "más allá" de las expectativas del paradigma historiográfico, que no conoce el lenguaje. En otras palabras, el mito como única rúbrica de lo real: el compromiso semántico del cuerpo con los poderes de la fábula, su muestra histórica como episodio menor, resistente, irresoluble. La rela-

ción con Pané no lo es por cita más directa como en Colón, pero subyace en la práctica textual del tratamiento de lo mítico (el cuerpo como relato que desorganiza y desentraña el espacio en estructuras visibles que obligan a contar), un proceso fundamental de la novela. Pané escribidor subyugado por la hiriente fascinación de lo real, y como Arenas y su saga de heteróclitos (Celestino, Arturo…) con urgencia literal de papel, forzado a callar el manuscrito, apretarlo, reescribirlo, saberlo mentido y negado por los órdenes oficiales del discurso. En Pané la escritura en tanto que forma de pensamiento y homología recuerda la identidad desde el *análogo metafórico* lezamiano que progresivamente va a perfilarse como la búsqueda de *El mundo alucinante*. Porque ésta es la gran promesa de las afinidades del archivo: la unicidad metafórica que permita a un orden simbólico confrontar el espejo por el que penetrar su coherencia interna y hallar una réplica de sí misma. Lo que es sugerencia y motivo en Pané se desarrollará en el Caribe en el gran aparato estético de Lezama, y en las leyes de este ritual formalista del ser, metamorfosis inaprensible de lo mismo, busca gobernarse el mundo insólitamente plural de Arenas.

Las primeras narraciones de lo americano ensayan marcos de referencia capaces de aprehender la imagen del mundo, de ser fieles a la infidelidad del imaginario, al viaje y a la búsqueda. Es el testimonio de los traidores a la isla. Su profundidad es necesariamente enorme. *El mundo alucinante* aporta a la construcción palimpséstica que la literatura latinoamericana desarrolla desde sí misma y para sí misma, la averiguación exhaustiva de ese Otro, el espejo de autores y autoridad, el pozo de la imagen de un continente como sueño de totalidad y deseo. Y lo hace mediante la transcripción y reescritura a su vez de ciertas series del archivo, convocadas desde los primeros esfuerzos retóricos de la expresión americana, de las que *El mundo alucinante* aprende las estrategias del comienzo. De esta forma se sabrá qué y quién decide lo que es la identidad; habrá una realidad que sea proceso de su lenguaje. Quizás, paradójicamente, la voz de este corpus será otro mito en la serie de series de la ‘verdadera’ historia de lo americano como reescrito radical de alteridades. Foucault enfatiza así en *La arqueología del saber* esta función regresiva del archivo:

> Establece que somos diferencia, que nuestra razón es la diferencia de los discursos, nuestra historia la diferencia de los tiempos, nuestro yo la diferencia de las máscaras. Que la diferencia, lejos de ser origen olvidado y recubierto, es esa dispersión que somos y que hacemos. (1970, p. 223)

El archivo de *El mundo alucinante* busca su relato de máscara, de diferencia en la cronología caótica de un universo semántico propio. Las

peripecias de Fray Servando se localizan a finales del Siglo de las Luces y primeros años del XIX. La novela recrea, sin embargo, una Europa gótica, un universo social de exasperación barroca que hay que entender en el aprendizaje de Servando por la incidencia de su elección: son umbrales epistemológicos del archivo de *El mundo alucinante*, filiaciones marginales o bastardías compartidas. Atravesándolos se pretende averiguar la historia específica del discurso antropológico del carnaval (recurso favorito de la pluma de Arenas) y su poder de relativizar el sentido unilateral de la palabra, que subyace como estructura imaginaria de cierta narrativa de los Siglos de Oro, contenido perverso del barroco cubano. La anacronía del *mundo al revés* en el Siglo de las Luces entra con decidida intención política en el corpus de notable sorpresa de *El mundo alucinante*. La réplica indirecta la sirve *El Criticón* de Baltasar Gracián. En el Libro primero, Crisi VI de *El Criticón*, se concreta la fórmula de la locura del mundo, que celebra la entrada del héroe en el universo social. El propósito de Gracián es enfrentar el concepto de *mundo*, macrocosmos concertado y perfecto, con el de *estado del siglo* —interferencia del discurso político y su raíz antropológica— a través de una larga enunciación de imposibles: castillos en el aire, fieras ciudadanas, necios ensalzados, sabios abatidos, Caco político; un mundo donde los esclavos mandan y los ciegos guían. Es el mismo cuadro de pretensiones desmesuradas que Servando contempla a su paso por la corte y que culmina en el vértigo de servidumbres de "el país de la desolación":

> y por todo el camino fuimos tropezando con infinidad de seres, todos queriendo hacer cosas inverosímiles: gentes que trataban de hacer oír a los pies. Mujeres que pretendían cargar el sexo en la frente. Hombres enterrándose vivos. Viejos que querían hacer hablar a los árboles y niños que a toda costa trataban de detener al tiempo. (EMA, p. 104)

Es la visión oblicua de la contracultura popular descrita por Chartier (1988), la retórica de la cultura marginal, desposeída, su testimonio de exclusión del cuerpo ortodoxo del discurso[5]. De nuevo estamos en la inflexión entre alegoría e historia que rige en profundidad el discurso antropológico. La verdadera cara del mundo mediatizado por las leyes del presente es la de un infierno sin dignidad ni categorías. Significa, sobre todo, asumir la oscilación contradictoria de lo real, la búsqueda de su oposición y

[5] Volek (1985) ya ejerció la mirada analógica y carnavalesca sobre el texto de Arenas.

ambivalencia. La reducción de sus contradicciones puede explicar al mundo y también al hombre, y de ahí el significado de "mundo alucinante", cristal conflictivo que es "clave del ser y fuente de pasmo y maravilla"[6].

La aventura de Servando por el confuso laberinto de su contemporaneidad no culmina, sin embargo, en el prodigio o alucinación que se esperaba desde su título; finalmente no hay verdad última de los seres y las cosas, siquiera imaginaria, sino sólo un continuo teatro de búsquedas. Pero esto es lo que no puede ser dicho en el foro de las vanidades, en el rigor de la nivelación. En el gran escándalo de la procesión de la Virgen de Guadalupe, compromiso de la voz de Servando, en su "noche oscura" (irreverente "Gran Noche Estrellada") el fraile presiente la imagen del proceso americano, los arcanos mayores de su pensamiento político, como un inflexible teatro del obstáculo:

> Entonces tuvo la revelación. Pensó que el objetivo de toda civilización (de toda revolución, de toda lucha, de todo propósito) era alcanzar la perfección de las constelaciones, su armonía inalterable. "Pero jamás", dijo en voz alta, "llegaremos a tal perfección, porque seguramente existe algún desequilibrio". (EMA, p. 241)

No hay totalidades fulminantes que nos reconcilien como sujetos históricos; apenas se formulen se insinúa en ellas una réplica insatisfecha que termina con toda legitimidad de la identidad posible. El intento de cristalización de una gran cosmogonía política o lógica conciliatoria del orden del mundo deviene en la confirmación del desconcierto, en la necesidad de la mirada invertida. Es la crítica más dura de Arenas, desde la coartada del desengaño barroco, al gran imaginario de los sesenta.

El mundo alucinante continúa su itinerario por el aparato de la representación cultural hasta el mismo corazón de las formaciones discursivas. Junto a la insistencia en la transgresión que averigua lo complementario, la causalidad metafórica provoca además un correlato de consecuencias enormemente significativas: el motivo de Eros y Muerte repite la iconografía del texto de autoridad en que se apoya la subversión de Servando (Guadalupe-Santo Tomás/Tonantizin-Quetzalcóatl). Burunda proporciona a Fray Servando las pruebas para el sermón que desmantelará la versión conquistadora del mito americano, desplegando a sus ojos interminables códices aztecas, "clave de jeroglíficos":

[6] Curiosamente la cita es de Rico (1989, p. 238) en relación a Gracián.

> donde aparecían cuerpos de animales con cabeza de mujer, mujeres con órganos de leones, fieras con cara de niños y soles dando gritos por la expresión que reflejaban esas caras.
> […]
> Yo miraba el desfile de las figuras: hombres con piel de serpiente, mujeres tocando la luna como si fuera un tambor, venados subiendo al cielo. (EMA, pp. 37, 38)

Servando extrae este texto clave de un recinto singular: el cuerpo inaudito de Burunda, inmensa cueva de murciélagos, símbolo del testimonio indígena del *Popol Vuh*. En la Casa de los Murciélagos, cuarta morada de Xibalbá, los héroes de la mitología maya enfrentan las pruebas de los Señores del Infierno; Junajpú es decapitado y su cabeza sirve de semilla al árbol de la vida, que debe permanecer inviolado. El rito se repite unido a los códigos de vida y muerte del juego de pelota (XXX, XXII, C.T.; 40-ss. 90-ss). Precisamente es en esta colección de códices mayas (y en los episodios de los castigos infernales) donde Lezama Lima comienza a rastrear la búsqueda del *análogo metafórico* en la expresión americana (1969, pp. 22, 26). El archivo empieza a plegarse sobre sí mismo, a crear remanencias de causalidad circular en la dispersión, que en último término arrastrarán a Servando hacia su visión final. En ese momento (capítulo 34) el fraile asistirá al destino común en sangre y fuego de temporalidades diferentes (entre otros trágicos momentos se convoca a la Noche Triste de Cortés). La transparencia de una suerte de rueda de la Fortuna de inspiración medieval se concreta como imagen —rudimentario aleph— del a priori histórico que fundamenta la visión mítica. Ésta es posible porque Servando ocupa entonces la posición descodificadora, el *axis* del archivo:

> Y de nuevo tropezó con las llamas. Las llamas, que se alzaban, llenando toda aquella habitación donde el fraile había ido a parar. Las llamas, y entre ellas alguien que contaba la vida del fraile. Desconcertado y curioso quiso saber cuál era su propio fin, pero el fuego ya le subía por las sandalias y le chamuscaba los hábitos.
> Para no achicharrarse bajó las manos. (EMA, p. 239)

Servando no accede por completo al privilegio de Aureliano en *Cien años de soledad*, dentro de una contrapartida a la solemnidad muy consecuente con la filosofía de *El mundo alucinante.* Pero de cualquier forma, el archivo se consuma al cumplirse dos de las características que González Echevarría señala como inherentes a dicho proceso: “la existencia de un historiador interno que lee, interpreta y escribe los textos; y finalmente […] la presencia de un manuscrito no acabado que el historiador interno intenta completar” (1990, p. 22). La inclusión de un intérprete interno tiene una

conexión autorial que jugará un papel en la plurivocidad que teje *El mundo alucinante*, como más adelante se verá. Interesa ahora más el carácter de *manuscrito* que adquiere la novela. Lo peculiar de su cifra, todo el imaginario del "mundo al revés", configura un manuscrito con carácter de *bestiario*. Es ésta sin duda la textualidad más extravagante que activa el cuadro narrativo y apunta de forma original a los intentos totalizantes de la ficción latinoamericana más moderna. Las figuras del bestiario son descripciones recurrentes del imaginario indígena y de los *semejança* medievales, signatura a un tiempo de la cultura oral y letrada que funda el primer discurso americano. Textos que hermanan la ficción y la historiografía y contagian a *El mundo alucinante* de su peculiar hibridación (recuérdese su inspiración totalizadora, la curiosidad por el origen de los nombres, la representación de los universos cancelados y sus trampas de sentido, la exploración directa del mundo). Son, tal y como se vio en el célebre episodio de las sirenas, estructuras esenciales del pensamiento analógico del cronista, celebración de heterogénesis que quiere contener en los códigos del *libro* la gran enciclopedia del Orbe Nuevo.

La serie de la naturaleza del libro entronca en la novela de Arenas con otro importante mundo textual. En el capítulo cuarto de *El mundo alucinante* se menciona la permeabilidad quijotesca de Servando a la escritura, que forja la tendencia de su pensamiento al eterno retorno, a la lógica onírica que alcanza complejidades auténticamente borgeanas: "De este modo se durmió. Y entonces la Angustia de las Imágenes Que no Identificamos vinieron a carcomerle la planta de los pies... Soñó que ya estaba solo sobre aquella tierra vomitante, y que caminaba con una tijera en la boca y que en sueños pedía explicaciones a ese sueño". (EMA, p. 29) En este mismo episodio la novela atestigua las cualidades proféticas de Servando, intérprete peregrino del mundo como libro desde la absoluta fusión de los tiempos:

> Entonces se escondió tras los libros y, escudado entre pergaminos y hojas, revolvió estantes, rebuscó en lo que pudo haber escrito, e imaginó lo que se pudo haber dicho y se dijo y aparece como no dicho para que se vuelva a repetir y surta efectos. Telarañas enormes tuvo que ir taladrando con las manos para abrirse paso entre la marasma polvorienta y alcanzar el volumen imaginario donde resaltaría, con letras brillantes, lo que aún no se había dicho en ningún otro. (EMA, p. 30)

La escritura americana se sabe *reescritura*. Hay aquí una primera intención del urgente desfase del círculo, del quiebre que hace posible la textura del archivo, la turgencia palimpséstica. Se esboza como una instan-

cia de ruptura entre escritura potencial y verosimilitud recurrente. Es la plenitud de las "ausencias posibles", verdadera tradición americana para Lezama, que sobrepuja la aparencial "presencia imposible" (1969, p. 74). Este destino del hecho americano emerge para Lezama Lima de la tradición romántica del siglo XIV, desde la cronotopía del calabozo, la ausencia, la imagen de la muerte. Es la dimensión que crea de la celda interminable de Servando un umbral, una cronotopía dialógica, un espacio de la escritura ausente:

> Escribir en medio del infierno acuático. Escribir. Dejar que todas las ocurrencias le salieran de la cabeza. No desperdiciarlas como ahora en que las ideas iban y venían y se difuminaban entre la oscuridad de la prisión ¡Cuántas ideas!... Y sin embargo, pensó, mientras gritaba por agua y por luz como un *nuevo y reciente mito*, las mejores ideas son las que nunca logró llevar al papel, porque dicho y hecho ya les hace perder la magia de lo imaginado y porque el resquicio del pensamiento en que se alojan, no permite que sean escudriñadas, y, al sacarlas de allí, salen trastocadas, cambiadas y deformes. (EMA, p. 47, el subrayado es mío)

Carencia de papel, un nuevo guiño textual a la familia cubana, de Pané a *Los pasos perdidos* de Carpentier y los cuadernos vencidos en el bloqueo de nuestro fin de siglo. Servando es un "nuevo y reciente mito" en tanto que reacción a la caverna platónica, como esfuerzo directo de confrontación con el discurso. Este orden de ideas lleva a la apertura perenne del archivo como reorganización de la economía discursiva, como decisión de la situación de comunicación.

Servando, en un gesto de supervivencia, no fuerza la lectura final del manuscrito. La oportunidad de conocer su destino último hubiera pulsado también la continuidad del a priori histórico. A la consecución, Servando prefiere el límite, a la presencia imposible, la ausencia posible. Urgido por la misma presión que Scherezade, que el último Aureliano, que Artemio Cruz, narrar para ganar terreno a la muerte, Servando adivina la dinámica engañosa del tiempo, el secreto de la ansiedad textual, la mentira de su mensaje existencial que ya presintió en el comienzo de su relato: "Así se pasaba el tiempo, y así pasó hasta descubrir que no existía y que sólo era una noción falsa con la cual empezamos a temerle a la muerte" (EMA, p. 17). Liberado de las férreas leyes orgánicas de la narratividad, *El mundo alucinante* se desarrolla ahora desde la extensión, como amenaza y deseo, de las energías menores promovidas por el gran cuerpo de escritura de la década de los sesenta. Formas de inmolación de la totalidad, ceñidas al desamparo y fracaso del sujeto, a los peligros del yo de áspera tolerancia en el sueño colectivo.

No se aparta de la noción borgeana de condensación del tiempo que se hace visible en la proximidad de lo conclusivo. En esa misma dimensión tangencial es entendido el espacio y medido a través del tiempo en la novela. Un punto de vista material de la relación de violencia con el otro desde el momento de lo real, lo imaginario y lo simbólico. La experiencia de esa convocatoria indisoluble, de grandeza precaria, es clave de la posición del sujeto que elabora la ficción latinoamericana moderna.

Hemos analizado cómo una serie de textualidades del archivo de *El mundo alucinante* abren la condición de posibilidad para un *regressus*, una transmutación del origen, un contarse de nuevo, narrar, es decir, interpretar. La escritura definida en estrategia contra el pensamiento único. La responsabilidad de la crónica mestiza, apoyada por otras mediaciones retóricas que vienen a darse cita en la provocación neobarroca, fue definir el mundo metafórico de la *era imaginaria* y sus códigos, que pasaba por desarrollar un lenguaje de la alteridad, frente al contrato blindado de las referencias. El relato de Arenas quiere agotar los testimonios que postulan cuál es el lenguaje válido para una política de la experiencia que no me mida ni me transe, que simplemente tenga escucha, pueda verme. Un lenguaje que desconfíe altamente de sí mismo.

En esta línea interesa la colaboración de otro gran texto mediador fundacional, la ordalía de Álvar Núñez Cabeza de Vaca o el primer cuaderno del cambio de piel. Textos como los *Naufragios* de Cabeza de Vaca orientan una respuesta en torno a la posición del sujeto y su capacidad de enunciación de la experiencia. La narrativa latinoamericana aparece marcada por el exilio (físico/interior), como posición del sujeto capaz de enunciar, como la relación ser-lugar que provoca la alteridad, el temblor subjetivo o la fragilidad del poder. La idea del exilio como una marca de naturaleza del americano está ya en las obsesiones de la conversación cultural de la Colonia. En pleno debate sobre las presencias reales de la primera conquista, el tema inspiró la polémica entre el Padre Acosta y el misionero dominico Fray Diego Durán quien, en su *Historia de las Indias de Nueva España*, defiende la categoría humanística o la razón hebraica de la indiada: los habitantes de América son descendientes de una tribu exiliada de Israel, llevada por el éxodo al Nuevo Mundo[7]. Fray Servando y Álvar Núñez son seres desterrados, transterrados, para poder expresar su diferen-

[7] Fray Diego (s. XVI) fue el inspirador de las *Memorias* de Fray Servando Teresa de Mier, el personaje real de la segunda década del XIX, patrón argumental de la novela de Arenas. El dominico sevillano, en su americanismo providencialista, identificó a Quetzalcóatl con santo Tomás, deseado predicador de los Evangelios en el primer cristianismo, tesis que invalidaría el imperativo moral de la conquista.

cia. La de ambos es también la historia de un fracaso, de una palabra no-reconocida. El relato de sus aventuras es igualmente —como diría Molloy— una "hazaña retórica" (1987, p. 425), pretendiendo que la configuración narrativa acarree una refiguración de la experiencia. Siguiendo el estudio de Silvia Molloy, los *Naufragios* son una obra compleja, tejida sobre los códigos de la definición y el reconocimiento, ambas metas irrenunciables de la empresa de Fray Servando. La relación de Álvar Núñez y la biografía imaginaria de Servando responden al mismo deseo de "hablar para ser contado" (Molloy, p. 427). La implicación de los *Naufragios* como una forma de presencia en *El mundo alucinante* asoma, ya es frecuente en la novela de Arenas, en clave paródica por el ya mencionado capítulo 9. Fray Servando, prisionero y esclavizado, camuflado en su bárbaro latín, aparece cómicamente uniformado a la negritud, en una inversión irrisoria del trascendente *cambio de piel* con el que Núñez da la voz al otro, en el principio de una serie para la novela latinoamericana. Arenas acaba con la noción de frontera y la reinstaura en territorios insostenibles de intimidad corporal. La risa letrada insubordina el cuerpo de toda categoría límite de la cultura: raza, género, capacidad económica o poder social.

En este quiebre constante de división de poderes, *El mundo alucinante* participa además en la conformación de su voz narrativa de una dialéctica retórica característica de la primera escritura latinoamericana: la simulación de legitimidad y la conquista de un espacio frente a la autoridad[8]. En el caso de la narrativa inasible de Arenas se trata de no reconocer privilegios desde el espectro narratológico que, plural y anárquico, renuncia a gobernarse a sí mismo. El experimento más interesante en este intento de desconcertar al lector, de frustrar cualquier esfuerzo de confianza en sus narradores —y por su valor connotativo respecto a la escritura del cronista, siempre en diálogo apologético— se plantea en el campo de actuación de la segunda persona. Ésta involucra al *yo* como personaje narratario intradiegético, y el *yo* se conserva en el *tú* para provocar una refracción más profunda: la signatura que rige el discurso, la del autor implícito. Empieza a esbozarse el perfil del historiador interno del archivo de *El mundo alucinante.* De tal forma que adquiere sentido la declaración de la instancia autorial al personaje, en la carta que prologa la novela: "Lo más útil fue descubrir que tú y yo somos la misma persona" (EMA, p. 9). Las secuencias en segunda persona materializan así el proyecto novelístico, entendido desde la conceptualización de Bajtín, por el que la palabra del autor que

[8] Para las presiones de la normativa historiográfica ejemplificadas en los afanes patricios del Inca Garcilaso, cfr. González Echevarría, 1983, p. 254.

representa queda situada en el mismo plano que la palabra representada del personaje y entran así en relación dialogística, de forma que el discurso se teje en el conocimiento recíproco de sus réplicas (1989, pp. 111-148). Es ésta la intimidad dialógica de la *relación* como género; la estructura reivindicada como portavoz de la descentralización del sujeto en el plano ontológico, de la mutación epistemológica de la historia de que participa[9]. Podría hablarse de una poética de la segunda persona en la narrativa latinoamericana, que hunde sus raíces en las crónicas de Indias y se proyecta hasta la ficción más moderna. El ejercicio del *tú* es otro secreto del archivo, esencial, por tanto, para la creación de ese "espacio contrapunteado" del que, según Lezama, depende "la metamorfosis de una entidad natural en cultural imaginaria" (16). La pérdida de esta categoría en la representación es el gran delito del lenguaje del último sueño cubano para Arenas.

Si, en palabras de González Echevarría, "el yo queda siempre subsumido por el discurso" (1990, xi) la piedra de toque del sentido contrapuntístico de la novela de Arenas entra asimismo en la primera persona, como crónica adversa de la cultura. La risa del yo, perversión del cronista, es el modelo para armar de la enunciación a la manera de Arenas/Servando. Ese goliardo de la independencia que es el fraile letrado vuelve a su personaje necesariamente osado para la comprensión realista del mundo. El contracanto ('para' y 'ôde') toma su origen —en las reconstrucciones arqueológicas de Gérard Genette— como rapsodia invertida, como ahondamiento en la significación cómica de los valores fundacionales (que hemos probado como un sentir muy propio en *El mundo alucinante*): "Así habría nacido la parodia, 'hija de la rapsodia' (o quizá de la tragedia) en el mismo lugar de la recitación épica (o de la representación dramática), y de su mismo texto, conservado, pero 'invertido' como un guante" (1989, p. 25). La parodia busca en la modificación verbal 'la primera palabra', el cuerpo político frente al cuerpo clásico del relato nacional, y en esta línea se explica como la más adecuada estrategia discursiva de *El mundo alucinante*.

[9] La narratividad tripartita es recurso ya canónico desde *Artemio Cruz*. Pero la tentación de recurrir de nuevo a la implicitación hipertextual, a los canales del archivo, nos remite a páginas ya pasadas. Maravall (1984) recuerda en "Antropología y política en el pensamiento de Gracián" la carta al lector que prologa *El Criticón*, la cual le permite decir que: "Gracián presentará su historia de Andrenio y Critilo como historia de la segunda persona. *El Criticón* es la patética aventura del *tú*" (p. 331) —añádase además— focalizada desde un protagonista adánico (Andrenio) seguido por su 'otro yo' (Critilo) "razón que le permite advertir que camina entre cosas que son apariencia de ellas mismas" ("El mito platónico en Gracián", p. 379).

Asesinados por el cielo

Soñar (radical, cruelmente) es para Arenas una categoría moral y una responsabilidad imaginaria. Un derecho y un problema para hacer patria. Sólo está en manos de autores, de seres con culpa, de cuerpos de delito, reos de exilio. Tienen algo de Telémacos, aprenden del sueño de Ulises. Se esconden en el libro, no conocen patria aunque aman la isla, son la amenaza del usurpador, vengan la utopía.

Dentro de las grandes ambiciones totalizantes de la novela latinoamericana de los sesenta, *El mundo alucinante* de Reinaldo Arenas estructura un archivo clave que recupera el texto épico y se convierte en cita desviada de su sentido. Esta investidura permite a la novela construir ante el lector una *era imaginaria*, perspectiva más legítima de la fabulación del hecho que se presiente en el desequilibrio perdurable. *El mundo alucinante* averigua, imita y deforma los esquemas de la construcción cultural de la identidad por los caminos que su archivo ficcional va proporcionando a lo largo de la lectura. Se llega a descubrir que el proceso se valida a sí mismo comprometiendo su textualidad en una contestación infatigable. Al intentar agotarlo, la novela fuerza la necesidad irremplazable de la ficción. Es así como sorprende "su potencialidad para crear imágenes", conocimiento desde el que puede arriesgar el secreto del "análogo metafórico" lezamiano (pp. 22-25). *El mundo alucinante* quiso hacer de los mecanismos de autoconocimiento revelados por el discurso antropológico su ley de composición (la praxis dialógica entre las instancias discursivas convocadas), en un intento de totalidad estremecida o vacilante que ocupara la 'ausencia posible' o el vacío de representación que prepara el fin de siglo (un estado límite de intoxicación de la subjetividad colectiva). De la coincidencia de sus espacios se pedía la eliminación definitiva de lo imaginario de toda mediación, como la confrontación extrema de complementarios de la que emergería la visión mitopoética débil, no intervenida, capaz de esperar al sujeto. El mito de voluntad identitaria eligiendo en silencio su filiación. Esa totalidad no lleva a estallar finalmente en sí misma, conserva la fuerza moral del deseo y no vincula máquinas de afirmación social. Autopoética y heterogénesis simultáneas, su textura es un desafío mayor todavía mutante y no valorizado. La voz narrativa vuelve a convocar el origen de la novela, la necesidad de volver a proyectar de nuevo el pasaje intertextual, de sostener universos de referencia heterogéneos que deben mantenerse como componentes de expresión. La novela de Arenas se adhiere así a la 'técnica de la ficción' o escritura visionaria que Lezama Lima anunció como imperativo de la expresión americana "cuando la técnica histórica no pueda estable-

cer el dominio de sus precisiones. Una obligación casi de volver a vivir lo que ya no se puede precisar" (1969, p. 18). La única cobertura de la ausencia es seguir conjugando el diálogo de textualidades con un sueño plural, de miedo y liberación hacia el dominio del sujeto. Cuando Heredia, icono del romántico nacionalista, "parodia los versos de un poema que aún no ha escrito", *El mundo alucinante* ensaya en cada nueva enunciación el mito del camino hacia "un lugar que pronto existirá" (p. 145). La literatura, para Arenas, tiene la manía de prometer. Al final de la imaginación, el fin de un tiempo nos encuentra asesinados por el cielo, buscando un sueño que no hay todavía. Con un libro de Arenas antes del alba, para volver a soñar mi delito o mi país.

BIBLIOGRAFÍA

Arenas, Reinaldo. *Celestino antes del alba.* La Habana: UNEAC, 1967.

———— *El palacio de las blanquísimas mofetas*. Caracas: Monte Ávila, 1980.

———— *El mundo alucinante.* Barcelona: Montesinos, 1981.

———— *Otra vez el mar*. Barcelona: Argos Vergara, 1982.

———— *Arturo, la estrella más brillante*. Barcelona: Montesinos, 1984.

———— *La loma del ángel.* Miami: Mariel Press, 1987.

———— *Voluntad de vivir manifestándose*. Madrid: Editorial Betania, 1989.

———— *Leprosorio*. Madrid: Betania, 1990.

———— *Antes que anochezca* (*Autobiografía*). Barcelona: Tusquets, 1ra. edición 1992, 2da. edición 1996 y 1998.

———— *El color del verano o nuevo "jardín de las delicias"*. Barcelona: Tusquets, 1999.

Bajtín, Mijail. *Teoría y estética de la novela.* Madrid: Taurus, 1989.

Barrientos, Juan José. "Nueva novela histórica hispanoamericana". *Rev. de la Univ. de México.* Vol. 40:416 (1985), pp. 16-24.

Beaupied, Aída M. "De lo anecdótico a lo conceptual en *El mundo alucinante* de Reinaldo Arenas". *Revista de Estudios Hispánicos* 11 (1984), pp. 133-142.

Béjar, Eduardo C. *La textualidad de Reinaldo Arenas: Juegos de la escritura postmoderna.* Madrid: Playor, 1987.

Colón, Cristóbal. *Textos y documentos completos.* Ed. Consuelo Varela. Madrid: Alianza Universidad, 1989.

Chartier, Roger. *Cultural History*. Ithaca, New York: Cornell UP, 1988.

Durán, Fray Diego. *Historia de las indias de Nueva España e islas de la tierra firme.* Ed. Ángel María Garibay. México: Porrúa, 1967.

Eliade, Mircea. *Mito y realidad.* Barcelona: Labor, 1983.

Ette, Ottmar (ed.) *La escritura de la memoria: Reinaldo Arenas, textos, estudios y documentación.* Frankfurt am Main: Vervuert, 1992.

Foucault, Michel. *La arqueología del saber.* Siglo XXI editores, 1970.

Fuentes, Carlos. *La nueva novela hispanoamericana.* México D.F.: Joaquín Mortiz, 1980.

Geertz, Clifford. *Works and Lives: The Anthropologist as Author.* Standford University Press, 1988.

Genette, Gérard. *Palimpsestos: La literatura en segundo grado.* Madrid: Taurus, 1989.

González Echevarría, Roberto. "El Reino de este mundo alucinante: Era imaginaria de Fray Servando". *Isla a su vuelo fugitiva.* Madrid: José Porrúa Turanzas, 1983, pp. 253-257.

———— *Myth and Archive: A Theory of Latin American Narrative.* Cambridge University Press, 1990.

Gracián, Baltasar. *El Criticón.* Madrid: Espasa-Calpe, 1971.

Hernández Miyares, J. E.; y Rozencvaig, P. *Reinaldo Arenas: Alucinaciones, fantasías y realidad.* Illinois P., 1990.

Lezama Lima, José. *Paradiso.* México: Era (1966) 1968.

———— *La expresión americana.* Madrid: Alianza Editorial (1957) 1969.

Lévi-Strauss, C. *Tristes trópicos.* Barcelona: Visor (1955) 1992.

Maravall, José Antonio. *Estudios de historia del pensamiento español*. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1984. Vol. III, pp. 333-384.

Molloy, Silvia. "Alteridad y Reconocimiento en los *Naufragios* de Álvar Núñez Cabeza de Vaca". *Nueva Revista de Filología Hispánica* 35 Nº 2 (1987), pp. 425-449.

Núñez Cabeza de Vaca, Álvar. *Los Naufragios*. Ed. Enrique Pupo-Walker. Madrid: Castalia, 1992. Pané, Fray Ramón. *Relación acerca de las antigüedades de los indios.* Ed. José Juan Arrom. Siglo XXI, col. América Nuestra, 1988.

Popol Wuj: Antiguas historias de los indios quichés de Guatemala. Ed. Albertina Saravia. México: Porrúa, 1986.

Rico, Francisco. *El pequeño mundo del hombre*. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

Rozencvaig, Perla. *Reinaldo Arenas: Narrativa de transgresión.* México: Editorial Oasis, 1986.

Sarduy, Severo. *Pájaros de la playa.* Barcelona: Tusquets, 1994.

Volek, Emil. "La carnavalización y la alegoría en *El mundo alucinante* de Reinaldo Arenas". *Revista Iberoamericana* 51, pp. 130-131 (1985), pp. 125-148. □

DERECHO Y FAMILIA*

Mary Ann Glendon

Mary Ann Glendon analiza en estas páginas la evolución que ha tenido el derecho de familia en Occidente, y plantea la compleja relación entre las ideas, el derecho y el comportamiento. En el primer capítulo, la autora reseña las principales etapas del proceso mediante el cual el matrimonio y los asuntos familiares, antaño regidos por la costumbre, la ética, la moral o la religión, quedaron sujetos con el tiempo a una reglamentación oficial —primero en el derecho canónico y posteriormente en el derecho civil. En el capítulo siguiente, Glendon se refiere a los profundos cambios que ha experimentado el derecho de familia en las últimas décadas, con los cuales las regulaciones se han eliminado en algunas áreas e intensificado en otras.

MARY ANN GLENDON. Abogada. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Entre sus numerosas publicaciones pueden mencionarse *The New Family and the New Property* (1981); *Comparative Legal Traditions*, con Michael Gordon y Christopher Osakwe (1985); *Abortion and Divorce in Western Law* (1987).

* Capítulos 1 y 7 del libro de Mary Ann Glendon *The Transformation of Family Law* (The University of Chicago Press, 1989), reproducidos en castellano con la debida autorización. Traducción de *Estudios Públicos.*

EL DERECHO, LAS IDEAS Y EL COMPORTAMIENTO*

Introducción

A contar de los años sesenta hubo un remezón sin precedentes en los sistemas que conforman el derecho de familia en las sociedades industrializadas occidentales, y ciertas normas legales que habían permanecido relativamente intocadas por espacio de varios siglos fueron descartadas o bien modificadas de manera radical en las áreas del matrimonio, el divorcio, las obligaciones parentales, los derechos hereditarios, las relaciones paterno-filiales y el *status* de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Al mismo tiempo, en otros campos del derecho que no se consideraban habitualmente parte del derecho de familia, como el de las prestaciones sociales, el laboral, la seguridad social y la tributación, las regulaciones oficiales han comenzado a influir cada vez más claramente en la vida familiar y cotidiana. Los nuevos cuerpos legales del derecho de familia surgidos de este proceso en los Estados Unidos y Europa Occidental recurren a una multiplicidad de técnicas legales y se han visto influidos por constelaciones de intereses políticos relativamente diferentes en uno u otro sitio. En varios países, su aparición fue precedida por estudios prolongados y muy cuidadosos; en otros, las reformas legales tuvieron lugar luego de escasas deliberaciones. En algunos casos no hubo bombos y platillos asociados al proceso; en otros, en cambio, hubo acalorados debates públicos y grandes controversias. Con todo, a pesar de los contrastes entre los contextos jurídicos y políticos de la reforma legal, las diferencias entre los sistemas de derecho de familia occidentales han disminuido en forma sostenida durante las últimas dos décadas. En efecto, en países culturalmente muy distintos se aprecia una notable coincidencia de desarrollos jurídicos similares, producidos casi en la misma época y en forma aparentemente independiente entre sí.

Cuando el antecedente directo de este libro, *State, Law and Family: Family Law in Transition in the United States and Western Europe* (Amsterdam: North-Holland), apareció en 1977, la mayor parte de estas nuevas disposiciones jurídicas habían entrado en vigor desde hacía menos de una década. Otras recién estaban comenzando a aparecer. Los indicadores demográficos fundamentales, como las tasas de matrimonios, de divorcio y de

* Capítulo 1, “Law, ideas and behavior”. (N. del E.)

participación femenina en la fuerza laboral, no se estabilizarían sino hasta la década de los ochenta. Habiéndonos beneficiado a estas alturas de otros diez años de experiencia con innovaciones legales que transformaron el derecho de familia tradicional, parece un momento propicio para hacer marcha atrás una vez más e intentar discernir lo que ha venido ocurriendo en el proceso.

Como veremos, las principales tendencias convergentes se habían afianzado mucho antes de que el derecho comenzara a cambiar en los textos. De varias maneras, la intensa actividad legislativa desarrollada en años recientes sólo vino a formalizar y sistematizar tendencias transformadoras que ya estaban diseminadas y que se habían concretado parcialmente en el derecho de cada país. Tales tendencias no han alcanzado el mismo estadio en todas partes y han tomado distintas formas en muchos de los países afectados, pero el movimiento general revela una consistencia notable. Éste se caracteriza, en grados variables, por un repliegue progresivo de la reglamentación oficial relativa a la constitución del matrimonio, a su disolución y al manejo de la vida familiar, por una parte, y por una reglamentación creciente, por otra parte, de las consecuencias económicas, y sobre los hijos, de la cohabitación formal o informal. Simultáneamente, el surgimiento del Estado administrativo moderno ha traído consigo un aumento notorio en el grado de control burocrático, de diversos tipos, al que hoy están sujetos la familia y sus integrantes.

El derecho de familia contemporáneo refleja nuevas formas de pensamiento, no sólo acerca del matrimonio y la vida familiar, sino también acerca del derecho y el Estado. Han aparecido nuevas imágenes jurídicas, muy similares entre sí, de los roles y las relaciones familiares. Muchas normas tradicionales del derecho de familia han sido consideradas incoherentes con los valores incluidos en diferentes cartas constitucionales o con las convenciones internacionales. Ha habido un giro histórico en la relación del Estado con la familia y se ha eliminado la regulación en áreas donde alguna vez se la dio por sentada, intensificándosela, en cambio, allí donde, hasta fecha reciente, era desconocida.

En general, no parece que tales desarrollos hayan tenido lugar porque se quisiera fomentar deliberadamente alguna serie coherente de objetivos. Hay pocos indicios de que los países involucrados intentaran emularse entre sí o bien implementar alguna política familiar sui géneris. Ocurre, más bien, que cada uno parece perseguir diferentes (y con frecuencia conflictivos) objetivos en sus leyes y programas que afectan a la familia. Así, vistos en forma aislada, los desarrollos en cada país adoptan a menudo un

carácter azaroso. En algunos de ellos, esta atmósfera de relativo desorden se debe en parte al hecho de que el campo del derecho de familia se ha transformado en una arena propicia a múltiples confrontaciones de índole política, religiosa y étnica[1]. Por añadidura, el derecho de familia se ha convertido en todas partes en un campo de pruebas para nuevas formas de concebir las relaciones entre los sexos y las generaciones.

Con todo, detrás de esa apariencia de desorden, de la retórica y las consignas, y más allá de las particularidades locales y regionales, lo que se está contando es una misma historia acerca de roles y relaciones que son básicos en la vida de la mayoría de las personas. Exponer dicha historia, explorar las variaciones significativas en lo narrado y plantear interrogantes acerca de la compleja relación entre el cuento que nos relata el derecho y el comportamiento real de la familia y las nociones de la vida familiar, todo ello conforma los objetivos del presente volumen.

Obviamente, no es posible hacer aquí un recorrido exhaustivo de todos los cambios jurídicos que han afectado a la vida familiar en los últimos veinticinco años en un país cualquiera, no digamos en varios de ellos. Es preciso hacer una selección del material, tanto del tema por considerar como de sus alcances geográficos. En lo que hace a lo anterior, he escogido varios desarrollos legales de entre los que me parecen más impactantes y sugerentes, y que están suficientemente avanzados como para revelar patrones claramente discernibles. Muchos de ellos son el material estándar de los tratados del derecho de familia, pero también hago referencia aquí a esas tendencias verificables en cuerpos legales relacionados que influyen de manera importante en la vida familiar, y también a lo que los profesores de derecho civil denominan la *lex referenda*: el derecho que puede estar o no haciéndose en el momento. En esta última categoría incluyo no sólo las propuestas oficiales de reformas legales, sino a la vez las principales corrientes que emergen de la teorización académica. Además, he intentado no perder de vista el hecho de que, en tanto el centro de la escena era ocupado por procesos muy publicitados de reformas a la ley de divorcio e implementación de iguales derechos para la mujer, también han ocurrido cientos de cambios menores, menos conocidos, que atañen a las varias formas en que cada sistema legal interactúa con la familia. Puesto que tales movimientos moleculares generan a menudo cambios estructurales con consecuencias mucho más vastas, he querido prestar atención a

[1] Esto es particularmente efectivo en una sociedad tan heterogénea como la estadounidense. Véase Martha Minow, "We, the Family: Constitutional Rights and American Families" (1987), p. 959.

aquellos hechos legales en apariencia menores aunque potencialmente transformadores.

Como en el libro anterior*, me he concentrado aquí ante todo en el derecho de Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y [la ex] Alemania Occidental, haciendo ocasionales referencias a desarrollos importantes en otros países, especialmente en Suecia. Las comparaciones entre esos países, al parecer, aún son de provecho, no sólo por la gran influencia que sus respectivos sistemas jurídicos ejercen en el mundo del derecho civil y del *common law*, sino también porque cada uno ha generado una enorme variedad de materiales jurídicos y sociales en los temas aquí considerados. Y, más importante aún, los desarrollos en el derecho de familia de estos países son ilustrativos de las tendencias transformadoras que también operan, con intensidad variable, en el derecho de lugares tan diversos como Irlanda, los países nórdicos y las naciones de la Europa meridional[2].

Naturalmente, siendo una estudiosa norteamericana del derecho comparado e interesada en particular en la vida familiar, abrigo la esperanza de que el presente recorrido entregue no sólo algunas luces acerca de la significación del actual período de cambios legales, sino que contribuya a la reforma legal en los Estados Unidos. El darnos mayor cuenta de las formas en que otras naciones han abordado los problemas a los que hoy se enfrenta nuestro sistema legal sólo puede ir en nuestro propio beneficio. Aun cuando pocas veces resulte aconsejable trasplantar directamente los mecanismos legales puestos en práctica en otros países, ellos a menudo sirven a la causa de revisar y reformar el derecho existente, al mostrarnos que nuestro rango de opciones puede ser más amplio que lo que habíamos supuesto, y al alertarnos respecto de los potenciales retrocesos y avances de procedimientos alternativos. El estudio de experiencias foráneas puede ser también una fuente muy fértil de inspiración e ideas. Y aun cuando no nos

* La autora se refiere a su libro, mencionado anteriormente, *State, Law and Family: Family Law in Transition in the United States and Western Europe* (1977). (N. del E.)

[2] Resulta esclarecedor de la extensión y profundidad del actual proceso de cambios en la vida familiar y en el derecho de familia el hecho de que, a partir de mediados de los setenta, Italia, Portugal y España revisaron las disposiciones de sus códigos civiles en relación con el matrimonio a la luz del principio de igualdad entre los sexos, hicieron posible el divorcio (o, en el caso de Portugal, lo ampliaron a los católicos) y legalizaron el aborto bajo determinadas circunstancias. Tales cambios en dichos países, en que la influencia del catolicismo ha sido fuerte, son en algún sentido más impactantes que los habidos en las naciones aquí examinadas, considerando la mayor distancia ideológica entre las nuevas leyes y las que vinieron a sustituir. Véase, en general, Mary Ann Glendon, *Abortion and Divorce in Western Law* (1987). En el caso de Irlanda, véase William Duncan, "The Divorce Referendum in the Republic of Ireland: Resisting the Tide" (1988), y Mary Ann Glendon, *Irish Family Law in Comparative Perspective* (1987).

conduzca de inmediato a un nuevo estadio del pensamiento, casi siempre nos ofrece una comprensión más profunda y una perspectiva más equilibrada de nuestro propio sistema legal.

Las instituciones legales y sociales

Los desarrollos legales que trata este libro, pese a lo muy impresionantes que nos parezcan, no son sino un aspecto del hecho más vasto de que la sociedad en sí es un flujo constante. La movilidad geográfica, los cambios en la importancia relativa de las distintas formas de riqueza, la influencia aparentemente en declive de la religión formal, los cambios en los roles económico y social de la mujer, la mayor expectativa de vida y el aumento en el control del proceso reproductivo son sólo algunos de los factores cuyos efectos se han hecho sentir en las instituciones familiares en apariencia inmutables, aunque siempre sujetas a lentas transformaciones, y en la institución habitualmente concomitante del matrimonio, más polimorfa y mutante. A través de siglos, el comportamiento familiar y las ideas acerca del matrimonio y la vida familiar han sufrido constantes fluctuaciones, pero lo que hace destacables los hechos del período actual, cuando se los confronta con el panorama de la historia, es la rapidez con que están cambiando los roles genéricos, las relaciones entre los distintos grupos de edad, las relaciones maritales y la estructura familiar.

Aun cuando aquí tratamos, ante todo, con los cuerpos de normas elaboradas por los poderes legislativos y los jueces y que son constitutivos del derecho de familia en cuatro países, es esencial no perder de vista el hecho evidente de que en tales naciones, como en cualquier otra sociedad, el comportamiento familiar no se corresponde nunca exactamente con el conjunto de normas oficiales existentes. Y las formas que adopta la vida familiar pueden asimilarse a veces más y otras menos, y en determinados lugares más que en otros, a los patrones consagrados en el derecho. Así, aparte de hacer el inventario, en forma separada, de la intensa agitación que ha habido en el derecho de familia y el comportamiento familiar, habremos de esforzarnos por hacer el itinerario de las relaciones cambiantes entre dos sistemas dinámicos: el conjunto de leyes que afectan a la familia y los patrones de conducta que constituyen la institución social de la familia. En íntima relación con tales cambios en el derecho y en el comportamiento hay incluso otros virajes que debemos tener en cuenta. Son los desarrollos en el dominio de las ideas: ideas ampliamente sustentadas acerca de las instituciones jurídicas y sociales del matrimonio y la familia, e ideas acerca del derecho en sí.

En los capítulos que siguen, será de utilidad diferenciar, con fines analíticos, entre lo que un sistema legal particular puede llegar a categorizar como 'familias' o 'matrimonios' y la conducta que un antropólogo o un sociólogo probablemente describiría como propia de una familia o un matrimonio. El legislador, enfrentado a fenómenos de naturaleza social, opera con una caracterización lingüística e imaginaria del comportamiento que es en buena medida inconsciente. Dicho proceso genera pautas legales que son algunas veces expresión de los valores o ideales de alguien en particular; otras veces son pura y simplemente 'tipos ideales' (en el sentido de abstracciones teóricas a partir de los datos sociales, o de intentos de sintetizar en forma sistemática los datos sociales); y otras veces (más a menudo de lo que se cree) una mezcla de ambas instancias. No es fácil ser precisos en la terminología jurídica asociada a la familia y el matrimonio, puesto que en el seno de un mismo sistema legal dichos términos son utilizados a menudo en forma diferente y con distintos fines. La tarea se vuelve aún más compleja cuando se trata de identificar aquello que constituye un comportamiento familiar o marital en el seno de la sociedad.

Podemos, con todo, formular ciertas apreciaciones generales. La familia y el matrimonio son instituciones pre-jurídicas. Aun cuando, basándonos intuitivamente en nuestras observaciones y nuestra experiencia individual, los hombres y mujeres contemporáneos tendemos a creer que el matrimonio es anterior a la familia, es esta última la institución primaria[3]. En todas las sociedades humanas, y en muchas sociedades animales, es posible encontrar algún tipo de familia como un grupo distinto dentro de la horda. El matrimonio, sin embargo, en el sentido de una relación heterosexual altamente individualizada, es, según se dice, apenas detectable en algunas de las sociedades humanas más simples y en otras es visto como irrelevante para la formación de la familia[4]. Es útil, especialmente en las culturas contemporáneas en que el matrimonio y la procreación están cada vez más diferenciados, distinguir entre la familia como grupo social que incluye más personas que los partícipes en un matrimonio (si lo hay), y el matrimonio, que puede coincidir o no con la existencia de una familia[5]. Decir que 'la familia' es la institución primaria puede ser, pese a todo,

[3] Por ejemplo: "El inicio de la formación de la familia puede ser el matrimonio o la paternidad. No debe pensarse, a partir del hecho de que la relación sexual es un pre-requisito del embarazo, que toda la gente considera el matrimonio o el establecimiento de una relación hombre-mujer el primer paso en la formación de la familia (...) [En el] caso extremo, el matrimonio es percibido como irrelevante para la formación de la familia". Robert F. Winch, "Marriage" (1968), p. 1.

[4] René König, "Sociological Introduction" (1974), pp. 38, 40, 58-59.

[5] Ibídem, p. 38.

engañoso a menos que especifiquemos que las familias existen en una multiplicidad de formas. Por cierto, pareciera que ninguna sociedad conocida ha tenido sólo un tipo de familia. Por otro lado, el rango de los varios tipos de familia, y en función de ello de las formas de matrimonio, nunca ha sido muy vasto[6]. Con todo, la amplitud limitada de ese espectro no ha conseguido evitar un proceso constante de cambio, que ha redundado en el continuo desarrollo y surgimiento de modalidades familiares cuando menos nuevas para la sociedades en que ellas emergen. Es, pese a todo, un proceso de cambio lento, y todavía más lento para los tipos de familia que para los patrones matrimoniales[7].

Para hacer comparaciones significativas entre los sistemas del derecho de familia de cuatro países, es esencial estar atento a tales diferencias entre los fenómenos legales y sociales: entre las instituciones imaginadas, descritas y elaboradas en el derecho, y el comportamiento matrimonial y familiar, tal como es imaginado y como se lo vive en una sociedad determinada. Por ende, parece aconsejable una pausa previa para reflexionar brevemente en torno a dichos asuntos.

La boda del hojalatero

En *La boda del hojalatero*[8], la obra de John Synge, los personajes principales, Michael Byrne y Sarah Casey, son dos hojalateros, vale decir, reparadores ambulantes de utensilios domésticos hechos de metal. Su relación se originó un día lejano en Rathvanna, cuando Michael le propinó a Sarah "una bofetada en la oreja", tras lo cual ella se vino con él "muy calladita y dócil..., a contar de ese día y hasta hoy". Por la época en que nos son presentados, Sarah lleva ya "un buen rato junto a él…" La obra se inicia con la exigencia repentina de Sarah, respaldada por su amenaza de marcharse, de que Michael se case con ella. Podemos inferir de sus comentarios apasionados y ardientes que su exigencia no es sintomática de ningún problema serio que haya surgido entre ella y Michael. Salvo por ese único punto en discordia, ella parece, en términos generales, muy feliz, "floreciente, y con buena salud, por obra y gracia del Señor Todopoderoso". Al iniciarse la obra, Michael acaba de acceder al deseo de Sarah —aun cuando

[6] Ibídem, pp. 21, 33, 37.

[7] Ibídem, p. 39: "Las ideas relacionadas con el tema del amor y el matrimonio son mucho más diversas y flexibles que la estructura familiar. Mientras las nociones concernientes al amor y el matrimonio cambian a menudo con las modas, la familia, en tanto institución humana universal, no es tan fácil de modificar".

[8] John M. Synge, *The Complete Plays of John M. Synge* (1960), pp. 180-209.

le cuesta entenderlo— y está dando los últimos toques a un anillo de bodas hecho en casa. Sólo falta encontrar a un sacerdote para que los case.

Pero la cosa no resulta tan fácil. El cura de la localidad llega a pie por el sendero hasta el lugar donde acampa la pareja, pero considera absurda la petición de Sarah de que celebre la boda sin cobrar nada. Tras una breve discusión, se ofrece a hacerles un precio especial y reducido de apenas una libra, sólo que Michael y Sarah no disponen siquiera de esa cantidad. Finalmente, luego de prolongado regateo, se muestra de acuerdo en casar a la pareja por diez chelines y un bidón metálico cuyo repujado Michael está a punto de concluir en ese momento..., una suma tan irrelevante "que no serviría siquiera para desposar a un niño". El cura no se conmueve ante la pobreza que Sarah esgrime, y replica con rudeza que los hojalateros son bien conocidos porque roban "de Este a Oeste, en Wicklow y Wexford y en County Meath".

Una vez cerrado el trato, la boda queda fijada para el día siguiente. Pero ocurre, para colmo de males, que durante la noche la anciana Mary, la madre de Michael, cede a la tentación de robarse el bidón recién concluido y venderlo en el *pub* local a cambio de "una cañita para dormir". Y para eludir el enfrentamiento con Sarah, introduce a hurtadillas un par de botellas vacías en el saco que contenía el bidón. Naturalmente, cuando el cura lo abre al día siguiente y se topa tan sólo con los dos envases, piensa que Michael y Sarah han querido timarlo y se rehúsa indignado a casarlos por sólo diez chelines sin el bidón. Tras un intercambio verbal cada vez más agresivo, la decepción de Sarah se transforma en furor y la obra concluye con el cura maniatado y arrojado a una acequia. Al abandonarlo allí, Sarah le pone su anillo de bodas en el dedo, para recordarle su promesa —extraída a la fuerza— de no decir a la policía que recibió una paliza.

Esta breve historia plantea múltiples y muy interesantes interrogantes. Lo que precipita los hechos es el deseo de Sarah de 'casarse', pero ¿no estaban acaso, ella y Michael, ya casados? Un sociólogo consideraría, con toda probabilidad, que Michael y Sarah han estado efectivamente casados por algún tiempo, en conformidad con costumbres de larga data en la subcultura de la gente deambulante en Irlanda. En el contexto de la obra, todo sugiere que ambos pretendían que su unión tuviera alguna permanencia y es claro, a partir del texto, que ante la comunidad de los hojalateros ambos se consideraban pertenecientes el uno al otro. Por añadidura, la versión que Michael propone de cómo 'consiguió' a Sarah en Rathvanna es evocadora de la forma en que los antropólogos describen el 'matrimonio por captura', que no es en realidad ninguna modalidad peculiar del matri-

monio, sino más bien un tipo de *boda*[9]. Así, desde la perspectiva de un sociólogo o un antropólogo, puede que la 'boda del hojalatero' tuviera lugar cuando Michael golpeó a Sarah en la oreja y se la llevó consigo[10].

Ahora bien, en caso de que la unión de Michael y Sarah fuera un 'matrimonio", desde el punto de vista de un sociólogo, ¿es ése acaso el único sentido en que ambos están casados? En la Irlanda de principios de siglo, que es cuando ocurre la obra de Synge, una pareja legítimamente casada por el derecho eclesiástico lo estaba también por el derecho civil. En rigor, nadie duda de que, bajo el derecho canónico, antes de que el Concilio de Trento estableciera en 1563 que la presencia de un sacerdote era obligatoria en las bodas, se hubiera considerado a Michael y Sarah unidos en matrimonio. Antes de esa fecha, los cristianos, al igual que otra gente, podían constituirse en matrimonio con tan sólo intercambiar el consentimiento y cohabitar[11]. Y no está en absoluto claro que el requisito tridentino se aplicara a Michael y Sarah, puesto que su cobertura estaba expresamente limitada a matrimonios de personas bautizadas. De hecho, el sacerdote alude repetidas veces, en la obra de Synge, a la condición 'pagana' de los hojalateros, lo que parece algo más que un simple epíteto al pasar. En determinado momento, el sacerdote especula del siguiente modo: "Me parece que nunca fuiste bautizada, Sarah Casey". Y recalca: "Sería una excentricidad de mi parte ir por ahí repartiendo los sacramentos a tu gusto y antojo".

Si, de hecho, Michael y Sarah no estaban bautizados, su situación marital en términos del derecho canónico no se ve afectada por la legislación matrimonial surgida de Trento. Bajo el derecho canónico, los matrimonios entre personas no bautizadas son presumiblemente válidos, siempre y cuando exista el factor crucial del consentimiento[12]. A mayor abundamiento, incluso si Michael y Sarah hubieran estado bautizados y las forma-

---

[9] König, "Sociological Introduction" (1974), pp. 40-41.

[10] La formación del matrimonio, en las sociedades simples, es entendida a menudo como un proceso más que un acontecimiento aislado; la 'boda' es relativamente menos importante. Los matrimonios según las prácticas consuetudinarias [customary marriages] pueden iniciarse con la negociación entre las familias o mediante una ceremonia de algún tipo, pero a menudo implican simplemente el vivir juntos, tener un hijo y poco a poco ser aceptados como pareja por los parientes y vecinos. Es el caso hoy, por ejemplo, de la mayoría de los nuevaguineanos. Véase Owen Jessep y John Luluaki, *Principles of Family Law in Papua New Guinea* (1985), pp. 17-28. A la vez, el matrimonio de hasta una quinta parte de la población inglesa podía, en fecha tan tardía como las postrimerías del siglo XVIII, decirse que sucedía de este modo. Véase Stephen Parker, "The Marriage Act 1753: A Case Study in Family Law-Making" (1987), pp. 133, 139.

[11] Véase nota 57.

[12] Véase James A. Coriden, Thomas J. Green y Donald E. Hentschel (eds.), *The Code of Canon Law: A Text and Commentary* (1985), cánones 1.055-1.060 y comentario al respecto.

lidades tridentinas eran exigibles en principio, la Iglesia no siempre insiste en la presencia de un sacerdote cuando el cumplimiento de este requisito supone una "grave inconveniencia"[13]. Y se ha sostenido que esa grave inconveniencia puede provenir de la extrema pobreza[14].

¿Por qué, pues, si Michael y Sarah están desde ya casados en uno o más sentidos del término, era tan importante para el Estado, para la Iglesia o para ambas partes que se celebrara una 'boda' o que estuvieran 'casados' en otro sentido? Si formulamos esta interrogante desde el punto de vista del Estado y la Iglesia, llegamos a un punto de gran significación para nuestra exploración en la relación cambiante del derecho de familia con la vida familiar propiamente tal. En el caso de Michael y Sarah, pobres seres itinerantes en la Irlanda de principios de siglo, está absolutamente claro que ni el Estado ni la Iglesia tenían mucho interés en su *status* marital. Ambos pertenecían a lo que Max Rheinstein denominara los 'grupos al margen' de la sociedad y del derecho[15]. Con lo cual quería decir que, históricamente, el derecho de familia prestaba escasa atención a los intereses de los más pobres, o de grupos étnicos minoritarios como los indios de Norte y Sudamérica, o de los afro-americanos en los Estados Unidos. Antes del siglo veinte, los individuos carentes de propiedad suscitaban la atención del sistema legal básicamente como sujetos del derecho criminal. Como acota Rheinstein, una de las grandes tendencias transformadoras del derecho de familia en la actualidad es precisamente la que confiere una atención creciente a las necesidades y demandas de los grupos hasta aquí desprotegidos.

Pero nos estamos adelantando. Baste con decir que el cura de Synge deja repetidas veces en claro que considera a los hojalateros fuera de su esfera normal de acción e interés. Considera a Michael y Sarah como distintos de "mis parejas que viven por aquí". Está, en rigor, tan intrigado por el interés de Sarah en casarse como lo están Michael y su madre. Cuando, durante la discusión por el costo de la boda, Sarah se echa a llorar ante la idea de que tal vez nunca consiga casarse, el sacerdote exclama sorprendido: "Qué raro de tu parte llorar así, con esa vida de errabundeos que llevas por los caminos".

Al considerar la pregunta de por qué Sarah, integrante de un grupo social marginal, con sus propios hábitos de matrimonio, quiere sin embargo casarse de otra forma, nos topamos con varias teorías explicativas de entre las cuales podemos optar. Pero es preciso descartar las que hoy se nos

---

[13] Ibídem, canon 1.116.

[14] John de Reeper, "The History and Application of Canon 1098" (1954), pp. 14 y 169.

[15] Max Rheinstein, "The Family and the Law" (1974), pp. 12-13.

vienen en seguida a la mente. El dramaturgo no brinda ningún elemento para suponer que Sarah aspire a mejorar su posición económica o a 'legitimar'[16] a sus hijos por la vía de insertarse en el marco de ciertos derechos y deberes legales concernientes al matrimonio. Ni tampoco nos ofrece Synge la más leve insinuación de que para la chica el matrimonio efectuado por un sacerdote se relacione en algún sentido con la salvación de su alma inmortal. Parece, más bien, preocupada de la aprobación social de otros grupos distintos al de los hojalateros. Una vez casada, piensa ella, "nadie más se arrogará el derecho de ofenderme y yo andaré vendiendo cacharros en Wicklow o Wexford o en la propia Dublín".

Pero ¿por qué habría de marcar tanta diferencia una ceremonia hecha a la rápida? Para los fines de nuestro estudio, esta pregunta viene a plantear el tema de cómo ciertas representaciones imaginarias que operan dentro del derecho pueden afectar en ocasiones la forma en que la gente percibe y experimenta la realidad de algo tan crucial en nuestras vidas como es el matrimonio. Estamos habituados a percibir el derecho como una instancia moldeada de manera importante por las creencias y el comportamiento, pero con suma frecuencia soslayamos el carácter reflejo y continuo de la interacción entre las leyes, las ideas, los sentimientos y el comportamiento humano. Con frecuencia, encandilados por el poder coercitivo del derecho, tendemos a minimizar sus facetas persuasivas y constitutivas.

En la obra de Synge, es Mary Byrne quien tiene la última palabra (inspirada, sin duda, por la necesidad de aclarar del mejor modo posible la situación que ha provocado su propio anhelo de saciar su sed). Y le dice a Michael, aun temeroso de la amenaza temprana de Sarah de abandonarlo en caso de que no se case con ella: "¿Y te parece que pagar con oro a Su Reverencia hará que una mujer se desista cuando lo que quiere es largarse?" Con Sarah, cuyas esperanzas de matrimonio se han visto defraudadas, la anciana habitualmente grosera y borracha adopta por primera vez un tono amable: "Es tu derecho y muy bueno para ti, seguro, Sarah Casey, pero ¿qué bien te hará? ¿Crees que por ponerte ese anillo en el dedo no te vas a convertir en una vieja y a perder ese bello rostro tuyo, o que eso va a aminorar tus pesares?" Sintiéndose levemente culpable —aunque no dema-

[16] Nótese que la clasificación legal de hijos nacidos fuera del matrimonio legal como 'ilegítimos' puede corresponder o no a nociones sociales de legitimidad. La definición legal de legitimidad es función de la definición que se tenga del matrimonio legal, mientras que la definición que hace un sociólogo del concepto ha de tener en cuenta otras pautas culturales además de las legales. Nótese también que la categoría legal de 'ilegitimidad' puede incluir a niños que viven en familia con ambos progenitores, mientras que el conjunto de los hijos 'legítimos' incluye a muchos que viven con un solo progenitor.

siado— por lo que ha ocurrido, la vieja Mary reafirma las tradiciones de la gente ambulante: "Largo tiempo hace que hacemos las cosas a nuestro modo —padres e hijos, y los hijos de los hijos, madres e hijas y de nuevo las hijas de sus hijas— y nunca nos ha hecho falta ir a la iglesia a prestar ningún juramento".

Así, pues, la propia noción de 'casarse' que Sarah maneja ahora queda abandonada, al final, en la acequia, con el cura y el anillo de bodas. ¿Por qué querría una pobre hojalatera, casada y desposada según la costumbre y ante los ojos de Dios, estar adicionalmente casada por una autoridad? Quizás fuera —como sugiere la vieja Mary— por "el influjo de la luna". Pero a la vuelta del siglo Irlanda estaba también cambiando y como parte de ese cambio la gente como Sarah comenzaba, en todo el mundo, a asociar la legitimidad con la legalidad.

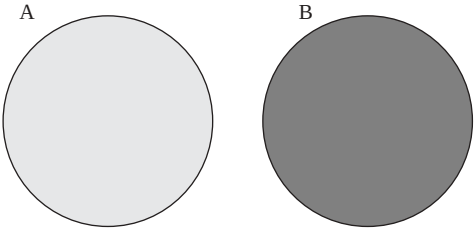
¿Qué es el matrimonio?

El título de esta sección no busca, en rigor, ninguna respuesta y más bien invita a reflexionar en torno a la pregunta, y a refinarla gradualmente. Supongamos que existe un conglomerado de hombres y mujeres casados según las normas del sistema jurídico al que están sujetos. Llamémosle el 'conjunto A'. Ahora supongamos que hay además otro conjunto de hombres y mujeres cohabitando en uniones compenetradas de una cierta idea de permanencia y que son explícitas ante la comunidad pertinente y aprobadas (o cuando menos no desaprobadas) por ella. Llamémosle a este segundo grupo el 'conjunto B' (ver Figura Nº 1).

En el conjunto A, como lo hemos definido, el matrimonio es aquello que el sistema legal lo considera como tal[17]. Los contenidos del conjunto B son susceptibles de mayores comentarios. Al conformar el conjunto B con los enlaces heterosexuales que tienen alguna noción de perdurabilidad y en los que las partes testimonian ante el medio social al que pertenecen (parientes, vecinos, clan, comunidad) que se consideran a sí mismas como pertenecientes la una a la otra, y que son además aceptadas como tales, he

[17] No cabe asumir, sin embargo, que siempre será tan fácil determinar el contenido de este conjunto. Puede que el sistema legal defina el matrimonio con referencia a las normas de algún otro sistema, como aquí se lo describe en la nota 22. O bien puede ser que el propio sistema legal reconozca más de un tipo de matrimonio, por ejemplo, el matrimonio 'pleno' y los matrimonios que tienen menos efectos jurídicos que el matrimonio pleno, como los matrimonios morganáticos de las familias reales y aristocráticas europeas, o la unión de esclavos masculinos y femeninos, conocida en el derecho romano como *contubernium.*

FIGURA Nº 1



incluido cierto comportamiento que un sociólogo o antropólogo podría caracterizar como 'conducta matrimonial'. El factor de la duración pretendida no significa que los enlaces que conforman el conjunto B sean necesariamente permanentes o al menos perdurables, ni, tal y como está configurado este conjunto, es preciso que esos enlaces sean sexualmente exclusivos o siquiera monógamos. Ni es el elemento de legitimación (en el sentido de aprobación social) isomorfo con el concepto de legalidad. Sigo aquí a René König, sociólogo de la familia, en el empleo de factores como la duración pretendida, la práctica de dar testimonio y la legitimación, para contribuir a superar las dificultades implícitas en definir aquello que transforma a una relación sexual en un 'matrimonio'[18]. Sin embargo, la imprecisión de esos términos deja varios casos en situación difícil de clasificar. Particularmente, las distinciones entre la conducta sexual aprobada y la que no lo es atraviesan, en todas partes, por continuos cambios. El conjunto B es, pues, un conglomerado con filtraciones, que incluye una amplia gama de uniones formales e informales, algunas de las cuales son reconocidas por el sistema legal y otras no.

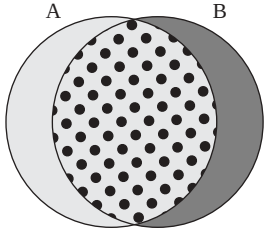
Nótese que, aun cuando pueda ser útil, o incluso esencial, que diferenciemos en teoría entre el conjunto de matrimonios *de jure*, por una parte, y el conjunto de matrimonios *de facto* o de comportamientos pareci-

[18] König, "Sociological Introduction" (1974), p. 39. Los tribunales norteamericanos han batallado heroicamente con este problema al intentar determinar si ha tenido lugar o no un matrimonio legalmente reconocido por el *common law*, y cuándo ha tenido lugar. Por ejemplo, se ha sostenido que un matrimonio de acuerdo con el *common law* existe cuando una pareja ha pasado unas pocas noches junta en un hotel, *Madewell v. United States*, 84 F. Supp. 329 (E. D: Tenn, 1949), pero no en el caso en que el hombre murió poco después de que la pareja se registrara en la recepción del hotel, *Estate of Kieg*, 140 P. 2d 163 (Cal. App. 1939).

dos al conyugal, por la otra, en los países que son el principal objeto de nuestro estudio, los dos conjuntos se superponen (ver Figura Nº 2).

La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de las uniones *de facto* a las que el Estado confiere el sello de matrimonios legales, y el Estado es, en los países que nos interesan, la instancia de control social que tiene el monopolio jurídico sobre el matrimonio y el divorcio. La porción del conjunto A que no se intersecta con el conjunto B incluye a aquellos hombres y mujeres entre los cuales existe un nexo marital legal, pero no en una unión *de facto* entre ambos. En la experiencia cotidiana, esto incluiría, entonces, a parejas separadas aunque no divorciadas y a aquellas parejas entre las cuales se ha puesto fin a la unión *de facto*, pero no al vínculo legal, mediante el mecanismo a veces conocido como *el divorcio de los pobres*: la partida de uno de los cónyuges, sin que éste tenga intención de volver.

FIGURA Nº 2



La fracción del conjunto B que no se intersecta con el conjunto A incluye a todas esas uniones *de facto* tal y como ellas fueron definidas previamente, las cuales no son reconocidas como matrimonios por el sistema legal. En la experiencia cotidiana de los países en consideración, esto incluiría la cohabitación sin adecuarse a los procedimientos establecidos por el Estado para la constitución de un matrimonio legal. Aquí encontraríamos, por ejemplo, a individuos que cohabitan y que han elegido no casarse legalmente, como también a aquellos que están impedidos de formar un matrimonio legal porque existe un matrimonio legal previo no

disuelto de una o ambas partes[19]. El conjunto B incluiría también a personas que cohabitan en el seno de matrimonios religiosos no reconocidos en su validez legal por el Estado. Esto puede ocurrir ocasionalmente, por ejemplo, en países como Francia y [la ex] Alemania Occidental, donde el matrimonio civil es obligatorio, o en Irlanda, donde no existe el divorcio y el matrimonio religioso de una persona cuyo matrimonio anterior ha sido disuelto por anulación eclesiástica no es reconocido como válido bajo el derecho secular*.

En la práctica, en los cuatro países cuyas normas legales examinamos en este libro, la superposición entre los conjuntos A y B es considerable, como sugiere en términos gruesos la Figura Nº 2. La mayor parte del comportamiento matrimonial ocurre, en esos países, dentro de un marco legal. La facilidad del divorcio ayuda a reducir esa porción del conjunto A que no se intersecta con el conjunto B. Pero esa parte del conjunto B que no se intersecta con el A, las uniones no legales *de facto*, ha aumentado considerablemente en años recientes, acompañada del desarrollo de todo un cuerpo nuevo del derecho de cohabitación. La decreciente sujeción del comportamiento marital a las normas legales es, en las sociedades occidentales, tan notoria que quizás no sea preciso hacer hincapié en que los contenidos de los conjuntos A y B y su relación entre sí han variado enormemente de una época a otra y de un lugar al otro.

La amplitud de tales variaciones queda clara cuando nos remontamos hacia atrás, lejos de nuestro contexto histórico y cultural inmediato. En la Europa Occidental previa a la Reforma, por ejemplo, *no había* un conjunto A de vínculos legales creados con sujeción a las normas del Estado secular[20]. Más bien deberíamos hablar de matrimonios reconocidos como

---

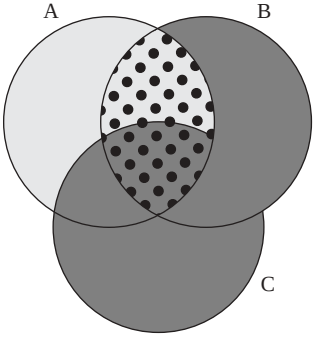
[19] La institución norteamericana del matrimonio de acuerdo con el *common law* pertenece al conjunto A, porque es una modalidad del matrimonio legal, reconocida como tal en unos catorce estados cuando un hombre y una mujer, legalmente aptos para casarse, acuerdan convertirse en marido y mujer y "en presentarse ante el mundo como tales". El matrimonio de acuerdo con el *common law* es, en la teoría jurídica, vinculante hasta que se lo termina mediante un divorcio legal formal. Lo mismo vale en Escocia para el matrimonio "según la costumbre y el reconocimiento" ["by habit and repute"]. También pertenecen al conjunto A esas uniones transformadas en matrimonios legales por un tipo de legislación usual en los países de Centro y Sudamérica, siempre que la cohabitación estable durante un cierto número de años sea el equivalente del matrimonio formal. En América Latina, donde el requisito para un matrimonio formal establecido por el Concilio de Trento estuvo suspendido en su aplicación durante largo tiempo, dada la escasez de sacerdotes en la región, el matrimonio informal es aún hoy muy común. Véase José Arraros, "Concubinage in Latin America" (1963), p. 330.

* En el original en inglés: *secular*. La expresión 'secular' se ha mantenido aquí, y posteriormente, en el sentido de no religioso o no eclesiástico. [N. del T.]

[20] En el mundo medieval, el 'derecho' no era equivalente al sistema de normas sancionado por el Estado, porque el 'Estado' como tal era sólo una de entre varias otras organizaciones políticas que se disputaban entre sí la jurisdicción sobre distintas facetas de la vida social y, a la vez, el poder político.

tales bajo las normas establecidas por otras organizaciones de control social, principalmente aquellas del derecho canónico. Incluso hoy, muchos hombres y mujeres de Inglaterra, Francia, los Estados Unidos o [la ex] Alemania Occidental se consideran a sí mismos subordinados a los sistemas jurídicos de la Iglesia de Inglaterra o de la Iglesia Católica, o del derecho islámico o judío. Dichos sistemas legales de índole religiosa son ahora independientes del Estado, y el derecho marital que proponen ya no es reconocido por los Estados que nos ocupan, salvo en un grado limitado en Inglaterra. Para tales personas hemos de configurar un conjunto C, el de los lazos matrimoniales establecidos según el derecho que rige al grupo religioso de una de las partes. Puede que dicho conjunto se superponga, aunque no necesariamente coincida, con los otros dos conjuntos de los nexos *de facto* o legales (ver Figura Nº 3).

FIGURA Nº 3



En países en que el derecho de familia inspirado en un credo particular es aún importante, como en Israel, la India y muchas naciones islámicas, lo habitual no es que la reglamentación legal del matrimonio coincida sólo accidentalmente con la reglamentación religiosa. Aunque en los Estados Unidos y Europa Occidental estamos acostumbrados a sistemas de regulación conyugal directa por el Estado, ello no es en ningún caso el modo universal de reglamentación en el mundo de hoy. En muchas sociedades de naturaleza pluralista, en las que el sistema legal debe integrar diversas prácticas maritales e ideales culturales, resulta útil diferenciar, como hiciera Max Rheinstein, entre los patrones *occidental* y *oriental* de

regulación de los asuntos familiares[21]. Él mismo empleaba estos términos, no en un sentido geográfico estricto, sino más bien para diferenciar, respectivamente, entre aquellos países que tratan las cuestiones del derecho de familia como sujetas en principio a las leyes del Estado secular, y los que las tratan como regidas en principio por el derecho consuetudinario o religioso de los grupos a los que pertenecen los individuos involucrados.

Dentro del patrón occidental, uno puede diferenciar a la vez dos variantes fundamentales. La primera intenta establecer mecanismos legales que se correspondan con los patrones de creencias o de comportamiento ampliamente compartidos por los grupos y subgrupos de los que se compone la sociedad. Éste es el enfoque adoptado en Inglaterra, Francia y varios otros países europeos. No hace falta decir que el derecho secular de familia de esta índole no coincide jamás plenamente con *todos* los patrones de vida verdaderamente existentes en la sociedad. Así, algunos países, como los Estados Unidos y Suecia, han adoptado un enfoque alternativo en base a lo que Rheinstein denominaba la *ideología de la tolerancia*. El derecho secular de familia se abstiene por lo general, en tales países, de intentar articular una moral común. Y se limita a definir meramente los actuales límites externos de la diversidad permisible en los asuntos familiares (por ejemplo, la prohibición de la poligamia simultánea), al tiempo que deja el máximo espacio para la libre elección y evita cualquier juicio de valor aparte de los que propicien la libertad individual.

La opción 'oriental' del pluralismo se da en muchos países donde coexisten varias comunidades religiosas y étnicas bien definidas, con sus propias normas conyugales establecidas, como ocurre en la India, Indonesia, Israel, Líbano y en la mayor parte de los países islámicos, aunque no en todos ellos[22]. Una variante de este enfoque queda ejemplificada por la India, donde los jueces estatales de los tribunales seculares aplican a ciertas materias, como las cuestiones matrimoniales y el divorcio, leyes religiosas inspiradas en los credos hindú, musulmán, parsi, cristiano y judío. El modelo predominante, empleado en Israel y en varios de los países islámicos, deja las cuestiones relativas al estado de la persona para ser resueltas por los tribunales religiosos o los tribunales a que acostumbran recurrir los grupos involucrados. En los sistemas orientales, entonces, el conjunto A *incluye* al C.

---

[21] Rheinstein, "The Family and the Law" (1974), pp. 8-10.

[22] En estos sistemas, en que la jurisdicción sobre los asuntos familiares depende del grupo al que pertenecen una o ambas partes, pueden aflorar complejos conflictos jurídicos y problemas jurisdiccionales cuando personas de distinta religión o de distintos grupos o nacionalidades están involucrados en un mismo caso, o cuando el *status* de personas casadas o divorciadas en un país ha de ser determinado por los tribunales de otro.

Los países cuya legislación examinamos en este libro optaron hace ya mucho tiempo por un derecho de familia que suele ser promulgado y aplicado por los organismos estatales y se han olvidado, en buena medida, de que el matrimonio y los asuntos familiares estuvieron alguna vez regulados, en lo esencial, por las convenciones, la costumbre, la ética o las normas religiosas. Con todo, la regulación legal de tales asuntos, en el sentido moderno del término, no existía en la Europa previa a la Reforma y ellos fueron ampliamente ignorados por el derecho de la época romana. Una de las preguntas planteadas por los desarrollos recientes, que son la materia del presente volumen, es la de si el actual período de cambios en el derecho de familia de todos o algunos de los países aquí examinados apunta, en su orientación, a un vaciamiento progresivo del conjunto que agrupa a las relaciones conyugales de carácter legal. Cierto es, como ha sostenido un autor sueco, que el desarrollo jurídico de su país ha estado marcado por una mengua del interés oficial en el matrimonio como institución[23]. De ser efectivamente así, ¿estará Suecia marcando el rumbo, como tan a menudo ha ocurrido en el área del derecho de familia, que habrán de seguir tarde o temprano otros países occidentales?

En este momento caben otras tres observaciones. En primer lugar, las mismas distinciones, recién bosquejadas, entre matrimonio legal, matrimonio *de facto* y uniones reconocidas como 'matrimonios' bajo el derecho de inspiración religiosa o el derecho consuetudinario, se perciben en otras instituciones que son a la vez legales y sociales. Así, por ejemplo, más adelante habremos de diferenciar entre divorcio legal, terminación *de facto* del 'matrimonio' y disolución de los vínculos conyugales bajo el derecho religioso o consuetudinario. En segundo lugar, cuando examinemos cómo las antiguas normas legales se vieron afectadas por vertiginosos cambios en las costumbres, advertiremos que, al aumentar las discrepancias entre las normas jurídicas y el comportamiento conyugal real dentro de la sociedad, comienza a perfilarse con mayor nitidez una institución matrimonial en las sombras dentro del conjunto de las uniones *de facto*. Y a medida que esta versión en las sombras* de la institución del matrimonio formal crece en amplitud e importancia, al punto que el sistema legal ha de tenerla en cuenta de uno u otro modo, sufre un nuevo viraje la relación entre el derecho, el comportamiento y las ideas. Finalmente, aparte de la distinción

[23] Comentario de Jacob Sundberg en que se refiere al hecho de que las directrices para la reforma del derecho de familia formuladas en 1969 por el Ministerio de Justicia sueco especificaban que el borrador de la futura legislación no debía favorecer en modo alguno a la institución del matrimonio por sobre otras formas de cohabitación. Véase Jacob Sundberg, "Nordic Laws" (1971), p. 40.

* En el original en inglés: 'a shadow institution of marriage'. (N. del T.)

entre el matrimonio como institución legal y como institución social, será de gran utilidad, al leer los capítulos subsecuentes, tener en mente una segunda distinción, la cual descansa enteramente en el ámbito de las regulaciones legales: la distinción, en cuanto a su consecuencia jurídica, entre el estado de casado y el de no casado. Aquí también comprobaremos que están ocurriendo cambios de vasto alcance, y que una distinción que alguna vez fue de importancia ha comenzado a desdibujarse.

El camino recorrido desde Roma

Cualquier texto sobre el derecho de familia, quizás incluso más que aquellos relativos a otras áreas del derecho, ha de enfrentarse al problema de la compleja relación entre los hechos que ocurren en el ámbito del derecho y las prácticas sociales generalizadas, o eso que los historiadores franceses denominan las *mentalités*. Como dijo una vez Otto Kahn-Freund acerca del derecho de familia, "aquí, más que en ningún otro caso, ha de entenderse el derecho como el fruto de determinadas fuerzas sociales y como una fuerza que a su vez repercute en la sociedad, en los hábitos y convicciones de la gente"[24]. Pero esto es algo más fácil de decir que de llevar a cabo. Con frecuencia, es posible rastrear la irrupción de normas y de ciertos rituales jurídicos en las ideas o prácticas de grupos influyentes, pero es extremadamente difícil determinar qué efecto pueden tener los constructos legales en sí sobre las actitudes o el comportamiento de la gente. El estudio de Max Rheinstein acerca de la legislación del divorcio y el comportamiento conyugal en varios países estableció que no hay una relación clara y simple entre una ley de divorcio estricta y la estabilidad matrimonial en una sociedad determinada, ni entre una ley de divorcio indulgente y la inestabilidad marital[25]. Sus hallazgos, que desafiaban las creencias ampliamente sostenidas en la época en que inició su labor, han sido apoyados por estudios ulteriores[26]. Dichos estudios no arrojan, sin embargo, demasiada luz sobre los posibles efectos indirectos y a largo plazo de las normas legales o de cambios abruptos en las tradiciones legales de larga data.

La historia y la leyenda, al igual que el mundo que nos rodea, nos sugieren abundantes ejemplos de ciertas conductas que se resisten a quedar

[24] Otto Kahn-Freund, citado por Aidan R. Gough en "Book Review" (1974), p. 118.

[25] Rheinstein, *Marriage Stability, Divorce, and the Law* (1971).

[26] Jacques Commaille, Patrick Festy, Pierre Guibenti, Jean Kellerhals, Jean-François Perrin y Louis Roussel, *Le divorce en Europe Occidentale: La loi et le nombre* (1983).

reguladas por decreto. De Jerjes, a quien el Libro de Ester le atribuye la imposición de esa ley inmutable de los medos y los persas según la cual el marido era el cabeza de familia, se suele decir también que envió a sus soldados, látigo en mano, a azotar el mar embravecido para que se le sometiera. Las normas legales tienen con seguridad cierto efecto en la forma de pensar, sentir y actuar de la gente, pero es sorprendente comprobar la porfía con que las formas de comportamiento en la vida familiar parecen seguir sus propios patrones, independientemente del sistema legal.

Un milenio entero de regulación matrimonial en lo que ahora es Italia nos da un ejemplo claro de ello. En la época de la última república romana y en la Roma imperial, sabemos de buena fuente que "el matrimonio era para los romanos, como para otros pueblos de la antigüedad, una cuestión *de facto* más que *de jure*, pues se daba por sentado que dos personas estaban casadas no porque hubieran tomado parte en alguna ceremonia en particular sino porque vivían de hecho como marido y mujer"[27]. Era frecuente, al parecer, que los matrimonios partieran con alguna ceremonia de algún tipo: en lugar de darse una bofetada en la oreja, podía ocurrir en Roma que la novia cruzara el umbral de la casa del novio en los brazos de éste y que recibiera obsequios relacionados con el fuego y el agua. Y al igual que el vínculo matrimonial se iniciaba con la vida en común, solía concluir cuando uno de los dos esposos ponía término a la vida en común. El divorcio estaba al alcance de cualquiera de las partes y, a finales de la última república, se nos dice que se había convertido en algo habitual, al menos entre las clases altas (los únicos sectores de la sociedad romana de los que, por lo demás, tenemos conocimiento)[28]. La formación de un matrimonio romano no era una transacción legal, sino un hecho empírico que, por cierto, tenía consecuencias legales.

Incluso después de la conversión de Constantino, las cosas no variaron con celeridad. Como escribe Rheinstein, "la libertad plena de terminar un matrimonio era una norma tan firmemente arraigada en la tradición que llevó siglos de ingentes esfuerzos cristianos sustituirla por el novedoso principio de la indisolubilidad"[29]. En rigor, esta nueva doctrina requirió de algún tiempo para consolidarse en las propias enseñanzas de la Iglesia. Al principio, la legislación romana posterior a Constantino no hizo más que amenazar con un castigo al marido que repudiaba a su esposa sin motivo. El intento, en el 542 d. C., del emperador bizantino Justiniano de ampliar

[27] H. F. Jolowicz, *Historical Introduction to the Study of Roman law* (1967), p. 113.
[28] Ibídem, p. 245.
[29] Rheinstein, *Marriage Stability, Divorce, and the Law* (1971), p. 16.

las penas existentes al divorcio por mutuo consentimiento fue tan impopular que su sucesor las descartó prontamente.

El matrimonio se hizo indisoluble sólo cuando, tras varios siglos de lucha, la Iglesia obtuvo la jurisdicción de sus propios tribunales sobre las causas matrimoniales[30]. Una vez establecida dicha jurisdicción en los varios estados y reinos que abarcaba el territorio de la Italia de hoy, el principio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial se convirtió en una norma legal (excepto por el breve período de gobierno napoleónico), hasta que un polémico referéndum nacional introdujo el divorcio, en diciembre de 1970. En gran medida, el comportamiento marital quedó orientado, a través del tiempo, por las normas del derecho canónico. Por otra parte, en todo el extenso período de indisolubilidad legal, muchos italianos siguieron la antigua costumbre de disolver sus respectivas uniones con el mero alejamiento, ni siquiera molestándose en aprovechar la posibilidad de divorcio brevemente introducida por las leyes francesas impuestas en el curso de la conquista napoleónica[31]. En 1958, ciertas estimaciones hechas a raíz de las propuestas para la introducción del divorcio indicaban que había cerca de seiscientas mil parejas casadas en Italia cuya vida en común había terminado de hecho, y que cerca de un millón de hombres y mujeres italianos vivían en uniones irregulares, en las que uno o ambos estaban legalmente casados con alguien más, distinto de la persona con la que cohabitaban. En 1969, un informe de la Cámara de Diputados de Italia afirmaba que había entonces 1,16 millón de parejas separadas en el país. Muchas de ellas incluían a las llamadas 'viudas de blanco', cuyos maridos trabajaban en otros países europeos. La cifra de personas en situaciones de cohabitación informal (descontando las uniones formadas por trabajadores italianos en el extranjero) fue estimada en cerca de cuatro millones, cuando se incluía a los hijos. Así, pareciera que, durante un largo período, las prácticas del matrimonio y la separación informales estuvieron tan arraigadas en Italia como el ideal de la indisolubilidad del vínculo. La estricta ley del divorcio italiana de 1970 no representó, en ningún caso, una vuelta a las circunstancias legales que prevalecían en la materia en la era romana. Más bien pareció un intento de adecuar en algún sentido el derecho al comportamiento de la población y de incorporar a la legalidad a los hogares *de facto*.

El curso seguido por la regulación del matrimonio en Italia sugiere múltiples interrogantes. ¿Cómo y por qué se consolidaron en primera ins-

[30] Véase, en general, ibídem, pp. 7-28, y nota 64 más adelante.

[31] Para una caracterización detallada del derecho matrimonial italiano hasta la reforma de 1970, véase Walther Fleig, *Die Ehescheidung im italienischen Recht* (1975), pp. 19-38.

tancia en el derecho las ideas de indisolubilidad y del matrimonio ritual? ¿Cómo lograron conseguir el derecho canónico y más tarde el derecho secular —en la medida en que lo consiguieron— la aceptación general de estas nociones, aunque no su práctica generalizada? Si el ideal de la indisolubilidad contemplado en el derecho de inspiración religiosa, y finalmente en el derecho secular, no estaba en consonancia con una fracción significativa del comportamiento marital de los italianos, ¿por qué fue tan difícil asegurarse la aceptación del nuevo principio legal de disolubilidad limitada del vínculo? ¿Hay alguna razón por la que los ideales encarnados en el derecho deban reflejar cualesquiera modalidad o formas de conducta generalizadas en la sociedad? O, por el contrario, ¿tienen el Estado o la sociedad algún interés particular en preservar un simbolismo jurídico que *no* se corresponde exactamente con los patrones de conducta reales? ¿Tienen los individuos algún interés en preservar dicho simbolismo? ¿Cuál es la relación de la política y las ideas con el derecho de familia y el comportamiento familiar, y viceversa?

El mero hecho de trazar las principales etapas del proceso a lo largo del cual el matrimonio se transformó en una institución legal en Occidente, y las principales formas en las que el interés oficial por la familia se manifestó antes del siglo veinte, arrojan una luz significativa sobre las cuestiones planteadas. Sumado a todo ello, un breve recuento de ese proceso nos ayuda a explicarnos cómo fue que el derecho de familia en Occidente hizo suyas las formas que ya estaban practicándose cuando los hechos a los que este libro está abocado comenzaron a ocurrir.

De la costumbre al derecho

¿Qué pretendía usted entrometiéndose en nuestros asuntos, cuando hace tantísimo tiempo que actuamos a nuestro modo...?

J. M. Synge, *La boda del hojalatero*[32]

La regulación a base de normas legales oficialmente promulgadas no es más que una forma posible de control social. Por añadidura, es una modalidad surgida en gran escala tan sólo en fecha relativamente reciente en el curso de la historia, como un elemento característico de aquellos procesos de racionalización y consociación que han ido permeando gra-

[32] Véase Synge, *The Complete Plays of John M. Synge* (1960), p. 207.

dualmente todas las facetas de la vida social[33]. Un espíritu inquisitivo podría, así pues, preguntarse, al contemplar los elaborados sistemas del derecho de familia que hoy nos circundan, cómo fue que los asuntos matrimoniales y familiares que alguna vez estuvieron regidos sólo por la costumbre, la ética, las convenciones o la religión, llegaron a regularse en un grado tal por el derecho. Sabemos, por vía de ejemplo, que las parejas de hombres y mujeres cro-magnones no se presentaban ante un funcionario para que los uniera en un vínculo, ni debían pedirle permiso a ningún juez para separarse. ¿Cómo, entonces, las innovaciones ocurridas en el derecho de Occidente se convirtieron, en buena medida, en nuestros actuales hábitos matrimoniales?

Nadie sabe cuándo ocurrió el giro desde los patrones biológicos de apareamiento hasta las formas culturales. Ni, para el caso, nadie sabe mucho hasta ahora acerca de lo que es innato y lo que es cultural en el hombre. Con la ayuda de los etólogos, antropólogos y sociólogos, hemos llegado a entender en algún grado cómo evolucionaron los distintos hábitos y rituales de apareamiento en las sociedades más simples, pero los orígenes de ciertas constantes y hábitos del comportamiento humano están todavía envueltos en tinieblas.

En lo que hace a los antecedentes germánicos y romanos de los modernos sistemas occidentales, los historiadores han sido capaces de aclararnos en parte cómo se manifestó originalmente el interés en aparearse, en las comunidades o grupos de parentesco, y nos han hablado de las formas tempranas de jerarquización y *status* derivadas del matrimonio y los nacimientos. El matrimonio era un *status* social categórico, pero la boda o el rito matrimonial parecen haber cobrado importancia únicamente en circunstancias especiales, en particular allí donde había intercambios patrimoniales. Se dice que las dos formas más tempranas de rituales matrimoniales romanos fueron un ceremonial religioso que practicaba la clase patricia y una forma de adquisición simbólica. Aunque hay rastros de matrimonios iniciados 'por captura' en las leyes germánicas tempranas, la forma habitual era un matrimonio por compra y venta cuya principal función parece haber sido la de proporcionar a la parentela de la novia la opción de regatear a cambio de un trato honorable para ella como esposa y como viuda[34]. Entre los germanos de los primeros tiempos, el matrimonio difería de otras uniones sexuales en que la esposa y los vástagos del matrimonio disfruta-

[33] Max Weber, en Max Rheinstein (ed.), *Max Weber on Law in Economic and Society* (1954), p. 35.

[34] Rudolph Hübner, *A History of Germanic Private Law* (1968), p. 593; Frederick Pollock y F. W. Maitland, *The History of English Law* (1968), Vol. 2, p. 364.

ban, frente al marido y sus parientes, de una posición más segura que otras mujeres con quienes éste podía haber cohabitado y que la descendencia de ellas[35]. La distinción entre matrimonio legítimo y otras uniones que, aunque no eran reprobadas, tenían un *status* inferior aparece no sólo en los sistemas más primitivos sino también en el derecho romano y el derecho civil de muchas naciones del continente europeo, en el lapso que va hasta los inicios de los tiempos modernos.

Desde una perspectiva sociológica, la significación del matrimonio legítimo radica en que posibilita que la familia opere como una institución conferidora de *status.* Tan sólo la esposa y los hijos legítimos comparten la posición social de su esposo y padre. En la costumbre generalizada de las familias de alto rango de entregar en matrimonio a sus hijas sólo cuando existe la seguridad de un *status* preferencial para la hija y sus vástagos, Max Weber veía el origen de las primeras características *legales* del matrimonio: la dote, el compromiso de apoyar a la esposa y de compensarla en caso de abandono, y la posición sucesoria de sus hijos[36].

En culturas o grupos sociales en que el matrimonio es sencillamente la decisión de las partes de vivir juntas y criar a los hijos en común, y donde el matrimonio no implica intercambio alguno de posesiones, la relación de pareja tiende a ser disuelta simplemente por la deserción o separación de las partes[37]. Pero, a medida que la formación del matrimonio se va tornando más compleja, también se suele complicar el procedimiento para su disolución. El énfasis puesto en los procedimientos para ambos casos parece variar con las funciones que ejercen la jerarquización y la propiedad. Allí donde éstas son relevantes, aparecen normas para diferenciar claramente qué relaciones sexuales darán origen a ciertos derechos. Surge la necesidad de justificar la disolución del matrimonio y de proporcionar motivos para contestar a las objeciones de los parientes[38].

Era el caso ya en la fase temprana del derecho consuetudinario romano y germánico. Se dice que las primeras tribus germanas eran relativamente monógamas, aun cuando se toleraba una multiplicidad de esposas, y que Roma, durante sus primeros quinientos años de existencia, tuvo una tradición de estabilidad conyugal, pese a que los matrimonios eran susceptibles de disolución. En la sociedad moralmente estricta de la república

---

[35] Hübner, *A History of Germanic Private Law* (1968), p. 588.

[36] Weber, en Rheinstein (ed.), *Max Weber on Law in Economic and Society* (1954), p. 134.

[37] König, "Sociological Introduction" (1974), pp. 58-60. Véase, en busca de ejemplos contemporáneos, Jessep y Luluaki, *Principles of Family Law in Papua New Guinea* (1985), pp. 53-57.

[38] König, "Sociological Introduction" (1974), p. 59.

romana inicial, un hombre era censurado por repudiar a su esposa sin un motivo, como eran la esterilidad o la infidelidad[39]. El antiguo derecho germánico reconocía la disolución del vínculo marital por acuerdo entre el esposo y los parientes de la esposa y permitía al marido, y por consiguiente a la esposa, concluir el matrimonio unilateralmente por ciertas razones de peso[40].

Por ende, en la época romana y entre los pueblos germanos que finalmente invadieron el Imperio Romano, la falta de regulación legal no significaba que el matrimonio estuviera por completo fuera de ningún control social. Ni tampoco, en el caso específico de Roma, el hecho de que el matrimonio no estuviera regulado por el derecho implicaba que este último era indiferente al matrimonio. La existencia o no de un matrimonio era indirectamente significativa para el derecho romano cuando se ocupaba de problemas que involucraban la pertenencia o no a uno de los 'órganos' del cuerpo político, de cuestiones sucesorias o asociadas con la muerte de alguien, y de la asignación de responsabilidades por daños civiles[41]. Pero al lidiar con tales asuntos, el derecho romano aceptaba como matrimonio lo que fuera que, consuetudinariamente, se hubiera postulado como tal. Como queda dicho, no reconocía, sin embargo, los matrimonios entre personas comunes y esclavos o, en cierta época, entre senadores, u otros individuos de clase alta, y mujeres de rango inferior.

En el largo período de la historia de Roma, las costumbres matrimoniales variaron considerablemente. En épocas tempranas, el matrimonio entre la clase dirigente de los patricios se iniciaba con una ceremonia religiosa, la *confarreatio*. Había otras dos formas de confirmar el estado marital: la *coemptio*, que implicaba una formalidad que se supone representaba una compra simbólica; y el *usus*, que no implicaba ninguna formalidad en particular sino que quedaba establecido cuando una pareja había vivido ya como marido y mujer durante un año. Las modalidades disponibles para iniciar un matrimonio eran, según Corbett, "en buena medida indiferentes desde el punto de vista legal" (salvo en un grado limitado en el caso de la *confarreatio*), en el sentido de que la validez del matrimonio no dependía de su observancia[42]. Originalmente, al parecer, y sin importar cómo se hubiera formado el matrimonio, éste dejaba siempre a la esposa bajo el control legal (*manus*) del marido.

---

[39] Jolowicz, *Historical Introduction to the Study of Roman Law* (1967), pp. 117-118.

[40] Jean Brissaud, *A History of French Private Law* (1968), p. 142; Hübner, *A History of Germanic Private Law* (1968), p. 613.

[41] Rheinstein, *Marriage Stability, Divorce, and the Law* (1971), p. 15.

[42] Percy E. Corbett, *The Roman Law of Marriage* (1930), pp. 68-105; 218-248.

En tiempos de la última república, estos tres métodos empleados para desposarse habían quedado obsoletos y dieron paso al así llamado *matrimonio libre y consensual*, un matrimonio sin *manus*, en el que el hombre y la mujer se casaban cuando iniciaban simplemente una vida en común, siempre que hubiera entre ellos el *affectio maritalis*, esto es, que se consideraran entre sí marido y mujer. El matrimonio libre se conoció en la época de los más tempranos códigos romanos, las Doce Tablas (451-450 a. C.). Era habitual en los siglos tercero y segundo a. C. y se convirtió en la modalidad normal de matrimonio en la última república. No había nada excepto el *affectio maritalis* para diferenciar al matrimonio libre de cualquier otro tipo de unión sexual. Si esta condición mental cesaba en alguna de las partes, el matrimonio llegaba, en principio, a su fin. Legalmente, el matrimonio libre se consideraba disuelto cuando las partes se separaban por mutuo acuerdo, o cuando uno de los esposos abandonaba el hogar y notificaba al otro su intención de terminar la relación. En cierta época, bien pudo haber ocurrido que fuera sólo el marido quien podía terminar unilateralmente el vínculo. Pero al menos a fines del siglo tercero a. C., y quizás desde principios de esta centuria, las partes estaban en igualdad de condiciones a este respecto. Se ha sugerido que el uso de esta facultad del marido y la esposa de dar por concluido un matrimonio fue muy habitual en el siglo primero a. C.; y el único disuasivo para ello eran las normas que regían la devolución de la dote. Cabe afirmar, pues, que en Roma el matrimonio se había convertido en una transacción sin formalidades, susceptible de disolución por voluntad de cualquiera de las partes, y que siguió igual hasta la época de Constantino (c. 285-337 d. C.), el primer emperador cristiano.

Los emperadores cristianos pusieron escaso empeño en regular el comportamiento familiar. De Constantino a Justiniano (c. 482-565 d. C.), la legislación matrimonial romana se limitaba a castigar los repudios injustificados. Si un cónyuge repudiaba al otro sin una buena razón, él o ella podían verse obligados a devolver la dote matrimonial o perder otros derechos de propiedad. A la postre, el cónyuge ofensor podía ser incluso deportado, confinado a un monasterio o sometido a ciertas restricciones en relación con futuros matrimonios. Pero incluso estas leyes algo más restrictivas permitían repudios por alguna causa y no afectaban al divorcio por mutuo acuerdo. Su estudio llevó a John Noonan a la conclusión de que la legislación de los emperadores cristianos presumía que los matrimonios eran disolubles y consideraba el nuevo matrimonio como la secuela normal de la disolución[43]. Según Noonan, cabe "preguntarse [...] si las prohibiciones de

[43] John T. Noonan Jr., "Novel 22" (1968), pp. 44-46.

divorcio introducidas desde Constantino hasta Anastasio tuvieron alguna fuerza impositiva", en la medida en que alguien pudiera pagar el precio requerido o llegar a un arreglo[44]. Naturalmente, en la medida en que las sanciones estaban asociadas tan sólo al patrimonio, cabe pensar que sus efectos reales se limitaban a las clases pudientes[45].

En un principio, ni siquiera Justiniano, el emperador bizantino tan devoto, quiso interferir en la cuestión de la disolubilidad conyugal por mutuo acuerdo, declarando en algún momento que "de aquello que ocurre entre los seres humanos, todo lo que está unido puede disolverse"[46]. Más tarde, sin embargo, rompió con la tradición romana y estableció penas para el divorcio por mutuo consentimiento y también para el repudio injustificado[47]. Ello no obstante, lo que es significativo, tampoco entonces afirmó que los matrimonios fueran en principio indisolubles. Sus restricciones al divorcio consensual no fueron bien recibidas ni bien cumplidas y tuvieron a la vez corta vida, siendo derogadas por su sucesor en uno de sus primeros actos de gobierno, tras ascender al trono[48].

Así, se puede afirmar que, en las postrimerías de la era romana, el derecho tenía poco que ver con la institución social del matrimonio en forma directa. La idea de regular legalmente la constitución del vínculo o el comportamiento en la vida conyugal era simplemente desconocida, y la legislación de los emperadores cristianos había intentado de modo muy limitado controlar legalmente la disolución del matrimonio, aceptando todos ellos, implícitamente, la premisa de que el vínculo podía disolverse. Por ende, en Roma y entre los pueblos germanos, el matrimonio no fue una institución legal. Para descubrir cómo se volvió una instancia formal, indisoluble y sujeta a una reglamentación oficial de vasto alcance, hemos de recurrir a otra fuente de control social, la cual, en la época de la legislación cristiano-romana, no era en modo alguno un sistema jurídico sino tan sólo un cuerpo de doctrina en evolución: el derecho canónico católico-romano.

La jurisdicción eclesiástica

La lucha por el control

Tras el desmembramiento del Imperio Romano de Occidente, en el curso del siglo quinto d. C., la Iglesia cristiana quedó no sólo intacta sino que se volvió más fuerte que nunca. Los nuevos reinos de Occidente no

[44] Ibídem, p. 53.
[45] Ibídem, pp. 44-46.
[46] Ibídem, p. 57.
[47] Ibídem, pp. 65-68; Jean Gaudemet, *Le marriage en Occident* (1987), p. 84.
[48] Rheinstein, "The Family and the Law" (1974), p. 16.

habían desarrollado aún esas organizaciones políticas copiadas del patrón romano que habrían de derivar, subsecuentemente, en varias formas de feudalismo o, más tarde, en lo que ahora denominamos el Estado. La Iglesia ejerció gran influencia sobre el poder secular de los primeros reyes visigodos y sobre las ulteriores dinastías merovingias y carolingias, y estaba íntimamente asociada a ellas[49]. Pese a ello, la consolidación de la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio y la sujeción de los asuntos conyugales a la jurisdicción eclesiástica requirieron, ambas, de varios siglos.

La aspiración de la Iglesia a la jurisdicción exclusiva sobre las causas maritales y la idea novedosa de que el matrimonio era indisoluble estuvieron ambas íntimamente relacionadas con la idea cristiana de que el matrimonio era no sólo una institución natural y un contrato entre los esposos, sino a la vez un sacramento, esto es, un canal de la gracia divina. Pero el carácter sacramental del matrimonio y el ideal de la indisolubilidad no quedaron establecidos de inmediato como dos elementos preclaros de la doctrina eclesiástica. Ambas nociones tenían poderosos defensores: San Ambrosio (c. 339-397) en favor de la indisolubilidad, y su converso San Agustín (354-430) en favor del sacramento. San Agustín abogó a su vez por la indisolubilidad, oponiéndose a los "matrimonios adúlteros" (las nuevas nupcias de alguien que ha dejado de lado a su cónyuge, incluso por algún motivo grave como el adulterio). Pero, hacia el final de su vida, volvió sobre esta materia, insatisfecho con el tratamiento que antes había dado al problema relativo a si un cónyuge que deja de lado a su pareja por adulterio comete él mismo adulterio al casarse nuevamente. En sus *Retractaciones* escribió: "No creo haber llegado a una solución perfecta de esta cuestión"[50]. La califica como "una cuestión en extremo difícil" y habla de sus "partes oscuras". Lo que parecía difícil y obscuro a uno de los padres de la Iglesia con toda su erudición, lo era, en apariencia, bastante menos para los hombres y mujeres cristianos corrientes. Noonan señala que, durante toda la historia de Roma bajo los emperadores cristianos, "los cristianos podían pensar de buena fe tanto que el matrimonio era disoluble como indisoluble..."[51]

El mayor obstáculo a la imposición directa por la Iglesia de las nuevas ideas cristianas acerca del sexo y el vínculo matrimonial fue que, en todas partes de Europa y durante la mitad inaugural de la Edad Media, el matrimonio se consideraba un asunto personal y puramente secular. La conversión al cristianismo en el Imperio Romano y en las tierras habitadas

[49] Adhémar Esmein, *Le marriage en droit* (1929), Vol. 1, p. 14.

[50] San Agustín, *The Retractations*, en *The Fathers of the Church* (1968), 60, p. 247. Véase también Gaudemet, *Le marriage en Occident* (1987), pp. 71-74.

[51] Noonan, "Novel 22" (1968), p. 87.

por las tribus germánicas no redundó automáticamente en la aceptación inmediata de las nociones cristianas de que el matrimonio debía ser estrictamente monógamo y que todas las relaciones sexuales habidas fuera del mismo estaban prohibidas[52]. Ni tampoco la Iglesia insistió en ello. El vínculo matrimonial siguió reglamentado por normas sociales relativas a la edad justa para casarse, a la elección de las partes y la descendencia legítima. A veces, tales normas estaban fundadas en la costumbre y la convención, a veces en la antigua religión pagana. La jurisdicción eclesiástica sobre el matrimonio se impuso sólo muy gradualmente y, en buena medida, en un proceso de compromiso con las prácticas nativas y adaptación a ellas, e incluso de incorporación de las mismas. Al principio, la Iglesia apenas si intentó ejercer alguna jurisdicción en nombre propio, manteniendo su intervención en los asuntos familiares dentro de los límites de la relación entre el sacerdote y el penitente[53]. Y se involucró muy lentamente en la formación del matrimonio, por ejemplo, con la bendición del matrimonio por un sacerdote, práctica que siglos después se convirtió en un requisito.

La idea de la indisolubilidad del vínculo no prendió fácilmente en el mundo antiguo. En la Iglesia de los primeros tiempos, algunos habían sostenido la opinión de que los pasajes incluidos en los escritos de los Apóstoles, en los que los padres de la Iglesia basaban el principio de indisolubilidad, no prohibían en absoluto el divorcio, al menos en caso de adulterio[54]. Con el tiempo, el punto quedó más o menos consolidado en la doctrina eclesiástica, pero la Iglesia hubo de luchar aún contra hábitos sociales hondamente arraigados. Los anglo-sajones, los francos, otras tribus germanas y los romanos habían permitido todos el divorcio. Los matrimonios eran susceptibles de disolución (sin intervención de ningún juez) por mutuo consentimiento o por el repudio unilateral, a veces mediante el pago de una multa[55]. Durante siglos, cuando lo único de que disponía la Iglesia para respaldar sus normas era su facultad disciplinaria sobre los cristianos, se vio forzada a ejercer un alto grado de tolerancia. Y hasta cierto punto incluso aceptó el divorcio y las nuevas nupcias[56].

---

[52] Rheinstein, *Marriage Stability, Divorce, and the Law* (1971), pp. 13-14; Gaudemet, *Le marriage en Occident* (1987), pp. 123-129.

[53] William W. Bassett, "The Marriage of Christians-Valid Contract, Valid Sacrament?" (1968), p. 129.

[54] Ibídem, pp. 50-51; Gaudemet, *Le marriage en Occident* (1987), pp. 45-46.

[55] Adhémar Esmein, *Le marriage en droit canonique* (1935), Vol. 2, p. 49; Gaudemet, *Le marriage en Occident* (1987), p. 106.

[56] Esmein, *Le marriage en droit canonique* (1935), Vol. 2, pp. 49-50; Brissaud, *A History of French Private Law* (1968), pp. 143-144; Hübner, *A History of Germanic Private Law* (1968), p. 614; Pollock y Maitland, *The History of English Law* (1968), Vol. 2, pp. 392-393.

En cuanto a la norma de que una pareja debía intercambiar consentimientos en presencia de un sacerdote para que el matrimonio fuera válido, ésta hizo su aparición recién en el siglo dieciséis. La variedad de hábitos matrimoniales entre las naciones cristianas fue enorme, y la Iglesia adaptó desde un principio sus propios rituales a ellos. Los cristianos comenzaron a buscar la bendición sacerdotal de sus matrimonios en fecha tan temprana como el siglo segundo, pero la posición consistente de la Iglesia (con algunas opiniones divergentes) fue que el consentimiento de las partes bastaba por sí solo para constituir un matrimonio válido y que no se requería de ninguna modalidad formal en particular para ello[57]. Durante la Edad Media se desarrolló la costumbre de intercambiar promesas matrimoniales en el portal de la iglesia. Luego la Iglesia comenzó a prescribir esta ceremonia religiosa de carácter público, pero las sanciones por la no sujeción a ella no incluían la nulidad[58]. Por ende, hasta el Concilio de Trento, los matrimonios privados e informales fueron tan válidos como los públicos y formales. De allí en adelante, aunque los informales ya no eran válidos, siguió ocurriendo que el factor esencial era el consentimiento, y que eran las partes, y no el sacerdote, los ministros del sacramento. Aun cuando la presencia del sacerdote se volvió obligatoria, éste asistía sólo como testigo. Por añadidura, el Concilio no imponía este requisito a todos los cristianos del mundo, por la simple razón de que no siempre había disponible, en todas partes, un sacerdote que oficiara la ceremonia.

Según Pollock y Maitland, la prolongada tolerancia y adaptación de la Iglesia a las costumbres seculares y paganas, aun cuando éstas diferían de su propia doctrina en evolución, se debieron a su preocupación por no "multiplicar los pecados"[59]. Pero era, a la vez, una decisión estratégica. Cuando el Papa advirtió a los primeros misioneros irlandeses enviados a Inglaterra que no fueran en extremo severos con sus nuevos siervos en lo que se refería al incesto y el matrimonio, intentaba sin duda contribuir al éxito de su misión[60]. Cuesta hacer la separación entre esta política de la Iglesia de adaptarse a las prácticas locales y la de reclamar para sí, en forma gradual pero finalmente exitosa, el control de las regulaciones atingentes al matrimonio.

---

[57] Richard Helmholz señala que incluso en este punto había una discrepancia entre el derecho y la costumbre, con la mayoría de la gente aferrada a una tradición más antigua en la que se requería de la consumación para que un matrimonio estuviera completo. "Comment: Recurrent Patterns of Family Law" (1985), p. 175.

[58] De Reeper, "The History and Application of Canon 1098" (1954), pp. 148, 152.

[59] Pollock y Maitland, *The History of English Law* (1968), Vol. 2, p. 370.

[60] Ibídem, p. 366.

El derecho canónico previo al Concilio de Trento

La jurisdicción eclesiástica sobre las causas matrimoniales y los rudimentos de un sistema de derecho canónico quedaron establecidos en lo que es ahora Francia y Alemania a fines del siglo décimo[61], y en Inglaterra a mediados del duodécimo[62]. En su larga rivalidad con los poderes seculares en pos de la autoridad temporal, la Iglesia había intentado obtener el control sobre otras áreas legales, como la de las cuestiones sucesorias que sobrevenían a la muerte de alguien, la de los asuntos relativos a las tierras de la propia Iglesia y de los casos civiles y criminales que implicaban al clero[63]. Pero sólo respecto a las causas matrimoniales encontró vía abierta y su éxito fue, a la larga, completo. La doctrina del matrimonio sacramental proveyó, al desarrollarse, la base teórica para la reafirmación de la autoridad eclesiástica sobre un área de la vida que previamente no había estado sujeta a ningún tipo de control oficial sistemático. La idea de que la regulación del matrimonio o las sentencias relacionadas con disputas matrimoniales podían o debían quedar a cargo de la comunidad política y secular no fue considerada seriamente hasta el siglo dieciséis y el advenimiento de la Reforma Protestante.

La jurisdicción obtenida por los tribunales eclesiásticos respecto del matrimonio y la aplicación, por esos mismos tribunales, de las varias doctrinas eclesiásticas que finalmente se fusionaron en un único cuerpo de derecho canónico[64], fueron algo nuevo en la historia del hombre. Weber nos entrega una descripción clásica de la forma en que la Iglesia, tras adoptar una estructura burocrática y jerárquica, desarrolló a continuación un sistema de tribunales y procedimientos y un cuerpo de normas legales del tipo que él denominó "formalmente racionales", por completo distinto del derecho surgido de otros sistemas jurídicos de inspiración religiosa[65]. El sistema normativo del derecho canónico, formulado y organizado sistemáticamente al estilo del derecho surgido con el Imperio Romano, no gozó

---

[61] Bassett, "The Marriage of Christians-Valid Contract, Valid Sacrament?" (1968), pp. 129-130; Brissaud, *A History of French Private Law* (1968), pp. 88-89; Hübner, *A History of Germanic Private Law* (1968), p. 614.

[62] Polloock y Maitland, *The History of English Law* (1968), Vol. 2, p. 367.

[63] Rheinstein, *Marriage Stability, Divorce, and the Law* (1971), p. 18.

[64] Se atribuye a Graciano el haber comenzado a aplicar la metodología escolástica al estudio de las fuentes del derecho canónico. Su Decretum de 1140 junto con los *decretalis* del Papa Gregorio IX en 1234 conformaron el corazón del *Corpus Juris Canonici,* que fue durante siglos la fuente oficial del derecho positivo de la Iglesia. Bassett, "The Marriage of Christians-Valid Contract, Valid Sacrament?" (1968), p. 130.

[65] Weber, en Rheinstein (ed.), *Max Weber on Law in Economic and Society* (1954), pp. 250-255.

de inmediata aceptación en la vida social, pero tuvo, con el tiempo, efectos perdurables y de gran alcance en todo el derecho de familia de Occidente, efectos que han subsistido hasta hoy.

Ahora comenzamos a discernir las respuestas a algunas de nuestras preguntas: cómo fue que el matrimonio quedó sometido a alguna forma de regulación oficial, cómo fue elaborado interpretativamente por las normas legales y cómo llegó a ser legalmente indisoluble. Pero estamos recién al principio de todo, pues hay abundante evidencia de que el matrimonio fue considerado, de manera generalizada, como un asunto básicamente privado incluso después de que se estableciera la jurisdicción eclesiástica y la norma de indisolubilidad quedara consolidada en el derecho canónico. En otras palabras, incluso cuando la autoridad de la Iglesia quedó claramente establecida *vis-à-vis* los poderes políticos (que nunca habían regulado el matrimonio como tal, en ningún sentido), sus normas no habían acabado de penetrar cabalmente en las tradiciones. La Iglesia esperó a que llegase su momento, y logró la aceptación social de sus doctrinas de la misma forma en que había adquirido la jurisdicción: mediante un proceso largo y paciente de acción e interacción cotidianas. Entretanto, el derecho matrimonial canónico adoptó la modalidad que habría de tener tan crucial importancia en el futuro, incluso allí donde la autoridad de la Iglesia ya se había erosionado.

Una vez consolidada la norma de la indisolubilidad, sobrevino una consecuencia de gran importancia. Se hizo necesario enumerar con todo detalle y precisión qué tipo de uniones no eran susceptibles de disolución, y fuera de las cuales todo intercambio sexual era considerado ilícito. El *matrimonio* hubo de ser definido con más precisión que nunca antes. A partir de esta necesidad, sobrevino todo el complejo sistema del derecho canónico relacionado con los impedimentos y prohibiciones matrimoniales. La multiplicación de estas causas de nulidad hizo necesario a su vez investigar antes del matrimonio si había, de hecho, impedimentos, lo que dio origen a la publicación de edictos y a la insistencia de la Iglesia en los matrimonios públicos[66], a la vez que la llevó a elaborar procedimientos para declarar no válidos los matrimonios. Puesto que el matrimonio entre personas sin ningún impedimento se basaba únicamente en el consentimiento, se volvió relevante determinar si dicho consentimiento era libre y real. El resultado fue que la aparente rigidez del principio de indisolubilidad quedó conside-

[66] Antes de convertir el matrimonio público en requisito, el derecho canónico había desarrollado una distinción entre el matrimonio plenamente lícito y aquellos matrimonios informales que sí eran válidos, pero cuya naturaleza "ilícita" podía exponer a las partes a la sanción pública. Helmholz, "Comment: Recurrent Patterns of Family Law" (1985), p. 178.

rablemente mitigada en la práctica por las reglas sobre el consentimiento y por la existencia de una variedad de causales potenciales para la anulación, basadas en las relaciones sanguíneas o de parentesco político, en la afinidad espiritual (como la que había entre padrinos y ahijados), la impotencia, la locura y la inmadurez. Esta proliferación de motivos para la anulación ha sido entendida de múltiples formas: como un fenómeno lógicamente inducido por la teoría del matrimonio; como un factor relacionado con el dinero y el poder, en tanto las nulidades proveían a la Iglesia de una fuente de recursos y de cierto control sobre los grupos familiares; como una respuesta humana a los anhelos de algunos individuos de escapar a situaciones intolerables y de volver a casarse; y como una 'válvula de escape' sustitutoria de la institución necesaria, pero desaparecida, del divorcio. Sin duda que todos estos factores jugaron algún papel.

Los archivos de la propia Iglesia muestran que el hábito de contraer informalmente matrimonio siguió adelante, y revelan la persistencia de las antiguas nociones del matrimonio como un asunto privado. Richard Helmholz, tras estudiar los expedientes de los litigios matrimoniales habidos en los siglos trece y quince en los tribunales eclesiásticos de Inglaterra, comprobó que la idea de que la gente podía regular por sí misma el matrimonio tardó largo tiempo en desaparecer[67]. Al mismo tiempo, sin embargo Helmholz fue capaz de perfilar un proceso, igualmente gradual, de asimilación social de los criterios eclesiásticos, y de establecer documentalmente cuánto espacio quedaba en el propio derecho canónico para la variedad y el desarrollo.

La Iglesia mitigó la severidad de su regla de indisolubilidad estableciendo un procedimiento de separación judicial y contemplando, a la vez, múltiples causas de nulidad. La separación podía decretarse en situaciones en que uno de los esposos había incurrido en adulterio, apostasía o herejía, o había desertado del vínculo o maltratado seriamente al otro. Pero, a diferencia de la nulidad, la separación judicial no permitía que las partes volvieran a casarse y no parece que fuera empleada en gran escala. La separación eclesiástica 'de lecho y techo' (*from bed and board*) tuvo, sin embargo, una tremenda significación para la forma que habrían de adoptar las leyes de divorcio en las sociedades occidentales. Anticipada en los motivos de repudio justificable contenidos en los decretos del Imperio Romano, el derecho canónico relativo a la separación judicial prefigura esa doctrina del divorcio como una sanción a la mala conducta marital, que

[67] Ibídem, p. 5. Véase también Charles Donahue, "The Canon Law on the Formation of Marriage and Social Practice in the Later Middle Ages" (1983), p. 144.

reaparecerá luego en las ideas de los reformadores protestantes y dominará la legislación del divorcio en Occidente hasta los acontecimientos, algo más recientes, que se describen en el capítulo 4.

El derecho matrimonial tridentino

Hasta aquí no hemos llegado a determinar la forma en que la celebración del matrimonio llegó a requerir, en casi todos los sistemas jurídicos occidentales, de la presencia de un funcionario. Hasta la época del Concilio de Trento, la Iglesia había llegado únicamente al punto de convertir en un deber religioso la bendición pública en el templo, un deber sancionado con la penitencia o la censura. Para descubrir cómo se transformó una ceremonia formal y de carácter público en condición de *validez* del matrimonio (mediante el Decreto *Tametsi* de 1563), hemos de volver la vista, no hacia la doctrina eclesiástica, sino hacia las presiones y eventos del mundo secular.

En la Europa continental de la Reforma, la tensión a la que se vio sometida la Iglesia, más los cambios sociales y económicos que reforzaron la aspiración de las familias ubicadas en ciertos niveles de la pirámide social de llegar a controlar los giros de fortuna y poder que los matrimonios posibilitaban, acabaron allanando la senda para una revisión de la doctrina clásica y de su premisa de que los matrimonios cristianos podían celebrarse únicamente por consentimiento. Esta doctrina tradicional, cabe hacerlo notar, tuvo el efecto de liberar a los individuos de las restricciones que podían imponer los padres, los grupos de parentesco o las autoridades políticas en la elección del cónyuge. Pero este mismo efecto liberador comenzó a ser percibido como problemático en la Europa del siglo dieciséis, en aquellos círculos en que grandes sumas de dinero podían cambiar de manos por la vía de un adecuado matrimonio.

Por cierto, siempre que había habido tolerancia de los matrimonios informales, la dificultad de probarlos o bien refutarlos permitía a ciertos individuos sustraerse a los vínculos de un matrimonio válido y a otros beneficiarse mediante herencias u otras formas, por la vía de alegar falsamente la existencia de un matrimonio secreto. Este potencial de abuso, asentado desde larga data, se convirtió en un asunto cada vez más serio con el ascenso del nuevo orden económico y la aparición de la clase mercantil. Dichas preocupaciones del mundo secular sirven para explicar en parte el hecho de que los mismos obispos que encabezaron la propuesta del matrimonio ceremonial obligatorio en el Concilio de Trento se empeñaran, a su

vez, en que el Concilio estableciera el consentimiento paterno como requisito del matrimonio eclesiástico[68]. Ya que esta propuesta del consentimiento paterno era tan contraria a la noción cristiana del matrimonio entendido como una unión voluntaria, resultaba difícil que consiguiera aprobación social, pero tras prolongado y ardoroso debate se aceptó la ceremonia obligatoria. La validez del matrimonio informal había sido defendida por los teólogos puristas, quienes sostenían que la libertad espiritual para casarse debía ser protegida de la interferencia de terceros, en particular de los padres[69]. Pero era esto, precisamente, lo que ahora causaba problemas a los espíritus pragmáticos. Quienes abogaban por el cambio sostenían que los matrimonios informales amenazaban el derecho de propiedad y ponían en peligro la paz social y la moral en la esfera privada[70].

El requisito de una ceremonia pública se adoptó, finalmente, por una votación muy estrecha y quedó plasmado en el Decreto *Tametsi*, el cual dispuso que, de allí en adelante, ningún matrimonio era válido a menos que se hubiera celebrado en presencia de un sacerdote y otros testigos. También dispuso la obligación de anunciar los matrimonios y de mantener registros oficiales de los matrimonios contraídos. Así, la Iglesia ayudó a los grupos familiares a cuando menos no quedar al margen de los planes matrimoniales de sus vástagos, pero no llegó tan lejos como algunos delegados al Concilio hubieran querido en cuanto a reforzar el control de la familia.

En muchos lugares, quienes buscaban una justificación legal para el control paterno de la unión conyugal hallaron un mayor eco para sus propuestas en las autoridades seculares. Un edicto de la monarquía francesa autorizó a los padres, en 1556, a desheredar a los hijos que se casaran sin su consentimiento y estableció penas para cualquiera que colaborara con dicho enlace[71]. Luego de que Lutero condenara los matrimonios clandestinos porque posibilitaban que extraños, sin la aprobación previa de los padres, se insertaran por esta vía en familias acaudaladas y obtuvieran parte de su patrimonio, se hizo obligatoria en las bodas la presencia de un ministro, disposición contenida en las ordenanzas reformistas del principado

---

[68] Brissaud, *A History of French Private Law* (1968), p. 115.

[69] Beatrice Gottlieb, "Getting Married in Pre-Reformation Europe: The Doctrine of Clandestine Marriage and Court Cases in Fifteenth-Century Champagne" (1974), pp. 59-60, 62-63.

[70] Ibídem, pp. 38-39.

[71] David Hunt, *Parents and Children in History: The Psychology of Family Life in Early Modern France* (1970), p. 60.

protestante de Württemberg (1553) y del Palatinado del Rin (1563)[72]. En 1561 fue promulgada una ordenanza similar en Ginebra[73]. Además, todas estas ordenanzas exigían a las parejas que obtuvieran el consentimiento de los padres antes de casarse. En Francia, la validez del matrimonio pasó a depender del consentimiento de los padres mediante la Ordenanza de Blois de 1579, y durante el siglo diecisiete el derecho galo prosiguió, de varias otras formas, en su intento de desalentar los matrimonios secretos[74]. Inglaterra se mantuvo, a pesar de todo, como un caso aparte. La Iglesia de Inglaterra, que había eliminado la jurisdicción de la Iglesia Católica Romana sobre las causas matrimoniales en 1534, siguió reconociendo la validez de los matrimonios informales hasta 1753.

Pareciera que el Decreto *Tametsi* y todas sus contrapartidas en la esfera secular tuvieron escasa incidencia en las prácticas matrimoniales en otros sectores fuera de los pudientes. E incluso en los círculos acaudalados, David Hunt, el historiador social, comprobó un persistente

> conflicto entre la legislación estatal, por una parte, y las costumbres y usos populares generalmente aceptados, por la otra. Los edictos y ordenanzas muestran claramente que los legistas reconocían la fuerza de la tradición que intentaban erradicar: vale decir, la creencia superviviente de que la cohabitación y el puro y simple consentimiento mutuo bastaban para formar un matrimonio[75].

La Iglesia, como hemos podido apreciar, no intentó siquiera imponer sus nuevos requerimientos para la celebración del matrimonio a todo el mundo, ni en todos los territorios bajo su influjo. De acuerdo con sus propios términos, el Decreto *Tametsi* no era aplicable allí donde no había sido promulgado y la Iglesia no hizo ningún empeño para imponerlo en sitios como el Nuevo Mundo, donde escaseaban los sacerdotes. Así, los matrimonios informales siguieron siendo válidos bajo el derecho canónico en muchos puntos del globo, hasta el decreto emitido por León XIII en 1892, seguido del decreto *Ne Temere*, que entró en vigor en 1907. Incluso hoy, el derecho canónico reconoce la validez de los matrimonios informales en determinadas circunstancias[76].

---

[72] Gotttlieb, "Getting Married in Pre-Reformation Europe: The Doctrine of Clandestine Marriage and Court Cases in Fifteenth-Century Champagne" (1974), pp. 124-135.

[73] Ibídem.

[74] Hunt, *Parents and Children in History: The Psychology of Family Life in Early Modern France* (1970), p. 62.

[75] Ibídem, p. 63. Véase también Gaudemet, *Le marriage en Occident* (1987), pp. 235-236, 364.

[76] Véase Coriden *et al.* (eds.), *The Code of Canon Law: A Text and Commentary* (1985).

Reforma y secularización

La historia del derecho canónico hasta el Concilio de Trento nos revela que el matrimonio quedó gradualmente sometido a un tipo de reglamentación oficial y jurídica, a saber, la de los tribunales eclesiásticos que aplicaban, precisamente, el derecho canónico. La indisolubilidad jurídica tiene su origen probable en la proclamación del carácter sacramental del matrimonio, y el matrimonio ceremonial obligatorio se origina en el movimiento que va desde la bendición del vínculo en los portales de las iglesias hasta los edictos de amonestación a los matrimonios clandestinos. Pero ¿cómo se convirtieron tales asuntos en preocupación de la autoridad secular, considerando la relativa indiferencia que ella había demostrado hasta entonces frente a los mismos? Entre los siglos dieciséis y dieciocho, en vastas extensiones de Europa Occidental, la Iglesia Católica vio menoscabada su jurisdicción sobre el matrimonio. En las regiones protestantes ocurrió igual cosa como consecuencia de la Reforma y en Francia se dio en asociación con el galicanismo y el avance de la monarquía. Al perder la Iglesia el monopolio de que disfrutaba sobre las causas matrimoniales, en cierta forma el vacío suscitado acabó transfiriendo a los nuevos Estados emergentes la jurisdicción en la materia. Ahora bien, en lugar de desarrollar un cuerpo legal enteramente nuevo para aplicarlo en tales casos, los gobiernos seculares adoptaron pura y simplemente buena parte del conjunto de reglas del derecho canónico, modelando las nuevas leyes de divorcio a partir de las reglas eclesiásticas que regían la separación 'de lecho y techo'[77]. Así, muchas reglas que habían sido desarrolladas en el derecho canónico siguieron rigiendo la vida conyugal, aun cuando se hicieron nuevas interpretaciones de ellas en ciertos acápites.

Lo anterior no debe sorprendernos si recordamos que, pese a que Lutero y otros autores consideraban apropiado que el matrimonio quedase sometido a la jurisdicción de los tribunales civiles y no de los eclesiásticos, nunca se imaginaron que éste sería regulado por otros principios que no fueran los principios cristianos[78]. Los reformadores rechazaban la noción de que el matrimonio fuese un sacramento, pero daban por sentado que las regulaciones del matrimonio secular debían conformarse a las enseñanzas cristianas[79]. Y, por cierto, reinterpretaron las enseñanzas cristianas para

[77] Esmein, *Le marriage en droit canonique* (1929), Vol. 1, p. 34.

[78] Para un análisis detallado y bien documentado de la relación entre el derecho conyugal de los reformadores luteranos y el derecho canónico preexistente, véase John Witte Jr., "The Reformation of Marriage Law in Martin Luther's Germany: Its Significance Then and Now" (1986).

[79] Rheinstein, *Marriage Stability, Divorce, and the Law* (1971), p. 22.

permitir el divorcio, entendiéndolo como un castigo a la grave violación de los deberes maritales y, en particular, al adulterio, aunque gradualmente se introdujeron otras causas. Sin embargo, no cabe exagerar la significación de este bien conocido alejamiento respecto de la doctrina católica, dado que vino acompañado de una mayor severidad en la cuestión de las nulidades, las que la propia Iglesia había ofrecido en ocasiones con relativa manga ancha[80]. El protestantismo no devolvió, en ningún caso, el divorcio a la esfera privada: ningún divorcio por mutuo consentimiento fue reconocido y el divorcio por alguna causa debía ser otorgado por el Estado. Fue sólo con la Ilustración que comenzó a surgir una verdadera antítesis de las actitudes cristianas tradicionales hacia el matrimonio.

El tomar conciencia de la forma en que el movimiento de Reforma transfirió, en muchos sitios, los asuntos matrimoniales a la esfera jurisdiccional del Estado secular nos permite entender cómo adquirió su forma original buena parte del derecho (relativo a la celebración y disolución del matrimonio) descrito en los capítulos 2 y 4 del presente volumen. Sin embargo, aún nos falta saber cómo llegó el Estado a desarrollar sus propias normas seculares de derecho, en lugar de simplemente conservar las normas eclesiásticas. Además, aún no tenemos respuesta a la interrogante de cómo fue que el derecho secular llegó a regular, o cuando menos se propuso regular, una materia en la que el derecho canónico y el derecho romano se habían abstenido, a saber, la organización y el comportamiento en el seno de la vida familiar, tema considerado en el capítulo 3. Este cuerpo del derecho se originó en dos desarrollos de los que no cabe responsabilizar a los reformadores protestantes, aunque en algún sentido ellos ayudaron a pavimentar el camino. Ellos son: la aparición del pensamiento humanista e individualista de la Ilustración y el advenimiento del Estado absolutista. Tales desarrollos ocurrieron de forma distinta en Francia y en las múltiples regiones que integraban la actual Alemania, pero condujeron en ambos sitios a intentos sin precedentes de reglamentación jurídica de las relaciones familiares en curso. Una vez más, Inglaterra siguió siendo al respecto un caso particular, como también, por ende, los Estados Unidos.

En Europa continental, Federico II de Prusia, José II de Austria y Napoleón con su ejército de juristas y su burocracia administrativa, sintieron todos la necesidad de codificar enteramente, y con absoluta claridad, la totalidad del derecho privado[81]. Además, sus respectivos gobiernos estaban en posición de imponer sus propias ideas (o las de sus asesores) como

[80] John Witte Jr., "The Reformation of Marriage Law in Martin Luther's Germany: Its Significance Then and Now" (1986), pp. 38-44.

[81] Rheinstein, *Marriage Stability, Divorce, and the Law* (1971), pp. 25-26.

reglas de derecho positivo en sus múltiples códigos. Con seguridad, el nuevo derecho secular de los códigos surgidos durante la Ilustración tomaron muchas cosas prestadas del derecho preexistente, al igual que la Iglesia reformada y protestante se había apoyado fuertemente en el derecho canónico. Pero el derecho matrimonial, liberado de sus ataduras religiosas del antiguo orden medieval, se vio cada vez más influido por las tendencias de la época, por el humanismo y el individualismo, y también por las preocupaciones e intereses concretos del Estado secular y los grupos influyentes en su seno[82].

Con la Reforma y la Ilustración, la idea del matrimonio entendido como un contrato sufrió un nuevo vuelco. Como hemos visto, el consentimiento fue la esencia del matrimonio en el derecho eclesiástico. Pero pensadores tan diversos como Martín Lutero y John Locke comenzaron a hacer hincapié en la faceta del matrimonio como un contrato civil. Era un punto de vista singularmente atractivo para los revolucionarios galos, deseosos de eliminar los últimos vestigios de jurisdicción eclesiástica. Dicho acento en el aspecto contractual del vínculo tuvo varios efectos, y entre los más importantes, el de sentar las bases para el divorcio por mutuo consentimiento y para la regulación estatal no sólo de la celebración y disolución del contrato matrimonial, sino de su contenido. La vasta labor de codificación llevada a cabo en Europa continental dejó a los esposos prisioneros en una red de derechos y deberes legales que otorgaban a cada uno de los cónyuges un completo arsenal de exigencias susceptibles de ser planteadas a la contraparte, las cuales podían transformarse en la base de una acción legal ante el juez[83]. Muchos de tales códigos buscaban regular hasta los más ínfimos detalles de la más íntima de las relaciones, de un modo no conocido en el derecho romano y en el derecho canónico. En ocasiones, estos extremos de 'juridización' buscaban promover ciertos intereses del Estado (como el de aumentar la población); en otras, estaban al servicio de los intereses de los grupos dominantes en la sociedad (como cuando se reforzaba el control familiar sobre los matrimonios). A menudo, parecen haber sido pura y simplemente el fruto de esa urgencia integradora tan evidente en otros aspectos de, por ejemplo, el Código General Prusiano de 1794[84]. En su afán por no dejar ningún vacío en el derecho, el Código Prusiano se pronunciaba sobre asuntos como el momento en que podía declinarse la relación marital íntima, aquel en que la ausencia del esposo quedaba excusada, e incluso la edad hasta la que un bebé podía ser atendido en el lecho de los padres. Jean Carbonnier acuñó el término de *pan-*

[82] Wolfram Müller-Freienfels, *Ehe und Recht* (1962), pp. 18-25.
[83] Ibídem, pp. 20-21.
[84] Ibídem, pp. 22-23.

juricidad (*panjurism*) para describir este *ethos* legal impregnado de la noción de que todo es derecho, o, "cuando menos, de que la vocación del derecho es la de estar en todo, de envolverlo todo y, al igual que un dios, de englobar todo el universo habitado"[85].

En Francia, la propensión a la reglamentación jurídica durante este período posibilitó el desarrollo de dos importantes instituciones de los tiempos modernos que atañen a la familia: la ceremonia obligatoria del matrimonio civil y el sistema de un registro público del estado civil. La ceremonia del matrimonio civil había sido una opción disponible en los Países Bajos y en Nueva Inglaterra, bajo la égida calvinista, pero se volvió obligatoria mediante un decreto revolucionario galo del 20 de septiembre de 1792. Desde Francia, la ceremonia civil se difundió a todo el mundo, al menos como una forma opcional de contraer matrimonio. Francia proveyó a la vez el modelo para los sistemas de registro laico del estado civil que ahora se emplean en todo el mundo[86]. A diferencia de otras muchas innovaciones del derecho revolucionario francés, el matrimonio civil obligatorio fue impuesto por el Código Napoleónico de 1804. A principios del siglo diecinueve, el matrimonio civil se volvió obligatorio en varias regiones de Alemania y se convirtió en parte del derecho del imperio germano unificado mediante la Ley del Estado Personal del 6 de febrero de 1875, y luego adoptó su forma actual en el Código Civil Alemán de 1896.

Como dijéramos, Inglaterra siguió un curso relativamente distinto. La jurisdicción eclesiástica de la Iglesia de Inglaterra sobre el matrimonio prosiguió sin ninguna interferencia significativa hasta mediados del siglo diecinueve. Parece que, bajo la administración de Cromwell, el matrimonio civil fue una opción disponible durante un breve período, y quizá el divorcio estuvo permitido. Pero salvo por esa breve excepción, el matrimonio civil no hizo su aparición en Inglaterra sino hasta 1836, en conexión con la aprobación, en avalancha, de una nutrida legislación de índole burocrática relativa al registro de las estadísticas demográficas. Los matrimonios informales siguieron siendo válidos en el país hasta que se aprobó la Ley de Lord Hardwicke en 1753. Dicho estatuto, una versión secular del Decreto *Tametsi*, hacía obligatoria una ceremonia de bodas eclesiástica y exigía la publicación de edictos. El divorcio fue posible después de 1660, pero sólo podía obtenérselo mediante un decreto parlamentario especial, y

[85] Jean Carbonnier, *Flexible droit* (1983), p. 4.

[86] El precursor de los registros públicos del *status* civil, en Francia y en otros sitios, fue la práctica de los registros eclesiásticos (actas de bautizo, registros matrimoniales, etc.), seguida en muchos lugares de una etapa de reglamentación gubernamental de los registros parroquiales, Rheinstein, *Marriage Stability, Divorce, and the Law* (1971), p. 198; véase también más adelante, capítulo 2, nota 167.

nada más que en caso de adulterio. Era caro, complicado y rara vez se recurría a él. El divorcio judicial no fue introducido sino hasta 1857.

En los Estados Unidos, las áreas colonizadas por sectores protestantes contaron con leyes de divorcio desde su época más temprana. En cambio las de fuerte influencia anglicana no tuvieron, inicialmente, ninguna forma de divorcio. El divorcio legislativo subsistió en muchas colonias y estados hasta el siglo diecinueve. Los estados de la frontera occidental adoptaron un enfoque más liberal; como fruto de ello, el divorcio migratorio era, en torno a 1860, parte de la escena en Norteamérica. Dado el trasfondo jurídico originario de Inglaterra (y, en el Suroeste, con la indulgencia de la Iglesia)[87], el matrimonio informal pasó a ser una institución legal en múltiples lugares y aún hoy sobrevive en varios estados como 'matrimonio según el *common law*'.

Los procesos de secularización de la jurisdicción matrimonial y, finalmente, del contenido del derecho conyugal, vinieron a coincidir con ciertas tendencias dentro del pensamiento jurídico que habrían de llegar a su punto culminante en el siglo diecinueve. Tanto en el mundo del *common law* como en el del derecho civil de fines del diecinueve, las normas y conceptos jurídicos tendían a quedar formalizados y expresados en la forma conceptualista que había sido característica del derecho romano y del derecho canónico revividos. Las reglas legales, que a menudo no eran sino la resolución temporal de intereses en conflicto, adquirieron vida propia, suscitando consecuencias 'lógicas' y 'necesarias'. Paralelamente, comenzó a asimilarse cada vez más la noción de *legitimidad* a la de *legalidad*, entendida como la cualidad propia de decretos formalmente correctos y promulgados de acuerdo a los procedimientos establecidos[88].

Con todo, esa idea de que el derecho puede conferir legitimidad no es en modo alguno evidente por sí misma. El comportamiento familiar en el seno de las sociedades pre-modernas estuvo largo tiempo inspirado por nociones de legitimidad incluidas en las costumbres, las convenciones y la religión. Siglos después de que las normas legales entraran en escena, ellas eran expresión de ideas sobre la vida familiar de origen consuetudinario y religioso. Sin embargo, igual que la costumbre puede con el tiempo convertirse en derecho, el derecho puede a su vez adquirir, hasta cierto punto, la fuerza de la tradición. Como bien lo ha señalado Daniel Lev, "en los sistemas legales, los conceptos y estructuras desarrollados en una época se

[87] Véase, en general, Hans Baade, "The Form of Marriage in Spanish North America" (1975).

[88] Weber, en Rheinstein (ed.), *Max Weber on Law in Economic and Society* (1954), p. 9.

convierten, a partir de allí, en mitos que transforman en principios y hábitos asuntos que una vez fueron, claramente, cuestiones de intereses y de poder"[89]. Pero a medida que el Estado burocrático y secular ha introducido cada vez más sus propios contenidos y buscado sus propios objetivos dentro del derecho de familia, la relación entre legalidad y legitimidad se ha vuelto más problemática que nunca antes.

ESTADO, DERECHO Y FAMILIA*

En buena medida, las batallas que libra la humanidad buscan únicamente armonizar en forma expedita —esto es, de una forma que traiga consigo la felicidad— esta reivindicación individual [de libertad] con las exigencias culturales del grupo; y uno de los problemas que conciernen al destino de la humanidad es el de si es posible alcanzar dicho acomodo mediante algún tipo de civilización en particular, o si se trata más bien de un conflicto sin solución.

Sigmund Freud, *Civilization and its Discontents*[1]

Lámparas nuevas por lámparas viejas

A la vuelta del presente siglo, y hablando en términos generales, los sistemas que configuran el derecho de familia occidental compartían entre sí varios supuestos comunes. El derecho concerniente a las relaciones domésticas estaba organizado en torno a una concepción unitaria de la familia, la cual orbitaba alrededor del matrimonio y era de naturaleza patriarcal. El matrimonio era una institución de apoyo muy importante y un factor decisivo a la hora de determinar el *status* social de los cónyuges y de sus hijos. Se suponía, en principio, que habría de durar hasta la muerte de uno de los esposos y, en vida de ellos, sólo se lo daba por concluido, si ello llegaba a ocurrir, por alguna causa grave. Se enfatizaba la solidaridad familiar y la vida en comunidad de los esposos por sobre la personalidad de cada uno y por sobre los intereses individuales de los integrantes de la familia. Dentro del grupo familiar, la estructura convencional de autoridad y el patrón de asignación de roles determinaban que el marido-padre era la

[89] Daniel S. Lev, "Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State" (1985), pp. 57, 69.

* Capítulo 7, "State, law, and family".

[1] Traducción al inglés de James Strachey (1961), p. 43, en la cual se basa la presente traducción al castellano.

figura predominante en la toma de decisiones y debía cubrir las necesidades materiales de la familia. La esposa-madre debía cumplir también con su rol, consistente ante todo en velar por el hogar y los hijos. Se suponía que la procreación y la crianza de los hijos eran dos objetivos básicos del matrimonio, y las relaciones sexuales dentro del mismo eran supuestamente exclusivas, al menos para la esposa. Se daba por supuesto que el matrimonio, la procreación y el divorcio tenían lugar, todos ellos, dentro de categorías legales. Y se diría que los hijos ilegítimos casi no tenían existencia legal.

Tras todos estos supuestos subyacía la premisa de que el Estado podía, y debía, reglamentar la formación de la familia, su organización y disolución, a la luz de ciertas ideas ampliamente compartidas acerca del matrimonio y la vida familiar. Al mismo tiempo, existía el principio legal de que el Estado debía abstenerse de traspasar el umbral del hogar en que funcionaba la familia, especialmente en lo relativo a la crianza. El papel del Estado, a la hora de cubrir ciertas necesidades humanas elementales, era relativamente menor. En Francia y Alemania, todas estas características vistas en conjunto conformaban la denominada 'familia del Código Civil'; en Inglaterra y los Estados Unidos, ellas eran los elementos componentes de un constructo jurídico que servía para perfilar a la familia tradicional, cuyos rasgos particulares estaban dispersos en múltiples decisiones de los tribunales y en los estatutos. Por cierto que el relato de los sistemas legales de Occidente acerca de la vida familiar variaba de un país a otro en sus énfasis y detalles, y estaba, en todas partes, bastante más próximo a las ideas y el comportamiento de las clases medias que a las concepciones y conductas de los sectores más pobres o acaudalados.

A la luz de los desarrollos legales que hemos examinado en los capítulos precedentes, vemos que ninguno de estos supuestos básicos y anteriores ha sobrevivido intacto hasta hoy. La mayoría de ellos fueron eliminados, y otros fueron puestos simplemente del revés. Es cierto que el edificio del derecho de familia tradicional siguió en pie hasta los años sesenta, pero sus cimientos evidenciaban desde hace mucho tiempo algunas resquebrajaduras. En los últimos veinte años de historia, hemos visto cómo las tendencias individualistas, igualitarias y secularizadoras, que desde fines del siglo dieciocho fueron cobrando influencia creciente en los sistemas legales de Occidente, después de haber sido tendencias sociales al margen, se convirtieron en la corriente dominante dentro del derecho de familia.

Dichas tendencias legales captaron, y formalizaron, múltiples facetas de los desarrollos sociales y económicos que habían socavado gradualmente un supuesto que era la esencia misma del derecho de familia deci-

monónico: la idea de que la familia y el matrimonio eran dos factores cruciales para la estabilidad económica y la posición social de un individuo. En buena parte de la historia del hombre, el matrimonio y el parentesco fueron las relaciones fundamentales a través de las cuales se asignaban las posiciones jerárquicas y de *status* dentro de la sociedad. Hoy en día, sin embargo, la riqueza, el poder y la posición de que goza un individuo están cada vez menos determinadas por la pertenencia a una familia y cada vez más por su propia actividad dentro de la fuerza laboral o, dicho en términos negativos, por su relación dependiente del Estado[2]. Por cierto que la familia sigue ejerciendo una influencia decisiva en las proyecciones de vida de sus integrantes, pero dicha influencia opera, para la mayoría de la gente, en forma indirecta, principalmente por medio de las ventajas psicológicas y materiales que la familia es capaz de ofrecer a sus vástagos en materia de educación, dado que esta última posibilita, a su vez, el acceso a posiciones privilegiadas de *status*[3]. Sin embargo, al modificarse el rol de la familia en la determinación del bienestar personal y el *status*, toda una forma de percibir el mundo ha quedado del revés. Un jurista francés lo ha expresado en los siguientes términos:

> En vez de que el individuo 'pertenezca' a la familia, es ésta la que ha pasado a estar al servicio del individuo. Subsiste aún el lugar prominente de la familia por sobre otras instituciones, pero no por las mismas razones: ya no es porque la familia sirva a la sociedad, sino porque es un medio para el desarrollo más pleno del individuo. Cuando ella no cumple ya con este rol, los vínculos decrecen o simplemente desaparecen[4].

Aun cuando, como hemos visto, el derecho de familia contemporáneo ha incorporado en buena medida este nuevo punto de vista, en muchos sentidos sigue centrado en el matrimonio. Pero el derecho de familia trata ahora el matrimonio como una instancia que interesa, ante todo, a los individuos implicados. En este sentido, el derecho no hace sino reflejar la mayor intensidad y la inestabilidad de vínculos que hoy se sostienen más por nexos afectivos que económicos[5]. Ahora que los hijos no aportan ya al

---

[2] Véase, en términos generales, Mary Ann Glendon, *The New Family and the New Property* (1981).

[3] Véase James Coleman *et al*., *Equality of Educational Opportunity* (1966); Christopher Jencks *et al., Inequality: A Reassesment of the Effect of Family and Schooling in America* (1972); y John Brittain, *The Inheritance of Economic Status* (1977).

[4] Alain Bénabent, "La liberté individuelle et le marriage" (1973), pp. 440, 495.

[5] Para una comparación de la relación de pareja moderna con el matrimonio en épocas más tempranas, véase William Goode, *The Familiy* (1964), pp. 25, 66; Lawrence Stone, *The Family, Sex, and Marriage in England 1500-1800* (1977), p. 685.

nivel que una vez lo hicieron, como ayudantes en la empresa o la granja familiar, generando ingresos adicionales o bien operando como un dique de contención frente al desamparo que trae consigo la vejez, la relación paterno-filial se ha vuelto intensa e inestable, en una forma que parece también nueva. Como bien lo ha manifestado René König, la familia moderna se "basa [...] en relaciones no estructuradas y fundamentalmente personales, dependientes del mundo exterior para la satisfacción de buena parte de sus necesidades. Y esto repercute cada vez más en el orden interno de la familia"[6]. En los capítulos precedentes, vimos cómo la faceta de cercanía y camaradería del matrimonio contemporáneo se traduce, al nivel jurídico, en la posición más ventajosa que ha adquirido el cónyuge dentro de la legislación que regula las donaciones y las sucesiones, mientras que su fragilidad se refleja en la moderna legislación del divorcio, en la que la terminación del vínculo se ha transformado casi en un asunto de derechos.

En dicho proceso, ¿en qué ha devenido la relación del Estado con la familia, tal como ella se expresa en el sistema jurídico? En lo que respecta al matrimonio, percibimos que el actual período de cambios legales (en oposición al trasfondo que bosquejáramos en el capítulo 1, referido a la expansión creciente de la reglamentación, primero de origen eclesiástico y más tarde de índole secular) se ha ceñido a una curva descendente de 'desjuridización'. Desde otro punto de vista, sin embargo, el repliegue en que ha incurrido el derecho al no ocuparse ya más de cuestiones como la de quién se casa con quién y cómo, o de qué derechos y deberes tienen los cónyuges entre sí, o de cómo se terminan dichas uniones, es quizás un giro bastante menos decisivo que lo que pueda parecer en primera instancia. Después de todo, inicialmente el derecho de familia se preocupaba tan sólo, o fundamentalmente, de las clases propietarias o medias. En el siglo veinte, cuando el derecho comenzó a tener cada vez más en cuenta a ciertos grupos sociales que antes había descuidado, y estos grupos comenzaron a su vez a tener en cuenta al derecho[7], la aparente discrepancia entre el derecho en sí y las tradiciones existentes se hizo mayor. Muchos de los cambios legales descritos en los capítulos precedentes pueden considerarse como ajustes, para acomodarse a las necesidades de la nueva clientela jurídica, para la cual buena parte del derecho de familia tradicional era irrelevante, ya fuera porque no tenía posesiones significativas o porque carecía de una posición social destacada. Desde esta perspectiva, se entiende porqué el derecho de familia tenía una aplicación tan restringida hasta fecha relativamente re-

[6] René König, "Sociological Introduction" (1974), p. 30.
[7] Véase Max Rheinstein, "The Family and the Law" (1974), tomo 4, p. 12.

ciente. Como les ocurría a los hojalateros del capítulo uno, la mayoría de los vagabundos de este mundo han sido ignorados por el Estado y sus leyes, hechas a la medida de los señores y damas de cierto refinamiento. También la Iglesia a menudo eximió al bajo pueblo de un estricto acatamiento de sus normas más formalizadas. Y cuando no fue ella quien hacía la excepción, la gente como Michael y Sarah se exceptuaba espontáneamente de cumplirlas.

Al tiempo que el derecho de familia comenzaba a interactuar con las vidas y la conciencia de un segmento más vasto de la población, también se iba adaptando a cambios fundamentales en los requerimientos y en el comportamiento de su clientela tradicional. Igual que hubo de tener en cuenta, tiempo antes, la mayor importancia de los bienes personales, cuando la tierra dejó de ser la forma básica de riqueza, el derecho de familia debió adaptarse a la significación, siempre creciente en la sociedad actual, de múltiples y nuevas formas de 'propiedad' derivadas del trabajo asalariado en grandes organizaciones públicas o privadas, o de la dependencia de ellas. A medida que variaron la importancia relativa de la familia, el trabajo y las prerrogativas gubernamentales para garantizar la seguridad económica, hubo también cambios en las formas de concebir las relaciones familiares.

El siglo veinte vio a su vez la aparición de nuevas formas de intervención estatal en la vida familiar. Los análisis eruditos relacionan frecuentemente este fenómeno con la 'pérdida de funciones' de la familia, llamando la atención sobre el hecho de que muchas tareas antiguamente desarrolladas por ella, o dentro de ella, han sido asumidas por organismos externos. Ello no obstante, la familia ha compartido siempre sus funciones con otras instituciones sociales. La faceta propiamente moderna consiste en que hoy en día tales instituciones pueden ser entidades burocráticas lejanas —grandes sistemas educacionales, organismos de asistencia social y así sucesivamente— en lugar de los vecinos, benefactores, la escuela o la parroquia de la localidad. Los patrones tradicionales del matrimonio y ritmo de vida han dado paso a otros nuevos, organizados en torno a los programas y horarios escolares y del mundo laboral.

Al variar la naturaleza de la interdependencia entre la familia y los sistemas de apoyo externo, el derecho privado relacionado con los vínculos domésticos tiende a perder terreno o se fusiona con una amplia gama de leyes y programas públicos que atañen a la familia. Esto es así especialmente en los Estados benefactores más avanzados. En Suecia, por ejemplo, Jacob Sundberg ha llamado la atención sobre la progresiva declinación del

derecho de familia, al ir integrándose con el derecho relativo a la asistencia social:

> El derecho de familia tal y como lo concebía el Ministerio de Justicia [derecho privado de familia] quedó enterrado por el derecho de familia que generaron otros ministerios, y su ataúd quedó envuelto en una bandera en la que se leía 'política familiar'. Cuando el ministro sueco de justicia proclamó finalmente el principio de neutralidad, lo que en realidad estaba haciendo era agitar la bandera de la rendición. Puesto que sus rivales en los departamentos de impuestos y bienestar habían ya reducido a astillas los conceptos del derecho de familia tradicional[8].

En los cuatro países de los que fundamentalmente nos hemos ocupado aquí, las cosas no han llegado aún a este punto. En el caso de Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y [la ex] Alemania Occidental, sería más apropiado decir que la porción del derecho público y administrativo que atañe a la familia tiende a cobrar mayor importancia para las familias de escasos recursos, en tanto el derecho de familia tradicional (relativo al sustento, la propiedad marital, la herencia) y el derecho tributario inciden mayormente en las vidas de la gran mayoría de la clase media. Sin embargo, el derecho que regula las relaciones domésticas ha adquirido, en todos lados, un carácter algo más público y administrativo, al concentrarse en lo que John Eekelaar denominara su función "correctiva" y "protectora", resolviendo disputas relacionadas con la pensión alimenticia y los hijos o reaccionando ante problemas de abusos y negligencia familiar[9].

En el proceso de suprimir la regulación en ciertas áreas de la vida familiar, y a la vez dejar algunas otras sujetas a nuevas formas de intervención oficial, el derecho ha tendido a focalizarse ante todo en los individuos. Por cierto que la familia sigue compuesta de individuos, unidos entre sí de un modo especial, y el derecho tiene a menudo en cuenta estos lazos, en mayor grado en los sistemas de derecho civil, como hemos visto, que en los países nórdicos y de *common law.* Pero en todos los desarrollos recientes que hemos examinado se halla presente la tendencia del derecho y de los programas sociales a fragmentar la familia en sus componentes individuales y a tratar a sus miembros como individuos separados e independientes. Este cambio de énfasis legal desde 'la' familia, o incluso las 'familias' en todas sus múltiples formas, al miembro individual de cada una parece haber

[8] Jacob W. F. Sundberg, "Facteurs et tendances dans l'évolution moderne du droit de la famille des pays nordiques: Rêves et Réalités" (1978), pp. 60-61.

[9] John Eekelaar, *Family, Law and Social Policy* (1984), p. xvii.

ocurrido más por accidente que en virtud de algún diseño hecho *ex profeso*. Con todo, el efecto ha sido que, sin quererlo, los sistemas legales modernos se han aproximado, en grado variable, al que fuera el gran sueño de los revolucionarios franceses: que los ciudadanos quedaran un día en relación directa con el Estado, sin intermediarios.

Aun cuando esta tendencia a convertir a los individuos —antes que a la unidad familiar o los hogares— en el sujeto principal del derecho de familia es, por cierto, más pronunciada en los países nórdicos y en el ámbito anglo-americano que en los países de la Europa continental y del derecho civil[10], sus manifestaciones se aprecian por doquier en el mundo occidental y occidentalizado. Como ya vimos, el tema dominante en el derecho relacionado con la formación del matrimonio ha sido, durante casi un siglo, la progresiva supresión de las restricciones a la libertad de los individuos para casarse. Y, al igual que los individuos han obtenido la libertad de escoger a su cónyuge, son también libres ahora, por la vía de las leyes de divorcio modernas, de corregir esa elección. Aún más sorprendente que la facilidad con que la gente puede hoy comprometerse y abandonar una relación matrimonial, es el relajamiento producido en los vínculos de apoyo familiar. El apoyo de la familia se está convirtiendo en una cuestión cada vez más ajena al derecho, mientras que se ha ido incrementando el acceso individual a la ayuda estatal. El integrante adulto de un grupo familiar es tratado cada vez más como autosuficiente (o potencialmente como tal) en virtud de su empleo, y en caso de estar incapacitado para trabajar, como un sujeto con derecho a que el Estado le provea de un nivel mínimo y digno de subsistencia. Aunque el sustento de los hijos es aún reconocido en todas partes como una obligación de ambos progenitores, el aporte de los padres ausentes juega en la práctica un papel cada vez menos importante —en relación con la ayuda estatal y los ingresos de la madre— en el sostenimiento de grupos familiares en que el cabeza de familia es la mujer.

Con la excepción notable de los subsidios familiares en Europa continental, los programas de asistencia estatal se han diseñado típicamente para el individuo y sus requerimientos, independientemente del *status* familiar. El caso extremo pareciera ser el de Suecia, donde, en el medio siglo que el Partido Social Demócrata estuvo ininterrumpidamente en el poder, el gobierno tuvo como objetivo explícito el valerse del derecho de familia "como una de las varias herramientas disponibles cuando lo que nos proponemos es la creación de una sociedad en la que cada adulto asuma la

[10] Véase Mary Ann Glendon, *Abortion and Divorce in Western Law* (1987), pp. 112-142.

responsabilidad por sí mismo y no se vuelva económicamente dependiente de sus parientes, y en que la igualdad entre hombres y mujeres se ha convertido en realidad"[11]. Un informe preparado por Alva Myrdal para el Partido Social Demócrata sueco en 1971 predecía que "el ingreso laboral y el sistema de seguridad social moderno son las dos piedras de toque en que habrá de apoyarse la seguridad de los individuos en el futuro"[12]. En los cuatro países que han sido el foco de atención del presente estudio, el cambio de énfasis en las leyes y programas, desde la familia al individuo, se ha basado en cuestiones pragmáticas antes que ideológicas. Aun así, las tendencias individualistas han recibido un empuje adicional en el derecho público y en el derecho privado en todos los países considerados, en la medida en que las normas del derecho de familia son crecientemente revisadas para ajustarlas a las 'leyes de rango superior' contenidas en las constituciones de cada país o en las convenciones internacionales.

Pero sería erróneo pensar que el nuevo derecho de familia sólo se limita a ir al compás de la época y que ha venido, pura y simplemente, a sustituir las viejas ideas acerca de la vida familiar por las más nuevas y ampliamente aceptadas. De hecho, la legislación familiar de las dos décadas precedentes en los Estados Unidos y Europa Occidental a menudo difiere tanto de las actitudes y prácticas sociales prevalecientes, como ocurría con los sistemas tradicionales que vino a sustituir. De modo aún más llamativo, la imaginería legal de la autonomía (*separateness*) y la independencia contrasta, en todas partes, con la forma en que operan la mayoría de las familias y con las circunstancias de las madres y los hijos pequeños tanto en hogares que permanecen intactos como en los que se han dividido. Pese a ello, la ley proclama el ideal de la autosuficiencia y sugiere que la dependencia es en algún sentido degradante, negando implícitamente la importancia de la intersubjetividad humana. Otras discrepancias se evidencian en ciertas áreas en que el derecho de familia se ha visto influido por nuevas ideas, no acerca de la familia, sino del derecho y la moral. Tales ideas incluyen la noción problemática de que los tribunales y cuerpos legislativos no deberían imponer 'valores' (excepto los de igualdad, libertad individual y tolerancia); y que los 'valores' (salvo los de igualdad, libertad individual y tolerancia) son cuestión de gusto o preferencia personal. El

[11] Herman Kling, ex Ministro de Justicia sueco, citado en Sundberg, "Facteurs et tendances dans l'évolution moderne du droit de la famille des pays nordiques: Rêves et Réalités" (1978), p. 64.

[12] Citado en Zona Sage, "Dissolution of the Family under Swedish Law" (1975), pp. 375, 379 n. 20.

resultado de todo ello es, con suma frecuencia, que propuestas legales de carácter normativo se han eliminado gradualmente, aun cuando sean ampliamente compartidas por la población. Como hemos visto, estos desarrollos jurídicos han arraigado fuertemente en un país tan heterogéneo como los Estados Unidos, más que en ningún otro sitio. Allí, la postura de la neutralidad jurídica ha sido bienvenida por los jueces y legisladores, quienes, de no ser así, se verían en aprietos para justificar su preferencia por los valores de un sector de la población y no de otro[13].

Al renunciar a los intentos explícitos de promover algún conjunto de ideas en particular acerca de la vida familiar, el moderno derecho de familia sigue así las huellas de ciertas tendencias bien consolidadas en el derecho actual. En su pragmatismo, su antiformalismo, su aspiración a la neutralidad respecto a los diversos estilos de vida y opiniones, y en su carácter burocrático, el derecho de familia se ha visto arrastrado por las poderosas corrientes que hoy predominan en los sistemas jurídicos occidentales. Las nuevas leyes de familia, como le ocurrió a Aladino con la nueva lámpara que le fue dada a cambio de la vieja, encierran un genio en sus recovecos. Su espíritu motivador nos promete libertad, igualdad y progreso ilimitados, pero con demasiada frecuencia sus dones han quedado, por una u otra vía, reducidos a cenizas.

Junto a las corrientes dominantes, hay desde luego contra-corrientes y corrientes subterráneas. Hemos visto que, en términos generales, éstas son más fuertes en el mundo romano-germánico continental que en los sistemas anglo-americano o nórdico. En Francia, especialmente, y hasta cierto punto en [la ex] Alemania Occidental, se ha notado cierta tendencia de los reformadores legales a mantener los ideales ampliamente aceptados dentro del derecho de familia, acomodándolos, pese a todo, en mayor o menor grado, a las necesidades y anhelos de quienes no comparten esos ideales o no pueden vivir en conformidad con ellos. Y hay en tales países más evidencias que en otros de la sobrevivencia de ciertos ideales consuetudinarios y clásicos del derecho. En ellos hemos apreciado, además, el uso ocasional de la instancia legislativa como una oportunidad para el diálogo social. En los sistemas jurídicos continentales se tiende a ver los derechos como naturalmente aparejados a ciertas responsabilidades. El individuo suele ser percibido dentro de un contexto social. Pareciera, al mismo tiempo, que en los sistemas romano-germánicos hay un mayor reconocimiento de que el sistema jurídico, junto a otras fuerzas sociales, puede contribuir a

[13] En relación con lo impropio de aplicar los modelos norteamericanos de la familia en las reformas jurídicas de países más pequeños y homogéneos, véase Mary Ann Glendon, *Irish Family Law in Comparative Perspective* (1987), pp. 5, 18-23.

su modo y con las restricciones del caso, aunque no por ello de forma menos importante, a la edificación de ese universo de significados dentro del cual se configuran las creencias, los sentimientos y las actitudes.

Lo que queda de este capítulo explora en primer lugar, y más en profundidad, las implicancias del énfasis creciente en el individuo que hemos observado en el derecho de familia y luego propone un bosquejo tentativo de un nuevo enfoque para reformarlo, el cual podemos denominar ecológico. El capítulo concluye con un intento de situar en la perspectiva adecuada el papel del derecho y su influencia en la vida familiar.

El Estado y el individuo sin intermediarios

Como hemos visto, una multiplicidad de factores contribuyó a dejar al Estado y los varios organismos que lo componen en una relación más directa que nunca antes con los hombres, mujeres y niños considerados individualmente. Y corremos el riesgo de no percibir la significación histórica de este desarrollo en particular, a menos que recordemos lo mucho que alguna vez hubo entre el Estado y cada ciudadano y lo muy modernos que son estos dos conceptos. El 'Estado', tal como hoy lo conocemos, no surgió sino hasta que las monarquías nacionales comenzaron a consolidar su poderío en el siglo diecisiete[14]. En el período feudal, la monarquía había sido tan sólo uno de los múltiples centros de poder superpuestos, que además rivalizaban entre sí, y no siempre fue el poder predominante entre ellos. En cuanto al 'individualismo', Tocqueville señaló que la palabra en sí "era desconocida para nuestros ancestros, por la simple razón de que en su época cada individuo pertenecía a un grupo y nadie podía considerarse a sí mismo una unidad aislada"[15]. El Estado moderno y centralizado y el individuo libre y con derecho a la autodeterminación fueron posibles, ambos, por la destrucción o el declinar de la antigua sociedad de pequeños agrupamientos. Ambos nacieron, en algún sentido, juntos.

Para los revolucionarios franceses, los viejos estatutos feudales, la Iglesia, las cofradías gremiales y hasta algunas facetas de la organización familiar fueron percibidas como opresivos para el individuo y, a la vez, como amenazas para el Estado-nación. A imitación del programa de la

[14] Un enfoque sobresaliente de este tema sigue siendo Bertrand de Jouvenel, *Sovereignty: An Inquiry into the Political Good* (1957).

[15] Alexis de Tocqueville, *The Old Regime and the French Revolution* (1955), p. 96.

Reforma, que aspiraba a eliminar los intermediarios institucionales entre el hombre y Dios, los líderes revolucionarios buscaban suprimir los *corps intermédiaires* del antiguo régimen, con el eslogan de "No hay otros derechos que los de los individuos y el Estado"[16]. Las implicancias de todo ello para el derecho de familia fueron que éste debía convertirse en un instrumento de liberación: "La felicidad del hombre es sistemáticamente promovida y resguardada, ante todo en contra del grupo, y contra el carácter sagrado de los vínculos y las jerarquías"[17]. Esta parte del programa revolucionario fue, con todo, un estruendoso fracaso en su época. Irónicamente, no llegó a convertirse en realidad hasta que la idea había sido olvidada en buena medida y las estructuras mediatizadoras se habían debilitado tanto que ya no se las percibía como amenazantes. Para entonces —en nuestra propia era—, el Estado y otras organizaciones impersonales se habían vuelto más poderosos que lo que jamás pudieron imaginar los pensadores y estadistas del siglo dieciocho.

Quienes fundaron nuevos gobiernos en Francia y los Estados Unidos eran particularmente contrarios a los grupos del tipo que Rousseau había denominado las "sociedades parciales", y Madison, las "facciones"[18]. La rivalidad entre centros de poder fuertes era considerada no sólo divisionista en términos sociales, y contraria a la unidad nacional, sino que planteaba una amenaza mortal a los experimentos republicanos. Concentrándose en éste y otros obstáculos al éxito de sus ambiciosos proyectos, los estadistas-arquitectos de las nuevas repúblicas no sólo fueron incapaces de imaginar el poder que los gobiernos centrales habrían de llegar a tener en la era moderna: sencillamente, dieron por sentada (y por cierto contaron con) la existencia ininterrumpida de grupos tales como la familia, los vecindarios, los condados, los municipios y las asociaciones en pequeña escala de variada índole. Sin llegar a ser facciones, ellos constituían el universo habitual y cotidiano de sus miembros. Eran el tejido mismo de la sociedad. La voz de Edmund Burke se alzaba solitaria para advertir que también estas agrupaciones se verían, en el largo plazo, amenazadas por fuerzas sociales que estaban rompiendo todos los nexos entre los individuos. E hizo una formulación temprana, que es citada a menudo, de una idea que habría de atraer la atención de ciertos teóricos sociales (principalmente franceses) en

[16] Marcel Waline, *L'individualisme et le droit* (1945), p. 323.

[17] E. du Pontavice, citado en Alain Bénabent, "La liberté individuelle et le marriage" (1973), p. 494.

[18] Jean-Jacques Rousseau, "The Social Contract" (1973), pp. 247-248; James Madison, *The Federalist*, números 10 y 51.

el siglo diecinueve, cuando quedó claro para ellos que ya no era posible dar por sentados los grupos mediatizadores:

> El compromiso con una sub-división, el amor al reducido pelotón al que pertenecemos dentro de la sociedad, es el principio inicial (el germen donde los haya) de los afectos públicos. Es el primer vínculo en la sucesión que nos conduce al amor por la patria y la humanidad[19].

Debido, quizás, a que en Francia en particular los grupos mediatizadores no sólo habían sido víctimas de algo más que un simple remezón ante el avance de la modernidad, sino que se habían convertido en blanco de una vigorosa arremetida, dos grandes escritores galos del siglo diecinueve se apresuraron a comentar los costos potenciales que podía tener la pérdida eventual de esos "reducidos pelotones" de los que hablaba Burke. Tocqueville percibió que algunos de esos costos serían políticos, en términos de las libertades mismas que los experimentos republicanos buscaban promover. Los mismos grupos que los fundadores de la nación francesa y de Norteamérica percibían como un impedimento para la consolidación del poderío nacional podían, según Tocqueville, operar luego como útiles mecanismos de control cuando los gobiernos se volvieran excesivamente fuertes y centralizados.

Tocqueville consideraba a las pequeñas comunidades políticas, en particular, como esenciales para una democracia saludable. Creía que las posibilidades de alcanzar un gobierno libre y democrático se habían visto seriamente dañadas en Francia por la virtual eliminación, por lo demás deliberada, de los gobiernos locales y participativos. Con la destrucción de los centros de poder locales y regionales y también con el declinar de los gremios y las Iglesias, no quedó nada para impedir la consolidación del gobierno central. Pero, de igual modo, tampoco quedó nada que viniera a reforzar la sociedad y mantuviera unidos a sus componentes[20]. Los viajes

[19] Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France* (1973), p. 59.

[20] Cfr. la siguiente observación de Czeslaw Milosz: "La importancia del movimiento Solidaridad en Polonia radica en que no es un fenómeno exclusivamente polaco, sino que ejemplifica un problema crucial del siglo veinte, a saber: la resistencia a la desaparición de la sociedad y su dominio por el Estado. En la Polonia de Solidaridad, por obra de ciertas fuerzas históricas, hubo una suerte de resurgimiento, o un renacer, de la sociedad en contra del Estado.

"Muy al contrario de las predicciones de Marx, he aquí el problema crucial de nuestra centuria. En lugar de ser suprimido, el Estado, como un [cáncer], ha devorado la sustancia misma de la sociedad. Destruyéndola, por cierto. Siendo un movimiento sindical, Solidaridad se resistió a ello. Y la pregunta de si a ello habrá de seguir el despertar de varias otras sociedades a la vez sometidas por el Estado es algo que no puedo responder aquí". "An Interview with Czeslaw Milosz" (27 de febrero, 1986), p. 34.

de Tocqueville por los Estados Unidos lo condujeron a pensar que gobiernos locales como los que viera en funciones en Nueva Inglaterra habrían de preservar a los Estados Unidos del exceso de centralismo que afligía, con sus males, a Francia.

> Las instituciones locales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia; la ponen al alcance de la gente; le enseñan a la gente a valorar su apacible goce y la habitúan a valerse de ella. Sin instituciones de nivel local, bien puede ocurrir que una nación se dé a sí misma un gobierno libre, pero ello no implica que haya desarrollado un espíritu libre. Puede que las pasiones transitorias, los intereses momentáneos o las circunstancias del azar le confieran el aspecto de una entidad independiente; así y todo, las tendencias despóticas que han sido movilizadas en el corazón del cuerpo social habrán de aflorar tarde o temprano a la superficie[21].

Los escritos de Tocqueville dan pie a un sinfín de ideas importantes acerca de las estructuras mediatizadoras. En el párrafo recién citado, él mismo vislumbra las organizaciones participativas como auténticas escuelas para la ciudadanía, donde el mayor rango posible de personas pueda familiarizarse con "esas formalidades sin las cuales la libertad sólo se puede alcanzar por la vía de las revoluciones"; donde ellas pueden desarrollar "un gusto por el orden" y acumular "nociones claras y prácticas acerca de la naturaleza de sus deberes y la amplitud de sus derechos"[22]. En la misma vena que Burke, quien creía que el *sentimiento* de la ciudadanía debía estar enraizado en la adhesión a grupos pequeños, Tocqueville se preguntaba si el *ejercicio práctico* de la ciudadanía podría sobrevivir sin la experiencia que brinda un anfiteatro algo más reducido que el del nivel nacional.

A partir de esta propuesta, el autor deriva a una consideración en torno a lo que sucede a los individuos en sociedades donde las habilidades para gobernar están diluidas en buena parte de la población. En un famoso párrafo que da cuenta de todos sus temores respecto a Francia, pero que resultó, con variaciones de grado, una visión anticipatoria de otros Estados del siglo veinte, amplía la distinción de Rousseau entre ciudadanos y sujetos:

> Hay países en Europa cuyos habitantes viven algo similar a lo que siente un temporero rural, indiferente por completo al destino de la tierra que trabaja. Puede que ocurran allí, en su país, los mayores

[21] Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* (1969), tomo 1, p. 63.
[22] Ibídem, p. 70.

> cambios imaginables, pero será sin su participación; ni siquiera sabe con precisión qué ha sucedido en rededor; está lleno de dudas; sólo por azar se ha enterado, de oídas, de lo que está ocurriendo. Peor aún, las condiciones de su aldea, el patrullaje de sus caminos y la reparación de su iglesia y de la casa del párroco no le importan; piensa, en rigor, que todo ello tiene poco que ver con él y que es asunto, más bien, de un gran desconocido, dueño de un gran poder, al que denominan 'el gobierno'. Por su parte, disfruta de cuanto tiene como si fuera un inquilino más, sin un sentimiento de propiedad sobre ello y ninguna sensación de que él mismo esté progresando [...]. Por añadidura, este hombre que ha sacrificado de manera tan absoluta su propio albedrío no gusta mucho más de la obediencia que su vecino. Se somete, cierto es, al capricho de un funcionario, pero tan pronto como la fuerza se repliegue, habrá de jactarse de su triunfo sobre la ley como si ésta fuera un enemigo recién doblegado. Alterna, pues, todo el tiempo entre el servilismo y el libertinaje.
> Cuando las naciones llegan a este punto, deberán cambiar sus leyes o sus costumbres, o, de lo contrario, perecerán, pues la fuente de las virtudes públicas se ha secado; en tales circunstancias, quedan aún sujetos en rededor, pero no ciudadanos[23].

Tocqueville llama repetidas veces la atención sobre los nexos entre el individualismo, la preocupación por el bienestar material y la propensión al despotismo[24].

> En una comunidad en la que los vínculos de familia, de estirpe o clase, y las fraternidades gremiales ya no existen, la gente es más propensa a pensar exclusivamente en sus propios intereses, a ser presa del egoísmo que se solaza en un individualismo estrecho de miras y que no le importa en absoluto el bien público. Lejos de intentar contrarrestar tales tendencias, el despotismo las incentiva, privando a los gobernados de cualquier sentido de solidaridad e interdependencia; de sentimientos de buena vecindad y del deseo de promover y engrandecer el bienestar de toda la comunidad. Los mantiene enclaustrados, por así decirlo, a cada uno en su vida privada, y, aprovechándose de la tendencia que todos exhiben a permanecer alejados, los enajena aún más. Sus sentimientos recíprocos estaban ya en vías de enfriarse; el despotismo acaba congelándolos[25].

Según Tocqueville, entonces, la aparición simultánea del individuo libre y con derecho a la autodeterminación y del Estado-nación centraliza-

[23] Ibídem, pp. 93-94.

[24] Christopher Lasch ha desarrollado en su obra estos temas con sumo refinamiento y gran vigor, en especial las implicancias del individualismo norteamericano. Véase, en particular, *Haven in a Heartless* (1977), y *The Culture of Narcissism* (1979).

[25] Tocqueville, cita previa, *The Old Regime and the French Revolution* (1955), p. xiii.

do fueron dos grandes logros históricos que supusieron, a la vez, un peligro y un avance para la libertad humana. Con la erradicación, o el mero declinar, de los subsistemas institucionales que había entre los individuos y el Estado se perdió un factor de contrapeso; ello contribuyó a atrofiar las habilidades para gobernar y puso en peligro cierta fuerza de carácter e independencia de espíritu que, según el autor, sólo se podían desarrollar en el seno familiar y en las pequeñas comunidades locales. Paradójicamente, entonces, ciertas formas de organización social que en condiciones feudales habían sido, con suma frecuencia, una fuente de opresión, aparecían ahora capaces de contrarrestar tanto a los poderes oficiales como el egoísmo de lo individuos en las nuevas y grandes repúblicas mercantiles. Al parecer, resultaba aconsejable hacer una reevaluación del papel que jugaban las asociaciones intermediadoras modernas: una reevaluación que tomara debidamente en cuenta las funciones benéficas que ellas podían llegar a desempeñar en las nuevas circunstancias sociales.

En Francia, a medida que las estructuras mediatizadoras siguieron perdiendo terreno durante el siglo diecinueve, el interés académico por la función social de las mismas creció aun más. Era casi como si los líderes revolucionarios, al convertir el asunto en un eslogan y 'rotular' su existencia como un problema, hubieran conseguido que los herederos de la Revolución percibieran el declinar de tales grupos como una fuente eventual de otra clase de problemas. En otros países en los que los grupos mediatizadores habían llamado menos la atención, su función social fue apenas reconocida, salvo en forma oblicua por autores como Otto Gierke, Charles Horton Cooley y G. H. Mead. Por cierto, Marx y Maine se habían apresurado a detectar la autonomía creciente del individuo a medida que la vieja sociedad de grupos se iba disolviendo. Y aunque Maine dio la bienvenida al proceso, entendiéndolo como una forma de liberación, Marx percibió con más profundidad el precio que el individuo libre y con derecho a la autodeterminación habría de pagar en términos de aislamiento y alienación. Pese a ello, la tradición jurídica marxista demostró, cuando menos hasta fecha reciente, escaso interés en preservar a los grupos que podrían plantear obstáculos a la formación de los Estados socialistas y alentar nefastos rebrotes del pasado burgués y feudal.

Por las razones que sean, fueron los franceses quienes hicieron suyo el tema. Émile Durkheim retomó el problema allí donde Tocqueville lo había dejado, añadiendo a sus consideraciones la conclusión de que el debilitamiento de las asociaciones mediatizadoras podía no sólo obstaculizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía sino tener nocivas implicancias

para el desarrollo de la personalidad humana. En la conclusión de su famoso estudio acerca del suicidio, el autor llamó la atención sobre los que él suponía eran los costos humanos de la desintegración de la sociedad moderna: la pérdida de los vínculos no sólo con otras personas, sino con el pasado y el futuro; en breve, una profunda pérdida de sentido[26]. Al igual que Tocqueville, Durkheim temía que la relación no mediatizada del Estado y el individuo fuera un mal presagio para la vida social y política:

> Una sociedad formada por un número infinito de individuos desorganizados, a los que un Estado hipertrofiado se viera forzado a reprimir y coartar, es una auténtica monstruosidad sociológica [...]. Cuando el Estado se transforma en el único entorno posible para que los hombres desarrollen una vida en comunidad, ellos pierden, inevitablemente, todo contacto entre sí, se tornan descomprometidos y, en consecuencia, la sociedad acaba desintegrándose [...]. La falta de cualesquiera instituciones corporativas genera entonces [...] un vacío cuya gravedad no es preciso exagerar. Es todo un sistema de órganos, necesario para el normal funcionamiento de la vida en común, el que se echa en falta[27].

Sin embargo, a diferencia de Tocqueville, Durkheim dudaba de que las comunidades locales, los grupos religiosos o la familia pudieran brindar demasiado apoyo al individuo en el mundo moderno. Medio siglo después de que su gran predecesor concluyera su obra, le pareció a Durkheim que "los lazos que nos atan [a las comunidades] se hacen cada día más frágiles y más perecibles"[28] y que las religiones comunitarias habían perdido ya buena parte de su autoridad y su efectividad[29]. Desde su perspectiva, ni siquiera cabía esperar que la familia jugara un rol demasiado importante para mitigar el aislamiento individual o promover la cohesión social. En 1897, cuando la sensiblería popular acerca de la vida familiar estaba quizás en su punto culminante, Durkheim escribió un texto obscuro y pesimista en que hacía una evaluación de la condición de la familia. Allí hacía notar las discontinuidades que comenzaban a caracterizar las relaciones familiares:

> Ha habido, de hecho, cambios en la formación de la familia que no le permiten ya tener la misma influencia preservadora de antaño. Hubo una época en la que ella mantenía dentro de su órbita a la mayoría de sus integrantes, desde el nacimiento hasta su muerte, y formaba con ellos una masa compacta, indivisible y dotada de cierta

[26] Émile Durkheim, *Suicide* (1966), pp. 297-392.
[27] Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (1964), pp. 28-29.
[28] Ibídem, p. 27.
[29] Durkheim, *Suicide* (1966), pp. 374-375.

> permanencia, mientras que hoy en día su duración es extremadamente breve. Apenas si ha alcanzado a formarse cuando ya comienza a dispersarse. Tan pronto como ha concluido la primera etapa en el crecimiento de los hijos, éstos suelen partir para completar su educación lejos del hogar; por añadidura, se ha vuelto casi la regla que, tan pronto como alcanzan la adultez, se instalan a vivir lejos de sus padres y el hogar queda desierto. Se diría que en la actualidad, y durante buena parte del tiempo, la familia está reducida a la pareja de cónyuges [...].
> Por ende, dado que hoy juega un rol bastante menor en la existencia de los individuos, ya no basta en sí misma como un objetivo de vida. No es, por cierto, que nos importen menos que antes nuestros vástagos, sino que ellos están entreverados de manera menos cercana, y en forma algo más discontinua, con nuestra propia existencia, a raíz de lo cual esta última requiere de algún otro fundamento como su razón de ser. Puesto que hemos de vivir sin ellos, necesitamos también volcar nuestros pensamientos y actos hacia otros objetos[30].

Esta dispersión periódica de los miembros de la familia hacía imposible preservar, en el curso de las generaciones, un sentido de pertenencia. Durkheim hizo notar la importancia decreciente de los símbolos tradicionales de la continuidad familiar: el apellido familiar con sus recuerdos asociados, el hogar y la tierra ancestrales con su peculiar historia que suscitaba la adhesión de todos quienes compartían una misma sangre. Tras haber sido alguna vez un grupo dotado de una unidad abstracta e impersonal, la familia se estaba convirtiendo "en apenas una cifra cualquiera de individuos, unidos por el afecto mutuo"[31]. A Durkheim le parecía irreversible dicho proceso.

> Hubo una época en la que el entorno local estaba más o menos vetado a terceros por la costumbre, por las tradiciones o la dificultad de las comunicaciones, época en la que cada generación seguía forzosamente en su lugar de origen o cuando menos podía no moverse demasiado lejos de él. Pero, a medida que estas barreras se fueron diluyendo, y a medida que estos ambientes inicialmente restringidos quedan nivelados y entremezclados, los individuos se dispersan de modo inevitable, en conformidad con sus propias ambiciones y para promover sus intereses en el espacio más vasto que ahora se abre ante ellos. Ningún esquema puede, por consiguiente, contrarrestar esta tendencia de las abejas a escapar en masa, ni restaurar la indivisibilidad que fue alguna vez la fuerza de la familia[32].

---

[30] Ibídem, p. 377.
[31] Ibídem.
[32] Ibídem, p. 378.

Nada de lo que ha venido ocurriendo desde que Durkheim redactó estos párrafos permite suponer que estuviera equivocado en algún sentido. Si algo ha ocurrido, es más bien que el proceso que él describió parece haberse intensificado. Con todo, Durkheim no pretendía, como tampoco Tocqueville, restaurar las instituciones del *ancien régime*. En lugar de ello, hacía descansar sus esperanzas en lo que a él mismo le parecía, al despuntar el siglo veinte, la más promisoria entre las fuentes posibles de cohesión social: las asociaciones laborales, o "corporaciones", con lo cual aludía no a los sindicatos u organizaciones empresariales como tales, sino a todos los grupos de individuos que cooperan en una misma profesión, negocio u ocupación[33].

Por desgracia para esta teoría, la vida laboral, al igual que la vida política, ya estaba siendo dominada por mega-organizaciones. Las corporaciones y otras asociaciones impersonales podían servir, en ocasiones, como contrapeso a los poderes públicos, cuando no los cooptaban o eran cooptadas por ellos, pero difícilmente podían aportar aquello que se iba perdiendo a medida que la sociedad conformada por grupos se volvía una sociedad de individuos. Cuán decepcionado se hubiera sentido el propio Durkheim de haber leído la carta siguiente, remitida por un obrero francés a la sección cartas de *Le Nouvel Observateur* en 1976:

> Bernadette y yo no queremos tener hijos [...]. Ella trabaja en el Servicio de Correos y Telégrafos y yo soy repartidor. Y vivimos hoy en un pequeño departamento de los suburbios.
> Aun cuando la mayoría de la gente que conocemos no lo entiende, no queremos pasar el resto de nuestra vida en estas condiciones; esto es, cada uno de nosotros cumpliendo todos los días con una labor monótona, repetitiva, que no deja lugar a la iniciativa, sin responsabilidades, sin un significado social real y por añadidura fatigosa, acalambrante.
> Si tuviéramos uno o dos hijos, tendríamos que dejarlos en una guardería, luego en el jardín infantil y más tarde en la escuela, lo cual implica pasar incluso más tiempo arriba del transporte público y ver a los niños 'a la carrera' y al atardecer, con aún más labores que hacer en casa. Nuestros respectivos salarios no nos permiten dejar de trabajar, a ninguno de los dos. Y me parece que niños criados en las condiciones de hoy serían incluso más infelices y crecerían aún más desorientados que como lo hicimos nosotros [...]. Una verdadera familia es aquella en la que se lleva a cabo, todos los días del

[33]Ibídem, pp. 378-384; Durkheim, *The Division of Labor in Society* (1964), pp. 1-38. Cfr. teoría de Hegel acerca de las "corporaciones" en *Philosophy of Right* (1942), párrs. 250-256.

> año, alguna tarea en común, con el solo propósito de conseguir que quienes habrán de sobrevivirnos sean más felices que nosotros mismos.

La situación que describe el firmante de esta carta dista con mucho de ser atípica en las sociedades contemporáneas. Para Bernadette y su esposo, las consideraciones en torno al costo y la cercanía de los medios de transporte a su lugar de trabajo influyeron, con toda probabilidad, en su decisión de vivir en una subdivisión más bien monótona y sombría del extrarradio parisino. De manera creciente, en los países de los que nos hemos ocupado aquí, los barrios que la gente elige y los grupos a los que pertenecen no son comunidades "que combinen todos o la mayoría de los factores requeridos para vivir bien, sino asociaciones formadas sobre la base de semejanzas muy específicas en cuanto a empleo e ingresos"[34]. Hubo una época en la que vastos sectores creyeron que la familia podía servir como una suerte de edén, en el que uno podría refugiarse de la agresión psicológica de la vida urbana y de los desencantos del mundo laboral[35]. Pero ese refugio, si alguna vez existió, difícilmente podía permanecer intocado por las fuerzas que fueron transformando el mundo a su alrededor. Ciertamente, las expectativas exageradas acerca de lo que podían ofrecer las relaciones personales, por la vía de compensar las privaciones experimentadas en todos lados, quizás contribuyeron a dificultar aún más la intimidad y la solidaridad familiares.

Ecología de la familia

Pese a que el sistema legal ha desplazado su foco de atención de la familia al individuo, la sociedad descansa hasta hoy en la primera y espera aún que ella juegue un papel crucial en el cuidado de los menores, los ancianos, los enfermos, los discapacitados graves y los necesitados. Incluso en los Estados benefactores más avanzados, las familias de todos los niveles de ingresos son un recurso fundamental para el Estado, ya que comparten con los organismos públicos, en múltiples formas y en mayor o menor grado, el peso de la dependencia. Históricamente, la mayoría de los programas de asistencia social se desarrollaron sobre la premisa de que los individuos debían recibir ayuda estatal sólo cuando su familia (que supuestamente abarcaba a un vasto círculo de parientes) era incapaz de cuidar de ellos.

---

[34] Wilson Carey McWilliams, "Democracy and the Citizen: Community, Dignity, and the Crisis of Contemporary Politics in America" (1980), pp. 79, 99.

[35] Christopher Lasch, *Haven in a Heartless World* (1977).

Dicho supuesto cambió en forma gradual. Los programas de asistencia social han asumido hoy una mayor responsabilidad en garantizar un estándar de vida mínimo a todos los miembros de la sociedad, especialmente cuando las necesidades de un ciudadano son, al parecer, el resultado de fuerzas sociales y económicas que escapan a su control. En ciertas áreas de la vida, la idea de una responsabilidad estatal prioritaria resulta prácticamente incuestionable, como ocurre, por ejemplo, con la educación formal de los niños. En otras, la idea de que la responsabilidad privada quede de lado suscita gran controversia, como sucede con la mantención de los hijos luego del divorcio. Pero incluso con la proliferación de varios tipos de asistencia estatal, de servicios y cuidados institucionales, la familia es aún el principal recurso con que cuenta la sociedad para enfrentar el problema de la dependencia. La familia en sus varias formas proporciona así importantes servicios no sólo a sus miembros sino también al Estado.

La capacidad de la familia para llevar a cabo esas tareas que la sociedad le encarga se ha visto, pese a todo, dramáticamente alterada por los cambios en la estructura familiar, en los índices de participación femenina en la fuerza laboral y en el carácter mismo de la dependencia. La familia moderna de dos proveedores con hijos, y en particular la familia de un único progenitor, que debe lidiar con sus miembros dependientes, ha de descansar en mayor medida en sistemas de apoyo externo que el hogar a cargo del 'ama de casa que es a la vez proveedora', el que ahora se ha vuelto atípico. Y a la vez que la cantidad disponible de 'personas que velan por otras' dentro de la familia se ha ido reduciendo, la composición del grupo necesitado de cuidados se ha modificado porque ahora incluye menos niños y más discapacitados y ancianos que como ocurría a la vuelta del siglo. En esta situación históricamente nueva, no ha aparecido, hasta aquí, ningún sucedáneo absoluto del aporte voluntario de cuidados, servicios e ingresos que hacen los miembros de la familia —ni se lo vislumbra de momento en el horizonte. El apoyo de la familia seguirá siendo, con toda probabilidad, un mecanismo indispensable para que la sociedad como un todo se enfrente al problema de la dependencia de los menores, los discapacitados y los ancianos más frágiles. Ello no obstante, la institución requiere cada vez de más ayuda para realizar sus tareas, y dado que, de entre sus integrantes, quienes las realizan son preferentemente las mujeres, el problema de la ayuda familiar está inextricablemente ligado a varias otras cuestiones problemáticas y relacionadas con la política demográfica, con la igualdad entre los géneros y con la política laboral.

Todos los países cuyo sistema legal hemos examinado aquí luchan hoy para superar las tensiones que se derivan de sus esfuerzos simultáneos por mantener la productividad de la fuerza laboral, establecer condiciones dignas para la crianza de los hijos, alcanzar una tasa adecuada de crecimiento demográfico y garantizar la igualdad de trato a hombres y mujeres. Y todos están tratando de definir un concepto de igualdad entre los sexos que tenga en cuenta el papel de la mujer en la procreación y la crianza, sin que ello signifique perpetuar su subordinación. Pese al hecho de que esa noción igualitaria (entendida de múltiples formas) ha sido en rigor una de las influencias transformadoras más poderosas dentro del derecho de familia moderno, los problemas fundamentales que aún quedan por resolver dentro del derecho de familia y la política familiar son los que se relacionan con la situación de las mujeres que están criando a sus hijos, soportan la carga de otras funciones hogareñas y del cuidado doméstico y trabajan al mismo tiempo en oficios en que su paga, su *status* y su propia seguridad son inferiores a los de la mayoría de las trabajadores varones.

Se han puesto en marcha múltiples programas para ayudar a las mujeres a desarrollarse en sus varios roles sociales. Algunos países han sido muy generosos a la hora de ofrecer ayuda a la maternidad, cuidados infantiles y subsidios familiares, pero hoy nadie está muy seguro de lo que el sistema jurídico y el Estado pueden o deberían hacer en relación con los problemas algo más profundos que hacen tan arriesgados los roles de madre y guardiana del hogar. Hoy se habla mucho, pero con gran imprecisión, de 'fortalecer' la familia; sin embargo, no hay hasta aquí grandes razones para suponer que pueda lograrse tal cosa y tampoco sabemos la forma de hacerlo, o qué función —si le cabe alguna— le corresponde al sistema legal en todo ello. Algunos sectores propician una mayor ayuda pública a la familia; otros sostienen que la ayuda estatal puede tener efectos nocivos y debilitantes. Pero la discusión planteada en términos de una elección entre la intervención y la no intervención es tan simplista y poco provechosa como aquella otra que intenta diferenciar claramente entre intereses individuales y sociales[36]. Estas falsas dicotomías tienden a obscurecer el hecho de que los gobiernos actuales no pueden evitar influir en la familia de las más variadas formas, directa o indirectamente, y que los individuos

[36] Para una visión crítica al respecto, véase Martha Minow, "Beyond State Intervention in the Family: For Baby Jane Doe" (1985), pp. 933, 1010; y Bruce C. Hafen, "The Constitutional Status of Marriage, Kinship, and Sexual Privacy. Balancing the Individual and Social Interests" (1983), pp. 463, 470-471.

suelen beneficiarse no sólo por tener 'derechos', sino también por verse rodeados de cierto tipo de acuerdos sociales.

Otra forma de concebir el fortalecimiento de la familia consistiría en adoptar un enfoque de carácter más ecológico: en preguntarse si el Estado puede ser capaz de ayudar indirectamente a la familia y a sus integrantes por la vía de contribuir a la vitalidad de las comunidades en pequeña escala que la circundan. En la actualidad, el discurso jurídico no reconoce suficientemente el hecho de que los miembros de un grupo familiar pueden requerir, al igual que precisan de ciertos derechos, de un entorno nutritivo, o que la familia en sí puede requerir de ciertas comunidades circundantes para funcionar bien. Al ignorar sistemáticamente —aunque en su mayor parte sin quererlo— a los 'reducidos pelotones' de los que la familia y los individuos han extraído siempre el sustento emocional y material, los sistemas jurídicos modernos contribuyen quizás, en algún grado, a su propia atrofia. Al buscar otros fines sociales en áreas como las de las prestaciones sociales, la renovación urbana y la política industrial, sin considerar su impacto en la familia, en los vecindarios, en las Iglesias y en otras asociaciones, los gobiernos han erosionado con frecuencia las condiciones en las que florecen tales asociaciones. Esta suerte de indiferencia legal ante asuntos de vital importancia para mucha gente común y corriente es atribuible en parte a las preocupaciones específicas de los tecnócratas que predominan en los actuales gobiernos, partidos políticos, corporaciones, medios de comunicación masiva y otras organizaciones en gran escala que operan a considerable distancia de donde discurre la existencia del ciudadano medio[37]. Para los miembros de esta 'nueva clase', los lazos con las personas y con los lugares, las creencias religiosas o el apego a la tradición son, con suma frecuencia, irrelevantes o incluso contraproducentes[38]. Personas de gran movilidad geográfica, y cuyo prestigio, poder y gratificación personal proceden de su trabajo, son las que hoy ejercen mayor influencia en las sociedades modernas y, a menudo, "adoptan, libres de cualquier atadura, medidas que socavan la estabilidad geográfica y debilitan a frágiles comunidades de cuyo apoyo concreto y emocional dependen otros sectores"[39].

Claude Lévi-Strauss es el último de los grandes teóricos sociales franceses que destacó la importancia política del entorno personal —hoy sometido a graves amenazas— que representan las comunidades locales, la

[37] Robert E. Rodes, Jr., "Greatness Thrust Upon Them: Class Biases in American Law" (1983), p. 1.

[38] Wilson Carey McWilliams, "American Pluralism: The Old Order Passeth" (1976), pp. 293, 315.

[39] Rodes, "Greatness Thrust Upon Them: Class Biases in American Law" (1983), p. 6.

familia, las organizaciones religiosas y laborales y otras asociaciones voluntarias. Con ocasión de la invitación que recibiera para hablar ante la comisión especial sobre las libertades de la Asamblea Nacional de Francia, insistió en que no es posible alcanzar un grado significativo de libertad en una sociedad conformada por individuos aislados:

> Contrariamente a lo que proponía Rousseau, que aspiraba a abolir toda microsociedad dentro del Estado, la restauración en algún sentido de las microsociedades ofrece la última posibilidad de inyectarles a muchas formas hoy achacosas de la libertad una dosis renovada de vigor y salud. Por desgracia, hoy no está en manos del legislador revertir la caída de las sociedades occidentales por la pendiente en que se han ido deslizando durante varios siglos —con suma frecuencia siguiendo nuestro propio ejemplo histórico [el ejemplo francés]. Pero el legislador, al menos, puede estar atento a la reversión de esta tendencia, de lo cual hay indicios aquí y allá; y puede alentarla en sus manifestaciones más imprevisibles, pese a lo muy disonantes y hasta chocantes que ellas puedan parecer en ocasiones. En todo caso, el legislador debiera evitar cualquier gesto que obstaculice esa reversión o, una vez afianzada, que le impida seguir su curso"[40].

Aparte de estas recetas de índole general, nadie parece tener, así y todo, ninguna propuesta específica para robustecer las estructuras mediatizadoras. Puede que ello se deba, como Lévi-Strauss lo sugiere tangencialmente, a que las microsociedades (como el resto de las instituciones humanas) tienen un lado oscuro, al que quizás sea preciso hacerle frente.

Ello no obstante, hay una corriente aún tenue, pero en expansión, de desafíos a los estilos prevalecientes del discurso legal y político que sólo tienen en cuenta al individuo, al mercado y al Estado. Notable, entre todos ellos, es un estudio monográfico de Peter Berger y Richard Neuhaus, en el que proponen no sólo que los gobiernos debieran asumir como un objetivo social importante la protección de los vecindarios, de las Iglesias, la familia y otras asociaciones voluntarias, sino, además, que los organismos gubernamentales debieran utilizar preferentemente a dichas organizaciones siempre que esté en juego algún objetivo social[41]. Pero articular tales propuestas equivale a plantearse una gama completa de nuevos problemas y escollos.

---

[40] Claude Lévi-Strauss, "Reflections on Liberty" (1985), p. 288.

[41] Peter L. Berger y Richard J. Neuhaus, *To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy* (1977). Véanse también los ensayos de Wilson Carey McWilliams: "On Equality as the Moral Foundation for Community" (1977), p. 212; McWilliams, "Democracy and the Citizen: Community, Dignity, and the Crisis of Contemporary Politics in America" (1980), pp. 100-101.

¿Cómo podría implementarse una política como ésa cuando en la teoría jurídica escasean los conceptos o el léxico para tratar con grupos como ésos? Las dificultades políticas y técnicas serían formidables, y el tema en sí ha atraído escasamente la atención de la mayoría de los juristas, que suelen estar abocados a la cuestión de los derechos individuales, a atacar o engrandecer al Estado o a preservar la maquinaria burocrática.

Es más, existen serias dudas de si los líderes de las democracias liberales (aun cuando se los pudiera convencer de que las estructuras mediatizadoras merecen su atención) estarían dispuestos a aceptar el sorprendente consejo de Lévi-Strauss de incentivar las tendencias opuestas a lo que él percibe como un proceso de decadencia social, "pese a lo muy disonantes o chocantes que ellas puedan parecer en ocasiones". Lo más probable es que todo intento legislativo en pro de tales grupos supondrá un cuidadoso examen para verificar si el funcionamiento interno del grupo concuerda con los valores ampliamente aceptados (o, en el caso de asociaciones más vastas que la familia, con los valores que propicia el régimen político)[42]. Todo el mundo sabe que la familia y otras comunidades estrechamente cohesionadas pueden ser semilleros de desigualdad y opresión. Puede ocurrir que el débil, el dependiente y el que es distinto sufran abusos y queden desprotegidos en la familia, como bien puede suceder que sean protegidos por ella. Y familias enteras o individuos pueden verse excluidos y aislados en las comunidades locales y las asociaciones voluntarias, o bien pueden ser apoyados por ellas. Una familia, o un grupo, en determinadas circunstancias puede convertirse en una aterradora maraña patológica.

[42] Richard Stewart, por ejemplo, refiriéndose a asociaciones algo más alejadas de la vida diaria que los grupos mediatizadores de los que aquí nos ocupamos, ha planteado el problema en términos de cómo hacer a los "subsistemas institucionales" no sólo más autónomos sino más sensibles ante sus integrantes, sin por ello socavar "la integridad del orden político y económico general y la fidelidad de los subsistemas a valores y objetivos generalizados en la sociedad". Richard B. Stewart, "Reconstitutive Law" (1986), pp. 86, 100-101. La percepción de Stewart de un marco institucional que serviría en forma simultánea a "los valores republicanos y comunitarios que se cultivan dentro de las organizaciones" y a "los valores societales de la diversidad y la aspiración que trascienden a las organizaciones particulares..." (Book Review [1987], pp. 371, 387) es de gran atractivo, y descansa en la idea de que la participación en el proceso deliberante de un grupo "puede tener una función constitutiva, transformando las preferencias y valores de los miembros individuales y fortaleciendo los sentimientos de solidaridad" (ibídem, p. 381). Pero si la participación, la sensibilidad ante los miembros del grupo y la deliberación han de quedar garantizadas por normas gubernamentales o bajo la supervisión del Estado, ¡se requerirá de mucha sabiduría y mucho arte para promover y mantener estos procedimientos sin destruir el grupo! La historia del derecho laboral en los Estados Unidos ejemplifica tanto las dificultades como las posibles ventajas de un intento parecido.

¿Por qué, pues, planteó Lévi-Strauss tan radicalmente su sugerencia a la Asamblea Nacional de Francia? ¿Quería el antropólogo decir, implícitamente, que la preservación de un grado significativo de libertad en la sociedad puede requerir de ciudadanos con ciertas virtudes particulares —como la moderación, la cooperación y la generosidad—, virtudes que sólo pueden desarrollarse al interior de grupos relativamente pequeños? ¿Y que no cabe esperar de los grupos en los cuales son promovidas esas virtudes, que sean, ellos mismos, un modelo de democracia y libertad? ¿O estaba simplemente recordándonos lo muy difícil que nos resulta a todos sobreponernos a nuestros propios prejuicios, condicionados por la cultura?

Suele ocurrir, por cierto, que los valores fundamentales de los grupos mediatizadores son impopulares o que los miembros de esos mismos grupos son religiosa o étnicamente distintos de la mayoría[43]. Obviamente, hay delicados equilibrios que preservar, y hemos de asumir que cualquier cambio importante en el enfoque del derecho relacionado con las asociaciones intermedias generará nuevos problemas que hoy resultan imprevisibles. No parece haber ningún curso de acción sencillo o que esté libre de imprevistos, pero los riesgos de seguir por la senda de creciente aislamiento individual en las burocracias públicas o privadas inmensamente poderosas de nuestra época parecen mayores que los de intentar promover, o cuando menos abstenerse de lesionar, a los grupos intermedios relativamente frágiles[44].

¿Qué diferencia hace el derecho?

En este punto, es prudente señalar lo que las reflexiones en torno al derecho de familia nos indican: que deberíamos actuar con cautela a la hora

[43] La ley sueca contraria a los azotes ejemplifica la tensión entre la promoción de valores ampliamente aceptados y el resguardo de las estructuras mediatizadoras. Puede que el castigo corporal resulte chocante para la mayoría de la gente, a la luz de ideas comúnmente aceptadas acerca de la crianza, pero también puede ser que este tipo de disciplina forme parte integral de las estructuras familiares en que se insertan los trabajadores foráneos en las ciudades de Suecia.

[44] El problema en extremo complejo de diseñar instrumentos para propiciar las estructuras mediatizadoras y a la vez proteger al individuo escapa a los alcances del presente volumen. Hasta aquí, prácticamente la totalidad de la labor académica desarrollada en esta línea se ha ocupado de los gobiernos o las empresas locales y de las organizaciones sindicales. En relación a tales tipos de asociaciones, el sociólogo del derecho Gunther Teubner ha postulado lo que él denomina un "trilema reglamentario": concepto alusivo a la alta probabilidad de que las regulaciones jurídicas que no respeten la reglamentación interna y los procesos reproductivos de los subsistemas sociales: 1) resulten irrelevantes, 2) tengan un efecto destructivo en el área de la vida social implicada, o 3) acaben desintegrándose bajo las presiones de los sectores políticos o sociales afectados. "Juridification: Concepts, Aspects, Limits, Solutions" (1987), pp. 21, 27.

de pedirles demasiado al derecho de familia y a las políticas públicas. En múltiples ocasiones a lo largo de este estudio hemos podido advertir el limitado poder que tienen las disposiciones legales, por sí solas, cuando se trata de impulsar o retardar cambios sociales de gran envergadura en el ámbito de la vida familiar. Tras examinar los desarrollos en el derecho de familia de los últimos veinticinco años, ellos resultan a menudo, por más sorprendentes que nos parezcan, bastante menos considerables que ciertos virajes anteriores, y en proceso, en las ideas acerca de la vida familiar o en los patrones de comportamiento de la familia. A fin de cuentas, las reformas legales iniciadas en los años sesenta no destruyeron la familia tradicional. Lo que hicieron, en esencia, fue consolidar, y en ocasiones reforzar, el poder de varios movimientos que ya estaban avanzando.

Pero, así como debiéramos cuidarnos de no albergar expectativas exageradas acerca de lo que el derecho puede lograr por sí solo, hemos de cuidarnos a la vez de no caer en el error opuesto: de minimizar en exceso su capacidad de influir en las tendencias sociales. El sistema jurídico de un país, al igual que el arte, la religión, la economía y la historia, influye y es influido a la vez por la cultura en la que emerge, y aun cuando sus efectos sean modestos, no son siempre triviales. Las disposiciones legales pueden dar forma, moldear y conferir una dirección decisiva a fenómenos sociales difusos y ambiguos. Muchas de las corrientes legales descritas en los capítulos precedentes han hecho aportes, como afluentes, a la formación de esquemas culturales de significado que determinan en buena medida el modo en que experimentamos, recordamos, imaginamos o proyectamos los acontecimientos y relaciones básicos de nuestra vida. Esto es lo que hace ilusoria, y hasta cierto punto riesgosa, la noción de que el derecho de familia puede ser absolutamente neutral. No es menos real, por no ser cuantificable, el efecto de, por ejemplo, las leyes que permiten el divorcio unilateral a petición de los cónyuges sobre la forma en que la gente vive y concibe sus respectivos compromisos[45].

La pregunta que deben hacerse los líderes políticos es la de cuánto peso asignarle, si le cabe alguno, a este tipo de factor en el proceso legislativo. Es probable que el sistema legal, cuando está en armonía con otras fuerzas sociales, sinérgicamente tendrá un efecto mayor en combinación con ellas que el que provocaría por sí solo. Pero cuando los mensajes emitidos a través de la legislación van en la dirección contraria a los que prevalecen en todos los demás frentes de la cultura, su efecto sobre las ideas y el comportamiento debería ser más bien restringido. Esta línea de

[45] Louis Roussel, Jacques Commaille, Jean Kellerhals y Jean-François Perrin, "Vue d'ensemble" (1983), pp. 233-237.

razonamiento nos lleva a sospechar que, en los países aquí examinados, el derecho y los gobiernos han ejercido quizás mayor influencia al contribuir a reforzar, sin quererlo, aquellas tendencias desintegradoras identificadas por Durkheim y otros autores que cuando se han propuesto, en forma deliberada, 'fortalecer' la familia. Antes nos hemos referido a la posibilidad de que la acción gubernamental apoye indirectamente a los individuos y a la familia por la vía de atender a las condiciones en las que la familia y otras estructuras mediatizadoras podrían prosperar. Pero, como ocurre con el problema análogo de proteger el aire y el agua, ello requeriría tanto de la voluntad política de hacer algo como de una visión de largo plazo, los que no abundan en la sociedad moderna. Y, como en el caso de los sistemas ecológicos naturales, existe la posibilidad de que la tarea supere la capacidad de la legislación de influir para mejor.

Hasta aquí, hemos expresado nuestra preocupación ante ese poder ocasional del sistema jurídico de influir negativamente en la vida familiar, y nuestras dudas respecto a su real capacidad de provocar algo más que un débil efecto cuando se trata de apoyar o fortalecer a la familia. Es probable que otras fuerzas sociales habrán de ejercer un mayor influjo que la propia ley a la hora de determinar si habrán de confirmarse las más pesimistas de las sugerencias hechas por Tocqueville y Durkheim. Si, de hecho, ocurre que nuestras sociedades actuales están produciendo demasiados individuos incapaces de ninguna participación efectiva en la vida cívica y de sostener relaciones personales, probablemente esté fuera del alcance del derecho revertir ese proceso. Pero no es tan claro que nos encontremos efectivamente en una situación tan sombría. La historia que hoy nos cuenta el derecho acerca del matrimonio y la vida familiar es, con seguridad, más acendradamente individualista que las ideas y prácticas prevalecientes en los países aquí examinados. Es cierto que el individuo se ha emancipado de hecho, de derecho y en su imaginación, de los vínculos grupales y familiares en un grado históricamente sin precedentes, pero también ocurre que la mayoría de los hombres y mujeres pasan aún la mayor parte de sus vidas en unidades familiares interdependientes desde el punto de vista emocional y económico. Es más, los historiadores y sociólogos de la familia han dado prueba documental de la capacidad notable de esta institución para perdurar a lo largo de la historia —de su habilidad de asumir nuevas formas, de sobrevivir a los grandes cambios históricos y de adaptarse a nuevas condiciones—, todo sin ayuda del sistema jurídico.

Por más frágil y deficitaria que hoy nos parezca, la familia sigue siendo, para la mayoría de nosotros, el único escenario donde podemos realizar nuestra plena capacidad para el bien o el mal, para el goce o el

dolor. Al vincularnos a seres y emociones que son perecederos, la familia nos expone al conflicto, al dolor y la pérdida. De ellos emergen tensiones entre el amor y el deber, entre la razón y las pasiones, entre los objetivos inmediatos y los de largo plazo, entre las motivaciones egoístas y las altruistas. Pero las relaciones entre marido y mujer, entre padres e hijos, también pueden proporcionarnos marcos para resolver esas tensiones. Aun cuando, tras el debilitamiento de los vínculos legales y económicos que hemos explorado en este libro, los principales lazos que hoy mantienen unida a la familia sean exclusivamente los del afecto, tal vez podamos —si preservamos la esperanza— reconocer en esos frágiles lazos alguna analogía de ese Amor con mayúsculas que aún logra conmover a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La nota ejecutada por un intérprete cualquiera en un instrumento puede dar pie a una nota complementaria desde algún otro; un niño que escucha un acordeón del otro lado de la ventana quizás comience a cantar y bailar.

Bibliografía

Arraros, José. "Concubinage in Latin America". *Journal of Family Law*, 3 (1963).

Baade, Hans. "The Form of Marriage in Spanish North America". *Cornell Law Review*, 61 (1975).

Bassett, William W. "The Marriage of Christians-Valid Contract, Valid Sacrament?" En William W. Bassett (ed.), *The Bond of Marriage: An Ecumenical and Interdisciplinary Study*. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1968.

Bénabent, Alain. "La liberté individuelle et le marriage". *Revue Trimestrielle du Droit Civil* (1973).

Berger, Peter L.; y Neuhaus, Richard J. *To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy*. Washington, D. C.: American Enterprise Institute, 1977. [Publicado en castellano en *Estudios Públicos*, 49 (1993).]

Brissaud, Jean. *A History of French Private Law*. Rapeleje Howell (traductor). South Hackensack, N. J.: Rothman Reprints, 1968.

Brittain, John. *The Inheritance of Economic Status.* Washington, D. C.: Brookings Institute, 1977.

Burke, Edmund. *Reflections on the Revolution in France.* Nueva York: Doubleday Anchor, 1973.

Carbonnier, Jean. *Flexible droit*. París: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1983.

Coleman, James, *et al*. *Equality of Educational Opportunity.* Washington, D. C.: Government Printing Office, 1966.

Commaille, Jacques; Festy, Patrick; Guibenti, Pierre; Kellerhals, Jean; Perrin, Jean-François; y Roussel, Louis. *Le divorce en Europe Occidentale: La loi et le nombre*. París: I.N.E.D., 1983.

Corbett, Percy E. *The Roman Law of Marriage*. Oxford: Clarendon Press, 1930.

Coriden, James A.; Green, Thomas J.; y Hentschel, Donald E. (eds.). *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*. Nueva York: Paulist Press, 1985.

De Jouvenel, Bertrand. *Sovereignty: An Inquiry into the Political Good*. Traducido por J. F. Huntington. Chicago: University of Chicago Press, 1957.

De Reeper, John. "The History and Application of Canon 1098". *Jurist*, 14 (1954).

De Tocqueville, Alexis. *The Old Regime and the French Revolution.* Traducido por Stuart Gilbert. Nueva York: Doubleday Anchor, 1955.

———— *Democracy in America*, tomo 1. Traducción de George Lawrence. Nueva York: Doubleday Anchor, 1969.

Donahue, Charles. "The Canon Law on the Formation of Marriage and Social Practice in the Later Middle Ages". *Journal of Family History*, 8 (1983).

Duncan, William. "The Divorce Referendum in the Republic of Ireland: Resisting the Tide". *International Journal of Law and the Family*, 2 (1988).

Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. Traducción de George Simpson. Nueva York: Free Press, 1964.

———— *Suicide*. Traducción de John Spaulding y George Simpson. Nueva York: Free Press, 1966.

Eekelaar, John. *Family, Law and Social Policy*. Londres: Weidenfeld & Nicholson, 1984. 2ª edición.

Esmein, Adhémar. *Le marriage en droit canonique*, Vol. 1. Robert Génestal (ed.). París: Recueil Sirey, 1929 (2ª edición).

———— *Le marriage en droit canonique*, Vol. 2. Robert Génestal y Jean Dauvillier (eds.). París: Recueil Sirey, 1935 (2da ed.).

Estate of Kieg, 140P. 2d 163 (Cal. App. 1939).

Fleig, Walther. *Die Ehescheidung im italienischen Recht.* Bielefeld: Gieseking, 1975.

Freud, Sigmund. *Civilization and its Discontents*. (Traducción al inglés de James Strachey. Nueva York: Norton, 1961.)

Gaudemet, Jean. *Le marriage en Occident.* París: Éditions du Cerf, 1987.

Glendon, Mary Ann. *The New Family and the New Property*. Toronto: Butterworths, 1981.

———— *Abortion and Divorce in Western Law.* Cambridge: Harvard University Press, 1987a.

———— *Irish Family Law in Comparative Perspective.* The Frances E. Moran Memorial Lecture. Dublín: Trinity College, 1987b.

———— *Sate Law and Family: Family law in Transition in the United States and Western Europe*. Amsterdam: North Holland, 1997.

Glendon, William. "The Divorce Referendum in the Republic of Ireland: Resisting the Tide". *International Journal of Law and the Family*, 2 (1988).

Goode, William. *The Familiy.* Englewood Cliffs, N. J. Prenticce Hall, 1964.

Gottlieb, Beatrice. "Getting Married in Pre-Reformation Europe: The Doctrine of Clandestine Marriage and Court Cases in Fifteenth-Century Champagne". Tesis doctoral, Columbia University, 1974.

Gough, Aidan R. En "Book Review". *Modern Law Review*, 37 (1974).

Hafen, Bruce C. "The Constitutional Status of Marriage, Kinship, and Sexual Privacy. Balancing the Individual and Social Interests". *Michigan Law Review*, 81 (1983).

Hegel, G. W. F. *Philosophy of Right*. Traducción de T. M. Knox. Oxford: Oxford University Press, 1942.

Helmholz, Richard. "Comment: Recurrent Patterns of Family Law". *Harvard Journal of Law and Public Policy*, 8 (1985).

Hübner, Rudolph. *A History of Germanic Private Law*. Francis Philbrick (traductor). South Hackensack, N. J.: Rothman Reprints, 1968.

Hunt, David. *Parents and Children in History: The Psychology of Family Life in Early Modern France*. Nueva York: Basic Books, 1970.

Jencks, Christopher, *et al*. *Inequality: A Reassesment of the Effect of Family and Schooling in America*. Nueva York: Basic Books, 1972.

Jessep, Owen; y Luluaki, John. *Principles of Family Law in Papua New Guinea*. Waigani: University of Papua Nueva Guinea Press, 1985.

Jolowicz, H. F. *Historical Introduction to the Study of Roman Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1967 (2ª edición).

König, René. "Sociological Introduction". En Aleck Chloros (ed.), *International Encyclopedia of Comparative Law*, Vol. 4. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1974.

Lasch, Christopher. *Haven in a Heartless World*. Nueva York: Basic Books, 1977.

———— *The Culture of Narcissism*. Nueva York: Warner, 1979.

Lev, Daniel S. "Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State". *Indonesia*, 40 (octubre 1985).

Lévi-Strauss, Claude. "Reflections on Liberty". En *The View from Afar*. Nueva York: Basic Books, 1985.

McWilliams, Wilson Carey. "American Pluralism: The Old Order Passeth". En Irving Kristol y Paul Weaver (editores), *The Americans, 1976*. Lexington: D. C. Heath, 1976.

———— "On Equality as the Moral Foundation for Community". En R. Horwitz (editor), *The Moral Foundations of the American Republic*. Charlottesville, Va.: Univ. of Virginia Press, 1977.

———— "Democracy and the Citizen: Community, Dignity, and the Crisis of Contemporary Politics in America". En Robert A. Goldwin y William A. Schambra (editores), *How Democratic Is the Constitution?* Washington. D. C.: American Enterprise Institute, 1980.

Madewell v. United States, 84 F. Supp. 329. E. D: Tenn, 1949.

Madison, James. *The Federalist*, números 10 y 51.

Milosz, Czeslaw. "An Interview with Czeslaw Milosz". *The New York Review of Books*, 27 de febrero, 1986, p. 34.

Minow, Martha. "Beyond State Intervention in the Family: For Baby Jane Doe". *University of Michigan Journal of Law Reform*, 18 (1985).

———— "We, the Family: Constitutional Rights and American Families". *Journal of American History*, 74 (1987).

Müller-Freienfels, Wolfram. *Ehe und Recht*. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1962.

Noonan Jr., John T. "Novel 22". En William W. Bassett (ed.), *The Bond of Marriage: An Ecumenical and Interdisciplinary Study*. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1968.

Parker, Stephen. "The Marriage Act 1753: A Case Study in Family Law-Making". *International Journal of Law and the Family*, 1 (1987).

Pollock, Frederick; y Maitland, F. W. *The History of English Law*, Vol 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1968 (2ª edición).

Rheinstein, Max (ed.). *Max Weber on Law in Economic and Society*. Edward Shils y Max Rheinstein (traductores). Cambridge: Harvard University Press, 1954.

———— *Marriage Stability, Divorce, and the Law*. Chicago: Chicago University Press, 1971.

——— "The Family and the Law". En Aleck Chloros (ed.), *International Encyclopedia of Comparative Law*, tomo 4, *Persons and the Family*. Tubingen: J. C. B. Mohr, 1974.

Rodes, Jr., Robert E. "Greatness Thrust Upon Them: Class Biases in American Law". *American Journal of Jurisprudence* (1983).

Rousseau, Jean-Jacques. "The Social Contract". En *The Social Contract and Discourses*, traducción de G. D. H. Cole. Nueva York: Dutton, 1973.

Roussel, Louis; Commaille, Jacques; Kellerhal, Jean; y Perrin, Jean-François. "Vue d'ensemble". En Jacques Commaille *et al., Le divorce en Europe Occidentale: La loi et le nombre*. París: Institut Nationale d'Études Démographiques, 1983.

Sage, Zona. "Dissolution of the Family under Swedish Law". *Family Law Quarterly*, 9 (1975).

San Agustín. *The Retractations.* En *The Fathers of the Church*. Washington, D. C.: Catholic University Press, 1968.

Stewart, Richard. "Reconstitutive Law". *Maryland Law Review*, 45 (1986).

——— Book Review. *Harvard Law Review*, 101 (1987).

Stone, Lawrence. *The Family, Sex, and Marriage in England 1500-1800*. Nueva York: Harper & Row, 1977.

Sundberg, Jacob. "Nordic Laws". En *Das Erbrecht von Familienangehörigen in positivrechtlicher und rechtspolitischer Sicht*. Frankfurt: Alfred Metzner, 1971.

——— "Facteurs et tendances dans l'évolution moderne du droit de la famille des pays nordiques: Rêves et Réalités". En *Famille, droit et changement social dans les sociétés contemporaines* (Actas de las Octavas Jornadas de Estudios Jean Dabin). Bruselas: Bruylant, 1978.

Synge, John M. *The Tinker's Wedding.* En *The Complete Plays of John M. Synge*. Nueva York: Random House, 1960 (edición original, 1907).

Teubner, Gunther. "Juridification: Concepts, Aspects, Limits, Solutions". En Gunther Teubner (editor), *Juridification of Social Spheres: A Comparative Analysis in the Areas of Labor, Corporate, Antitrust and Social Welfare Law*. Berlín: Walter de Gruyter, 1987.

Waline, Marcel. *L'individualisme et le droit.* París: Domat Montchrestien, 1945.

Winch, Robert F. "Marriage". En *International Encyclopedia of the Social Sciences.* Nueva York: Macmillan, 1968.

Witte Jr., John. "The Reformation of Marriage Law in Martin Luther's Germany: Its Significance Then and Now". *Journal of Law and Religion* , 4 (1986). □

LA DEFINICIÓN DE LO PÚBLICO EN UN ESTADO CATÓLICO

EL CASO CHILENO. 1810-1885*

Sol Serrano

Este artículo propone remirar el viejo conflicto entre Iglesia y Estado en el siglo XIX desde la perspectiva de la definición de lo público y de lo privado. La autora describe, a través de hitos claves como la ley de la tolerancia de culto y la secularización de los cementerios, cómo el liberalismo busca definir lo público de acuerdo a la propiedad para garantizar la igualdad ante la ley, mientras el conservadurismo católico lo definirá de acuerdo a la publicidad, defendiendo con ello el exclusivismo religioso. Este debate crucial en la política decimonónica —señala la autora— muestra las incertidumbres y fronteras movibles en la definición del espacio público, los dilemas en la construcción de una sociedad plural y el nuevo desafío del catolicismo de organizarse en la sociedad civil.

SOL SERRANO. Doctorado en Historia, P. Universidad Católica de Chile. MA., Yale University. Profesora de Historia de la P. Universidad Católica de Chile. Autora, entre otras publicaciones, del libro *Universidad y nación. Chile en el siglo XIX* (Ed. Universitaria, 1994).

* Este artículo forma parte de una investigación financiada por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Introducción

La noción de 'esfera pública', comprendida como instancia intermediaria entre la sociedad y el Estado, lugar obligado de la política moderna, ha probado ser un rico campo historiográfico para dar cuenta principalmente de la evolución política de las sociedades del Antiguo Régimen en Europa y comprender el tránsito de una legitimidad monárquica a una basada en la soberanía popular[1]. Por ello, el concepto también es pertinente para comprender la formación de los Estados nacionales en América Latina[2].

Desde esta perspectiva, quizás la diferencia más significativa en la formación de la esfera pública en este continente sea que el tránsito de una legitimidad a la otra no se debió tanto a un movimiento real de democratización de la sociedad o de la cultura pública anterior al cambio, como al hecho de que la ruptura del pacto colonial y la Independencia requerían buscar un principio legitimador del paso del poder de la Corona a las elites locales. Pero esta nueva forma de legitimidad, que pretendía no sólo regir el campo de lo político, sino construir una nueva comunidad de pertenencia que era la nación, fortaleció la construcción de la esfera pública.

Una de las muchas dificultades que enfrentaba esta transición, particularmente en América Latina, era que el ámbito político y el religioso estaban entremezclados y, por lo tanto, la separación entre lo público y lo privado no estaba claramente definida. La secularización del Estado estaba en el corazón mismo de la definición de lo público y de lo privado. De esta definición, dependía, queremos mostrar, la formación de una sociedad plural.

Este artículo tiene por objeto volver a un antiguo tema de la historiografía latinoamericana del siglo XIX como es el conflicto entre la Iglesia y el Estado desde esta perspectiva, y mostrar cómo en el caso chileno uno de los núcleos de la discusión entre la elite liberal y la conservadora estuvo precisamente en la discrepancia sobre la definición de lo 'público' en un Estado católico. Esta mirada fue en buena medida la de los propios actores

[1] Keith Micheal Baker, *Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century* (1990); Roger Chartier, *Les origines culturelles de la Revolution Francaise* (1991); Dena Goodman, "Public Sphere and Private Life" (1992), p. 120.

[2] Véase, por ejemplo, Francois Xavier Guerra, *Modernidad e independencia* (1992); François X. Guerra, Annick Lamperiere *et al*., *Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas*. *Siglos XVIII y XIX* (1998).

y no ha sido recogida por la historiografía. Queremos sugerir que tras esa definición lo que estaba en juego era el concepto y el proyecto de una sociedad plural versus una sociedad unitaria. La primera requería definir lo público de acuerdo al criterio de la propiedad, que fue la posición de los liberales, y la segunda de acuerdo al criterio de la publicidad, que fue la posición de los conservadores católicos. El triunfo de la posición liberal, la única compatible con el concepto moderno de soberanía, obligó a la Iglesia y a los católicos a organizarse como una de las fuerzas contendientes en la sociedad civil participando por ello también en la formación de la 'esfera pública'.

Privilegio y control: Exclusivismo católico y patronato

Los conflictos entre la Iglesia y el Estado constituyen uno de los temas centrales de la historiografía política chilena y el eje que la divide en torno a una interpretación liberal y una interpretación conservadora. En efecto, éste fue el conflicto del cual arrancó la formación de los partidos políticos y alineó las coaliciones no sólo durante el período álgido (1860-1885) sino hasta el derrumbe de la República Parlamentaria en 1924. Ambas historiografías han reproducido la discusión casi en los mismos términos del período: para la liberal, como es fácil suponer, es la historia de la liberación de la superstición y del dominio eclesiástico, el establecimiento de la razón y de la libertad. Para la conservadora, es la historia del dominio del Estado sobre las creencias y la ruptura de una visión de mundo compartida que habría llevado a la escisión de la unidad nacional hasta nuestros días.

En general, los liberales centran su estudio en el carácter católico del Estado mientras los conservadores lo centran en el estudio del patronato, es decir, en la facultad gubernamental de intervenir en diversas materias eclesiásticas. El énfasis no es inocente: cada uno estudia la forma de dominio del otro y no la propia[3]. En realidad, las relaciones entre ambos poderes

[3] Las obras clásicas de la historiografía conservadora son Alberto Edwards, *La fronda aristocrática* (1928; 1987); Jaime Eyzaguirre, *Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile* (1967), y Gonzalo Vial, *Historia de Chile* (1981), 2 Vol. Las obras más relevantes de la historiografía liberal son: Ricardo Donoso, *Las ideas políticas en Chile* (1946; 1975), y Julio Heise, *Historia de Chile. El período parlamentario* (1974). Véase también Ricardo Krebs (ed.), *Catolicismo y laicismo. Las bases doctrinarias del conflicto entre la Iglesia y el Estado en Chile* (1981); Timothy Scully, *Los partidos de centro y la evolución política chilena* (1992), analiza las consecuencias del conflicto en el sistema político. La visión general más completa es la reciente publicación de Simon Collier, "Religious Freedom, Clericalism, and Anticlericalism in Chile, 1820-1920" (1997).

se basaban en privilegios, protecciones y controles que sólo podían sostenerse si el catolicismo era una religión única. Ello estaba en permanente tensión con un orden jurídico que intentaba construirse en base a la soberanía de la nación y la igualdad ante la ley. Exclusivismo y patronato eran las dos caras de una misma medalla que, como bien mostraron los debates del siglo, exigían un alto precio de dominio mutuo y de temor.

Es probable que debido a la evidencia cultural del catolicismo como religión única en el período de la Independencia, la libertad religiosa no fue una piedra angular del pensamiento emancipador chileno y de su concepto de soberanía. Si bien las opiniones no fueron unánimes y las figuras más liberales proclamaron la tolerancia en contra del espíritu inquisitorial, la gran mayoría fue partidaria de mantener el carácter católico del Estado y así lo establecieron todos los textos constitucionales de la época, incluso el de 1828, reputado de ser el más liberal. Dicho texto agregaba significativamente que "nadie será perseguido ni molestado por sus opiniones privadas", declaración que fue suprimida en el de 1833[4]. Pero en realidad, los más acérrimos partidarios de la unidad religiosa reconocieron siempre que ninguna autoridad podía entrometerse en las conciencias y opiniones privadas de los ciudadanos. La libertad de conciencia significaba, en efecto, un cambio en relación a la Inquisición, pero ella no implicaba la tolerancia religiosa pues la libertad de conciencia estaba limitada en su expresión pública. La mantención de la unidad religiosa significaba la prohibición del culto público de cualquier otra religión que no fuera la del Estado. Así lo estableció la Constitución de 1833[5].

De allí entonces que lo público, ya se tratara del Estado o de la sociedad civil, fuera definido como católico y sólo católico. Lo privado, en este sentido, era el espacio doméstico y el de la conciencia.

La fuerza del catolicismo era tan preponderante en Chile como en el resto de la América colonial, aunque su poder económico no fue equivalente, por ejemplo, al de México[6]. La Independencia debilitó económica e institucionalmente a la Iglesia. La gran mayoría del clero participó en el bando realista y los sacerdotes españoles abandonaron el país. La Iglesia quiso reforzar el poder del Vaticano y su independencia del poder civil mientras el nuevo Estado reclamó el patronato como un derecho y desconoció el nombramiento del obispo de Santiago Rodríguez Zorrilla, quien fue

[4] Ambos textos constitucionales pueden encontrarse en Luis Valencia Avaria, *Anales de la República* (1951), Tomo I.

[5] "Artículo 5to: La religión de la República de Chile es la Católica Apostólica Romana; con exclusión del ejercicio público de cualquier otra".

[6] Collier (1997), p. 303.

desterrado. La misión enviada por el Vaticano a petición del representante chileno en 1823 terminó con la devolución de pasaportes de su Vicario Monseñor Juan Muzi, entre otras razones por el secuestro de los bienes de los regulares. La situación se regularizó en 1829 cuando el gobierno dio el paso a las bulas y se nombraron obispos en las dos diócesis del país: Manuel Vicuña en Santiago y José Ignacio Cienfuegos en Concepción. Ese mismo año el bando conservador triunfaba en la batalla de Lircay y con ello se regularizaron las relaciones entre la Iglesia y el Estado estableciéndose un *modus vivendi* basado en dos pilares: el Estado era católico con exclusión de cualquier otro culto público, y el Estado conservaba el derecho de patronato heredado de la monarquía española, a pesar de que la Iglesia nunca quiso oficialmente reconocerle ese derecho[7].

Hubo tensión y conflicto, pero también negociación en el contexto de un Estado fuertemente regalista y de un clero que todavía acusaba influencia galicana. Tanto el clero como los conservadores, sin embargo, eran republicanos. Ése no era un tema en discusión como lo era el patronato. Hacia la década de 1840, en consonancia con la política vaticana y en respuesta al florecimiento de una opinión y de una prensa liberal en la que descollaban los primeros jóvenes intelectuales formados bajo la República, el ultramontanismo se asentó en la Iglesia chilena liderado por su nuevo Arzobispo, Rafael Valentín Valdivieso, nombrado en 1843. Un signo elocuente de esta nueva etapa fue la fundación de *La Revista Católica*, en 1842, creada para polemizar con el regalismo gubernamental y el liberalismo de la opinión.

A partir de la segunda mitad del siglo el creciente conflicto se expresó en diversos hitos legislativos —de gran fuerza en la opinión— tendientes a consolidar al Estado como soberano y, por tanto, a secularizarlo como fuente única de la ley. Gruesamente, los hitos más importantes fueron la así llamada 'cuestión del sacristán' en 1856, un conflicto jurisdiccional en el cual un miembro subalterno del cabildo eclesiástico, haciendo uso del recurso de fuerza, llevó a que la Corte Suprema invalidara una orden del Arzobispo y fallara su destierro por incumplimiento con el apoyo implícito del Presidente de la República, Manuel Montt. Un hecho insignificante se transformó en un suceso político de alta repercusión que dividió a los

[7] Carlos Silva Cotapos, *El clero chileno durante la Guerra de la Independencia* (1911), y del mismo autor, *Historia eclesiástica de Chile* (1925); Sergio Vergara, "Iglesia y Estado en Chile, 1750-1850" (1985), pp. 319-362; Fernando Aliaga Rojas, *La Iglesia en Chile. Contexto Histórico* (1985); Antonio Rehbein, "El clero diocesano y su presencia evangelizadora en Chile durante el siglo XIX" (1990).

conservadores en el gobierno entre regalistas y ultramontanos. Estos últimos formaron el Partido Conservador que pasó a la oposición.

Un segundo hito fue la ley interpretativa del Art. 5 de la Constitución en 1865 que estableció la tolerancia de culto para los disidentes y les permitió fundar sus propias escuelas. Más tarde, en el momento álgido de las reformas constitucionales, habría que señalar el conflicto entre libertad de enseñanza y Estado Docente en 1873, en el cual si bien los conservadores lograron que la libertad de enseñanza fuera un principio reconocido expresamente por la Constitución y obtuvieron algunas garantías para la educación secundaria privada, en su mayoría católica, perdieron en lo esencial, pues el Estado siguió controlando la certificación de los exámenes sin la cual no se podía ingresar a la Universidad. En esos mismos años, la supresión del fuero eclesiástico con la Ley Orgánica de Tribunales y la tipificación de delitos eclesiásticos en el proyecto de Código Penal presentado al Parlamento en 1874 fueron motivo de fuertes disputas. El período álgido de la 'lucha religiosa' culmina con el enfrentamiento entre el gobierno y la Santa Sede para nombrar al sucesor del Arzobispo Valdivieso, muerto en 1878, y la vacancia de la sede hasta 1886, contexto en el cual se dictan las leyes laicas: la ley de secularización de los cementerios en 1883, la ley de matrimonio civil en 1884 y la ley de registro civil en el mismo año. Todo lo anterior, teniendo como telón de fondo la permanente discusión sobre la separación de la Iglesia y el Estado y la supresión del artículo 5to de la Constitución.

Como puede apreciarse, algunos de los conflictos derivaban del patronato y otros del carácter católico del Estado, que son los que nos interesan en relación a la definición del espacio público. A nuestro juicio, los dos hitos más significativos al respecto fueron la ley de tolerancia de cultos y la secularización de los cementerios.

Los derechos de los disidentes en un Estado católico

La primera discusión legislativa que incidía en el corazón del artículo 5to de la Constitución no se planteó por el tema del culto sino de la escuela primaria. Entre 1845 y 1860 se discutió en la Cámara, con intervalos, una ley orgánica de instrucción primaria. En el proyecto inicial, presentado por la Facultad de Humanidades de la recién fundada Universidad de Chile, se definían dos tipos de enseñanza de acuerdo con el acceso o publicidad del espacio: era privada la que se daba reservadamente a los miembros de una familia y pública la que se daba en establecimientos

destinados a recibir miembros de distintas familias. La escuela era, por tanto, un espacio público que a su vez se definía de acuerdo con la propiedad. Eran escuelas públicas las que se mantenían con fondos nacionales o municipales, las conventuales o las que tuvieran subsidio del gobierno. Ellas estaban sujetas a las autoridades designadas por la ley. Eran particulares las financiadas con fondos privados y estaban sometidas a la ley sólo en lo correspondiente al orden y la moralidad[8].

Esta doble definición de lo público, de acuerdo con la publicidad y con la propiedad, no causó conflictos a mediados de la década de 1840 cuando el problema religioso no se había transformado en un conflicto político, pero sí a fines de la década de 1850. Entonces se suscitó la controversia de si la enseñanza religiosa y la inspección que de ella hacían los párrocos debía regir para la 'enseñanza' pública (que incluía a las escuelas particulares) o para las 'escuelas' públicas. Dicho de otra forma, la discusión era si lo 'público' debía definirse de acuerdo con la propiedad o la publicidad. Los liberales defendieron la primera definición para salvar el principio de la libertad de conciencia. Para los conservadores debía definirse de acuerdo con su publicidad, pues la libertad de conciencia estaba restringida al espacio privado íntimo, a la familia, pero a ningún espacio público, ya fuera estatal, municipal o particular. Los conservadores les reconocían a los padres el derecho a "abusar de su patria potestad" y enseñar a sus hijos el ateísmo práctico, el judaísmo o el mahometanismo, siempre que no fuera en un lugar público, pues contravenía la Constitución[9].

La tensión era clara: los conservadores ultramontanos querían restringir el concepto de privado a lo doméstico y los liberales restringir el concepto de lo público a lo estatal. Ambos concordaban que el espacio doméstico era inviolable y que el público estatal era católico. El campo en conflicto era precisamente el espacio crítico de la 'esfera pública' cuando lo estatal estaba unido con lo religioso. La ley finalmente definió la instrucción privada como aquella dada dentro de la familia, que quedaba enteramente excluida de ella; como instrucción particular la sostenida con fondos privados que quedaba sometida a la inspección en moralidad y orden; y como instrucción pública aquella sujeta a la ley, financiada con fondos

[8] Las actas de la Facultad de Humanidades y el proyecto enviado al Congreso se encuentran en Ana Guirao Massif, *Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades hasta la fundación del Instituto Pedagógico, 1843-1889 (*1957).

[9] *Sesiones del Congreso Nacional* (en adelante *SCN),* Diputados, 21 junio 1859, p. 439; 10 octubre 1860, p. 266; Senado, 12 septiembre 1860, p. 228.

fiscales y municipales[10]. Con ello se avanzó hacia la identificación de lo público con lo estatal, pero no se resolvía el problema religioso en las escuelas particulares.

Tal como se señaló en la discusión parlamentaria, lo que en realidad se estaba discutiendo a raíz de la escuela era el artículo 5to de la Constitución. Fue la discusión que se inició en el Congreso en la década de 1860 y que debe entenderse en el contexto más amplio de las reformas constitucionales que propugnaron los grupos liberales, en alianza con los conservadores ultramontanos, destinadas a cercenar los poderes omnímodos del Ejecutivo. Si bien ése era el conflicto político predominante que determinaba las alianzas, también estaba presente, aunque todavía no en plenitud, el conflicto entre laicismo y ultramontanismo que es donde se sitúa el problema de las escuelas y del culto.

Ya desde la década de 1820, con la llegada de inmigrantes principalmente ingleses y norteamericanos a Valparaíso, se había practicado el culto protestante en esa ciudad, al comienzo a bordo de las embarcaciones recaladas en el puerto y más tarde en capillas. También en Valdivia y en Llanquihue los protestantes practicaban su culto aunque fuera en la gran bodega de un comerciante como sucedía en la última. Las autoridades habían tenido una política pragmática autorizando sus lugares de culto como recinto privado. Los tratados celebrados con Estados Unidos en 1832 y con Gran Bretaña en 1854 daban ciertas garantías a la libertad de conciencia, principalmente en lo referido a las sepulturas. Existía por lo tanto una tolerancia práctica, pero al mismo tiempo, jurídicamente, los derechos de los disidentes a practicar su culto podían ser fácilmente cuestionables si había conflicto al respecto. El conflicto se desató, a nuestro juicio, no sólo por ser una arma política para probar la posibilidad de reformar la Constitución[11], sino también porque había un problema real entre los derechos de los disidentes y el exclusivismo católico. Es sintomático que en la medida en que los disidentes ya no sólo practicaran su culto sino que intentaran algunas formas de proselitismo, es decir, en la medida en que pretendieran formar parte de la 'opinión', la Iglesia inmediatamente reclamara su exclusividad. Temía la intromisión en ese espacio, como lo diría el Arzobispo Valdivieso, no tanto porque los chilenos pudieran hacerse protestantes cuanto porque debilitaba a la Iglesia favoreciendo la "indiferencia religiosa que es la gangrena de la sociedad moderna". En efecto, eso era lo que

[10] "Ley General de Instrucción Primaria", en Ricardo Anguita, *Leyes promulgadas en Chile. Desde 1810 hasta 1 julio 1912*, tomo II, pp. 96-98.

[11] Véase de Patricio Estellé "El debate de 1865 sobre la libertad de culto y conciencia" (1967).

estaba sucediendo en algunos círculos de la opinión ilustrada. Entonces, si bien en los hechos, los pequeños grupos disidentes practicaban su culto y educaban a sus hijos en su religión, en la medida en que crecía el conflicto religioso, aumentaba la presión por definir esa ambigüedad por parte de la Iglesia, de los disidentes y de los grupos liberales.

Es probable que la llegada a Chile del joven misionero norteamericano David Trumbull, presbiteriano formado en Yale y en Princeton, enviado a Valparaíso en 1845 por la Foreign Evangelical Society, haya sido un punto de inflexión. Trumbull no sólo era protestante, también era masón y estaba dispuesto a pelear por un lugar más seguro y digno para su culto que la imprenta de *El Mercurio*, donde celebró su primer oficio, o un salón en el Hotel Chile. Estaba dispuesto también a usar los instrumentos propios de la formación de opinión: fundó el periódico *The Neighbour*, la Valparaíso Bible Society, colegios para hombres y mujeres y entró en polémicas públicas con el gobernador eclesiástico de Valparaíso, Mariano Casanova[12]. En 1854 compró un sitio para construir la Union Church de Valparaíso. La Iglesia católica hizo un enérgico reclamo. La construcción en obra fue detenida por la Municipalidad, pero luego continuó secretamente hasta que el gobierno llegó a una transacción con los presbiterianos tan sutil como precaria: el templo debía ser cubierto con un tabique y la fachada no podía ser visible desde la calle, no podría tener campanario y el culto debía celebrarse en el mayor silencio[13]. El Arzobispo Valdivieso protestó a través de un Edicto Pastoral: ese no era un recinto privado sino público. Pero había más: los disidentes habían "cobrado audacia con nuestra moderación" fundando colegios, medios de prensa y principalmente repartiendo propaganda que injuriaba a la Iglesia a través de las Sociedades Bíblicas: "Se buscan los trabajos públicos o privados que forman reuniones de jornaleros y artesanos para hacer la distribución de los folletos, se persigue a las gentes del pueblo en su domicilio y hasta se nos ha asegurado que se ha pagado dinero porque reciban el funesto presente que se les brinda"[14].

En la polémica sostenida entre Trumbull y Casanova en 1863 a través de *La Voz de Chile* y de *El Ferrocarril* sobre el culto a los santos y

---

[12] Paul Irven, *Un reformador yanqui en Chile. Vida y obra de David Trumbull: Inicios del protestantismo en Chile* (1997); Juan Ricardo Couyoumdjian, "Masonería de habla inglesa en Chile: Algunas noticias" (1996), p. 203.

[13] Véase J. H. McLean, *Historia de la Iglesia Presbiteriana en Chile* (1932), pp. 17-18; Ricardo Donoso (1946; 1975); Simon Collier (1997), pp. 308-310.

[14] "Edicto Pastoral sobre la propaganda protestante" (1858), p. 306. La Valparaíso Bible Society informaba para el año 1864 que se habían visitado 1.587 familias y habían sido repartidas gratuitamente 22.192 unidades impresas, de las cuales 17.779 correspondían a tratados en diferentes idiomas y 6.187 a revistas y periódicos (*The Annual Report of the Valparaiso Bible Society*, 1864, p. 2). Debo esta referencia a mi alumna Paulina Pereira.

las procesiones a propósito de las rogativas a San Isidro para que lloviera, Casanova le dijo la última palabra: "No es lícito, Señor, en Chile negar públicamente, como Usted lo hace, los dogmas católicos [...] Está, pues Usted, quebrantando las leyes de Chile"[15].

Los disidentes eran una minoría ínfima en el país. Tan evidente era la homogeneidad religiosa, que los censos del período consideraron irrelevante la información. Pero preguntaban por los extranjeros que de acuerdo al de 1865 eran 23.000. Los posibles protestantes podían encontrarse dentro de los 758 alemanes que había en Llanquihue, por ejemplo, o entre los 4.267 ingleses y casi 1.000 norteamericanos que había en el país. Pero preferentemente se encontraban entre los 1.014 ingleses, 108 escoceses, 316 norteamericanos y 783 alemanes residentes en Valparaíso cuyo departamento tenía una población total de 74.731 habitantes[16]. Los disidentes por sí mismos no tenían suficiente fuerza para constituirse en un grupo de presión capaz de reformar la Constitución, pero contaban con el apoyo activo de comerciantes y financistas ingleses como el caso de los socios de Williamson Balfour[17] y principalmente el de algunos parlamentarios liberales y radicales para quienes éste era un tema de derecho y no de número. En este contexto comenzó la discusión que de verdad dominaba la política chilena del momento, que eran las reformas constitucionales con el objeto de reducir las facultades del Ejecutivo.

Al comenzar a debatirse la reforma constitucional, la primera discusión por una razón simplemente numérica fue el artículo 5to. Pero comenzar reformando uno de sus artículos más emblemáticos sólo podía estar en la mente del liberalismo más extremo expresado en el naciente Partido Radical. Manuel Antonio Matta fue su portavoz en el Congreso manifestándose por la separación de la Iglesia y el Estado y la supresión del derecho de patronato. El gobierno a través de su Ministro del Culto, Federico Errázuriz, un liberal moderado, se opuso terminante: el país era esencial y profundamente católico y aquella uniformidad era garantía del orden social. Defendió la libertad de creencias y sostuvo que los extranjeros no eran perseguidos por sus creencias religiosas. Sólo había una restricción basada en grandes consideraciones de orden social que era la prohibición

---

[15] David Trumbull, *¿Quién dará lluvias? o Rogativas a San Isidro. Carta al Sr. Presbítero D. Mariano Casanova* (1863), p. 21.

[16] *Censo jeneral de la República de Chile, 1865* (1865).

[17] Wallis Hunt, *Heirs of Great Adventure: The History of Balfour, Williamson and Company Limited, 1851-1901* (1960); Silvia Venezian, "Misioneros y maestros: la educación inglesa y norteamericana en Chile en el siglo XIX" (1993).

del culto público[18]. Pero ¿cómo se definía lo que era público o lo que era privado en este caso? Curiosamente, tanto los liberales extremos como los conservadores ultramontanos estuvieron de acuerdo en un punto: el culto de los disidentes en Valparaíso era público en los hechos. Por ello, para los primeros, debía reformarse la Constitución; para los segundos, debía prohibirse dicha publicidad. Pero la mayoría estaba en un centro contemporizador: no quería reformar el artículo 5to y no quería proscribir a los disidentes. Santiago de Melchor Concha y Toro propuso un camino de salida: que no se reformara sino que se dictara una ley que clarificara lo que debía entenderse por público y privado en el ejercicio del culto.

La jerarquía de la Iglesia, a través de Joaquín Larraín Gandarillas, diputado y sacerdote, rector del seminario, se opuso también a eso. La confusión entre culto público y privado venía de una confusión anterior: sostener que la libertad de conciencia era lo mismo que la libertad de culto, o que ésta era una consecuencia necesaria de aquella como lo había sostenido Matta. "[L]a libertad de conciencia (no puede entenderse) en el absurdo sentido que algunos le atribuyen, es decir, como un derecho del hombre para creer lo que quiera, para ser mahometano o budista, para adorar al sol como los peruanos y los persas o al buey Apis como los egipcios [...], el ser racional no tiene derecho a creer lo que le parezca, sino la estricta obligación de abrazar la verdad[...]" La libertad de conciencia tenía un enorme valor, pero no era un derecho frente a Dios, que era la verdad, sino un derecho frente al Estado y la sociedad. Ésa era una libertad sagrada, "asilo inviolable", que se refería a los actos internos del espíritu. La inteligencia podía extraviarse y ser culpable, pero mientras no lo manifestara en obra o en palabra, era culpable solamente ante Dios. "Ese error debe mirarlo la sociedad como inocente [...], otra cosa sucede cuando el error sale afuera; si daña a la sociedad la ley puede y debe reprimirlo"[19]. La libertad de conciencia no implicaba la libertad de culto precisamente porque una pertenecía al dominio privado y la otra al público.

Varios parlamentarios refutaron esta doctrina. El diputado Espejo defendió la libertad de culto como la consecuencia de la libertad de conciencia, derechos propios "de nuestra organización democrática y republicana que eleva nuestra individualidad hasta la soberanía"[20]. Matta respondería que ambas libertades eran indivisibles: "Toda religión comprende dos grandes ideas: la de Dios y de los ritos solemnes. La idea, acto interno, el

[18] *SCN*, Diputados, 12 junio 1865, p. 5.
[19] *SCN*, Diputados, 16 junio 1865, p. 12.
[20] Ibid., p. 17.

rito acto externo; en otros términos la creencia y el culto"[21]. A esas alturas, la barra del hemiciclo que se agitaba en su apoyo hubo de ser silenciada por el presidente de la Cámara.

Si el gobierno y la mayoría no querían suprimir el artículo 5to, el dilema seguía siendo qué se entendía por culto público. Vicuña Mackenna protestaba por esta "asamblea de casuistas" complicada en discernir lo evidente: que el culto era público y que la Constitución debía establecer la libertad religiosa. Antonio Varas, por su parte, defendiendo la Constitución y la obra de los gobiernos pelucones que habían aceptado la tolerancia práctica, insistió en que el culto era público si quien oficiaba tenía carácter oficial o si el lugar en que se ejercía era público de acuerdo a derecho. Con ello se acercaba a la interpretación de que lo 'público' era lo estatal y que en ese sentido debía entenderse el exclusivismo católico.

Pero la Iglesia entendía que la religión católica no era sólo la religión exclusiva del Estado, sino también de la sociedad. Nada podía parecerle más ajeno a su misión y a su historia que sentirse recluida a lo estatal y a lo privado. La publicidad estaba en el corazón de los dogmas católicos y de su ritual y allí estaba una de sus profundas diferencias con el protestantismo. En realidad, el uso del espacio público tenía una significativa relación con las prácticas rituales que el protestantismo tanto despreciaba. "Las necesidades de los sectarios protestantes —decía Larraín Gandarillas— en lo que concierne al culto son muy diversas a las necesidades de los católicos. [...] Para nosotros los católicos, la Iglesia es la casa del Señor, un lugar público en que se reúnen los fieles para adorar a Dios que está presente en sus altares. Creemos en la presencia real de Jesucristo [...] Pero los protestantes no miran los templos como lugares que están santificando la presencia de Cristo. Solo sirven entonces para reunirse a orar, leer y explicar la Biblia; cosas que pueden ejecutarse en una casa privada perfectamente"[22]. José Clemente Fabres, el gran polemista de la causa católica en los debates que vendrían, defendería con pasión la necesidad específica del catolicismo de ser protegido en su culto: "[...] el culto católico abraza desde que nace hasta que muere diariamente en casi todos los actos de la vida; tiene esplendor y magestad en todas las ceremonias propias para interesar al hombre; tiene todavía más y es la comunicación directa con el mismo Dios, porque en el templo católico está Dios tal como está en los cielos"[23]. Sus palabras finales causaron hilaridad en varios de sus colegas y, respon-

[21] Ibid., p. 28.

[22] Ibid., p. 15.

[23] *SCN*, Diputados, 9 septiembre 1974, p. 56. Fabres hizo esta defensa a propósito de la discusión del proyecto de reforma del artículo 5to en 1974.

diéndoles, insistiría en que el protestantismo resumía todas las doctrinas contrarias al culto porque no tenía ni sacramentos ni ceremonias ni nada.

El espacio público moderno, el del debate, la crítica y la política, el de los derechos y garantías individuales, se estaba construyendo en muchos sentidos y la libertad de cultos no era sino uno de ellos. Pero la discusión revela muy bien los temores y disyuntivas que esa clase política enfrentaba al construirlo. El afianzamiento del pluralismo llevaba a la pregunta por la unidad. Nuevamente fue Larraín Gandarillas quien marcó el terreno desde el lado eclesiástico, pero ahora con argumentos estrictamente políticos: "¿Qué es lo que más importa a nuestro país? Su unidad política y social, la conservación de su nacionalidad", cuya base más estable, como país nuevo que era, no estaba en la lengua ni en las costumbres ni en las tradiciones que se evanecían con la moda, sino en la religión católica[24]. En general, la mayoría de los parlamentarios compartía que la unidad religiosa había sido para Chile un valor si se le comparaba con otras experiencias, pero los ultramontanos no temían una guerra religiosa, ni que los chilenos se hicieran protestantes, sino que el reconocimiento de sus derechos abriera paso para que lo reclamaran los comunistas y los ateos. La libertad de cultos traería la indiferencia religiosa y ello rompería la unidad nacional. El pluralismo, en definitiva, sería la primera fase de la secularización. Pero a ello los liberales opondrían una unidad nacida de la disuasión y del consenso. "¿Qué tipo de unidad es la que se quiere? —preguntaba el diputado Espejo— ¿Es el triunfo de un sistema religioso? [...] No, Señor, en mi concepto solo puede ser aquella unidad a que arribamos por medio de la discusión libre e intelectual, pero no esa unidad católica que ataca los derechos, que niega todas las libertades, que llega hasta el santuario de la conciencia, porque esa es la unidad de todo despotismo y de toda tiranía"[25]. Antonio Varas, conservador pero regalista, desconfiado de los ultramontanos, definiría la unidad de la nacionalidad en base a los derechos. La unidad de creencias, de lengua y de raza ayudaban, pero lo esencial era el 'patriotismo': "Y el país en que los habitantes estén mejor garantidos en sus derechos y en que la igualdad a este respecto se halle mejor establecida será siempre aquel en que los ciudadanos se mostrarán más dispuestos a aceptar y defender con más interés y calor la causa de su patria"[26].

Esta unidad moderna se construía en base a la representación. Los conservadores ultramontanos nunca la negaron como valor y, al contrario, apelaron a ella reclamando ser mayoría. En una estrategia que utilizarían

[24] Ibid., p. 15.
[25] Ibid., p. 17.
[26] *SCN*, Diputados, 8 julio 1865, p. 98.

cada vez con mayor frecuencia, esgrimieron los argumentos liberales para cobrarles a éstos consecuencia. Incluso Larraín Gandarillas llegó a decir que estaba dispuesto a proponer el sufragio universal para que todos emitieran su voto sin distinción de edad ni de sexo porque allí se reflejaría la verdadera mayoría que era católica y que se opondría a la reforma del artículo 5to. "El sistema representativo, base de nuestra Constitución Política, está fundado en el más profundo respeto a la opinión nacional y no comprendo cómo hombres que se llaman liberales manifiestan sentimientos diversos"[27].

¿Coincidía la mayoría con la 'opinión' que es la que sentían representar los liberales? Matta no dudaba de que la mayoría era católica, pero sí de que fuera intolerante y rechazara la libertad de culto. Matta apelaba a otra mayoría, a la que se expresaba en el espacio público: las asambleas, los círculos políticos, los electores de las provincias más ilustradas y sobre todo la prensa "el órgano más inteligente de las aspiraciones del país"[28]. Manuel Antonio Tocornal responderá que los clubes o asambleas populares defendían intereses de partidos, las aspiraciones de sólo un sector, en cambio el sentimiento religioso no comprendía sólo al elector ciudadano sino el anciano, la mujer y el niño. Y fue precisamente a estos habitantes del espacio social tradicional, no segmentado como el espacio público ciudadano ni por sexo ni por edad, a los que movilizaron los católicos. Al movimiento en la barra de la Cámara, a la polémica en la prensa, se sumó la movilización de las mujeres que asistieron a las sesiones del Congreso y publicaron el primer periódico femenino en la historia de Chile, *El Eco de las Mujeres*, que los liberales creían escrito por los curas[29].

El gobierno tenía que buscar un camino de resolución y en la sesión del 3 de junio llegó con ella: un proyecto de ley remitido por el Senado que interpretaba el artículo 5to. La barra se enfureció y fuera de la sala se produjeron desórdenes. Vicente Reyes reclamaba que la Cámara se había transformado en una plaza de toros. El Ministro del Culto, Federico Errázuriz, hizo una sentida defensa del proyecto en base a la tradición, la prudencia y la mantención del equilibrio político. El artículo 5to era la más preciosa garantía de la conservación de la religión católica, "de esa religión que hace más de 300 años impera en Chile, de esa religión de nuestros padres, que bendice nuestros matrimonios, que preside el orden en nuestras familias y que nos da hijos en cuyos brazos bajamos al sepulcro". Y para darle

---

[27] Ibid., p. 12.

[28] Ibid., p. 28.

[29] Érika Maza Valenzuela, "Catolicismo, anticlericalismo y la extensión del sufragio a la mujer en Chile" (1995), p. 151.

en el gusto a la opinión liberal, les recordó que sin artículo 5to no habría patronato y que no sería prudente despojar a la sociedad chilena de ese derecho[30].

Si no se reformaba la Constitución, el ministro debía explicar cómo esta ley interpretaba el significado del 'culto público' en un Estado católico. Errázuriz la aventuró: los disidentes tendrían derecho a tener capillas y escuelas en "recintos particulares" que el Código Civil contraponía a propiedad pública. Ése era el cambio central. De todas formas Errázuriz tenía que explicar qué pasaba con los protestantes en ese espacio que no era de propiedad privada ni tampoco estatal, en aquel espacio público que era cada vez menos material y más mental. Según su interpretación, efectivamente no podían hacer proselitismo en las calles ni en las plazas, no podían tener campanas o hacer procesiones, debían abstener de lo que llamó la "bulla del culto". Pero la bulla del culto se refería a los lugares tradicionales de expresión religiosa, muy católicos por lo demás. Las 'bullas' protestantes operaban precisamente en el espacio público moderno, en las sociedades y la prensa, derechos que estaban reconocidos, aunque limitados, en la legislación chilena[31].

En síntesis, en el debate legislativo hubo tres posiciones: 1) la del liberalismo extremo expresado en el naciente Partido Radical que propiciaba la abolición del artículo 5to la plena tolerancia religiosa y, en algunos casos, la separación de la Iglesia del Estado; 2) la conservadora ultramontana que se oponía a la reforma del artículo 5to y definía lo público en base al criterio de publicidad dejando como único espacio de disidencia el doméstico; 3) y la liberal moderada, la gran mayoría, que defendía la catolicidad del Estado al mismo tiempo que la tolerancia religiosa otorgándoles a los disidentes el derecho de practicar su culto y educar a sus hijos en su religión en 'recintos particulares'[32].

La ley, promulgada el 27 de julio de 1865[33], permitía a quienes no eran católicos profesar su culto dentro del recinto de edificios de propiedad particular y los autorizaba a sostener "escuelas privadas". Aparentemente la

---

[30] *SCN*, Diputados, 8 de julio 1865, p. 102.

[31] No sólo el artículo 5to podía entorpecer o limitar la formación de ese espacio, también podía hacerlo el Exequátur, como fue extensamente debatido a propósito de una cláusula en el proyecto del Código Penal que tipificaba el delito de los eclesiásticos que incitaran a la desobediencia de una ley. El Senado finalmente la excluyó pero la mayoría de la Cámara la defendió como inherente al derecho de patronato a pesar de ser una limitación a la libertad de expresión. *SCN*, Diputados, 16-10-1874, p. 117.

[32] Véase principalmente *SCN*, Senado, julio 3, pp. 72 y ss.

[33] Esta ley ha sido erróneamente llamada de libertad de cultos cuando lo que en realidad establece es tolerancia a los cultos que no son el del Estado.

ley en nada cambiaba lo establecido, como lo hizo ver la Iglesia[34]. Por ello siguió reclamando el cumplimiento de la Constitución que debía prohibir todo tipo de publicidad en el culto disidente[35]. Sin embargo, había un cambio clave, según hemos querido mostrar: definía lo público de acuerdo con la propiedad, y con ello se corría la frontera para que lo católico quedara restringido a lo estatal y se abriera un espacio plural, en cuanto privado, en la sociedad civil[36].

El pluralismo de los muertos: Derecho de propiedad y juicio final

Desde la perspectiva que estamos tratando, se plantea el mismo problema de fondo en la ley de cementerios: hacer prevalecer el derecho de propiedad como forma de garantizar la pluralidad religiosa. De todos los conflictos antes indicados, ninguno fue más largamente discutido en el Congreso ni despertó tantas pasiones y movilización social[37].

Ya en el período borbónico hubo oposición de las autoridades al entierro en las iglesias y al tipo de ceremonial barroco que lo acompañaba, pero no fue hasta 1821, bajo el mandato de Bernardo O'Higgins, que se fundó un Cementerio General en las afueras de la ciudad cuyo carácter era público. Los párrocos debían dar el certificado de defunción y a la vez eran los responsables de los ritos funerarios en un cementerio que era estatal, pero que era sagrado en la medida en que estaba bendito por la Iglesia.

---

[34] Jaime Eyzaguirre sostiene que la "ley interpretativa no alteraba en esencia la situación, sino que venía a confirmar derechos que ya estaban ejerciendo los disidentes como lo consigna expresamente el mensaje gubernativo que la propuso" (Eyzaguirre, 1967, p. 149), lo cual era así desde la perspectiva de las prácticas de los disidentes, pero no de sus derechos. Sin embargo, esa interpretación de la ley de 1865 minimiza su importancia en el proceso de laicización del Estado y de definición del espacio público.

[35] Algunos años después de aprobada la ley, el Arzobispo de Santiago protestó ante el gobierno por otro templo que se estaba construyendo en Valparaíso "que no puede confundirse con las casas particulares por la naturaleza de su propiedad, por su forma arquitectónica y por su situación y puertas para su entrada que son públicas como las de todo templo". Protestaba por la propaganda impresa y por el proselitismo entre los católicos. "Reclamo por la observancia del Artículo Quinto de la Constitución", *Boletín Eclesiástico*, T. V, 25 enero 1869, p. 48.

[36] El tema volvió a plantearse en la discusión del proyecto del Código Penal a propósito de si era un agravante cometer delito en lugar destinado al "culto público" como lo aprobó el Senado o "culto permitido en la República". En el primer caso comprendía sólo a un templo católico, en el segundo, cualquier templo. La Iglesia se opuso, pero quedó en la versión de la Cámara. Véase *SCN*, Diputados, 5 y 10 septiembre 1974, pp. 37 y 62; Senado, 16 octubre 1874, p. 116; y Agustín Edwards, pp. 242 a 260.

[37] Sobre los conflictos que generó la secularización de los cementerios, véase Ricardo Donoso (1946; 1975), y Marco León León, *Sepulturas sagradas, tumbas profanas. Los espacios de la muerte en Santiago de Chile* (1997).

Nuevamente, como en el caso anterior, fue la presencia de disidentes el primer motivo de conflicto. En 1818, O'Higgins autorizó un cementerio para los ingleses protestantes en Valparaíso que hasta entonces se tiraban al mar o se enterraban en los cerros. La Iglesia se opuso sosteniendo que podían ser enterrados, pero sin ceremonia pública alguna, cuestión que fue desestimada por las autoridades. En Santiago no hubo cementerio para disidentes, quienes eran enterrados en Valparaíso o en el cerro. Pero el Tratado de Comercio Chileno-Británico de 1853 estableció que los disidentes tenían derecho a sus propios cementerios con la aprobación de la autoridad civil y se estableció el primero en 1855.

A la pluralidad que obligaba la presencia de disidentes, se agregó con el tiempo la pluralidad dentro de la elite chilena.

El acontecimiento que desencadenó la lucha por los cementerios es altamente indicativo: en 1871 murió en Concepción un coronel de Ejército que había vivido 25 años en concubinato. El Intendente ordenó que se le rindiesen en su funeral los honores correspondientes, pero el Obispo se opuso pues había muerto en pecado y no podía ser sepultado en territorio sagrado ni con el rito católico. El Intendente lo enterró igual, sosteniendo que la vida religiosa correspondía a la vida privada y que la autoridad no debía inmiscuirse en los "deberes de conciencia".

El conflicto, desde la lectura que estoy haciendo, es nuevamente entre la libertad de conciencia y el espacio público que siendo estatal es católico.

El conflicto causó tal vendaval en la prensa y en el Congreso, que el gobierno dictó un decreto que estuvo lejos de dar una solución al tema. Era el año 1871, cuando el presidente Federico Errázuriz todavía gobernaba con la fusión liberal conservadora y, por tanto, el decreto fue una suerte de compromiso. Estableció que en todo cementerio católico, que eran todos los públicos, se destinaría un espacio previamente determinado para aquellos que las disposiciones canónicas negaran el entierro sagrado. Este espacio estaría dividido por una reja de fierro, madera o árboles. Establecía también que todos los cementerios que se crearan en el futuro con fondos públicos serían legos, sin jurisdicción eclesiástica, y que cada cual podría enterrarse de acuerdo a su propio rito. Es decir, en un espacio público estatal-católico se abriría un espacio para los disidentes sin contrariar el derecho canónico; se abría a futuro un nuevo espacio estatal plural. Pero el decreto agregaba un nuevo elemento que me interesa resaltar: la autorización para erigir cementerios particulares. Esa fue la transacción con los conservadores todavía en el gabinete. Ello establecía una nueva separación de acuerdo a la propiedad.

La Iglesia aceptó el decreto en lo relativo a la separación dentro del cementerio, aunque exigió que la reja fuera de un metro, pero se opuso tenazmente a los cementerios comunes, pues ellos significaría la 'promiscuidad' entre creyentes y no creyentes; la Iglesia no podría bendecirlos y los católicos no podrían enterrarse en ellos.

Esta solución, literalmente salomónica, volvió a enfrentar al derecho de propiedad con las disposiciones canónicas. En 1877 el hijo de un prominente vecino de Valparaíso se suicidó y el párroco no le dio el pase de sepultura en la tumba de su familia, ya que estaba en terreno bendito. El Intendente ordenó su entierro en la tumba familiar, pues, según su argumentación, los cementerios de las ciudades eran del Estado y no de la Iglesia y la compra de una tumba era un contrato comercial donde no se estipulaba la creencia del comprador. El Obispo retrucó que había usurpado derechos de la Iglesia, pues sólo ella podía determinar quién podía ser enterrado en terreno sagrado. El asunto llegó inmediatamente al Congreso que descongeló un proyecto que había sido presentado en 1872[38].

El debate legislativo fue rico y complejo. En términos muy gruesos las posiciones eran las siguientes: los conservadores se oponían a la formación del cementerio común, pues los cementerios benditos eran de la Iglesia y se usurpaba su propio derecho de propiedad (el derecho de propiedad de ambos era confuso e imposible de probar documentadamente en los tribunales); en ellos se producía la "promiscuidad de las tumbas", dejaba de ser un territorio sagrado, los católicos no podrían enterrarse en ellos, los católicos muertos pasaban a estar enterrados en terreno profano. Ello era una ofensa para los deudos, pero era mucho más. Para los católicos no era un problema simbólico sino real las consecuencias de dicha promiscuidad en la hora del juicio final y de la resurrección de la carne.

Los liberales se dividieron. Unos consideraban que debía primar el derecho a la libertad de conciencia y, por tanto, debía haber cementerios comunes neutrales y cementerios particulares. Los otros, en una posición más política que doctrinaria, sostenían que debía primar el derecho de propiedad y que en los cementerios públicos no podría impedirse la inhumación de cadáveres de las personas que hubieran adquirido o adquiriesen sepulturas particulares. Ésta fue finalmente la ley que se aprobó en 1883 y que le fue seguida al año siguiente por la del registro civil que dejaba la certificación de defunción a cargo de funcionarios públicos. Como respues-

[38] *SCN*, Senado, 3 y 7 de noviembre de 1871, 1 de julio 1872, 11 de septiembre de 1882 a 13 de enero de 1884; Diputados, 11 de noviembre de 1871, 4 de junio de 1872, 2 de agosto a 9 de noviembre de 1877, 13 de julio 1883 a 18 de enero de 1884 y 23 de junio 1883 a 31 de julio 1883.

ta, la Iglesia exhumó los cementerios, es decir, los hizo profanos y prohibió en ellos cualquier culto católico. El gobierno a su vez anuló los artículos del decreto de 1871 que autorizaban la creación de cementerios particulares. Los católicos provocaron escenas que conmovieron a la población, clandestinamente exhumaron los cadáveres de sus deudos de los cementerios para llevárselos a los parroquiales o de vuelta a las iglesias.

En síntesis, lo público fue nuevamente definido de acuerdo a la propiedad. El cementerio quedó definido como un espacio público estatal organizado interiormente de acuerdo con el derecho de propiedad individual. Con ello también corrían la religión hacia el espacio íntimo doméstico y hacia el espacio privado de la sociedad civil.

En síntesis, lo visto es el proceso por medio del cual, en base a una nueva delimitación del concepto de lo público, la pluralidad religiosa va ganando terreno primero en la sociedad civil (tolerancia de cultos de 1865) y finalmente en el propio Estado (leyes laicas).

Este cambio sutil y aparentemente casuístico es un buen reflejo del liberalismo político gradualista que condujo a la secularización del Estado en el siglo XIX chileno y que buscó soluciones políticas a aquello que en otras partes del continente llevó a la violencia como en México y que en otras áreas de conflicto no supo encontrarlas como lo demostró la Guerra Civil de 1891.

La relación entre ideología y cultura que presenta este caso, el vínculo entre secularización del Estado y de la sociedad, es un problema que nuestra historiografía aún está lejos de dilucidar. Los actores, sin embargo, tenían un cierto diagnóstico de las consecuencias culturales de los cambios ideológicos. Ello era particularmente dramático en el caso de la Iglesia que vivía la creciente separación de lo público y de lo privado como su expulsión de una publicidad propia de su fe y su expulsión del espacio privado como reguladora última de la conciencia. La separación entre lo público y lo privado la obligaba a 'protestanizarse'. "Una de las más peligrosas ilusiones del tiempo en que vivimos —dirían los obispos chilenos luego de promulgadas las leyes laicas— es la de creer que conviene ocultar la religión, relegándola al oscuro retrete de la conciencia individual [...] Peligrosa ilusión porque la verdad católica no cautiva inteligencias y corazones cuando se esconde en las tinieblas, sino cuando irradia como el sol en las alturas. Para ser amada, necesita ser conocida; y sólo es conocida cuando ostenta en público sus divinas excelencias y prueba su fuerza en los combates a que sus enemigos la provocan"[39].

[39] "Pastoral colectiva sobre relaciones entre la Iglesia y el Estado", 16, diciembre, 1884, *Boletín Eclesiástico*, T. IX, p. 520.

La Iglesia temería igualmente ser transformada en una sociedad de derecho privado cuya existencia jurídica dependiera del Estado. Por ello, cuando finalmente ambos poderes se separaron en 1925, para la Iglesia fue tan importante seguir siendo una institución de derecho público como lo es hasta hoy.

La Iglesia tendría que ir transformando su concepto de publicidad en la medida en que este nuevo espacio público se consolidaba. El mercado, la democracia, la urbanización, es decir, la formación de una sociedad plural, la obligarían a restringir su uso del espacio físico tradicional que le había sido tan propio y luego compartir la calle con muchos otros, a la vez que a ampliar y consolidar su presencia en la sociedad civil. En el último cuarto del siglo, la Iglesia y los católicos militantes iniciaron una ofensiva de organización a través de la educación, la creación de periódicos en provincia y en las grandes ciudades, las sociedades de beneficencia y las sociedades obreras de socorro mutuo[40].

El punto álgido de esta nueva forma de asociación lo encarnó la Unión Católica, creada en base al modelo de Alemania y Bélgica, que tenía por objeto precisamente promover el asociacionismo católico. Sintomáticamente era una sociedad colectiva civil, figura jurídica que no requería la aprobación estatal, con patrimonio propio, y absorbió a las sociedades dedicadas a la educación y a las sociedades de socorros mutuos obreras. Se creó en 1883, en el momento de la discusión de las leyes laicas y ya en 1885 tenía sede no sólo en Santiago sino en nueve otras ciudades del Arzobispado[41]. Su vida fue corta debido a que era una institución militante y combativa que no armonizaba con la política contemporizadora que quiso seguir el nuevo Arzobispo de Santiago, Mariano Casanova, nombrado en 1887. Entre sus obras más importantes estaría la fundación de la Universidad Católica y el fomento de la prensa católica.

Este tema, creemos, ha sido poco investigado en la historiografía desde la perspectiva de la paradójica respuesta 'moderna' de la Iglesia ante el primer embate secularizador. El catolicismo, opositor como fue a la formación de una esfera pública plural, tuvo que entrar a participar en ella con los instrumentos que ella entregaba: la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Quizás ello ayude a explicar por qué el catolicismo siguió siendo una fuerza poderosa en la política chilena ya plenamente secularizada del siglo XX.

---

[40] Sobre la organización católica en la sociedad civil en el período, una de las fuentes más interesantes son las memorias de uno de sus principales activistas. Véase Abdón Cifuentes, *Memoria* (1936).

[41] *Boletín Eclesiástico*, T. 9 (1883-1886).

Referencias bibliográficas

Aliaga Rojas, Fernando. *La Iglesia en Chile. Contexto Histórico*. Santiago: P. Universidad Católica de Chile, 1985.

Anguita, Ricardo. *Leyes promulgadas en Chile. Desde 1810 hasta 1 julio 1912*. Tomo II. Santiago: Imprenta Barcelona.

Annino, Antonio; Castro Leiva, Luis; Guerra, François X. (eds.). *De los imperios a las naciones: Iberoamérica*. Zaragoza: IberCaja, 1994.

Baker, Keith Micheal. *Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century*. Cambridge University Press, 1990.

Boletín Eclesiástico, Tomo 9 (1883-1886). Santiago.

Censo jeneral de la República de Chile. Santiago: Imprenta de El Ferrocarril, 1865.

Chartier, Roger. *Les origines culturelles de la Revolution Francaise*. De Seuil, 1991.

Cifuentes, Abdón. *Memoria*. Santiago: Editorial Nascimento, 1936.

Collier, Simon. "Religious Freedom, Clericalism, and Anticlericalism in Chile, 1820-1920". En Richard Helmstadter, *Freedom and Religion in the Nineteenth Century*. California: Stanford University Press, 1997.

———— "The Historiography of the 'Portalian Period' (1830-1891) in Chile". *Hispanic American Historical Review*, Vol. 57, 4 (1977).

———— *Ideas y política en la Independencia chilena. 1808-1833.* Santiago: Ed. Andrés Bello, 1977.

Couyoumdjian, Juan Ricardo. "Masonería de habla inglesa en Chile: Algunas noticias". *Boletín de la Academia Chilena de la Historia*, Nº 105, Santiago, 1996, p. 203.

Donoso, Ricardo. *Las ideas políticas en Chile*. Buenos Aires: Editorial Eudeba, 1975 (1946).

Edwards, Alberto. *La fronda aristocrática.* Santiago: Ed. Universitaria, 10ª ed., 1987 (1era ed. 1928).

Estellé, Patricio. "El debate de 1865 sobre la libertad de culto y conciencia". *Estudios de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales*, Nº 2, Santiago, 1967.

Eyzaguirre, Jaime. *Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile*. Santiago: Ed. Universitaria, 1967.

Goodman, Dena. "Public Sphere and Private Life". *History and Theory*, Vol. 31, 1 (1992).

Guerra, François Xavier. *Modernidad e independencias*. Madrid: Colecciones Mapfre, 1992.

————; Annick Lampiere *et al. Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII y XIX*. México: Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Fondo de Cultura Económica, 1998.

Guirao Massif, Ana. *Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades hasta la fundación del Instituto Pedagógico, 1843-1889.* Santiago: 1957.

Heise, Julio. *Historia de Chile. El período parlamentario.* Santiago: Ed. Andrés Bello, 1974.

Hunt, Wallis. *Heirs of Great Adventure: The History of Balfour, Williamson and Company Limited, 1851-1901*. Norwick, England: Harrold and Sons Limited, 1960.

Irven, Paul. *Un reformador yanqui en Chile. Vida y obra de David Trumbull: Inicios del protestantismo en Chile*. Santiago: Iglesia Presbiteriana de Chile, 1997.

Krebs, Ricardo (ed.). *Catolicismo y laicismo. Las bases doctrinarias del conflicto entre la Iglesia y el Estado en Chile*. Santiago: Ed. Nueva Universidad, 1981.

León León, Marco. *Sepulturas sagradas, tumbas profanas. Los espacios de la muerte en Santiago de Chile*. Santiago: DIBAM, 1997.

Maza Valenzuela, Érika. "Catolicismo, anticlericalismo y la extensión del sufragio a la mujer en Chile". *Estudios Públicos*, Nº 58, 1995.

McLean, J. H. *Historia de la Iglesia Presbiteriana en Chile*. Santiago: Imprenta Universitaria, 1932.

"Pastoral colectiva sobre relaciones entre la Iglesia y el Estado". 16 de diciembre de 1884. *Boletín Eclesiástico*, T. IX, p. 520.

Rehbein, Antonio. "El clero diocesano y su presencia evangelizadora en Chile durante el siglo XIX". *Anuario de la historia de la Iglesia en Chile*, Vol. 8 (1990).

Scully, Timothy. *Los partidos de centro y la evolución política chilena*. Santiago: CIEPLAN-Notre Dame, 1992.

Sesiones del Congreso Nacional (SCN).

Silva Cotapos, Carlos. *El clero chileno durante la Guerra de la Independencia.* Santiago: 1911.

——— *Historia Eclesiástica de Chile.* Santiago: 1925.

Trumbull, David. *¿Quién dará lluvias? o Rogativas a San Isidro. Carta al Sr. Presbítero D. Mariano Casanova*. Valparaíso: Imprenta Universo, 1863.

Valencia Avaria, Luis. *Anales de la República,* Tomo I. Santiago: Imprenta Universitaria, 1951.

Valparaíso Bible Society. *The Annual Report of the Valparaiso Bible Society*. Valparaíso: La Patria Printing Office, 1864, p. 2.

Venezian, Silvia. "Misioneros y maestros: la educación inglesa y norteamericana en Chile en el siglo XIX". Memoria para optar al grado de Licenciado en Historia, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1993.

Vergara, Sergio. "Iglesia y Estado en Chile, 1750-1850". *Revista Historia*, 20, Santiago, 1985.

Vial, Gonzalo. *Historia de Chile*. Santiago: Ed. Santillana, 1981, 2 Vol. □

LITERATURA INJURIOSA Y OPINIÓN PÚBLICA EN SANTIAGO DE CHILE DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX*

Pilar González Bernaldo de Quirós

En este trabajo se intenta indagar el funcionamiento de uno de los elementos constitutivos de una esfera pública moderna en el Chile post-independiente: el impreso como soporte de la opinión. El artículo pone de relieve la particular utilización del principio de publicidad para dirimir litigios intersociales, como lo testimonian los diversos juicios por injuria en el Archivo Judicial de Santiago. La hipótesis de esta investigación es que el impreso hace de soporte de una forma de disputa por ganar la opinión del público, que se inscribe en la misma dinámica de la defensa de la fama y el honor que servía para regular las relaciones sociales en la sociedad de Antiguo Régimen. Esta práctica permitiría fundar, sobre bases republicanas, el principio del reconocimiento social de una jerarquía, a partir del principio de derecho natural.

PILAR GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS. Profesora de la Universidad de París, III, Jussier.

* Esta investigación se realizó en el marco del proyecto ECOS de cooperación científica entre Francia y Chile.

Los últimos años han sido ricos en renovación de los estudios de una historia política antaño 'historia historizante', y que hoy se considera una de las claves para entender mejor el orden social[1]. El encuentro con la historia social y cultural ha contribuido ampliamente a esta renovación de la historia política[2]. Esta investigación se inscribe claramente en esta corriente, y en particular en la línea de la nueva historia cultural de la política, representada por lo que podríamos denominar la historiografía de los orígenes culturales de la Revolución Francesa[3]. Es en ese contexto que debemos situar las lecturas que los historiadores hicieron del texto de Habermas, que marcó un nuevo punto de confluencia de la historia sociocultural y política[4].

1. Habermas y la génesis de la esfera pública en el mundo hispánico

La tesis central de Habermas es que a lo largo del siglo XVIII surge una esfera pública política, que él califica de burguesa, y que abre un

---

[1] Es el caso en particular de la llamada 'historia social del derecho', con Hespanha y Clavero, que está renovando la tan vapuleada historia institucional. Las posibilidades de una renovación historiográfica latinoamericana a partir de esta nueva aproximación a la historia del derecho están ejemplificadas en el trabajo de Tamar Herzog, *La administración como un fenómeno social: La justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750)* (1995).

[2] Las referencias bibliográficas serían aquí interminables y necesitarían una introducción crítica que implicaría una publicación aparte. El catalizador ha sido el debate en torno a la Revolución Francesa que interpeló a modernistas y contemporaneístas, pero esa renovación ya se venía dando entre los especialistas de historia antigua y medieval y responde en buena medida a la intensificación de aproximaciones interdisciplinarias.

[3] Obviamente aquí hago referencia a la relectura del libro de Daniel Mornet, *Les origines intellectuelles de la Révolution Française.* Esta renovación de la historia política es ampliamente tributaria de una historia cultural que se ha enriquecido en su encuentro con la historia social. A esta renovación han contribuido particularmente trabajos como los de Ozouf Furet, *Lire et écrire. L'alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry* (1977); de Daniel Roche, *Le siècle des Lumières en province* (1978), y *Les Républiques des lettres. Gens de culture et Lumières au XVIIIe siècle* (1988); y de Roger Chartier y Henri-Jean Martin (editores), *Histoire de l'édition française*, Vol. II: *Le Livre triomphant, 1660-1830* (1984).

[4] La literatura sobre la esfera pública y los debates y relecturas a que dio lugar el libro de Habermas son muy numerosos. Por razones de espacio mencionaré aquí simplemente algunos autores que han marcado la discusión en este campo. Cf. Keith Michael Baker, *Au tribunal de l'opinion. Essais sur l'imaginaire politique au XVIIIème siècle* (1993 [la primera edición inglesa es de 1990]). Roger Chartier, *Les origines culturelles de la Révolution Française* (1990); Arlette Farge, *Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIII*e *siècle* (1992); Dena Goodman, "Public Sphere and Private Life: Toward a Synthesis of Current Historiographical Approaches to the Old Regime (1992), pp. 1-20; Sarah Maza, *Private Lives and Public Affairs: The Causes Célèbres of Prerevolutionary France* (1993). El libro de Habermas es de 1962. Aquí utilizamos la primera edición francesa de 1978: *L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*. Su análisis debe mucho a por lo menos tres autores contemporáneos: Hannah Arendt, *Condition de l'homme moderne* ([1958] 1961); Reinhart Koseleck, *Le règne de la critique* ([1959] 1979); Arnold Hauser, *Historia social de la literatura y el arte* ([1953] 1979).

espacio de discusión y de intercambio, en donde los hombres privados hacen uso público de su capacidad de razonar. Es en el transcurso de ese siglo que él constata en tres países de Europa, tocados por la Reforma —Gran Bretaña, Francia y Alemania—, un proceso a partir del cual el público, constituido por individuos que hacen uso público de su razón individual, se apropia de la esfera pública controlada por la autoridad y la transforma en una esfera en donde se ejerce la crítica contra el poder del Estado[5]. De allí surgió, según Habermas, el Estado constitucional burgués en donde el Público tiene un reconocimiento institucional a través del Parlamento y un control del poder a través del principio de Publicidad. El principal interés del texto reside en que el autor concibe la esfera pública como combinatoria de instituciones y prácticas. Aquí Habermas plantea en particular dos cuestiones que me parecen fundamentales: la de la génesis de la esfera pública moderna y la del principio y práctica de la publicidad como principio constitutivo de los regímenes republicanos representativos.

Los aspectos más atractivos de la tesis son, al mismo tiempo, aquellos que presentan mayores problemas para un historiador del mundo hispánico, y me aventuraría a decir para todo historiador, puesto que el autor establece una relación estrecha y obligada entre experiencia histórica particular —que remite principalmente al caso alemán— y proceso global de constitución de los regímenes representativos[6]. Para el caso hispanoamericano en particular, tanto Habermas como los historiadores que retoman esta problemática no consideran la especificidad que aquí tiene el proceso de instauración de los regímenes constitucionales modernos, y desde este punto de vista el modelo se adapta difícilmente a las realidades sociales, culturales y políticas del mundo hispánico. Tres puntos, al menos, a los que los diferentes autores destinan un lugar esencial en el proceso, no se constatan de la misma manera en el mundo hispánico.

En primer lugar, la relación entre el absolutismo, como condición de emergencia de una esfera pública moderna, y las consecuencias que de ello resultan. Para esos autores, la concentración del poder por la monarquía ha permitido la distinción moderna entre público y privado. Ahora bien, las modalidades del 'absolutismo español' —si esa palabra puede tener algún sentido en el mundo hispánico— son bastante específicas. Es cierto que, como lo subrayara Véliz, América había estado sometida al poder centralizador de Castilla, pero también lo es que subsiste en el mundo hispánico

[5] Cf. J. Habermas, *L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise* (1978), p. 61.

[6] Es la razón por la cual Habermas hace esa distinción neta entre burguesía y aristocracia, mucho menos evidente en Francia.

una concepción plural de la monarquía como un conjunto de cuerpos y estamentos que asumen funciones de gobierno[7]. Si estos fundamentos medievales de la monarquía española tienden a ser reemplazados por una concepción absolutista de la misma, en América la distancia con la metrópoli había creado un poder de compromiso, diferente de los *fueros* de Aragón, pero que se distingue también del centralismo castellano[8]. Es la idea de compromiso, o aquella más utilizada de 'pacto colonial', que supone ese precario equilibrio entre poder central y poder local[9]. Cuando este equilibrio fue amenazado con las reformas borbónicas, el centralismo apareció como algo que podía ser tan efectivo como insoportable[10]. Sin mirar en ello las causas de la ruptura con España, cabe señalar que la búsqueda de este equilibrio caracteriza también la etapa posterior a esta ruptura. Y no es descabellado pensar que el consenso en torno a un régimen liberal, que negaba en tantos aspectos la realidad cotidiana, fue la manera de instaurar entre el marco institucional y la práctica de gobierno un espacio de acción que permite restaurar ese antiguo equilibrio entre gestión local y poder central. En todo caso, cuando sabemos la importancia que los investigadores de la esfera pública dan al absolutismo y al desarrollo de un mercado libre en la emergencia de una esfera pública privada, en el seno de la cual surge el nuevo público, nos preguntamos si verdaderamente podemos hablar de génesis de la esfera pública en el mundo hispánico. En otros términos, cabe preguntarnos si la revolución de la Independencia supone la existencia de una modalidad alternativa a la representación antigua o si éste es un problema que sólo van a resolver las elites locales después de la Independencia. Tiendo a pensar que la segunda propuesta es la más plausible.

Un segundo aspecto que distingue claramente el mundo hispánico del modelo de análisis de la esfera pública concierne a la oposición que todos hacen entre la corte y la ciudad. La primera como lugar de la sociedad cortesana y de la representación del poder real, la segunda como lugar

---

[7] Este aspecto ha sido señalado por François Guerra en *Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas* (1992).

[8] Cf. Claudio Véliz, *La tradición centralista de América Latina* (1980, 1984).

[9] Cf. Tulio Halperin Donghi, *Reforma y disolución de los imperios ibéricos* (1985).

[10] Una recapitulación de esta cuestión, en Horst Pietshmann, "Los principios rectores de la organización estatal en las Indias" (1994), pp. 75-103. Las investigaciones de Zacarias Moutoukias, que muestran la imbricación entre funcionarios españoles y grandes comerciantes criollos, incitan incluso a rever la oposición que tradicionalmente tendíamos a hacer entre peninsulares y metropolitanos en la época borbónica. Cf. Zacarias Moutoukias, "Réseaux personnels et autorité coloniale: Les négociants de Buenos Aires au XVIIIe siècle" (1992), pp. 889-915.

de la sociedad 'burguesa' de donde emerge una esfera pública política. Para Habermas, "no es sólo en el plano económico que la ciudad representa la sociedad burguesa, sino también en el plano cultural y político la ciudad define las premisas de una esfera pública literaria cuyas instituciones serán los cafés, los salones, las reuniones de habitués"[11]. Si el análisis parece convincente para Francia, puesto que la oposición es clara entre París y Versalles, éste responde mal a la situación hispanoamericana. Primero porque no hay 'corte' propiamente dicha en América. Y aunque en algunos casos podemos hablar de la constitución de una suerte de sociedad cortesana que sirve a la representación del poder desplegada por el virrey, no se puede decir que el círculo que lo rodea haya sido completamente desposeído de poder, como en la sociedad cortesana. No hay que olvidar que las distintas corporaciones urbanas compartían con las autoridades españolas ciertas funciones de gobierno. Así, ¿cómo podríamos hacer en América la distinción entre ciudad y corte cuando la ciudad es el lugar de ceremonias públicas, laicas y religiosas, donde se despliega tanto el poder del monarca como el de las corporaciones urbanas?

En cuanto a las instituciones de la esfera pública, ellas conocen un desarrollo mucho menos considerable que en los países de la Europa reformada. Sólo algunas ciudades poseen periódicos antes de la Independencia. Por el número limitado y por las características de la opinión que esos periódicos difunden, esta opinión es más próxima a la idea de *vox populi* que de la opinión pública moderna[12]. Y veremos a lo largo de este trabajo que, incluso luego de la Independencia, la opinión cumple una serie de funciones que están lejos de corresponder a la idea habermasiana. En cuanto a las otras instituciones de la esfera pública, como las prácticas asociativas, ellas se implantan tardíamente, y sólo las 'sociedades de *pensée'* conocen un desarrollo en el conjunto del reino, con las *Sociedades de Amigos del País*. Pero éstas se originan en una iniciativa del Estado y no de la sociedad excluida de los asuntos del Estado y opuesta a éste[13]. Sin embargo, dos aspectos permitieron que estas asociaciones hayan podido funcionar como instituciones de la esfera pública: primero, todas ellas están asociadas a la redacción de un periódico que, aunque no sea la expresión de la

[11] Véase en particular el esquema sobre la estructura de la esfera pública burguesa en Habermas, *L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise* (1978), p. 41.

[12] Aspecto que ha sido destacado por F.-X. Guerra en "La formation des espaces publics en Amérique Latine - XIXe siècle" (1995-1996).

[13] Sobre las *Sociedades de Amigos del País* en España, ver el estudio de Jean Serrailh, "Les Sociétés Economiques des Amis du Pays" (1964), pp. 223-285; y para la América hispánica, Robert J. Shafer, *The Economic Societies in the Spanish World 1763-1821* (1958).

opinión pública, abre un espacio en el que es posible introducir el principio de la publicidad, tan esencial para la esfera pública. Por otro lado, en torno a ellas se desarrollan las tertulias, en donde tienen lugar discusiones más informales y los hombres adquieren la costumbre y el gusto de discutir sobre asuntos públicos. Pero veremos que, incluso aquí, coexisten concepciones divergentes del público.

Una tercera diferencia concierne al lugar que tiene la religión en el análisis de la constitución del Público. Los diferentes trabajos subrayan el papel específico que juegan aquí los conflictos religiosos en la génesis de la esfera pública moderna. Estos conflictos permiten tanto la victoria definitiva de la monarquía sobre los poderes de los señores como una primera escisión entre la esfera pública y la privada, escisión que confina la cuestión religiosa a la esfera privada. Para Chartier ese cambio fundamental se sitúa en Francia entre el siglo XVI y el XVIII, cuando la política absolutista substituye a la religión como principio de organización y como cuadro de referencia de la sociedad francesa[14]. Ahora bien, si hay algo que caracteriza al mundo hispánico es la imbricación entre lo político, lo económico y lo religioso. No tenemos en el mundo hispánico el equivalente de los conflictos religiosos que debe afrontar Europa del norte. España parece demarcarse bien antes del concilio de Trento, puesto que ella logra su prerreforma desde el siglo XV, con el cardenal Cisneros[15]. Luego de la escisión de la Iglesia Cristiana, Carlos V, con la ayuda de la Inquisición, logra detener el avance del protestantismo en las fronteras españolas y hacer desaparecer, con la expulsión de judíos y moros, las minorías religiosas. De ahí que a partir del siglo XVII no existen —al menos legalmente— minorías religiosas. Ello explica tanto el papel que va a jugar el catolicismo en la identidad hispánica como la asociación entre el poder político y el religioso, aspecto característico del mundo hispánico y que persiste después de la ruptura del vínculo colonial. Es cierto que, con las reformas borbónicas, esta 'paz de la Iglesia' se ve afectada por el regalismo que lleva a los Borbones hacia una concepción secular de la monarquía[16]. Pero hasta mediados del siglo XVIII la Iglesia vive, en España y en América, una situación excepcional dentro de una Europa fragmentada por los conflictos religiosos. Para Brading la política religiosa de los Borbones supone tal ruptura con los fundamentos

---

[14] Cf. Roger Chartier, *Les origines culturelles de la Révolution Françaiss* (1990), p. 132.

[15] Para esta cuestión ver la bibliografía que figura en Jean Delumeau, *Le Catholicisme entre Luther et Voltaire* (1992).

[16] Cf. José Carlos Chiaramonte, *La Ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura laica durante el Virreinato* (1989).

religiosos de la monarquía española, que él ve allí uno de los orígenes de la revolución de la Independencia[17]. Y aunque la historia de la Independencia de la Nueva España es un caso paradigmático de una ruptura revolucionaria que busca mantener los fundamentos católicos de la sociedad y de su gobierno, no por estar más silenciados en otras regiones del Imperio ha dejado de plantearse la cuestión.

Debemos evocar, asimismo, otro aspecto implícito en todos los trabajos sobre esfera pública, asociado a los países afectados por la Reforma: el de la constitución de un público de lectores[18]. ¿Esta particular relación con la lectura podemos encontrarla en el catolicismo barroco que caracteriza al mundo hispánico? Recordemos, para finalizar, la existencia de un tribunal de la Inquisición, otro factor que ha podido jugar en la especificidad de la constitución del Público en el mundo hispánico. Cierto es que ello no impide, en el siglo XVIII, ni la publicación, ni la lectura, ni la discusión, pero las limita considerablemente y sobre todo excluye la esfera religiosa como lugar donde pueda ejercerse una opinión crítica, en circunstancias de que en Francia es justamente en esta esfera donde pueden detectarse las primeras fisuras del poder absoluto[19]. Ahora bien, si tenemos en cuenta las profundas imbricaciones de lo político con lo religioso en el mundo hispánico, podremos evaluar la distancia que separa el proceso de gestación de la esfera pública moderna que esos trabajos describen con el mundo hispánico[20]. La esfera pública política ni siquiera fue, durante la primera mitad del siglo XIX, una esfera laicizada y aquí la utilización pública de la razón es refrenada por la autoridad religiosa. El caso más ejemplar es sin duda el de Mariano Moreno, ese 'jacobino' que representa el ala más radical de la revolución en el Río de la Plata. Por una decisión de la Primera Junta Patriótica, traduce el *Contrato social* de Rousseau, pero suprimiendo los pasajes en que el autor ataca a la religión. En la introducción nos explica las razones de ello: "como el autor tuvo la desgracia de delirar en materias religiosas, suprimo el capítulo y principales pasajes, donde ha tratado de ellas"[21]. Pero cómo no evocar también aquí el caso de Francisco Bilbao,

---

[17] David A. Brading, "La monarquía católica" (1994), pp. 19-43.

[18] Cf. Pierre Chaunu, *Les temps des réformes. La crise de la chrétienté. L'éclatement 1250-1550* (1975). Para la difusión del libro en esta época, ver Henri-Jean Martin y Roger Chartier, *Histoire de l'édition française. Le livre conquérant. Du Moyen Age au milieu du XVIIe siècle*, Tomo I (1982).

[19] Cf. Baker, *Au tribunal de l'opinion. Essais sur l'imaginaire politique au XVIIIème siècle* (1993).

[20] Véase F.-X. Guerra, "Revolución francesa y revolución hispánica" (1992).

[21] Cf. M. Moreno, "Prólogo" [prólogo a Juan Jacobo Rousseau: *Del Contrato Social o Principios del derecho político*] (1810).

cuyo artículo "Sociabilidad chilena", acusado de blasfemia e inmoralidad, fue incinerado como en los mejores tiempos de la Inquisición[22].

Todo lo cual nos lleva a concluir que aunque en la región de América hispánica se implanten los regímenes constitucionales modernos como en Europa, y que incluso aquí se muestren más avances, como en el caso de la ciudadanía política, los caminos que llevaron a la instauración de la república representativa no fueron los mismos. Lo que puede explicar las diferencias evidentes en el proceso de construcción de las sociedades nacionales en estas naciones. La particularidad hispanoamericana no vendría sólo de las particularidades sociales y económicas sino de las modalidades políticas y culturales de ruptura con el Antiguo Régimen. Ello aclararía que el problema de la construcción de la nación esté aquí profundamente imbricado con el de la reconstrucción de la representación. La polisemia de la palabra representación encubre la complejidad del problema, puesto que se trata no sólo de establecer un sistema representativo, único capaz de legitimar los nuevos poderes, sino también de remodelar los fundamentos representativos de las jerarquías sociales para asegurar el lugar que las elites entienden que deben ocupar dentro de la sociedad nacional. Si anteriormente ellas representaban —en el sentido de desplegar— un estatuto que encarnaban, ahora su estatuto debe ser consolidado a través de un poder que les viene del hecho de representar otra cosa, de suplir 'la opinión', 'la nación', 'las capacidades'. Tal cosa no quiere decir que el desarrollo de lo que Habermas llamó 'instituciones de la esfera pública' no haya intervenido en la implantación de un sistema republicano representativo y en la constitución de una esfera pública crítica del poder. Pero si América Latina comparte algunos, e incluso muchos, de los elementos de lo que se ha dado en llamar la modernidad política, éstos se inscriben en un proceso muy diferente. Ello llevaría a plantear la historia de América Latina independiente en otros términos que los de 'fracaso' o de 'atraso' en relación con una norma que estaría dictada por una evolución normal —y bastante ideal por cierto— de las sociedades europeas. Es necesario volver a la historia política de América Latina para intentar comprender cómo se articulan aquí el nuevo universo normativo y las nuevas representaciones de la sociedad y de la autoridad con las prácticas de interacción social y de gobierno. Sólo así lograremos llegar a una interpretación comprensible del mundo hispanoamericano. El problema, como podemos intuirlo, no reside sólo en las necesarias rectificaciones que el especialista de un mundo hispánico no

[22] El carácter revolucionario de la propuesta de Bilbao de instaurar un espacio de discusión laicizado fue subrayado por Ana María Stuven en "'Sociabilidad chilena' de Francisco Bilbao: Una revolución del saber y del poder" (1992).

reformado debería aportar al modelo, sino más esencialmente en la idea de que las mismas instituciones políticas se funden necesariamente en similares procesos históricos, lo que en definitiva supondría que las instituciones son entidades ajenas a los fenómenos sociales. Es en este particular punto que me parece que el modelo habermasiano implica serios riesgos para los historiadores de la nueva historia política.

No se trata aquí de proponer un modelo alternativo, sino más bien de señalar, a partir de un caso concreto —el de los usos del impreso en el Chile republicano—, la forma en que el proceso que lleva a ello puede, utilizando las mismas herramientas jurídico-ideológicas, tener componentes muy diferentes e incluso contradecir los puntos fundacionales del mismo; como es el caso de la constitución de una esfera pública a partir de la cual surge una opinión pública moderna.

2. El impreso como soporte de la opinión en Chile

Una de las primeras medidas adoptadas por los gobiernos insurreccionales fue declarar la libertad de imprenta. Se trata de uno de los grandes combates por los derechos cívicos de la era de las revoluciones. En Chile, el decreto de libertad de imprenta es prácticamente simultáneo a la introducción de la primera imprenta por Hoevel en noviembre de 1811. Y aunque, como lo indicara José Toribio Medina, en Chile existieron talleres impresores con anterioridad a esta fecha, es sólo entonces que va a disponerse de una herramienta capaz de asegurar una actividad de edición continua en el territorio del reino. De modo tal que aquí la reglamentación de la libertad de imprenta no busca tanto preservar un espacio de comunicación social y política, sino sobre todo pautar el desarrollo del impreso en la sociedad chilena, intentando así responder a una doble novedad: la extensión de la cultura del impreso hacia otros sectores de la sociedad letrada y la institución del principio de publicidad como mecanismo de control social y político[23].

Sin embargo, las diversas disposiciones adoptadas no dejan de ser equívocas, pues no tratan sólo de garantizar una de las principales libertades públicas, como lo entiende Camilo Henríquez desde las columnas de *La Aurora de Chile* en 1812, sino también de limitar el principio de publicidad y, en general, la utilización de la prensa a ciertas esferas, conservan-

[23] Cf. José Toribio Medina, *Bibliografía de la imprenta en Santiago de Chile desde sus orígenes hasta febrero de 1817* (1891); Raúl Silva Castro, *Prensa y periodismo en Chile, 1812-1956* (1958).

do el gobierno el control sobre el mundo del impreso, a fin de que, como lo dijera Egaña, se lograra "la uniformidad de la opinión pública a los principios de Gobierno"[24]. Así, desde los primeros momentos de la insurrección, el nuevo poder intentó poner coto a una interpretación abusiva del principio de publicidad para evitar que la sociedad hiciera uso desmedido de la libertad de imprimir[25].

A pesar de estas restricciones, que obviamente infligieron un freno a la expansión de una opinión pública crítica, la reglamentación hizo posible el desarrollo de una cultura del impreso que funcionó como uno de los principales soportes del culto de la opinión, aunque, como veremos luego, se apela con ello a 'públicos' bien diferentes. Claro está que no todos los papeles impresos están destinados a servir de tribuna a la opinión. El catálogo de impresos en Chile realizado por Briseño nos da una primera idea de la importancia que adquiere la opinión dentro de la cultura del impreso. De más está decir que aquí se trata de proponer una primera aproximación al tema. Sólo podremos sacar conclusiones definitivas a partir de un estudio del contenido de las publicaciones, y de su área de difusión e impacto en las sociedades locales. El análisis del repertorio de Briseño tiene sin embargo el mérito de brindarnos una primera visión general —aunque no sea más que aproximativa— del desarrollo del impreso y de la difusión de la cultura de la opinión en el seno de la sociedad postcolonial.

De una muestra de 1.272 títulos (alrededor de 26% del total[26]) notamos que un 10% de las publicaciones chilenas durante la primera mitad del siglo conciernen a la prensa periódica[27]. Aunque no podamos hacer una total asimilación entre prensa y opinión —pues en muchos casos se trata de publicaciones de propaganda política del gobierno—, el tipo de soporte garantizaba un grado de divulgación necesaria a la formación de una opinión. Las primeras publicaciones son escasas y exclusivamente promovidas por el gobierno. A medida que las diferentes facciones se apoderan de esta nueva herramienta de combate, las publicaciones se multiplican muchas

[24] Así lo declara Juan Egaña en 1810 en su Plan de Gobierno presentado al Conde de la Conquista, en donde estima necesario que se establezca una imprenta en Chile, costeada por el gobierno. Cf. *Colección de historiadores y de documentos relativos a la independencia de Chile*, Vol. 19.

[25] Cf. "Penas a los autores de publicaciones denigrantes", 9/11/181, (1912), p. 30.

[26] Esta muestra de 1.272 títulos, que representan el 26% del total de las publicaciones, es del período 1812-1859.

[27] Dentro de la rúbrica 'prensa' incluimos periódicos, diarios y revistas, ya sean éstas nacidas de una iniciativa del gobierno, como por ejemplo el *Boletín de leyes y de órdenes y decretos de gobierno*, de 1823, o de asociaciones con objetivos diferentes que producen su propia publicación, como por ejemplo *La Revista Médica* de 1853 o *El Mensajero de la Agricultura* de 1856.

veces en detrimento de su periodicidad. Así, durante la revolución de 1823, asistimos al crecimiento de una prensa periódica que sobrevive difícilmente a su quinto número. Ello parece haber contribuido, sin embargo, a generar una cierta demanda social de opinión, puesto que hacia fines de la década del veinte, con el *Valdiviano Federal* y *El Araucano*, ambos editados en Santiago de Chile, las publicaciones periódicas adquieren una cierta regularidad.

Los Gráficos 1-8, sobre publicaciones periódicas en Chile, muestran con claridad la evolución de la prensa a medida que avanza el siglo. Entre 1812 y 1862 se publican un total de 445 periódicos, de los cuales casi un tercio se edita en la capital (Gráfico Nº 1)[28]. Entre las ciudades que dispu-

GRÁFICO Nº 1: PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN CHILE 1812-1862

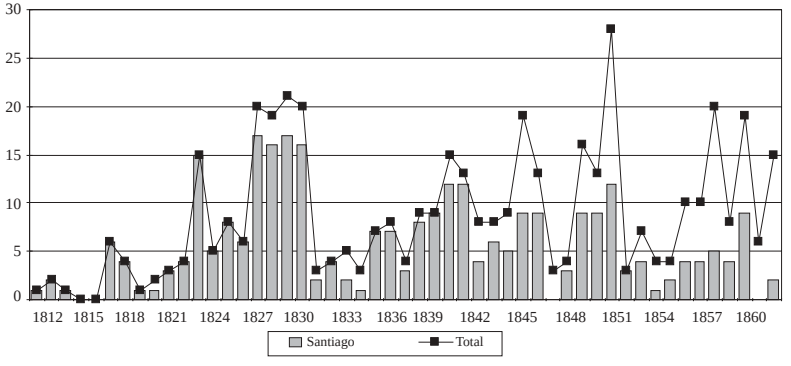
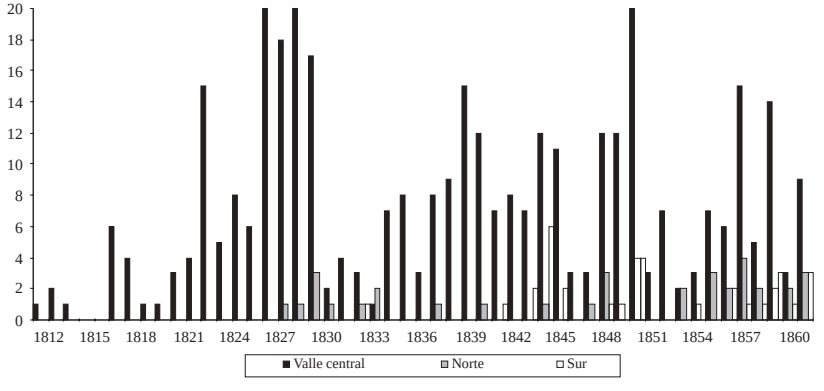


GRÁFICO Nº 2: DESARROLLO DE LA PRENSA POR REGIONES



[28] Los diferentes gráficos se han realizado a partir del catálogo de Briseño (1965).

sieron de este órgano de comunicación se destaca Santiago de Chile, que contó durante nuestro período con unas 294 publicaciones periódicas, que aparecen de manera relativamente regular. Es cierto que podemos destacar algunos puntos altos de desarrollo: es el caso, por ejemplo, del año 1823, momento de la revolución que acaba con O'Higgins, pero también momento particularmente importante para la opinión debido a los trabajos de la asamblea constituyente; el período de 1827 a 1830, que incluye la crisis que se abre con el pronunciamiento del general Prieto; y de manera general

GRÁFICO Nº 3: COPIAPÓ

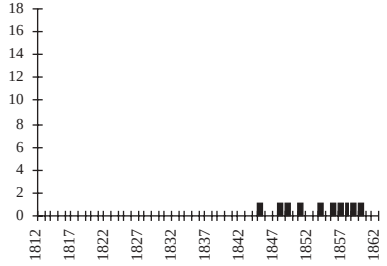


GRÁFICO Nº 4: VALPARAÍSO

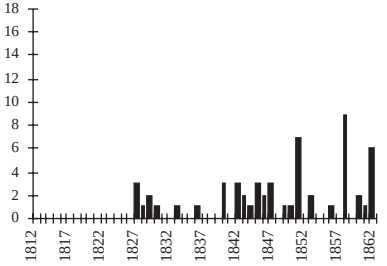


GRÁFICO Nº 5: SANTIAGO

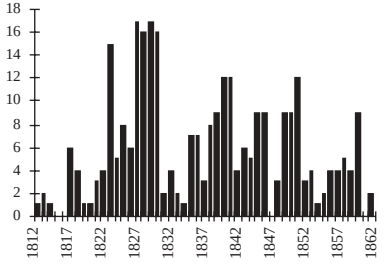


GRÁFICO Nº 6: TALCA

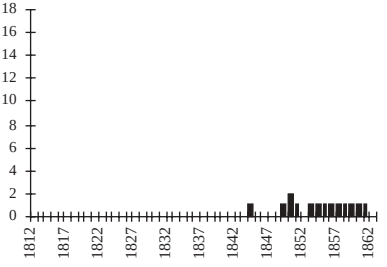


GRÁFICO Nº 7: CHILLÁN

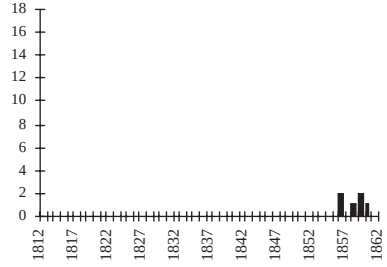
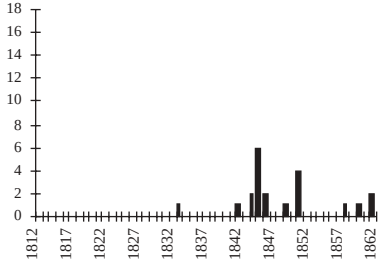


GRÁFICO Nº 8: CONCEPCIÓN



podemos decir que las publicaciones periódicas tienden a multiplicarse durante los períodos preelectorales (1829-1831, 1839-1841, 1849-1851 y 1859-1861), que por lo común suelen ser períodos de turbulencia política. A pesar de estas fluctuaciones, y a diferencia del resto de las ciudades que cuentan con una imprenta, el ritmo de desarrollo de las publicaciones periódicas en Santiago no está relacionado exclusivamente con las movilizaciones políticas, como es el caso de los dos principales centros de edición fuera del valle central: Concepción en el sur y La Serena en el norte. Valparaíso (Gráfico Nº 4) se asemeja a Santiago, pues aunque, como las otras ciudades provinciales, conoce puntos altos correspondientes con las sublevaciones políticas, notamos, a partir de los años 40, un desarrollo regular que permite suponer que la edición de este tipo de publicaciones no está estrictamente ligada a los imperativos de la acción política. Una rápida representación cartográfica permite distinguir la zona del valle central de las otras dos principales regiones chilenas. Mientras que en el valle central ciudades como Santiago, Valparaíso o Talca van a conocer un desarrollo relativamente continuo, en el norte y en el sur —como también es el caso de San Felipe, en el valle central— la prensa vive al ritmo de los movimientos insurreccionales, lo que supone que aquí la esfera de la opinión aún está supeditada a los requerimientos de las movilizaciones facciosas.

Notamos, sin embargo, que la importancia de las publicaciones santiaguinas respecto de las publicaciones totales decrece a medida que avanza el siglo. En efecto, si hasta el año 26 Santiago es la única ciudad de Chile que cuenta con un periódico, entre los años 60 y 63 la prensa de la capital representa sólo una cuarta parte de la totalidad de las ediciones, que se extienden ahora hacia medianas y pequeñas ciudades de provincia. Lo que podría ser un indicio de la propagación del hábito de lectura que acompaña la difusión de un ámbito de opinión. Ello a condición de aceptar que existe una relación directa y necesaria entre prensa periódica y Opinión Pública.

La primera objeción que puede hacerse a este modelo es la existencia de un espacio en donde pueda ejercerse una opinión crítica contra el Estado. No debemos olvidar que la revolución republicana establece como límites a la libertad de prensa, aquellos necesarios a la conciliación del "libre ejercicio de las facultades del hombre con los derechos sagrados de la religión y el Estado"[29]. Así, simultáneamente a la aparición de la primera publicación periódica que será censurada de inmediato por el propio poder que la creara, los hombres de la 'Patria Vieja' van a limitar la publicidad y

[29] Así lo estipula el decreto del 12 de octubre de 1812, que establece la censura. Cf. Anguita, *Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta el 1 de agosto de 1912* (1912), Tomo 1, p. 30.

la libertad de opinar a ciertas esferas. La primera y principal restricción se dará en la esfera de la religión, que desde los primeros momentos de impulso revolucionario va a excluirse del campo de la opinión. La ley del 23 de junio de 1813, que declara la "entera y absoluta libertad de imprenta", aboliendo las revisiones, aprobaciones y cuantos requisitos se opongan a la libre publicación de escritos, impone, como excepción, las publicaciones sobre escritos religiosos, pues el gobierno considera "un delirio que los hombres particulares disputen sobre materias y objetos sobrenaturales, de modo tal que los escritos religiosos no pueden publicarse sin previa censura del ordinario eclesiástico y de un vocal de la junta protectora"[30]. Las leyes de abusos de la libertad de imprenta que regirán durante nuestro período, tanto la de 1828 como la de 1846, mantienen esta restricción al sancionar como abuso de la libertad de imprenta todo ataque al dogma de la Religión Católica Apostólica Romana, aunque estas últimas leyes transfieran ahora el control de los escritos religiosos a una autoridad civil[31].

A pesar de la aparente liberalidad de esta medida, ella tiene por efecto, como lo demuestra el juicio a la "Sociabilidad chilena", de Bilbao, el de excluir la esfera religiosa como lugar constitutivo del Público. Ahora bien, vimos que es justamente en esta esfera que en Francia puede detectarse la constitución de una opinión crítica, que provoca las primeras fisuras del poder absoluto. La esfera pública que se constituye durante toda la primera mitad del siglo XIX al ritmo del desarrollo de la cultura del impreso no es aún una esfera laicizada. De lo que resulta que el uso público de la razón está aquí imbricado por una autoridad religiosa que se confunde con la autoridad a secas, puesto que la crítica a la religión no sólo supone un ataque a la comunidad definida como comunidad de creencias, sino que ella también implica, como lo indicara Egaña, un atentado hacia el Estado, definido como Estado católico[32]. De allí la identificación entre la esfera de la religiosidad y una esfera pública republicana que supone una amalgama entre dos nociones de Público: el Público como cuerpo político antiguo que reconoce a Dios como fuente de toda autoridad y el que ahora se invoca como Opinión Pública.

Los límites a la libertad de opinar y sobre todo a la de dar publicidad a juicios personales por medio del impreso, por cierto no se circunscriben a

---

[30] Cf. "Disposiciones relativas a la libertad de la prensa" (1912), pp. 37-39.

[31] Cf. "Ley sobre abusos de la libertad de imprenta", del 11/12/1828 y del 16/9/1846 (1912), pp. 19-196 y 478-484.

[32] Juan Egaña, en un texto notable por su lucidez, subraya las consecuencias políticas del establecimiento de la libertad de cultos en Chile. Cf. Juan Egaña, *Memoria política sobre si conviene a Chile la libertad de culto* (1825).

las cuestiones de dogma. Éstas se encuentran profundamente imbricadas a otras esferas en las que también se pretende reglamentar los usos del impreso y condenar los abusos de la libertad recientemente instituida. La ley de 1828, como luego la de 1846, establece junto a la blasfemia otros tres tipos de delitos por abuso de libertad de imprenta: inmoralidad, sedición e injuria. Analizaremos más detalladamente el caso de la injuria que, aunque parece tener poca relación con la instauración de la esfera pública política, testimonia las ambivalencias de la instauración del principio de publicidad en la construcción de una opinión pública.

3. La disputa por la opinión del Público

Un rápido recorrido por los títulos de las publicaciones nos revela que, incluso dentro del recinto de las elites letradas, el impreso puede servir de soporte a otro tipo de opinión —más próxima al juicio parcial que al razonamiento individual— que invoca un público diferente. La importancia que va a adquirir este tipo de opinión en los papeles impresos no se limita, por otra parte, a la prensa periódica. Entre los 'impresos de opinión' debemos incluir publicaciones como las 'refutaciones', 'vindicaciones', 'defensas', cuyas retóricas establecen un particular vínculo entre el autor y el lector[33]. Entre ellos encontramos, claro está, papeles destinados a incitar vocaciones facciosas, particularmente numerosos en períodos preelectorales. Pero junto a éstos descubrimos también publicaciones que, bajo soportes diferentes como el papel suelto, el folletín o el libro, están destinadas a verter opiniones sobre asuntos privados[34].

Llama la atención en primer lugar la importancia que va a tomar este tipo de manifestación de opinión en un espacio de comunicación que se piensa reservado al ejercicio de la razón individual. Ello nos habla del impacto que pudo tener el establecimiento de la libertad de imprenta en una sociedad mucho menos transformada que sus instituciones. El conjunto de estos 'impresos de opinión' representa un 24% de las publicaciones señaladas por Briseño, dentro de las cuales un 13% tratan de asuntos litigiosos en que se pone en juego la reputación del individuo. Estos primeros resultados —que, repetimos, corresponden a la clasificación de títulos de impresos y

[33] Cuestión que merecería un estudio detenido. La referencia historiográfica para este problema sigue siendo el trabajo de Nathalie Zemon Davis, *Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France* (1987).

[34] Cf. Briseño (1965). Hemos excluido de esta clasificación los impresos 'informativos', es decir todos aquellos que sirven tanto al gobierno para informar a la sociedad sobre asuntos diversos, como aquellos utilizados dentro de una corporación o institución.

no de su contenido— sugieren que la legislación sobre libertad de prensa no sólo instaura esta nueva publicidad constitutiva de un público de lectores y de una esfera pública moderna, sino que también permite hacer públicas cuestiones que hasta entonces eran reservadas a espacios de sociabilidad 'naturales', sean éstos el de la familia, de los contertulios o de la corporación[35]. Constatamos asimismo que en estos impresos se invoca al Público en términos suficientemente equívocos como para que asuntos de corrillos se transformen en un negocio de interés público.

Los diferentes decretos que sirvieron para reglamentar el mundo de la edición muestran que una de las primeras preocupaciones del gobierno fue la de poner coto a esta multiplicación de impresos que echan voz de la conducta de ciertos parroquianos. En 1813 un decreto de la Junta de Gobierno establece la libertad de imprenta "con las limitación de que se guarde decoro i honestidad" y estipula que todo agravio a terceros constituye un delito que será tratado por una junta protectora. La ley de abusos de libertad de imprenta de 1828 ahonda en el delito de injuria, acordando que "todo impreso contrario al honor y buena opinión de cualquier persona" puede ser acusado de injurioso, y añade que "no merecerán la nota de injuriosos los impresos en que se publiquen las omisiones o excesos que los empleados públicos cometan en el ejercicio de sus funciones, siempre que el autor pruebe la verdad de los hechos"[36]. La ley de 1846, más represiva que la anterior, destina los artículos 7 al 11 a reglamentar las penas que serán infligidas a aquellos que cometan delito de injuria.

La multiplicación de juicios de injuria, y sobre todo de una literatura destinada a hacer públicos los litigios intersociales, sugiere, en todo caso, que la ley de libertad de imprenta posibilita la multiplicación de disputas por la opinión del público en asuntos que tocan a la buena reputación de las familias. La reglamentación que intenta poner coto a estas disputas viene a hacer extensiva al campo de la imprenta una legislación contra la injuria que ya existía en tiempos de la Colonia[37]. Pero ahora las acusaciones de injuria dan lugar a un juicio de imprenta que nuevamente interpela a la

---

[35] La calificación de 'sociabilidad natural' hace referencia a una sociabilidad fundada sobre vínculos sociales que, según el paradigma de Tönnies, se definen como primarios o naturales: de sangre, de amistad, de vecindad o de cuerpo para el Antiguo Régimen. Cf. Ferdinand Tönnies, *Comunidad y asociación* (1887, 1979).

[36] Cf. Ley sobre abusos de la libertad de imprenta, art. 15 y 16, en Anguita (1912), p. 193.

[37] El tema aún no ha sido seriamente tratado para la América colonial. Para la España medieval, véase el trabajo de Marta Madero, *Manos violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla y León (siglo XIII-XV)* (1992).

opinión del público a través de la prensa periódica. Así, a diferencia de los casos de injuria tratados por los tribunales criminales, los juicios de prensa que tratan de similares casos de afrenta al honor son sujeto y objeto de opinión, pues ellos informan sobre la decisión del jurado que interviene como tribunal de la Opinión, y al mismo tiempo buscan, a través de la publicación en los periódicos, generar una opinión —¿racional, consensual?— acerca de las conductas personales[38].

La importancia numérica de los juicios de injuria respecto a los otros tres delitos posibles, blasfemia, inmoralidad y sedición, es de por sí significativa. De un total de 24 casos de juicios de imprenta encontrados en el *Archivo Judicial de Santiago* (para un período que va desde 1833 hasta 1863), 17 tratan de casos de injuria, 6 de sedición y un caso de publicación sin autorización[39]. La ausencia de juicios de imprenta por sedición se explica menos por la liberalidad del poder que por el carácter represivo de la ley —sobre todo la de 1846—, que exigía la autorización del gobierno para establecer imprenta, así como la responsabilidad del impresor de todo escrito publicado, cláusula que debe haber disuadido a más de un impresor avisado. Por otro lado, también debemos tener en cuenta que se trata de una serie incompleta —puesto que en la prensa figuran otros juicios que no se encuentran catalogados en los archivos— y demasiado pequeña como para permitir operaciones estadísticas.

Aunque insuficiente, el corpus de textos que dieron lugar a acusaciones de injuria, y que hemos clasificado bajo el nombre genérico de 'literatura injuriosa', muestra que el impreso ofrece un abanico de utilizaciones posibles que van desde la denuncia de abusos cometidos por un funcionario público hasta la búsqueda de un apoyo público en un conflicto estrictamente privado, e incluso íntimo. Y que en todos los casos los textos ponen en juego, frente al público, la reputación de la persona.

Las publicaciones destinadas a acusar a un funcionario público por hechos de corrupción o de soborno pueden interpretarse fácilmente como una forma de control que ejerce la sociedad sobre el poder. Dicho de otro modo, como una manifestación de la existencia de una esfera pública moderna. Es el caso del artículo que, bajo el título "Justicia, justicia, justicia" publica Fidel Merino en *La Voz de Chile* para denunciar los hechos de

[38] Aunque los casos no son equiparables, creo que la relación entre publicidad de asuntos privados y esfera pública moderna es mucho más compleja y en todo caso menos necesaria que lo que deja suponer el libro de Sarah Maza. Cf. Sarah Maza, *Private Lives and Public Affairs: The Causes Célèbres of Prerevolutionary France* (1993).

[39] Cf. *Archivo Judicial de Santiago. Criminales.*

corrupción del secretario de la Intendencia de Maule[40]. Curiosamente, esta utilización del impreso no es la más difundida, acaso porque aún no existe verdaderamente un espacio en donde la sociedad pueda ejercer un cierto control sobre el poder. Los escritos dirigidos contra individuos de la sociedad civil son, en cambio, numerosos y van desde la denuncia de malversaciones en los negocios, hasta los conflictos familiares ocasionados en torno al reparto de la herencia. Veamos algunos ejemplos.

En 1833 Agustín Lagos publica un libelo en que acusa al comandante Andrés Olivares, de Rancagua, de haberlo puesto en prisión "sin más delito que la enemistad que dicho comandante me profesaba", y para "vindicación completa de mi honor y subsanación de mis perjuicios" promete hacer públicas las pruebas que muestran la deshonestidad de Olivares, que no sólo no ha respetado los términos de su contrato comercial con Lagos, vendiéndole cerveza en mal estado, sino que incluso "tiene pendiente la acusación de dilapidación de fondos de su cuerpo con falsos presupuestos"[41]. Para defenderse de la ignominia infligida por Olivares, en vez de quejarse ante las autoridades por injusticia notoria, o abuso en el ejercicio de sus funciones, Lagos buscó ganar la opinión con el fin de 'vindicar su honor', acusando a Olivares de deshonesto, quien en consecuencia inicia un juicio por injuria. No se apela aquí a una opinión pública para limitar el poder abusivo de un funcionario, sino que se recurre a la 'opinión del público' para zanjar un conflicto entre dos personajes que cuentan aparentemente con un cierto reconocimiento social en Rancagua y cuya reputación está en juego.

El doctor Barrington, de Santiago de Chile, recurre a la prensa para denunciar una deuda impaga, mandando publicar en el periódico *El Ferrocarril* del mes de mayo de 1863 el siguiente anuncio: "Se le advierte a don M. N., empleado de la tesorería nacional, que si no paga en el término de tres días la cuentecita que debe al doctor Barrington ya dos años, se ofrecerá en venta por aviso, poniendo su nombre con todas sus letras y la cuenta detallada"[42]. Aquí de nuevo el autor del anuncio se vale de la afrenta pública para resolver una cuestión de orden estrictamente privado. Máximo Navarrete, el deudor así deshonrado, acusa a su vez a Barrington de injuria,

---

[40] Cf. juicio de imprenta contra Núñez Jacinto, seguido por Sótero Gundián por publicaciones en la *Voz de Chile* (1862), *Archivo judicial de Santiago. Criminales*, legajo 1.622, año 1862.

[41] Cf. juicio de imprenta contra Lagos Agustín, por publicación injuriosa, seguido por Andrés Olivares (1833), *Archivo judicial de Santiago. Criminales*, legajo 1.616, año 1833.

[42] Cf. juicio de imprenta contra Barrington Guillermo (1863), *Archivo judicial de Santiago. Criminales*, legajo 1.589, año 1863.

alegando que "incluso en el caso de que la deuda fuese cierta los medios que la ley franquea para obtener el pago son muy distintos que el de la difamación, de que se ha hecho mano"[43]. Nuevamente el conflicto entre individuos de la sociedad civil viene a resolverse en la esfera pública pero apelando a una opinión que poco tiene que ver con el ejercicio de la razón y mucho más con la defensa del honor y, como veremos luego, con un lugar en la jerarquía social.

La publicidad no dispensa tampoco a la familia. Juan N. Iñíguez publica un largo libelo para denunciar la acción de sus cuñados y justifica dicha decisión en los siguientes términos:

> […] este escrito no ha sido preparado con el designo [designio] de informar al público de las cuestiones a que alude [...] es una mera respuesta al alegato presentado por mis hermanos políticos [...] y no es un trabajo sistemado tal cual lo necesita el público para formar un juicio exacto y completo del mérito jurídico de las pretensiones de los demandantes y demandado. No obstante esto, violentando mis sentimientos habituales, me he decidido a darle publicidad, sólo porque los Ovalle han publicado el suyo, no para buscar el apoyo de la opinión bien ilustrada, sino para llevar adelante, por el medio reprobado de la sorpresa y de la grita, el sistema de difamación que han desplegado desde el principio de la causa. El público no es competente para juzgar las contiendas judiciales, y cuando le veo llamado a tomar parte en ellas, pienso para mí que no se lleva otra mira que la de ejercer sobre el ánimo de los jueces a quienes toca decidirlas una presión ilegal y atentatoria. Con todo eso, creo que, hallándome en una situación excepcional, puedo sin derogar mis principios, comunicar al público mi defensa, no para constituirlo juez en las cuestiones de fondo, sino para colocarlo en aptitud de rechazar con indignación las graves imputaciones con que mis adversarios tratan de echar un borrón indeleble sobre mi reputación y mi nombre. Estimo como debo el buen concepto que me merezco de mis conciudadanos, y no quiero abandonarlo a la maledicencia y ciego furor de los que en cuestiones de puro interés pecuniario, no saben contenerse dentro de los límites de una discusión tranquila y desapasionada. Tal es el único y esclusivo propósito de esta publicación y no teniendo otro por mi parte declino desde luego la responsabilidad de sus consecuencias, para que recaigan sobre los que han creído lisonjear al público con la narración de las pobres rencillas de nuestras familias"[44].

---

[43] Cf. Ibídem.

[44] Cf. Juan N. Iñíguez, *Alegato presentado al juez de primera instancia por Don Juan Nepomuceno Iñíguez en el pleito que sigue contra don Manuel, don Luis, don Agustín, don Pablo, don José María y don Sabino Ovalle, sobre nulidad o rescisión de una venta* (1857).

Iñíguez dice aquí verse arrastrado a pesar suyo a hacer públicos los conflictos familiares, y ello debido a que sus cuñados ya han hecho público el suyo[45]. Este ejemplo muestra nuevamente cómo, incluso para resolver cuestiones de orden estrictamente privado —no se trata aquí de personajes involucrados en negocios públicos—, se apela a la opinión. Pero la publicidad está aquí directamente ligada a la defensa de la reputación, que tiene que ver más con el reconocimiento de un lugar en la jerarquía social que con el estado constitucional burgués habermasiano. Iñíguez hace referencia explícita en su texto cuando especifica que su objetivo no es comunicar al público su defensa sino colocarlo en aptitud de rechazar las imputaciones con que sus adversarios intentan echar un borrón a su reputación. Ello se manifiesta igualmente en la reacción de los hermanos Ovalle, que van a denunciar el libelo por atentado al honor. Cuando el jurado dictamina la inocencia de Iñíguez, los Ovalle piden una copia del alegato de la defensa, pues "allí hay un reconocimiento de que hubo injuria y ello me servirá para restablecer nuestro honor"[46]. ¿Qué piensan hacer los Ovalle con el alegato? Publicarlo, claro está, para restablecer el buen concepto que se merece de la opinión del público.

Incompleto sin lugar a dudas, el corpus de la literatura injuriosa —cuya riqueza ilustran los casos aquí citados— está indicando una tendencia a la multiplicación de disputas sociales que vienen a resolverse en la escena pública. ¿Cómo explicar este fenómeno? En un primer orden de respuestas se podría decir que es producto de las nuevas posibilidades que otorga el impreso como soporte de las viejas querellas de honor y preeminencia, tan difundidas en la sociedad colonial. La utilización de la prensa para resolver problemas de esta índole modifica, sin embargo, considerablemente el problema, puesto que si el delito de injuria no es una novedad republicana, sí lo es el que los problemas de atentados a la reputación y al buen nombre de una persona se traten a partir de la nueva legislación sobre derechos cívicos. Pues al estipular sobre delitos de injuria, la legislación de imprenta establece con claridad una distinción entre la esfera pública y la privada. Si bien es posible denunciar públicamente la conducta de un hombre en su vida pública —siempre y cuando se aporten pruebas, claro está—,

---

[45] Efectivamente, los Ovalle habían publicado su *Alegato por parte de los herederos de doña Francisca de P. Urriola en su causa con don Juan N. Iñíguez* (1857).

[46] Cf. juicio de imprenta contra Iñíguez, Juan Napomuceno, por publicación de un folleto injurioso a don Manuel Ovalle y familia (1858), *Archivo judicial de Santiago. Criminales*, legajo 1.615, año 1858.

la denuncia de conductas en la vida privada, incluso con pruebas fehacientes, puede ser considerada como un delito de injuria[47].

Los pleitos en los juicios de imprenta testimonian, sin embargo, la dificultad que plantea la aplicación de esta distinción. Primero porque en general las acusaciones dirigidas al hombre público son habitualmente acompañadas de otras que apuntan a la conducta de la persona en lo que hoy consideramos como esfera de la vida privada. Es el caso, por ejemplo, de Juan María Correa da Costa, quien al denunciar en su crónica de viaje la corrupción de Pedro Cueto, cónsul de Chile en California, agrega: "Además yo he visto con mis ojos a Pedro Cueto jugando y perdiendo al monte en un café público, y los dos mil pesos a la muchachita mejicana [...] pero yo no deseo ofenderlo. Un jugador es un hombre sin carácter moral en la sociedad"[48]. ¿Cómo distinguir, en este tipo de textos, la afrenta al hombre público y aquella que toca la vida privada? Pero esta dificultad se presenta incluso en los casos en que no existe expresa denuncia de una conducta privada deshonrosa. El problema tiene raíces más profundas y reside, a mi juicio, en que la noción de honor que se está manejando no permite operar una distinción clara entre el espacio público y privado, esencial no obstante a la constitución de una esfera pública moderna según el modelo habermasiano. La importancia que se acuerda aquí a la buena reputación de los individuos tampoco es ajena a las características de una economía social aún no escindida por completo de la religión, y en que los intercambios suponen esa relación de amistad, de gratitud y de confianza sobre los que atenta la injuria, como lo sugiere explícitamente la acusación que hace Agustín Lagos de la conducta de Andrés Olivares[49].

---

[47] Así se distingue (art. 7) entre "si la injuria consiste en la imputación de un crimen hecha a un particular o a un funcionario o empleado público en su carácter privado", la injuria que "aunque no sea crimen, por su naturaleza es a propósito para menoscabar la confianza en la honradez e integridad de la persona a quien se hace" (art. 8), "la imputación hecha a un funcionario público de haber cometido un crimen en el desempeño de sus funciones públicas", siempre que ésta no pudiese probarse (art. 10 y 11). El art. 11 estipula, por otro lado, que "tampoco se estimará injurioso el impreso en que se critique, examine o analice una obra de literatura, ciencia o artes, o en que se esprese juicio u opinión sobre las calidades, méritos o defectos del autor con relación a dicha obra, aunque tal crítica, exámen, análisis u opinión sea infundada i desfavorable u ofensiva al autor en su carácter de tal", agregando "siempre que no se haya hecho o espuesto para encubrir el designo [designio] malicioso de ultrajar al autor o concitarse odio o desprecio", "Ley sobre abusos de libertad de imprenta", 16/9/46. Ello muestra que la introducción de la legislación republicana sobre la libertad de prensa modifica las prácticas sociales y culturales. Sobre este punto comparto totalmente la aproximación de Maza. Cf. Sarah Maza, *Private Lives and Public Affairs: The Causes Célèbres of Prerevolutionary* (1993).

[48] Cf. Juan María Correa Da Costa, *Viajes del coronel Da Costa a la California* (1850).

[49] Sobre esta cuestión, véase Bartolomé Clavero, *La grâce du don. Anthropologie catholique de l'économie moderne* (1991).

Con todo, la disputa por la opinión tiende a confundir este tipo de público con la opinión pública, y aunque se trata de dos registros diferentes, como se puede observar en el texto de Iñíguez, ellos tienden a amalgamarse ante todo porque se trata de dos nociones que, aunque conceptualmente diferentes, se dirigen a un mismo grupo social.

¿Quién es el público de tales escritos? El público de lectores que, aunque tiende a ampliarse, sigue reduciéndose al círculo de gente conocida, o que potencialmente llegue a serlo, lo que explica que pueda iniciarse un juicio de injuria al Dr. Barrington por denunciar la deuda impaga de M. N. Las iniciales bastan para que Máximo Navarrete se considere difamado —acaso porque el público era lo suficientemente reducido como para reconocerlo en ellas. El círculo puede ser más o menos grande, y ello depende en buena medida del soporte del texto. Cuando se trata de un anuncio o un artículo en la prensa periódica, nos encontramos frente al público del periódico que en esa época se reduce a un número relativamente escaso de suscriptores. Otras veces se trata de libelos publicados a cuenta de autor, algunos con puntos de venta, otros circulan entre los amigos o la parentela, siguiendo para ello, quizá, el circuito del cotilleo o el rumor. A veces se puede incluso recurrir al pasquín, pegado sobre un muro de la ciudad, como es el caso en el juicio de don José Antonio Palazuelos, que no duda en engrudar sobre el muro del café, en la esquina de la calle que da a la plaza central, un pasquín en que se trata de impostor al editor del diario *El Progreso*[50]. En este caso, la publicidad del asunto interpela al público de la comunidad urbana, que puede reducirse, cuando se trata de parroquias alejadas del centro de la ciudad, al de la comunidad de parroquia. Pero incluso en este último caso, en que el impreso se expone en un espacio público, en el sentido de que es accesible a todos, el público al que se apela parece mantenerse dentro del perímetro de lo que se considera 'gente decente'. La frontera de este círculo no pasa aquí exclusivamente por la veracidad y racionalidad del juicio, en oposición a una plebe dominada por los prejuicios, sino por la distinción entre conocido y anónimo que se superpone a la distinción entre hidalgo y villano.

Hemos citado ya el caso del escrito de Iñíguez, dirigido al público para defender su honor mancillado por sus cuñados, los hermanos Ovalle. En su escrito es posible percibir una clara fluctuación semántica en la utilización de la noción de 'público'. Según el contexto, se invoca al 'público' como tribunal supremo que se asocia al funcionamiento de la justicia, o

[50] Cf. juicio contra don José Antonio Palazuelos, seguido por don Rafael Vial por injurias; juez Álvarez (1843), *Archivo judicial de Santiago. Criminales*, legajo 1.624, año 1843.

a un 'público' cuyo fallo sobre la reputación merecida o no de un individuo o una familia se desea obtener mediante este tipo de escritos. Que este público, que podríamos traducir aquí como el de 'todo Santiago', tiene poco que ver con la Opinión pública lo confirma claramente Benjamín Vicuña Mackenna en un artículo destinado a responder a la acusación de injuria que le hiciera Rodríguez Aldea como consecuencia de la publicación de "El ostracismo de O'Higgins"[51]. Rodríguez Aldea declara en su acusación que Vicuña Mackenna "para llamar la atención del público se ha convertido en detractor de los hombres más eminentes de su país"[52]. B. Vicuña Mackenna refuta estas acusaciones en una larga carta publicada en *El Mercurio* en que se expresa así: "Dice Ud. que todo esto es hecho para 'llamar la atención del público'. ¡La atención del público! ¿Lo dice Ud. de buena fe? ¿Cree Ud. que el aplauso o la mordacidad de los corrillos, que es lo que en estas materias se llama público, vale tantas vigilias [...]?"[53] Como Iñíguez, Vicuña Mackenna va a oponer este público a la noción abstracta de Opinión pública, que en su caso se convierte en tribunal histórico. "Pero en resumen, sea que Ud. acuse mi obra al jurado o sea que entre Ud. en el campo más vasto de la discusión, yo confío mi derecho a la conciencia de mis ciudadanos sin que me arredre el que esta conciencia se llame 'jurado o opinión pública'" [54]. La interpelación de una opinión fundada en el ejercicio individual de la razón no le impide invocar al mismo tiempo a ese público de corrillos, al que dirige sus artículos de *El Mercurio*, para refutar las acusaciones de Rodríguez Aldea. Las razones de esta flagrante contradicción residen menos en supuestas aristas de su convicción republicana que en la dinámica propia de la sociedad chilena.

En efecto, los ejemplos aquí evocados muestran que, en estos asuntos de opinión, el impreso parece servir de soporte a las murmuraciones, inscribiéndose en la misma dinámica de la reputación que servía para regular las relaciones sociales en la sociedad de Antiguo Régimen. Podría encontrarse aquí una segunda razón que explique por qué las disputas sociales vienen a dirimirse en la esfera pública, provocando esa amalgama entre público de la contienda y Opinión pública.

---

[51] Una recopilación bastante completa de las piezas que constituyen este juicio se encuentra en *Colección de historiadores y de documentos relativos a la independencia de Chile*, Vol. 37, pp. 379-526.

[52] Cf. *El Mercurio* 25/02/1861, en ibídem, p. 380.

[53] Cf. *El Mercurio* 12/03/1861, en ibídem, p. 393.

[54] Cf. *El Mercurio*, Nº 10.062, martes 12/3/1861, p. 2, en ibídem, p. 395. Un análisis de este proceso desde una perspectiva historiográfica, en Allen Woll, *A Functional Past. The Uses of History in Nineteenth-Century Chile* (1982).

4. El jurado de imprenta como mecanismo de reestructuración de las jerarquías sociales

La literatura injuriosa tiene esta particularidad de que para existir necesita, más que cualquier otro discurso, de un público espectador, puesto que para que haya injuria se requiere un público-testigo. La legislación republicana introduce al respecto la novedad, a la cual ya hemos hecho referencia, de reglamentar la utilización injuriosa de la libertad de expresión, convirtiendo a ese público-testigo en público-juez, defensor de las libertades cívicas.

La cuestión de los jurados de imprenta no ha sido prácticamente tratada en Chile, a pesar de la importancia que ellos tienen para los estudios de la opinión pública[55]. ¿De qué se trata exactamente? ¿De una concepción excepcionalmente ampliada de los derechos políticos? La legislación permitiría suponerlo. La ley de prensa de 1820 instaura un tribunal de prensa compuesto por jueces de hecho y jueces de derecho. El juez de derecho es el juez de primera instancia, y los de hecho son ciudadanos sorteados entre una lista de 40 establecida por el cuerpo municipal. Respecto a las condiciones requeridas para integrar un jurado, la ley de 1828 estipula que es necesario gozar de derechos políticos, tener más de 25 años y disponer de una fuente de recursos[56]. Las exigencias no son lo suficientemente restrictivas como para no imaginar allí una interesante figura de participación política. Las certidumbres se eclipsan, sin embargo, cuando observamos el funcionamiento de dichos tribunales.

La primera pregunta que se impone es la de saber si se trata verdaderamente de un jurado popular. ¿Quiénes son los ciudadanos dignos de componer un tal jurado? ¿Cuáles los criterios que determinan la constitución de listas por la municipalidad? Para responder adecuadamente sería necesario hacer un estudio prosopográfico de los individuos que durante todo el período fueron seleccionados, que pusiera en evidencia las redes dentro de los cuales se inscriben estos individuos. Una lectura rápida de los nombres permite, sin aventurarse demasiado, afirmar que se trata de miembros de la elite chilena, que como los Mate, Barros, Márquez de la Plata, Sanfuentes, Vial, Silva Cienfuegos, Cobarrubias, Errázuris, etc., han sido

[55] Norma Mobarec Asfura trató esta cuestión, pero sólo desde un punto de vista legislativo. Cf. Norma Mobarec Asfura, "El procedimiento de los juicios de imprenta en Chile de 1813 a 1828" (1983), pp. 177-180.

[56] La ley de 1846 no modifica ni las condiciones ni el funcionamiento de los jurados, pero introduce penas más severas para los delitos de imprenta, que ahora dan lugar, en todos los casos, a penas de prisión.

escrupulosamente seleccionados por la municipalidad. La noción de 'ciudadano' a que hace referencia la ley aquí es claramente interpretada como antiguos 'vecinos'. Los notables o vecinos, presentes para defender uno de los principales derechos cívicos, deben emitir un juicio, sobre otros notables o vecinos —los juicios de imprenta por injuria conciernen casi estrictamente a la elite letrada—, que tiene consecuencias considerables en la buena reputación de las personas involucradas[57].

En la crónica de Carmona sobre el juicio de Vicuña Mackenna queda claramente explícito lo que está en juego en este particular tipo de tribunal: "Desde entonces este ruidoso asunto volvió a ponerse a la orden del día; los grandes intereses morales comprometidos por una y otra parte daban mayor pábulo a esa febril ansiedad con que el público se ocupaba siempre de todas aquellas cuestiones en que se juega la vida o el honor de personas de alta categoría, por su posición social o por sus antecedentes. Sin disputa alguna el gran prestigio de D. José Antonio Rodríguez Aldea vive todavía palpitante en la memoria de muchos de sus contemporáneos, y cualesquiera que sean las faltas de que se le acuse en el manejo de los negocios públicos, hay un gran número de personas, altamente caracterizadas, que no desearían ver eclipsado ese prestigio, porque acaso estuvieron ligados con él por los estrechos vínculos de la sangre y de la amistad, o sea simplemente por simpatías políticas"[58]. El poder de la opinión reina aquí, de modo notorio, sobre el prestigio social de las personas.

Planteado desde esta perspectiva, la 'opinión' adquiere una dimensión bien diferente de la habitualmente señalada. Se trata más que de una práctica que instaura un nuevo tipo de poder político de la sociedad, de un mecanismo que permite fundar sobre bases republicanas el principio del reconocimiento social de una jerarquía, cuyos fundamentos van contra los principios básicos de la república que se intenta instaurar. La hipótesis de este trabajo es que esos dos aspectos están profundamente imbricados, y que ello se explica por las características mismas del proceso de ruptura del vínculo colonial y la instauración de un régimen republicano representativo.

En efecto, los movimientos de independencia introducen una serie de novedades que suponen profundas rupturas con la sociedad colonial. Es el caso de la adopción, en sus primeras constituciones, del principio de

[57] De donde resulta que la participación en estos jurados, en ese frágil equilibrio social post-revolucionario, comporte un alto riesgo de conflicto que incita a los afortunados a intentar sortear tales responsabilidades. Las excusas reiteradas de los jurados en algunos casos espinosos permiten suponerlo.

[58] Cf. *El Mercurio*, 1/7/1861.

igualdad jurídica entre los individuos[59]. Aunque ello poco modifique las relaciones de poder —¿aún es necesario recordar que las revoluciones de independencia hispanoamericanas no fueron revoluciones sociales?—, a partir de entonces las elites republicanas ya no pueden fundamentar su autoridad social en un estatuto inspirado en privilegios jurídicamente sancionados. Lo que supone que ellas deban, para preservar su lugar en la sociedad, reconstruir las jerarquías sociales a partir del principio de derecho natural —de ahora en más ineludible—, y dar a esas jerarquías un fundamento representativo moderno. En otros términos, el problema que se presenta a las elites republicanas es el de garantizarse el lugar que ocupaban dentro de la antigua sociedad, en esta nueva en que faltan los dos elementos fundamentales de la arquitectura social colonial: el rey y el régimen de privilegios.

Desaparecido el rey y, junto a él, el principio a partir del cual se estructuraba la sociedad colonial, se plantea con vigor la cuestión de la redefinición de jerarquías sociales, puesto que el lugar que se pretende conservar ya no depende solamente del poder que uno encarna o del estatuto que se exhibe al público por medio de la vestimenta, de códigos de comportamiento, o de un lugar en la representación simbólica de las jerarquías sociales durante las ceremonias públicas. Si estas formas de poder y de 'público' no desaparecen con la independencia, las elites ya no pueden prescindir del reconocimiento público del lugar de preeminencia que ellas pretenden ocupar en el nuevo orden social. Ello podría explicar la particular importancia que adquiere la literatura injuriosa y el papel que cumplen los jurados en la reparación del honor. Los dictámenes de los pares simbolizan el grado de honor que se les reconoce, o inversamente del que se les excluye, que como vimos tiene incidencias directas en el mantenimiento de su fuente de poder económico. Pero la dificultad de asentar estos dictámenes en un orden estamental explica la fragilidad de estos espacios de preeminencia y el constante recurso a este tipo de público. Cierto, se me podría argüir que no se trata de una novedad ya que la sociedad colonial prestaba el mismo interés a la defensa del honor como mecanismo de control social y forma de reconocimiento social de un estatuto. Pero si en la sociedad colonial las elites buscan hacer reconocer públicamente los signos exteriores de una superioridad, en la sociedad republicana se trata de obte-

[59] Cierto, las primeras constituciones no suprimieron todos los privilegios, e incluso tardaron mucho tiempo en introducir uno de los principios fundamentales del constitucionalismo moderno: la libertad del individuo. La existencia jurídica de hombres no-libres va a persistir más allá de esas primeras constituciones y la realidad de la esclavitud no será erradicada de América Latina sino hacia fines del siglo XIX.

ner el reconocimiento público de un lugar de preeminencia, sin contar para ello con un fundamento jurídico. En un caso la defensa del honor es el beneficio de un estatuto social, mientras que en el otro ella podría ser la condición requerida para acceder o conservar una posición social de preeminencia[60].

* * *

De lo expuesto podemos concluir que la libertad de opinión que los poderes revolucionarios se apuran en decretar establece el principio de publicidad, del que la sociedad se apodera para resolver en la arena pública cuestiones de fama y honor. La libertad de prensa vincula así la esfera de la publicidad a la defensa del honor que apela a una noción de 'público' doblemente restrictiva: ella no facilita la separación entre público y privado e introduce un recorte sociológico a la noción de público. Cierto es que la figura de la 'opinión pública' también supone una definición sociocultural del público. Pero mientras que esta última permite la instauración de una noción moderna de representación —la exclusión de buena parte de la población de ese ejercicio público de la razón individual lleva a introducir la noción moderna de representación que transforma la opinión de los más sagaces en opinión pública—, el público de la injuria, para poder cumplir su función social, debe quedar necesariamente reducido al de la 'gente decente'. Ello explicaría la necesidad de recurrir a otras formas de representación política para garantizar la estabilidad política[61].

Bibliografía

Anguita, Ricardo. *Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta el 1 de agosto de 1912*. Tomo 1. Santiago: Imp. Lito Barcelona, 1912.

Annino, A.; Castro, Leiva, L.; y Guerra, F.-X. (editores). *De los imperios a las naciones: Iberoamérica*. Zaragoza: Ibercaja, 1994.

Archivo Judicial de Santiago. Criminales.

Arendt, Hannah. *Condition de l'homme moderne*. París: Calmann-Levy, 1961 [1958].

Baker, Keith Michael. *Au tribunal de l'opinion. Essais sur l'imaginaire politique au XVIIIème siècle*. París: Payot, 1993 [la primera edición inglesa es de 1990].

[60] Sobre el funcionamiento del honor en las sociedades de Antiguo Régimen, véanse John Peristiany (ed.), *El concepto de honor en la sociedad mediterránea* (1968); Julian Pitt-Rivers, *Antropologie de l'honneur* (1983); Julian Pitt-Rivers y John Peristiany (editores), *Honor y gracia* (1993).

[61] Sobre este asunto en Argentina, véase nuestro trabajo *Civilité et politique, aux origines de la nation argentine* (1999).

Brading, David A. "La monarquía católica". En A. Annino, L. Castro Leiva, y F.-X. Guerra (editores), *De los imperios a las naciones: Iberoamérica.* Zaragoza: Ibercaja, 1994.

Briseño, *Ramón. Estadística bibliográfica de la literatura chilena, 1812-1876.* Edición facsimilar de la príncipe de 1862, realizada por la Biblioteca Nacional, con los auspicios de la Comisión Nacional de Conmemoración del Centenario de Andrés Bello, Santiago de Chile, 1965, 3 tomos.

Chartier, Roger. *Les origines culturelles de la Révolution Française.* París: Ed. Seuil, 1990.

——— y Martin, Henri-Jean (editores). *Histoire de l'édition française.* Vol. II: *Le livre triomphant, 1660-1830.* París: Promodis, 1984.

Chaunu, Pierre. *Les temps des réformes. La crise de la chrétienté. L'éclatement 1250-1550.* París: Fayard, 1975.

Chiaramonte, José Carlos. *La Ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura laica durante el Virreinato*. Buenos Aires: Puntosur, 1989.

Clavero, Bartolomé. *La grâce du don. Anthropologie catholique de l'économie moderne.* París: Albin Michel, 1991.

Colección de historiadores y de documentos relativos a la independencia de Chile. Santiago: Imprenta Elzeviriana. Varios volúmenes.

Da Costa, Juan María Correa. *Viajes del coronel Da Costa a la California*. Santiago: Imp. del Progreso, 1850.

Delumeau, Jean. *Le catholicisme entre Luther et Voltaire*. París: PUF, Nouvelle Clio, 4ª edición revisada, 1992.

"Disposiciones relativas a la libertad de la prensa". En Ricardo Anguita, *Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta el 1 de agosto de 1912*. Tomo 1. Santiago: Imp. Lito Barcelona, 1912.

Egaña, Juan. "Plan de Gobierno". En *Colección de historiadores y de documentos relativos a la independencia de Chile*, Vol. 19. Santiago: Imprenta Elzeviriana.

——— *Memoria política sobre si conviene a Chile la libertad de culto*. Reimpresa y dedicada al futuro Congreso Nacional por algunos ciudadanos chilenos. Santiago: Imp. de la Independencia, julio 1825.

El Mercurio, 1/7/1861.

——— 25/02/1861; 12/03/1861; 12/3/1861. En *Colección de historiadores y documentos relativos a la independencia de Chile.* Vol. 37. Santiago: Imprenta Elzeviriana.

Farge, Arlette. *Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIII*e *siècle.* París: Seuil, 1992.

Furet, Ozouf. *Lire et écrire. L'alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry*. París: Les Editions de Minuit, 1977.

González Bernaldo de Quirós, Pilar. *Civilité et politique, aux origines de la nation argentine.* París: Ed. de la Sorbonne, 1999.

Goodman, Dena. "Public Sphere and Private Life: Toward a Synthesis of Current Historiographical Approaches to the Old Regime". *History and Theory*, Vol. 31, Nº 1 (1992).

Guerra, François-X. *Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas.* Madrid: Colección Mapfre, 1992.

——— "La formation des espaces publics en Amérique Latine - XIXe siècle". Seminario de doctorado 1995-1996.

——— "Revolución francesa y revolución hispánica". En Guerra, *Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas.* Madrid: Colección Mapfre, 1992.

Habermas, Jünger. *L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*. París: Payot, 1978 [primera edición francesa].

Halperin Donghi, Tulio. *Reforma y disolución de los imperios ibéricos.* Madrid: Alianza Editorial, 1985.

Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte* (1953). Ed. Guadarrama, 1979.

Herzog, Tamar. *La administración como un fenómeno social: La justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750)*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1995.

Iñíguez, Juan N. *Alegato presentado al juez de primera instancia por don Juan Nepomuceno Iñíguez en el pleito que sigue contra don Manuel, don Luis, don Agustin, don Pablo, don José María y don Sabino Ovalle, sobre nulidad o rescisión de una venta.* Santiago: Imprenta Nacional (1857).

Juicio de Imprenta contra Barrington, Guillermo. *Archivo Judicial de Santiago. Criminales*, legajo 1.589, año 1863.

Juicio de imprenta contra Iñíguez, Juan Napomuceno, por publicación de un folleto injurioso a don Manuel Ovalle y familia. *Archivo Judicial de Santiago. Criminales*, legajo 1.615, año 1858.

Juicio de imprenta contra Lagos, Agustín, por publicación injuriosa, seguido por Andrés Olivares. *Archivo Judicial de Santiago. Criminales*, legajo 1.616, año 1833.

Juicio de imprenta contra Nuñez, Jacinto, seguido por Sótero Gundián por publicaciones en la *Voz de Chile*. En *Archivo Judicial de Santiago. Criminales*, legajo 1.622, año 1862.

Juicio contra Palazuelos, José Antonio, seguido por don Rafael Vial por injurias. *Archivo Judicial de Santiago. Criminales*, legajo 1.624, año 1843.

Koseleck, Reinhart. *Le règne de la critique* (1959). Ed. de Minuit, 1979.

Ley sobre abusos de la libertad de Imprenta del 11/12/1828 y del 16/9/1846. En Ricardo Anguita, *Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta el 1 de agosto de 1912.* Tomo 1. Santiago: Imp. Lito Barcelona, 1912.

Madero, Marta. *Manos violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla y León (siglo XIII-XV)*. Madrid: Taurus, 1992.

Martin, Henri-Jean; y Chartier, Roger. *Histoire de l'édition française. Le livre conquérant. Du Moyen Age au milieu du XVIIe siècle.* Tomo I. París: Promodis, 1982.

Maza, Sarah. *Private Lives and Public Affairs: The Causes Célèbres of Prerevolutionary France*. University of California Press, 1993.

Medina, José Toribio. *Bibliografía de la imprenta en Santiago de Chile desde sus orígenes hasta febrero de 1817*. Santiago de Chile: Imp. del Autor, 1891.

Mobarec Asfura, Norma. "El procedimiento de los juicios de imprenta en Chile de 1813 a 1828". *Revista Chilena de Historia del Derecho,* N° 9 (1983), Santiago.

Moreno, M. "Prólogo" a Juan Jacobo Rousseau. J. J. Rousseau, *Del contrato social o principios del derecho político*. Buenos Aires: 1810.

Mornet, Daniel. *Les origines intellectuelles de la Révolution Française, 1715-1787.* París: Colin, 1967 [1933].

Moutoukias, Zacarias. "Réseaux personnels et autorité coloniale: Les négociants de Buenos Aires au XVIIIe siècle". *Annales E.S.C.* Nº 4-5 (julio-octubre 1992), París.

Ovalle, Manuel. *Alegato por parte de los herederos de doña Francisca de P. Urriola en su causa con don Juan N. Iñíguez.* Santiago: Imp. del Ferrocarril, 1857.

"Penas a los autores de publicaciones denigrantes", 9/11/1811. En Ricardo Anguita , *Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta el 1 de agosto de 1912*. Tomo 1. Santiago: Imp. Lito Barcelona, 1912.

Peristiany, John (ed.). *El concepto de honor en la sociedad mediterránea.* Barcelona: Ed. Labor, 1968 [Londres, 1965].

Pietshmann, Horst. "Los principios rectores de la organización estatal en las Indias". En A. Annino, L. Castro Leiva, y F.-X. Guerra (editores), *De los imperios a las naciones: Iberoamérica*. Zaragoza: Ibercaja, 1994.

Pitt-Rivers, Julian. *Antropologie de l'honneur*. París: Le Sycomore, 1983.

————; y Peristiany, John (editores). *Honor y gracia*. Madrid: Alianza Universidad, 1993.

Roche, Daniel. *Le siècle des Lumières en province***.** París: Mouton, 1978.

———— *Les républiques des lettres. Gens de culture et Lumières au XVIIIe siècle.* París: Fayard, 1988.

Serrailh, Jean. "Les sociétés économiques des amis du pays". En *L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIII siècle.* París: Librairie C. Klincksieck, 1964.

Shafer, Robert J. *The Economic Societies in the Spanish World 1763-1821*. Syracuse University Press, 1958.

Silva Castro, Raúl. *Prensa y periodismo en Chile, 1812-1956.* Santiago: Ed. Universidad de Chile, 1958.

Stuven, Ana María. "Sociabilidad chilena de Francisco Bilbao: Una revolución del saber y del poder". En *Formas de sociabilidad en Chile 1840-1940.* Santiago: Fundación Mario Góngora, 1992.

Tönnies, Ferdinand. *Comunidad y asociación*. Barcelona: Ediciones Península, Col. Homo Sociologicus, 1979 [1887].

Véliz, Claudio. *La tradición centralista de América Latina.* Princeton University Press, 1980; Barcelona: Ariel, 1984.

Woll, Allen. *A Functional Past. The Uses of History in Nineteenth-Century Chile.* Louisiana State University Press, 1982.

Zemon Davis, Nathalie. *Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France.* Stanford: Stanford University Press, 1987. □

UNA MIRADA A LA REFORMA CURRICULAR*

Bárbara Eyzaguirre

El gobierno chileno ha emprendido una reforma educacional, de acuerdo a su compromiso de mejorar la calidad de la educación y lograr una mayor equidad. Se trata de una reforma de carácter sistémico y por tanto de vastas proporciones. Esta conferencia se centra en una de las medidas emprendidas, la reforma curricular. Normalmente se aborda el tema analizando los contenidos de cada asignatura, sin embargo aquí se busca ir al trasfondo pedagógico que permea la propuesta. A partir de la identificación de las debilidades de la reforma curricular, se plantean para la discusión cinco medidas que potenciarían los cambios curriculares: dirigir el foco hacia el conocimiento generativo para evitar los riesgos de centrarse sólo en la enseñanza de procesos de pensamiento de orden superior y de dispersar las energías educativas hacia objetivos atractivos pero no centrales; destacar la importancia del esfuerzo como la clave para lograr el aprendizaje, entregándoles parte de la responsabilidad en el

BÁRBARA EYZAGUIRRE A. Sicóloga educacional especializada en desarrollo cognitivo, con experiencia en programas de mejoramiento de la calidad de la educación en sectores de escasos recursos. Fundadora y asesora pedagógica de la Escuela San Joaquín (Renca), perteneciente a la Fundación Marcelo Astoreca. Investigadora del Centro de Estudios Públicos.

* Versión revisada de la conferencia presentada el 12 de mayo de 1999 en el Seminario "La reforma curricular: Fundamentos y sentido", organizado por el Centro de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docentes, del Ministerio de Educación.

Estudios Públicos, 76 (primavera 1999).

proceso a los alumnos; respetar los principios mínimos del proceso de enseñanza-aprendizaje al introducir nuevas metodologías, no olvidando que la mayoría de las estrategias novedosas de enseñanza se desarrollaron en función de maximizar estos principios mínimos; presentar las nuevas teorías de enseñanza-aprendizaje con sus pros y contras para evitar dogmatismos empobrecedores; crear un Banco de Proyectos con el fin de que el mayor número de establecimientos pueda escoger los programas educacionales que mejor se ajusten a sus necesidades, dado que no existiría sólo una forma adecuada de abordar la enseñanza.

Las condiciones para mejorar la calidad de la educación en Chile son más favorables ahora de lo que han sido en generaciones. El gobierno ha puesto a la educación como su primera prioridad. Existe conciencia creciente de que ella es una de las herramientas que nos ayudarán a salir del subdesarrollo y mejorar las desigualdades de ingreso[1]. También es de conocimiento común que es necesario cambiar las diferencias significativas de calidad entre los establecimientos que atienden a los sectores de menores recursos y los más acomodados. A esto se agrega que no estamos solos en el mundo; hay una preocupación generalizada por la educación, por lo tanto tenemos con quienes aprender y de quienes hacerlo.

Aunque las deficiencias de nuestro sistema son profundas y múltiples, hay espacio para el optimismo. Tenemos la oportunidad de lograr una mejor educación para todos. Una educación que sea estimuladora y no martirizadora de los alumnos; una educación que sirva e ilumine sus vidas y no una que sólo permita obtener notas en los exámenes; una educación que logre una mejor calidad de convivencia entre las personas. Este optimismo se sustenta en el hecho de que, como lo demuestra la experiencia de los países asiáticos, esto se puede conseguir en un período razonable. Entre nuestras ventajas destacamos un sistema descentralizado y de subsidio a la demanda que permite la competencia y un fuerte compromiso del país y del Ministerio de Educación con el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación. Nuestro optimismo también se basa en que se ha emprendido una reforma de carácter sistémico que no se contenta con medidas simplistas, que no pretende imponerse verticalmente sino que busca movilizar a los actores del sistema, porque sabe que es una tarea gigantesca que requiere la creatividad y el concurso de todos.

[1] Véase Harald Beyer, "Educación y desigualdad de ingresos: Una nueva mirada" (1999).

La presente reforma a la educación comprende múltiples medidas, entre ellas la reforma curricular que abordará esta presentación. Antes de entrar en el tema, es necesario hacer, al menos, una enumeración de las restantes intervenciones al sistema para entender el contexto en el cual ésta se desarrolla y las dimensiones del esfuerzo realizado. Se ha emprendido: la extensión de la jornada horaria; el mejoramiento sustantivo de los salarios de los docentes; la dignificación de las salas de profesores; la implementación de bibliotecas de aula; la creación de centros de recursos de aprendizajes en cada escuela; la asignación de presupuesto para seleccionar materiales didácticos, incluidos libros y catálogos especialmente elaborados para este fin; la repartición de útiles escolares; la elaboración de materiales de apoyo y asesorías para escuelas de alto riesgo; la institución del premio de excelencia para las escuelas que han logrado los mayores avances en rendimiento; la implementación de computadores conectados a redes e internet para todos los liceos del país; el diseño del currículo acompañado de planes y programas nuevos; la entrega de más textos de estudio y una mejor distribución; el perfeccionamiento de supervisores y de profesores; becas de pasantías al extranjero para que los profesores amplíen sus conocimientos; apoyo a la creación de grupos de trabajo entre profesores en los colegios; concurso por fondos para financiar proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación elaborados por los propios establecimientos; el proyecto Montegrande que financia planes de mejoramientos de la calidad educativa en algunos liceos; programas de alumnos y jóvenes tutores; financiamiento de actividades de libre elección destinadas al uso constructivo del tiempo libre y para desarrollar espíritu de colegio; actualización del sistema nacional de medición de la calidad de educación, y otras que seguramente se me escapan. Medidas todas que implican la planificación, elaboración, seguimiento, coordinación y participación de miles de personas.

Todos estos avances podrían dar la sensación de que ya estamos llegando a la meta, sin embargo queda un largo camino. Las medidas implementadas sólo han sentado las bases para que el trabajo de mejoramiento de la calidad tome fuerza en las salas de clases.

A su vez, el tema de la reforma curricular que nos ocupa ahora plantea múltiples cambios. La idea de tener objetivos mínimos y contenidos fundamentales, junto con la libertad de formular programas de estudios, es en sí un cambio importante. La incorporación de los objetivos transversales también lo es, así como el cambio en la concepción de la enseñanza técnico profesional y el muy central cambio de enfoque tanto en los objetivos de la educación como en las metodologías propuestas. Todo esto implica una revisión de cómo se concibe el rol del profesor y su

perfeccionamiento, de los textos, las supervisiones, las evaluaciones nacionales, la participación de apoderados. Ésta es una reforma de carácter sistémico, por tanto cada una de las medidas emprendidas guarda relación con las otras. La presente reflexión no abordará, obviamente, la reforma curricular en toda su complejidad, se limitará a algunas apreciaciones sobre aspectos metodológicos y a los aprendizajes de carácter académico. Respetando sí la idea de que forman parte de un todo imbricado, especialmente con los objetivos transversales.

Comparto plenamente el diagnóstico de la reforma curricular que plantea la necesidad de: cambiar una educación en la que predomina un aprendizaje memorístico mecánico con baja retención, sin comprensión y sin posibilidades de utilizar lo aprendido; cambiar la idiosincrasia de los profesores de ser transmisores unidireccionales sin importar si hay reciprocidad entre lo que se pretende enseñar y lo que los alumnos están entendiendo; ampliar el restringido ámbito de estrategias educativas caracterizadas por el dictado de materia, ejercitación mecánica, lectura coral y no reflexionada del texto de estudio y la completación de cuestionarios que exigen respuestas literales; cambiar la visión que tienen los profesores de sí mismos como ejecutores de programas que han diseñado otros y en los cuales no es necesario su aporte profesional; cambiar la actitud pasiva de los alumnos frente al aprendizaje, de manera que perciban el papel que les cabe en su propio aprendizaje; asentar la idea de que el profesor tiene un rol activo en el desarrollo cognitivo de sus alumnos; subrayar la necesidad de que los profesores internalicen la idea de que al mismo tiempo que enseñan contenidos y destrezas están afectando el concepto que tienen de sí mismos los alumnos, así como sus afectos, actitudes y visión de mundo.

De la lectura del currículo —esto es, de los objetivos mínimos y contenidos fundamentales, y de los planes y programas— se deduce que se buscó responder a las necesidades antes descritas. Los objetivos especifican experiencias que deben ser logradas o requerimientos de saber. Los contenidos se enuncian como temas o materias de enseñanza y actividades, destacándose en éstas la dimensión conductual del alumno. “Con esto último se busca disminuir el sesgo instruccional y lectivo que adopta la enseñanza cuando sus contenidos se formulan exclusivamente como materias o temas de clases”[2]. Los temas elegidos buscan la cercanía con los intereses de los alumno de manera que el alumno pueda sentir que tiene algo que aportar y que juega un rol fundamental en su aprendizaje. Esta cercanía de

[2] Ministerio de Educación, *Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación básica chilena* (1996), p. 15.

los contenidos y el acento en las actividades persiguen lograr la motivación de los alumnos y a la vez una mejor asimilación. Se disminuyó substancialmente el número de contenidos no sólo porque debían ser mínimos, sino porque se quería responder a la necesidad de un tratamiento más extenso y activo de cada uno de ellos; no sólo enunciar sino que trabajarlos.

Esta nueva orientación pedagógica está claramente expresada en "La política de modernización de la enseñanza y objetivos fundamentales y contenidos mínimos" del Ministerio de Educación, al señalar que "el aprendizaje debe tener lugar en una nueva forma de trabajo pedagógico, que tiene por centro la actividad de los alumnos, sus características y conocimientos previos. Centrar el trabajo pedagógico en el aprendizaje más que en la enseñanza exige, adicionalmente, desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de un alumnado heterogéneo, y reorientar el trabajo escolar desde su forma actual, predominantemente lectiva, a una basada en actividades de exploración, búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, tanto individual como colaborativamente y en equipo. Por último, el aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de destrezas de orden superior (tales como descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de abstracción, etc.) a través del conocimiento y dominio de unos contenidos considerados esenciales para constituir el núcleo cultural común de las nuevas generaciones del país"[3].

Junto con estos cambios se incorporan los objetivos transversales que buscan fortalecer la formación ética de las personas, orientar el proceso de crecimiento y autoafirmación personal, y orientar la forma en que la persona se relaciona con otras personas y con el mundo.

La presente mirada a la reforma curricular propone para la discusión algunas medidas concretas que, a nuestro juicio, potenciarían esta reorientación pedagógica propuesta por el Ministerio de Educación. Éstas son:

- Dirigir el foco hacia el conocimiento generativo para evitar el riesgo tanto de focalizarse sólo en la enseñanza de procesos de pensamiento de orden superior como de dispersar las energías educativas hacia objetivos atractivos pero no centrales;
- Destacar la importancia del esfuerzo como la clave para lograr el aprendizaje, entregándoles a los alumnos parte de la responsabilidad en el proceso, y no adjudicándoles a los profesores toda la responsabilidad;

[3] Ibídem, p. 9, sección "La política de modernización de la enseñanza y objetivos fundamentales y contenidos mínimos".

- Respetar los principios mínimos del proceso de enseñanza-aprendizaje al introducir nuevas metodologías, no olvidando que la mayoría de las estrategias novedosas de enseñanza se desarrollaron en función de maximizar estos principios mínimos;
- Presentar las nuevas teorías de enseñanza-aprendizaje con sus pros y contras para evitar dogmatismos empobrecedores;
- Crear Bancos de Proyectos con el fin de que el mayor número de establecimientos pueda escoger los programas educacionales que mejor se ajusten a sus necesidades, dado que no existiría sólo una forma adecuada de abordar la enseñanza.

Dirigir el foco hacia el conocimiento generativo

Los cambios curriculares y objetivos propuestos en la reforma son muchos, atractivos y loables. Todos ellos deben mantenerse y desarrollarse, pero, a mi juicio, sería necesario establecer que el 'conocimiento generativo' es su foco imperativo. Con esta medida quedaría en claro que uno de los objetivos principales de la educación es que los alumnos adquieran las destrezas y conocimientos indispensables para desempeñarse en la sociedad, evitando así desbalancearse hacia otros objetivos que pueden ser importantes y necesarios pero no suficientes. David Perkins, codirector del Harvard Project Zero, uno de los más importantes centros norteamericanos de aprendizaje infantil, hace hincapié en este punto porque ha sido testigo de lo fácil que es diluirse entre tantos objetivos y no lograrlos[4]. Perkins fue uno de los iniciadores del movimiento de desarrollo cognitivo y tiene una amplia experiencia en reformas educativas a gran escala. Según él, las agendas educacionales suelen querer resolver, asignándoles la responsabilidad a los educadores, todos los problemas de la nación —de comportamiento cívico, de relaciones sociales, de afectividad, etc.—, además de los relativos a la adquisición de conocimientos y destrezas cognitivas. Perkins sostiene que esta dispersión de objetivos drena la energía de profesores, alumnos y administrativos:

> Al unísono con muchos otros en estos días, sostengo que es imperativo tener un foco. Porque, aunque queramos todo, ¿qué es lo que queremos más? […] Déjenme intentar una respuesta. Aquí está lo mínimo que queremos, tres objetivos vinculados a los más estrechos propósitos de la educación. Éstos son los objetivos que casi nadie discutiría:

[4] David Perkins, *Smart Schools: Better Thinking and Learning for Every Child* (1992), p. 56.

- Retención de conocimientos[5]
- Comprensión de conocimientos
- Uso activo de conocimientos.

> La frase resumen de estos objetivos sería 'conocimiento generativo', conocimiento que no sólo se queda sentado allí sino que funciona fructíferamente en la vida de las personas para ayudarlas a comprender y lidiar con el mundo. [Hay que] enfatizar que el conocimiento incluye datos, destrezas, saber cómo hacer, saber reflexionar, familiaridad con el problematizar como con el solucionar, el hacerse buenas preguntas como el dar buenas soluciones, etc. En lo que concierne a los contenidos, piensen en términos de las típicas materias de estudio, si ustedes quieren lectura, redacción, matemática, ciencias, historia, etc.
> ¡Ésta no es una agenda futurista! Estos objetivos no pretenden ser exóticos, ni alcanzar algo muy nuevo. Provienen directamente de la función central de la educación: pasar el conocimiento de una generación a la otra. Cualquier otra cosa que haga el colegio, si no sirve bien a estos objetivos, significa que éste no merece recibir el nombre de colegio[6].

En el contexto de la reforma educacional en Chile, la cita puede resultar inquietante por tres razones: por un lado, este énfasis en el conocimiento podría interpretarse como un enfoque academicista-tradicional de la educación que la propia reforma busca cambiar; por otra parte, dejaría afuera el desarrollo afectivo y moral, y, por último, no queda claro por qué el punto del conocimiento generativo tenga que acentuarse tanto. Intentaré dar respuesta a estas posibles inquietudes.

Coherencia del conocimiento generativo con el enfoque pedagógico de la reforma

Aparentemente se asimilaría el lograr conocimiento a un enfoque tradicional, sin embargo, es plenamente coherente con el cambio de enfoque propuesto por la reforma. El enfoque constructivista, que subyace a

[5] La retención de conocimientos debe distinguirse de la memorización mecánica de contenidos que da como resultado, por lo general, una retención feble y no integrada a las otras conceptualizaciones de la persona. Sin embargo, la retención de los aprendizajes es una de las metas de la educación que nadie puede discutir. Si aprender a aprender es un conocimiento, ciertamente estaremos de acuerdo que queremos retener ese aprendizaje. También se busca la retención de conceptos y vocabulario, lo mismo con la comprensión y adquisición de procedimientos. Igualmente importante resulta el retener los conocimientos metacognitivos. Para H. P. Bahrick, el valor de la educación depende crucialmente de la retención de información. Véase Bahrick, "Life Span of Knowledge" (1993), p. 62.

[6] David Perkins, *Smart Schools: Better Thinking and Learning for Every Child* (1992), p. 56.

ella, no contradice los objetivos educacionales de Perkins, ya que es una teoría que permite entender mejor cómo conceptualizan los niños y, en consecuencia, permite ayudarlos para que aprendan más y mejor. César Coll, propulsor de la reforma educacional española e importante teórico del constructivismo, afirma: "Después de largo tiempo denostados, por haber ejercido una hegemonía absoluta en la vertebración de la tarea educativa, los contenidos aparecen en la concepción constructivista como un elemento crucial para entender, articular, analizar e innovar la práctica docente"[7], y define educación como "el conjunto de actividades mediante las cuales el grupo asegura que sus miembros adquieran la experiencia social históricamente acumulada y culturalmente organizada"[8].

Otra fuente de contradicción podría estar en el hecho de que la reforma se propone lograr el desarrollo de destrezas de pensamiento superior y el 'aprender a aprender', por lo que podría haber una pugna entre enseñanza de contenidos y procesos de pensamiento. Sin embargo, ésta es una falsa dicotomía. Existe consenso en que el aprendizaje se logra 'cuando se *piensa* lo que se aprende'. Para Perkins: "El aprendizaje es consecuencia del pensamiento"[9]. En efecto, las corrientes de desarrollo cognitivo no se oponen al 'conocimiento generativo' y ni siquiera a una definición más estrecha de conocimiento. El peso de la educación escolar siempre estará en el dominio de las disciplinas, aun cuando todas las corrientes de desarrollo cognitivo sostengan que el desarrollo de los procesos superiores de pensamiento requiere atención directa en una proporción alta de los estudiantes.

Robert Swartz[10] distingue tres grandes enfoques en relación con el desarrollo del pensamiento. El primer enfoque postula la enseñanza directa de los procesos y funciones cognitivas, en sesiones separadas de las asignaturas regulares. Los contenidos, por consiguiente, deben ser conocidos y de bajo nivel de dificultad para que el foco esté en la reflexión sobre los procesos. El énfasis primordial, por ende, está en los procesos. Este enfoque se utiliza en intervenciones remediales o como método para refinar el pensamiento, y da lugar a programas altamente estructurados que requieren un sólido entrenamiento de los monitores. Exponentes de estos programas son, entre otros, los de Feuerstein y De Bono. Este enfoque no sostiene que el aprendizaje de contenidos tiene un segundo orden de importancia. Feuerstein, por ejemplo, en sus primeras incursiones planteó que los profe-

[7] César Coll *et al*., *El constructivismo en el aula* (1997), p. 17.

[8] César Coll, *Psicología y currículum* (1994), p. 28.

[9] David Perkins, *Smart Schools: Better Thinking and Learning for Every Child* (1992), p. 8.

[10] Robert Swartz, "Infusing the Teaching of Critical Thinking into Content Instruction" (1991).

sores deberían estimular las funciones cognitivas junto con la enseñanza de las materias. Como comprobó que no lograban hacer ninguna de las dos cosas bien, concluyó que debía elaborar un programa paralelo a la formación regular[11].

El segundo enfoque corresponde al llamado método infuso. Éste supone que los alumnos no tienen problemas con las operaciones mentales y, por lo tanto, adopta un enfoque explícito —pero no didáctico— de los procesos, y busca así refinarlos y activarlos junto con la enseñanza de las materias. Se basa en la premisa de que es más fácil lograr la transferencia de habilidades de pensamiento de un ámbito a otro cuando se aprende en los contextos en que se tendrán que utilizar los procesos que cuando se aprende en situaciones más artificiales. Es un enfoque que busca integrar enseñar a pensar con la instrucción académica regular. Tanto los procesos como los contenidos son importantes. Robert Swartz[12] y Robert J. Marzano[13] propician esta alternativa. A partir de una sistematización de la investigación sobre desarrollo cognitivo, Marzano propone un marco teórico que comprende cientos de funciones cognitivas que se podrían estimular durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas. Sostiene que "los teóricos cognitivos e investigadores piensan que la enseñanza de habilidades de pensamiento no pueden y no debieran enseñarse separadas de los contenidos porque los procesos están inseparablemente ligados a ellos". Para él, un currículo diseñado en base a las dimensiones del pensamiento debe tener como primer objetivo alcanzar altos niveles de conocimiento en los diversos ramos.

El tercer enfoque se centra en las disciplinas de estudio como formadoras y modeladoras del pensamiento. La idea es enseñar las disciplinas con toda la complejidad y rigor que éstas tienen, ya que cada una de ellas implica el desarrollo, refinamiento y organización del pensamiento. En este enfoque los contenidos son relevantes. Art Costa, en su libro *Developing Minds* (1990), reúne una serie de artículos que muestran cómo cada una de las asignaturas se puede entender como un programa de desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, ciencias no se concibe como una acumulación de datos sino como un conjunto interrelacionado de conocimientos, disposiciones, destrezas, actitudes. El modelo de Wellman, que aparece a continuación, nos muestra todos los aspectos que desarrolla un programa de ciencias completo:

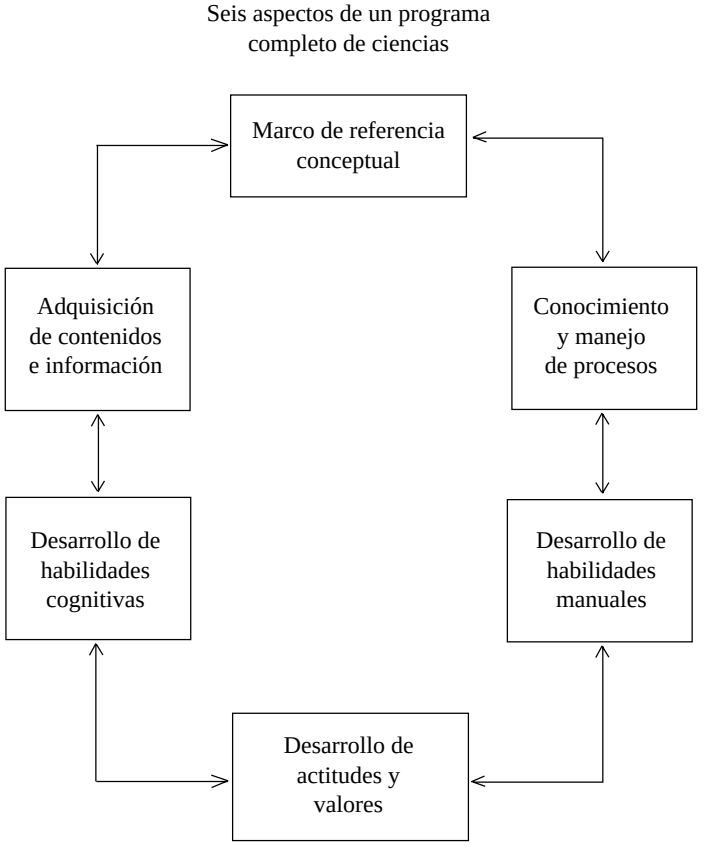
---

[11] Reuven Feuerstein, *Instrumental Enrichment: An Intervention Program for Cognitive* (1980).

[12] Véase Robert Swartz, *Infusing Learning in Content Classrooms* (1992).

[13] Véase Robert J. Marzano, *Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction* (1988), pp. 15, 130.

CUADRO: MODELO DE WELLMAN



Marco de referencia conceptual

Se refiere a la adquisición de conceptos claves que funcionan como principios organizadores que nos ayudan a tener una idea coherente de la realidad. Proveen la estructura para ir engarzando los distintos conocimientos. Son conceptos que aparecen transversalmente en todas las ciencias.

Se pueden enseñar en forma explícita, pero adquieren su dimensión en forma implícita pues se encuentran en una amplia gama de situaciones.

Ejemplos de conceptos claves

1. Causa y efecto
2. Cambio
3. Ciclo
4. Diversidad y continuidad
5. Interacción
6. Modelo
7. Organismos
8. Población
9. Patrón y simetría
10. Propiedad
11. Estructura/función
12. Sistema
13. Variable

Adquisición de contenidos e información

Los contenidos son los conocimientos actualizados sobre la ciencia. Son tan extensos que su selección es difícil y debiera hacerse en base a aquellos que sirven para iluminar los conceptos claves de la ciencia. Los contenidos hacen significativa la ciencia, en el sentido que nos aportan datos para entender y manejar el mundo.

Conocimiento y manejo de procesos

Se refiere a todas aquellas destrezas necesarias para hacer ciencia. Aquí se contemplan las habilidades de observar, comunicar, comparar y organizar.

1. *Observar*: mirar, palpar, oír, olfatear, gustar. Usar todos los sentidos a la vez en forma acuciosa.
2. *Comunicar*: describir, formular definiciones operacionales, registrar datos escritos y en tablas, dibujar, graficar, ilustrar, fotografiar, buscar en la literatura, hacer referencias.
3. *Comparar*: hacer comparaciones cualitativas, estimar, hacer comparaciones numéricas, medir, pesar, tomar el tiempo, tomar temperaturas.
4. *Organizar*: Seriar, secuenciar, clasificar, parear, agrupar.

Desarrollo de habilidades cognitivas

Pensar en forma crítica y adquirir destrezas para resolver problemas es la esencia de la ciencia y de un programa de instrucción efectivo. La ciencia gira en torno a preguntas, no a respuestas. Aprender a hacer buenas preguntas es central. Un buen programa también ayuda a los alumnos a basarse en las evidencias, más que en inferencias o 'en lo que se dice'.

1. *Planificación y diseño*: definir el problema, formular preguntas, predecir, identificar variables, diseñar procedimientos de observación, medición y experimentación.

2. *Recolección de información*: hacer observaciones cualitativas, cuantitativas, manipular aparatos de medición, registrar datos en diferentes modalidades.

3. *Comprender e interpretar información y datos*: visualizar, hacer modelos, interpretar datos, comprender conceptos, reconocer patrones, secuenciar en el tiempo, reconocer causas y efectos, etc.

4. *Aplicar, analizar, sintetizar y evaluar información y datos*: hacer predicciones y generalizaciones en base a los resultados, hacer analogías, inferencias, juzgar y evaluar, distinguir entre hecho y opinión, jerarquizar ideas de acuerdo a criterios, tomar decisiones, aplicar técnicas experimentales a nuevos problemas.

Desarrollo de disposiciones afectivas

La ciencia ayuda a formar una serie de actitudes y valores que afectan la manera en que el individuo se aproxima al mundo. Una educación científica consciente puede enseñar valores y creencias esenciales que pueden guiar a los individuos en su vida. Algunos de ellos son:

1. *Curiosidad y deseo de saber más*: comprender mejor es un objetivo importante en la enseñanza de la ciencia.

2. *Paciencia y autodisciplina*: aprender toma tiempo. El experimentar toma tiempo y enseña a mantenerse atento y concentrado.

3. *Actitudes frente a la manipulación de objetos*: cuidado y precisión en el trato con los materiales, organismos y equipos.

4. *Comodidad frente a la ambigüedad*: en la ciencia los resultados son siempre tentativos, aprender esto da prudencia, contribuye a una actitud crítica y estimula la formulación de problemas y nuevas preguntas.

5. *Cooperación*: la ciencia se funda en el intercambio y discusión de ideas, teoría y técnicas. Los conocimientos se fundan en las contribuciones de los otros.

6. *Honestidad*: los datos debieran ser registrados como son observados, no alterados para calzar con los preconceptos.

Destrezas manuales:

Las destrezas de manipulación se incluyen normalmente en el manejo de procesos científicos. Sin embargo, se categorizan en forma separada para enfatizar que las habilidades de manipulación contribuyen al conocimiento a través de la modalidad kinestésica. Por ejemplo, al medir con una regla los alumnos refinan su habilidad para observar en forma precisa. El manipular cables y hacer conexiones eléctricas ayuda a comprender cómo funciona la corriente en circuitos. La manipulación asegura también la concentración en el problema.

Fuente: Bruce Wellman, "Making Science Learning More Science Like" (1990), p. 159.

El modelo de Wellman nos muestra en detalle cómo una asignatura bien trabajada va más allá de la mera entrega de información. Booth, por ejemplo, concibe redacción como sinónimo de pensamiento[14]. De hecho, la literatura implica el desarrollo de la capacidad de hacer discriminaciones finas, de inferir, de establecer patrones y comparaciones, así como la capacidad de representación mental, de manejo de la ambigüedad, etc. Las matemáticas, por su parte, siempre se han considerado una herramienta poderosa para desarrollar el pensamiento lógico, y el énfasis en la resolución de problemas ha contribuido a focalizarse en el razonamiento[15]. Hoy, en efecto, se observa una preocupación por explicitar mejor las condiciones para que las asignaturas tengan un poder real de desarrollo del pensamiento.

Por su parte, L. B. Resnick también defiende la idea de enseñar a pensar con las disciplinas particulares. Sostiene que "definir problemas o identificar patrones, por ejemplo, puede ser simplemente imposible si los estudiantes no tienen un almacenaje de conocimientos sobre problemas similares o si no saben lo suficiente sobre el tema como para reconocer los patrones. Aun en las tareas utilizadas para evaluar inteligencia general o aptitudes académicas, los análisis recientes han demostrado claramente que mucho depende de los conocimientos específicos, de un vocabulario específico, de relaciones específicas, de posibles transformaciones y de diferentes representaciones"[16].

Los estudios de novicios y expertos comprueban, en las áreas de matemática y ciencias, que los expertos organizan sus conceptos en torno a ciertos conceptos claves que tienen como resultado una comprensión profunda de los principios operacionales básicos. Los novicios no tienen estos conceptos claves y la investigación demuestra que en muchos casos no se pueden enseñar directamente[17]. Estos conceptos claves son conocimientos que han cambiado gradualmente de estructura en el proceso de acumulación, llegando a ser mucho más sofisticados que una simple acumulación de datos, conceptos y principios[18]. Es decir, hay conceptos que permiten pensar mejor en una disciplina y que son fruto de años de aprendizaje. Un novato, por buenas estrategias generales de pensamiento que tenga, no podrá acceder a estos conceptos claves por vía directa.

---

[14] Véase C. Booth, "The Thinking/Writing Connection" (1991), p. 147.

[15] La exégesis de la Biblia y las matemáticas eran la base de la educación del pueblo judío, el que se ha caracterizado por un alto desarrollo cognitivo.

[16] L. B. Resnick, *Education and Learning* (1989).

[17] Robert J. Marzano cita a J. A. Larkin y G. Greeno en este punto. Véase Marzano, *Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction* (1988), p. 128.

[18] Robert J. Marzano cita aquí a Anderson y Smith. Véase Marzano, *Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction* (1988).

Dreyfus (1992)[19] y Breur (1993)[20], también en estudios de novicios y expertos, demuestran que la metacognición se utiliza sólo en las fases de aprendizaje, esto es, en la etapa de novicio. En la etapa experta, el individuo procede por reconocimiento de patrones; es decir, la experiencia en el tema es fundamental y no transferible a otras áreas. Demuestran que en esta segunda etapa el desempeño está más ligado a la experiencia que a la inteligencia (o estrategias generales de pensamiento). Esto indica que la enseñanza de las disciplinas específicas tienen importancia, porque no bastan sólo las estrategias generales para lograr un buen desempeño y, más aún, la familiaridad con una disciplina puede ayudar a compensar la falta de talento natural para ella.

Las teorías y las investigaciones de cómo interpretamos la información y cómo la organizamos en la memoria de largo plazo subrayan la importancia de contar con un cuerpo amplio de conocimientos generales. Las implicaciones de estos hallazgos tienen consecuencias directas para la educación: a los estudiantes se les debe entregar información sobre objetos, acontecimientos, situaciones, conceptos y convenciones que les permitan organizar las ideas[21].

Hirsch, en sus investigaciones sobre comprensión lectora, ha detectado el rol fundamental que desempeña la información en la interpretación de un texto. La lectura es una de las herramientas fundamentales para el aprendizaje independiente, lo mismo que el acceso al discurso hablado. Ambos están directamente relacionados con la capacidad de comprensión verbal. Por transitividad, entonces, los conocimientos generales están en directa relación con nuestra capacidad de aprender a aprender[22]. Hirsch acuña el término "capital cultural" para aludir a una cultura general que permitiría pensar y aprender más. Lo analoga al concepto económico de capital, que tiene relación con el 'efecto San Mateo', aludiendo a la parábola de los talentos cuyo corolario es 'quien tiene más, más recibirá'. Plantea que los alumnos de familias de niveles socioculturales desventajados no tienen la oportunidad de recibir una base cultural amplia en sus hogares, posibilidad que sí tienen los niños que viven en hogares más educados. Una educación que dé la oportunidad de aprender en forma sistemática la cultu-

[19] H. L. Dreyfus, "De Sócrates a los sistemas expertos: Los límites y peligros de la racionalidad calculatoria" (1992).

[20] J. T. Breur, *Schools for Thought: A Science of Learning in the Classroom* (1993), capítulo 3: "Intelligent Novices: Knowing How to Learn".

[21] Robert J. Marzano, *Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction* (1988).

[22] E. D. Hirsch, *Cultural Literacy: What Every American Needs to Know* (1988). Véase también E. D. Hirsch, "Enfoques para la educación del mañana" (1999).

ra general que posee un ciudadano medio, es decir aquella cultura que los medios de comunicación suponen que la mayoría tiene cuando redactan sus escritos, logrará una mayor equidad y ofrecerá a todos sus alumnos la posibilidad de acceder a las ventajas de una sociedad informatizada[23].

Se concluye, por lo tanto, que una adquisición sólida de conocimientos generativos no se contrapone con el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender y con la estimulación del pensamiento; por el contrario, son mutuamente complementarias. Según J. T. Breur: "La nueva síntesis sugiere que el conocimiento de dominios específicos, las destrezas metacognitivas y las estrategias generales son todos elementos de la inteligencia humana y del desempeño experto. [...] Para la educación, la implicancia más importante de esta teoría es que el cómo enseñamos es tan importante como el qué enseñamos"[24]. Es necesario, sin embargo, despertar sentimientos de cautela frente a un excesivo entusiasmo por los métodos decididamente orientados a desarrollar habilidades de pensamiento. Perkins sostiene que una de las razones por las cuales los programas de desarrollo de la inteligencia no han conquistado el mundo es porque rara vez han logrado un impacto dramático. "Los esfuerzos para enseñar inteligencia han sido exitosos, pero no de una manera dramática. Han mejorado algo la inteligencia, pero por lo general no han cambiado profundamente a las personas ni lo han hecho en el largo plazo […] Los alumnos han obtenido un aumento de unos pocos puntos en ciertas pruebas de habilidades de pensamiento, los puntajes en las pruebas de comprensión de lectura suben un poco, la resolución de problemas mejora algo, algunos conceptos de ciencia son mejor entendidos, las notas muestran una pequeña alza"[25]. Sin embargo se muestra optimista y piensa que: "Más allá del impacto acumulativo [de las investigaciones en el área], es posible que nuevas formas de estimular la inteligencia, mucho más poderosas, emergerán de las investigaciones por venir [...] La ciencia de la 'inteligencia aprendida' es joven todavía. Nuevas perspectivas están emergiendo e inspirando nuevos enfoques para la instrucción. El terreno, lejos de estar trazado y establecido, yace fecundo de posibilidades"[26]. Todos tenemos que estar conscientes de

[23] Ibídem. Véase también E. D. Hirsch, "Equidad y excelencia: Metas alcanzables en educación" (1999), p. 167.

[24] J. T. Breur, *Schools for Thought: A Science of Learning in the Classroom* (1993), p. 77.

[25] David Perkins, *Outsmarting IQ: The Emergence Science of Learning Intelligence* (1995), p. 335. Esta misma visión la encontramos en Bahrick, "Life Span of Knowledge" (1993), p. 62; J. Rich Harris, *The Nurture Assumption: Why Children Turn out the Way They Do* (1998), p. 260; y H. J. Eysenk, *Intelligence: A New Look* (1998), p.101.

[26] David Perkins, *Outsmarting IQ: The Emergence Science of Learning Intelligence* (1995), p. 210.

que cuando implementamos medidas para desarrollar el pensamiento estamos experimentando, ya que, como lo afirma Perkins, hasta ahora no hay un cuerpo sólido de conocimientos establecidos en esta área.

Feuerstein, por otro lado, advierte que la aplicación no rigurosa de programas para desarrollar las habilidades de pensamiento puede tener efectos contraproducentes. Relata la siguiente investigación realizada por su equipo: Se perfeccionó a un grupo de madres de niños de alto riego de aprendizaje en la metodología de la mediación, quienes la aplicarían a sus hijos para desarrollarles sus funciones cognitivas. Después de un tiempo se evaluó y se constató que los niños estaban peor que el grupo de control. Al investigar qué había sucedido, se comprobó que las madres no habían puesto en práctica las metodologías enseñadas porque no las habían comprendido bien y, lo que es peor, habían dejado de hacer lo poco que hacían antes de la intervención, porque indirectamente percibieron que su modo de educar era inadecuado. Esta experiencia nos debe alertar a todos para que la puesta en marcha de nuevas metodologías sean cuidadosas y, además, respetuosas de las prácticas docentes anteriores[27].

El foco en el conocimiento generativo no implica desatender el desarrollo afectivo y moral

La incorporación de los objetivos transversales al currículo permite pensar que habrá una atención más consciente y directa de los objetivos dirigidos a la formación afectiva y moral de los alumnos. La noción misma de transversalidad, esto es permear todas las asignaturas y actividades escolares con la enseñanza de estos objetivos, busca tener una mayor incidencia formativa que la mera enunciación de objetivos generales del antiguo programa. Las sugerencias de evaluaciones internas y las próximas evaluaciones externas de estos objetivos también contribuirán a su consecución. Comparto plenamente la idea de que es necesario que los establecimientos educacionales realicen una tarea más sistemática de formación y creo que los objetivos transversales ayudarán a operacionalizar la acción educativa. Por supuesto, una sólida formación afectiva y moral no se contradice con una sólida formación académica; es más, la favorece. Por ejemplo, las escuelas católicas en EE.UU. logran formar mejor a los jóvenes y a la vez obtienen rendimientos más altos que las escuelas públicas, las cuales incluso tienen presupuestos más elevados. Existe una relación positiva entre los

[27] Véase P. S. Klein, "Molar Assessment and Parental Intervention in Infancy and Early Childhood: New Evidence" (1991), p. 213.

ambientes que estimulan el crecimiento personal y las buenas relaciones interpersonales con el aprendizaje[28]. Y a la vez una sólida formación humanista y científica ayuda a formar afectiva y moralmente a los alumnos. En el modelo de Wellman sobre la enseñanza de ciencias, reproducido anteriormente, se aprecia la forma en que esta disciplina ayuda a la formación de una serie de valores como la honradez, tolerancia de la ambigüedad, el respeto por la vida, el asombro ante la creación, y de actitudes tales como la paciencia, el rigor y el cuidado de lo que está a cargo de uno. La literatura y la historia, al decir de Bennet, constituyen un rico filón de alfabetismo moral. Un compendio de grandes cuentos, poemas y ensayos tomados de la historia y de la literatura son para él la mejor manera de participar en un acto de renovación: "Introducimos a nuestros niños en un mundo común, un mundo de ideales compartidos, la comunidad de personas morales. En ese mundo común los invitamos a emprender la continua tarea de preservar esos principios, ideales y nociones de bondad y grandeza que consideramos tan valiosos"[29]. La buena literatura, además de enseñar moral y plantear los grandes dilemas humanos, nos alfabetiza sobre nuestras emociones y las del otro. Goleman sostiene que el conocer las propias emociones, el controlarlas, el ponerlas al servicio de una meta, el saber reconocer y sentir las emociones de los otros (empatía) y el saber manejar las emociones de los otros son habilidades esenciales para desenvolverse bien en la vida[30]. Las grandes obras nos abren a una gama enorme de sentimientos, emociones y motivaciones, con las infinitas sutilezas que éstas tienen. Si además de ofrecer a los alumnos la oportunidad de contactarse con ellas, éstas se discuten y se promueve la reflexión personal, se están sentando las bases para una mayor inteligencia emocional. El teatro, el arte, la música también nos contactan con el mundo de las emociones y debieran estudiarse con debida profundidad para ayudar a los alumnos a conocerse mejor a sí mismos y a los demás. La historia aporta innumerables biografías de las cuales aprender y reflexionar. Los deportes son una excelente oportunidad para enseñar a plantearse desafíos, para ejercitar la tolerancia de la frustración, para aprender a ganar, etc. El clima necesario para que el aprendizaje académico sea posible requiere el respeto de normas y ésta es una exigencia que contribuye a que los niños logren el dominio sobre sí mismos, aspecto central de la teoría de Goleman. Se puede concluir, entonces, que la excelencia académica, lejos de hacernos inhumanos, nos ayuda a ser mejores personas.

---

[28] R. Sylwester, *A Celebration of Neurons: An Educators Guide to the Human Brain* (1995), pp. 75-77.

[29] William J. Bennet, *El libro de las virtudes* (1995), pp. 16-17.

[30] D. Goleman, *Emotional Intelligence* (1996).

La necesidad de focalizarse hacia el conocimiento generativo

En un primer momento los eslóganes de la reforma tenían que dirigirse a cuestionar nuestra enseñanza mecánica y pasiva y a difundir la posibilidad de que se puede desarrollar el pensamiento y la capacidad de aprender a aprender. Eso despertó a la comunidad educativa, la estimuló y le mostró que el profesor juega un rol en la capacidad de razonar de los alumnos. Sin embargo, es necesario equilibrar estas nociones reforzando la necesidad de que los alumnos dominen las diferentes disciplinas con la profundidad que éstas tienen, dejar claro que desarrollar el pensamiento es incompatible con la ignorancia.

Cuando se inicia el movimiento de desarrollo cognitivo, por el año 1975, se empezaron a gestar grandes esperanzas de que al enseñar procesos o destrezas generales las personas podrían desempeñarse bien en una amplia gama de actividades independiente del contenido de éstas. Esto calzaba con la necesidad de contar con trabajadores más flexibles en una sociedad altamente cambiante. La idea de centrarse en los procesos generó la noción de que los contenidos no eran importantes, que eran un medio para lograr desarrollar las destrezas superiores de pensamiento. Hoy en día, como se expuso, pocos sostienen esta idea. Centrarnos en los conocimientos generativos nos permitirá, por consiguiente, tener una posición más balanceada al respecto.

También es necesario que los nuevos lineamientos metodológicos planteados por la reforma no se perciban sólo como objetivos en sí mismos. Así, el aprender a trabajar en equipo es una necesidad válida pero debe estar en función del aprendizaje de las disciplinas, lo mismo ocurre con el desarrollo de las destrezas cognitivas, con el motivar, con el participar activamente.

Asimismo es necesario considerar que todos tenemos la tendencia a evitar las tareas difíciles y la rutina. Lograr que los niños aprendan no es fácil y demanda mucho esfuerzo. Las propuestas de teatro, actividades de libre elección, red de enlaces, pueden ser una competencia desleal y desviar todos los esfuerzos hacia ellas si no hay conciencia de la necesidad de conciliarlas con el aprendizaje de las disciplinas académicas.

Por otra parte, refocalizarse hacia ‘el conocimiento generativo’ interesa para que las energías no se desvíen exclusivamente al desarrollo afectivo, aun cuando se perciba la urgencia en nuestra sociedad de una labor formativa profunda.

El sistema debiera dar una señal clara de las prioridades. El Ministerio de Educación debiera plantear objetivos de logro concretos como país. Por ejemplo, habría que implementar pruebas nacionales de evaluación,

referidas a criterio, con las cuales se pudiera establecer porcentajes nacionales esperados de logro. El criterio estaría definido por los objetivos mínimos y los contenidos fundamentales fijados para cada ciclo. Los porcentajes nacionales serían el reflejo de la distancia observada entre el nivel de aprendizaje esperado y el logrado. Nuestras actuales pruebas no entregan esta información directamente, ya que están diseñadas para obtener una amplia dispersión entre establecimientos. Son pruebas relativas para facilitar la discriminación por rendimiento. Por la manera en que están construidas, los promedios generales siempre debieran situarse cerca del 60% o los 250 puntos[31].

Otro ejemplo de metas que podríamos plantearnos como país es la de mejorar las probabilidades que tienen los jóvenes de colegios municipalizados y subvencionados de obtener puntajes que les permitan ingresar a la universidad. Según datos calculados por el Centro de Estudios Públicos, el 54% de los alumnos que obtiene sobre 700 puntos en la prueba de aptitud académica proviene de colegios particulares pagados. La falta de equidad del sistema es patente y el Ministerio debiera definir públicamente, como señal de lo que espera de los colegios, en cuánto quiere aumentar la probabilidad de los alumnos del sector subvencionado de estar en este grupo y en cuánto tiempo. La actual probabilidad de un alumno de colegio particular de obtener más de 700 puntos es de 1 cada 7 alumnos. Si está en un colegio particular subvencionado, la probabilidad cae a 1 por cada 47 y si estudia en un establecimiento municipalizado es de 1 por cada 71 alumnos. Si pensamos que las habilidades intelectuales se distribuyen según una curva normal, la probabilidad debiera estar cerca de 1 por cada 33 alumnos. ¿Cuánto nos queremos acercar a esta razón y en cuánto tiempo?

Definir metas claras contiene la noción implícita de que los establecimientos deben dar cuenta del logro de determinados aprendizajes. De este modo se evita el riesgo de autoevaluarse positivamente en base a criterios como las buenas intenciones, la cantidad de energía invertida y la calidad del clima escolar generado. La noción de 'dar cuenta' en base a objetivos que pueden ser evaluados externamente es considerada como una de las principales herramientas para mejorar la práctica educacional[32]. La siguiente anécdota ilustra el punto: cuando se inició el Colegio San Joaquín, hace diez años, en un sector de escasos recursos de la comuna de Renca, se aplicaron pruebas de diagnóstico al principio del año escolar. La rindieron

[31] Véase B. Eyzaguirre y L. Fontaine, "Qué nos dice el Simce de lenguaje y matemática de 1997" (1999).

[32] D. Koretz, *Using Student Assessment for Educational Accountability. Improving America's Schools: The Role of Incentives* (1996).

los niños de kinder a cuarto básico. Los rendimientos fueron extremadamente malos, el 25% de los niños en cuarto básico no sabía leer y el resto del curso lo hacía a nivel de primero y segundo básico. El proyecto contaba con profesoras con una fuerte vocación, con buenos textos de lectura inicial, biblioteca motivadora, materiales de trabajo para los niños, espíritu de colegio, trato respetuoso y cariñoso, buen clima laboral y trabajo arduo. Sin embargo, para sorpresa de todos, al final del año los niños de primero básico tenían un rendimiento similar, en lectura y matemática, que el de los niños que habían ingresado a segundo básico provenientes de colegios del sector, los cuales tenían menores recursos técnicos y económicos que el Colegio San Joaquín. La evaluación mostró claramente que no bastaba la dedicación y el aplicar metodologías teóricamente lógicas para lograr los objetivos previamente definidos. La Fundación que sostenía el proyecto contaba con evidencia previa de que había establecimientos con medios igualmente desventajados que lograban triplicar los niveles de aprendizaje obtenidos en ese primer año en el Colegio San Joaquín. Estos datos, unidos al marco conceptual de Feuerstein que sostiene que las habilidades cognitivas pueden desarrollarse, no permitieron que el colegio se resignase frente a estos magros aprendizajes[33]. Si no se cuenta con parámetros de comparación válidos con los cuales medirse, es fácil ir bajando el estándar de exigencia y centrarse en una educación más vocacional y paternalista. En la escuelas de sectores de bajos recursos sorprenden las bajas expectativas académicas que tienen los profesores y directivos de sus alumnos. La mayoría de las veces se definen a sí mismos como compensadores de las carencias afectivas de los alumnos más que como formadores intelectuales[34]. El esperar muy poco de los alumnos debe ser corregido, pues se sabe que las altas expectativas es una de las variables que inciden positivamente en el rendimiento[35].

El acento y el foco de la reforma curricular debieran dirigirse a compensar la falta de importancia que le damos al conocimiento. Debemos desterrar la noción de que si el alumno no va ir a la universidad no necesita redactar bien, ni saber matemáticas más allá de lo básico, etc. Se necesita

[33] Revertir esta situación implicó seleccionar metodologías más estructuradas, mejor secuenciadas, con una graduación más fina, con evaluaciones más seguidas para prevenir errores y corregir antes que se cristalicen las malas prácticas. El curso siguiente logró los objetivos esperados y en cuarto básico obtuvo sobre el 80% de logro en el Simce, porcentaje muy superior a los colegios del sector.

[34] Isabel Barreda *et al*., "Estudio diagnóstico de la realidad educacional de las escuelas municipalizadas de La Pintana" (1988).

[35] E. Himmel, N. Majluf y S. Maltes, "Efecto de política educacional en el rendimiento escolar en Chile" (1985).

una campaña del Ministerio de Educación, en los medios de comunicación y en las múltiples publicaciones que se envían a los colegios, que manifiesten que como país queremos que todos nuestros niños alcancen un alto nivel de manejo en matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y literatura, etc. Es necesario estudiar cómo hacerlo para que el mensaje no se distorsione y se entienda como una búsqueda de un aprendizaje mecánico y ritualista de contenidos. Es importante también señalar claramente que todos nuestros niños lo pueden lograr, proporcionando evidencia empírica de que esto es posible. Por ejemplo, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación muestra que en lenguaje y en matemáticas, en tercero y cuarto grado, los niños cubanos que tienen peor rendimiento lo hacen mejor que cerca del 50% de nuestros niños[36]. Si los niños de Cuba pueden, por qué los nuestros no. Otros ejemplos se pueden desprender del Tercer Estudio Internacional de Matemática y Ciencias (TIMSS) donde Singapur, con una amplia diversidad cultural y económica logra que sus alumnos de 4º y 8º básico con menor rendimiento superen a todos los de Colombia, Kuwait y Sudáfrica. Si se quisiera formar un grupo selecto con el 10% de los mejores alumnos de los 40 países participantes en el TIMSS, el 45% de los niños de Singapur lo integraría[37]. Esto significa que han logrado, en base a educación, alterar la distribución normal de habilidades. El caso de Singapur es válido, además, porque muestra un buen equilibrio educativo: no sólo exhibe buenos rendimientos, sino que una mayor proporción de alumnos manifiestan su agrado por la matemáticas en comparación a otros países, y logran buenos puntajes en las pruebas que exigen creatividad e iniciativa en ciencias y matemáticas.

Destacar la importancia del esfuerzo

En relación a la posibilidad de aprender, llegamos a otro tema que no ha recibido atención directa en la reforma. Se refiere al papel que le asignan profesores, apoderados y alumnos a la habilidad *versus* el esfuerzo en el aprendizaje. Los alumnos de Singapur, Japón y Corea, países que tienen excelente rendimiento, perciben que el esfuerzo es la clave para lograr el aprendizaje. Éste se entiende como horas de estudio independiente, insistir cuando no se encuentra la solución inmediata, buscar otros cami-

[36] Véase UNESCO, *Laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación: Primer estudio internacional comparativo* (1998), pp. 22-25.

[37] B. Eyzaguirre, "Políticas educacionales comparadas: Consideraciones a partir del Tercer Estudio Internacional de la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias (TIMSS)" (1999).

nos si el elegido no lleva a la comprensión, destinar tiempo para dar tutorías a los alumnos lentos. En cambio, Estados Unidos, con un rendimiento insuficiente, atribuye el éxito escolar a sus habilidades innatas. Los chilenos, al parecer, compartimos esa teoría de los norteamericanos. En el Colegio San Joaquín de Renca he constatado, al hablar con apoderados sobre el rendimiento deficiente de algunos alumnos, que las madres aceptan con naturalidad la hipótesis de que 'al niño no le da la cabeza para el estudio'. Esta idea tiene la siguiente variante entre muchos educadores de sectores desventajados: 'a estos niños no se les puede pedir más'. Perkins señala lo dañina que puede ser la tendencia de la mayoría de los alumnos norteamericanos, constatada por Dweck, de que si algo no se comprendió en los primeros diez minutos quiere decir que ya no lo comprenderá más. Asegura que incluso muchos alumnos brillantes hacen suya esta teoría porque carecen de estrategias para lidiar con situaciones difíciles. Esto es así porque los alumnos talentosos tienen pocas oportunidades en la enseñanza escolar de enfrentar tareas intelectualmente desafiantes, y por tanto no desarrollan el hábito del esfuerzo. Los japoneses, en cambio, creen que el aprendizaje es 'incremental', que hay que mantenerse y perseverar, ganándose el camino a la comprensión. Asimismo creen que para asimilar bien las materias y adquirir destrezas es indispensable practicar[38].

De la lectura de nuestros planes y programas de estudio para los dos primeros ciclos básicos, de la propuesta constructivista que aparece en el libro *El constructivismo en el aula,* de C. Coll, y de la teoría del aprendizaje significativo de C. Rogers, que representa los anhelos de la psicología humanista del aprendizaje, se desprende, de una forma u otra, que es necesario generar motivación intrínseca para que el aprendizaje y la dedicación se desplieguen con fuerza y sin la carga negativa que se asocia al esfuerzo. Con ello, se pretendería soslayar los componentes de frustración, de aridez, de postergación de la gratificación, de aburrimiento, que normalmente se asocian al esfuerzo. De algún modo, se piensa que la motivación dependería del tipo de tareas que se les presentan a los alumnos y se insinúa, sutilmente, que si el esfuerzo no está gatillado por la motivación intrínseca no se producirán aprendizajes de calidad.

Rogers, en efecto, se propuso reproducir en las situaciones de aprendizajes formales las características de los aprendizajes autoiniciados, en los que el individuo se autoplantea un problema con el fin de resolver una necesidad personal. La idea subyacente es que el individuo no necesita de

[38] David Perkins, *Smart Schools: Better Thinking and Learning for Every Child* (1992), pp. 121; William Stigler y James Stevenson, "¿Por qué los escolares de Asia Oriental tienen alto rendimiento académico?" (1999); Bárbara Eyzaguirre, "Políticas educacionales comparadas: Consideraciones a partir del Tercer Estudio Internacional de la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias (TIMSS)" (1999).

motivación externa para movilizarse, ya que naturalmente desplegará grandes cantidades de energía para dar con la solución que es en sí la recompensa. El mismo se autorregula y busca la autocorrección y, al final, lo aprendido difícilmente se olvida[39].

En el contexto del constructivismo, por otro lado, está el concepto de Entwistle sobre el 'enfoque profundo' y el 'enfoque superficial', referido a la manera en que los estudiantes abordan las tareas. El 'enfoque profundo' se caracteriza, según Entwistle, "por la intención de comprender, por una fuerte interacción con el contenido; por la relación de las nuevas ideas con el conocimiento anterior; por la relación de los conceptos con la experiencia cotidiana; por la relación de los datos con las conclusiones, y por un examen de la lógica de los argumentos". El 'enfoque superficial', en cambio, lo asocia a "la intención de cumplir con los requisitos de la tarea; a memorizar la información necesaria para pruebas o exámenes; a encarar la tarea como imposición externa; a la ausencia de reflexión acerca de propósitos o estrategias; a centrarse en elementos sueltos sin integración; a no distinguir principios a partir de ejemplos"[40]. Los alumnos se inclinarían por un tipo de enfoque u otro, se asevera, no por factores provenientes sólo del universo del alumno, sino que la propia situación de enseñanza jugaría un rol importante. Las tareas que estimularían un enfoque superficial serían aquellas en que los alumnos no conocen el propósito, en las cuales se favorece la dependencia y no la autonomía en la planificación de su trabajo, y las que ejercen una excesiva presión de tiempo; asimismo, también contribuirían a este enfoque la poca integración de las asignaturas, la ansiedad provocada por el temor a fracasar, y los procesos de evaluación de carácter cerrado que invitan a reproducir la materia con un mínimo de variaciones. Es decir, se le asigna al contexto de enseñanza una fuerte responsabilidad en la movilización de la energía del alumno.

Una revisión de las actividades sugeridas en los programas de estudio del Ministerio muestra que ellas están fuertemente orientadas a lograr la motivación intrínseca de los alumnos. Por ejemplo, buscan explícitamente la cercanía de los temas con los intereses de los alumnos, actividades de carácter lúdico, dejar a libre elección la lectura personal.

Es importante que los alumnos experimenten el placer que produce aprender y el sentirse capaces de obtener logros para que estén intrínsecamente dispuestos a comprometerse en nuevos aprendizajes. Sin embargo, hay que tener cuidado para que no se subentienda que es sólo responsabilidad del profesor el lograr que las actividades resulten intrínsecamente moti-

[39] C. R. Rogers, *Libertad y creatividad en la educación* (1977).
[40] N. Entwistle, *La comprensión del aprendizaje en el aula* (1998).

vantes y que, por ende, deben evitarse aquellas tareas que no deparan una recompensa inmediata. También hay que cuidar el no profundizar por querer mantener actividades que motivan fácilmente, o el no atreverse a enfrentar las barreras de los aprendizajes más difíciles, donde la gratificación es fruto de un trabajo más largo que supone tolerar la frustración y posponer la recompensa. Es cierto que los niños de corta edad tienen poca capacidad para posponer las gratificaciones y está bien respetar ese principio, pero es importante alargar gradualmente esos períodos con tareas progresivamente desafiantes.

La idea de situar las tareas que se les presentan a los alumnos en la 'zona de desarrollo próxima de Vygotski' recomienda considerar los conocimientos base de los alumnos para graduar los desafíos, de modo tal que el esfuerzo que se les pida tenga posibilidades de éxito. La idea de medir los desafíos es sensata, siempre y cuando no se entienda que lo 'próximo' es sólo lo familiar o lo fácilmente asequible. Los alumnos son capaces de dar grandes saltos. Los lugares comunes pueden ser tan frustrantes para los alumnos como los desafíos inalcanzables.

Formar hábitos de trabajo, promover la responsabilidad, vencer la flojera y la tendencia natural al mínimo esfuerzo, dar más de lo que se pide, practicar, hacer las cosas con precisión y rigor, no aparecen entre los objetivos transversales y sólo se los menciona esporádicamente en las sugerencias de actividades. El nuevo currículo francés sí lo hace. Entre sus objetivos transversales están los referidos a Métodos de Trabajo, y entre los del primer ciclo encontramos los siguientes: los alumnos deben aprender a fijar su atención, a concentrarse en una tarea, a realizar esfuerzos sostenidos, a buscar el esmero y la calidad en la presentación de un trabajo, a llevar a término un trabajo, a prever los materiales necesarios, a identificar, analizar y corregir sus errores con la ayuda de un adulto. En el segundo ciclo se insiste, en particular, en el esfuerzo y el rigor. En el tercer ciclo se espera que los alumnos hayan adquirido un método de trabajo, que sepan organizar su trabajo personal (por ejemplo, aprender una lección) y su tiempo y que sean capaces de presentar sus trabajos con rigor, precisión y claridad[41].

¿Cómo lograr poner el tema del esfuerzo y el rigor en la agenda de nuestros educadores, de los apoderados y de los alumnos, sin comunicar una visión que tenga todo el acento en el control externo y en las tareas sin sentido para los alumnos? El enfoque motivador del programa chileno y su búsqueda de actividades con sentido para los alumnos parece correcto si se

[41] Véase Ministère de L'éducation Nationale, Direction Des Écoles, *Programmes de l'école primaire* (1995), p. 90.

complementa con trabajos sistemáticos que busquen cumplir con los objetivos descritos en el programa francés. Lo difícil, sin embargo, será encontrar una estrategia comunicacional que pueda calar en nuestra idiosincrasia nacional respecto del esfuerzo y el rigor.

Respetar los principios mínimos del proceso de enseñanza-aprendizaje

En relación a los cambios metodológicos propuestos por el Ministerio, el acento se ha colocado en cambiar las prácticas eminentemente unidireccionales de los profesores, en ampliar el repertorio metodológico de los maestros y en presentar teorías hasta ahora poco difundidas en Chile. Las sugerencias de actividades de los programas del estudio del Ministerio plantean una variedad de acciones educativas que se salen de los marcos de las clases expositivas tradicionales. Muchas de ellas ayudan a la comprensión y construcción de conceptos; otras ayudan a la ejercitación no mecánica; otras favorecen la transferencia de conocimientos a otros campos; otras están dirigidas a vivenciar y a hacer significativas las materias; otras a visualizar las implicancias de ciertos conceptos; otras a reflexionar sobre los propios procesos cognitivos; otras a desarrollar la motivación por los temas o el sentido de ser competente y el sentido de pertenencia. Todo esto es necesario y sin duda enriquecerá la práctica educativa chilena. Sin embargo, los programas no presentan modelos de secuencias de aprendizajes organizadas y completas de conceptos o destrezas, quizás porque se suponen obvios. Perkins plantea que para que ocurran aprendizajes generativos y logren consolidarse es necesario cumplir, al menos, con los principios básicos de una buena práctica educativa. Los denomina teoría Nº 1, ya que existirían otras teorías más sofisticadas que corresponden a los números siguientes. Sin embargo, las teorías que buscan ir más allá de la Nº 1 también deben cumplir con estos principios básicos:

- *Información clara*. Descripción y ejemplos de los objetivos, de los conocimientos necesarios y los desempeños esperados.
- *Práctica reflexiva.* Oportunidades para que los alumnos se ocupen activa y reflexivamente en los distintos quehaceres: sumar números, resolver problemas con planteamientos verbales, escribir ensayos, etc.
- *Retroalimentación informativa.* Consejos claros y precisos para que el alumno mejore el rendimiento y pueda proceder de manera más eficaz.

- *Fuerte motivación intrínseca o extrínseca.* Actividades ampliamente recompensadas, sea porque son muy interesantes o atractivas en sí mismas o porque permiten obtener otros logros que le interesan al alumno[42].

Las propuestas metodológicas que suelen subrayarse en los documentos del Ministerio de Educación —como el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo, la necesidad de un aprendizaje más activo— son todas aproximaciones que permiten maximizar la teoría Nº 1, pero no la substituyen.

La información clara incluye las explicaciones y el monitoreo de la comprensión de los alumnos para despejar confusiones e incertidumbres. Las explicaciones implican actividades y experiencias que llevan a la comprensión de los conceptos; el modelado de destrezas y actitudes; la activación de los conocimientos que el niño posee, y la provisión de la información necesaria para acceder a la tarea. Incluyen información no sólo acerca de qué, sino de cuándo y cómo aplicar lo aprendido. Según Perkins: "Las explicaciones parecen tan esenciales al aprendizaje que uno podría pensar que las buenas explicaciones son habituales en la práctica docente"[43]. Sin embargo, las investigaciones demuestran que esto sucede con menos frecuencia de lo esperado y que a menudo las explicaciones no especifican bien qué se quiere que se aprenda, cómo hacerlo y cuándo aplicarlo[44]. En el estudio TIMSS, en el cual se filmaron horas de clases, se asoció buen rendimiento a la práctica de desarrollar los temas en contraposición a sólo enunciarlos. Japón, que tiene los mejores resultados, presenta un porcentaje significativamente mayor de lecciones donde se explican los temas; en Alemania y EE.UU., por otro lado, predominan las clases donde sólo se presentan las actividades a los alumnos y ellos tienen que realizarlas[45].

Una buena explicación, o el haber tenido acceso a comprender una materia, no basta para lograr que los alumnos retengan un concepto, lo comprendan con todas sus relaciones e implicancias y lo apliquen. Los alumnos necesitan practicar sus comprensiones iniciales y necesitan retroalimentación en su proceso de aprendizaje. Las prácticas deben ser dirigidas como en los entrenamientos deportivos, deben modelar paso a paso, ir corrigiendo inmediatamente, poner problemas que impugnen las concep-

---

[42] David Perkins, *Smart Schools: Better Thinking and Learning for Every Child* (1992), p. 47.

[43] Ibídem, p. 47.

[44] Ibídem, p. 47. Perkins se refiere aquí a las investigaciones de Roheler y Duffy.

[45] Véase B. Eyzaguirre, "Políticas educacionales comparadas: Consideraciones a partir del Tercer Estudio Internacional de la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias (TIMSS)" (1999).

ciones erradas, deben reflejar los aciertos y razonar los errores, deben plantear situaciones ligeramente diversas para generalizar los aprendizajes, deben exigir la integración con aprendizajes anteriores y la aplicación a situaciones actuales, deben presentar situaciones difíciles para poner a prueba los aprendizajes. La práctica independiente es un paso subsecuente que también implica retroalimentación. Los ensayos, la resolución de problemas, los debates, el enseñar y explicar a otros, el cambiar los modos de representación, el ejemplificar, el aplicar, las lecturas complementarias, el estudio para las pruebas, son todas oportunidades para practicar reflexivamente. Según Perkins, muchas veces no hay ninguna oportunidad de practicar los objetivos propuestos. Por ejemplo, en matemáticas, la resolución de problemas, que es un objetivo importante, muchas veces no está presente en los textos de estudio ni en las clases. La redacción, la expresión oral, la lectura dirigida para aprender a leer comprensivamente son prácticas poco frecuentes. En mi experiencia con escuelas de escasos recursos, siempre me ha llamado poderosamente la atención la poca ejercitación y trabajo que se exige a los niños en comparación con los colegios de sectores más acomodados.

La teoría Nº 1 busca la motivación intrínseca, pero no se circunscribe a ella; también hace uso de los incentivos externos. Esta medida, aunque no es ideal, es pragmática. Para la mayoría de los profesores es difícil motivar intrínsecamente a todos los alumnos cuando el grupo es grande, con diversidad de intereses, estilos y ritmos de aprendizaje. Esto hace que, por mucho que se varíen las actividades, siempre habrá alumnos que no se sientan atraídos por la tarea. Es entonces cuando el ascendiente del profesor tiene que actuar.

Este marco conceptual nos ayuda a ordenar el proceso de enseñanza-aprendizaje: si no se entrega información clara acerca de lo que se quiere que se aprenda, si no se practica lo propuesto, si no se entrega retroalimentación y si no se logra motivar, el aprendizaje tendrá pocas probabilidades de ocurrir. Tener esto en mente sirve para cerciorarse de que las actividades educativas tengan posibilidades de éxito. Todas las metodologías y estrategias de aprendizaje debieran cumplir con estos criterios. Por ejemplo, si nos proponemos que los niños aprendan el Principio de Arquímedes, no bastará con que ellos lo descubran en base a una situación experimental, aun cuando ésta sea una excelente instancia para construir el significado del concepto, es decir una buena oportunidad para obtener información clara. La situación de laboratorio y de trabajo grupal en que se puede haber realizado la experiencia motiva a muchos, pero otros necesitarán estimulación adicional para que no se distraigan. Al final de la experiencia se necesitará conceptualizar lo aprendido. Luego, es imprescindible la prácti-

ca, la cual implica resolver nuevos problemas donde se aplique lo aprendido; así los niños lograrán cristalizar el concepto y transferirlo a otras situaciones. Descubrir lo que es la densidad es difícil, ya que es un concepto relacional que requiere abstracción, por lo tanto los alumnos necesitarán retroalimentación constante del profesor para ajustar sus concepciones.

Las actividades propuestas en los actuales programas de estudio son en general creativas y variadas. Sin embargo, se necesita que los profesores las inscriban dentro de secuencias de aprendizajes como las descritas y no como actividades sueltas y sin ilación. El activismo sin objetivos claros y sistematicidad no son caminos propicios según lo que se desprende de la teoría de aprendizaje Nº 1 de Perkins.

Perkins concluye que: "La moraleja debiera estar clara. Está bien ir más allá de la Teoría Nº 1, pero muchos de los esfuerzos en el espíritu del constructivismo, el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo, el aprendizaje contextualizado, o cualquiera otra aproximación, tienden a que se pierdan en el torbellino los principios básicos de la teoría Nº 1. Los principios básicos no se cuidan por sí mismos. Necesitan la celosa atención de los profesores, sea cual fuere el plan mayor"[46].

Presentación de teorías de enseñanza-aprendizajes con sus pros y contras

Los manuales para grupos profesionales de trabajo elaborados por el Ministerio de Educación tienen un excelente enfoque para el perfeccionamiento. En ellos se entregan las herramientas para que las reuniones de profesores puedan constituirse en instancia de aprendizaje pedagógico y de reflexión. Se proponen temas de reflexión y se ofrecen lecturas complementarias. Por ejemplo, pautas para activar esquemas mentales, artículos sobre las inteligencias múltiples de Gardner o acerca de los mapas conceptuales de Novak. Es una contribución importante abrir el horizonte y propiciar el desarrollo profesional. Sin embargo, se echa de menos información crítica de estas teorías y estrategias: cuáles son sus limitaciones, si tienen detractores, en qué situaciones funcionan bien, bajo qué condiciones, si están en etapa teórica o existen experiencias prácticas, si desplazan prácticas corrientes o las complementan. Profesionalizarse implica manejar mucha información e integrar información contradictoria. De lo contrario se

[46] David Perkins, *Smart Schools: Better Thinking and Learning for Every Child* (1992), p. 69.

puede caer en dogmatismos empobrecedores. Esta aseveración no le quita mérito a esta enriquecedora iniciativa sino que propone complementarla con instancias donde se dé un contrapunto.

Banco de programas de estudio

Los objetivos mínimos y contenidos fundamentales establecidos por el Ministerio fueron fruto de un largo proceso de elaboración, consultas y ajustes. Sobre los objetivos definidos para cada disciplina se podrán establecer culturas y alabanzas[47] pero, en términos generales, proporcionan un marco lo suficientemente flexible y abierto como para desarrollar buenos programas de estudio. A la vez, los planes y programas hasta ahora propuestos por el Ministerio marcan un nuevo rumbo educativo y sugieren un conjunto amplio de actividades. Son de carácter general, ya que tienen que ajustarse a la realidad de cerca de 8.150 escuelas que no han elaborado programas propios. A la fecha, de hecho, sólo se han presentado, y aprobado, cerca de 600 programas especiales.

La introducción en la educación nacional del principio de autonomía curricular posibilita a los establecimientos definir planes y programas propios e impartir así una enseñanza más significativa a diferentes poblaciones estudiantiles. También permite que cada comunidad ajuste su proyecto educativo a sus concepciones de vida y a las finalidades que le asigna a la enseñanza, así como permite considerar las diferencias en el desarrollo profesional de los profesores, la acumulación de conocimientos pedagógicos de la institución, los niveles de conocimientos de entrada de los alumnos, y otros. Ésta es una oportunidad que, por cierto, más establecimientos podrían utilizar.

Para una escuela cualquiera no resulta fácil elaborar planes y programas: se necesita tiempo, conocimientos, asesorías de expertos, coordinación entre departamentos. Sin embargo, muchos se beneficiarían con programas más específicos, aun cuando no fuesen aplicables a todo el país. Por ejemplo: programas que especificaran lecturas o programas de ciencias que tuvieran un fuerte acento en el uso del laboratorio, o programas envasados como el de Matemáticas Aplicadas, de Cord, o que tuvieran un énfasis más fuerte en historia universal, etc. Hay colegios que necesitan

[47] Para una revisión de los objetivos mínimos y contenidos fundamentales de lenguaje y geografía, véase L. Fontaine, "La asignatura de lenguaje vista en programas extranjeros estatales y privados" (1998), y B. Eyzaguirre, "Revisión de currículos de geografía nacionales y extranjeros" (1998).

programas más avanzados y otros que necesitan programas muy básicos y detallados para profesores con menos experiencia laboral.

Para los profesores de educación básica que deben enseñar varias asignaturas, las secuencias estructuradas de aprendizaje pueden ser de gran ayuda. Esto es, programas que les marquen el nivel de profundidad de cada materia, definan las secuencias de aprendizaje, seleccionen el número de actividades, determinen la proporción de tiempo a cada tema, entreguen los objetivos de logro traducidos en evaluaciones concretas.

La idea del Banco de Proyectos planteada por Harald Beyer y Eugenio Cáceres sería una solución para aquellos que quieren programas más específicos y que no pueden confeccionarlos[48]. En otros países, la oferta de programas educativos envasados está más avanzada que en Chile. En Japón, por ejemplo, Stigler y Stevenson relatan que una práctica común es compartir y utilizar lecciones probadas y bien diseñadas. Los profesores las adaptan extendiéndolas y refinándolas. Hay conciencia de que los profesores con experiencia pueden ayudar a los que tienen menos y que los aciertos se pueden traspasar[49]. En Estados Unidos existe un conjunto enorme de currículos y de programas elaborados por fundaciones o con fines comerciales.

Por otra parte, es un hecho que no hay un alto grado de consenso en lo que se considera buena pedagogía. Por lo tanto, es de esperar que existan distintas visiones de cómo y cuánto más se debe enseñar, las cuales debieran plasmarse en programas diversos. La explosión de conocimientos relacionados con la educación provenientes de la investigación en educación, psicología, neurobiología, sociología, microeconomía es impresionante. Pero, según Gallagher (1993), no se ha puesto tanto énfasis en transferir estos conocimientos a las situaciones escolares y no se han hecho esfuerzos importantes de síntesis. Programas particulares pueden integrar años de experiencia con hallazgos recientes de una manera que resulten consistentes y no una colección inorgánica de novedades.

El Ministerio está elaborando un catastro de los programas aprobados y ha consultado a los colegios si están dispuestos a compartir sus programas con otros establecimientos que los quieran adoptar. Pocos han aceptado. Quizás se podrían adoptar medidas para incentivar la producción de programas alternativos y también para que las instituciones que ya los han elaborado los ofrezcan a otros colegios. El Ministerio podría financiar

---

[48] Harald Beyer y Eugenio Cáceres, "Una propuesta para el debate educacional" (1992).

[49] W. Stigler y J. Stevenson, "¿Por qué los escolares de Asia Oriental tienen alto rendimiento académico?" (1999).

la impresión de los mismos y distribuir a los colegios una descripción de los programas existentes, consignándose los resultados académicos que han obtenido las instituciones que los han elaborado o la formación académica de los autores. No necesariamente tendrían que ser programas completos, podrían abarcar sólo una área de estudio o ciclos determinados. Los colegios los podrían adoptar tal cual o adaptar partes para elaborar sus propios programas.

Es posible que muchos colegios se podrían beneficiar con los programas de enseñanza personalizada del Colegio San Ignacio, o con el programa de matemáticas del Instituto Nacional, o con el detallado programa de guías de estudio desarrollado por Raúl Leiva para el Liceo de Licantén y el exitoso Colegio Arauco, o con los estudiados programas de la Fundación Barnechea especializados en colegios de sectores de escasos recursos, o también con programas más circunscritos como los de ciencia, de CREA, desarrollados por Sergio Hojman y Alicia Hoffman.

Los textos de estudio contribuyen en gran medida a especificar el currículo, por lo tanto también debieran ofrecerse distintas alternativas que reflejaran diferencias de enfoques y necesidades. Sería recomendable que el Ministerio acogiera la proposición de Beyer de licitar una mayor variedad de textos por cada curso, aprovechando que las economías de escalas funcionan desde los 50.000 ejemplares, lo que permitiría ofrecer al menos cinco variaciones por cada año de enseñanza básica. Una solución más radical, planteada en ese mismo estudio, sería la implementación de un bono que permitiera a los padres o al establecimiento elegir libremente el texto de estudio que estimaran conveniente[50].

La actual reforma educacional ofrece una oportunidad única para lograr una sociedad más equitativa y una mejor calidad de vida para todos. Se han propuesto cinco puntos que quizás pueden potenciarla: focalizarse hacia el conocimiento generativo, destacar la importancia del esfuerzo, respetar los principios mínimos del proceso de enseñanza-aprendizaje, presentar a los profesores las nuevas técnicas educativas con sus pros y contras, crear un banco de programas de estudio y diversificar la ofertas de textos escolares. Esperamos que su discusión se constituya en un aporte.

[50] Véase Beyer *et al*., "Un nuevo sistema de licitación de textos escolares" (1997), pp. 415-451.

BIBLIOGRAFÍA

Bahrick, H. P. "Life Span of Knowledge". En A. Louis Penner, M. George Batche y Howard M. Knoff (eds.), *The Challenge in Mathematics and Science Education: Psychology's Response.* Washington, D.C.: APA, 1993.

Barreda, Isabel; Eyzaguirre, Bárbara; Traverso, Angélica, *et al*. "Estudio diagnóstico de la realidad educacional de las escuelas municipalizadas de La Pintana". Documento Ilustre Municipalidad de La Pintana, 1988.

Bennet, William J. *El libro de las virtudes*. Buenos Aires: Vergara Editores, 1995.

Beyer, Harald. "Educación y desigualdad de ingresos: Una nueva mirada". *Documento de Trabajo* Nº 297, Centro de Estudios Públicos, Santiago, 1999.

———— *et al*. "Un nuevo sistema de licitación de textos escolares". En Bárbara Eyzaguirre y Loreto Fontaine (ed.), *El futuro en riesgo: Nuestros textos escolares*. Santiago: Centro de Estudios Públicos, 1997.

———— Cáceres, Eugenio. "Una propuesta para el debate educacional". *Punto de Referencia* Nº 96, Centro de Estudios Públicos (mayo 1992).

Booth, C. "The Thinking/Writing Connection". En Art Costa (compilador), *Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking*. Virginia: ASCP, 1991.

Breur, John. T. *Schools for Thought: A Science of Learning in the Classroom.* Cambridge: The MIT Press, 1993.

Bruce, Wellam. "Making Science Learning More Sience Like". En A. Costa (compilador), *Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking*. Virginia: ASCP, 1991.

Centro de Estudios Públicos. "Estudio Nacional de Opinión Pública Nº 5. Tema Especial: Educación en Chile: ¿Qué piensan los padres?". *Documento de Trabajo* Nº 268, Centro de Estudios Públicos, Santiago, 1997.

Coll, César; *et al*. *El constructivismo en el aula*. Barcelona: Grao, 1997.

———— *Psicología y currículum.* Buenos Aires: Paidos, 1994.

Costa, Art (compilador). *Developing Minds. A Resource Book for Teaching and Thinking.* Virginia: ASCD, 1990.

Cox, Cristián. "El proceso de cambio curricular en educación media". Ministerio de Educación, Santiago, sin fecha.

———— y Schiefelbein, Ernesto; *et al*. *Calidad y equidad de la educación media en Chile: Rezagos estructurales y criterios emergentes.* Santiago: CEPAL, 1995.

———— "Las políticas de los noventa para el sistema escolar". *Educación y Cultura* Nº 33, FLACSO, Santiago, 1993.

———— "Sociedad y conocimiento en los 90: Puntos para una agenda sobre currículum del sistema escolar". *Educación y Cultura* Nº 11, Flacso, Santiago, 1991.

Dreyfus, H. L. "De Sócrates a los sistemas expertos: Los límites y peligros de la racionalidad calculatoria". *Estudios Públicos*, 46 (1992).

Entwistle, N. *La comprensión del aprendizaje en el aula*. Madrid: Paidos, 1988.

Eysenk, Hans J. *Intelligence: A New Look.* Nueva Jersey: Transaction Publishers, 1998.

Eyzaguirre, Bárbara; y Fontaine, Loreto. "Qué nos dice el SIMCE de lenguaje y matemática de 1997". Documento de Trabajo, Centro de Estudios Públicos, 1999, en prensa.

———— "Políticas Educacionales Comparadas: Consideraciones a partir del Tercer Estudio Internacional de la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias (TIMSS)". *Estudios Públicos*, 73 (1999).

———. "Revisión de currículos de geografía nacionales y extranjeros". *Documento de Trabajo* Nº 286, Centro de Estudios Públicos, 1998.

——— y Fontaine, Loreto (eds.). *El futuro en riesgo: Nuestros textos escolares.* Santiago: Centro de Estudios Públicos, 1997.

Feuerstein, Reuven; Klein, Phina S.; y Tannenbaum, A. J. *Mediated Learning Experience (MLE): Theoretical. Psychosocial and Learning Implications.* Londres: Freund Publishing House, 1991.

——— *Instrumental Enrichment: An Intervention Program for Cognitive Modifiability*. Illinois: Scott Foresman, 1980.

Fontaine, Loreto. "La asignatura de lenguaje vista en programas extranjeros estatales y privados". *Documento de Trabajo* Nº 285, Centro de Estudios Públicos, 1998.

Goleman, David. *Emotional Intelligence.* Londres: Bloomsberry, 1996.

Himmel, Érika; Majluf, Nicolás; y Maltes, Sergio. "Efecto de política educacional en el rendimiento escolar en Chile". Documento Nº 56, Pontificia Universidad Católica de Chile, diciembre 1985.

Hirsch, E. D. "Enfoques para la educación del mañana". *Estudios Públicos* Nº 75 (invierno 1999).

——— "Equidad y excelencia: Metas alcanzables en educación". *Estudios Públicos* Nº 73 (verano 1999).

——— *Cultural Literacy: What Every American Needs to Know*. Nueva York: Vintage Books, 1988.

Klein, Phina. S. "Molar Assessment and Parental Intervention in Infancy and Early Childhood: New Evidence". En Reuven Feuerstein, Phina S. Klein y A. J. Tannenbaum, *Mediated Learning Experience (MLE): Theoretical. Psychosocial and Learning Implications.* Londres: Freund Publishing House, 1991.

Koretz, D. *Using Student Assessment for Educational Accountability. Improving America's Schools: The Role of Incentives.* Washington, DC: National Academy Press, 1996.

Marzano, Robert J. *Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction.* Virginia: ASCD, 1988.

Ministère de l'Éducation Nationale, Direction Des Écoles. *Programmes de l'école primaire.* París: Centre National de Documentation Pédagogique, 1995.

Ministerio de Educación. *Están haciendo historia: Programa de mejoramiento de la calidad de la educación media.* Santiago: Ministerio de Educación, 1998.

——— *Resultados SIMCE. Octavos años, 1997. Matemáticas.* Santiago: Ministerio de Educación, 1998.

——— "Planes y programas de estudio para el tercer y cuarto año de enseñanza básica". *Revista de Educación*, Ministerio de Educación, Santiago, 1997.

——— *MECE: Fortaleciendo la práctica en el aula: Elaboración curricular y evaluación. Manual para grupos profesionales de trabajo.* Santiago: Ministerio de Educación, 1997.

——— *Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación básica chilena.* Santiago: Ministerio de Educación, 1996.

——— *Mejorando el aprendizaje de nuestros alumnos: Manual para grupos profesionales de trabajo.* Santiago: Ministerio de Educación, 1996.

——— "Planes y programas de estudio para el primer y segundo año de enseñanza básica". *Revista de Educación*, Ministerio de Educación, Santiago, 1996.

Novak, J. D.; y Gowin, D. B. *Aprendiendo a aprender.* Barcelona: Martínez Roca S.A, 1988.

Perkins, David. *Outsmarting IQ: The Emergence Science of Learning Intelligence*. Nueva York: Free Press, 1995.

———— *Smart Schools: Better Thinking and Learning for Every Child.* Nueva York: Free Press, 1992. [En castellano, *La escuela inteligente: Del adiestramiento de la memoria a la educación de la mente.* Traducción de Gabriela Ventureira. (Barcelona: Editorial Gedisa S.A., 1997).]

Resnick, L. B. *Education and Learning*. Pittsburg: Pittsburg University, 1989.

Rich Harris, Judith. *The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the Way They Do.* Londres: Bloomsbury, 1998.

Rogers, Carl R. *Libertad y creatividad en la educación*. Buenos Aires: Paidos, 1977.

Stigler, William; y Stevenson, James. "¿Por qué los escolares de Asia Oriental tienen alto rendimiento académico?" *Estudios Públicos* Nº 76 (primavera 1999). [Esta publicación recoge los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Stigler y Stevenson, *The Learning Grap. Why Our Schools are Failing and What We Can Learn from Japanese and Chinese Education* (Nueva York: Simon and Schuster, 1992).]

Swartz, Robert. "Infusing the Teaching of Critical Thinking into Content Instruction". En Art Costa (compilador), *Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking.* Virginia: ASCP, 1991.

————. *Infusing Learning in Content Classrooms.* California: Critical Thinking Press, 1992.

Sylwester, Robert. *A Celebration of Neurons: An Educators Guide to the Human Brain.* Virginia: ASCD, 1995.

Tishman, Shari; y Perkins, David. *The Thinking Classroom: Learning and Thinking in a Culture of Thinking*. Simon & Schuster, 1995.

UNESCO. *Laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación: Primer estudio internacional comparativo*. Santiago: UNESCO, 1998.

Wellman, Bruce. "Making Science Learning More Science Like". En Art Costa (compilador), *Developing Minds. A Resource Book for Teaching and Thinking*. Virginia: ASD, 1990. □

¿POR QUÉ LOS ESCOLARES DE ASIA ORIENTAL TIENEN ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO?*

Harold W. Stevenson
y James W. Stigler

En estas páginas se recogen diez años de investigación en torno a las raíces de los logros académicos, a nivel de enseñanza básica, en Asia oriental y Estados Unidos. Poniendo especial énfasis en la asignatura de matemáticas, por la importancia de ésta y porque ella puede ser

HAROLD W. STEVENSON. Ph. D. en Sicología, Stanford University. Profesor de Sicología en la Universidad de Michigan y *Fellow* de la American Academy of Arts and Sciences. Ha sido presidente de la Society for Research in Child Development, presidente de la Division of Developmental Psychology de la American Psychological Association; también ha sido Guggenheim Felow y *Felow* del Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences. Premio G. Stanley Hall de la American Psychological Association. Autor de numerosos artículos y del libro *Children's Learning* (1972); coautor, entre otros libros, de *Psychology: From Research to Practice* (1978), *Cross-Cultural Studies of Child Development* (1981), *Child Development and Education in Japan* (1986).

JAMES W. STIGLER. Ph. D. en Sicología, Universidad de Michigan. Profesor de Sicología de la UCLA. Por su trabajo de investigación en sicología cognitiva ha sido distinguido con el premio Carnegie-Mellon University's William G. Chase; también ha recibido el premio Boyd McCandless de la American Pychological Association, el Guggenheim Fellowship, y ha sido *Fellow* del Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences. Autor de numerosos artículos y coautor de los libros *Cultural Pschology: Essays in Comparative Human Development* (1990) y *Mathematical Knowledge of Japanese, Chinese, and American Elementary School Children* (1990).

* Capítulos 7, 8 y 9 del libro de Harold W. Stevenson y James W. Stigler, *The Learning Gap. Why Our Schools Are Failing and What We Can Learn from Japanese and Chinese Education* (Nueva York: Touchstone, Simon and Schuster, 1992). Traducidos al castellano por Rose Cave. Su publicación en esta edición cuenta con la debida autorización.

evaluada con objetividad en distintas culturas, los autores identifican los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje, en el contexto escolar, que explicarían la brecha en el rendimiento académico entre los niños asiáticos y norteamericanos.

LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO*

Imaginen ustedes una escuela primaria con una matrícula de cuatro mil quinientos alumnos, como la más grande que visitamos en Taipei. Traten de pensar en un sistema educacional como el de China, que debe atender a más de 125 millones de escolares de la enseñanza básica. Procuren visualizar los cambios que se han producido en Japón, donde en 1953 sólo un 19% de los niños asistía al primer ciclo de la enseñanza secundaria, mientras que a mediados de los años ochenta prácticamente todos estaban matriculados. El número de escolares, el porcentaje que asiste a la escuela y el tamaño de los establecimientos que se han construido para dar cabida a esta matrícula superan con mucho la experiencia de los Estados Unidos en los últimos cincuenta años.

Debido al elevado número de alumnos y al incremento de las matrículas, las escuelas primarias de Asia generalmente están abarrotadas y el número de alumnos por curso es muy superior al que los estadounidenses considerarían razonable. Éstos, que atribuyen gran importancia al tamaño de los cursos, no creerían posible poder obtener logros con cursos de treinta y ocho a cincuenta alumnos, como es el caso de las escuelas que visitamos. Pero el que en los cursos numerosos puedan obtenerse buenos resultados académicos no es la única sorpresa que aguarda a los occidentales que toman su primer contacto con las escuelas chinas y japonesas. También quedan perplejos ante el aspecto físico de las escuelas y ante la forma en que se organizan los cursos y se imparte la docencia.

Para comprender los resultados académicos de los niños hay que examinar más detenidamente lo que sucede en las escuelas. En el presente capítulo y en los dos siguientes describimos las escuelas chinas y japonesas, sus maestros y sus técnicas de enseñanza y mostramos hasta qué punto echan por tierra muchos de los estereotipos estadounidenses acerca de la educación asiática. Un panorama realista de lo que son las escuelas de Asia nos permite formarnos una nueva opinión de las escuelas norteamericanas y de lo que podría requerirse para que sean más eficaces.

---

* Capítulo 7. (N. del E.)

La infraestructura

En los Estados Unidos, generalmente existe la impresión de que sólo se puede lograr un alto rendimiento académico cuando las escuelas son modernas y están bien equipadas. Esta impresión se disipa rápidamente cuando los norteamericanos fijan su atención en la típica escuela primaria de China, o de Taiwan o Japón: los gobiernos asiáticos invierten menos en construcciones y equipo que EE. UU. Las escuelas son edificios sobrios, construidos teniendo presente su funcionalidad más que sus comodidades. Lo que alivia su falta de atractivo son más que nada los rostros felices de los alumnos y el colorido despliegue de sus trabajos de arte. El mobiliario es escaso y el espacio, que en toda Asia es un privilegio, se aprovecha al máximo.

Las escuelas chinas son las más frugales. En su mayoría fueron construidas apresuradamente y su equipamiento es el mínimo, en tanto que el mantenimiento deja mucho que desear. La mayoría de las escuelas tiene poca calefacción y las ventanas de las salas de clases a menudo permanecen abiertas hasta en pleno invierno. Alumnos y maestros se defienden del frío cubriéndose con múltiples capas de ropa. El mobiliario de las abarrotadas salas de clases consiste en poco más que un pequeño escritorio para el maestro al frente de la sala y filas de escritorios para los niños. Por lo general, lo completan un pizarrón, un destartalado sistema de parlantes y una pequeña repisa llena de libros muy manoseados.

En Taipei, las escuelas deben dar cabida a una población escolar que ha sobrepasado las instalaciones disponibles. Muchas de ellas se encuentran en sectores de gran movimiento en que el intenso tráfico produce un elevado nivel de ruido fuera de las aulas. El equipamiento ha mejorado en los últimos años gracias al desarrollo de la economía, pero rara vez se ve una sala de clases que cuente con los últimos adelantos técnicos. El material didáctico generalmente es fabricado por los propios maestros y el equipo más moderno de que disponen suele ser un proyector.

La situación varía ligeramente en Japón, donde la bonanza financiera de los últimos treinta años ha aumentado la disponibilidad de recursos para la educación. Las escuelas están bien conservadas; muchas salas de clases tienen televisor y los maestros disponen de excelente material didáctico. Con todo, aún no conocemos una escuela primaria japonesa que tenga las comodidades que muchos administradores de escuelas estadounidenses consideran indispensables, como calefacción central, aulas espaciosas, una biblioteca, un buen autoservicio para las comidas, gimnasios bien equipados y salas de computación. Si bien es cierto que en Japón posiblemente

haya algunas escuelas como éstas, los administradores no suelen aspirar a estos lujos. Los planos de las escuelas japoneses rara vez contemplan un rincón para biblioteca, lugares para exhibir plantas y animales y espacio de trabajo, que son tan comunes en las salas de clases norteamericanas.

Cuando los estadounidenses más entrados en años visitan escuelas de Asia, a menudo comentan que les recuerdan las escuelas a que asistieron cuando niños. En realidad, las escuelas asiáticas efectivamente se asemejan a las que se construían en los Estados Unidos hace cuarenta o cincuenta años, cuando para satisfacer la creciente demanda de educación pública, se edificaba más para prestar servicios que para dar comodidades. Como muchas de las actuales escuelas de Asia, las antiguas escuelas de los EE. UU. tenían poco más que salas de clases, cuyo mobiliario se distribuía de acuerdo con un patrón estándar: filas de escritorios para los alumnos mirando hacia el escritorio del maestro situado al frente de la sala.

El apoyo a la enseñanza

Los educadores de todo el mundo censuran la falta de apoyo financiero a las escuelas primarias y secundarias. Las quejas se escuchan con tanta frecuencia en China como en EE. UU. Por ejemplo, en 1988 el Viceministro de la Comisión de Educación Estatal de China se lamentaba de que "los recursos son insuficientes, las escuelas están mal tenidas [y] los maestros ganan poco". China destina el 3,7% de su producto interno bruto a la educación —cifra modesta si se la compara con el 6,8% del PIB de EE. UU., que es muchísimo mayor[1].

Asia y EE. UU. distribuyen de manera diferente los recursos disponibles para educación. Aparte de que invierten menos en edificios y mobiliario, los ministerios de educación asiáticos asignan poco dinero a los puestos no académicos. Incluso en las escuelas asiáticas más grandes, el personal administrativo es reducido: hay pocos aseadores y personal de servicio; uno rara vez se encuentra con profesores de educación especial; y las escuelas no cuentan con profesores auxiliares, sicólogos, orientadores ni trabajadores sociales. Nuestros colegas del Asia no aciertan a entender por qué destinamos tanto dinero a aseadores, por ejemplo, en circunstancias de que los alumnos pueden ayudar a mantener el aseo de la escuela y el dinero podría aprovecharse mejor si se destinara a actividades que prestan apoyo al objetivo fundamental de la educación: el aprendizaje en las aulas. Los

[1] Para un análisis del apoyo financiero que se presta en China a la educación, véase Banco Mundial, *China: Issues and Prospects in Education* (1985), Anexo 1.

padres asiáticos se preguntan si no es acaso la familia y no la escuela la encargada de hacer frente a los problemas emocionales de los niños. Y si no han de ser los padres quienes deberían ayudar a los que tienen problemas de aprendizaje, y no maestros especiales. Los recursos ahorrados en instalaciones y personal no académico podrían destinarse a los sueldos de los maestros. En cierta medida, esto podría explicar por qué la docencia en las escuelas primarias es una ocupación más atrayente en Asia que en EE. UU. Por ejemplo, en Japón, los futuros maestros primarios no se vuelcan a trabajar en la Mitsubishi o Toyota en aras de un mejor sueldo, porque los maestros y los empleados de una empresa que tienen niveles de instrucción equiparables ganan lo mismo.

Los objetivos de la educación

Al parecer, las decisiones que adoptan los países respecto de sus escuelas se determinan por supuestos comunes acerca de los objetivos de la educación y no por la filosofía política del país. Tanto en China comunista como en las sociedades capitalistas de Japón y Taiwan los educadores concuerdan en que sean cuales fueren las inclinaciones o intereses individuales de los niños, todos necesitan adquirir cierta información básica y técnicas fundamentales. Piensan que todos los niños pueden sacar provecho de una experiencia educacional común y que proporcionar experiencias diferentes a distintos niños podría conducir a desigualdades que, con el tiempo, les dificultaría a algunos competir por un empleo. Según nos dijo un educador japonés, el objetivo de la educación "es reducir las diferencias entre los niños". La mayoría de los educadores asiáticos comparten este punto de vista; en cambio, casi todos los estadounidenses lo rechazan.

Los educadores estadounidenses hacen hincapié en la importancia de las diferencias individuales, énfasis que se encuentra profundamente arraigado en la cultura norteamericana, y por lo general consideran que el objetivo de la educación es maximizar el potencial de cada niño. Los filósofos de la educación estadounidense, que adhieren a una filosofía más nacionalista que la de sus contrapartes chinos y japoneses, ponen de relieve lo importante que es descubrir las características y necesidades de cada niño y luego construir experiencias educacionales que respondan a estas necesidades individuales. Howard Gardner, partidario de este punto de vista, lo resume así: "Una de las funciones vitales de la educación de un niño es descubrir cuáles son sus puntos fuertes y lo que le interesa. Cuando ello se ha encontrado, los más probable es que el alumno salga adelante; de lo

contrario, posiblemente nunca llegue a apreciar lo estimulante que es aprender"[2].

A juicio de los chinos y de los japoneses, para fijar los objetivos de los planes de estudio y elaborar programas educacionales no se requiere tener en cuenta las diferencias individuales. En su opinión, los funcionarios de sus ministerios de educación saben muy bien lo que los niños tienen que aprender para adaptarse con éxito a la sociedad y cómo organizar las experiencias que estimularán el aprendizaje. Además, señalan que sólo mediante un ministerio de educación centralizado se puede asegurar que, cualquiera que sea la escuela a que asistan, todos los niños seguirán el mismo plan de estudios, tendrán maestros que apliquen métodos muy similares y deberán satisfacer los mismos criterios generales de rendimiento.

Durante la ocupación de Japón tras la Segunda Guerra Mundial quedó de manifiesto cuán distinto piensan los norteamericanos y los japoneses sobre la educación centralizada. Las fuerzas de ocupación pidieron a un grupo de especialistas estadounidenses que les ayudaran a introducir reformas en las escuelas japonesas. Los consultores fueron firmes partidarios de un sistema de control a nivel local, por estimar que las probabilidades de maximizar el potencial de los niños son mayores cuando las escuelas son administradas por personas familiarizadas con las características y las necesidades de la población local. Por consiguiente, les recomendaron a los japoneses abandonar el sistema centralizado y traspasar la autoridad a las juntas escolares locales, al estilo norteamericano. Se crearon así miles de juntas escolares, que trataron de funcionar durante varios años. Sin embargo, tan pronto terminó la ocupación norteamericana, los japoneses volvieron rápidamente a su modalidad anterior de control centralizado a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura (Monbusho). Se dijo que la anterior dispersión del control se traducía en desigualdades. Los educadores japoneses sostuvieron que, si no existiera un control centralizado, no habría forma de garantizar que los maestros supieran lo qué se les enseñó a los niños en los cursos anteriores; además, con este sistema todos los niños compartirían un fondo común de conocimientos y técnicas y no resultarían castigados cuando sus padres se trasladaran de un distrito escolar a otro.

Los estadounidenses también comenzaron a percatarse de algunos de los inconvenientes de la descentralización. El marcado énfasis que se había puesto en la fiscalización de las escuelas a nivel local había dado lugar a grandes desigualdades en cuanto a las posibilidades de los niños de

[2] H. Gardner, correspondencia privada (octubre 1989). Para mayores detalles, véase Gardner, "The Difficulties of School: Probable Causes, Possible Cures" (1990); J. Walters y G. Gardner, "The Crystallizing Experience: Discovering an Intellectual Gift" (1986).

obtener una instrucción aceptable. Debido a su raza o a su situación socioeconómica, algunos tenían que asistir a escuelas segregadas o a escuelas que no estaban en condiciones de contratar personal adecuado. Reaccionando a estas injusticias, el gobierno federal trató de fomentar una mayor igualdad de oportunidades mediante la supervisión federal de las políticas relativas a la segregación, la educación especial y el empleo. Actualmente, las escuelas corren el peligro de no recibir recursos federales si no acatan las políticas. Sin embargo, a la hora de asegurar la equidad entre los niños mediante el control central de los planes de estudio, los estadounidenses se han mostrado renuentes a entregar estas atribuciones al gobierno federal.

El control de los planes de estudio

Cuando se visita una serie de cursos del mismo grado y en la misma época del año en una ciudad como Taipei, se tiene una marcada sensación de *déjà vu*. Todos los alumnos de quinto grado de la escuela, de distintas escuelas de la ciudad, e incluso de todo Taiwan, estudian la misma lección. Ya se trate de leer acerca de Islandia, de aprender nuevos caracteres chinos, o de descubrir cómo se calcula el volumen de un cubo, la misma materia se tratará prácticamente el mismo día del año escolar. Esta uniformidad obedece a que el Ministerio de Educación tiene el control central del plan de estudios, el cual especifica muy detalladamente el orden y contenido de lo que ha de enseñarse.

Los ministerios de educación tanto de Taiwan como de Japón publican libros en que se describe el plan de estudios para las escuelas primarias. Los objetivos generales de instrucción de cada asignatura en cada grado se reseñan en tres o cuatro párrafos, seguidos de descripciones detalladas del contenido del currículo. Por ejemplo, en Japón, el plan de estudios de matemáticas para el cuarto grado consta de diecisiete secciones que explican qué debería lograrse en cinco áreas principales de contenido: números y cálculo, cantidades y medidas, figuras geométricas, relaciones cuantitativas, y términos y símbolos.

La especificación del plan de estudios no se detiene en la descripción del contenido, sino que abarca un plan detallado del número de horas que hay que consagrar a cada materia a lo largo de la escuela primaria. En China, por ejemplo, de primero a sexto grado los niños tienen treinta y cuatro horas de clases a la semana. En este período, deberá destinarse un mínimo de diez horas a la lectura, seis a matemáticas, dos a tres a ciencias

naturales, dos a arte y música, respectivamente, dos a tres a educación física y una a educación moral. Las materias incluidas y el tiempo que se destina a cada una varían levemente según el grado.

En los Estados Unidos no hay un currículo nacional. Cada estado, y a veces cada distrito escolar de un estado, se encarga de elaborar su propio plan de estudios. Algunos sostienen que ésta es la única manera de satisfacer las necesidades de los niños que viven en distintos lugares del país. Tal vez esto sea cierto, pero la falta de un currículo aplicable a nivel nacional tiene consecuencias negativas. La enorme diversidad de lo que se enseña en las escuelas del país y el hecho de que no todos los niños tienen acceso a un núcleo básico de conocimientos y técnicas tiene por consecuencia que un elevado número de jóvenes estadounidenses no puedan competir por los empleos futuros ni tener participación plena como ciudadanos.

Pese a que en EE. UU. ha habido fuerte resistencia a aplicar un plan de estudios estándar a nivel nacional, a medida que ha quedado de manifiesto la necesidad de introducir reformas en la educación se han comenzado a examinar las ventajas que podría tener aplicar pautas curriculares nacionales. Las directrices federales relativas a la integración de las escuelas y a la distribución de los recursos no han sido suficientes para garantizar la igualdad de oportunidades en materia de educación y se está sugiriendo que el gobierno federal debería intervenir para remediar esta situación. Los partidarios de adoptar directrices nacionales señalan que sería fácil llegar a un consenso nacional respecto de los objetivos de algunas materias, tales como matemáticas y ciencias físicas. Después de todo, hay consenso en que los niños tienen que aprender a sumar y a multiplicar, a comprender la fuerza de gravedad y las reacciones químicas. Sin embargo, en otras materias, tales como ciencias sociales, educación cívica y biología, los objetivos son motivo de áspera controversia. Incluso la asignatura del lenguaje ha sido un tema polémico, ya que las opiniones acerca de lo que debería leerse, escribirse o discutirse en estas clases son muy variadas.

Últimamente, al definir los objetivos nacionales de la educación, el Presidente Bush y los gobernadores de los estados instaron al Consejo de Administración para la Evaluación Nacional que "se abocara a definir metas nacionales de rendimiento"[3]. Aunque se apresuraron a asegurar que la adopción de estas metas no se traduciría en un incremento del control federal de los planes de estudio, lo más probable es que al cumplir este cometido surja algún tipo de pautas nacionales. Seguramente muchos recibirán con beneplácito este cambio de orientación hacia un plan de estudios

[3] U. S. Department of Education, *National Goals for Education* (1990), p. 14.

nacional: en 1989, un sorprendente 69% de los adultos encuestados para la vigésimo primera encuesta anual Gallup se declaró partidario de que las escuelas públicas apliquen un plan de estudios nacional estandarizado. Sólo un 21% se manifestó contrario a ello[4].

Los textos de estudio

Para aplicar directrices nacionales, el gobierno nacional inevitablemente debe ejercer alguna influencia en el contenido de los textos de estudio utilizados por los niños. En Asia, esta influencia ha adoptado diferentes formas. En Taiwan, todos los textos de estudio se preparan bajo la supervisión directa del Ministerio de Educación. La uniformidad total en todas las escuelas se logra proporcionando una serie única de textos para cada asignatura. En Taiwan, así como en China, el propio gobierno publica todos los textos de estudio que se utilizan en las escuelas, con lo cual se asegura que su contenido cumpla con el currículo estándar. En China, con su enorme población, los gobiernos regionales pueden producir series de textos diferentes, de tal modo que los textos que se utilizan en Guangzhou no son necesariamente los mismos que se utilizan en Beijing. Sin embargo, el gobierno es responsable del contenido de los textos y todos los que se utilizan en el país deben abarcar básicamente las mismas materias.

En Japón, los textos de estudio son producidos por editoriales privadas, pero deben cumplir con las pautas fijadas por el Monbusho. La elección de los textos de estudio, que generalmente corresponde a los administradores educacionales de la prefectura, no es demasiado difícil. Un número relativamente reducido de editoriales domina el mercado de textos de estudio y las diversas series difieren más que nada en cuanto a sus características superficiales, como ser la forma en que se plantean los problemas y el orden en que se desarrollan los conceptos.

El mercado abierto que predomina en los EE. UU. se ha traducido en una profusión de textos de estudio para cada asignatura que se enseña en las escuelas. El mercado es enorme y empresas grandes y pequeñas se disputan fieramente para conseguir que se usen los libros que producen. No existe un sistema coherente para la selección de los textos de estudio aplicable en todo el país. Algunos gobiernos estaduales ejercen control, pero en los demás la decisión queda entregada a los distritos escolares locales, a las distintas escuelas e incluso al profesor. Como el contenido de los textos de

[4] Véase *American Educator* (1990).

estudio suele variar ampliamente, la adopción de una serie nueva a menudo da lugar a grandes controversias y discusiones entre los maestros, las juntas de administración escolar y los gobiernos estaduales.

Características generales de los textos de estudio

Los libros de texto que se publican en Japón, Taiwan y China se parecen muy poco a los textos característicos de las escuelas primarias estadounidenses. Los textos asiáticos son libros delgados, en rústica y de bajo costo. El programa de cada semestre para cada asignatura está contenido en volúmenes separados, que rara vez superan las cien páginas. Las portadas son atrayentes, pero las páginas interiores tienen pocas ilustraciones y están destinadas principalmente al texto. Por lo general, las ilustraciones muestran únicamente el punto central de la lección y se ofrece poca información que no sea la indispensable para el desarrollo de los conceptos en estudio. Ofrecen la esencia de la lección, y se espera que el maestro profundice y complemente la información con otro material.

En cambio, los libros de texto estadounidenses son gruesos volúmenes empastados, que abarcan el trabajo escolar de todo un año. Casi todas las páginas tienen coloridas ilustraciones, fotos, dibujos o gráficos. Este trabajo artístico, junto con digresiones sobre material histórico o biográfico, tiene por objeto despertar el interés del niño, pero quizá sirva para distraer su atención del objetivo central de la lección.

Otra característica que distingue a los textos estadounidenses es la importancia que atribuyen sus autores a la repetición y la revisión, aspectos que saben que serán exigidos por los comités encargados de aprobar los textos. Los libros de texto aplican lo que a menudo se describe como un currículo espiral. En cada grado presentan material relacionado con numerosos temas, y en los cursos posteriores profundizan esos mismos temas. Intimidados por la extensión de la mayoría de los libros de texto y conscientes de que los futuros maestros seguramente volverán sobre la misma materia, los maestros norteamericanos a menudo excluyen algunos temas. Los distintos maestros omiten temas diferentes, con lo cual los que tengan que hacerse cargo de los alumnos en los cursos posteriores no podrán saber qué se les enseñó antes —no podrán estar seguros de lo que sus alumnos saben o no saben. En Asia, en cambio, los textos de estudio son elaborados partiendo del supuesto de que los conocimientos deben ser acumulativos de un semestre a otro; de esta manera, si el concepto o técnica se enseña bien la primera vez, no será necesario volver a estudiarlo en un curso superior.

El contenido de los textos de estudio

En nuestro detallado análisis de los textos de estudio de Asia y de EE. UU. no encontramos nada que nos indicara que unos fuesen más difíciles que los otros, no obstante sus diferencias en la presentación general y en la forma de abordar los temas del plan de estudios de la enseñanza primaria. Los libros de lectura introducen casi el mismo número de palabras diferentes al finalizar la enseñanza básica —alrededor de siete mil en las series que se utilizan en Taiwan, Japón y EE. UU. Los libros de matemáticas incluyen más o menos el mismo número de conceptos y habilidades— por ejemplo, de los 497 conceptos y habilidades que figuraban en los textos japoneses y estadounidenses combinados, en los primeros aparecía un 83% y en los segundos un 82%.

Sin embargo, los textos de estudio japoneses y norteamericanos tienen una importante diferencia en cuanto a la claridad con que analizan los conceptos. Los primeros a menudo son menos explícitos, particularmente en el caso de las matemáticas. Por ejemplo, en ellos nunca figuran sumas de cifras de dos o tres dígitos con reserva, por mucho que los problemas que se ofrecen después parten claramente de la base de que los niños han aprendido a sumarlos. Los autores de los libros de textos japoneses dependen más que los estadounidenses de la ayuda que presta el maestro a sus alumnos en la discusión y profundización del contenido de la lección.

Asimismo, es un hecho que los autores japoneses se empeñan más en hacer que los alumnos participen activamente que lo que los estadounidenses consideran necesario o posible. Si se dan a conocer todos los pasos que hay que seguir para aplicar un concepto o habilidad, como lo hacen los textos norteamericanos, a los alumnos les basta con seguir el desarrollo del tema y no tropiezan con vacíos que deban resolver por su cuenta. Como uno de los objetivos que se fijan los maestros asiáticos es enseñar a los alumnos que los problemas pueden resolverse de muchas maneras diferentes, el presentar un solo método con tanto detalle reduciría las probabilidades de que a los alumnos se les ocurran soluciones alternativas. Uno de los métodos que utilizan comúnmente los maestros asiáticos en las clases de matemáticas consiste en hacer que los alumnos sugieran el mayor número posible de soluciones al problema y luego hacer que el curso discuta cuáles son mejores y por qué.

La influencia que ejercen los textos de estudio en las prácticas educativas depende de cuán exhaustivamente los maestros utilicen su contenido. Uno tiende a formarse la impresión de que son pocos los maestros estadounidenses que pretenden abarcar todos los aspectos de que trata un

libro. No sólo se pasan por alto grandes secciones de los capítulos, sino que el maestro tal vez omita todo el capítulo. En las escuelas de China y Japón esto no sucede. Los textos escolares contienen lecciones breves, un número reducido de casos de aplicación práctica de los problemas y casi ningún material auxiliar, lo cual permite que el curso abarque todos los detalles que figuran en cada uno de los textos. Mediante notas tomadas en clases, ejercicios realizados en las clases y tareas para la casa, todos los alumnos deberán haber prestado atención a cada palabra, cada problema y cada ejercicio que figura en cada uno de los textos que se utilizan en la enseñanza básica.

La jornada escolar

Mucho se ha comentado que en las escuelas asiáticas la jornada y el año escolares son más largos. "Los estudiantes norteamericanos están quedando a la zaga de sus iguales del extranjero —quizá porque reciben menos instrucción", decía la portada de la revista *The Atlantic Monthly* correspondiente a noviembre de 1990. Es cierto que los niños chinos y japoneses terminan el sexto grado tras haber permanecido en la escuela el equivalente a uno o dos años más que los niños norteamericanos. En las escuelas asiáticas, la jornada escolar es más larga y cada año lectivo tiene más días. Estas estadísticas son notables, pero sus consecuencias no son tan simples como parecieran a primera vista.

En las escuelas de Taiwan y China, el año escolar tiene una duración similar al de EE. UU., con la salvedad de que siguen funcionando por más tiempo en el verano. Las clases se inician a comienzos de septiembre y terminan en julio. Hay una interrupción en diciembre y otra para el año nuevo chino. En Japón, el año escolar se divide en tres trimestres: de abril a julio, de septiembre a diciembre y de enero a marzo. En estos períodos todas las escuelas chinas y japonesas tienen clases todos los días salvo los domingos. De acuerdo con este calendario, en las escuelas básicas de China y Japón el año escolar tiene 240 días de clases; las escuelas estadounidenses sólo funcionan 180 días al año.

La jornada escolar de la mayoría de las escuelas asiáticas es muy similar. A manera de ejemplo, puede citarse el caso de Beijing. Allí, los alumnos llegan a la escuela entre las 8 y las 8.30 de la mañana y se van a sus casas alrededor de las cuatro de la tarde, salvo el sábado cuando lo hacen a mediodía. La jornada se divide en cuatro clases de cuarenta y cinco o cincuenta minutos en la mañana y dos en la tarde. Cuando terminan las

clases académicas, los alumnos se quedan una hora o más en la escuela realizando actividades extraprogramáticas. De acuerdo con nuestras estimaciones, en las escuelas chinas los alumnos de segundo a sexto grado permanecen de 1.400 a 1.700 horas al año en la escuela. Por lo general, los alumnos de primer grado tienen una jornada más breve, que reduce el calendario a unas 1.100 horas.

En el caso de los niños estadounidenses, la jornada escolar es muy diferente, ya que suelen llegar a la escuela alrededor de las nueve y se van a su casa antes de las tres. Permanecen en la escuela aproximadamente 1.100 horas al año. De ello se desprende que los niños chinos pasan entre 1.500 y 3.000 horas más en la escuela primaria —lo que equivale a uno o dos años de vida escolar— que los niños estadounidenses. (Estas estimaciones se obtuvieron restando las 1.100 horas de escolaridad de los niños norteamericanos de segundo a sexto grado de las correspondientes 1.400 a 1.700 horas de los niños chinos, y multiplicando por cinco años.)

Esta clase de estadísticas ha convencido a muchos norteamericanos de que lo primero que hay que hacer para mejorar la educación en el país es prolongar la jornada y el año escolares. Sin embargo, cuando las estadísticas se examinan más de cerca, las razones para dedicar más tiempo a la escuela se debilitan. A menudo se olvida que la estimación de 240 días incluye los sábados, en que los niños asiáticos sólo están en la escuela medio día. Esto reduce en 20 días el número de días del año escolar asiático.

También hay que introducir otro ajuste por concepto de la parte de la jornada escolar que se destina a recreos, almuerzo y actividades extraprogramáticas y no a clases académicas. La jornada escolar de las escuelas de Beijing y Chicago son típicas. De acuerdo con nuestras estimaciones, los escolares de Beijing tienen unos cincuenta minutos al día de tiempo de recreo, contra los diez minutos de que disponen en Chicago. En Beijing, se destina casi una hora y media al almuerzo —lo que triplica con creces el tiempo que se contempla en la mayoría de las escuelas estadounidenses. Las actividades extraescolares, que en EE. UU. ordinariamente tienen lugar fuera del horario escolar, mantienen a los niños de Beijing ocupados en la escuela durante una o dos horas diarias después de terminada su jornada ordinaria. De esta manera, si bien es cierto que los escolares asiáticos pasan más tiempo en la escuela que los niños estadounidenses, la diferencia en cuanto a la cantidad de instrucción académica que reciben no es tan pronunciada como parecen indicarlo las estadísticas más generales.

Quizá más importante que el tiempo total pasado en la escuela es la forma en que se distribuye el tiempo a lo largo del año. En vez de los fines

de semana de dos días y las prolongadas vacaciones de verano que rompen la continuidad del año escolar estadounidense, en las escuelas chinas y japonesas el tiempo transcurre en forma más o menos ininterrumpida. En Asia, las vacaciones escolares son más breves y están distribuidas más equitativamente a lo largo del año. El aprendizaje es un proceso permanente, que se mantiene por el impulso desarrollado durante las clases ordinarias.

A este impulso hay que agregar las oportunidades de practicar y repasar que tienen los niños asiáticos durante las vacaciones. En los períodos de vacaciones, las escuelas asiáticas no están 'abiertas', lo que no significa que dejen de funcionar. Salvo por sus propias y breves vacaciones, los maestros japoneses se encuentran en la escuela durante todo el año. Los niños tampoco se alejan de su vecindario, ya que las familias de Asia rara vez salen juntas en viajes de vacaciones. Durante los períodos de vacaciones, los clubes y grupos de actividades siguen reuniéndose, los escolares pueden seguir recibiendo tareas de sus maestros para trabajar en sus casas y se inician nuevos proyectos académicos. Así pues, los escolares asiáticos efectivamente tienen un año 'escolar' más largo, pero gran parte del tiempo complementario no transcurre en las aulas.

La forma en que están organizados los cursos

La información de que disponemos sobre la forma en que funcionan los cursos proviene de varios estudios de observación realizados en los últimos diez años. En uno de ellos, nuestros observadores permanecieron en las salas de clases por un total de más de cuatro mil horas —más de mil períodos de clases en veinte cursos de primer grado y veinte de quinto grado en cada una de tres ciudades (Minneapolis, Sendai y Taipei). Los observadores registraron la presencia o ausencia de categorías predeterminadas de comportamiento durante cada período de clases. A partir de esta enorme cantidad de datos se puede describir con mucha exactitud las actividades que se desarrollan en los cursos correspondientes a las tres culturas. Los ejemplos que se ofrecen a continuación están basados en las observaciones realizadas en las clases de matemáticas, aunque en el caso de las demás asignaturas que presenciamos las conclusiones fueron muy similares.

Los cursos de las escuelas primarias generalmente se organizan en una de tres maneras, a saber: todo el curso trabaja como una sola unidad; el curso se divide en una serie de grupos pequeños; o los alumnos trabajan

individualmente. Registramos los casos en que los alumnos recibían instrucción o ayuda del maestro y los casos en que trabajaban por su cuenta. Se consideró que estaban recibiendo instrucción cuando el maestro dirigía la actividad, ya sea que participara en ella todo el curso, un grupo reducido o solamente un niño.

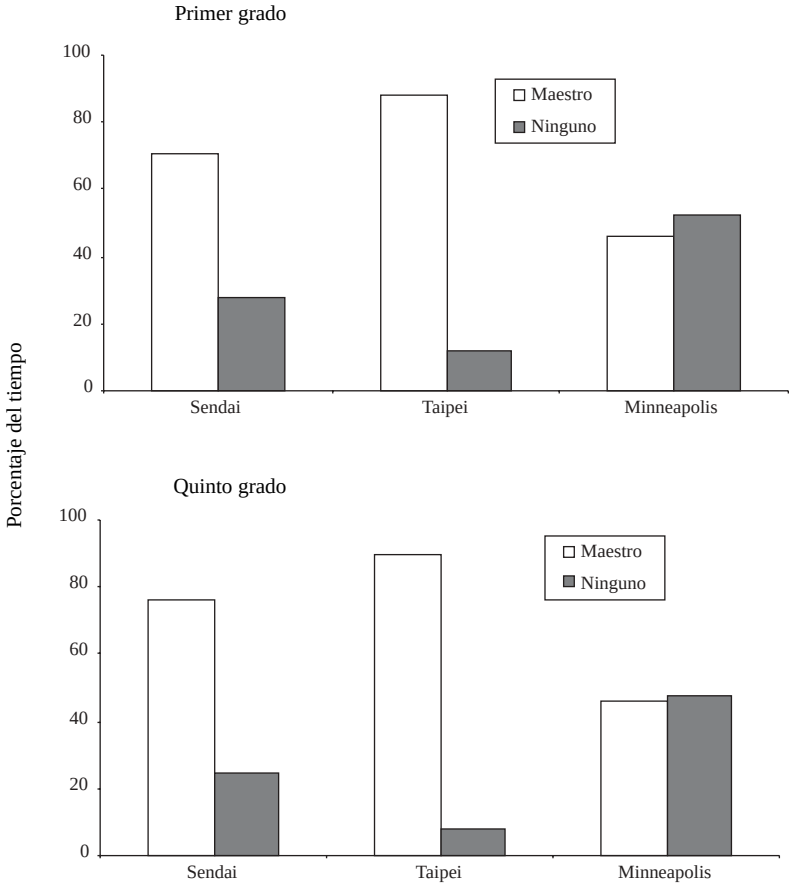
Al observar la clase de esta manera, llegamos a una de nuestras conclusiones más sorprendentes: pese a que en Asia el número de alumnos por curso era muy superior al de las escuelas estadounidenses, los escolares asiáticos recibían más instrucción que los norteamericanos de sus maestros. En Taiwan, el maestro dirigía la actividad del niño un 90% del tiempo, en contraposición a un 74% en Japón y a sólo un 46% en los Estados Unidos. En Taiwan, durante un 9% del tiempo nadie dirigía la instrucción, en Japón un 26% y en EE. UU. un sorprendente 51% (véase el Gráfico Nº 1). De hecho, en este último país incluso los escolares de primer grado pasaban más tiempo solos que participando en actividades dirigidas por el maestro.

Una de las razones por las cuales los escolares estadounidenses recibían menos instrucción era que los maestros pasaban un 13% de su tiempo de las clases de matemáticas sin trabajar con ningún alumno, proporción que bajaba a 6% en Japón y a 9% en Taiwan. (Como se verá más adelante, los maestros norteamericanos tienen que restarles tiempo a las clases para atender a la multitud de tareas relacionadas con preparar clases, evaluar a los alumnos y realizar labores administrativas debido a que disponen de muy poco tiempo para ello durante el día.)

Un factor más decisivo del deterioro de la instrucción era el tiempo que los maestros norteamericanos destinaban a atender a un solo alumno o a grupos pequeños. Los niños norteamericanos pasaban el 10% de su tiempo en grupos pequeños y el 47% trabajando por su cuenta. Gran parte del 87% del tiempo que los maestros estadounidenses trabajaba con sus alumnos se destinaba a estos alumnos individuales o grupos pequeños, y no al curso en su conjunto. Cuando los maestros proporcionan atención individual, deben dejar de atender al resto del curso, de modo que disminuye el tiempo para los demás alumnos.

Los niños pueden aprender sin maestro. Sin embargo, lo más probable es que les resultará más beneficioso que el maestro dirija sus actividades más de la mitad del tiempo que se encuentran en la sala de clases. Podría sostenerse que la destreza en asignaturas tales como la lectura depende mucho de la práctica y que a los niños les conviene leer por su cuenta o en grupos reducidos. Este argumento es más difícil de sostener cuando se trata de matemáticas y ciencias, en que tal vez los alumnos requieran más instrucción directa antes de poder sacar provecho del estudio

GRÁFICO Nº 1: PORCENTAJE DEL TIEMPO QUE LA ACTIVIDAD DEL ALUMNO ERA DIRIGIDA POR EL MAESTRO O NINGUNO



por su cuenta. El problema es la gran cantidad de tiempo que los niños norteamericanos quedan sin ayuda y el efecto que ello tiene en la lección.

Como los niños asiáticos pasan tanto tiempo trabajando en forma colectiva, hay que referirse a este sistema. En EE. UU., el trabajo con todo el curso tiene más bien mala fama. Ha llegado a asociarse con un exceso de cháchara de parte del maestro y demasiados alumnos pasivos y faltos de interés. Sin embargo, como se verá en detalle más adelante, a medida que sigamos describiendo lo que sucede en los cursos asiáticos, las clases que se imparten a todo el curso en las escuelas japonesas y chinas son una

actividad dinámica y atrayente. Los maestros asiáticos no pasan mucho tiempo disertando. Plantean problemas interesantes, formulan preguntas sugerentes; indagan y orientan. Los alumnos trabajan con ahínco, generan múltiples métodos para llegar a una solución, explican sus razones para utilizar el método elegido y sacan provecho de las respuestas erradas.

La distribución del tiempo

Planificamos nuestras observaciones de tal manera que tuvieran lugar únicamente durante las clases académicas y no en los recreos, la gimnasia, las asambleas del alumnado o el almuerzo. Sin embargo, asistir a una clase académica no equivale necesariamente a participar en una actividad académica. Se puede perder el tiempo de diversas maneras. La clase puede comenzar tarde o interrumpirse antes de tiempo, es posible que el maestro tenga que ausentarse de la sala o los alumnos pueden estar pasando de una actividad académica a otra.

Los escolares norteamericanos resultaron ser los que pasaban menos tiempo realizando actividades académicas en clases académicas: de un 70% del tiempo en el primer grado a un 65% en el quinto grado. Estos datos contrastan marcadamente con los obtenidos de los niños asiáticos. De hecho, en el caso de los niños chinos y japoneses, la proporción aumentaba entre el primero y el quinto grado. En los niños chinos, el porcentaje subía de un ya elevado 85% a una proporción incluso superior, de 92%, y en el de los japoneses, de 79 a 87%. Si en la práctica gran parte del tiempo destinado a las clases académicas que se imparten en las escuelas primarias estadounidenses se desperdicia, cabe preguntarse si no sería sensato concebir modalidades para que estas clases fueran más eficientes antes que pensar en prolongar el tiempo que los niños permanecen en la escuela.

Algunas modalidades podrían modificarse sin incurrir en grandes gastos. Por ejemplo, los niños estadounidenses ignoran cómo pasar eficientemente de una actividad a otra: encontrar sus textos de estudio y luego ubicar la página que se leerá en clase, o tratar de encontrar un lápiz con punta o una hoja de papel limpia. En Minneapolis, los alumnos de primer y quinto grado tardaban mucho más que los de Sendai y Taipei en este cambio de actividad. Por ejemplo, los alumnos de quinto grado de Minneapolis dedicaban aproximadamente un 10% del tiempo de las clases académicas a pasar de una actividad a otra; los niños de Sendai y Taipei, cerca de 5 y 6%, respectivamente. De manera que los niños norteamericanos desperdiciaban cerca de un 5% del tiempo que pasaban en la escuela esperando a los demás.

En las salas de clases de EE. UU. se perdía aún más tiempo en actividades ajenas a la enseñanza que bien podrían reducirse si se enseñara a los alumnos a utilizar el tiempo en forma constructiva. Los escolares norteamericanos pasaban más tiempo fuera de sus asientos, hablaban más con sus compañeros cuando no debían hacerlo y se dedicaban más a otras actividades impropias que los escolares chinos y japoneses. Por ejemplo, los alumnos de quinto grado de las escuelas norteamericanas pasaban cerca de un 20% de su tiempo fuera de sus asientos y los chinos y japoneses menos de un 5%. En las salas de clase de EE. UU. las actividades ajenas al trabajo escolar son motivo de frustración y tensiones. Unido a la falta de eficiencia en el paso de una actividad a otra, la mayor cantidad de tiempo sin trabajar hace que los cursos de las escuelas norteamericanas den la impresión de desorden.

Datos como éstos llevaron a que uno de nuestros colegas japoneses se mostrara admirado de los logros académicos de los escolares norteamericanos. ¿Acaso no rinden notablemente bien —dijeron— si se tiene en cuenta el poco tiempo que dedican a las actividades académicas, la escasa instrucción que reciben de sus maestros y el reducido número de oportunidades que tienen de practicar fuera de la clase?

Los planes de estudio

Todas las escuelas enseñan artes del lenguaje (lectura, escritura y ortografía), matemáticas, ciencias sociales, música y arte. Además, en las escuelas de Taipei y Sendai hay clases de moral, en las cuales se procura inculcar valores y prácticas que demuestran el valor del respeto, la rectitud, la racionalidad y otros atributos del buen ciudadano y miembro de una familia. En las escuelas primarias de las ciudades que visitamos rara vez se enseñaban ciencias físicas y biológicas.

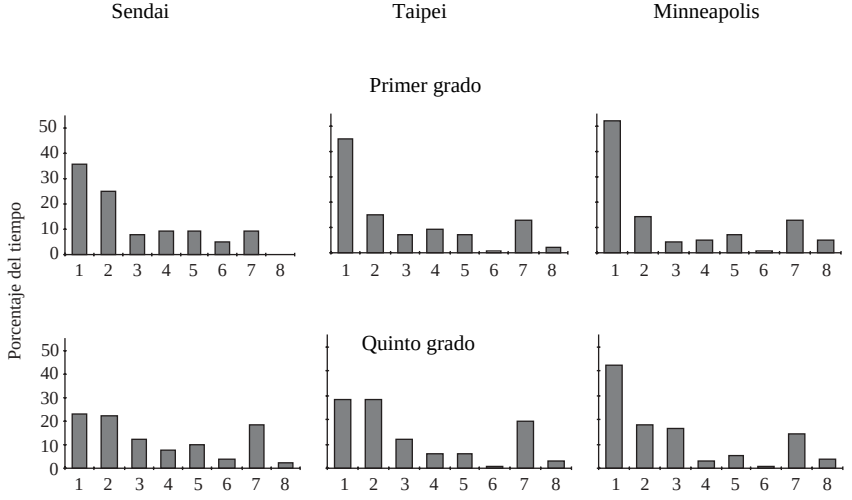
Discernir qué materia se enseña en un curso parece tarea fácil, pero en las aulas norteamericanas, que estaban organizadas libremente, no siempre lo era. En algunas oportunidades nuestros observadores no pudieron pronunciarse al respecto y tuvieron que preguntárselo al maestro. En las escuelas chinas y japonesas se podía discernir más fácilmente el programa de estudios. Cada período de clases tiene por objeto presentar una lección, que siempre versa sobre un tema determinado.

Los maestros de primer grado de las tres culturas centraban la atención más que nada en la lectura, lo que indica que se reconoce ampliamente

que los niños que no saben leer no pueden sacar mucho provecho de otras áreas de la enseñanza básica. Como se comprueba en el Gráfico Nº 2, en Sendai se prestaba el máximo de atención a las matemáticas y en Minneapolis el mínimo. En el quinto grado, las artes del lenguaje seguían acaparando la mayor parte del tiempo en Minneapolis, no así en Sendai ni en Taipei, donde se dividía casi por iguales partes entre la lectura y las matemáticas.

Cuando se graficó por separado el porcentaje de tiempo que dedican los distintos cursos a la lectura y a las matemáticas, comprobamos que la variación era mucho mayor en las escuelas de Minneapolis que en las de Taipei o Sendai. Algunos maestros de Minneapolis dedicaban hasta un 40% del tiempo a la enseñanza de las matemáticas; varios otros nunca enseñaron matemáticas en las veinte horas elegidas al azar en que nuestros

GRÁFICO Nº 2: FORMA EN QUE SE DISTRIBUYE EL TIEMPO QUE SE DEDICA A DIVERSAS MATERIAS



1. Lenguaje
2. Matemáticas
3. Ciencias sociales
4. Música
5. Arte
6. Moral
7. Otras
8. Estudio

observadores visitaron los cursos. En Sendai y Taipei había escasa variación entre los distintos cursos, seguramente porque el plan nacional de estudios especificaba claramente cuánto tiempo había que destinar a la enseñanza de cada materia.

La forma diferente en que los maestros asiáticos y estadounidenses distribuyen el tiempo de instrucción entre la lectura y las matemáticas ciertamente obedece a muchas razones, pero una de ellas es que a los maestros norteamericanos les agrada enseñar lectura, mientras que a los asiáticos les gustan las matemáticas. Cuando les preguntamos a los maestros de Beijing, la mayoría de los cuales eran mujeres, cuál era la asignatura que más les agradaba enseñar, un 62% respondió que las matemáticas y un 29%, artes del lenguaje. En cambio, en Chicago un 33% dijo matemáticas y un 47% artes del lenguaje. Con todo, en el fondo hay algo más que una simple preferencia. Los norteamericanos simplemente hacen más hincapié en la lectura que en las matemáticas. Pese a la gran cantidad de tiempo que ya se dedica a la enseñanza de la lectura, más de un 40% de las sugerencias que formularon las madres de Minneapolis que querían que se pusiera más énfasis en los ramos académicos se pronunció en favor de la lectura y menos de un 20% por las matemáticas.

Estos datos llevan a la obvia conclusión de que a los escolares norteamericanos no les va tan bien en matemáticas como a los chinos y japoneses, en parte porque le dedican menos tiempo a esta asignatura. Si bien es cierto que el factor tiempo no basta para explicar su bajo rendimiento, la reducida duración de las clases y el tiempo que se pierde en pasar de una actividad a otra y en comportamiento inadecuado seguramente son elementos importantes. A la inversa, es posible que a los escolares norteamericanos les vaya relativamente mejor en lectura porque le dedican más tiempo.

El agrupamiento por niveles

Las familias asiáticas que matriculan a sus hijos en la escuela primaria no pueden elegir a cuál enviarlos. La escuela a la que asisten depende del barrio en que viven. Además, los padres no tienen voz ni voto respecto del maestro de sus hijos, porque la distribución se hace al azar. Aparte de que se procura que en cada curso haya igual número de niñas y de niños, no se impone ninguna limitación respecto de qué curso corresponde a cuál alumno. Naturalmente, los padres pueden optar por enviar a su hijo a una

escuela privada, pero en éstas se aplica el mismo procedimiento que en las escuelas públicas para distribuir a los alumnos.

Las escuelas primarias asiáticas no aplican el sistema de agrupamiento por niveles. Los alumnos nunca se asignan a cursos diferentes según su presunta capacidad intelectual[5]. La filosofía igualitarista se aplica también a la organización dentro del curso. Los alumnos no se dividen en grupos de lectura según su destreza en la materia y los cursos no se separan en grupos según la rapidez con que avanzan en sus textos de matemáticas. Ningún alumno se ausenta de la sala de clases para asistir a clases especiales, como las que se destinan a los niños que tienen problemas de aprendizaje.

Las escuelas de EE. UU. están estructuradas de tal manera de satisfacer lo que se considera necesidades individuales de cada alumno. Dentro del curso, se parte de la base de que las diferencias entre alumnos son tan marcadas que hay que dividir los cursos en grupos separados, cada uno de los cuales cumple los planes de estudio a un ritmo diferente. Los alumnos que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual, emocional o de aprendizaje, son asignados a programas especiales o asisten a clases especiales durante parte de la jornada escolar.

Desde el momento en que los padres norteamericanos toman el primer contacto con el sistema escolar, deben confrontar el hecho de que no todos los niños son considerados igualmente capaces de sacar provecho de la participación en las actividades ordinarias del curso. Desde que llevan a sus hijos de cinco años al *roundup* del kindergarten, como se denomina en muchas partes del país el trámite de matrícula en el curso de kindergarten, los padres tienen que resolver cuál es el tipo de curso que sería más apropiado para sus hijos. Durante el *roundup* se les hacen pruebas de audición y visión para comprobar si tienen algún impedimento físico que deba tenerse presente; también se les hace un breve examen sicológico. El objetivo de éste es asegurarse de que el niño esté intelectual y socialmente en condiciones de entrar a la escuela.

Durante mucho tiempo, en EE. UU. se consideró que desde el punto de vista educacional y sicológico lo acertado era poner énfasis en satisfacer las necesidades de los niños distribuyéndolos, desde el momento en que ingresan a la enseñanza básica, en grupos según distintos criterios de clasificación. Sin embargo, en el último tiempo esta política ha sido blanco de

[5] La única excepción son las pocas escuelas 'claves' que existen en las grandes ciudades chinas, que son escuelas experimentales especiales y de innovación educacional. Sin embargo, incluso en ciudades tan grandes como Beijing, el número de escuelas 'claves' es muy reducido.

críticas. Quienes la atacan sostienen que dividir a los alumnos en grupos no hace más que establecer una clasificación de los alumnos que generalmente es innecesaria y a veces perjudicial. El porcentaje demasiado elevado de niños pertenecientes a minorías que son asignados a cursos especiales, el hecho de que a los niños asignados a algunas categorías se les niegue el acceso al plan de estudios ordinarios y la vergüenza que sienten los niños porque se los separa de sus iguales han solido señalarse como razones para modificar la forma en que están organizados actualmente tanto las escuelas como los cursos.

Definición del problema

Los educadores norteamericanos, haciéndose eco de los valores de la sociedad de su país, tratan de satisfacer las necesidades especiales de cada niño. En cambio, los asiáticos prestan escasa atención a las diferencias entre los distintos niños y consagran sus energías a elevar el nivel general de rendimiento. Los norteamericanos responden a las diferencias que se dan entre los niños dividiendo a los alumnos que son lentos o rápidos para aprender y asignándolos a clases especiales o distribuyendo a los alumnos en los distintos cursos de acuerdo con su supuesta capacidad de aprendizaje. En Asia, sólo excepcionalmente se separa a los niños de sus pares.

Cada sistema tiene ventajas e inconvenientes. Los críticos sostienen que en un sistema en el cual se supone que todos los alumnos aprenden la lección del día, los niños a quienes les cuesta trabajo aprender se encuentran en seria desventaja. Hasta los maestros asiáticos reconocen que algunos niños quedan cada vez más a la zaga de sus compañeros mientras más permanezcan en la escuela. Cuando no se contempla la posibilidad de que los niños estudien en libros de texto distintos de los prescritos o de que resuelvan problemas más complejos que aquéllos comprendidos en los planes de estudio ordinarios, se impide el avance de los niños que tienen destrezas o capacidad especiales. Para los norteamericanos, esto es grave. Es posible que los asiáticos reconozcan la existencia de esta clase de problemas, pero prefieren aplicar métodos educacionales que beneficien a la mayoría. Como indicación de la eficacia de esta estrategia mencionan el elevado nivel promedio de rendimiento de sus niños.

La extraordinaria importancia que atribuyen las escuelas estadounidenses a las diferencias entre los distintos alumnos también ha planteado numerosos problemas. La creación de cursos para los alumnos con necesidades especiales y el afán de que los cursos tengan pocos alumnos impone

una carga extraordinariamente pesada sobre los recursos disponibles para la educación. En la forma en que se financian actualmente, es posible que las escuelas norteamericanas no puedan hacer frente a las necesidades de todos los niños y seguramente no podrán cumplir muchas de las funciones que se les han encomendado en los últimos decenios sin un deterioro adicional de nuestro sistema educacional. Los intentos de ayudar a los niños con problemas especiales no sólo ejercen presión sobre los recursos financieros disponibles, sino que acarrean un costo a los propios escolares. Identificamos a los niños que necesitan atención especial en sus primeros días de escuela, los separamos en cursos o grupos especiales y les ponemos la etiqueta de discapacitados en lectura, emocionalmente impedidos o hiperactivos. Sin embargo, aún no hemos concebido formas humanitarias de ayudar a estos niños a manejar sus dificultades sin obligarlos a sobrellevar desde sus primeros años el baldón de ser considerados discapacitados, impedidos o anormales.

Uno de los grandes obstáculos para lograr la igualdad de oportunidades para todos los niños es lo mucho que varía el contenido de los planes de estudio que se aplican en las distintas escuelas norteamericanas. Se permite que los maestros pongan mayor o menor énfasis en las asignaturas de acuerdo con sus propios intereses y con lo que piden los padres. Por ejemplo, por lo que respecta a las matemáticas, los maestros confiesan que el ramo no les interesa, los padres le restan importancia y hay una enorme diferencia en la cantidad de tiempo que le dedican los distintos maestros. Las grandes discrepancias entre lo que los niños han estudiado pueden plantear problemas graves cuando los niños se trasladan a otra escuela, o cuando tienen que utilizar técnicas que el otro maestro no les enseñó.

La desigual calidad de los textos de estudio y del material didáctico de que disponen los escolares norteamericanos plantea un problema muy similar. Comparados con los que se utilizan en Asia, los textos norteamericanos a menudo son demasiado grandes, su presentación induce a la distracción y no sirven de un año para otro. Los libros de ejercicios repiten en vez de profundizar lo que los alumnos ya han aprendido, y son pocos los que tienen acceso a material práctico que podría ayudarles a expresar conceptos abstractos en experiencias concretas de la vida diaria.

La forma en que se distribuyen los recursos para educación en los Estados Unidos también plantea problemas. Es un hecho que actualmente las escuelas norteamericanas destinan una proporción demasiado grande de los recursos de que disponen a administración, personal no docente e instalaciones físicas. Además, una elevada proporción de los recursos disponibles para educación se asigna a las universidades y *colleges*, que sólo

prestan servicios a una parte de la población. Este modelo de gasto ha conducido a un sistema de educación superior que es igual o mejor que el de cualquier otro país del mundo, pero tal vez también haya contribuido a debilitar la enseñanza básica y secundaria.

Sin embargo, no se trata de que el país sería más competitivo si se reasignaran los recursos de los *colleges* y universidades a las escuelas primarias y secundarias. Si las universidades tuvieran menos capacidad de generar avances científicos, podría ponerse en peligro nuestra condición de potencia económica en una era en que, para competir y sobrevivir, es indispensable el avance tecnológico. Trasladar recursos de los *colleges* y universidades a las escuelas primarias y secundarias ciertamente produciría una merma de esta capacidad. Por otra parte, si durante la enseñanza básica y secundaria los alumnos adquiriesen mayor competencia en artes del lenguaje, matemáticas y ciencias, las universidades funcionarían más eficazmente y se fortalecería la fuerza de trabajo del país.

Finalmente, hay que decir que las escuelas norteamericanas funcionan en forma ineficiente. A menudo reina en ellas el desorden y la desorganización y se desaprovecha el tiempo. Cabe preguntarse cómo no había de ser así, en circunstancias de que los maestros disponen de escaso tiempo libre para preparar sus clases, para trabajar individualmente con los alumnos y para cumplir con todas las funciones administrativas que se les han encomendado.

LA PROFESIÓN DOCENTE*

Así como los padres cumplen una función fundamental al fomentar el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos en el hogar, los maestros determinan en forma decisiva cómo se desenvuelve la vida de los niños en la escuela. Así pues, es natural que en nuestro intento por familiarizarnos con el desempeño académico de los niños volvamos la atención hacia sus maestros: quiénes son, qué formación recibieron y cómo está estructurado su trabajo.

Los maestros primarios de las sociedades que hemos examinado tienen mucho en común. Con la excepción de Sendai, donde prácticamente la mitad de los maestros eran varones, casi todos eran mujeres, y la mayoría se había desempeñado como tal durante largo tiempo (un promedio de dieciséis a veinte años). No obstante los problemas que reconocidamente agobian a la profesión, tanto los maestros norteamericanos como los chinos

* Capítulo 8. (N. del E.)

y japoneses expresaron que si tuvieran que elegir nuevamente, volverían a optar por la docencia. Cabe preguntarse por qué eligieron ser maestros. La principal razón que invocaron los representantes de las distintas culturas fue el deseo de trabajar con niños. Sueldo, prestigio, condiciones de trabajo, tiempo libre en el verano, fueron secundarios. A los maestros simplemente les gustaba enseñar a niños.

Disfrutar enseñándoles a niños pequeños es importante, pero para ser buen maestro se necesita más que eso. Cuando se comparan los sistemas de formación de los maestros y la naturaleza de la profesión en las sociedades norteamericana y asiática, pronto queda de manifiesto que no obstante que confrontan una labor increíblemente ardua y exigente, los maestros norteamericanos no reciben la formación adecuada. Además, a menudo carecen del apoyo y la cooperación de los padres y de la sociedad, del status social y de la remuneración que corresponden a la importancia de su labor y, quizá más que nada, de oportunidades de desarrollo personal.

Lo que hace a un maestro

Los norteamericanos a menudo actúan como si ser buen maestro fuera una aptitud innata y no adquirida. Así lo insinúan algunos comentarios, tanto de maestros como de padres. Al parecer, piensan que buen maestro es aquel que tiene el don innato de tratar con los niños y puede mantenerlos razonablemente atentos e interesados en aprender. En muchos institutos pedagógicos se acepta que la docencia es un arte que no puede enseñarse.

Quizá por esta convicción, los alumnos egresan de los institutos pedagógicos norteamericanos sin saber mucho cómo preparar y dictar una buena lección. Se parte de la base de que los maestros descubrirán esto por sí solos. Los cursos de metodología de la enseñanza están concebidos para otros fines. Por una parte, plantean las teorías del aprendizaje y del desarrollo cognitivo que, no obstante permitir a los alumnos citar a los principales teóricos actualmente en boga, no pasan de ser difusas generalizaciones que difícilmente podrán aplicarse en la vida diaria de las aulas; en el extremo opuesto, estos cursos de metodología sugieren actividades y material didáctico que son fáciles de utilizar y que deberían ser del agrado de los niños (por ejemplo, que los Suflitos son un material práctico para enseñar las bases de la aritmética). A los maestros principiantes se les proporciona información demasiado general como para poder aplicarla fácilmente, o tan concreta que es de escasa utilidad. Los maestros estadounidenses experi-

mentados se quejan de que la mayor parte de lo que saben debieron aprenderlo por su cuenta, en el terreno[6].

Por extraño que parezca, negamos a nuestros maestros el aprendizaje práctico que ordinariamente se considera un medio eficaz para formar a otros profesionales. Los maestros norteamericanos reciben su capacitación en cursos pedagógicos de numerosos alumnos y luego en salas de clases en que permanecen unos pocos meses como alumnos en práctica. Ninguno de nosotros permitiría que nos atendiera un facultativo que no haya permanecido varios años trabajando en un hospital bajo la supervisión de médicos experimentados. Sin embargo, estamos dispuestos a entregarles nuestros hijos a maestros que, tras completar sus estudios, sólo han tenido un breve período de práctica, a menudo bajo la supervisión de un maestro titulado que está tan ocupado que no tiene el tiempo ni la energía para dedicarse en forma cuidadosa y crítica a capacitar a un principiante. En los Estados Unidos, la formación de los maestros se vale del sistema 'nada o ahógate', que exige que el maestro principiante cumpla con la totalidad de las obligaciones docentes desde su primer día de trabajo[7].

Estrategias de formación

En los Estados Unidos, la formación de los maestros tiene lugar casi exclusivamente en *colleges* y universidades. Esto queda de manifiesto en el número de años que los maestros primarios norteamericanos siguen estudios académicos —más de dieciocho en el caso de los entrevistados, comparado con cerca de quince en Sendai y Taipei. Algunos maestros estadounidenses tenían grados de magister, mientras que ninguno de los asiáticos había pasado del grado de bachiller. De hecho, en China, algunos de los maestros sólo habían completado la enseñanza secundaria y muchos de los maestros de Taiwan sólo habían cursado cinco años de estudios después de graduarse del primer ciclo de la enseñanza básica (séptimo a noveno grado).

Por lo general, los maestros asiáticos tienen menos años de educación académica que los norteamericanos, porque las sociedades asiáticas no pretenden que la formación de los maestros tenga lugar principalmente en las universidades. Además, centran la atención en otros aspectos de la educación. Lo más probable es que en Asia los futuros maestros se especia-

[6] D. C. Lortie, *Schoolteacher: A Sociological Study* (1975).
[7] Ibídem, p. 72.

licen en ramos humanísticos y sigan cursos sustantivos —por ejemplo, matemáticas o literatura— y no de metodología de la enseñanza de estas materias. Los futuros maestros norteamericanos generalmente se especializan en educación y siguen muchos cursos de metodología de la enseñanza. En las entrevistas que sostuvieron con nosotros, expresaron que habían cursado un promedio de 4,8 asignaturas universitarias de metodología de la enseñanza de la lectura y de las matemáticas. (Es difícil evaluar el número de cursos que siguen en Taiwan y Japón, porque no son equivalentes a los de EE. UU. y porque algunos de los maestros no habían ido al *college*.)

En Asia, los maestros se capacitan principalmente sobre el terreno, *después* que se han graduado del *college*. En EE. UU. esta experiencia nunca ha sido un elemento importante en la formación de los maestros. En Asia, los egresados de los programas de formación pedagógica siguen considerándose novatos, que necesitan la orientación y el apoyo de sus colegas experimentados. En EE. UU., la capacitación prácticamente se interrumpe una vez que los maestros han obtenido su título. Es posible que los maestros norteamericanos sigan cursos adicionales vespertinos o durante las vacaciones de verano, o que periódicamente asistan a seminarios a nivel de distrito o de ciudad. Pero estas oportunidades no se consideran parte esencial del sistema de formación docente.

En Japón, el sistema de formación de los maestros se asemeja mucho a un sistema de ‘aprendiz’. Se realiza un esfuerzo sistemático por traspasar la sabiduría acumulada en la práctica docente a cada nueva generación de maestros y por seguir perfeccionando esta clase de práctica procurando que los maestros estén permanentemente en interacción profesional. El primer año de trabajo del maestro marca el comienzo de un proceso prolongado y complejo. De acuerdo con la legislación japonesa, los maestros principiantes deben cumplir un mínimo de veinte días de capacitación en el servicio durante su primer año de trabajo. Supervisan esta capacitación maestros experimentados, seleccionados por su capacidad de enseñar y su buena disposición a ayudar a sus jóvenes colegas. Haciendo uso de licencias de un año en que permanecen alejados de sus propios cursos, dedican su tiempo a observar a los maestros principiantes, a formular sugerencias para que mejoren su desempeño y a aconsejarlos acerca de los métodos de enseñanza más eficaces.

Además, los maestros japoneses, tanto principiantes como experimentados, deben perfeccionar sus técnicas de enseñanza mediante la interacción con otros maestros. Por ejemplo, el subdirector y los jefes de curso de la escuela organizan reuniones en la escuela. Estos profesionales experimentados asumen la responsabilidad de asesorar y orientar a sus jóvenes

colegas. Los jefes de curso también organizan reuniones para examinar métodos de enseñanza y elaborar planes y material didáctico para las clases. Las discusiones son muy pragmáticas y tienen por objeto a la vez mejorar los métodos de enseñanza y elaborar planes para clases concretas. Es posible que se dedique una reunión completa a discutir las formas más eficaces de formular preguntas sobre un tema o la manera más atrayente de captar el interés de los alumnos en una lección. Las reuniones de cada escuela se complementan con grupos de trabajo informales a nivel de distrito y con cursos que se dictan en centros de educación municipales o de las prefecturas[8].

La conversación que sostuvimos con una maestra japonesa nos da una idea de lo que ocurre en estos grupos de trabajo. La maestra y sus colegas pasan gran parte del tiempo juntas trabajando en planes de clase. Cuando finalizan un plan, una de las maestras del grupo dicta la lección a sus alumnos y las demás observan. Después, el grupo vuelve a reunirse para evaluar el desempeño de la maestra y formular sugerencias para mejorarlo. En su escuela, se celebra anualmente una 'feria de la enseñanza' a la que se invita a maestros de otras escuelas para que asistan a las clases. Los visitantes evalúan las clases y se premia al maestro que ha dictado la mejor clase.

En cierta medida, el equipamiento físico de las escuelas influye en las posibilidades de aprender de los demás maestros. En las escuelas japonesas y chinas, hay una gran habitación destinada a sala de profesores, en la que cada cual tiene un escritorio. Allí permanecen durante el tiempo en que no están en su propia sala, preparando clases, corrigiendo las pruebas de los alumnos y discutiendo las técnicas de enseñanza. A los maestros norteamericanos, que están aislados en su sala de clases, les resulta mucho más difícil discutir su trabajo con sus colegas. Sus escritorios y el material didáctico que utilizan están en su propia sala y, por lo general, el único espacio común de que disponen es una habitación abarrotada, en la que a menudo se guardan los suministros y la fotocopiadora de la escuela, junto con unas cuantas sillas y una máquina para hacer café. En sus visitas a la 'sala de profesores', los maestros rara vez tienen tiempo para trabar una discusión seria acerca de la política educacional o los métodos de enseñanza.

Los efectos de un plan de estudios común

A los maestros les resulta más fácil compartir ideas prácticas y técnicas con los demás cuando todos están enseñando la misma materia más o menos al mismo tiempo. Además, es más fácil enseñar si tienen

[8] R. Leestma, R. L. August, B. George y L. Peak, *Japanese Education Today* (1987).

acceso a material didáctico de buena calidad. Las casas editoriales y los fabricantes están dispuestos a invertir más recursos en la producción de material didáctico cuando saben que hay posibilidades de un mercado a escala nacional. En Japón, casi todos los maestros les piden a los alumnos que compren un 'juego de matemáticas', que es una caja de materiales muy coloridos y bien diseñados que se utilizan para ilustrar y enseñar los conceptos matemáticos básicos. Los cuadernos de ejercicios, los manuales para el maestro y los materiales auxiliares de instrucción venden bien porque están directamente relacionados con la materia que se enseña en clase. En Japón, la televisión nacional ofrece programas que muestran la forma en que los maestros experimentados enseñan determinadas materias o conceptos. En Taiwan, hay películas de video sobre esta clase de demostraciones, que abarcan todo el plan de estudios. En EE. UU., es posible que los planes de estudios de una ciudad e incluso de una escuela no sean compatibles. Como consecuencia de ello, los maestros norteamericanos no se sienten tan estimulados como los asiáticos a compartir experiencias entre sí o a sacar provecho de los éxitos y fracasos que han tenido sus colegas al enseñar una materia determinada.

El trabajo de enseñar

En Asia hay mucho mayor competencia por enseñar que en los Estados Unidos. En Japón, todos los años alrededor de doscientas mil personas rinden el difícil examen de certificación a nivel de prefecturas, pero en la práctica únicamente cerca de la quinta parte obtiene puestos docentes. El atractivo de la carrera docente para los estudiantes japoneses resulta evidente por el hecho de que los candidatos que fracasan la primera vez generalmente hacen reiterados intentos por aprobar el examen. En EE. UU., en cambio, los maestros titulados prácticamente siempre encuentran trabajo si están dispuestos a reubicarse.

En Japón, el sueldo y el prestigio de la docencia en relación con otras profesiones son bastante superiores que en los Estados Unidos. En el primero de estos países, los maestros ganan 2,4 veces más que el ingreso per cápita nacional, mientras que en EE. UU. sólo lo superan 1,7 veces. Además, todas las comparaciones demuestran que la relación entre el sueldo de los maestros japoneses y el salario promedio de diversas otras ocupaciones es superior a aquélla de los Estados Unidos[9]. Los jóvenes japoneses

[9] S. Barro, *A Comparison of Teachers' Salaries in Japan and the United States* (1986).

eligen la docencia sin tener que inquietarse de que su decisión les acarree un perjuicio financiero. En Japón, maestros y catedráticos universitarios ganan casi lo mismo y su prestigio es prácticamente equivalente. En EE. UU., el sueldo de un maestro primario tal vez sólo sea un tercio de lo que gana un profesor de *college* con años de experiencia comparables. La diferencia de condición se simboliza además por los términos que designan estas posiciones. *Sensei*, la palabra equivalente a profesor en Japón, es un término de respeto y deferencia con que se designa tanto a los maestros del primer grado como a los que imparten docencia universitaria —contraste interesante con la diferencia que entrañan los términos *maestro* y *profesor*, según se utilizan en los Estados Unidos.

El costo de la independencia

En los Estados Unidos, los maestros hacen gran hincapié en su independencia, que a menudo se logra a expensas de sentimientos de soledad y aislamiento de los demás adultos. La puerta cerrada de sus salas de clases indica que están a cargo, y aprecian el dominio que tienen sobre su tiempo, el plan de estudios y el manejo del curso. Pero al mismo tiempo, la puerta cerrada obstaculiza la comunicación, y separa al maestro de sus colegas. Los maestros se sienten aislados, no sólo unos de otros sino también de los padres. En vez de poder acoger a éstos como socios en la educación de los niños, a menudo se encuentran con padres que se hacen a un lado, dejándole al maestro su independencia, pero al mismo tiempo abandonándolo a su suerte.

Un elemento que aumenta aún más la sensación de aislamiento es el hecho de que los maestros norteamericanos, a diferencia de otros profesionales, no comparten un conjunto común de conocimientos y experiencias. Los cursos que ofrecen las distintas universidades y *colleges* varían, e incluso las asignaturas obligatorias a menudo no tienen mucho contenido común de un *college* a otro. La práctica docente, que es la única otra actividad en que participan todos los aspirantes a maestros, es una empresa solitaria, que sólo comparten con el maestro que está a cargo del curso y quizá con un número reducido de pasantes.

El horario de trabajo

En una reunión que sostuvimos en Beijing nos dimos plena cuenta del escaso tiempo de que disponen los maestros norteamericanos para interactuar con otros maestros. Discutíamos el horario de trabajo. Cuando les

dijimos a los maestros chinos que sus colegas norteamericanos de primer grado son responsables de su curso durante todo el día y que sólo disponen de una hora o menos al día fuera de la sala de clase, no podían creerlo. Cómo podía pretenderse que un maestro desempeñara bien su trabajo ¡si no disponía de tiempo fuera de clases para preparar y corregir lecciones, trabajar en forma individual con los distintos alumnos, consultar a otros maestros y preocuparse de todos los menesteres a que hay que atender diariamente en la escuela! Los maestros de Beijing no tienen más de tres horas diarias de clases, salvo que el maestro sea jefe de curso, en cuyo caso el total es de cuatro horas. En los tres primeros grados, las obligaciones docentes incluyen lectura y matemáticas; en los tres grados superiores de la enseñanza primaria, los maestros se especializan en una de estas asignaturas. Pasan el resto del día en la escuela cumpliendo con todas sus demás responsabilidades para con sus alumnos y la escuela. En Japón la situación es similar. De acuerdo con nuestras estimaciones, los maestros primarios japoneses sólo están a cargo de sus cursos un 60% del tiempo que se encuentran en la escuela. En realidad, la legislación japonesa limita el tiempo que el maestro puede estar al frente de un curso a veintitrés horas de una semana de seis días, esto es, no más de cuatro horas al día[10].

Por dos razones, los maestros asiáticos disponen de mucho tiempo en la escuela que no tienen que dedicar a la enseñanza. La primera es que los cursos son más numerosos. Como hay más alumnos por curso pero el mismo número de maestros en la escuela, la carga docente de cada uno de ellos puede ser menor. Les queda tiempo libre para reunirse y trabajar juntos todos los días, para preparar las lecciones del día siguiente, para prestar atención individual a los alumnos y para asistir a reuniones de maestros. Aunque los cursos son numerosos, la relación global entre alumnos y maestros en la escuela no difiere mucho de aquélla de los Estados Unidos.

El segundo factor que aumenta el tiempo de que disponen los maestros japoneses y chinos es el mayor número de horas que permanecen diariamente en la escuela. Los maestros de Sendai, Beijing y Taipei estaban allí un promedio de 9,5; 9,7 y 9,1 horas diarias, respectivamente, mientras que los norteamericanos sólo 7,3. Los maestros asiáticos llegan temprano a la escuela y se van tarde, lo que les da tiempo para reunirse y trabajar con los alumnos que necesitan ayuda especial. En cambio, en EE. UU. la mayoría de los maestros llegan a la escuela poco antes de que se inicien las

[10] Ministerio de Educación de Japón (Monbusho), *Basic Facts and Figures about the Educational System in Japan* (1983).

clases y se van poco después de que terminan. Esto no necesariamente significa que la semana de trabajo de los maestros estadounidenses sea más corta; lo que quiere decir es que deben dedicar las tardes y los fines de semana al trabajo escolar.

La vida profesional

La vida de un profesional difiere de aquélla de los demás trabajadores en algunos aspectos. Los profesionales tardan más en formarse y sus estudios son más especializados, tienen más libertad para organizar su tiempo, mayor responsabilidad personal para dirigir su propio trabajo y gozan del respeto que corresponde a las características y a la singularidad de su trabajo. Con todo, aparte de que asumen la responsabilidad de lo que enseñan, los maestros estadounidenses comparten pocas de estas características. Y no gozan del respeto de que, al menos algunos maestros, solían disfrutar en este país. Por ejemplo, en un artículo publicado hace poco en *The New York Times*, el maestro de una escuela secundaria de primer ciclo de Brooklyn se quejaba, al igual que muchos maestros, de que

> cuando equiparan a los maestros con 'otros trabajadores de la ciudad', a los críticos se les escapa el verdadero sentido de la cuestión. Los maestros tienen formación universitaria. Cumplen una función importante y particular en la sociedad. ¿Es justo que nos comparen con los que recogen la basura, los oficinistas y los trabajadores del tránsito?[11]

Que los maestros taiwaneses o japoneses formularan este tipo de queja sería inaudito. No hay duda alguna de que los maestros son profesionales. No obstante que hoy día en China los maestros quizá sean tratados tan injustamente como otros intelectuales, siempre conservan su apreciado status de profesionales.

Otra queja frecuente de los maestros norteamericanos se refiere a que año tras año tienen que enseñar la misma materia, en el mismo grado y en la misma escuela. Esto no les sucede tan a menudo a los maestros asiáticos, porque a lo largo de su carrera tienen oportunidades de desarrollo personal. Por ejemplo, los maestros primarios del Japón tienen a su cargo un grupo de niños durante dos años, y a veces hasta tres años. Esto significa que rara vez enseñan dos años seguidos en el mismo grado. Además, a

[11] *The New York Times*, noviembre 10, 1990.

lo largo de los seis años de enseñanza primaria los maestros se alternan periódicamente entre sí y cada tres a siete años son trasladados de una escuela a otra dentro de la ciudad.

Este sistema expone a los maestros a nuevos retos e ideas nuevas, a colegas y supervisores nuevos y a nuevos grupos de padres. Las posibilidades de ascenso a que da lugar el sistema de elegir administradores de escuela entre los maestros es un estímulo adicional. En Japón, los directores, subdirectores y profesores jefes comienzan como maestros. Uno de los principales requisitos para desempeñar funciones supervisoras es haber tenido éxito como maestro y no el hecho de haber seguido cursos de administración educacional —que en EE. UU. es el camino para acceder a un cargo administrativo.

Definiendo el maestro ideal

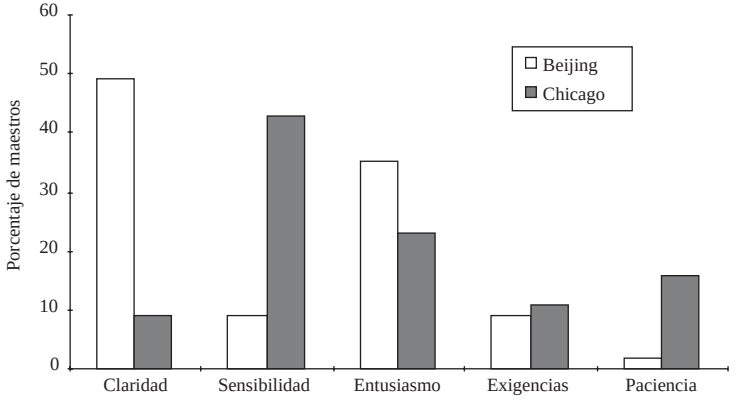
La idea que tienen los maestros y el público norteamericanos acerca de lo que es el maestro ideal, es muy distinta de la que se tiene en Asia. Así se desprende de las respuestas que dieron los maestros de Beijing y Chicago cuando les preguntamos cuáles eran las cualidades más importantes que debía reunir un buen maestro. Enumeramos cinco, a saber, habilidad para explicar claramente las materias, sensibilidad ante las necesidades y la personalidad de los distintos alumnos, amor por la enseñanza, fijarse estándares exigentes respecto del rendimiento que deben alcanzar los alumnos y paciencia. A continuación, les pedimos que seleccionaran la que consideraban más importante. Los resultados figuran en el Gráfico Nº 3.

Las cualidades que citaron más a menudo los maestros norteamericanos fueron la sensibilidad y la paciencia. Esto concuerda con el énfasis que se pone en EE. UU. en las diferencias que se dan entre alumnos y con la prioridad que se asigna a aumentar la autoestima de los niños. En el caso de los maestros chinos, menos de un 10% eligió la sensibilidad y la paciencia. Más bien, eligieron factores relacionados más directamente con la enseñanza de la materia: la habilidad para dar explicaciones claras y el entusiasmo por enseñar. Menos de un 10% de los maestros norteamericanos eligió la claridad en las explicaciones, lo que indica decididamente que no ponen demasiado énfasis en la enseñanza académica como función primordial del maestro.

En Asia, el maestro ideal es un actor consumado. Al igual que sucede con el actor o el músico, el contenido básico del plan de estudios se convierte en el guión o la partitura; la meta consiste en desempeñar el papel

o tocar la pieza en la forma más eficaz y creativa posible. En vez de cumplir con el plan de estudios como una simple rutina, la maestra avezada procura perfeccionar la presentación de cada lección. Utiliza las técnicas de enseñanza que ha aprendido e impone su propia interpretación de ellas en la forma que piensa que interesará y motivará a sus alumnos.

GRAFICO Nº 3: OPINIONES DE LOS MAESTROS ACERCA DE LAS PRINCIPALES CUALIDADES QUE DEBE REUNIR UN BUEN MAESTRO



En los Estados Unidos, se considera que una persona es buen maestro cuando es innovadora, ingeniosa y original. No basta con que exponga bien una lección corriente, y esto incluso puede menospreciarse como indicación de falta de talento innovador. Es como si se pretendiera que día a día los maestros norteamericanos escribieran su propia obra de teatro o crearan su propio concierto y luego lo ejecutaran con pericia y delicadeza. Ambos modelos, el del ejecutante experto y el del innovador, tienen un valor muy diferente en oriente y occidente. A nosotros los occidentales nos cuesta reconocer que la innovación no exige que la presentación sea totalmente original, sino que puede consistir en agregar detalles acertados, en ofrecer interpretaciones nuevas y en introducir modificaciones inteligentes.

Para enseñar bien hay que utilizar ejemplos; pero no todos los ejemplos son igualmente eficaces. En Asia, los maestros a menudo utilizan ejemplos que han sido perfeccionados por terceros y han llegado a ser parte

de la tradición de la ciencia de la docencia. A los maestros norteamericanos les cuesta decidirse a tomar ideas de otros maestros. Para ser innovadores, muchos maestros estadounidenses se empeñan en crear sus propios ejemplos. Por desgracia, estos ejemplos no probados a menudo son un fracaso, ya que desorientan al alumno en vez de ayudarlo a comprender un concepto.

Al respecto, cabe recordar lo que ocurrió en un curso de segundo grado en que la maestra trataba de explicar el concepto de promedio. En un intento por aprovechar el interés de sus alumnos por el baseball, comenzó la clase discutiendo el promedio de bateo. Efectivamente logró despertar el interés a los alumnos, pero bastaron pocos segundos para que varios de ellos se dieran cuenta de que la maestra no estaba familiarizada con las complejidades de las estadísticas del juego. Apenas ésta se percató de que se había metido en honduras, abandonó rápidamente el ejemplo. La verdad es que aunque hubiese entendido cómo se calcula el promedio de bateo, le habría costado mucho relacionar el ejemplo con lo que estaba tratando de enseñar. El uso del término 'promedio' en la jerga del baseball no guarda mucha relación con el procedimiento para calcular un valor medio, en este caso sumando cinco cifras y dividiendo por cinco.

Los niños difíciles

De más está decir que la principal función del maestro es enseñar a los alumnos el contenido de los planes de estudios. Sin embargo, los maestros norteamericanos se apresuran en señalar que la sociedad espera, entre otras cosas, que ellos sirvan de orientadores, sicólogos clínicos y encargados de imponer disciplina, y se ocupen de los escolares que tienen problemas personales graves y de aquellos a quienes no se les ha impuesto disciplina en el hogar. Esta multiplicidad de exigencias puede agotar incluso a los maestros más entusiastas.

"¿Cómo se las habría con éste?", nos desafió una maestra norteamericana. "Una de las niñas de mi curso llegó hoy diciéndome que en la mañana su madre le había dicho que la entregaría en adopción. La niña lloraba y, naturalmente, estaba muy perturbada. Me miró como si yo pudiera hacer algo por ayudarla a resolver su problema. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo voy a desprenderme de la impresión de que debería hacer algo? ¿Cómo puedo pretender que de ahora en adelante aprenda algo en mis clases?"

Y éste no es un caso aislado. Semana tras semana, los maestros norteamericanos tienen que tratar con alumnos que les plantean complejos y angustiosos problemas personales. En una obra publicada últimamente, Tracy Kidder reseña un año de la vida de Chris Zajac, maestra de quinto grado[12]. Lo más desalentador es hasta qué punto la docencia pasó a ser una cuestión secundaria en la vida de la señorita Zajac. No tenía tiempo para pensar en cuál sería el mejor sistema para enseñar un concepto determinado. En vez de eso, se pasaba los días y las noches atormentándose por Clarence, cuyos problemas de conducta perturbaban a todo el curso; por Jimmy, que se quedaba hasta altas horas de la noche viendo películas en la televisión y en clase no podía mantenerse despierto; y por los demás alumnos con problemas con que se encontraba a diario en su curso.

Lo que nos están diciendo la señorita Zajac y otras maestras es que la vida de muchos de sus alumnos es un conjunto tal de problemas que no les permite funcionar adecuadamente en la escuela. No es raro escuchar que las maestras se desesperan de lo poco que pueden lograr. La lista de problemas que mencionó uno de los maestros norteamericanos que entrevistamos revela el pesimismo de muchos maestros:

Familias que viven con un solo progenitor, madres que trabajan y no tienen tiempo de atender a sus hijos, niños que después de la escuela tienen que ir a algún tipo de guardería a esperar que sus madres vayan a buscarlos; niños que tienen llaves de su hogar y entran a una casa vacía a la espera de que llegue el progenitor. Los alumnos tienen tantos problemas personales y familiares que a duras penas pueden salir adelante.

En estas circunstancias, ¿cómo podrían los maestros concentrarse en la tarea de enseñar? ¿Cómo se podría manejar la situación de modo de que los alumnos puedan concentrarse en lo que se supone que estén aprendiendo? Pedimos a los maestros de primer grado de Beijing y Chicago que hicieran una estimación del porcentaje probable de niños que manifiestan diversos problemas de conducta en los primeros días de escuela. La impresión fue de que en China había menos niños indisciplinados, a quienes les resultaba difícil cumplir las instrucciones, o que se mostraran inquietos en clase, que en los Estados Unidos. Según sus maestros, los niños chinos faltaban menos al orden y a la atención y tenían menos probabilidades de quejarse de cansancio, dolor de estómago o de cabeza. Esta clase de problemas rebasa lo que pueden hacer el maestro o la escuela: sólo pueden resolverse a nivel de la familia y de la sociedad.

[12] T. Kidder. T., *Among Schoolchildren* (1989).

Cómo imponer disciplina

Para imponer disciplina se requiere gran energía. Ya sea porque los escolares norteamericanos son particularmente difíciles de manejar o porque los métodos que se aplican para imponer disciplina son inadecuados, lo cierto es que los maestros estadounidenses pierden mucho más tiempo en hacerlo que sus colegas de Asia.

Un indicador de la necesidad de disciplina es la medida en que los niños estadounidenses se dedican a actividades ajenas a la clase, como se señaló en el capítulo anterior. El conversar con los compañeros y el vagar por la sala reducen las posibilidades de que el niño aprenda y son potencialmente perturbadores para los demás. Este tipo de conductas no pertinentes, unidas al comportamiento inquieto y a la falta de atención en clase, a que a menudo se refieren los maestros estadounidenses, hacen que en el país la disciplina sea un problema generalizado y difícil de resolver.

Por lo general, las técnicas que se utilizan para mantener la disciplina en las escuelas norteamericanas se centran en el maestro. Es él quien mantiene quieto al curso, el que trata de calmar los alborotos y el que reprende al alumno de mala conducta. Los chinos y los japoneses entregan la vigilancia de la disciplina a los propios niños. Considérese la siguiente escena de la que fuimos testigos en una sala de clases de primer grado en Japón. La maestra trató de iniciar la clase diaria de matemáticas; los niños estaban alborotados y siguieron hablando en voz alta. La maestra se detuvo, fijó la mirada en los alumnos y luego llamó al alumno que ese día estaba a cargo del curso y le dijo serenamente: “Los niños están haciendo demasiado ruido. No puedo hacer clases hasta que guarden silencio”. La joven líder puso manos a la obra. De pie frente al curso anunció: “Por favor, pónganse de pie. Estamos haciendo tanto ruido que la maestra no puede hacer clases”. Los niños callaron rápidamente. La líder se volvió hacia la maestra y le informó: “Ahora estamos tranquilos”. Los alumnos le hicieron una venia a la maestra y se sentaron, prestando atención cuando la maestra dijo “Vamos a comenzar”.

Además de contar con los niños, los maestros asiáticos generalmente pueden confiar en que tendrán plena cooperación de los padres. Los padres norteamericanos no respaldan mucho los intentos de los maestros por imponer la disciplina a sus hijos e incluso suelen culpar al maestro de la mala conducta del niño. Tal vez defiendan al niño y censuren al maestro, ya sea directamente o por conducto del director. Cuando no hay cooperación y respeto mutuo entre padre y maestro, el niño puede astutamente poner a uno contra el otro y, en la pugna, debilitar la autoridad del maestro. Cuando surgen desacuerdos entre padres y maestros, los padres norteameri-

canos, en vez de ponerse de acuerdo con el maestro para resolver el problema, quizá traten de que su hijo sea trasladado a otro curso —situación que jamás se produciría en una escuela japonesa.

La definición del problema

Es fácil culpar a los maestros por los problemas que aquejan a la educación en los Estados Unidos, como suele hacer el público norteamericano. La acusación es injusta. Pese a que no les damos a los maestros la formación adecuada, pretendemos que por su propia cuenta se conviertan en maestros innovadores; los hacemos desempeñar el papel de sustitutos de los padres, orientadores y sicoterapeutas, y todavía pretendemos que sean buenos maestros; y los mantenemos tan atareados en sus salas de clases que les queda poco tiempo u oportunidad de perfeccionamiento profesional después de que se han titulado. Les exigimos que les dediquen a los niños prácticamente todo el tiempo de que disponen y no les damos oportunidad para que reflexionen sobre los métodos de enseñanza. Ser maestro primario en los Estados Unidos a fines del siglo veinte es algo extraordinariamente difícil, y las exigencias que le impone la sociedad norteamericana pueden extenuar hasta el más entusiasta. “Estoy bailando lo más rápido que puedo”, dijo una maestra resumiendo sus impresiones acerca de su trabajo, “pero con todo lo que se supone que tengo que hacer, sencillamente no puedo mantener el compás”.

Los estadounidenses no están convencidos de que la docencia deba ser una de las profesiones de mayor prestigio. No están dispuestos a invertir en formar maestros los recursos que gustosamente invierten en formar otros profesionales. Tampoco consideran que el maestro de sus hijos merezca el respeto y la remuneración que están prontos a otorgar a su médico o abogado. Es un hecho que los norteamericanos a quienes les atrae la docencia no se cuentan entre los alumnos más capaces de nuestros *colleges* y universidades. De hecho, año tras año los informes acerca de los puntajes de ingreso al *college* revelan que el promedio más bajo corresponde a los alumnos de los institutos pedagógicos. Dado el status que tiene actualmente la profesión docente, cabe preguntarse cómo podría romperse este círculo vicioso. ¿Cómo podemos pretender atraer alumnos sobresalientes hacia la profesión y dotarla del respeto que se merece?

Los críticos sostienen que los problemas que confronta el maestro norteamericano son únicos en su género, que para buscarles solución a los problemas que plantea la educación en EE. UU. no se saca nada con tener en cuenta cómo son los maestros japoneses y chinos. Uno de los argumen-

tos que se invoca con frecuencia es que los alumnos de un curso asiático generalmente tienen un solo idioma y pertenecen a una misma cultura, son disciplinados y atentos y no están perturbados por crisis familiares ni problemas personales, mientras que los maestros norteamericanos casi siempre tienen que habérselas con un grupo de alumnos heterogéneo y perturbado. Las situaciones que tienen que enfrentar los maestros en estas sociedades son indudablemente muy diferentes, pero mucho de lo que imprime a las aulas norteamericanas el aspecto de desaliño y falta de organización puede atribuirse, al menos en parte, a la manera en que están organizadas las escuelas y a la forma en que se entrena a los maestros.

Los intentos por preparar a los maestros para cumplir con su labor se ven debilitados por aquellos que piensan que la docencia es un arte, la expresión de una aptitud especial que algunas personas tienen y otras no. Necesitamos un sistema que permita que los maestros aprendan unos de otros y saquen provecho de los conocimientos acumulados por generaciones de profesionales experimentados. No podemos abandonar a los maestros a su suerte después de un solo semestre de práctica docente y sorprendernos más tarde de sus deficiencias. Muchos maestros chinos y japoneses nos han dicho que la contribución más importante a su perfeccionamiento profesional la debían a la interacción con otros maestros. Irónicamente, esta interacción es lo que el sistema docente norteamericano les ha negado a sus maestros.

Para reformar la educación en los Estados Unidos, hay que replantearse la profesión docente. Ningún otro cambio es tan importante como éste porque, en definitiva, todo esfuerzo por transformar la estructura o la organización de la educación depende de la pericia con que lo lleven a cabo los maestros.

LA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA*

Cuando se anuncia por los parlantes el comienzo de las clases, los niños chinos y japoneses se dirigen hacia sus puestos. El maestro se pone al frente de la sala en señal de que pronto iniciará la lección. El curso guarda silencio. ‘Comencemos’, dice la maestra en Sendai. Tras un breve intercambio de venias entre los alumnos y el maestro, éste comienza la lección explicando en qué consistirá la clase. Desde ese momento y hasta que el maestro resume la lección del día y anuncia ‘Hemos terminado’, la clase de la escuela primaria japonesa —al igual que las de Taiwan y China— consiste en el trabajo conjunto de maestro y alumnos para alcanzar los objetivos que se mencionaron al empezar la clase.

* Capítulo 9. (N. del E.)

Comparemos esta escena con la clase de matemáticas de un quinto grado que visitamos hace poco en los Estados Unidos. Tan pronto el maestro logró que los alumnos le prestarán atención, les recordó que era martes, 'día de banda' y que los alumnos que pertenecieran a ella debían dirigirse a la sala de música. 'Los encargados de preparar el boletín informativo de hoy, reúnanse en ese rincón', continuó. Luego, comenzó la clase de matemáticas con los alumnos restantes repasando la solución a un problema de cálculo de la tarea para la casa que les había dado el día anterior. Tras este breve repaso, hizo que los alumnos fijaran su atención en el pizarrón, donde había anotado el trabajo del día. A continuación, el maestro pasó gran parte del resto de la clase caminando por la sala vigilando cómo trabajaban los alumnos, contestando sus distintas preguntas o corrigiendo sus errores y diciendo 'shhh' cada vez que los alumnos empezaban a conversar entre ellos.

Este ejemplo es característico de las salas de clases de las escuelas norteamericanas que describimos anteriormente, donde, a diferencia de sus contrapartes asiáticas, los alumnos pasan más tiempo cambiando de una actividad a otra que en actividades académicas, más tiempo trabajando por su cuenta y menos recibiendo instrucción del maestro; donde los maestros se lo pasan trabajando individualmente con algunos alumnos y preocupándose de problemas de conducta.

El presente capítulo centra la atención en el proceso de enseñanza que se lleva a cabo en las salas de clases norteamericanas y asiáticas. Tratamos de aclarar los principios que aplican los maestros de las distintas culturas. Nos centramos especialmente en las clases de matemáticas y no en las de materias tales como lectura, donde las diferencias culturales en cuanto a la manera de enseñar pueden estar determinadas más bien por el contenido de lo enseñado. Lo más probable es que enseñar cómo se multiplican las fracciones trascienda las diferencias culturales, mientras que enseñar a los niños cómo leer los caracteres chinos tal vez exija aplicar métodos distintos de los que se utilizan para enseñar a los niños a leer el inglés.

Observando lo que ocurre en las aulas

La televisión, los libros y los periódicos a menudo contienen relatos en que se procura describir lo que sucede dentro de las aulas de las escuelas japonesas y chinas. Por lo general, ellos se basan en impresiones recogidas durante breves visitas a las salas de clases —de seguro seleccionados previamente a través de los contactos que tiene el visitante en Asia. Como

consecuencia de ello, es muy difícil medir el grado de generalidad de lo visto e informado. Los métodos de enseñanza de una cultura no pueden analizarse a menos que las muestras de escuelas y maestros observadas sean amplias y representativas.

Las descripciones ofrecidas aquí se basan en dos grandes estudios realizados en Japón, Taiwan, China y los Estados Unidos, en los cuales se observaron cursos de primero y quinto grado. A diferencia de las observaciones casuales, la ventaja de los estudios sistemáticos como los nuestros es que las observaciones cumplen con normas coherentes acerca de dónde, cuándo, quién y qué observar.

En el capítulo anterior examinamos algunos de los resultados de nuestro primer estudio, en el cual observamos 120 salas de clases durante 20 horas cada una en Sendai, Taipei y Minneapolis. El segundo estudio abarcó 204 salas de clases, 40 en Sendai y Taipei, respectivamente, 44 en Beijing y 80 en Chicago. Los observadores visitaron cuatro veces cada curso en un período de una a dos semanas, lo que dio un total de 800 horas de observación. Los observadores, que residían en la ciudad en que efectuaron las observaciones, tomaron tantas notas como pudieron sobre lo sucedido en cada clase de matemáticas. Las grabaciones que se hicieron durante las clases permitieron que los observadores llenaran posibles vacíos de información. Estos relatos detallados proporcionaron información aún más rica que la obtenida en el primer estudio, en el cual los observadores aplicaron categorías predefinidas para codificar el comportamiento observado.

Después de que los relatos se tradujeron al inglés, dividimos cada observación en segmentos, fijando su comienzo en el momento en que se producía un cambio de tema, materiales o actividad. Por ejemplo, un segmento empezaba cuando los alumnos guardaban sus libros y comenzaban a escribir en una hoja de trabajo, o cuando el maestro dejaba de disertar y pedía a algunos alumnos que escribieran la solución de un problema en el pizarrón.

Si se nos pidiera que describiéramos brevemente las características de las clases que se dictaban en Japón y China, diríamos que consisten en lecciones coherentes, expuestas en forma inteligente, relajada y no autoritaria. Los maestros a menudo hacen intervenir a los alumnos como fuentes de información. Las lecciones se orientan más bien a resolver problemas y no a memorizar hechos y métodos y recurren a numerosos tipos de materiales a modo de demostración. El maestro asume el papel de guía sabio y no de encargado de entregar información y de servir de árbitro de lo que es correcto. En la clase hay una frecuente interacción verbal, ya que el maes-

tro trata de estimular a sus alumnos a que produzcan soluciones a los problemas, las expliquen y las evalúen. Esta descripción revela lo equivocadas que son las ideas que tiene la mayoría de los occidentales acerca de los métodos de enseñanza asiáticos. Las lecciones no son una repetición mecánica ni están llenas de ejercicios. Los maestros no dedican mucho tiempo a disertar y los alumnos no son autómatas sino actores que participan directamente en el proceso de aprendizaje.

La coherencia

Una de las maneras de concebir una lección es compararla con un cuento. Un buen cuento es algo muy organizado: tiene comienzo, desarrollo y desenlace y sigue las alternativas de un protagonista que sale al encuentro de los desafíos y resuelve los problemas a medida que se le van presentando. Más que nada, un buen cuento mantiene interesado al lector en una serie de sucesos concatenados, cada uno de los cuales se comprende mejor en el contexto de los sucesos que lo precedieron y que le siguen.

En Asia, la instrucción se guía por este concepto de lección. Los planes de estudio incluyen lecciones coherentes, cada una de las cuales está concebida cuidadosamente para un período de clase que dura de cuarenta a cincuenta minutos, en los que se mantiene la atención en el desarrollo de algún concepto o técnica. Como un buen cuento, la lección consiste en una introducción, una conclusión y un tema coherente.

Lo anterior se ilustra con la siguiente reseña de una clase de matemáticas de quinto grado que observamos en Japón:

> La maestra entra a la sala llevando una gran bolsa de papel llena de objetos de vidrio tintineantes. Su ingreso a la sala con esta gran bolsa de papel es algo muy inusual, y cuando la ha puesto sobre su escritorio los alumnos no le quitan la vista de encima. ¿Qué contiene la bolsa? La maestra comienza a sacar objetos de ella y los va colocando uno por uno sobre su escritorio. Saca un jarro y un vaso. Una botella de cerveza causa risas y sorpresa. Pronto tiene seis receptáculos alineados sobre su escritorio. Los alumnos siguen mirándola con atención, intercambiando miradas y tratando de entender a qué se debe este despliegue.
>
> La maestra, mirando con aire pensativo los receptáculos, dice: “Me pregunto en cuál de ellos cabría más agua”. Se levantan manos y la maestra pide a los distintos alumnos que le digan cuál es su impresión: “el jarro”, “la botella de cerveza”, “la tetera”. La maestra, de pie junto a su escritorio, reflexiona: “Algunos de ustedes pensaron una cosa, otros otra. No están de acuerdo entre ustedes. Tiene que

haber alguna manera de saber quién tuvo la razón. ¿Cómo podemos saber quién tuvo la razón?". Hay gran interés y la discusión continúa.

Los alumnos están de acuerdo en que para descubrir cuál es la capacidad de cada receptáculo, tendrán que llenarlos con algo. ¿Por qué no agua? La maestra encuentra unos baldes y manda a varios alumnos que vayan a llenarlos con agua. Cuando regresan, les dice "¿Qué hacemos ahora?" Se produce una nueva discusión y al cabo de unos minutos, los alumnos deciden que tendrán que utilizar un receptáculo más pequeño para medir la cantidad de agua que cabe en cada uno de los más grandes. Resuelven utilizar tazas, y uno de los alumnos advierte que tendrán que llenarlas todas hasta el mismo nivel, porque de lo contrario la medida no será igual para todos los grupos.

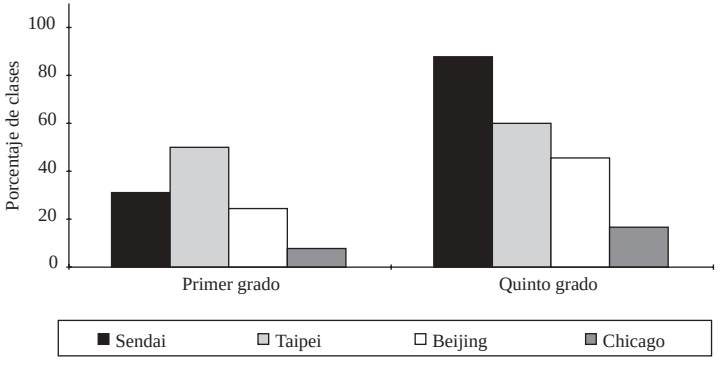
A estas alturas, la maestra divide el curso en sus grupos (*han*) y entrega a cada grupo uno de los receptáculos y una taza. Cada grupo llena su receptáculo, cuenta cuántas tazas de agua caben en él y anota el resultado en un cuaderno. Cuando todos los grupos han terminado la tarea, la maestra llama al jefe de cada grupo y le pide que dé a conocer las conclusiones a que han llegado y va anotando los resultados en el pizarrón. Ha escrito el nombre del receptáculo en una columna a la izquierda y anotado una escala de 1 a 6 a lo largo de la parte inferior. A medida de que cada grupo le va entregando sus conclusiones, la maestra dibuja una columna que representa la cantidad de agua que cabe en cada receptáculo: el jarro, 4,5 tazas; el florero, 3 tazas; la botella de cerveza, 1,5 tazas, y así sucesivamente.

Finalmente, la maestra vuelve a hacer la pregunta que hizo al comenzar la clase. "¿Cuál de los receptáculos tiene mayor capacidad de agua?" Repasa la forma en que resolvieron el problema, e indica que ahora la respuesta está en el gráfico de columnas dibujado en el pizarrón. A continuación, ordena los receptáculos sobre la mesa de acuerdo con su capacidad y anota en cada uno el orden que le corresponde, de 1 a 6. Finaliza la clase repasando brevemente lo que han hecho. El ejemplo no estuvo precedido de la definición de ordenadas o de abscisas, ni se discutió cómo hacer un gráfico —todo ello se desprendió claramente de la lección, y sólo al final la maestra mencionó los términos que describen los ejes vertical y horizontal del gráfico que habían dibujado.

Ahora comenzamos a darnos cuenta de qué manera los maestros asiáticos logran dar coherencia a sus lecciones. Las clases casi siempre comienzan con un problema práctico, como el ejemplo que acabamos de dar, o con un problema verbal anotado en el pizarrón. Los maestros asiáticos, mucho más que los estadounidenses, dan coherencia a sus clases iniciándolas mediante el planteamiento de un problema verbal (véase el Gráfico Nº 4). No es raro que estructuren toda una clase en torno a la solución de

un solo problema. El maestro lleva a sus alumnos a reconocer lo que se sabe y lo que se desconoce, y dirige su atención hacia los aspectos fundamentales del problema. Procura asegurarse de que todos los alumnos comprendan el problema, e incluso los aspectos mecánicos, como el cálculo matemático, se presentan en el marco de la solución de un problema.

GRÁFICO Nº 4: PORCENTAJE DE CLASES EN QUE SE OBSERVÓ QUE EL MAESTRO PLANTEABA A SUS ALUMNOS UN PROBLEMA TOMADO DEL MUNDO REAL, YA SEA ORALMENTE O POR ESCRITO



Antes de finalizar la clase, el maestro repasa lo aprendido y lo relaciona con el problema que planteó al comienzo. Los maestros norteamericanos no empiezan y terminan tan frecuentemente sus clases de esta manera. Por ejemplo, comprobamos que los maestros de quinto grado de Beijing dedicaban ocho veces más tiempo que los de Chicago a resumir la lección al término de la clase.

Los peligros que acechan a la coherencia

Incluso cuando la lección se ha concebido de manera que resulte lógica, los alumnos no siempre lo perciben así. Por ejemplo, considérese la siguiente descripción de una clase de primer grado sobre medidas, dada en los Estados Unidos:

> La maestra comienza por hacer que los alumnos comparen parejas de diversos objetos, para determinar cuál de ellos es más largo —un lápiz o un crayon, un clip o un trozo de tiza, etc. Pide a los alumnos que le digan a qué resultado llegaron.
> Tras varios minutos de discusión, la maestra dice: "Bien, saquen sus cuadernos de ejercicios y ábranlos en la página 12. Miren la primera línea, donde aparece el dibujo de un lápiz. Quiero que midan el escritorio en lápices. Averigüen cuántos lápices se necesitan para medir el escritorio de un lado a otro. Ahora, escriban la respuesta en la primera línea del cuaderno". Después de que los alumnos han hecho lo pedido, la maestra sigue: "En el renglón siguiente hay un dibujo de un crayon verde. Como no tenemos crayones verdes, usaremos crayones azules". En este punto, la maestra interrumpe la clase para distribuir crayones azules. Luego continúa: "Ahora, escriban el número de crayones azules frente a la línea que tiene el dibujo de un crayon verde".
> Cuando los alumnos han terminado el ejercicio utilizando varios otros objetos, la maestra dice: "Ahora, saquen su regla marcada en centímetros y midan cuántos centímetros hay de un extremo al otro del escritorio y anoten el número en la línea que figura en sus cuadernos". Cuando los alumnos terminan de hacerlo, la maestra resuelve que ha llegado el momento de comenzar la clase de lectura. Sin mayores comentarios, les dice a los niños que guarden sus cuadernos de ejercicios y saquen los libros de lectura.

Esta secuencia de actividades tenía todos los elementos necesarios de una lección lógica, pero seguramente los alumnos no se habrían podido dar cuenta de su coherencia, o incluso de su sentido, a menos que la maestra los hubiera ayudado a relacionar entre sí las distintas partes de la lección. Como no se explicó la finalidad ni la relación recíproca de las distintas actividades, la lección se convirtió en tres actividades inconexas: comparar objetos, medir el escritorio con los objetos y luego medir el escritorio con una medida estándar. Los alumnos difícilmente pueden haber comprendido la relación existente entre las actividades, esto es, que en los casos en que no es posible comparar directamente la longitud, hay que utilizar alguna unidad de medida y que para poder comparar una medida en diversos momentos y lugares, es preciso utilizar una medida estándar. La coherencia se perdió porque la maestra no relacionó entre sí los componentes de la lección. Pero también hay otras cosas que amenazan la coherencia.

Las interrupciones que no vienen al caso a menudo hacen más difícil que los alumnos perciban las lecciones como un todo lógico. En nuestras observaciones de lo que ocurre en las escuelas estadounidenses, el maestro interrumpió la fluidez de la lección con comentarios que no venían al caso, o bien la clase se interrumpió por otra persona en un 20% de las

clases de primer grado y en un 47% de las de quinto grado. En Sendai, Taipei y Beijing, en ambos grados las interrupciones no alcanzaron al 10% del tiempo. De hecho, en las clases de quinto grado de Beijing no se registró ninguno de los dos tipos de interrupciones en las ochenta horas de observación. En cambio, la clase de matemáticas a que asistimos en una escuela norteamericana fue interrumpida todas las mañanas cuando la encargada de la cafetería entraba a preguntarles a los niños cuáles eran sus planes para el almuerzo y cobró el dinero a los que tenían la intención de tomar el almuerzo caliente.

La coherencia también se altera cuando se cambia permanentemente de tema dentro de la misma lección. Esto quedó de manifiesto en muchas clases que observamos en los Estados Unidos. Por ejemplo, el maestro comenzaba con un segmento sobre medición, seguía con uno de suma simple, luego con uno para aprender a leer la hora y, finalmente, con un nuevo segmento de suma. Estos segmentos componen una clase de matemáticas, pero distan mucho de ser una lección coherente. En los Estados Unidos, un 21% de los cambios que se produjeron en una clase fueron para tratar temas distintos (y no para introducir materiales o actividades diferentes), comparado con sólo un 5% en Japón.

Puede ser que los maestros norteamericanos tiendan a cambiar de tema con tanta frecuencia porque quieran aprovechar la variedad como medio de atraer la atención de los alumnos. Los maestros asiáticos también tratan de variar, pero generalmente introducen actividades nuevas y no temas diferentes. El cambio de material didáctico, por ejemplo, de trabajar con números a trabajar con objetos, no amenaza necesariamente la coherencia, siempre que ambos materiales se utilicen para plantear el mismo problema de resta. En cambio, cuando se varía de tema se corre el peligro de destruir la coherencia de la lección.

La coherencia también corre peligro cuando los alumnos trabajan demasiado tiempo por su cuenta. Cuando los niños tienen que trabajar solos durante largos períodos sin que el maestro los dirija, comienzan a perder de vista el objetivo de la actividad. Como se ha dicho, los maestros asiáticos dan a los niños menos trabajo para realizar por su cuenta que los maestros norteamericanos; además, utilizan de manera diferente esta clase de trabajo. Por lo general, los maestros asiáticos alternan la discusión de los problemas con períodos breves y frecuentes de trabajo individual para permitirles a los alumnos que los resuelvan por su cuenta. Cuando el trabajo individual forma parte de la lección, instrucción y práctica se entrelazan estrechamente en un todo coherente. Los maestros pueden medir hasta qué punto los alumnos comprendieron la parte anterior de la lección observando la forma

en que resuelven el problema práctico. Combinando de esta manera el trabajo individual con la disertación a cargo del maestro, éste puede apreciar mejor la rapidez con que puede avanzar en la lección.

En cambio, los maestros norteamericanos tienden a relegar el trabajo individual a un solo largo período al final de la clase, cuando se convierte en poco más que una oportunidad para un ejercicio repetitivo. En Chicago, un 59% de todas las clases de quinto grado terminaron con un período de trabajo individual, comparado con 23% en Sendai y 14% en Taipei. Los maestros norteamericanos a menudo no analizan en clase este trabajo o su relación con la finalidad de la lección, ni evalúan en voz alta su precisión. En un 48% de las lecciones de quinto grado que se observaron en las escuelas norteamericanas, nunca se evaluó ni discutió el trabajo que realizaban los alumnos por su cuenta, comparado con menos de un 3% en las escuelas japonesas y 6% en las de Taiwan. Cabe preguntarse si el trabajo individual puede ser un medio de aprendizaje eficaz si no hay reacciones a él.

El uso de palabras y objetos

A menudo se dice que el objetivo de enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria es familiarizar a los niños con los símbolos matemáticos y su manejo. Por ejemplo, los alumnos deben aprender el sistema del valor posicional de los números y cómo manejar los números para sumar, restar, multiplicar y dividir. Además, se pretende que los niños comprendan el significado de estos símbolos y puedan aplicarlos a la solución de problemas. Para alcanzar estos objetivos, los maestros se valen principalmente de dos importantes medios para la representación matemática, a saber, el lenguaje y objetos concretos. La eficacia con que los utilicen los maestros es decisiva para determinar hasta qué punto los niños llegarán a comprender las matemáticas.

El lenguaje en la clase de matemáticas

Una de las funciones que desempeña comúnmente el lenguaje en las matemáticas es la de definir términos y establecer reglas para la realización de operaciones matemáticas. La segunda función, de carácter más general, es la utilización del lenguaje como medio para integrar lo que saben los niños sobre matemáticas y relacionar las operaciones matemáticas con el

mundo real. Comprobamos que los maestros primarios estadounidenses tienen mayor tendencia a utilizar el lenguaje para definir términos y enunciar reglas que los maestros asiáticos, quienes, en su empeño por darles sentido a las matemáticas, lo utilizan como medio para aclarar y profundizar los conceptos.

A continuación, se ofrece un ejemplo de lo que se quiere decir por definir términos y enunciar reglas:

> Una maestra norteamericana anuncia que la lección del día tiene que ver con las fracciones. Escribe en el pizarrón la fracción 1/2 y la utiliza para definir lo que significa una fracción en función de sus partes. Explica que el 2 representa el número total de partes y el 1 el número de partes representado en esa fracción. A continuación, define el numerador y el denominador y verifica si los alumnos recuerdan esas palabras. "¿Cómo llamamos a esto?", pregunta. "¿Y a esto?". Tras asegurarse de que los niños comprenden el significado de los términos, hace que los alumnos escriban diversas cantidades usando fracciones.

Los maestros asiáticos generalmente invierten el procedimiento. Al comienzo, centran la atención en la definición y la interpretación de un problema y, luego, en la discusión de las formas en que el problema puede representarse mediante la notación matemática. Sólo después, cuando los alumnos han adquirido experiencia en el uso de las fracciones, define los términos y enuncia las reglas. En el ejemplo siguiente, un maestro de tercer grado de una escuela japonesa dictaba una clase en que daba a conocer el sistema de notación matemática de las fracciones:

> La clase comenzó cuando el maestro preguntó cuántos litros de jugo (agua con colorante) cabían en una jarra grande. "Más de un litro", dijo un alumno. "Un litro y medio", respondió otro. Después de que varios ofrecieron una respuesta, el maestro les sugirió que echaran el jugo en jarras de un litro y vieran el resultado. La jarra tenía líneas horizontales que la dividían en tercios. El jugo alcanzó para llenar una jarra y parte de otra. El maestro señaló que el jugo llegaba hasta la primera línea de la segunda jarra —sólo se había llenado una de las tres partes. El procedimiento se repitió con un segundo grupo de jarras, a fin de ilustrar el concepto de un medio. Luego de señalar que en la primera jarra grande cabía un litro y tres partes de un litro de jugo, y uno y una de dos partes de un litro en la segunda, el maestro escribió las fracciones en el pizarrón. Continuó la clase preguntándoles a los alumnos cómo se podía representar dos partes de tres, dos partes de cinco, y así sucesivamente. Casi al término de la clase, mencionó por primera vez la palabra fracción y le dio

> nombre al numerador y al denominador. Finalizó la clase resumiendo cómo se pueden utilizar fracciones para representar las partes de un todo.

En el segundo ejemplo, el concepto de fracciones surgió de una experiencia interesante; en el primero, se introdujo primero como un concepto abstracto. Los términos y las operaciones del segundo ejemplo fluyeron espontáneamente de las preguntas que formuló el maestro y de la discusión ulterior; en el primero, el lenguaje se utilizó más que nada para definir y resumir reglas. Las matemáticas exigen en último término una representación abstracta, pero los niños las entienden más fácilmente si están incorporadas en un contexto significativo que si se las plantean como definiciones y reglas aparentemente arbitrarias.

Por lo general, los maestros asiáticos se inclinan más que los norteamericanos a hacer que los alumnos, incluso muy pequeños, participen en la discusión de conceptos matemáticos. En un ejemplo notable de que dejaron constancia nuestros observadores, una maestra japonesa de primer grado comenzó la clase haciéndole la siguiente pregunta a uno de sus alumnos: "¿Podrías explicarme la diferencia entre lo que aprendimos en la clase de ayer y lo que encontraste cuando preparabas la clase de hoy?". El alumno reflexionó largo rato pero luego respondió inteligentemente a la pregunta, explicando cómo se relacionan un rectángulo y un triángulo.

En las salas de clases estadounidenses las discusiones verbales consisten más bien en respuestas breves —orientadas, por ejemplo, a aclarar cuál es la forma correcta de aplicar un método de cálculo. Nuestras observaciones confirman lo que sugieren implícitamente nuestros ejemplos. Los maestros asiáticos se valen con mayor frecuencia que los norteamericanos de explicaciones verbales, que definimos como intervenciones —ya de los alumnos o ya del maestro— que se componen de más de una frase. Por ejemplo, este tipo de explicaciones figuraba en un 47% de los segmentos de clases observados en Japón, pero sólo en un 20% de las observaciones hechas en los Estados Unidos.

Representaciones concretas

Todos los alumnos de las escuelas primarias de Sendai tienen un 'juego de matemáticas', que es una caja de materiales coloridos y bien diseñados para la enseñanza de las matemáticas: fichas, un reloj, una regla, un tablero cuadriculado, triángulos de colores, cuentas, y muchos otros objetos atrayentes. En Taipei, todas las salas de clases tienen un juego

similar, pero más grande. En Beijing, donde hay mucho menos dinero para comprar esta clase de materiales, los maestros improvisan con papeles de colores, frutas de cera, platos y otros objetos fáciles de conseguir. En todos los casos, se considera que estos objetos son herramientas fundamentales para enseñar las matemáticas. Mediante la manipulación de estos objetos y razonando a partir de ellos los niños pueden establecer vínculos importantes entre los problemas del mundo real y las notaciones matemáticas abstractas.

Para representar los conceptos matemáticos, los maestros norteamericanos generalmente no utilizan tanto los objetos como los maestros chinos o japoneses. Por ejemplo, en quinto grado, los maestros de Sendai los utilizaban casi dos veces más que los de Chicago, y los de Taipei, casi cinco veces más. Además, hay una diferencia sutil pero importante en la forma en que los maestros asiáticos y norteamericanos utilizan objetos. Por ejemplo, a lo largo de los años de la enseñanza básica, los maestros japoneses emplean con frecuencia los artículos del juego de matemáticas, y en un alto porcentaje de las clases de primer grado incorporan el uso de fichas. A los maestros norteamericanos les gusta variar. Tal vez usen palos de Koyak en una clase, y bolitas, Suflitos, Chubis, fichas de juego de damas o de póker, o animales de plástico en otra. Piensan que hay que variar de objetos para mantener el interés de los alumnos. En cambio, los asiáticos consideran que el uso de una variedad de materiales de representación puede confundir al niño y, en consecuencia, dificultarle el uso de los objetos para representarse los problemas de matemáticas y resolverlos. Es más fácil comprender la multiplicación cuando se usan las mismas fichas de cuando los alumnos aprendieron a sumar.

Utilizando con acierto algunos objetos, los maestros asiáticos pueden enseñarles a los escolares de enseñanza primaria a comprender y resolver problemas que en los planes de estudio norteamericanos se introducen mucho más adelante. A manera de ejemplo, cabe citar el caso de una clase de matemáticas de cuarto grado a la que asistimos en Japón. El problema planteado por el maestro era difícil para un alumno de cuarto grado y, en los Estados Unidos, generalmente no se enseña a resolverlo hasta que los alumnos han tenido clases de álgebra. El problema es el siguiente:

> En el curso de Akira hay 38 alumnos. Hay seis niños más que niñas. ¿Cuántos niños y cuántas niñas hay en el curso?

La clase comenzó con la discusión del problema y la forma en que los alumnos proponían resolverlo. Terminada la discusión, la maestra entregó a cada niño dos tiras de papel, una más larga que la otra, y les dijo a

los alumnos que las utilizarían para ayudarles a razonar sobre el problema. Pidió a los alumnos que pusieran las tiras una al lado de la otra y resolvieran cuál de ellas representaba a los niños. "La más larga", dijo uno de los alumnos, "porque hay más niños". Otro señaló que la porción en que la más larga sobresalía respecto de la más corta representaba el número mayor de niños que de niñas que había en el curso. A continuación, se fue desarrollando el método para resolver el problema a medida que la maestra, mediante hábiles preguntas, iba conduciendo a los alumnos a la solución: el número de niñas se encontró tomando el total de ambas tiras, restando 6 para que las tiras fueran del mismo largo y luego dividiendo por 2. Como es natural, el número de niños podía encontrarse sumando 6 al número de niñas. Con esta representación visual concreta del problema y mediante una cuidadosa orientación de parte del maestro, hasta los alumnos de cuarto grado pudieron comprender el problema y su solución.

Maestros, alumnos y fuentes de conocimiento

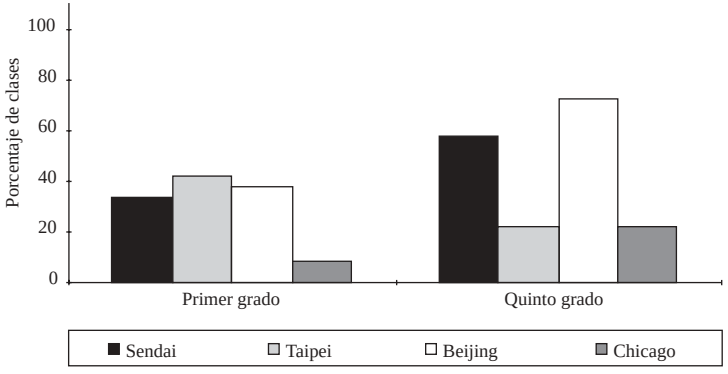
Un estereotipo occidental común es que los maestros asiáticos son personas autoritarias que sólo proporcionan información y que pretenden que los alumnos presten atención y memoricen las respuestas o métodos correctos en vez de formarse ellos mismos sus conocimientos. Tal vez esto sea cierto de los profesores secundarios de Asia[13], pero, como se ha visto en los ejemplos anteriores, no tiene nada que ver con las decenas de maestros primarios que hemos tenido oportunidad de observar.

Los maestros chinos y japoneses se valen de los alumnos para generar ideas y evaluar la exactitud de éstas (véase el Gráfico Nº 5). La posibilidad de tener que dar a conocer su propia solución y evaluar la que hayan propuesto los demás alumnos mantiene atentos a los alumnos asiáticos; pero, además, esta técnica cumple otras dos funciones importantes. Primero, incorpora a los alumnos en la lección, aumentando su interés porque los hace sentir que están participando en un proceso colectivo. Segundo, brinda una impresión más realista de la forma en que se adquieren los conocimientos. Por ejemplo, las matemáticas son un conjunto de conocimientos que han evolucionado gradualmente mediante un proceso de argumentación y demostración. Para comprender las matemáticas, es fundamental aprender a discutir conceptos matemáticos. Los niños chinos y japoneses comienzan a aprender estas técnicas desde el primer grado; muchos escolares de la enseñanza básica estadounidense nunca tienen la oportunidad de hacerlo.

---

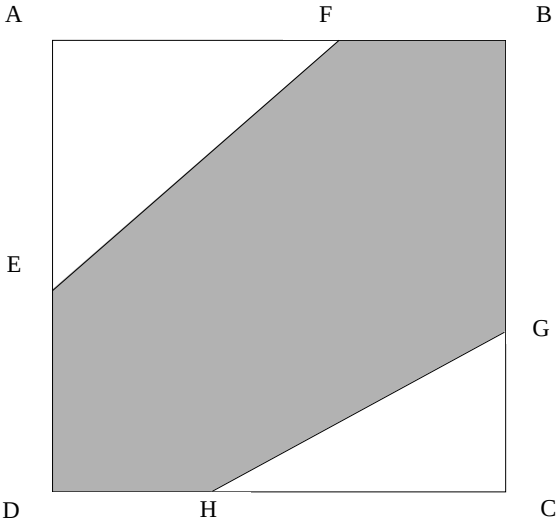
[13] T. P. Rohlen, *Japan's High Schools* (1983).

GRÁFICO Nº 5: PORCENTAJE DE CLASES EN QUE SE OBSERVÓ QUE EL MAESTRO UTILIZABA LAS RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS EN LA DISCUSIÓN DE LOS PROBLEMAS



El siguiente ejemplo sirve para ilustrar cómo utilizan los maestros asiáticos las ideas de los alumnos: una maestra taiwanesa de quinto grado comenzó la clase de matemáticas mostrando una figura de seis lados que había dibujado en el pizarrón (véase el Gráfico Nº 6). Preguntó a los alumnos cómo se podría calcular la superficie de la parte sombreada. “No quiero que me digan cuál es la superficie. Díganme simplemente qué método utilizarían para resolver el problema. Piensen en el mayor número de formas posibles de determinar la superficie de la zona que pinté con tiza amarilla”. Les dio a los alumnos varios minutos para que trabajaran en grupos pequeños y luego llamó a un miembro de cada grupo y le pidió que diera a conocer la solución a que había llegado el grupo. Después de cada propuesta —muchas de las cuales eran bastante complejas—, la maestra preguntó a todo el curso si el método propuesto servía para obtener una respuesta correcta. Después de haberse sugerido varios métodos distintos, la maestra planteó otro problema, que involucraba una figura diferente, y repitió el procedimiento. Ni la maestra ni los alumnos desarrollaron la solución del problema hasta que se habían discutido todas las soluciones posibles. La maestra dio término a la clase destacando la importancia de concebir soluciones diferentes. “Después de todo”, dijo, “en el mundo real tropezamos a diario con muchos problemas. Tenemos que acordarnos de que no hay una manera única de resolver cada problema”.

GRÁFICO Nº 6: PIENSE EN EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE MANERAS DE DETERMINAR LA SUPERIFICIE DE LA PARTE SOMBREADA



Lo más probable es que los maestros norteamericanos no den tantas posibilidades a sus alumnos de explayarse en sus respuestas. Por mucho que en las escuelas de los Estados Unidos parece existir mucha interacción —en las clases maestros y alumnos hacen preguntas y dan respuestas—, las preguntas del maestro generalmente pueden contestarse con un sí o un no, o con una frase breve. Buscan la respuesta correcta y siguen interrogando a los alumnos hasta que uno de ellos se la ofrece. “Como no podemos restar ocho de seis”, dice el maestro norteamericano, “Tenemos que... hacer qué”. Se alzan las manos. El maestro le pregunta a una alumna que dice “Pedir prestado”. “Correcto”, dice el maestro. Esta clase de diálogo no convierte al alumno en fuente válida de información porque, en definitiva, sigue siendo el maestro quien decide si las opiniones de los alumnos son o no acertadas. En las escuelas asiáticas la situación es muy diferente, porque allí seguramente se le pedirá al alumno que explique su respuesta y, a continuación, los demás tendrán que evaluar si ella es correcta.

Cuando se observa la forma en que los maestros evalúan las respuestas de los alumnos, se advierten claramente estas diferencias de concepto acerca del papel que corresponde a alumnos y maestros. La forma de evaluación que utilizan más a menudo los maestros norteamericanos es el elogio, método que rara vez se utiliza en Taiwan o Japón.

El elogio pone fin a la discusión y pone de relieve el papel del maestro como autoridad. Además, alienta al niño a contentarse con su desempeño, en vez de informarle sobre lo que tiene que mejorar. Los maestros chinos y japoneses tienen escasa tolerancia para los errores y cuando se cometen, rara vez los pasan por alto. Discutir los errores ayuda a aclarar las ideas erradas, estimula la argumentación y la justificación y hace participar a los alumnos en el apasionante proceso de evaluación de las ventajas e inconvenientes de las diversas soluciones ofrecidas.

Cabe preguntarse a qué se debe que los maestros norteamericanos a menudo se resisten a estimular una mayor participación de los alumnos en las clases de matemáticas. Una posibilidad es que se sientan inseguros acerca de la solidez de su propia preparación matemática. Para poner más énfasis en las explicaciones de los alumnos, el maestro necesariamente tendrá que ceder parte del control que ejerce sobre la conducción de la clase. Esto puede ser una perspectiva atemorizante para el maestro que no está preparado para evaluar la validez de las ideas nuevas que inevitablemente han de proponer los alumnos.

Sacando provecho de los errores

Nos impresionó mucho la forma diferente en que reaccionan los maestros asiáticos y norteamericanos cuando los alumnos cometen errores. Estos últimos generalmente los interpretan como una señal de que los alumnos no aprendieron la lección; en cambio, para los maestros chinos y japoneses los errores son un índice de lo que aún queda por aprender*, Estas interpretaciones divergentes conducen a reacciones muy distintas: turbación en el caso de los niños norteamericanos y aceptación relativamente tranquila en el de los asiáticos. También se traducen en diferencias en cuanto a la forma en que los maestros sacan provecho de los errores.

En Japón, visitamos un curso de quinto grado el primer día que la maestra planteó el problema de la suma de fracciones de distinto denominador. El problema era sencillo: había que sumar un tercio y un medio. Se les dijo a los alumnos que resolvieran el problema y que luego el curso examinaría las soluciones que se propusieran.

Una vez que pareció que todos habían terminado el ejercicio, la maestra le pidió a uno de los alumnos que dijera cuál era su respuesta y que

* Los autores tratan este tema en el capítulo 5 de su libro *The Learning Gap. Why our Schools Are Failing and What We Can Learn from Japanese and Chinese Education* (1992). (N. del E.)

explicara cómo había llegado a ella. “La respuesta son dos quintos”, dijo. Señalando primero los numeradores y luego los denominadores, explicó: “Uno más uno son dos; tres más dos son cinco. La respuesta son dos quintos”. Sin decir palabra, la maestra pidió a otro alumno que diera a conocer su solución. “Si se expresaran en fracción, dos punto uno más tres punto uno son dos quintos.” Los alumnos presentes en la sala pusieron cara de extrañeza. La maestra, sin alterarse, le preguntó a una tercera cuál pensaba que era la solución. “La respuesta son cinco sextos.” A continuación, la alumna explicó cómo había encontrado el común denominador y había modificado las fracciones de manera que cada una de ellas tuviera ese denominador y luego las había sumado.

La maestra volvió a la primera solución. “¿Cuántos de ustedes piensan que ésta es la solución correcta?”. La mayoría estuvo de acuerdo en que no lo era. Aprovechó entonces la oportunidad para dirigir la atención de los alumnos hacia las razones por las cuales la respuesta era errada. “¿Qué es más grande, dos quintos o un medio?” El curso estuvo de acuerdo en que era un medio. “¿No les parece raro que sumando una cifra a un medio se obtenga una cifra inferior a ese medio?” Luego, la maestra explicó cómo el método que había utilizado la alumna llevaba a la extraña situación en que, al sumar un medio a otro medio, la respuesta seguía siendo un medio. De manera similarmente interactiva, examinó detalladamente cómo el segundo alumno había confundido fracciones con decimales para llegar a su sorprendente resultado. En vez de pasar por alto las respuestas erradas y centrar la atención en la solución acertada, la maestra sacó provecho de los errores de los alumnos para disipar dos ideas erradas acerca de las fracciones.

No nos ha tocado ver casos en que los maestros norteamericanos hayan respondido tan ingeniosamente a los errores de los alumnos. En un curso de segundo grado en que se enseñaba a los alumnos a restar con reserva, observamos que en varias oportunidades el maestro había dado ejemplos en que ella era necesaria. Todos se ajustaban al mismo patrón. Por ejemplo, en un problema que consistía en restar 17 de 23, el maestro preguntaba al alumno: “¿Podemos restar 7 unidades de 3 unidades?” El alumno respondía rápidamente “No”. A continuación, el maestro preguntaba a todo el curso qué habría que hacer, a lo que todos respondían al unísono “Pedirle prestado al vecino”, refiriéndose a la columna de decenas. En uno de estos intercambios, el maestro planteó el problema de restar 19 de 34 y preguntó a un alumno si se podían restar 9 unidades de 4 unidades. Esta vez, la situación fue distinta, porque el alumno respondió: “Sí, es menos cinco”. La maestra hizo caso omiso de lo que consideró una res-

puesta errada y se limitó a hacer la misma pregunta a otro niño. Entonces le dieron la respuesta que quería escuchar.

Quizá por la pronunciada influencia que ejerce la educación behaviorista, en virtud de la cual la situación debe disponerse de manera de que el que aprende evite los errores y sólo dé respuestas que puedan confirmarse, los maestros estadounidenses no hacen demasiado hincapié en el uso constructivo de los errores como método didáctico. Es posible que aprender acerca de lo que es equivocado apresure la comprensión del por qué los métodos correctos son adecuados, pero los errores también pueden interpretarse como un fracaso. Y los norteamericanos, que se resisten a aceptar que el desempeño de sus hijos se interprete como tal, se empeñan en evitar situaciones en que ello pueda suceder.

Tiempo para pensar

Los alumnos de las escuelas primarias de los Estados Unidos que ven una película de video de una clase de matemáticas japonesa seguramente reaccionarán ante el ritmo de ésta y encontrarán que es de una lentitud desesperante. Es cierto que se avanza lentamente, pero los resultados son notables. A los maestros japoneses les interesa que sus alumnos reflexionen y logren comprender a fondo las matemáticas. Cada concepto y técnica se enseña muy minuciosamente, con lo cual se elimina la necesidad de tener que volver a tratarlos nuevamente. Además, aumenta la probabilidad de que lo que los alumnos aprendieron en una clase les ayude a comprender la siguiente. Tal vez los ejercicios rápidos permitan lograr destreza en operaciones de cálculo, pero meditar toma tiempo y los maestros japoneses hacen lo posible por darles tiempo a sus alumnos para que lo hagan. Especialmente en los primeros grados, a menudo les recomiendan que no se apresuren en responder, sino que tengan calma y reflexionen.

En los Estados Unidos, las personas que se encargan de planificar los programas de estudio, los editores de libros de texto y los propios docentes parecen creer que los alumnos aprenden mejor resolviendo un gran número de problemas y no centrando la atención en unos pocos. Se hace hincapié en el hacer más que en el pensar. Los maestros norteamericanos atribuyen mucha importancia a su capacidad de abarcar un gran número de problemas e incluso consideran que ello es señal de que son profesores expertos. En un estudio realizado en los Estados Unidos en que se compararon maestros primarios experimentados y principiantes, se comprobó que los primeros trataban un número muy superior de problemas de

matemáticas en una sola clase que los segundos, lo que indica que a medida que aumenta su experiencia, los maestros se vuelven más partidarios de lograr que los alumnos abarquen gran cantidad de materia[14]. Esto contrasta con lo que sucede en Japón y Taiwan, donde los maestros se concentran en un número reducido de problemas.

El hecho de tratar únicamente algunos problemas no significa que el contenido de la clase sea pobre. En realidad, no parece ser éste el caso. Cuando se abarcan muchos problemas, tiende a repetirse el mismo contenido matemático con cada problema nuevo; cuando se plantean menos problemas, queda tiempo para el tipo de debate que transforma la solución de los problemas de algo que hay que memorizar en algo que se entiende.

El énfasis que ponen los japoneses en la reflexión no sólo se da en las matemáticas. Otros investigadores han observado el mismo fenómeno en las clases de lectura. Tras observar las clases de lectura en cuarenta cursos de kindergarten y enseñanza básica de Japón, Jana Mason y sus colegas informaron lo siguiente:

> La primera impresión que uno tiene es que se avanza con la rapidez del rayo y que no se pierde minuto ni movimiento. Estamos seguros de que en cierto sentido esta impresión es acertada. Sin embargo, de pronto nos dimos cuenta de que el ritmo con que se avanza a lo largo de los cuentos es muy pausado. Por ejemplo, en un curso de primer grado al que asistimos, se destinó la totalidad de una clase de 40 minutos a 29 palabras que describían un solo episodio de un cuento de 252 palabras. Nos causó gran impresión que, en una entrevista que sostuvimos después de la clase, un maestro de segundo grado a quien le habíamos presenciado una clase magnífica, nos dijera que su curso pasaba alrededor de dos cuentos al mes[15].

En los Estados Unidos y Japón, las razones a que obedecen las preguntas de los maestros son diferentes. En el primero, lo que se persigue con la pregunta es obtener una respuesta; en cambio, en el segundo, los maestros hacen preguntas para estimular la reflexión. El maestro japonés considera que una pregunta es mala si provoca una respuesta inmediata, porque ello indica que no provocó reflexión. Una maestra a la que entrevistamos nos contó acerca de las discusiones que sostenía con sus colegas sobre la forma de mejorar los métodos de enseñanza. "¿De qué hablan?", le

---

[14] G. Leinhart, "Expertise in Math Teaching" (1986), pp. 28-33; G. Leinhart, y J. G. Greeno, "The Cognitive Skill of Teaching" (1986), pp. 70-95.

[15] J. M. Mason, R. C. Anderson, A. Omura, N. Uchida y M. Imai, "Learning to Read in Japan" (l989), pp. 389-407.

preguntamos, a lo que respondió: “Gran parte del tiempo hablamos sobre las preguntas que podríamos hacer en clase —cuál sería la mejor manera de formularlas para que los alumnos reflexionaran y discutieran la materia. Una buena pregunta puede mantener ocupado a un curso durante mucho rato; una mala no pasa de provocar una respuesta sencilla”.

Cómo manejar la diversidad

Cada vez que nos referimos a nuestras investigaciones acerca de los métodos de enseñanza, alguien del público inevitablemente nos recuerda que la población en ambos países —Japón y China— es relativamente homogénea, mientras que los Estados Unidos son el crisol del mundo. ¿Podemos pretender que los métodos que se aplican en las sociedades asiáticas sean válidos para EE. UU., donde hay tal variedad de razas, etnias e idiomas?

El error de esta pregunta es que parte de la base de que lo que más dificulta la enseñanza es la variedad de ambientes sociales y culturales de donde provienen los niños. En realidad, mucho más grave que eso es la variabilidad de antecedentes educacionales que presentan los niños y, en consecuencia, su grado de preparación para seguir el currículo académico. Hay mayor variabilidad en el desempeño de los escolares norteamericanos en materia de matemáticas que en el de los japoneses, más que nada por la diversidad de barrios y de escuelas de donde proceden los niños. *Al interior de los distintos cursos,* la variabilidad en el nivel de rendimiento académico de los escolares norteamericanos y de los de Japón, Taiwan y China no es tan diferente. Aunque en los países de Asia prácticamente todos los alumnos de las escuelas primarias siguen el plan de estudios uniforme, siempre hay diferencias en cuanto a la medida en que los alumnos dominan las materias. Cuando Japón y otros países de Asia han logrado reducir la variabilidad, lo han hecho disminuyendo la discrepancia de los resultados de la educación entre las distintas escuelas primarias. Es un error sostener que la diversidad dentro de un mismo curso es un problema que aqueja sólo a los norteamericanos. En todas partes, los maestros tienen que habérselas con alumnos cuyos conocimientos y motivaciones son diferentes.

¿Cómo resuelven los maestros asiáticos la diversidad de conocimientos y técnicas que poseen sus alumnos? Desde luego, generalmente aplican una variedad de enfoques en su enseñanza permitiendo a los alumnos que quizá no comprendan uno de ellos, experimentar otras formas de presentación de la materia. Las explicaciones del maestro se intercalan con

períodos en que los alumnos trabajan con materiales concretos o se esfuerzan por encontrar su propia solución a los problemas. Continuamente se cambia de forma de exponer, de tipo de representación y de método de enseñanza.

En Asia, las maneras de enseñar florecen frente a la diversidad, al punto que algunas dependen de la diversidad para ser efectivas. Como hemos observado, pedir a los alumnos que sugieran soluciones alternativas a un problema da mejores resultados cuando éstos tienen experiencia en desarrollar muchas soluciones diferentes. En las aulas asiáticas, las soluciones erradas que, según se ha visto, suelen ser descartadas por los maestros norteamericanos, se convierten en tema de discusión y todos los alumnos pueden sacar provecho de ellas. Las escuelas norteamericanas tratan de resolver el problema de la diversidad separando a los alumnos en grupos o en cursos diferentes y dedicando gran parte de la hora de clases a trabajar individualmente con algunos alumnos. A juicio de los maestros asiáticos, la única manera de abordar el problema es concebir técnicas de enseñanza que se adapten a los distintos intereses y circunstancias de todos los alumnos del curso.

Además, los maestros asiáticos aprovechan el hecho de que la misma instrucción puede influir de manera diferente en los distintos alumnos, cosa que los norteamericanos suelen pasar por alto. En este sentido, los docentes asiáticos adhieren a lo que los occidentales consideraríamos un punto de vista constructivista del aprendizaje[16]. De acuerdo con este punto de vista, el conocimiento es algo que el niño debe construir y no un conjunto de hechos y técnicas que pueden ser impartidos por el maestro. Como los niños están ocupados en construir sus propios conocimientos, algunas de las funciones más importantes del maestro son formular preguntas estimulantes, dar tiempo suficiente para reflexionar y variar las técnicas de enseñanza de modo de que respondan a las diferencias en la experiencia previa de los alumnos. Mediante la aplicación de esta clase de métodos, los maestros asiáticos pueden dar cabida a las diferencias individuales en cuanto a la capacidad de aprendizaje, por mucho que la instrucción no se ajuste a la medida de cada alumno.

Quienes hayan visitado alguna vez una escuela asiática no podrán menos que estar de acuerdo en que los maestros chinos y japoneses son profesionales altamente competentes. Lo que a menudo no se aprecia es cuán inteligente y diestramente hacen avanzar a los niños a través de la amplia cantidad de materias que deben dominar en los seis años que dura la

[16] R. B. Davis, C. A. Maher y N. Noddings, “Constructivist Views on the Teaching and Learning of Mathematics” (1990).

enseñanza básica. Por cierto, en las aulas estadounidenses vimos casos de docencia excelente. Pero lo que más nos llamó la atención en nuestras observaciones y en la información que recogimos es lo extraordinariamente bien que enseñan la mayoría de los maestros asiáticos. Es la excelencia general de las clases en Asia lo que resulta sorprendente.

La definición del problema

Las técnicas que utilizan los maestros chinos y japoneses no son nuevas en la pedagogía —tampoco son extrañas o exóticas. En realidad, son las que a menudo recomiendan los educadores estadounidenses. Lo que demuestran tan elocuentemente los ejemplos tomados de China y el Japón es que, cuando se aplican en forma consistente, pueden producir resultados notables.

Por desgracia, estos métodos no han sido aplicados ampliamente en los Estados Unidos. Cabe preguntarse por qué. El principal obstáculo para que se desarrollen clases excelentes en este país es el hecho de que los maestros estadounidenses están abrumados de trabajo. Asimismo, convendría que los educadores norteamericanos estuvieran de acuerdo en que, bien llevadas, las clases dirigidas a la totalidad del curso pueden beneficiar a cada uno de los miembros del grupo. Sin embargo, incluso así, difícilmente podría lograrse la generalizada buena calidad observada en las aulas asiáticas a menos que se permitiera que los maestros dispongan de tiempo para concentrarse en perfeccionar sus lecciones.

Como carecen de la formación y del tiempo necesarios para preparar sus clases y de la oportunidad de compartir experiencias con sus colegas, a los maestros norteamericanos les resulta difícil organizar clases animadas, prácticas y coherentes. Para preparar clases bien estructuradas se necesita tiempo y para dictarlas en forma competente, se requiere energía. La mayoría de los maestros norteamericanos carece de ambas cosas. Dados el escaso tiempo de que disponen para preparar las clases y realizar consultas y su pesada carga de docencia, es admirable que los maestros norteamericanos puedan desempeñarse tan bien como lo hacen.

No hay duda de que el reto más importante que plantea la educación de los niños pequeños es la creación de nuevos tipos de escuela, en que las buenas clases sean de ordinaria ocurrencia. Para hacerlo, debemos preguntarnos cómo podrían introducirse reformas que permitan que los maestros norteamericanos practiquen su profesión en condiciones más favorables para su propio desarrollo personal y para la educación de los niños.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

American Educator (invierno 1990).

Banco Mundial (1985). *China: Issues and Prospects in Education,* Anexo 1. Washington, D. C.: Banco Mundial.

Barro, S. (1986). *A Comparison of Teachers'Salaries in Japan and the United States.* Washington, D. C.: National Center for Education Statistics, U. S. Department of Education.

Davis, R. B.; Maher, C. A.; y Noddings, N. (1990). "Constructivist Views on the Teaching and Learning of Mathematics". *Journal for Research in Mathematics Education.* Monografía Nº 4. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Gardner, H. (octubre 1989). Correspondencia personal.

——— (1990). "The Difficulties of School: Probable Causes, Possible Cures". *Daedalus* (primavera).

Kidder. T. (1989). *Among Schoolchildren.* Boston: Houghton Mifflin.

Leestma, R.; August, R. L.; George, B.; y Peak, L. (1987). *Japanese Education Today.* Washington, D. C.: U. S. Department of Education.

Leinhart, G. (1986). "Expertise in Math Teaching". *Educational Leadership,* 43 (7).

——— y Greeno, J. G. (1986). "The Cognitive Skill of Teaching". *Journal of Educational Psychology,* 78 (2).

Lortie, D. C. (1975). *Schoolteacher: A Sociological Study.* Chicago: University of Chicago Press.

Mason, J. M.; Anderson, R. C.; Omura, A.; Uchida, N.; e Imai, M. (l989). "Learning to Read in Japan". *Journal of Curriculum Studies,* Vol. 21, Nº 5.

Ministerio de Educación de Japón (Monbusho) (1983). *Basic Facts and Figures about the Educational System in Japan.* Tokio: National Institute of Educational Research.

Rohlen, T. P. (1983). *Japan's High Schools.* Berkeley: University of California Press.

The New York Times, noviembre 10, 1990.

U. S. Department of Education (1990). *National Goals for Education.* Washington, D. C.: U. S. Department of Education.

Walters, J.; y Gardner, H. (1986). "The Crystallizing Experience: Discovering an Intellectual Gift". En R. Sternberg y J. Davidson (eds.), *Conceptions of Giftedness.* Nueva York: Cambridge University Press. □

LOS DOCTORADOS EN CHILE

PERFIL Y CAPACIDAD CIENTÍFICA DE LOS PROGRAMAS EN CIENCIAS ACREDITADOS EN CHILE*

Manuel Krauskopf

Se sabe que la calidad de los programas de doctorado depende de la capacidad de investigación que concentra el centro académico que los imparte. Del análisis del desempeño científico reflejado en las publicaciones de los profesores que participan en los programas de doctorados en ciencias que ofrecen las universidades en Chile y que están acreditados por CONICYT, en este artículo se infiere su perfil, fortalezas y debilidades. Los indicadores, a su vez, permiten un ordenamiento cualitativo e informan objetivamente de la capacidad de investigación que sustenta a cada programa. Aunque algunos programas exhiben debilidades en el desempeño científico, la mayor parte de ellos valida la acreditación otorgada por CONICYT. Los resultados, en consecuencia, se contextúan en la precaria presencia que tiene la educación formal de cuarto ciclo en el país, donde se gradúan aproximadamente 30 veces menos doctores por millón de habitantes al año que en los países más desarrollados.

MANUEL KRAUSKOPF. Doctor en Ciencias. Actualmente es Vicerrector Académico de la Universidad Nacional Andrés Bello. Ex Presidente de CONICYT. Presidente de la Asociación Panamericana de Sociedades de Bioquímica (PABMB), Miembro de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) y del Comité Editorial de la revista *Scientometrics*, entre varias otras.

* El estudio fue financiado, en lo principal, por Fundación Andes (C-13028) y Gener.

Introducción

En el atardecer del segundo milenio, la educación se ha posicionado como el factor más determinante del desarrollo económico y de la movilización social. El avance del conocimiento y su progresiva complejidad motiva, sin embargo, permanentes ajustes en la vertebración de los ciclos educacionales. También cambios en su demanda. Es cada vez más frecuente que el profesional formado en los esquemas clásicos, altamente homogéneos e hiperestructurados, propios de la universidad napoleónica, se sienta entrampado para desenvolverse en un mundo que lo enfrenta permanentemente con materias desconocidas e imprevistas. No puede, pues, llamar la atención que los sistemas educacionales que están alcanzando el mayor reconocimiento hayan privilegiado una formación general de pregrado, en que el alumno juega un papel activo en la conformación de parte de su programa de estudios, y un postgrado formal, o cuarto ciclo educacional, constituido principalmente por las maestrías y doctorados.

Durante la última encuesta realizada entre los estudiantes que ingresaron a las universidades en Estados Unidos en 1998[1], sólo un 28% declaró su intención de finalizar su formación a nivel de pregrado. Notablemente, un 38,7% aspiraba a continuar estudiando para obtener un magister, un 13,5% un doctorado académico, un 7% un doctorado profesional que incluye medicina, medicina veterinaria y odontología, y un 3% un doctorado en disciplinas jurídicas. La situación en Europa, en contextos y esquemas educativos distintos, exhibe, no obstante, tendencias comparables. En efecto, el empleo de individuos formados en la ciencia de alto nivel es ahora una realidad creciente. Según Timpane[2], hay acuerdo completo: éstos son tiempos de cambios rápidos, de una explosión en la información. "El objetivo es entrenar y contratar individuos que puedan hacer de la explosión de hoy día la sinfonía de mañana".

La formación de cuarto ciclo es objeto de relevancia política en el mundo occidental[3]. Aunque no de manera explícita, las economías emergentes de la región están reconociendo la importancia que tiene el recurso humano de más alta formación. Consecuentemente, y por el prestigio que pretenden acrecentar, las universidades han aumentado su oferta de programas de doctorado.

---

[1] Véase "This Year's Freshmen: A Statistical Profile" (1999), p. A49.

[2] J. Timpane, "Growing Opportunities: European Careers and Graduate Programs for Life Scientists" (1997), pp. 690-696.

[3] B. Oden, "Research Training and the State. Politics and University Research in Sweden. 1890-1975" (1991), pp. 143-155.

El presente estudio acometió el examen de los programas de doctorado en ciencias acreditados por CONICYT el año 1997, a partir del análisis de la investigación realizada por el profesorado que los sustenta. Se analizó una nueva metodología para objetivar el perfil de los programas y el grado de competitividad que tiene la investigación donde se desarrolla el trabajo de tesis doctoral. Los resultados permiten distinguir algunos indicadores cuantitativos y cualitativos que contribuyen a reconocer la calidad de cada uno de los programas estudiados.

El doctorado en la universidad

La tradición universitaria contempla al menos dos tipos de doctorados. Aquellos que son esencialmente académicos y los vinculados a profesiones de corte tradicional[4]. El *doctorado académico*, probablemente mejor representado por el Ph. D. anglosajón, corresponde más bien a un grado académico de investigación y revela "que una persona domina los conceptos más avanzados en un área del conocimiento y ha desarrollado la capacidad para contribuir intelectualmente, de modo independiente, a ese campo del saber"[5]. Representa, por cierto, el más alto grado académico que confieren las universidades. Los *doctorados profesionales* tienen atributos claramente distintos de los anteriores. Están asociados a profesiones de tradición universitaria como la de médico, odontólogo, farmacéutico y médico veterinario. Su formación impone un ambiente de sostenida reflexión crítica cuya expresión más clásica se da en medios que desarrollan investigación. Es decir, donde un cuerpo académico se compromete, al menos parcialmente, en la creación y recreación de los conocimientos fundamentales y tecnológicos que nutren el avance de la profesión. A diferencia del doctorado académico, el profesional no supone que el estudiante se involucre sistemáticamente en investigación. Éste la vive a través de la experiencia de sus maestros. Pero, claro, como siempre, existen matices en la formación de doctorados donde se comparten vertientes académicas y profesionales. Ello ocurre, por ejemplo, en algunos doctorados vinculados a las ciencias jurídicas, la psicología, etc.

En Chile, donde la tradición profesionalizante de las escuelas ha entrampado el desenvolvimiento de la universidad como un todo, no se

[4] M. Krauskopf, "El doctorado es el grado superior que confiere la universidad" (1997b), pp. E24-E25.

[5] Véase Marvin L. Goldberger, Brendan A. Maher y Pamela Ebert Flattau, *Research Doctorate Programs in the U. S. Continuity and Change* (1995), p. 8.

otorgan doctorados profesionales. Aunque se reconoce el claro beneficio de la diversidad, persisten las presiones para mantener programas francamente tubulares, de escasa diferenciación, pensados por unos pocos para que una educación superior masificada responda a los complejos desafíos de la sociedad actual. Independientemente de las rigideces curriculares que existen, algunas universidades cautelan el desempeño de la investigación que otorga la atmósfera que se necesita en las escuelas de medicina[6], medicina veterinaria y odontología, a manera de ejemplo. Aun así, de acuerdo con nuestra tradición, no confieren el grado de doctor en la profesión respectiva. He sostenido[7] que la formación que entregan estas escuelas es francamente de competencia internacional. Por ello no debe llamar la atención que utilicen la denominación de doctores en su profesión, situación que en ocasiones provoca alguna polémica[8]. Es tiempo, eso sí, que se reflexione sobre la conveniencia de formalizar el contexto académico en que se desenvuelven las escuelas que de hecho confieren títulos profesionales calificados como doctorados en países industrializados y en algunas universidades latinoamericanas. Si las escuelas de medicina, medicina veterinaria y odontología otorgan, en efecto, una formación equivalente a la de sus congéneres en ambientes académicos similares, no existiría razón alguna para obviar el otorgamiento de un grado con el que estos profesionales han determinado reconocerse y que la tradición pública chilena utiliza para distinguirlos. También quedaría más en evidencia que su desenvolvimiento exige núcleos de investigación en las Ciencias Biológicas básicas que sustentan el avance científico-tecnológico implícito en la dinámica propia de la profesión. Del mismo modo, bibliotecas capaces de otorgar un moderno servicio de información y alerta bibliográfica adecuada.

Si la oficialización de los doctorados profesionales debe convocar nuestro interés, el desarrollo de los doctorados académicos, cuya oferta está creciendo, reclama, qué duda cabe, particular atención. Ambos doctorados suponen una atmósfera donde se realice investigación. Sin embargo, el doctorado académico exige, por su propia naturaleza, un compromiso sistemático con la investigación de punta por medio de la cual se forma individualmente a la persona docta en la materia.

---

[6] M. Krauskopf, M. R. Mackenzie, E. Krauskopf *et al*., "La investigación médica en Chile. Indicadores epistemométricos" (1993a), pp. 1191-1203.

[7] Véase M. Krauskopf, "El doctorado es el grado superior que confiere la universidad" (1997b), pp. E24-E25.

[8] Véanse cartas de C. Chadwick, *El Mercurio*, 4 de abril de 1999, p. A2; J. Miguel Obach, *El Mercurio*, 9 de abril de 1999, p. A2; Peter D. Lewis, *El Mercurio*, 19 de abril de 1999, p. A2; Nelson Rivera, *El Mercurio*, 20 de abril de 1999, p. A2.

En Chile, las oportunidades de proseguir estudios avanzados de cuarto ciclo han sido relativamente escasas, en especial a nivel de doctorado. Estos programas comenzaron a ser ofrecidos a finales de la década de los ’60 sólo en algunas universidades. No obstante, el arquetipo napoleónico que prevalece, aunque permitió el nacimiento y avance larvado de los doctorados, ha postergado de modo notorio la capacidad de generar conocimiento en nuestro propio país, puesto que impone una formación preconcebida esencialmente como única y unívoca, subestimando la diversidad necesaria para enfrentar y liderar los cambios que el progreso económico-social impone.

Aseveré, con fundamento, que en Chile debemos admitir la coexistencia de diversos modos de universidad[9]. Asimismo, que es imperativo que el país tenga algunas, por cierto las menos, que respondan al modelo de *research university*. Pero, claro, la clasificación de las universidades puede abordarse desde distintas perspectivas[10]. Pareciera, sin embargo, que asumir el modelo de universidad de investigación retrata un propósito institucional que responde a una necesidad precisa en la tarea colectiva por elevar el techo intelectual y el progreso socioeconómico de un país. Algunos incluso piensan que la universidad de investigación es la genuina universidad. Ello, porque en su misión se plantean como esencial conferir doctorados académicos. Rosovsky[11] no titubea en declarar que, para él, “entrenar Ph. D. es condición necesaria para el *status* universitario. Es lo que hace a la universidad una universidad”. Fundamenta su opinión sosteniendo que la formación de graduados de cuarto ciclo es la única que permite la sobrevivencia de la universidad al entrenar a las futuras generaciones de académicos. Claro está, las expresiones elitistas y fundamentalistas de distinto signo poco contribuyen a articular el portafolio de necesidades de un país. Así acontece respecto a la educación superior. Mantengo la convicción de que el presente reclama la coexistencia de universidades preeminentemente docentes con otras cuya misión esencial las obliga a la investigación que trasciende la retroalimentación que enriquece la docencia y que las distintas formas de ser universidad mantienen características esenciales que las vinculan recíprocamente[12]. Asimismo, cualquiera sea el modo que la universidad multidiversa tenga para expresarse, obliga antes que nada a la calidad, a la excelencia.

---

[9] Véase M. Krauskopf, *La investigación universitaria en Chile. Reflexiones críticas* (1993b).

[10] Véase The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, *A Classification of Institutions of Higher Education* (1987).

[11] Henry Rosovsky, *The University. An Owners Manual* (1990), p. 137.

[12] Véase M. Krauskopf, *La investigación universitaria en Chile. Reflexiones críticas* (1993b).

El escenario chileno

En las últimas décadas, las universidades experimentaron un crecimiento considerable en lo que concierne a la cantidad y tipo de instituciones comprometidas con la educación superior, profesorado y, ciertamente, población de alumnos. A fines de 1998 se pueden distinguir en Chile 66 universidades, 25 de las cuales reciben aporte fiscal directo y participan en el Consejo de Rectores, 7 son privadas autónomas, 8 están en el sistema de examinación, y 29 en el sistema de acreditación vinculado al Consejo Superior de Educación. Empero, sólo algunas universidades dan cuenta de más del 80% de la investigación de alta competitividad que se desarrolla en el país, la que durante la década de los '80 creció a un ritmo aproximado de 7% anual[13] como consecuencia de, probablemente, la instauración del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT)[14]. Según Clark[15], en muchos sistemas modernos de educación superior se comprende ampliamente que, sin ser deseable, el grado de fragmentación entre la investigación, docencia y el estudio es inevitable. No obstante, nadie duda que la reputación nacional e internacional de una universidad procede, en gran medida, de la percepción de su capacidad de investigación. Puesto que la fragmentación entre docencia e investigación existe de hecho, al menos en cierto grado, es posible mantener programas de pregrado sólidos, vigentes y competitivos en ausencia de investigación activa. Sin embargo, ello no es posible a nivel de postgrado, particularmente en la formación de doctorados.

En Chile, la oportunidad que tienen los talentos jóvenes para acceder a estudios avanzados es más bien escasa. Los doctorados todavía comprometen sólo a un número pequeño de universidades, las que a su vez los mantienen en forma marginal. Persiste, en general, un ánimo por competir en el pregrado y cuando existe un patrimonio intelectual que distingue a algunas universidades que realizan investigación de reconocida excelencia, internamente no se le otorga la atención debida. Esta situación queda claramente de manifiesto al cuantificar el número de doctores que se forman en Chile y compararlo con otros países.

---

[13] Ibídem.

[14] Véase el DFL Nº 33 del 15 de septiembre de 1981 publicado en el *Diario Oficial* el 27 de octubre del mismo año.

[15] B. R. Clark, "The Fragmentation of Research, Teaching, and Study. An Explosive Essay" (1991), pp. 101-111.

Como se desprende de la Tabla Nº 1, la formación de doctores, en el aspecto cuantitativo, es francamente baja en toda América Latina, y la posición de Chile es muy preocupante. Mientras los países avanzados, con los que deseamos interactuar, están graduando sobre 100 doctores por millón de habitantes al año, Chile apenas forma cuatro. La Tabla Nº 1 representa la información que se obtiene incluyendo a todos lo doctorados, independientemente de su área del saber. Si se piensa que el contingente de doctores que el país demanda está resuelto con la formación de avanzada de chilenos que obtienen un postgrado en el extranjero, es bueno examinar cuantitativamente este aspecto.

TABLA Nº 1: NÚMERO DE DOCTORADOS OTORGADOS

	Población total (x 10^{-6})	Nº de doctores/ Año	Nº de doctores/ millón hab./año
Brasil (1996)	160	2.972	≅ 19
Chile (1996)	14	55	≅ 4
Argentina (1990-94)	33	280	≅ 9
México (1995)	90	519	≅ 6
Francia*	56	7.700	140
Alemania*	61	7.700	126
España*	39	2.900	74
Estados Unidos (1995)	250	44.446	177
Holanda*	15	1.200	80

Se señala el número de doctorados otorgados por año en cada uno de los países indicados (tercera columna) y su relación con la población en los años indicados (entre paréntesis). Cuando no se indica el año (ver *), el número representa el promedio anual entre 1985 y 1990[16].

La Figura Nº 1 dimensiona y examina la situación de latinoamericanos que obtuvieron en 1992 su doctorado en los Estados Unidos[17]. En lo que concierne a Chile, y esta cifra no ha variado significativamente[18], se aprecia que el número de estudiantes chilenos que se gradúan de doctores

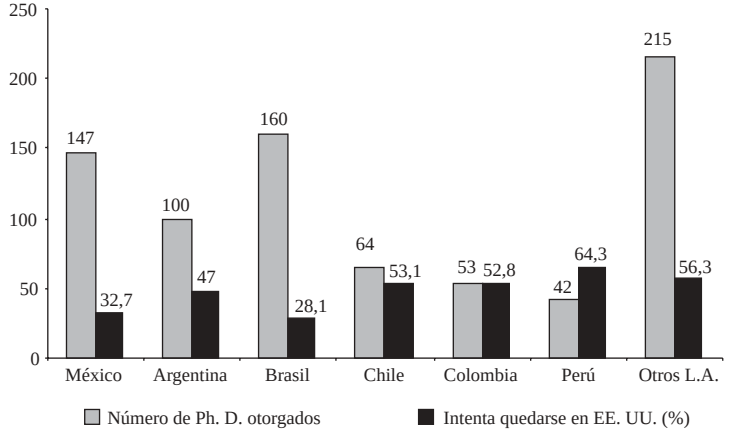
[16] En la construcción de la Tabla se usó la información contenida en: Vincent Courtillot (1992), pp. 479-480; Sep-CONACYT, *Indicadores. Actividades científicas y tecnológicas 1996* (1997); M. Krauskopf. *La investigación universitaria en Chile. Reflexiones críticas.* (1993b); M. Krauskopf (1995b); Consejo de Rectores Universidades Chilenas, *Anuario Estadístico* (1996); CAPES, Brasil; Osvaldo Barsky, *Los posgrados universitarios en la República Argentina* (1997); The Chronicle of Higher Education, *Almanac Issue* (1997).

[17] Véase National Science Foundation, *Science & Engineering Indicators 1996* (1996), pp. A70-71.

[18] Véase National Science Foundation, *Science & Engineering Indicators 1998* (1998), p. A90.

en Estados Unidos es similar al de los que se graduán en Chile. Así, estaríamos duplicando la cifra que se reporta en la Tabla Nº 1. Se podría presumir que en Europa e incluso en otros países de la región se forman otros tantos doctores. Pero, claro, este modo de sacar cuentas nos aportaría poco beneficio.

FIGURA Nº 1: DOCTORADOS CONFERIDOS EN EE. UU. A LATINOAMERICANOS EN 1992



Fuente: Vincent Courtillot, (1992), pp. 479-480; Sep-CONACYT, *Indicadores. Actividades científicas y tecnológicas 1996* (1997); M. Krauskopf. *La investigación universitaria en Chile. Reflexiones críticas.* (1993b); M. Krauskopf (1995b); Consejo de Rectores Universidades Chilenas, *Anuario Estadístico* (1996); CAPES, Brasil; Osvaldo Barsky, *Los posgrados universitarios en la República Argentina* (1997); The Chronicle of Higher Education, *Almanac Issue* (1997).

Como se observa en la Figura Nº 1, cerca de la mitad de los doctores chilenos intentan trabajar en Estados Unidos. Una fracción relevante lo consigue. Consecuentemente, retornan a Chile menos individuos que los que se gradúan, manteniéndose así la precaria cantidad de doctores en el país.

La infraestructura de investigación en Chile

En Chile, aparte de la baja inversión en ciencia y tecnología, subsiste una desarticulación que favorece distorsiones notorias en la asignación de recursos para la investigación. En efecto, cerca del 25,0% del financiamiento de la investigación se canaliza por medio de concursos competiti-

vos[19], y un poco más de la cuarta parte de este porcentaje se hace por el FONDECYT, el que ya se ha consolidado como un sistema transparente y claramente definido. Es paradójico, sin embargo, que la cuenta por los resultados de todo el gasto se le cobre a la fracción de investigadores que menos ha recibido y que es responsable de más del 80% de los conocimientos que se generan en el país. Estos últimos, conformando islotes de competencia, en forma especial en las universidades y en contados centros de investigación privados, representan el andamiaje sobre el cual se puede estructurar programas de doctorado de competencia internacional.

La instauración de FONDECYT[20], que comienza a funcionar en 1982, con un marco jurídico claro y preciso, acaso constituya uno de los escasos hitos en que se implanta una política pública para la ciencia y la tecnología conceptualizando la realidad de su presente y el imperativo de fortalecer la educación superior de cuarto ciclo. En efecto, el decreto en que se promulga FONDECYT, después de recordar que la ley define a las universidades como instituciones de educación superior, investigación, raciocinio y cultura que, en atención a sus funciones, deben atender adecuadamente los intereses y necesidades del país, al más alto nivel de excelencia[21], agrega: "la ley ha reservado en forma exclusiva a las universidades el otorgar el grado académico de Doctor, el que supone haber aprobado un programa superior de estudios y de investigación", y que "un programa de doctorado debe contemplar necesariamente una elaboración, defensa y aprobación de una Tesis, consistente en una investigación original, desarrollada en forma autónoma y que signifique una contribución a la disciplina de que se trate". Después de afirmar que "corresponde preferentemente a las universidades la investigación científica y tecnológica" y declarar que "se hace necesario establecer un sistema que promueva el desarrollo de la investigación científica y tecnológica a fin de permitir el mejor cumplimiento de los fines que la ley asigna a las universidades", se crea el FONDECYT que, a no dudar, se ha constituido en la columna vertebral del quehacer investigativo de competencia del país. Claro está, FONDECYT conformó, desde un comienzo, una parte de la estrategia global que en la década de los '80 se articuló para fortalecer la ciencia y tecnología en el país. El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para el

[19] Véase Dellacasa, *Indicadores científicos y tecnológicos. Informe 1998* (1999), Tabla 1.37, p. 119.

[20] DFL Nº 33, del 15 de septiembre de 1981, publicado en el *Diario Oficial* el 27 de octubre del mismo año.

[21] Véase DFL Nº 1 del 30 de diciembre de 1980, publicado en el *Diario Oficial* el 3 de enero de 1981.

Desarrollo, más conocido como PLANDECYT[22], fue el resultado de un intenso estudio y análisis que comprometió la participación de los investigadores, el sector productivo y el gobierno. A partir de este análisis[23] se acometió integralmente el enriquecimiento de la infraestructura humana y física para la ciencia y la tecnología, que incluyó dotar de equipamiento mayor a los principales centros académicos de investigación, generar un programa de becas de postgrado, establecer acciones que contribuyesen a formar una cultura en ciencia y tecnología, vertebrando siempre la acción subsidiaria del Estado con el cometido del Fondo de Desarrollo Productivo creado por CORFO y con el IV Concurso del Programa Nacional de Cooperación Científica (IV PNCT). Es de interés mencionar el grado de coherencia que alcanzaron las políticas de desarrollo de la ciencia y la tecnología a finales de los '80. En efecto, el IV PNCT orientó el total de los recursos de la cifra indicativa del PNUD 1987-1991 a fortalecer la investigación en el país, materia que se encuadró en la política del en aquel entonces ODEPLAN[24].

Durante la década de los ’90 se acrecentó aún más la relevancia de FONDECYT, el que se fue diversificando. Se configuró, adicionalmente, un nuevo instrumento: el Fondo de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FONDEF). Ambos fondos son administrados por CONICYT. Por otra parte, CORFO transformó el Fondo de Desarrollo Productivo en FONTEC y la Presidencia de la República, a través de la Comisión Asesora Presidencial en Materias Científicas, creó las Cátedras Presidenciales en Ciencia, que reconocen con un subsidio, al que se accede anualmente por concurso[25], una elevada productividad científica y una actividad sostenida y relevante en el ámbito de las ciencias básicas.

Hace poco, MIDEPLAN convocó a la comunidad científica para participar en la formación de Institutos y Núcleos Milenio, esfuerzo que pretende, con el apoyo del Banco Mundial, fortalecer la formación de recursos humanos de alto nivel para la investigación. Aunque es notorio que algunos de los instrumentos mencionados se traslapan y no parecen responder a una política bien articulada y global, y de seguro han creado una controversia pública[26], tienen el innegable mérito de ser altamente competi-

---

[22] Ministerio de Educación, *Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo* (1998).

[23] Véase M. Krauskopf, *La investigación universitaria en Chile. Reflexiones críticas* (1993b).

[24] Ibídem.

[25] Véase *Diario Oficial* del 9 de octubre de 1998, pp. 2-3.

[26] Véase “Milenio desata pugna gobierno-científicos”, *El Mercurio,* 29 de marzo de 1999; y “Mideplan defendió Proyecto Milenio”, *El Mercurio,* 30 de marzo de 1999. También véanse las cartas de Cristián Mallo C., “Iniciativa Milenio”, y de Eduardo Reyes, “Desarrollo científico”, *El Mercurio,* 8 de abril de 1999.

tivos y de convocar y demandar el compromiso del contingente intelectual de mayor profesionalismo en el quehacer que implica la investigación de punta. Siempre será de interés profundizar el análisis de materia tan importante para el país[27].

Con todo, y porque pocas veces se menciona, es prioritario reconocer, y cuanto antes, que la gran cantidad de recursos que se dice fomentan la ciencia y la tecnología no suponen exigencias y objetivaciones como los instrumentos descritos. Así, los fondos identificados demandan una fracción relativamente baja del presupuesto de cerca de 400 millones de dólares que el país declara destinar anualmente a la ciencia y la tecnología. Este aspecto es fundamental, ya que los resultados sólo pueden ser concordantes con la focalización de la inversión. Es decir, si se gasta políticamente en ciencia y tecnología donde no existe la capacidad para generarla, es difícil esperar resultados de éstas. Aunque la decisión de la inversión que hace un país para promover la investigación es de carácter político, la asignación de los recursos sólo puede ser definida técnicamente y por expertos con adecuado entrenamiento en la materia.

El acontecer en ciencia y tecnología es de la mayor importancia para el país. Un reciente informe de *Oxford Analytica Daily Brief*, distribuido electrónicamente[28], se refiere a "los obstáculos que enfrenta la investigación y desarrollo en Chile" y confiere a la situación particular significancia puesto que, después de una década de rápido crecimiento económico, la falta de investigación amenaza la continuidad de una expansión. La preocupación surge del análisis que destacara el *International Institute for Management Development's World Competitiveness 99 Yearbook*. Aunque Chile ascendió del lugar 26 al 25 respecto a 1998, en ciencia y tecnología —una de las ocho áreas que el informe examina—, el país alcanzó tan sólo el lugar 35, evidenciando su mayor debilidad y deterioro, ya que en 1996 ocupó, en este rubro, el lugar 26.

Desde hace mucho tiempo se sabe que en Chile es escaso el universo de investigadores con adecuada formación para realizar un trabajo independiente, original, competitivo e innovador. Los países con los que deseamos incrementar nuestras relaciones económicas nos llevan la delantera en la formación de doctorados y cuentan con el recurso humano en cantidad y calidad para exigir crecientes niveles de complejidad tecnológica cuando adquieren nuestros productos. Es bien sabido que la tecnología recoge per-

---

[27] Véase Jorge E. Allende y Jorge Babul, "Desarrollo científico-tecnológico" (1999), p. A2.

[28] Véase documento *Oxford Analitical Latin America Daily Brief* (1999), distribuido por la Biblioteca FAO/RLC.

manentemente avances de las ciencias fundamentales, a las que a su vez retroalimenta[29]. Nadie pretende convencer que un doctorado es sinónimo de magisterio superior. Sobran los ejemplos de ilustres personas y maestros preeminentes cuyo trabajo y obra han superado lo que un muy buen doctorado debiera facilitar[30]. Empero, el doctorado es hoy día un modo importante para acortar el camino de la más elevada formación y para prepararse a lo que la dinámica de los tiempos hace imperativo: saber trabajar con lo desconocido.

El doctorado en Chile

El doctorado en el país es relativamente nuevo. Le ha costado hacerse paso en una universidad esclerosada por sus rigideces y mallas profesionalizantes que, sin percibirlo, favorecen enseñar lo mejor del pasado, a lo más lo del presente, sin dejar espacios ni promover que el estudiante coprotagonice su formación de un modo activo[31]. Mientras en Argentina el doctorado tiene más de un siglo, en Chile su sistematización apenas tres décadas. Sin embargo, sólo en los años 80 Fundación Andes instituye muy selectivamente un sistema de becas para estudiantes de doctorado, el que también es incorporado en el PLANDECYT para ser administrado por CONICYT. Tanto Fundación Andes como CONICYT acreditan los programas de doctorado a los que sus becados pueden acceder utilizando principalmente evaluaciones de pares. Fundación Andes incorpora un contenido relevante de evaluadores extranjeros. Ambos sistemas han sido rigurosos y se han pronunciado regularmente sobre la calidad de los programas que respaldan. Empero, el número de becas concedidas es claramente insuficiente para las necesidades del país y están diseñadas para sostener a los alumnos más talentosos. En efecto, aunque en un comienzo se otorgó beneficios para sólo tres años y hoy día con alguna excepción se puede extender la beca a un cuarto año, en la realidad la formación de un Ph. D. exige bastante más tiempo.

Con frecuencia, en América Latina se diseñan políticas para la ciencia y la tecnología sustentadas en la experiencia o biografía de quienes las determinan. En lo que concierne a los doctorados, por muchos años nuestros mejores talentos, formados las más de la veces en escuelas profesiona-

---

[29] Véase M. Krauskopf, "Educación y formación de investigadores" (1992), p. A2.

[30] Véase M. Krauskopf, "El doctorado es el grado superior que confiere la universidad" (1997b), pp. E24-E25.

[31] Véanse comentarios en "Deserción amenaza a las universidades", traducido de *The Economist News*, en *El Diario Financiero*, 2 de junio de 1999.

les sobredimensionadas, después de un entrenamiento local en un centro de excelencia académica de connotación nacional obtuvieron su doctorado en el extranjero en el tiempo mínimo de residencia en el programa (aproximadamente 3 años). Pero, claro, la educación de cuarto ciclo, el doctorado al cual aspira un 13,5% de los alumnos que ingresan por vez primera a la universidad en los Estados Unidos, y los 100 Ph. D. por millón de habitantes que se gradúan cada año en Israel, que sólo tiene un tercio de población de Chile, no pertenecen en forma exclusiva al 5% superior de su cohorte. La sociedad requiere graduados de cuarto ciclo en gran número para elevar su patrimonio intelectual, científico y tecnológico y dominar con solvencia el lenguaje, que nutrido de un trasfondo cada vez más complejo, permite protagonizar genuinamente la interacción entre los países[32]. De acuerdo a los estudios que se realizan en Estados Unidos, de los 42.415 doctorados académicos que se confirieron en 1996, *la mediana* del número de años en que los estudiantes de doctorado estuvieron matriculados fue de 7,3 para economía y administración, 6,4 para ingeniería, 7,0 para ciencias de la vida y 6,7 para ciencias físicas[33]. Estos datos demuestran con claridad que las becas que se otorgan en el país, aparte de ser escasas, imponen una presión desmedida sobre la pequeña población que acomete los estudios de cuarto ciclo, ya que exige que todos alcancen su grado en un tiempo bastante más bajo que la mediana descrita en programas que se realizan en un entorno que ofrece mayores ventajas que el chileno.

Diversos estudios latinoamericanos han demostrado que los doctorados en ciencias que se otorgan en centros académicos de excelencia de la región no tienen nada que envidiar a los que, en promedio, se realizan en países más avanzados[34]. Es, pues, menester abordar con urgencia un claro fortalecimiento de las becas para incrementar el número de Ph. D. y preservar la calidad que demostraron los *primeros* programas de doctorado en ciencias que se estructuraron principalmente en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Respecto a lo primero, urge incorporar a un gran número de estudiantes a programas de doctorado del país, cuya calidad ha sido auténticamente cautelada. Una estrategia sería incrementar en forma directa los fondos que financian becas con la consideración debida a los tiempos reales que demandan los programas. Otra, que los diversos proyectos de investigación, incluidos los que en el espíritu de FONDECYT se asignan

---

[32] Véase M. Krauskopf, "APEC y la Ciencia" (1994), p. A2.

[33] The Chronicle of Higher Education, *Almanac Issue* (1998), p. 24.

[34] L. de Meis y P. H. Longo, "The Training of Brazilian Biochemists in Brazil and Developed Countries. Costs and Benefits" (1990), pp. 182-188.

directamente a los investigadores, incluyan subsidios para la mantención de estudiantes de doctorado, medida ampliamente aplicada en países industrializados. Está claramente establecido que la investigación doctoral y postdoctoral constituye una fuerza creativa incomparable para las universidades. En consecuencia, las universidades que mantienen programas de la calidad que se requiere debieran ampliar las facilidades para incorporar a un mayor número de estudiantes. Es de interés señalar que, si comparamos con otros países, en Chile los alumnos de doctorado participan muy poco en la docencia de pregrado. Investigar y enseñar son el mejor instrumento para aprender. Si las universidades contrataran temporalmente a sus estudiantes de doctorado, enriquecerían su docencia, contribuirían a incrementar la formación de cuarto ciclo en el país y a elevar el patrimonio científico nacional.

Si lo anterior constituye un imperativo, la calidad y rigurosidad de los programas de doctorado debieran comprometer el interés de las universidades que los importen y de la sociedad que hace fe de su excelencia. Si bien el número de doctores que se forman en Chile es francamente precario frente a la magnitud que caracteriza a los países desarrollados e incluso a algunos de América Latina, nada justifica avalar programas que sólo fingen calidad[35]. La capacidad científica y académica en Chile permite, por cierto, formar muchos más doctores. No obstante, el mero acto de comprometerse en el cuarto ciclo obliga a las universidades a asumir con responsabilidad la implementación de los cuadros básicos que sustentan la investigación y docencia para el cometido. El tema de la acreditación adquiere, en lo que concierne a los doctorados académicos, la mayor relevancia en países que no tienen tradición en la materia y que han progresado con un sistema que concentra su atención en escuelas profesionales. Si los doctorados que se otorgan no tienen competitividad y nivel internacional, se distorsiona toda la pirámide educativa del país y el reconocimiento de calidad de programas de pregrado o profesionales carecería de los referentes que hoy día caracterizan la dinámica de los grados y títulos de tercer y cuarto ciclo en las universidades de los países más adelantados. Esta materia debería preocuparnos.

Aunque es imperativo incrementar el cuarto ciclo, no puede hacerse sacrificando o remedando calidad. Reflexiono como biólogo. Si el material genético de una célula se lesiona, toda la progenie sufrirá la misma mutación. Recordemos a Rosowsky[36] cuando expresa que la formación de

[35] M. Krauskopf, "El doctorado es el grado superior que confiere la universidad" (1997b), pp. E24-E25.

[36] H. Rosovsky, *The University. An owners Manual* (1990).

Ph. D. es la única que permite la sobrevivencia de la universidad al entrenar a las futuras generaciones de académicos. Por algo, entre otros aspectos, las Agencias Regionales de Estados Unidos que acreditan a las instituciones universitarias exigen para las asignaturas profesionales un profesorado que exhiba, al menos en un 25%, formación doctoral. Parece recomendable, entonces, que la matriz del reconocimiento público esté asegurada por la opinión de pares expertos en la materia.

Además de corresponder a la naturaleza misma de la universidad, por el prestigio que pretenden acrecentar, algunas casas de altos estudios han iniciado o aumentado su oferta de programas de doctorado. Sin embargo, no todos los programas son claramente viables. Hoy día hay en Chile más programas de doctorado que graduados por año en este nivel. Es relevante, pues, contribuir al esfuerzo de Fundación Andes y de CONICYT, o de cualquier otra institución, para objetivar el perfil y calidad de los programas de doctorado que se imparten en el país.

Metodología

Se sabe que la reputación de un programa de doctorado se relaciona con la cuantía y calidad de la investigación que se realiza en el centro que otorga el grado académico[37]. Para objetivar el perfil de cada uno de los programas de doctorados en ciencias acreditados por CONICYT, dimensionamos cuantitativa y cualitativamente el trabajo científico producido por el profesorado de planta de cada programa. Se obtuvieron, en consecuencia, los nombres completos de los profesores asociados permanentemente (de planta) a los programas, información que suministró el encargado del programa o la escuela de graduados de la universidad. No se consideraron los profesores visitantes. Muchos doctorados mantienen un número relevante de profesores visitantes que se intercambian entre distintos programas, aspecto que enriquece la formación de los alumnos en un medio en que el número de académicos especializados es bajo. Aunque su aporte es significativo, la capacidad científica en la que el estudiante se embebe reside, sin embargo, en el centro en que se forma y hace su tesis. Por lo tanto, salvo contadas excepciones analizadas específicamente por la naturaleza de la asociación académica, sólo se consideraron los artículos de los profesores intramurales y que tuvieran al menos una dirección en Chile. Es decir que

[37] Véase Marvin L. Goldberger, Brendan A. Maher y Pamela Ebert Flattau, *Research Doctorate Programs in the U.S. Continuity and Change* (1995).

parte del trabajo, si correspondía a una colaboración interinstitucional, representara investigación realizada en el país.

Se diseñaron y construyeron indicadores de desempeño usando la información registrada en el *National Citation Report for Chile, 1981-1995,* del Institute for Scientific Information, ISI (Philadelphia). Fue Price[38] quien usó por primera vez las potencialidades de la base de datos del ISI, que sustenta buena parte de los estudios epistemométricos[39]. Esta empresa de información se especializó en la evaluación cualitativa de las revistas científicas y tecnológicas, extendiéndose en ocasiones al campo propio del arte. Desde un comienzo incorporó lo que —no exento de sesgo— fue considerado como lo más representativo internacionalmente. Entre las exigencias se cuenta la excelencia y el impacto que las investigaciones producen en el desarrollo científico. Con el correr del tiempo, las publicaciones registradas por el ISI han constituido lo que se conoce como *mainstream* o literatura de corriente principal. Actualmente ocho revistas chilenas que publican artículos que conciernen a literatura, filología, medicina, medicina veterinaria, historia natural, biología experimental, geología y química se registran regularmente entre las más de 7.000 que indexa el ISI.

Éste identifica semanalmente cada artículo publicado, registra su título, autores, disciplina, centro en que se originó la investigación, datos bibliográficos y cada una de las citas bibliográficas a que el artículo en cuestión hace referencia. La construcción de bancos de datos magnéticos, y últimamente ópticos, constituye la principal fuente de información sobre la materia. No obstante, éstos se expresan de distintos modos y nivel de cobertura.

Como toda metodología científica, la epistemometría demanda la máxima precisión y definición explícita de la naturaleza de las fuentes de datos utilizadas. Sólo de este modo pueden establecerse comparaciones válidas y comprenderse las diferencias que pueden surgir al examinar distintos estudios. Desafortunadamente, el grado de compenetración con las características propias de cada base de datos es insuficiente en ocasiones, y se mezclan idicadores que surgen de fuentes disímiles.

Los programas de doctorado en ciencias analizados corresponden a aquellos acreditados por CONICYT al 30 de abril de 1997, a saber:

---

[38] D. de Solla Price, *Little Science, Big Science* (1963).

[39] M. Krauskopf, "El doctorado es el grado superior que confiere la universidad" (1997b), pp. E24-E25.

Ciencias Biológicas:

Universidad de Chile
Doctorado en Ciencias mención Biología, submenciones:
- Biología Celular
- Microbiología
- Botánica
- Ecología

Doctorado en Ciencias Biomédicas, áreas de especialización:
- Biología Celular
- Bioquímica y Biología Molecular
- Genética
- Fisiología

Pontificia Universidad Católica de Chile
Doctorado en Ciencias Biológicas, menciones en:
- Ecología
- Biología Celular y Molecular
- Ciencias Fisiológicas

Universidad de Concepción
Doctorado en Ciencias Biológicas, especializaciones en:
- Biología Celular y Molecular
- Botánica

Universidad Austral de Chile
Doctorado en Ciencias, mención:
- Biología Celular y Molecular

Física:

Universidad de Chile
Doctorado en Ciencias, mención:
- Física

Pontificia Universidad Católica de Chile
Doctorado en Ciencias Exactas, mención:
- Física

Universidad de Santiago de Chile
Doctorado en Ciencia, mención:
- Física

Química:

Universidad de Chile
Doctorado en Química
Química

Pontificia Universidad Católica de Chile
Doctorado en Ciencias Exactas, mención:
Química

Universidad de Concepción
Doctorado en Ciencias, mención:
Química

Universidad de Santiago de Chile
Doctorado en Química
Química

Universidad Católica de Valparaíso
Doctorado en Ciencias, mención:
Química

Matemáticas:

Universidad de Chile
Doctorado en Ciencias, mención:
Matemáticas

Pontificia Universidad Católica de Chile
Doctorado en Ciencias Exactas, mención:
Matemáticas

Para cada programa se construyó una base de datos que contenía los artículos publicados por los profesores, para lo cual se identificaron las distintas formas en que se describía el nombre de éstos. Es sabido que los nombres españoles y el uso del segundo apellido generan un grado de dificultad en el registro del ISI. También la carencia de una constancia en su expresión por parte de los autores[40]. No se consideraron los resúmenes

[40] Véase M. Krauskopf, María Inés Vera, R. Albertini, "Assessment of a University's Scientific Capabilities and Profile: The Case of the Faculty of Biological Sciences of the Pontificia Universidad Católica de Chile" (1995a), pp. 87-100.

de congresos, discusiones o editoriales. El universo de artículos que provenían de los profesores de un determinado programa de doctorado, contenidos en el *National Citation Report for Chile, 1981-1995* del ISI, se depuró eliminando las duplicaciones que se generaban cuando existía coautoría de dos o más investigadores del mismo centro académico, exceptuando aquellos artículos que se adscribían a dos áreas disciplinarias distintas. El ISI clasifica los artículos vinculándolos a una o más disciplinas. El banco de datos final para cada programa contenía el nombre de los artículos registrados entre 1981 y 1995, la cantidad de veces que habían sido citados y la disciplina a la que pertenecían. Después de publicarse un artículo, otras publicaciones hacen referencia a éste; es decir, lo citan. Ello es considerado un indicador de calidad ya que prueba la utilidad de la contribución en el avance del conocimiento.

Para cada programa se determinó el número de artículos producidos y se seleccionaron las diez disciplinas que representaban la mayor cantidad de publicaciones. Se cuantificó su proporción en relación con el total publicado en Chile durante el período. Asimismo, el número de citas que provocaron entre 1981 y 1995 y el factor de impacto de éstas durante el período estudiado. Es decir, la suma de todas las veces que habían sido citados por los artículos en un área determinada, dividida por el número de artículos. Este factor de impacto constituye un índice objetivo de calidad.

Resultados

Ciencias Biológicas

La Tabla Nº 2 resume algunos indicadores cuantitativos que surgen de los 14 programas de doctorado que conciernen a las Ciencias Biológicas acreditados por CONICYT. Las menciones que se otorgan implican a cuatro universidades: la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile. Se establece para cada programa el número de profesores intramurales que fueron considerados para construir las bases de datos epistemométricas y las publicaciones/año/profesor. Los resultados fueron ordenados a partir de la productividad que exhibe el cuerpo de profesores/investigadores de cada programa.

Se distinguen con claridad algunas diferencias tanto en la cantidad de profesores intramurales de cada programa como en la productividad científica. Es decir, en el número de artículos que publicaron sus profesores

TABLA Nº 2: PUBLICACIONES (ISI)/AÑO/PROFESOR (1981-1995).
DOCTORADOS CS. BIOLÓGICAS ACREDITADOS POR CONICYT EL AÑO 1997

Universidad	Programa	Prof. Intram.	Pub./año/profesor
U. Chile. Fac. Med.	Bioquímica & Biología Molecular	12	1,38
PUC. Fac. Cs. Biol.	Biología Celular & Molecular	14	1,33
PUC. Fac. Cs. Biol.	Ecología	14	1,30
PUC. Fac. Cs. Biol.	Ciencias Fisiológicas	19	1,20
U. Chile. Fac. Cs.	Botánica	11	0,95
U. Chile. Fac. Med.	Genética	10	0,92
U. Chile. Fac. Cs.	Biología Celular & Molecular	21	0,88
U. de Concepción.	Botánica	9	0,85
UACh.	Biología Celular y Molecular	17	0,83
U. Chile. Fac. Med.	Biología Celular	12	0,79
U. de Concepción	Biología Celular & Molecular	17	0,75
U. Chile. Fac. Med.	Fisiología	9	0,71
U. Chile. Fac. Cs.	Microbiología	14	0,70
U. Chile. Fac. Cs.	Ecología	11	0,62

en el período 1981-1995. Pero, claro, las Ciencias Biológicas implican una variada gama de especializaciones. Algunas se ocupan preferentemente de aspectos moleculares y funcionales; otras tienen una orientación más naturalista. *El análisis debe cautelar siempre que se comparen universos que representen disciplinas similares*. Cada una exhibe, a no dudar, su propia sociología. Este aspecto es fundamental al momento de inferir un indicador de desempeño. La mitad de los programas tienen entre 12 y 21 profesores intramurales, mientras que el 50% restante, entre 9 y 12. La productividad, en términos cuantitativos, es bastante heterogénea, ya que se publicaron desde 0,62 artículos/profesor/año hasta 1,38. No fue posible distinguir grupos disciplinarios, por ejemplo naturalistas *versus* biólogos celulares o moleculares, que conformaran un rango propio de su universo.

Toda vez que el doctorado es el grado académico más elevado que confiere una universidad, compromete un nivel de exigencia que convoque el reconocimiento internacional. Para comparar las características que se describen en la Tabla Nº 2 con programas congéneres en países que tienen una sólida tradición de cuarto ciclo, se utilizó la información contenida en la Tabla Nº 3, que representa las cifras promedio de los doctorados que se han evaluado en Estados Unidos.

Se puede observar que, respecto a las publicaciones, en términos cuantitativos, 4 de los 14 programas acreditados en Ciencias Biológicas exhiben un rango similar al promedio de sus congéneres de Estados Uni-

TABLA Nº 3: PUBLICACIONES (ISI)/AÑO/PROFESOR (1988-1992). DOCTORADOS CS. BIOLÓGICAS

Programa	Facultad (# mediana)	% Prof. titulares	Pub./prof./año
Bioquím. & Biol. Mol.	31,05	50,56	1,52
Biol. Celular & Desarr.	31,60	45,96	1,40
Fisiología	21,29	53,43	1,60
Ecol./Evol. & Conducta	31,47	52,28	1,03

Fuente: Research Doctorate Programs in the U.S. Continuity and Change (National Academy Press, 1995).

dos. En lo que concierne al profesorado, aun considerando sólo a los profesores titulares, la mediana chilena es más baja. Es importante anotar que aproximadamente el 60% del profesorado total de cada programa tiene un *grant*[41]. En Chile, los profesores intramurales comprometidos con los doctorados en ciencias también requieren *grants* para dirigir las tesis de grado. Claro está, el referente norteamericano se desenvuelve en el contexto de una política que lo sustenta con subsidios cuantiosos para la investigación y centros académicos que reciben importantes recursos a través del *overhead*, razón, entre otras, para que las universidades otorguen atención preferente a estos programas.

Para conocer el perfil disciplinario y capacidad científica de cada programa se cuantificaron los artículos que correspondían a las distintas ramas de las Ciencias Biológicas, materia que contiene el banco de datos desde donde se extrajo la información del ISI. Asimismo se estableció el porcentaje de publicaciones en cada área disciplinaria respecto al total publicado por el profesorado del programa entre 1981 y 1995, seleccionándose las 10 cuantitativamente más relevantes (*top ten*). Del mismo modo, se calculó el porcentaje en que cada una de estas categorías concurría al total producido en Chile en esa área. Con el fin de objetivar la capacidad científica en términos cuantitativos, a cada una de las 10 disciplinas seleccionadas se le calculó el factor de impacto. Es decir, la razón entre las citas a que dieron lugar y el número de artículos publicados en la disciplina por el profesorado del programa entre 1981 y 1995. Este indicador se comparó con el factor de impacto que generaron todas las publicaciones chilenas en

[41] Véase M. Krauskopf y María Inés Vera, "Assessment of Scientific Profiles and Capabilities of Ph. D. Programs in Chile: A Scientometric Approach" (1997a), pp. 569-577.

la disciplina correspondiente. Así se configuró un indicador de desempeño cualitativo. Al relacionar el factor de impacto de una disciplina del programa de doctorado con el promedio nacional obtenido en la misma área del conocimiento, es posible *objetivar si la contribución media del programa es menor, igual o superior a la del país*. Se supone, por cierto, que un programa de estudios avanzados en ciencias donde se obtiene el grado académico de mayor nivel que otorgan las universidades en el mundo entero impone una capacidad científica en la materia que sobrepase a la que en promedio exhibe el país como un todo. Aún más, que ésta alcance los niveles cualitativos que representan el quehacer promedio en el mundo.

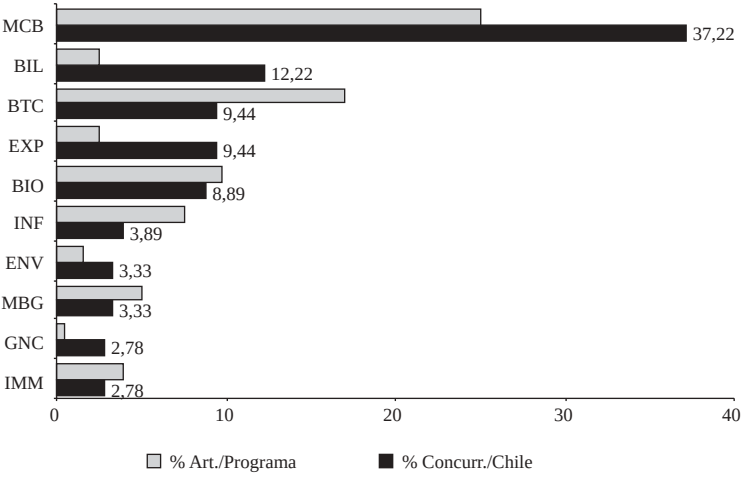
Para cada uno de los 24 programas de doctorado estudiados se obtuvieron los indicadores que permiten configurar los cuadros que se muestran en la Figura Nº 2. Los datos que se observan en la Figura Nº 2 representan el resultado obtenido al examinar el universo de 181 artículos publicados por los profesores del doctorado en Ciencias, mención Biología, en la especialidad de Microbiología que otorga la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Se recurre a este ejemplo porque el doctorado en Microbiología es el resultado de un notorio y ejemplar esfuerzo interuniversitario que convocó a la Universidad de Chile, a la Pontificia Universidad Católica de Chile y a la Universidad de Santiago. Advirtiendo la escasez de académicos e investigadores activos en el campo de la microbiología, un grupo de profesores logró amalgamar un programa que, como se puede visualizar en la Figura Nº 2, exhibe un perfil académico y científico muy coherente con su propósito.

El cuadro superior de la Figura Nº 2 muestra la distribución porcentual de los artículos por disciplinas del programa. Asimismo, el porcentaje en que éstas concurren al total publicado en el país. Encabeza la lista Microbiología (MCB), que conforma un 37,22% de los 181 artículos analizados, seguida de Bioquímica & Biofísica (BIL) con un 12,22%, Biotecnología & Microbiología Aplicada (BTC) con 9,44%, y Biología & Medicina Experimental (EXP) también con 9,44%. Le siguen, en los porcentajes que se indican, Biología (BIO), Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas (INF), Medio Ambiente y Ecología (ENV), Biología Molecular y Genética (MBG), Medicina General (GNC) e Inmunología (IMM).

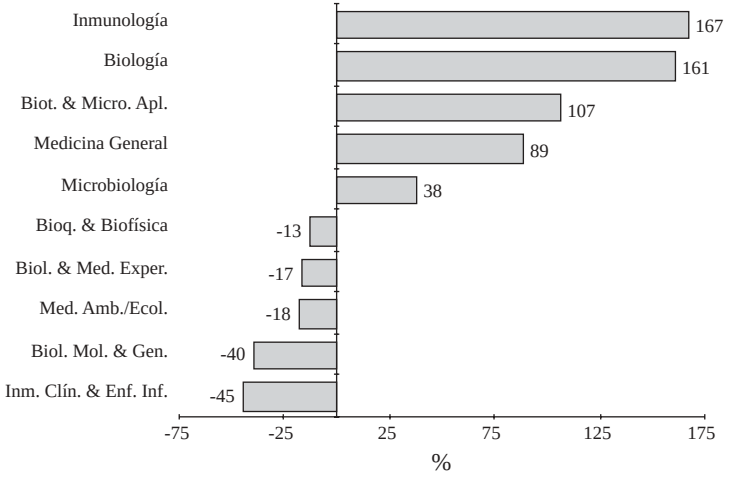
El cuadro inferior de la Figura Nº 2 muestra el factor de impacto relativo a Chile de las disciplinas identificadas como fortalezas cuantitativas en el doctorado de Microbiología. Inmunología, que tiene un nivel de investigación bajo, exhibe un elevado desempeño cuantitativo toda vez que sobrepasa en 167% el impacto medio nacional en la disciplina. También se

FIGURA Nº 2: DOCTORADO EN CIENCIAS, MENCIÓN BIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA U. DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS (PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO)

Distribución (%) de los artículos por disciplinas (ver texto) y concurrencia porcentual de éstas al total producido en el país en la misma disciplina. La muestra estuvo conformada por 181 artículos registrados entre 1981-1995.



Factor de impacto relativo a Chile para cada una de las disciplinas indicadas. El impacto medio de Chile está representado por el cero.



destaca la investigación categorizada en términos generales como Biología (161% superior al promedio del país), Biotecnología y Microbiología Aplicada, que excede en 107% al impacto nacional, Medicina General, que lo hace en un 89% y Microbiología que supera al promedio chileno en 38%. Se observa que no siempre coincide la fortaleza cuantitativa con el impacto cualitativo del promedio de las publicaciones. Las otras cinco disciplinas muestran un impacto menor que el que caracteriza a la producción nacional.

Los cuadros de la Figura Nº 2 perfilan y dimensionan la capacidad científica de este doctorado y demuestran sus fortalezas y debilidades. En el caso particular que se describe, es posible observar con claridad que la investigación que realizan los profesores del programa de doctorado en Microbiología es reconocida internacionalmente como perteneciente a las disciplinas que conciernen a la materia que se busca entregar al más alto nivel y que cualitativamente se distinguen fortalezas que destacan la contribución a nivel nacional, en áreas que conciernen al ámbito propio de la Microbiología.

Es importante señalar que tal situación no se observó en los 14 programas acreditados que conciernen a las Ciencias Biológicas. Es notorio que dos de los 14 programas no exhiben fortalezas significativas respecto a la investigación que sus congéneres publican desde Chile. Además carecen de un perfil disciplinario acorde con el ámbito que se pretende acrecentar al entrenar estudiantes de doctorado en la mención que otorgan. Un análisis cuidadoso de la información que se detalla en las Tablas Nº 4 a la Nº 9 permite conocer la capacidad relativa de cada programa en cada una de las disciplinas que se indican. Las disciplinas mencionadas representan las fortalezas cuantitativas de los programas estudiados.

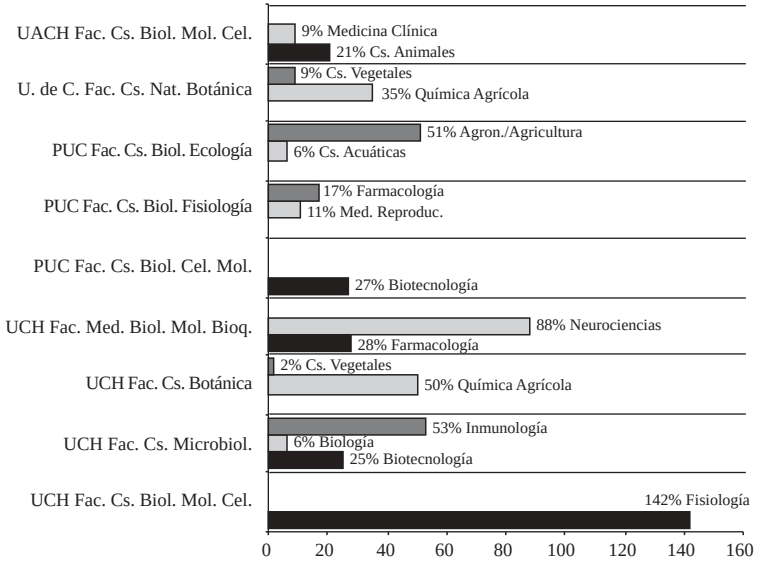
Al examinar el desempeño cualitativo de los programas de doctorado en Ciencias Biológicas con relación al factor de impacto que cada disciplina exhibió a nivel mundial en el mismo período estudiado, se observó que *9 menciones doctorales presentan fortalezas que exceden a la media del mundo*. Puesto que la ciencia del tercer mundo contribuye escasamente a la generación de nuevos conocimientos (América Latina como región alcanza apenas al 2% del total de artículos publicados)[42], el referente de la media mundial representa la actividad de los países más avanzados. Conse-

[42] M. Krauskopf, María Inés Vera, Vania Krauskopf *et al.*, "A citationist perspective on science in Latin America and the Caribbean, 1981-1993" (1995c), pp. 3-25.

cuentemente, el desempeño cualitativo que exhiben las 9 menciones en distintas disciplinas constituye un logro digno de reconocimiento que avala la excelencia de algunos programas.

La Figura Nº 3 identifica los programas y las disciplinas con el porcentaje en que el factor de impacto de éstas excede a la media mundial. Es visible que destaca Fisiología (142%) en el doctorado en Biología Molecular y Celular que dicta la Universidad de Chile. Asimismo Neurociencias (88%) en el doctorado en Biología Molecular y Bioquímica de la Facultad de Medicina de la U. de Chile. Este programa también se destaca en Farmacología, cuyo impacto excede al mundial en 28%. Agronomía y Agricultura sobrepasa su impacto en 51% en el programa de Ecología de la PUC, donde también se destaca Ciencias Acuáticas (6%). A su vez Química Agrícola distingue al doctorado en Botánica de la U. de Chile (50%), el que además muestra un buen desempeño en Ciencias Vegetales (2%). Estas mismas disciplinas se expresan cualitativamente fuertes en el programa de

FIGURA Nº 3: FACTOR DE IMPACTO RELATIVO AL MUNDO EN LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO EN BIOLOGÍA*



* Se expresa el % en que cada una de las disciplinas excede al factor de impacto que obtuvieron mundialmente en el mismo período.

Botánica de la Universidad de Concepción. Por otra parte, Biotecnología sobrepasa en 27% a la media mundial en el doctorado de Biología Celular y Molecular de la PUC. Esta disciplina también es relevante en la mención interuniversitaria de Microbiología con sede en la U. de Chile. Esta mención es mundialmente fuerte en Biología y en Inmunología (53%). El único programa acreditado de la U. Austral de Chile exhibe un desempeño destacado en Ciencias Animales (21%) y Medicina Clínica (9%). Finalmente, la mención Fisiología en la PUC sobresale en Farmacología (17%) y Medicina de la Reproducción (11%).

Los resultados que se detallan en la Figura Nº 3 identifican con absoluta claridad que en 9 de los 14 programas de doctorados estudiados existen islotes de competencia internacional. Sería de interés examinar si en términos de alumnos de doctorado estos programas no están subutilizados y si convocan el debido reconocimiento académico que se exprese en acciones concretas para su sustentación desde el punto de vista institucional y de las agencias que se ocupan del sistema de ciencia y tecnología en el país.

Siempre está la tentación de establecer un *ranking* que oriente sobre la oferta educacional tanto en pregrado como en postgrado. Mientras en el tercer mundo recién se comienza a debatir sobre la necesidad de información pública objetiva de la oferta académica, en países como Estados Unidos se ha hecho común encontrar en todos los quioscos de revistas números especiales de publicaciones como la del *U. S. News & World Report*[43] con "*Exclusive Rankings*", "*Best Graduates Schools*" y otras, que ordenan a las instituciones de educación superior en cada uno de los programas que ofrecen. Cada día son más las personas que leen y adoptan decisiones a través de este tipo de información. Pero, claro, la acreditación de las universidades norteamericanas, cuyo espíritu es ratificar periódicamente que la universidad es capaz de preocuparse de su propia calidad, tiene más de un siglo. Fueron, en efecto, las asociaciones regionales, esfuerzos privados entre universidades, quienes sentaron las bases para acreditar instituciones que se ocuparan sistemáticamente de la calidad de su cometido.

En lo que concierne a los programas de graduados, el *ranking* que establecen las revistas norteamericanas considera, entre otros factores, la calidad del profesorado, la capacidad en investigación que demuestran y la opinión de pares (reputación percibida en el mundo académico). La ciencia,

[43] Véase Colleges & Career Centers en www.usnews.com

inmersa en actividades complejas y factores multidimensionales, difícilmente se puede expresar en un *ranking* unidemensional[44].

Tres de los indicadores que se obtuvieron en el análisis de los programas de doctorado en ciencias acreditados por CONICYT se ordenaron para cada una de las disciplinas asociadas a las menciones.

El número total de artículos de corriente principal, las citas que obtuvieron esos artículos y el factor de impacto componen como indicadores las Tablas Nº 4, 5 y 6, que conciernen a las disciplinas asociadas a las menciones de Biología Celular & Molecular, Bioquímica & Biología Molecular, Fisiología, Genética y Microbiología que otorgan las universidades en sus programas de doctorado. La Tabla Nº 4 indica en la primera columna el nombre de la disciplina. Éstas corresponden a las que aparecen entre las diez primeras más investigadas en los programas analizados. En la segunda columna se identifican la universidad, facultad, nombre del programa y mención que ocupan el primer lugar respecto al número de artículos publicados en la disciplina. Entre paréntesis se señala este número. La tercera y cuarta columna identifican, como en la segunda, la información sobre la universidad y el programa que ocupan el segundo y tercer lugar con relación al número de artículos que produjeron en las disciplinas correspondientes.

La Tabla Nº 5 ordena el desempeño de los programas de doctorado con relación al número de citas que generaron los artículos producidos por su profesorado intramural entre 1981 y 1995. Al igual que en la tabla anterior, se identifican los tres primeros lugares con relación a cada una de las disciplinas más investigadas en los programas.

La Tabla Nº 6 describe el orden en que se ubica cada programa de acuerdo al tercer indicador de desempeño. Éste corresponde al factor de impacto, utilizado universalmente para dimensionar en forma cualitativa universos que se expresan a partir de investigación en ciencias básicas. Al igual que en las tablas anteriores, se identifican el primero, segundo y tercer lugar respecto a cada disciplina. En la primera columna se describe, además de la disciplina, el impacto promedio que ésta alcanzó en Chile durante el mismo período estudiado. Asimismo, se identifica el impacto mundial. La descripción de los programas que ocupan los tres primeros lugares incluye, entre paréntesis, el factor de impacto que exhiben en la

[44] M. J. Moravcsik, "¿Cómo evaluar la ciencia y a los científicos?" (1989), pp. 313-325.

TABLA Nº 4: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN 13 DICIPLINAS BIOLÓGICAS ORDENADOS POR NÚMERO DE ARTÍCULOS DE CORRIENTE PRINCIPAL PUBLICADOS EN 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Biología & Medicina Experimental	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas (74)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Mol. & Cel. (41)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. (39)
Biología Molecular & Genética	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Genética (36)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. (8)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Microbiología (6)
Bioquímica & Biofísica	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Mol. & Cel. (134)	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq, (108)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. (78)
Biología	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Microbiología (16)	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq. (6)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Ecología (4) UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Genética (4)
Biología Celular	UACH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Cel. & Mol. (43)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Mol. & Cel. (33)	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. (24)
Endocrinología & Metabolismo	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas (20)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Mol. & Cel. (5)	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq. (3)
Farmacología	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. (45)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas (41)	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq. (36)
Fisiología	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Fisiología (25)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas (21)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Mol. & Cel. (18)
Inmunología	UACH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Cel. & Mol. (9)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Microbiología (5) U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. (5)	
Medicina Clínica	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas (54)	UACH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Cel. & Mol. (8)	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Genética (7)
Medicina General	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Genética (49)	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Fisiología (27)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas (19)
Microbiología	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Microbiología (67)	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq. (28)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. (21)
Neurociencias & Comportamiento	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. (50)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas (36)	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Fisiología (23)

TABLA Nº 5: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN 13 DISCIPLINAS BIOLÓGICAS ORDENADOS POR EL NÚMERO DE CITAS DE CORRIENTE PRINCIPAL GENERADAS POR SUS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Biología & Medicina Experimental	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas **(709)**	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol* Biol. Cel. & Mol. **(207)**	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Mol. & Cel. **(182)**
Biología Molecular & Genética	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Genética **(210)**	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. **(39)**	UACH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Cel. & Mol. **(29)**
Bioquímica & Biofísica	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Mol. & Cel. **(1.759)**	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq. **(1.094)**	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Biol. Cel. & Mol. **(1.088)**
Biología	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Microbiología **(129)**	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq. **(23)**	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Genética **(8)**
Biología Celular	UACH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Cel. & Mol. **(485)**	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. **(352)**	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Mol. & Cel. **(347)**
Endocrinología & Metabolismo	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas **(207)**	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq. **(40)**	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Mol. & Cel. **(6)**
Farmacología	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas **(456)**	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq. **(440)**	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Biol. Cel. & Mol. **(202)**
Fisiología	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Mol. & Cel. **(676)**	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas **(180)**	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Fisiología **(141)**
Inmunología	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Microbiología **(135)**	UACH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Cel. & Mol. **(115**)	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Biol. Cel. & Mol. **(21)**
Medicina Clínica	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas **(509)**	UACH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Cel. & Mol. **(116)**	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Genética **(23)**
Medicina General	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Genética **(62)**	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas **(32)**	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Fisiología **(16)**
Microbiología	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Microbiología **(477)**	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. **(161)**	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq. **(139)**
Neurociencias & Comportamiento	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. **(368**)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Cs. Fisiológicas **(337)**	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq. **(236)**

TABLA Nº 6: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN 13 DISCIPLINAS BIOLÓGICAS ORDENADOS POR FACTOR DE IMPACTO 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Biología & Medicina Experimental	PUC-Fac. Ciencias Biol.	UACH-Fac. Ciencias	PUC-Fac. Ciencias Biol.
Impacto Chile 4,68	*Dr. en Cs. Biol*.	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Cs. Biol*
Impacto mundial 12,48	Cs. Fisiológicas (9,58)	Biol. Cel. & Mol. (5,91)	Biol. Cel. & Mol. (5,31)
Biología Molecular & Genética	UCH-Fac. Medicina	UACH-Fac. Ciencias	PUC-Fac. Ciencias Biol.
Impacto Chile 6,69	*Dr. en Cs. Bioméd.*	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Cs. Biol.*
Impacto mundial 21,44	Genética (5,83)	Biol. Cel. & Mol. (5,80)	Biol. Cel. & Mol. (4,88)
Bioquímica & Biofísica	PUC-Fac. Ciencias Biol.	UCH-Fac. Medicina	UCH-Fac. Ciencias
Impacto Chile 7,19	*Dr. en Cs. Biol.*	*Dr. en Cs. Bioméd.*	*Dr. en Ciencias*
Impacto mundial 18,36	Biol. Cel. & Mol. (13,95)	Biol. Cel. (13,50)	Biol. Mol. & Cel. (13,13)
Biología	UCH-Fac. Ciencias	UCH-Fac. Medicina	UCH-Fac. Medicina
Impacto Chile 3,09	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Cs. Bioméd.*	*Dr. en Cs. Bioméd.*
Impacto mundial 7,63	Microbiología (8,06)	Biol. Mol. & Bioq. (3,83)	Genética (2,0)
Biología Celular	PUC-Fac. Ciencias Biol.	UACH-Fac. Ciencias	UCH-Fac. Ciencias
Impacto Chile 7,40	*Dr. en Cs. Biol*.	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias*
Impacto mundial 20,78	Biol. Cel. & Mol. (16,76)	Biol. Cel. & Mol. (11,28)	Biol. Mol. & Cel. (10,52)
Endocrinología & Metabolismo	UCH-Fac. Medicina	PUC-Fac. Ciencias Biol.	UCH-Fac. Ciencias
Impacto Chile 9,34	*Dr. en Cs. Bioméd.*	*Dr. en Cs. Biol.*	*Dr. en Ciencias*
Impacto mundial 15,64	Biol. Mol. & Bioq. (13,33)*	Cs. Fisiológicas (10,35)	Biol. Mol. & Cel. (1,20)
Farmacología	UCH-Fac. Medicina	PUC-Fac. Ciencias Biol.	UCH-Fac. Ciencias
Impacto Chile 4,87	*Dr. en Cs. Bioméd.*	*Dr. en Cs. Biol.*	*Dr. en Ciencias*
Impacto mundial 9,52	Biol. Mol. & Bioq. (12,22)	Cs. Fisiológicas (11,12)	Biol. Mol. & Cel. (9,25)
Fisiología	UCH-Fac. Ciencias	PUC-Fac. Ciencias Biol.	UCH-Fac. Medicina
Impacto Chile 10,10	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Cs. Biol.*	*Dr. en Cs. Bioméd.*
Impacto mundial 15,55	Biol. Mol. & Cel. (37,56)	Cs. Fisiológicas (8,57)	Fisiología (5,64)
Inmunología	UCH-Fac. Ciencias	UACH-Fac. Ciencias	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc.
Impacto Chile 10,11	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias*	Fac. Cs. Biol.
Impacto mundial 17,60	Microbiología (27,00)	Biol. Cel. & Mol. (12,78)	*Dr. en Cs. Biol.*
			Biol. Cel. & Mol. (4,20)
Medicina Clínica	UACH-Fac. Ciencias	PUC-Fac. Ciencias Biol.	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc.
Impacto Chile 7,96	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Cs. Biol.*	Fac. Cs. Biol.
Impacto mundial 13,31	Biol. Cel. & Mol. (14,50)**	Cs. Fisiológicas (9,43)	*Dr. en Cs. Biol.*
			Biol. Cel. & Mol. (4,75)***
Medicina General	UCH-Fac. Ciencias	PUC-Fac. Ciencias Biol.	UCH-Fac. Medicina
Impacto Chile 0,95	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Cs. Biol.*	*Dr. en Cs. Bioméd.*
Impacto mundial 8,66	Microbiología (1,80)	Cs. Fisiológicas (1,68)	Biol. Mol. & Bioq. (1,60)
Microbiología	PUC-Fac. Ciencias Biol.	UCH-Fac. Ciencias	PUC-Fac. Ciencias Biol.
Impacto Chile 5,15	*Dr. en Cs. Biol*.	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Cs. Biol.*
Impacto mundial 13,51	Biol. Cel. & Mol. (7,67)	Microbiología (7,12)	Cs. Fisiológicas (5,81)
Neurociencias & Comportamiento	UCH-Fac. Medicina	UCH-Fac. Ciencias	UCH-Fac. Medicina
Impacto Chile 6,98	*Dr. en Cs. Bioméd.*	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Cs. Bioméd.*
Impacto Mundial 15,67	Biol. Mol. & Bioq. (29,50)	Biol. Mol. & Cel. (13,08)	Biol. Cel. (11,00)

En la primera columna, aparte de describir la disciplina, se indica el factor de impacto que alcanzaron, en promedio, las publicaciones originadas en Chile y en el mundo.

* Es necesario mencionar que el número de artículos publicados por los profesores de los programas de doctorado analizados es, en esta disciplina, más bien bajo. Asimismo, que este primer lugar se obtiene con tan sólo 3 artículos frente a los 20 que originó el programa que le sigue en factor de impacto.

** El factor de impacto lo generan sólo 8 artículos mientras que el programa de la PUC publicó 54 en esta disciplina.

*** El factor de impacto surge de una cantidad muy baja de artículos (4).

disciplina. Excepcionalmente, el primer lugar con relación al impacto en Biología Molecular & Genética exhibe un valor más bajo que el promedio de Chile. Tal situación acontece porque los artículos más citados categorizados en esta disciplina no provienen de ninguno de los programas acreditados por CONICYT.

La Biología Molecular & Genética presenta en los países seriamente comprometidos con la ciencia, un desarrollo vertiginoso. Constituye, qué duda cabe, una de las avanzadas del conocimiento presente. Es de tal magnitud su avance, que el conocimiento que genera se duplica antes de cuatro años. Impone, claro está, una infraestructura compleja, equipos humanos de alta competitividad, vigencia, dedicación y movilidad. Aunque en Chile se supone que la Biología ha alcanzado un estado de madurez y privilegio, lo que ocurre con su punta de lanza, la Biología Molecular & Genética, muestra que nuestro desarrollo es incipiente. Quienes sostienen que es menester focalizar nuestra atención en áreas prioritarias deben aquilatar que objetivamente no existe área alguna en el país que haya alcanzado un desarrollo compatible con las necesidades de una sociedad alfabetizada y que aspira a ingresar al tercer milenio como protagonista del progreso de la humanidad.

Las Tablas Nº 7, 8 y 9 destacan los tres primeros lugares que alcanzan los programas de doctorado en el ámbito de las Ciencias Naturales, particularmente las menciones de Botánica y de Ecología, con relación al número de artículos, citas y factor de impacto.

Como se observa en la Tabla Nº 9, varios de los programas relacionados con las disciplinas naturalísticas exhiben, en sus publicaciones, un factor de impacto francamente menor que el que genera el total de los artículos en esa categoría publicados desde Chile. Esta situación debe preocupar, ante todo en lo que se refiere a Ecología en el programa de la Universidad de Chile, que tiene por objeto la formación al más alto nivel específicamente en ese ámbito.

La situación descrita se debe, como se discutió para Biología Molecular y Genética, a la existencia de publicaciones altamente citadas en centros distintos de los comprometidos con los programas analizados. Es menester reconocer que por la excesivamente baja masa crítica de investigadores en todas las disciplinas, el universo de artículos en cada categoría es pequeño. En consecuencia, si hay sólo algunos altamente citados y publicados por investigadores que no forman parte del profesorado de los programas en estudio, se pueden crear las distorsiones observadas.

TABLA Nº 7: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN 5 DISCIPLINAS DE LAS CIENCIAS NATURALES ORDENADOS POR NÚMERO DE ARTÍCULOS DE CORRIENTE PRINCIPAL PUBLICADOS EN 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Ciencias Animales	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Ecología (52)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Ecología (17)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica (11)
Ciencias Animales & Vegetales	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica (60)	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Botánica (50)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. (7)
Ciencias Acuáticas	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Ecología (80)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Ecología (15) U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Botánica (15)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica (3)
Ciencias Vegetales	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica (29)	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Botánica (24)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Ecología (16)
Medio Ambiente/Ecología	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Ecología (97)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Ecología (56)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica (42)

TABLA Nº 8: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN 5 DISCIPLINAS DE LAS CIENCIAS NATURALES ORDENADOS POR EL NÚMERO DE CITAS DE CORRIENTE PRINCIPAL GENERADAS POR SUS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Ciencias Animales	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Ecología **(179)**	UACH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Cel. & Mol. **(46)**	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Ecología **(20)**
Ciencias Animales & Vegetales	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica **(478)**	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Botánica **(444)**	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Biol. Cel. & Mol. **(36)**
Ciencias Acuáticas	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Ecología **(606)**	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Ecología **(55)**	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Botánica **(35)**
Ciencias Vegetales	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica **(191)**	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Botánica **(170)**	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Ecología **(62)**
Medio Ambiente/Ecología	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Ecología **(328)**	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica **(102)**	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Ecología **(72)**

TABLA Nº 9: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN 5 DISCIPLINAS DE LAS CIENCIAS NATURALES ORDENADOS POR FACTOR DE IMPACTO 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Ciencias Animales ***Impacto Chile 1,98*** ***Impacto mundial 4,76***	UACH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Biol. Cel. & Mol. (5,75)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Ecología (3,44)	UCH-Fac. Medicina *Dr. en Cs. Bioméd.* Genética (1,78)
Ciencias Animales & Vegetales ***Impacto Chile 5,73*** ***Impacto mundial 10,15***	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Botánica (8,88)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica (7,97)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Biol. Cel. & Mol. (5,14)
Ciencias Acuáticas ***Impacto Chile 4,21*** ***Impacto mundial 7,16***	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Ecología (7,58)*	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Ecología (3,67)	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Botánica (2,33)
Ciencias Vegetales ***Impacto Chile 3,06*** ***Impacto mundial 6,47***	U. de C.-Fac. Cs. Nat. & Oc. Fac. Cs. Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Botánica (7,08)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica (6,59)	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol*. Ecología (3,88)
Medio Ambiente/Ecología ***Impacto Chile 2,76*** ***Impacto mundial 6,18***	PUC-Fac. Ciencias Biol. *Dr. en Cs. Biol.* Ecología (3,38)**	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Botánica (2,43)	UCH-Fac. Ciencias *Dr. en Ciencias* Ecología (1,29)***

En la primera columna, aparte de describir la disciplina, se indica el factor de impacto que alcanzaron, en promedio, las publicaciones originadas en Chile y en el mundo.

* El Programa UCH-Fac. Ciencias, *Dr. en Ciencias* con mención en Botánica exhibe un factor de impacto mayor (9,33) que se generó a partir de sólo tres artículos. Existe, sin embargo, una notoria diferencia en el universo de artículos y citas respecto al programa de la PUC y de los que continúan en la línea de la disciplina.

** El Programa UCH-Fac. Medicina, *Dr. en Cs. Bioméd.* Biol. Mol. & Bioq, exhibe un factor de impacto mayor (4,75) que se generó a partir de sólo tres artículos. Hay, sin embargo, una notoria diferencia en el universo de artículos y número de citas respecto al programa de la PUC y del que continúa en la línea de la disciplina.

*** Los programas de la UCH-Fac. Ciencias, *Dr. en Ciencias*, mención Microbiología, y de la Fac. Medicina, *Dr. en Cs. Bioméd.*, mención Genética, publicaron 6 artículos cada uno con un factor de impacto de 2,00 y 1,83 en la disciplina.

Física

Los tres programas de Física, dictados por la Facultad de Ciencias en conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago, exhiben una gran heterogeneidad en lo que concierne al número de profesores intramurales y a la productividad medida por el número de artículos de corriente principal publicados por año y por profesor, lo que se observa en la Tabla Nº 10.

TABLA Nº 10: PUBLICACIONES ISI/AÑO/PROFESOR DOCTORADOS EN FÍSICA ACREDITADOS POR CONICYT EL AÑO 1997

Universidad	Programa	Prof. Intram.	Pub./año/profesor
P. U. Católica de Chile, Fac. Fís.	Física	21	1,12
U. de Chile Fac. Cs. Fís. & Mat.	Física	29	0,79
U. de Santiago de Chile	Física	18	0,36

Claramente se detaca el programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile con una productividad de 1,12 artículos/año/profesor que se aproxima, como se observa en la Tabla Nº 11, a lo que representa la media de los programas congéneres en Estados Unidos.

TABLA Nº 11: PUBLICACIONES (ISI)/AÑO/PROFESOR (1988-1992). DOCTORADOS FÍSICA

Programa	Facultad (# mediana)	% Prof. Titulares	Pub./Prof./Año
Física	29,15	66,66	1,57

Fuente: *Research Doctorate Programs in the US. Continuity and Change* (National Academy Press, 1995).

Al analizar las fortalezas que perfilan a los tres programas de doctorado acreditados hasta 1997 en CONICYT, basándose en las publicaciones que sus profesores produjeron desde Chile, entre 1981 y 1995, el programa de la PUC con un total de 353 artículos exhibe cuatro disciplinas que superan el impacto medio nacional (Física Aplicada y del Estado Sólido; Ciencias de los Materiales e Ingeniería; Matemáticas y Óptica & Acústica). La U. de Chile, que publicó en el programa de Física 346 artículos, se perfila con tres fortalezas (Física, Físico-Química, Ciencias de los Materiales e Ingeniería). El tercer programa de Física lo dicta la U. de Santiago y con una productividad total de 99 artículos alcanza a destacarse sólo en una disciplina (Física) respecto al promedio nacional.

Al ordenar por número de artículos, citas y factor de impacto en cada disciplina investigada por los profesores de los programas analizados, se conforma la información que contienen las Tablas Nº 12, 13 y 14, respectivamente. Se puede observar en la Tabla Nº 14 que el impacto cualitativo en las seis disciplinas más investigadas por los programas de Física presentan claras diferencias. Astronomía constituye un caso singular, ya que tiene como referente nacional la notable investigación que se publica desde los observatorios astronómicos en el norte del país, indexada según las normas internacionales en función del o de los países donde se realizó la investigación. De hecho, sólo el 25% de las publicaciones en Astronomía están vinculadas a universidades chilenas[45]. Consecuentemente, ninguno de los dos programas alcanza en esta disciplina el impacto medio nacional. Hay disciplinas en los programas de Física que ciertamente se traslapan con los de Química y otros con Matemáticas. Con todo, los programas de Física exhiben puntualmente algunas fortalezas que los distinguen de la media chilena, aspecto suficiente para una buena formación de cuarto ciclo en los tópicos que pueden identificarse en la Tabla Nº 14. Empero, el programa de la U. de Santiago, cuando se infiere de las publicaciones de sus profesores en Chile, es francamente débil. Llama la atención en este estudio, además, que ningún programa de doctorado en Física se destaque en disciplina alguna respecto al impacto medio mundial.

A esta altura conviene aclarar que los factores de impacto de las disciplinas que se distinguen en los programas de doctorado representan el promedio que generan los artículos en esa categoría publicados por los profesores intramurales de la mención doctoral. En otras palabras, muchos de los artículos pueden haber generado alto número de citas, superando incluso la media mundial. Sin embargo el indicador se diluye por la escasa convocatoria que pudieron haber tenido otras publicaciones. Existen diversos estudios que demuestran que la distribución de citas es, por regla general, muy asimétrica. Las leyes epistemométricas (Lotka, Zipf y otras) exhiben algunas diferencias en la formulación matemática. Los hechos empíricos son claros. La gran mayoría de los artículos son citados pocas veces, si es que lo son. Sólo una pequeña 'cola' de la distribución de citas es responsable de la cantidad más relevante de éstas[46].

---

[45] M. Krauskopf, *La investigación universitaria en Chile. Reflexiones críticas* (1993b).

[46] A. Schubert, W. Glänzel, T. Braun, "Scientometric Datafiles. A Comprehensive Set of Indicators on 2649 Journals and 96 Countries in All Major Fields and Subfields" (1989).

TABLA Nº 12: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN FÍSICA EN 6 DE LAS DISCIPLINAS MAYORMENTE INVESTIGADAS, ORDENADOS POR NÚMERO DE ARTÍCULOS DE CORRIENTE PRINCIPAL PUBLICADOS EN 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Astronomía	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (54)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (15)	
Ciencias Materiales & Ingeniería	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (8)	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (3)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Física* (1)
Física	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (166)	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (130)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Física* (58)
Física Aplicada/Sólido	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (91)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (85)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Física* (21)
Físico-Química	U de Chile *Dr. en Ciencias* Física (27)	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (9)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Física* (4)
Espectroscopia/Instrument./Análisis	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (9)	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (5)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Física* (2)

TABLA Nº 13: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN FÍSICA EN 6 DE LAS DISCIPLINAS MAYORMENTE INVESTIGADAS, ORDENADOS POR EL NÚMERO DE CITAS DE CORRIENTE PRINCIPAL GENERADAS POR SUS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Astronomía	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (428)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (150)	
Ciencias Materiales & Ingeniería	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (18)	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (7)	
Física	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (1.176)	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (663)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Física* (387)
Física Aplicada/Sólido	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (427)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (284)	U de Santiago de Chile *Dr. en Física* (61)
Físico-Química	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (161)	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Física (14)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Física* (3)
Espectroscopia/Instrument./Análisis	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Física (18)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* (5)	P. U. Católica de Chile *Dr. en Física* Física (3)

TABLA Nº 14: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN FÍSICA EN 6 DE LAS DISCIPLINAS MAYORMENTE INVESTIGADAS, ORDENADOS POR FACTOR DE IMPACTO 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Astronomía	U. de Chile	P. U. Católica de Chile	
Impacto Chile 14,11	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias Exactas*	
Impacto mundial 12,31	Física (10,0)	Física (7,93)	
Ciencias Materiales & Ingeniería	P. U. Católica de Chile	U. de Chile	
Impacto Chile 1,91	*Dr. en Ciencias Exactas*	*Dr. en Ciencias*	
Impacto mundial 4,26	Física (2,33)	Física (2,25)	
Física			
Impacto Chile 5,62	U. de Chile	U. de Santiago de Chile	P. U. Católica de Chile
Impacto mundial 9,12	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Física*	*Dr. en Ciencias Exactas*
	Física (7,08)	(6,67)	Física (5,1)
Física Aplicada/Sólido	P. U. Católica de Chile	U. de Chile	U. de Santiago de Chile
Impacto Chile 3,57	*Dr. en Ciencias Exactas*	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Física*
Impacto mundial 6,98	Física (4,69)	Física (3,34)	(2,90)
Físico-Química	U. de Chile	P. U. Católica de Chile	U. de Santiago de Chile
Impacto Chile 4,84	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias Exactas*	*Dr. en Física*
Impacto mundial 8,60	Física (5,96)	Física (1,56)	(0,75)
Espectroscopia/Instrument./Análisis	U. de Chile	P. U. Católica de Chile	
Impacto Chile 3,66	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias Exactas*	
Impacto mundial 6,42	Física (2,0)	Física (0,6)	

En la primera columna, aparte de describir la disciplina, se indica el factor de impacto que alcanzaron, en promedio, las publicaciones originadas en Chile y en el mundo.

Química

En Química, el año 1997 existían cinco programas de doctorado acreditados por CONICYT. Como se observa en la Tabla Nº 15, exceptuando al que dicta la Universidad Católica de Valparaíso, el promedio de los profesores intramurales publica algo más que un artículo de corriente principal por año. Respecto al profesorado, se debe destacar que la Universidad de Chile mantiene un grupo de académicos que prácticamente duplica al de sus instituciones congéneres y al promedio que exhiben estos programas en Estados Unidos (ver Tabla Nº 16). Aquí, claro está, hay un esfuerzo conjunto de varias facultades que, evitando duplicaciones, concentran su cometido en sólo un programa. No obstante, con 886 artículos en todas las disciplinas, el programa de Química de la U. de Chile exhibe sólo dos fortalezas a nivel nacional: Espectrometría/Instrumental & Análisis, excediendo en 25% al factor de impacto, y Físico-Química, que sobrepasa la media nacional en 22%. No se pudo observar, consecuentemente, una fortaleza grupal a nivel de factor de impacto mundial.

TABLA Nº 15: PUBLICACIONES (ISI)/AÑO/PROFESOR DOCTORADOS EN QUÍMICA ACREDITADOS POR CONICYT EL AÑO 1997

Universidad	Programa	Prof. Intram.	Pub./año/profesor
U. de Chile	Dr. en Ciencias-Química	48	1,06
PUC	Dr. en Cs. Exactas-Química	22	1,39
U. Católica deValp.	Dr. en Ciencias-Química	21	0,42
U. de Concepción	Dr. en Ciencias-Química	24	1,04
USACH	Dr. en Química	25	1,02

Corresponden a las publicaciones del grupo principal de profesores de cada programa, originadas al menos con una autoría en Chile (1981-1995).

El doctorado de la Universidad de Santiago, que publicó durante el período 431 artículos, se destaca a nivel nacional en Ingeniería Química (+140%); Físico-Química (+84%); Espectrometría/Instrumental & Análisis (+80%), Química Inorgánica (+56%) y Química General (+34%). El programa de la Universidad de Concepción se distingue en tres disciplinas, destacándose Fitoquímica, donde excede en 170% al impacto nacional. La mención en Química que otorga la Universidad Católica de Valparaíso escasamente exhibe una disciplina que sobrepasa el impacto chileno (Química Inorgánica +4%).

Los doctorados en Química que se confieren en el país, al igual que los de Biología, mantienen islotes de competencia disciplinaria cuyo impacto (desempeño cualitativo) excede significativamente al promedio inter-

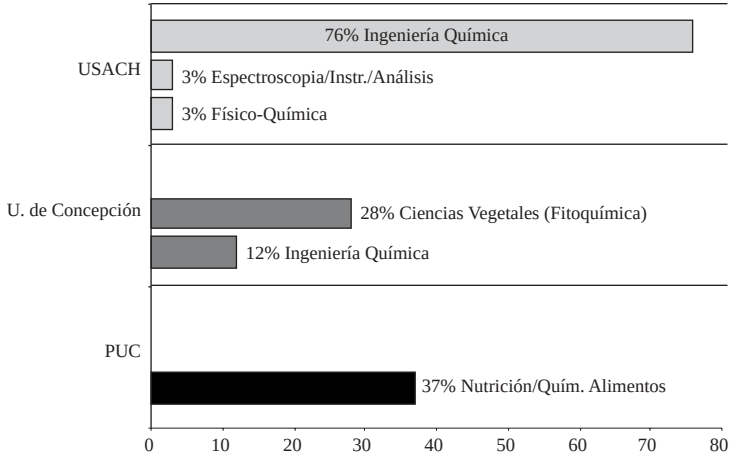
TABLA Nº 16: PUBLICACIONES (ISI)/AÑO/PROFESOR (1988-1992). DOCTORADOS EN QUÍMICA

Programa	Facultad (# mediana)	% Prof. Titulares	Pub./Prof./Año
Química	23,14	61,54	2,10

Research Doctorate Programs in the US. Continuity and Change (National Academy Press, 1995).

nacional en cada disciplina (1981-1995). Como se puede observar en la Figura Nº 4, tres de los cinco programas exhibieron entre uno y tres disciplinas cuyo impacto cualitativo sobrepasó al promedio mundial. Es decir, estos programas mantienen al menos una disciplina en que hay que destacar que los profesores del programa están investigando localmente, en promedio, a nivel mundial.

FIGURA Nº 4: FACTOR DE IMPACTO RELATIVO AL MUNDO EN LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO EN QUÍMICA



(Se expresa el % en que cada una de las disciplinas excede al factor de impacto que obtuvieron mundialmente en el mismo período.)

Las Tablas Nº 17, 18 y 19 ordenan tres indicadores que surgen de los programas de doctorado en Química a partir del estudio de su perfil y capacidad científica instalada intramuralmente. Se indica el orden de cada mención, que deriva del número absoluto de artículos en cada disciplina, del número absoluto de citas que los últimos generaron y del factor de impacto. De algún modo, los indicadores de estas tres tablas representan las fortalezas relativas que posicionan, entre 5, a los tres programas que más se destacan (en las disciplinas específicas que se señalan) entre los que CONICYT acreditara el año 1997.

TABLA Nº 17: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN QUÍMICA EN 12 DE LAS DISCIPLINAS MAYORMENTE INVESTIGADAS, ORDENADOS POR NÚMERO DE ARTÍCULOS DE CORRIENTE PRINCIPAL PUBLICADOS EN 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Bioquímica & Biofísica	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (72)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* (66)	U. Católica de Valparaíso *Dr. en Ciencias* Química (25)
Biotecnología	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (14)	U. Católica de Valparaíso *Dr. en Ciencias* Química (10)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* (1)
Cs. Animales & Vegetales	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (37)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (21)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* (9)
Espectroscopia/Instrumen./Análisis	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (73)	U. Católica de Valparaíso *Dr. en Ciencias* Química (17)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (17)
Farmacología	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (41)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (16)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (6)
Físico-Química	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (205)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (93)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (48)
Ingeniería Química	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (20)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (12)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (8)
Química Agrícola	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (66)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (25)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (22)
Química-Biología	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Química (38)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (32)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (4)
Química General	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (122)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (103)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (84)
Química Inorgánica & Nuclear	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Química (70)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (52)	U. Católica de Valparaíso *Dr. en Ciencias* Química (21)
Química Orgánica	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Química (220)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (91)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (85)

TABLA Nº 18: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN QUÍMICA EN 12 DE LAS DISCIPLINAS MAYORMENTE INVESTIGADAS, ORDENADOS POR EL NÚMERO DE CITAS DE CORRIENTE PRINCIPAL GENERADAS POR SUS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º	3º
Bioquímica & Biofísica	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (455)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* (454)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (137)
Biotecnología	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (40)	U. Católica de Valparaíso *Dr. en Ciencias* Química (22)	
Cs. Animales & Vegetales	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (190)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (98)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* (35)
Espectroscopia/Instrum./Análisis	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (335)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (112)	U. Católica de Valparaíso *Dr. en Ciencias* Química (54)
Farmacología	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (136)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (48)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (9)
Físico-Química	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (1.212)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (827)	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Química (181)
Ingeniería Química	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (91)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (57)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (57)
Química Agrícola	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (294)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (106)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (102)
Química-Biología	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Química (348)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (275)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (45)
Química General	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Química (278)	U. de Santiago de Chile *Dr. en Química* Química (240)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (235)
Química Inorgánica & Nuclear	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Química (286)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (124)	U. Católica de Valparaíso *Dr. en Ciencias* Química (71)
Química Orgánica	P. U. Católica de Chile *Dr. en Ciencias Exactas* Química (1.459)	U. de Concepción *Dr. en Ciencias* Química (582)	U. de Chile *Dr. en Ciencias* Química (376)

TABLA Nº 19: *TOP* TRES PROGRAMAS DE DOCTORADO EN QUÍMICA EN 12 DE LAS DISCIPLINAS MAYORMENTE INVESTIGADAS, ORDENADOS POR FACTOR DE IMPACTO 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS).

Disciplina	1º	2º	3º
Bioquímica & Biofísica	U. de Santiago de Chile	U. de Chile	U. de Concepción
Impacto Chile 7,19	*Dr. en Química*	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias*
Impacto mundial 18,36	(6,88)	Química (6,32)	Química (6,23)
Biotecnología	U. de Concepción	U. Católica de Valparaíso	
Impacto Chile 3,66	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias*	
***Impacto mundial* 6,09**	Química (2,86)	Química (2,20)	
Cs. Animales & Vegetales	U. de Chile	U. de Concepción	U. de Santiago de Chile
Impacto Chile 5,73	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Química*
Impacto mundial 10,15	Química (5,14)	Química (4,67)	(3,89)
Espectroscopia/Instrum./Análisis	U. de Santiago de Chile	U. de Chile	U. Católica de Valparaíso
Impacto Chile 3,66	*Dr. en Química*	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias*
Impacto mundial 6,42	Química (6,59)	Química (4,59)	Química (3,18)
Farmacología	U. de Chile	U. de Santiago de Chile	
Impacto Chile 4,87	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Química*	
Impacto mundial 9,52	Química (3,32)	Química (3,00)	
Físico-Química	U. de Santiago de Chile	U. de Chile	U. Católica de Valparaíso
Impacto Chile 4,84	*Dr. en Química*	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias*
Impacto mundial 8,60	Química (8,89)	Química (5,91)	Química (4,71)
Ingeniería Química	U. de Santiago de Chile	U. de Chile	U. de Concepción
Impacto Chile 2,97	*Dr. en Química*	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias*
Impacto Mundial 4,05	Química (7,13)	Química (4,75)	Química (4,55)
Química Agrícola	U. de Santiago de Chile	U. de Chile	U. de Concepción
Impacto Chile 5,10	*Dr. en Química*	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Ciencias*
Impacto mundial 6,10	Química (4,64)	Química (4,45)	Química (4,24)
Química-Biología	P. U. Católica de Chile	U. de Chile	
Impacto Chile 8,91	*Dr. en Ciencias Exactas*	*Dr. en Ciencias*	
Impacto mundial 12,92	Química (9,16)	Química (8,59)	
Química General	P. U. Católica de Chile	U. de Santiago de Chile	U. de Chile
Impacto Chile 2,14	*Dr. en Ciencias Exactas*	*Dr. en Química*	*Dr. en Ciencias*
Impacto mundial 7,96	Química (4,34)	Química (2,86)	Química (1,93)
Química Inorgánica & Nuclear	U. de Santiago de Chile	P. U. Católica de Chile	U. Católica de Valparaíso
Impacto Chile 3,25	*Dr. en Química*	*Dr. en Ciencias Exactas*	*Dr. en Ciencias*
Impacto mundial 5,90	Química (5,08)	Química (4,09)	Química (3,38)
Química Orgánica	P. U. Católica de Chile	U. de Concepción	U. de Santiago de Chile
Impacto Chile 5,89	*Dr. en Ciencias Exactas*	*Dr. en Ciencias*	*Dr. en Química*
Impacto mundial 7,33	Química (6,63)	Química (6,40)	Química (4,67)

En la primera columna, aparte de describir la disciplina, se indica el factor de impacto que alcanzaron, en promedio, las publicaciones originadas en Chile y en el mundo.

Matemáticas

Finalmente, en el contexto del análisis del perfil y capacidad científica de los doctorados en ciencias, se describen los resultados que se obtuvieron al analizar los dos programas de matemáticas acreditados por CONICYT al año 1997. Es bien sabido que las matemáticas poseen su propia sociología, la que incluye manifiestamente vías de comunicación que, siendo de relevancia, no se asocian al registro del ISI. En consecuencia, el universo de publicaciones que cubre el registro es proporcionalmente menor que en las ciencias básicas. Con todo, la punta del iceberg que genera el registro de literatura de corriente principal sigue siendo el único parámetro para establecer indicadores de desempeño universal sujetos a comparaciones que puedan ser claramente validadas.

La Tabla Nº 20 muestra la productividad académica en los dos programas de Matemáticas analizados. Por cierto, el doctorado de la Universidad de Chile alcanza una productividad que duplica al de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que se acerca al indicador promedio de los que generan en Estados Unidos los doctorados en Matemáticas (Tabla Nº 21).

TABLA Nº 20: PUBLICACIONES (ISI)/AÑO/PROFESOR DOCTORADOS EN MATEMÁTICAS ACREDITADOS POR CONICYT EN 1997

Universidad	Programa	Prof. Intram.	Pub./año/profesor
U. Chile	Dr. en Ciencias-Matemáticas	15	0,43
PUC	Dr. en Cs. Exactas-Matemáticas	21	0,21

Corresponden a las publicaciones del grupo principal de profesores de cada programa, originadas al menos con una autoría en Chile (1981-1995).

Las Tablas Nº 22, 23 y 24 ordenan por número de artículos, citas y factor de impacto la investigación que generó el grupo de profesores intramurales en cada uno de los dos programas, en las disciplinas que surgieron como las de mayor énfasis a partir del análisis de las publicaciones.

De la Tabla Nº 24 se desprende que el factor de impacto en la disciplina de Matemáticas, en ambos programas, es menor que el valor promedio nacional. Esta situación se debe a que los artículos categorizados en Matemáticas, registrados entre 1981 y 1995, más altamente citados fueron publicados por investigadores que no forman parte del *staff* intramural

TABLA Nº 21: PUBLICACIONES (ISI)/AÑO/PROFESOR (1988-1992) EN EE. UU. DOCTORADOS EN MATEMÁTICAS

Program	Faculty (# mean)	% Full Prof	Pub/Fac/Year
Mathematics	31,91	61,83	0,69

Fuente: Marwin L. Goldberg *et al.* (editores), *Research Doctorate Programs in the US. Continuity and Change* (National Academy Press, 1995).

TABLA Nº 22: PROGRAMAS DE DOCTORADO EN MATEMÁTICAS EN LAS DISCIPLINAS MAYORMENTE INVESTIGADAS, ORDENADOS POR NÚMERO DE ARTÍCULOS DE CORRIENTE PRINCIPAL PUBLICADOS EN 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º
Matemáticas	Universidad de Chile (49)	P. Universidad Católica (32)
Física	Universidad de Chile (28)	P. Universidad Católica (5)
Sin clasificar	P. Universidad Católica (15)	Universidad de Chile (14)

TABLA Nº 23: PROGRAMAS DE DOCTORADO EN MATEMÁTICAS EN LAS DISCIPLINAS MAYORMENTE INVESTIGADAS, ORDENADOS POR EL NÚMERO DE CITAS DE CORRIENTE PRINCIPAL GENERADAS POR SUS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS)

Disciplina	1º	2º
Matemáticas	Universidad de Chile (100)	P. Universidad Católica (32)
Física	Universidad de Chile (509)	P. Universidad Católica (1)
Sin clasificar	Universidad de Chile (13)	P. Universidad Católica (5)

TABLA Nº 24: PROGRAMAS DE DOCTORADO EN MATEMÁTICAS EN LAS DISCIPLINAS MAYORMENTE INVESTIGADAS, ORDENADOS POR FACTOR DE IMPACTO 1981-1995 (ENTRE PARÉNTESIS).

Disciplina	1º	2º
Matemáticas Impacto Chile 2,52 Impacto mundial 3,78	Universidad de Chile (2,04)	P. Universidad Católica (1,0)
Física Impacto Chile 5,62 Impacto mundial 9,12	Universidad de Chile (18,18)	P. Universidad Católica (0,20)
Sin clasificar	Universidad de Chile (0,93)	P. Universidad Católica (0,33)

En la primera columna, aparte de describir la disciplina, se indica el factor de impacto que alcanzaron, en promedio, las publicaciones originadas en Chile y en el mundo.

de los programas de Matemáticas analizados, e. g. Goles, Correa, Benguria, etc. Asimismo, es curioso observar que el programa de doctorado de Matemáticas de la U. de Chile exhibe un alto impacto en Física (223% sobre el promedio de Chile). Ello se debe a que en su *staff* hay investigadores de gran prestigio, como Teitelboim, que publican en revistas categorizadas en el ámbito de la Física. De hecho, este investigador 'distorsiona' la realidad del conjunto al determinar, casi por sí solo, el perfil del programa como un todo. Lo inverso ocurre en el programa de la PUC, donde las escasas publicaciones en Física retratan una debilidad que no debiera considerarse como tal. A esto se agrega que la situación de la disciplina de Física en el programa de doctorado en Matemáticas de la U. de Chile deriva en otro rasgo de relevancia. En efecto, el factor de impacto que Física alcanza en este programa (esencialmente generado por los artículos de Teitelboim) excede en 99% al promedio mundial. Es de importancia mencionar que, en general, los investigadores en Matemáticas sostienen que el ISI no representa de modo adecuado su productividad. Si ello es así, *hay que tomar con cautela el perfil que se construye con los datos epistemométricos para los dos programas evaluados.* Es de lamentar que sólo el ISI indexa las citas sobre las que se construyen los indicadores de desempeño cualitativo. Por otra parte, resulta conveniente conocer que aun con las limitaciones del ISI, matemáticos de países mucho más pequeños reportan con notoria frecuencia sus hallazgos de relevancia en la literatura de corriente principal. En efecto, Israel, con poco más de un tercio de habitantes que Chile, publicó

entre 1990 y 1995, 1.497 artículos de Matemáticas registrados en el ISI. Chile, en el mismo período, sólo 148. También Bélgica, Dinamarca y Finlandia, con muchos menos habitantes, exhiben cifras más significativas.

Observaciones finales

Es imprescindible recordar que la racionalidad del proceso evaluativo empleado reconoce en la capacidad de investigación instalada en cada programa la posibilidad real de implementar uno de los aspectos más relevantes de éstos: el desarrollo de una tesis que permita al estudiante de postgrado abordar una investigación de avanzada de competencia internacional. Consecuentemente, se dimensiona la capacidad de publicar de los profesores del programa desde Chile. Sabido es que las limitaciones propias de un país menos desarrollado complican el ejercicio investigativo. Así, no obstante que para el académico una investigación realizada durante una estada en el extranjero (muchas veces asociado a un *mentor*) puede significar un enriquecimiento para su formación y experiencia, ésta no garantiza desempeño en el medio local. Por lo anterior, las publicaciones consideradas para evaluar los programas son sólo aquellas que indican a Chile como uno de los países donde ésta se originó.

La información que resulta del presente estudio *sólo puede servir de instrumento de análisis complementario a otros*. De seguro, a la autoevaluación de los propios programas. *La opinión de pares no es sustituible por datos epistemométricos*. Sin embargo, tampoco estos últimos deben ser descartados, ya que proveen los indicadores de mayor objetividad.

"Se buscan doctores" se titula un recuadro publicado en la sección Economía y Negocios de *El Mercurio*[47], donde Ernesto Schiefelbein señala que de acuerdo a un estudio de la Carnegie Foundation, en 1996 sólo el 18% de los académicos chilenos ostentaban el grado de doctor, cifra que en los países desarrollados se sitúa entre 49% y 86%. El artículo identifica las diferencias que hay entre los investigadores que residen en Chile y los extranjeros, destacándose no sólo su salario sino también la diversidad de obligaciones académicas que reducen notoriamente su tiempo de investigación mientras se les exige competir a escala mundial.

Mientras parece claro que la masa de individuos formados en el ámbito del cuarto ciclo, en particular doctorado, es francamente insuficiente, el presente artículo demuestra que existen en el país excelentes progra-

[47] Véase E. Schiefelbein, "Se buscan doctores" (1999), p. B7.

mas en las ciencias básicas. La suerte de esclerosis que sufren algunas universidades parece impedir la cosmovisión que su elevada misión impone. Puesto que se identifican islotes de alta competitividad en los saberes fundamentales, las casas de estudio que los cobijan deberían ampliar el número de estudiantes tanto chilenos como extranjeros para recibir la rigurosa formación que implica un buen programa de doctorado. Por otra parte, hay consenso en que el fortalecimiento de la educación de pregrado exige un componente importante de materias básicas y fundamentales que impiden la obsolescencia del profesional o graduado que se forma, ya que al aprender a aprender y a pensar se puede abordar el desafío que supone el desempeñarse en un mundo tan cambiante como el que se vive. Consecuentemente, las universidades debieran contratar de preferencia, en lo que concierne a la docencia de los saberes básicos y fundamentales, a doctores en la materia. Es hora de romper el círculo vicioso. Países como Finlandia, con un tercio de la población chilena, forman anualmente más de diez veces el número de doctores que Chile. Es imposible, por no decir irresponsable, sostener que se puede mantener una docencia universitaria vigente y un desarrollo económico-social con un recurso humano formado al más alto nivel educativo 30 veces menor que en los países desarrollados. Porque, claro, los doctorados no existen sólo para retroalimentar a la academia. Proveen, qué duda cabe, la fuerza que multiplica los espacios que acrecientan a un país como un todo.

Para que la universidad opte por comprometerse con la investigación y las exigencias que imponen los programas de doctorado y pueda cumplir con su cometido, es menester admitir que en el país se ha avanzado muy poco en el reconocimiento público de los costos indirectos que implica el trabajo de investigación serio. Algunas modalidades de FONDECYT, no todas, otorgan hasta un 17% de los recursos asignados al proyecto como *overhead* a la universidad para financiar los gastos de la investigación que cobija. Otros financiamientos nacionales, o no reconocen la obligación del *overhead* o contribuyen con una cifra bastante más baja que la mencionada. Un estudio reciente de los costos escondidos de la investigación[48] revela que en Estados Unidos las universidades demandan, en promedio, entre un 50 y un 60% del costo de los proyectos financiados externamente. Por las diferencias en el modo en que se sostienen las universidades en el Reino Unido, sus costos indirectos caen en el rango del 33 al 54%.

El tema de los costos indirectos no es nuevo en el país. Por diversas razones, sin embargo, no ha sido abordado sistemáticamente ni se le ha

[48] R. M. May, S. C. Sarson, "Revealing the Hidden Costs of Research" (1999), pp. 457-459.

reconocido la relevancia que tiene para contribuir a la definición que impone la tarea universitaria y a la dramática necesidad de incrementar nuestra formación de cuarto ciclo.

Mientras no abordemos coherentemente el grave problema que implica enfrentar la realidad que exhibimos frente a los países que avanzan sin cesar, deberemos conformarnos con saber que entre 1997 y 1998, 1.156 chilenos estaban estudiando en Estados Unidos, 17% más que el año anterior[49], y que de los 65.494 académicos extranjeros que trabajaban en Estados Unidos (el 83% en investigación), 6,2% eran latinoamericanos[50]. De esta cifra, a Chile le corresponde algo menos de 500 investigadores. En las Ciencias de la Salud participa el 27% de los académicos extranjeros en Estados Unidos, seguidas de Física (15%), Ciencias Biológicas (14%), Ingenierías (12%) y Ciencias Sociales (5%). La capacidad de pensar, la apropiación social de la ciencia casi inexistente en el país, la competitividad que se nos escapa, reclaman más que nunca generar espacios para que nuestros talentos convoquen a los mejores estudiantes, para que con su elevada formación intelectual se retroalimente el progreso cultural, económico y social en las puertas del nuevo milenio.

Bibliografía

Allende, Jorge E.; Babul, Jorge (1999). "Desarrollo Científico-Tecnológico". *El Mercurio*, 11 de enero, p. A2.

Barsky, Osvaldo (1997). *Los posgrados universitarios en la República Argentina*. Buenos Aires: Editorial Torquel.

Chadwick, C. (1999). Carta. *El Mercurio*, 4 de abril, p. A2.

Clark, B. R. (1991). "The Fragmentation of Research, Teaching, and Study. An Explosive Essay". En M. Trow y T. Nybom (eds.), *University and Society. Essays on the Social Role of Research and Higher Education.* Londres: Jesica Kingsley Publishers.

Consejo de Rectores Universidades Chilenas (1996). *Anuario Estadístico.*

Courtillot Vincent (1992). *Science*, Nº 256.

De Meis, L.; y Longo, P. H. (1990). "The Training of Brazilian Biochemists in Brazil and Developed Countries. Costs and Benefits". *Biochemical Education*, Nº 18.

"Deserción amenaza a las universidades" (1999). *El Diario Financiero*, 2 de junio (traducido de *The Economist News).*

De Solla Price, D. (1963). *Little Science, Big Science.* Nueva York: Columbia University Press.

Dellacasa, Enrique (1999). *Indicadores científicos y tecnológicos. Informe 1998.* Santiago: CONICYT.

[49] Información proveniente del Institute of International Education.

[50] Ibídem.

Goldberger, Marvin L.; Maher, Brendan A.; Ebert Flattau, Pamela (1995). *Research Doctorate Programs in the U.S. Continuity and Change*. Washington D. C.: National Academy Press.

Krauskopf, Manuel (1992). "Educación y formación de investigadores". *El Mercurio*, 6 de octubre, p. A2.

————; Mackenzie, Mary Rose; Krauskopf, Erwin *et al*. (1993a). "La investigación médica en Chile. Indicadores epistemométricos". *Revista Médica de Chile*, Nº 121.

———— (1993b). *La investigación universitaria en Chile. Reflexiones críticas*, Santiago: CPU.

———— (1994). "APEC y la ciencia". *El Mercurio*, 11 de noviembre, p. A2.

————; Vera, María Inés; Albertini, Renato (1995a). "Assessment of a University's Scientific Capabilities and Profile: The Case of the Faculty of Biological Sciences of the Pontificia Universidad Católica de Chile". *Scientometrics*, Nº 34.

———— (1995b). ..... En V. Apablaza y A. Cruz (eds), *Diálogos universitarios*. Santiago: CPU.

————; Vera, María Inés; Krauskopf, Vania; Welljams-Dorof, Alfred (1995c). "A Citationist perspective on Science in Latin America and the Caribbean, 1981-1993". *Scientometrics*, Nº 34.

————; y Vera, María Inés (1997a). "Assessment of Scientific Profiles and Capabilities of Ph. D. Programs in Chile: A Scientometric Approach". *Scientometrics*, Nº 40.

———— (1997b). "El doctorado es el grado superior que confiere la universidad". *El Mercurio*, 11 mayo, pp. E24-E25.

Lewis, Peter D. (1999). Carta. *El Mercurio*, 19 de abril, p. A2.

Mallo C., Cristián (1999). "Iniciativa Milenio" (carta), *El Mercurio*, 8 de abril, p. 42.

May, R. M.; y Sarson, S. C. (1999). "Revealing the Hidden Costs of Research". *Nature*, Nº 398.

"Mideplan defendió Proyecto Milenio" (1999). *El Mercurio*, 30 de marzo.

"Milenio desata pugna gobierno-científicos" (1999). *El Mercurio*, 29 de marzo.

Ministerio de Educación (1998). *Plan nacional de ciencia y tecnología para el desarrollo*. Santiago.

Moravcsik, M. J. (1989). "¿Cómo evaluar la ciencia y a los científicos?". *Rev. Esp. Doc. Cient*. Nº 12.

National Science Foundation (1996). *Science & Engineering Indicators 1996*, National Science Board, National Science Foundation , Washington D. C.

———— (1998), *Science & Engineering Indicators 1998*, National Science Board, National Science Foundation , Washington D.C.

Obach, J. Miguel (1999). Carta. *El Mercurio*, 9 de abril, p. A2.

Oden, B. (1991). "Research training and the state. Politics and university research in Sweden. 1890-1975". En M. Trow y t. Nybom (eds.), *University and Society, Essays on the Social Role of Research and Higher Education*. Londres: Jesica Kingsley Publishers.

Reyes, Eduardo (1999). "Desarrollo científico" (carta), *El Mercurio*, 8 de abril, p. 42.

Rivera, Nelson (1999). Carta. *El Mercurio*, 20 de abril, p. A2.

Rosovsky, Henry (1990). *The University. An owners Manual*. Nueva York: W.W. Norton & Co, Inc.

Schiefelbien, E. (1999). "Se buscan Doctores" (1999). *El Mercurio*, 20 de junio, Economía y Negocios, p. B7.

Schubert A.; Glänzel, W.; Braun, T. (1989). "Scientometric Datafiles. A Comprehensive Set of Indicators on 2649 Journals and 96 Countries in All Major Fields and Subfields." *Scientometrics*, Nº 16.

Secretaría General del Consejo de Rectores (1996). *Anuario Estadístico 1996*, Santiago.

Sep-Conacyt (1997). *Indicadores. Actividades Científicas y Tecnológicas 1996.* México, D. F.: Sep-CONACYT.

The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (1987). *A Classification of Institutions of Higher Education.* Princeton University Press.

The Chronicle of Higher Education (1998). *Almanac Issue*, agosto 28.

"This Year's Freshmen: A Statistical profile". *The Chronicle of Higher Education*, 20 de enero de 1999.

Timpane, John (1997). "Growing opportunities: European Careers and Graduate Programs for Life Scientists". *Science*, Nº 275. □

EFICIENCIA DE LAS INSTITUCIONES Y DESEMPEÑO ECONÓMICO

Fernando Fuentes y Jorge Marshall R.*

El presente artículo analiza la relación entre la eficiencia de las instituciones y el desempeño económico en las sociedades democráticas. La idea central de este análisis es que la calidad y características de las interacciones que existen entre las diversas instituciones de la sociedad tienen una influencia determinante en el esquema de incentivos que rodean a las acciones colectivas y, por tanto, en su resultado. Asimismo, se establece que esta interacción alcanza una situación de equilibrio, que depende tanto de los arreglos institucionales como de las preferencias o motivaciones de los individuos que participan en ellas. Por este motivo, el análisis de las interacciones supone una lógica dinámica, incluyendo la posibilidad de observar distintas formas de conductas en contextos socioculturales diferentes. Se analizan cuatro criterios para el logro de un equilibrio institucional más eficiente: transparencia, credibilidad, intervención comunitaria y deliberación. Estos criterios son analizados a la luz de la importancia de las instituciones, presencia de asimetrías de información, rol de los incentivos y el modelo agente-principal desarrollado en el ámbito de la teoría de juegos.

FERNANDO FUENTES HERNÁNDEZ. Ph. D(c) en Economía, Georgetown University. Profesor de Economía de la Universidad de Santiago de Chile.

JORGE MARSHALL RIVERA. Ph. D., en Economía, Harvard University. Vicepresidente del Banco Central de Chile.

* Los autores agradecen los comentarios de José Antonio Rojas.

I. Introducción

La discusión en torno al rol del Estado en la economía ha pasado por diversas influencias, desde el extremo liberal, que aspira a un Estado mínimo, hasta el intervencionismo extendido, que concibe la acción estatal como la solución a todas las fallas que presenta el mercado. Sin perjuicio de la validez de cada una de las argumentaciones en esta discusión, existen dos conclusiones que son ampliamente compartidas: i) el Estado debe actuar sobre la economía, al menos en ciertos ámbitos; y ii) la acción del Estado tiene imperfecciones que generan diferentes grados de eficiencia en su accionar. Coherente con el debate más general, el reclamo respecto a las imperfecciones del Estado se ha orientado por dos caminos. Por una parte, la visión más radical considera que la minimización del Estado y su reemplazo por el mercado es un paso necesario para mejorar la eficiencia de la organización económica. Por otra parte, la visión más moderada busca introducir cambios institucionales, asociados a los mecanismos de incentivos, que permitan mejorar la acción del Estado. Este trabajo se sitúa en esta segunda perspectiva, incorporando una visión de las instituciones como el resultado de un juego dinámico.

Este artículo define la eficiencia de la acción del Estado como una función que depende centralmente de los incentivos que emanan de la interacción entre las diversas instituciones de la sociedad, más que del diseño o estructura interna de las instituciones consideradas en forma aislada. Los elementos internos de las instituciones son también causados (indirectamente) por las características de las relaciones con otras instituciones y con la sociedad. Desde este punto de vista, existe una complementariedad entre los trabajos que enfatizan los aspectos internos de las organizaciones como determinantes de su eficiencia y el enfoque de este trabajo, que acentúa el papel de los incentivos que provienen de las interacciones externas, en un equilibrio institucional dado. Tanto la capacidad para alterar la estructura de incentivos como el hecho de que las preferencias y motivaciones de los individuos se forman endógenamente en los equilibrios institucionales abren la posibilidad para mejorar el funcionamiento de las instituciones en el tiempo.

Las instituciones sociales se definen, de un modo amplio, como los medios de autodeterminación que utiliza la sociedad para conseguir determinados objetivos o fines, y representan la consecuencia de un equilibrio dinámico de múltiples interacciones, que se modifica por medio de cambios en los agentes involucrados y en las normas que regulan su interacción.

Cabe advertir que en el trasfondo de los debates sobre desempeño económico se mezclan la competencia de los medios y la calidad de los objetivos. Conceptualmente estos dos aspectos se pueden separar, aunque en la práctica están muy entrelazados. De hecho, la única manera que tiene la sociedad para determinar sus propios fines es a través de las mismas instituciones que luego servirán para organizar las conductas de los diversos actores en la búsqueda del bien común.

Este artículo trata de las capacidades de las instituciones, entendidas como equilibrios dinámicos, para contribuir al logro de fines determinados, especialmente en el ámbito de la organización de la economía, en las sociedades democráticas modernas. Ello no significa desconocer la importancia que tiene la selección de los fines que dan sentido a la vida de la sociedad. No obstante, el propósito de este artículo es destacar la enorme influencia que tiene el funcionamiento de las instituciones, en cuanto medios a través de los cuales se organiza la vida de la sociedad en una determinada área en función de los fines seleccionados.

Es importante distinguir entre medios eficientes y la eficiencia como fin. La sociedad puede tener diversos fines, entre los cuales está la eficiencia en el uso de los recursos escasos. Pero cualesquiera sean los objetivos que definen el bien común, para aproximarse a ellos se requiere de instituciones que funcionen con eficiencia. En caso contrario estaremos en presencia de una disyuntiva entre bien común e intereses particulares. En este sentido, una institucionalidad eficiente es aquella que genera incentivos que favorecen formas de conducta coherentes con los objetivos últimos de la sociedad.

La importancia de la eficiencia de las instituciones se ha incrementado en la sociedad actual por varios factores, entre los cuales están: i) la política adquiere un papel central en la solución de los problemas de la sociedad, lo cual significa que las acciones colectivas se elaboran en un marco de participación amplia de los ciudadanos y las instituciones en las actividades políticas; ii) han desaparecido de la escena política las visiones y perspectivas globales de la sociedad, dando paso a ideas más parciales que buscan solucionar problemas específicos con respuestas que ya no provienen de la generalidad y van a lo específico, sino a la inversa; iii) se ha producido un desarrollo sin precedentes de la ciencia y la técnica, que tiende a rivalizar con la política en la solución de los problemas de la sociedad, y iv) existe un cuestionamiento constante de los fines que otorgan sentido a la vida de la sociedad. Estos factores tienen en común que las acciones colectivas que permiten el autogobierno de la sociedad están en la actualidad más vinculadas al funcionamiento cotidiano de las instituciones,

lo cual plantea la necesidad de revisar su funcionamiento para mejorar el resultado de estas acciones.

Entre las instituciones relevantes en la organización económica de la sociedad están el Estado, el mercado y las comunidades. Ninguna de ellas es superior a las demás en todas las situaciones y todas tienen imperfecciones en su funcionamiento. Sin embargo, para una agenda orientada a incrementar la eficiencia en el funcionamiento de los equilibrios institucionales, el Estado tiene la mayor relevancia porque es depositario de las potestades que pueden influir en la organización del resto de las instituciones sociales a través de las cuales los agentes económicos llevan a cabo sus decisiones, por lo que en su propio accionar debe incorporar esta interacción. Por esta razón, el análisis de las instituciones que se realiza en este trabajo se concentra en el Estado.

En un mundo de perfecta certidumbre e información completa y simétrica, las fallas del mercado serán resueltas por la acción de un Estado eficiente. Éste establecerá y administrará normas tendientes a superar las referidas fallas y proveerá los bienes públicos requeridos. La comunidad contará con información perfecta de los costos y efectos de cada una de las acciones llevadas a cabo por el Estado, motivo por el cual cualquier desviación de la senda eficiente será detectada y corregida a través del sistema democrático. Del mismo modo, debido a la ausencia de incertidumbre, la sociedad contará con toda la información sobre las situaciones futuras a enfrentar, permitiéndose un plan conocido de ajustes a las normas.

En la práctica existe incertidumbre e información incompleta y asimétrica. En este ambiente es posible entender algunas de las razones por las cuales el Estado falla, en el sentido de no lograr la eficiencia cuando interviene con el objeto de superar las fallas del mercado. De hecho, la concepción de que los agentes gubernamentales actúan sólo con el objeto de maximizar el bien común ha ido dejándose de lado, dando paso a la interpretación de que en la acción estatal conviven el interés público con objetivos particulares (Przeworski, 1990). Asimismo, el rol de los incentivos ha sido muy destacado para explicar la distancia entre las acciones efectivas y las que corresponden al interés público (Stiglitz, 1998). Al interior de las agencias gubernamentales hay incentivos para utilizar las ventajas de información con objetivos diferentes a los del bien común. La información incompleta y asimétrica impide a los agentes privados comprender apropiadamente las políticas públicas y actuar más cooperativamente con los propósitos del interés colectivo. Se presentan dificultades para identificar nuevas soluciones a las fallas en la gestión estatal. Estos elementos de incoherencia entre el interés público y los incentivos presen-

tes en las instituciones están en la base del equilibrio dinámico en que está envuelta la institucionalidad estatal, en el que las reglas del juego y la interacción entre las distintas organizaciones sociales tienen un rol preponderante.

En este artículo se identifican algunos criterios que aportan al fortalecimiento institucional del Estado con el objeto de facilitar el logro del bien común a través de sus acciones. Estos criterios son: credibilidad, transparencia, intervención comunitaria y deliberación. Se trata de mecanismos que tienen la capacidad de modificar el esquema de incentivos en el cual opera el Estado y el equilibrio institucional que resulta de tales incentivos. Por esta vía permiten mejorar la eficiencia de su intervención en los asuntos públicos. Estos criterios son altamente complementarios entre sí y tienen en común dos premisas que ya han sido enunciadas: i) la eficiencia del Estado no depende sólo de su organización interna, sino principalmente de la calidad de su interacción con el conjunto de la sociedad, y ii) las instituciones de la sociedad son la consecuencia de un conjunto de procesos que operan a través del tiempo, por lo que se debe adoptar un enfoque de equilibrio en el análisis de su funcionamiento.

En relación con la primera de estas premisas, la eficiencia de las instituciones modernas depende de factores que van más allá de su organización interna o de su estructura administrativa. Estos últimos pueden ser elementos necesarios para que exista eficiencia, pero no son suficientes. Los incentivos internos son frágiles si se apoyan en la iniciativa individual, más que en el funcionamiento de las instituciones de la sociedad, las que están constituidas por la interacción dinámica entre muchos agentes (organizaciones e individuos), reglas del juego e incentivos. Por ejemplo, afirmar que un buen jefe de un servicio público mejorará la eficiencia de su organización es perfectamente correcto, pero no indica cómo seleccionar a los buenos jefes, qué debemos hacer cuando los jefes no son tan buenos, ni si las condiciones institucionales, en términos de incentivos, permiten la aparición de un buen jefe. Sólo los incentivos externos, que están basados en la interacción entre muchos individuos y organizaciones, pueden mantener una dinámica duradera de ganancia de eficiencia. Lo anterior se apoya en la idea de que las instituciones representan patrones de expectativas compartidas, mutuamente determinadas por las estructuras organizacionales y el sistema de reglas vigentes en una sociedad (Schedler, 1995). Así, las dificultades del Estado para lograr eficiencia en su gestión no pueden superarse sin mejorar la interacción entre las instituciones sociales involucradas en las decisiones colectivas.

En cuanto a la segunda premisa, el funcionamiento de las instituciones es una consecuencia de muchas interacciones ocurridas en el pasado que han generado endógenamente un determinado orden, que depende simultáneamente de variables económicas, sociales y políticas. En este sentido, la noción de que las instituciones representan un equilibrio ofrece una enorme ventaja para analizar las interdependencias entre los individuos y las instituciones que operan en la sociedad. Incluso permite aplicar los conceptos de equilibrios múltiples en los cuales las instituciones sociales aparecen como mecanismos que pueden ser modificados por la conducta de los individuos, y no están exclusivamente determinados por la cultura o la tecnología. Así, las soluciones a las fallas del Estado incluyen de manera muy destacada elementos relacionados con los patrones de expectativas compartidas de los agentes económicos, definidas en un marco institucional específico. La importancia de los criterios de credibilidad, transparencia, intervención comunitaria y deliberación se analiza en esta perspectiva institucional de equilibrio dinámico.

Los mencionados patrones de expectativas interactúan con los aspectos organizacionales y normativos de la sociedad, de modo que es muy dificil establecer causalidades directas que permitan su modificación. Por este motivo, no es posible encontrar soluciones unívocas con un carácter general a los problemas institucionales observados. Las soluciones serán siempre parte de un contexto en el cual interviene un amplio espectro de variables asociadas a las conductas de los agentes económicos, y por lo tanto aquéllas tendrán un carácter innovador y único. A partir de esta visión se entiende la función de los criterios mencionados: son algunos caminos de solución para problemas específicos, desarrollados en el ámbito de un enfoque en que las conductas e incentivos de los individuos interactúan con el marco institucional en que se desenvuelven.

Esta visión de la institucionalidad como un equilibrio social es coherente con algunas contribuciones recientes en el ámbito de la conducta económica, que sostienen que las personas están *constituidas* por las instituciones, las cuales determinan los hábitos y las reglas implícitas de conducta vigentes en un orden socioeconómico específico (Hodgson, 1998). Así, la idea más tradicional de que los individuos tienen ciertas preferencias independientes del entorno social e institucional en que se desenvuelven, tiene menos capacidad explicativa cuando se analizan las conductas individuales en diferentes arreglos institucionales. Las preferencias de las personas no son un atributo que éstas tengan *per se*, sino que una característica determinada por las interacciones sociales y económicas que se experimentan en el ámbito de las instituciones vigentes. En este contexto, la

forma en que evolucionan las instituciones sociales influye en el proceso de cambio cultural, y por ende en las preferencias y conductas de los individuos y grupos humanos (Bowles, 1998).

Por otro lado, el enfoque de la economía de las instituciones ha puesto de manifiesto la complejidad de los incentivos en el desempeño de la economía, destacando la relevancia de los aspectos contractuales y culturales presentes en cada contexto (Williamson, 1994 y 1998). Del mismo modo, diversos trabajos realizados recientemente por el Banco Mundial establecen la necesidad de focalizar los análisis del desempeño del Estado en variables tales como el sistema de incentivos y los niveles de credibilidad presentes en el contexto institucional que posea cada economía (Banco Mundial, 1993, 1995 y 1997).

La importancia de la visión institucional como equilibrio de un juego dinámico también es coherente con ciertas manifestaciones socioculturales de la época moderna. Es así como, a pesar del consenso alcanzado respecto a los beneficios de la democracia y del mercado para organizar las sociedades actuales (Fukuyama, 1992), persiste un cierto desencanto de la gente con los cambios en las formas de vida que trae la economía moderna y globalizada. Este fenómeno se podría explicar señalando que la sociedad ha descuidado algunos fines, como igualdad o comunidad, para privilegiar otros, como eficiencia y libertad. Pero también se podría postular que las instituciones de la sociedad tienen insuficiencias que impiden lograr los fines deseados, incluyendo la necesidad social de seleccionar los propios fines.

Sin descartar la primera de las hipótesis anteriores, en este trabajo se considera que una de las características de la sociedad moderna es el enorme aumento de la complejidad en la organización de las actividades económicas, lo que introduce nuevas dificultades en las responsabilidades que le corresponden al Estado en su relación con el mercado y las comunidades para alcanzar el bien común. La desconfianza que genera la presencia de instituciones cuyo accionar no parece conducir al bien común incrementa el descontento de la sociedad. En este enfoque el descontento está vinculado con las deficiencias en el funcionamiento de las instituciones, más que con determinados resultados económicos. Ello explica que incluso en países que no viven una crisis económica ni política haya una cierta insatisfacción con las instituciones sociales (Maier, 1994).

Una de las principales dificultades para la misión de las instituciones en la sociedad actual es que la información necesaria para adoptar las decisiones relevantes está cada vez más dispersa, lo cual debilita todos los sistemas de incentivos sobre los que se apoya su funcionamiento. La comprensión y capacidad de rediseño de los sistemas de incentivos pueden

incrementar los niveles de eficiencia y confianza de las personas en las instituciones, y con ello contribuir a la creación de un sentido de comunidad más sólido.

En este contexto, este artículo pretende hacer un aporte al debate que busca armonizar las conductas de los agentes económicos con el bien común, a través de un funcionamiento más eficiente de las instituciones. Se trata de contribuir a elaborar una propuesta que resuma la búsqueda colectiva de soluciones a los problemas de la vida en sociedad. Específicamente, luego de largos debates respecto de los roles del Estado y del mercado en la economía, se intenta delimitar algunos elementos que posibiliten una acción eficiente del Estado, teniendo presente la importancia de las instituciones y la estructura de incentivos en que éstas se desenvuelven, el espíritu de época que caracteriza los procesos actuales de modernización y el ambiente intelectual moderno en el cual las grandes soluciones parecen haber dado paso a las pequeñas.

Para lograr el objetivo propuesto, este artículo está dividido en cuatro secciones. En la segunda se reflexionará sobre la discusión en torno al rol del Estado en el desarrollo económico y social, y su relación con el mercado y la sociedad. Aunque es claro que el Estado debe jugar un papel en cualquier estrategia de desarrollo, se debe reconocer que hoy se carece del consenso necesario para lograr definiciones y aportes concretos a este respecto. Hay un debate inconcluso en el cual se puede avanzar subrayando la importancia de la interacción entre diferentes actores sociales en democracia para generar incentivos compatibles con el bien común, en un contexto institucional dado. En la tercera parte, se analizan cuatro criterios que deben tenerse presentes para el logro de un equilibrio institucional, en términos de agentes y reglas del juego: transparencia, credibilidad, intervención comunitaria y deliberación. Estos criterios son analizados aplicando conceptos de la economía institucional, teoría de la información, papel de los incentivos, y el enfoque de agente-principal desarrollado en el ámbito de la teoría de juegos. Por último, en la cuarta parte se presentan algunos comentarios en torno a las perspectivas de trabajo posibles de llevar a cabo sobre la base del enfoque desarrollado.

II. Estado y mercado: balance del debate

El mercado es la institución básica e ineludible para el funcionamiento de la economía en la sociedad actual. Sin embargo, existen ciertos objetivos colectivos que no siempre pueden ser alcanzados con funciona-

miento libre de los mercados. En estas condiciones el Estado aparece como un instrumento, aunque no el único, que tiene la sociedad para aproximarse a determinados objetivos de bien común. También las comunidades desempeñan un papel en la organización de la economía, por medio de las relaciones entre individuos que ocurren fuera del ámbito del mercado y que no están reguladas por el Estado. Aunque estos tres mecanismos para organizar las conductas de los individuos tienen plena vigencia en la sociedad actual, lo que interesa dilucidar en esta sección es una doble pregunta: ¿por qué mantiene el Estado un papel preponderante en el funcionamiento de la economía? y ¿cuáles son las fuentes de ineficiencia en las acciones del Estado?

Cabe destacar, en el contexto de las interrogantes formuladas, que durante el siglo XX se ha producido una expansión, no conocida antes, del papel del Estado en la organización de las relaciones económicas. Este fenómeno ha generado consecuencias positivas y negativas en el funcionamiento de los mercados y en las relaciones entre los individuos. Paralelamente, la organización de la economía se ha hecho más compleja y la información relevante para las decisiones de los individuos está más disgregada, lo cual representa un riesgo para la eficiencia de los sistemas de incentivos que pretenden alinear las conductas individuales con el bien común. Por estas razones, el debate sobre la eficiencia en la organización de la economía se ha desplazado paulatinamente desde el mercado y las comunidades hacia el Estado, debido a su responsabilidad y potestad política para actuar afectando a toda la institucionalidad económica y los mecanismos generadores de información e incentivos. En esta sección se revisan los antecedentes de este debate y luego se extraen algunas conclusiones que fundamentan la necesidad de perfeccionar el diseño institucional en que está inserto el Estado en las sociedades democráticas, y a partir de esas conclusiones se analizan, en la sección siguiente, algunos criterios para el perfeccionamiento del equilibrio institucional en que el Estado lleva a cabo sus acciones.

1. Antecedentes del debate

Antes de especificar las conclusiones del debate acerca del Estado y la organización de la economía conviene detenerse brevemente en tres momentos de este debate: i) la confianza en la mano invisible; ii) la confianza en el Estado; iii) el reconocimiento de las deficiencias del Estado.

El primer momento corresponde al liberalismo clásico. Su rasgo más destacado es la confianza en que la mano invisible, que opera a través de los mercados, permite coordinar las conductas de los individuos y alinearlas con el bien común. Este enfoque considera que el mecanismo natural de la competencia, representado en las facilidades para la entrada de nuevos competidores a los mercados, permitiría erosionar cualquier abuso monopólico, que a su vez se considera la única amenaza seria para el buen funcionamiento de la institucionalidad económica. Así, el mercado es la base sin contrapeso para una institucionalidad económica eficiente en la sociedad democrática.

La validez conceptual de este enfoque está resumida en una proposición básica de la economía del bienestar: una economía de mercado produce una asignación de recursos eficiente cuando existen mercados completos, información completa en los mercados y ausencia de externalidades. Si se cumplen estas condiciones, las acciones independientes de los individuos conducen al máximo.

Gradualmente la confianza del liberalismo clásico en el mercado comenzó a desvanecerse por dos vías. En primer lugar, la idea de fracaso o insuficiencia de los mercados para alcanzar el objetivo de eficiencia económica se consolidó a través del tratamiento de los conceptos de bienes públicos, externalidades y rendimientos crecientes. Se quebró la relación entre eficiencia y mercado como un absoluto teórico. En segundo lugar, las aspiraciones colectivas de la sociedad incorporaron objetivos diferentes al de la eficiencia, lo cual encontró al mercado insuficientemente preparado para resolver los problemas de organización económica de la sociedad. Es importante distinguir entre las situaciones en que el mercado fracasa porque no logra una coordinación eficiente en el uso de recursos insuficientes y los casos en que la eficiencia económica no es el único objetivo de la sociedad. Aunque en ambos casos estamos en presencia de una institucionalidad imperfecta para los propósitos del bien común, las soluciones que se apliquen para perfeccionar las instituciones pueden ser muy diferentes.

Un segundo momento en el debate sobre la organización de la vida económica de la sociedad moderna está caracterizado por la confianza en el Estado. En la medida en que se reconocen las limitaciones del mercado surge la pregunta: ¿y si el mercado fracasa, ya sea porque no logra la eficiencia o porque no permite alcanzar otros objetivos de la sociedad? La respuesta fue, por años, invariable: es el Estado quien corrige las imperfecciones del mercado.

En la teoría económica aparecieron diferentes corrientes que explicaron el fracaso del mercado en la coordinación económica, entre las que

destacan el keynesianismo, que dominó el campo de la política macroeconómica por varias décadas, y la teoría de la competencia imperfecta, que sirvió de base para la acción reguladora del Estado a nivel microeconómico. También la teoría del desarrollo económico, que adquirió relevancia en los años 50 y 60, estaba asentada en el supuesto de imperfección de los mercados. Varios enfoques se diferenciaban en identificar las imperfecciones que frenaban el proceso de crecimiento, tales como la existencia de bienes públicos o externalidades, a partir de las cuales se construían recomendaciones para la acción del Estado. En la actualidad, muchos de estos aportes continúan incorporados en las visiones más generales de las imperfecciones de los mercados.

Desde el punto de vista de la gestión pública, la orientación básica para la política económica en esta fase recomendaba utilizar al mercado cada vez que fuese posible, pero al Estado cada vez que fuera necesario. Es decir, había una idea doble: dejar que los mercados hagan aquello para lo cual son eficientes y dejar que el Estado corrija a los mercados y provea los bienes colectivos.

El tercer momento de este debate está marcado por el reconocimiento de las deficiencias del Estado. La fuerza del argumento para la intervención del Estado comienza a presentar una doble y peligrosa debilidad lógica y práctica. Se partía de la premisa que los mercados fracasaban y se concluía que el Estado debía actuar. Pero la lógica no era rigurosa: pretender que, cada vez que el mercado no logra un desempeño eficiente, el Estado debe intentar que la situación mejore, supone que este último puede alcanzar el conocimiento y la recta intención para lograr siempre el bien común de la sociedad. Sin embargo, la conducción del Estado está a cargo de individuos en los que conviven los intereses particulares con los del bien común, y los resultados de su acción concreta son lógicamente inciertos, ya que dependen de la calidad de los sistemas de incentivos que ellos enfrenten en las instituciones de la sociedad. Es decir, se comienza a tomar conciencia de que la acción del Estado también puede dañar a la economía y la sociedad.

La debilidad práctica del planteamiento favorable a un Estado interventor fue el exceso de regulaciones y políticas superpuestas, muchas de ellas contradictorias, lo que condujo a un deterioro en el desempeño de las economías, a una caída en su capacidad para invertir y a una baja en su productividad. Ese conjunto de regulaciones no era sólo la señal de una planificación y una coordinación global insuficientes, sino que muchas veces respondían a lógicas particulares revestidas de interés público.

Así, la visión del Estado interventor falló porque fue incapaz de administrar los incentivos que permiten que las organizaciones complejas, en contextos de información dispersa, mantengan una racionalidad coherente con los fines públicos declarados. Los nuevos hechos de la economía imponían, poco a poco, cambios ineludibles, en los cuales el papel del Estado aparecía teórica y prácticamente cuestionado. Aquí yace el dilema fundamental de la visión económica que mantuvo por un largo período la confianza en el Estado: la teoría nos permite afirmar que el Estado podría hacer algunas cosas mejor que el mercado, pero no entrega certezas para confiar que no excederá los límites de una intervención óptima, ni que será eficiente en su acción.

2. Balance del debate

A pesar de la fuerza política que generó el reconocimiento de las insuficiencias del Estado, este episodio no constituyó el cierre del debate sobre la organización económica de la sociedad. Es cierto que el Estado no es omnisciente, sabio y bueno, pero también es cierto que los mercados no generan un resultado eficiente en la organización de la economía. Esta doble aseveración, junto a la expansión del papel del Estado y los problemas de información propios de las sociedades modernas, explica el renacer de la literatura del perfeccionamiento de la acción del Estado. Ello se observa en muchos desarrollos teóricos que ponen al Estado como un actor en un contexto más amplio de interacción con el conjunto de la sociedad. Esta interacción sigue las reglas del juego de la democracia, pero incorpora las debilidades de los sistemas de incentivos que se producen por la presencia de información incompleta y asimétrica.

El balance de este debate se puede resumir en cuatro proposiciones: i) un orden económico que sólo recurre al mercado presenta serias imperfecciones; ii) el Estado tiene limitaciones para corregir las imperfecciones de los mercados; iii) para generar incentivos que permitan que la acción pública coincida con el bien común es necesario mejorar la calidad de la interacción entre los diferentes actores sociales en el marco institucional de la democracia, y iv) las comunidades tienen capacidad para complementar los incentivos que se obtienen del monitoreo de la acción pública en democracia.

La primera proposición corresponde a la conclusión que emerge del primer y tercer momento del debate. En la actualidad podemos afirmar que los mercados son imperfectos. No es posible, salvo excepciones, llevar a

cabo transacciones expeditas referidas al futuro o a las externalidades que se generan en las actividades de producción y consumo. La información es imperfecta porque cada individuo no conoce todo lo que saben aquellos con los cuales interactúa. La información es endógena porque aprendemos sobre los demás individuos observando su conducta en el mercado, lo que nos lleva a cambiar nuestras propias creencias. Las ineficiencias que se originan en mercados incompletos e información endógena son profundas y no permiten inferir que los mercados sean eficientes. En ausencia de esta presunción, la sola idea de mercados libres ofrece poca ayuda para elegir las mejores soluciones económicas para los problemas de la sociedad.

Cuando faltan algunos mercados y la información es incompleta y asimétrica, entonces la mano invisible de los mercados no trabaja con la seguridad que se le atribuía en el primer momento reseñado: los precios dejan de representar en forma exclusiva los costos de oportunidad y pueden incluso desinformar a los participantes en el mercado, las externalidades están presentes en muchas acciones individuales, la información es frecuentemente asimétrica, el uso del poder de mercado es extendido y los buscadores de renta abundan. Todas éstas no son imperfecciones aisladas que se puedan corregir con facilidad.

La segunda proposición está basada en la conclusión del segundo momento del debate. Existe desilusión respecto a la capacidad del Estado para corregir las imperfecciones del mercado. Este fenómeno se refleja también en la desconfianza que los ciudadanos tienen del Estado, enraizada en el funcionamiento de la institucionalidad democrática moderna, la cual no ha resuelto las incoherencias entre los incentivos que emanan de las interacciones institucionales y los objetivos del bien común.

Desde luego, siempre se ha señalado que no es posible el funcionamiento de una economía de mercado moderna en completa ausencia del Estado, ya que a lo menos se requiere de tradiciones y de instituciones extraeconómicas para establecer el orden, el respeto a los derechos de propiedad, la aplicación de los contratos y la defensa de la nación. Además, la sociedad busca en el Estado un instrumento para acercarse a sus objetivos de bien común. Así, el Estado tiene un papel positivo que ejercer. Sin embargo esta proposición nos indica que el dilema respecto al Estado no está resuelto: ¿cómo podemos hacer para que el Estado actúe cuando debe, actúe como debe actuar, y se contenga cuando sea necesario?

Nos acercamos así al centro del debate actual, que está resumido en la tercera proposición. La acción del Estado existe y puede mejorar el desempeño de la economía, pero para lograr este propósito debemos per-

feccionar el marco institucional en que ésta se desenvuelve, mejorando la calidad de la interacción entre las organizaciones que conforman el Estado y entre éstas y el conjunto de la sociedad, de manera que se generen incentivos que permitan que la acción pública coincida con el bien común. En otras palabras, no se trata de poner exigencias a la actuación del Estado como un ente aislado, sino de superar sus deficiencias modificando el ámbito institucional en el que habita, el cual determina la estructura de incentivos que subyace en la acción pública.

Los nuevos avances en la teoría económica, especialmente en los campos de la teoría de juegos, interacción entre agentes con información incompleta y desarrollo de las instituciones, ofrecen un amplio sustento a las dos primeras proposiciones y abren un espacio bastante interesante para indagar en torno a nuevas formas de complementación entre mercado y Estado en el contexto de la tercera proposición. El desarrollo de la teoría del agente y principal destaca la existencia de información asimétrica y la coexistencia de diferentes intereses como un dilema básico para el logro de una adecuada gestión de las organizaciones complejas. La aplicación de este enfoque a la gestión del Estado nos revela la dificultad que tienen los ciudadanos para utilizar exclusivamente la delegación democrática como forma de contrato con el Estado.

Así, la tercera proposición invita a explorar las condiciones que se deben exigir al funcionamiento de la institucionalidad democrática, para que los ciudadanos tengan la capacidad para monitorear, directa o indirectamente, a sus gobiernos, y complementar la delegación política de la democracia con el monitoreo de la gestión pública. En este nuevo contexto, sostener que las imperfecciones de los mercados se resuelven con la intervención del Estado no es una solución satisfactoria, porque no responde la interrogante fundamental respecto del control del mecanismo de corrección. Es decir, el desafío principal reside en mejorar el funcionamiento de las instituciones de la democracia, para que los ciudadanos restablezcan, en las condiciones de información incompleta y asimétrica, la confianza en el Estado, sobre la base de interacciones sociales que reproduzcan incentivos compatibles con el bien común. Este desafío vincula el desempeño de la economía con la fortaleza de las instituciones, la confianza en el Estado y su mayor eficiencia.

Las modificaciones institucionales que requiere el Estado se relacionan con la interacción entre éste y el resto de los agentes sociales en lo relativo a las características de la información, control, incentivos y recompensas. Enfrentar el problema supone investigar nuevas formas de desarrollo institucional que se requiera aplicar en una democracia política. Para

enfrentar los desafíos institucionales de la modernidad no se trata de ajustar la combinación entre Estado y mercado, forzando un consenso artificial entre un sector privado intransigente y una clase política deseosa de restablecer una base económica para su acción. Tampoco se trata de renunciar a este desafio y limitar el Estado a ciertas reglas de conducta mínimas como señala el liberalismo extremo, que desconfía de la capacidad democrática de la ciudadanía para poder controlar al Estado. Lo que se necesita es profundizar la democracia poniendo en práctica incentivos compatibles con el bien común. De esta manera, los individuos lograrán vigilar lo que sucede en el Estado y recobrar la confianza en él.

No obstante, aun la versión optimista de la tercera proposición debe reconocer sus limitaciones. El perfeccionamiento de las instituciones es un proceso complejo y lento, que depende poco de la voluntad de determinados actores del juego democrático y mucho de la interacción dinámica que se establece entre muchos agentes económicos y políticos. Del mismo modo como las instituciones actuales son el resultado de una evolución de dichas interacciones en el pasado, modificar las instituciones significa alcanzar nuevos equilibrios en estos procesos de interacción, lo cual requiere establecer nuevas rutinas que alteran el equilibrio existente y buscar evolutivamente equilibrios más eficientes.

En este contexto de dificultad es interesante la cuarta proposición, que busca complementar esta función de monitoreo de las acciones públicas a través de las comunidades más directamente envueltas en dichos programas. Las comunidades se definen como grupos que mantienen una interacción durante un período prolongado, lo que genera un incentivo para actuar en forma cooperativa. Se trata de un sistema que reúne información dispersa a un bajo costo. El énfasis de la cuarta proposición no está en las comunidades como unidades productivas independientes, sino como grupos que complementan el monitoreo de las acciones colectivas en que participa, directa o indirectamente, el Estado. Esta labor es especialmente válida en el caso de los servicios descentralizados, como la educación, gestión de barrios, salud, regulación de recursos escasos, en los cuales un monitoreo centralizado es simplemente insuficiente.

Para que cumplan esta función de monitoreo las comunidades deben tener normas que sirvan de pauta para las acciones esperadas por parte de cada uno de los individuos, incluyendo aquellos que representan al Estado. Sin embargo, para asegurar el cumplimiento de esta función es también importante la calidad de las normas implícitas en las relaciones entre los individuos, en cuanto partes integrantes de una comunidad. La propia ar-

monía y confianza de la vida en comunidad es un factor de crecimiento tan importante, que se ha considerado como una nueva fuente de capital, bajo la denominación de capital social (Fukuyama, 1995). En todo caso, el alcance de la cuarta proposición es más limitado. Sólo pretende generar mecanismos de monitoreo en el ámbito local que generen incentivos para mejorar la eficiencia de las acciones públicas. A pesar de lo dicho, no debe pasar inadvertido el hecho de que la expansión y centralización del Estado ha tenido como consecuencia un debilitamiento de la labor de las comunidades, en particular en su capacidad de proveer el monitoreo que se requiere para mantener la eficiencia de las acciones colectivas.

En definitiva, el desafío de mejorar los sistemas de incentivos en la organización de la economía para lograr una gestión estatal eficiente requiere considerar las interacciones entre los distintos agentes sociales y políticos, tanto en el ámbito central como en el local. Este enfoque llevará a cambios en los incentivos de los agentes, los que a su vez se traducirán en acciones más eficientes. Asimismo, la repetición de acciones de naturaleza diferente provocará modificaciones endógenas en las preferencias que pueden conducir a nuevos equilibrios sociales, en los cuales las acciones individuales son más coherentes con el bien común. Éste es el desafío en que se enmarcan los criterios que se presentan en la próxima sección.

III. Criterios para mejorar la eficiencia del Estado

El objetivo de esta sección es identificar algunos criterios que tienen la capacidad de modificar el esquema de incentivos en el cual opera el Estado y, por esta vía, mejorar la eficiencia de su intervención en los asuntos públicos, facilitando el logro del bien común por medio de sus acciones y generando nuevos equilibrios institucionales a través del tiempo. Estos criterios son: transparencia, credibilidad, intervención comunitaria y deliberación.

Los conceptos que se utilizan en este análisis están basados en el modelo de agente-principal, en que la sociedad en su conjunto es el principal y las instituciones del Estado son los diferentes agentes encargados de desarrollar las acciones colectivas. En un Estado democrático existe más de un agente, los cuales interactúan generando un sistema de incentivos que condiciona las conductas de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, algunos agentes relevantes pueden estar fuera de la institucionalidad del Estado, como son los partidos políticos, centros técnicos y académicos, organiza-

ciones comunitarias y asociaciones de intereses particulares. La labor de estas instituciones también influye en la eficiencia de las acciones del Estado, ya que modifican el sistema de incentivos para las decisiones públicas. Los cuatro criterios mencionados tienen efecto en la calidad de la interacción entre los diferentes agentes y entre éstos y el principal. Asimismo, las preferencias que subyacen en las interacciones representan variables endógenas a los equilibrios institucionales que se alcancen en un momento dado del tiempo. La calidad de las interacciones que se desarrollen entre las instituciones dentro y fuera del Estado determina la eficiencia de la sociedad para lograr ciertos objetivos de bien común.

1. Transparencia

En un marco simplificado, la interacción entre la sociedad y las instituciones del Estado se puede asimilar a la relación entre un principal y sus agentes. Este modelo permite analizar cómo el principal (la sociedad) puede diseñar un sistema de compensación e incentivos para que sus agentes (fundamentalmente las instituciones del Estado) actúen siguiendo los intereses del principal. Los agentes están encargados de seleccionar y ejecutar determinadas acciones entre un número de opciones disponibles. Los efectos de estas acciones son recibidos por el principal, el cual tiene la función de definir las reglas del juego del esquema contractual dentro de las cuales deciden los agentes (Stiglitz, 1989).

Las acciones que realizan las instituciones del Estado en la organización de las actividades económicas están normalmente caracterizadas por dos rasgos que tienen gran influencia en su resultado: i) la existencia de información imperfecta y ii) un ambiente incierto. La información imperfecta significa que aspectos relevantes de las acciones llevadas a cabo por las instituciones del Estado no pueden ser observados directamente. El hecho de que exista un ambiente de incertidumbre significa que dicha información tampoco puede ser inferida de manera simple a través de la observación de la realidad. En estas circunstancias se produce un deterioro en el control que la sociedad ejerce sobre las acciones del Estado, lo cual permite que las decisiones de las instituciones públicas puedan distanciarse del bien común.

Así, los problemas en la relación entre el principal y sus agentes surgen cuando la acción o el esfuerzo desplegado por el agente no es directamente observable por el principal, y además hay incertidumbre en

los efectos de las decisiones que adopta el agente[1]. Desde el punto de vista del principal, el desempeño es una variable aleatoria que depende tanto de la acción emprendida por el agente como de la modificación de variables exógenas que éste desconoce. Bajo esta circunstancia, el control del esfuerzo se hace muy difícil con el solo refuerzo de la capacidad de observar los resultados.

La situación anterior debilita los sistemas de incentivos en la relación entre el principal y sus agentes, lo cual incrementa el riesgo de que ocurran discrepancias entre los objetivos del agente y los de la sociedad, debido a la falta de información de esta última respecto de las acciones de los primeros. En el análisis económico de la relación agente-principal se distinguen dos distorsiones en los incentivos: riesgo moral y selección adversa. La primera se produce cuando la decisión o esfuerzo que adopta el agente no es observable por parte del principal. El aumento del esfuerzo del agente en beneficio del principal puede reducir su propio bienestar y al mismo tiempo el principal no puede verificar si las acciones que sigue el agente son tan esmeradas como se espera, ya que en el resultado interviene un factor aleatorio[2]. En el esquema simplificado en que el Estado representa al agente, es posible que las agencias estatales manejen información que el público no conoce y que sus acciones sean difíciles de observar. La segunda distorsión se presenta cuando existen distintos tipos de agentes, en los que su propia naturaleza es parte de su información privada. El problema de eficiencia se produce cuando el agente tiene incentivos para ocultar al principal la información respecto a su tipo, con el objeto de obtener algún beneficio de esta información privada.

Desde la perspectiva de la eficiencia en el logro de los objetivos colectivos, la información asimétrica y la incertidumbre facilitan que las decisiones de los agentes gubernamentales no coincidan con los intereses de la comunidad. Esta distorsión tiene mayor relevancia en la medida en que se den insuficiencias institucionales en el sistema democrático, especialmente cuando el sistema democrático es menos transparente. En este contexto, el incremento del nivel de transparencia de la acción de las agen-

---

[1] Este supuesto es usado con frecuencia en los modelos de agente-principal, estableciéndose que el resultado es función del esfuerzo y una variable exógena aleatoria que no es posible de observar. Sin perjuicio de esto, la estructura básica de esta forma de modelación no requiere de dicho supuesto, siendo suficiente la condición de imposibilidad de observar directa o indirectamente (por ejemplo, vía resultado) el esfuerzo del agente.

[2] También es posible concebir que el agente maximiza una función objetivo distinta de la que le impone el principal. Lo central es la incapacidad por parte del principal de observar directa o indirectamente la acción del agente.

cias gubernamentales es una vía para corregir la distorsión en los incentivos, en la medida en que incrementa la información disponible por el principal respecto al sentido de las acciones del agente, sus contenidos y resultados. Cuando hay información asimétrica e incertidumbre que impiden conocer el tipo de agente, la mayor transparencia ayuda a superar el problema en la medida en que establece resultados y acciones observables o limita el rango de opciones en las decisiones del agente.

El hecho de que en la realidad existan múltiples agentes y principales que se relacionan entre sí hace que el problema que generan la información imperfecta y la incertidumbre sea muy difícil de resolver de modo eficiente debido al conjunto de intereses en juego (Dixit, 1997). Por esta razón, la sociedad democrática crea varias instancias para lograr un control efectivo de las acciones del gobierno. Específicamente, el Parlamento desempeña la delicada función de supervisar las acciones del Ejecutivo en las democracias modernas. Esta labor es compleja porque el propio Parlamento se constituye en un nuevo agente que, en un contexto de asimetría de información, también puede tener objetivos distintos que los del principal.

Considerando un esquema de dos agentes elegidos por medio del sistema democrático, al Ejecutivo le corresponde llevar a cabo ciertas acciones específicas encaminadas al logro del bien común; y el Parlamento cumple la función de controlar las acciones del Ejecutivo y establecer las reglas del juego (leyes) por las cuales se desarrollan dichas acciones. El principal no puede observar directamente muchas de las acciones del Ejecutivo, ni inferirlas a partir de sus resultados. Asimismo, no logra observar las acciones del Parlamento, entendidas como el esfuerzo por controlar las actividades del Ejecutivo.

Dadas la asimetría de información y la dificultad para observar o inferir sus acciones, tanto el Ejecutivo como el Parlamento tienen cierto espacio para acomodar sus propios objetivos, que incluyen el interés social pero no excluyen los objetivos privados. Por ejemplo, las agencias estatales se pueden ver motivadas a no esforzarse en la búsqueda del bien común y sí a atender un objetivo privado, debido a que el costo de este tipo de acciones se reduce cuando la asimetría de información disminuye la probabilidad de ser observado por el principal. Lo anterior implica que sin una modificación a la estructura de incentivos, cambiando los niveles de transparencia de la gestión estatal por la vía de diseñar contratos más rigurosos, se mantendrá una desalineación entre los intereses del principal (la sociedad) y las dos agencias fundamentales con las que interactúa: el Ejecutivo y el Parlamento.

La transparencia consiste en establecer mecanismos que identifiquen los objetivos y las acciones de las distintas agencias estatales, para efectos de su evaluación por parte de otras instituciones. De este modo se aumenta la comprensión y el control social de las actividades llevadas a cabo por el Estado. En este contexto, la transparencia es una combinación eficaz entre información y control.

La creación de mecanismos que incrementen la transparencia de la gestión pública y la profundización de la democracia como sistema abierto de interacción entre los ciudadanos no son dos fenómenos independientes. De hecho los gobiernos serán transparentes sólo si se dan ciertas condiciones institucionales, las cuales están íntimamente ligadas al desarrollo de una democracia más evolucionada (Przeworsky, 1997). Entre estas condiciones cabe desatacar la necesidad de contar con información e instancias formales de control de la acción del Estado. Ninguno de estos dos componentes de la transparencia puede operar eficientemente por sí solo. Cuando hay información y no se cuenta con instancias responsables de control, se pierde el efecto de mejorar la eficiencia de la acción del Estado y se cae fácilmente en el uso pasional de la información disponible. Cuando no existe la información, no es posible aplicar el control aunque se cuente con las instancias para ello. En este sentido, la información es la condición necesaria para que haya transparencia y el control responsable es la condición suficiente. Cabe destacar que la transparencia, como combinación de información y control, se centra en la interacción de los agentes y el principal, y redefine el marco de incentivos en que los agentes toman sus decisiones.

Respecto de la información, los proyectos estatales deben explicitar sus objetivos, fundamentos de las principales decisiones, costos directos e indirectos, avances de la ejecución de los programas y resultados. Para que este proceso sea efectivo, la información debe ser manejable por parte de la entidad controladora. En este sentido, la proliferación de programas vulnera la viabilidad de una transparencia efectiva.

Si bien en esta área de la transparencia (información) se puede avanzar de manera importante, la mayor dificultad se presenta en la fase del control. La institucionalidad tiene el riesgo de caer en un control inefectivo, pero beneficioso en el corto plazo para quien lo realiza. Si éste es el caso, los organismos del Ejecutivo tenderán a reducir la entrega de información. Es decir, la relación entre información y control puede tomar fácilmente la forma del dilema del prisionero, en que la estrategia dominante para la institución controladora es utilizar la información que recibe con una visión de beneficios de corto plazo.

Caso 1
Incentivos equivocados para el control

Parlamento	Ejecutivo	
	Información	Reserva
Control eficaz	2 (2) 1	–2 (1) 0
Control improductivo	–2 (1) 2	0 (0) 1

Caso 2
Incentivos adecuados para el control

Parlamento	Ejecutivo	
	Información	Reserva
Control eficaz	2 (2) 2	–2 (1) 0
Control improductivo	–2 (1) 1	0 (0) 1

El análisis anterior se puede representar con un juego simple que tiene tres participantes, uno de los cuales (la sociedad) asume un papel pasivo aunque recibe las consecuencias del equilibrio que alcancen los dos agentes activos: el Ejecutivo y el Parlamento. El beneficio que recibe el Ejecutivo se representa en el extremo superior de cada combinación de estrategias, el beneficio del Parlamento aparece en el extremo inferior y el beneficio para la sociedad se presenta en la posición intermedia. En este ejemplo el Ejecutivo se beneficia de la entrega de información sólo cuando enfrenta un control responsable. A su vez, en el caso 1 el Parlamento tiene el incentivo para realizar un control poco productivo, independientemente de si exista amplia o escasa información. El equilibrio en esta situación se alcanza cuando el Ejecutivo entrega escasa información y el Parlamento hace un control improductivo; en cambio la solución eficiente para la sociedad es precisamente la contraria: amplia información y control responsable[3].

En el caso 2 bastaría generar las condiciones para la existencia de un control eficaz por parte del Parlamento, de modo de producir un incentivo para que el Ejecutivo entregue amplia información. Es decir, en el referido contexto, la transparencia de la acción del Estado depende críticamente de la calidad del control sobre sus acciones. Tal como se señaló, distinta es la situación en el caso 1, donde una vez que el Ejecutivo entrega amplia

[3] Nótese que en el caso 1 el único equilibrio de Nash está representado por el cuarto cuadrante (control improductivo, reserva). Sin embargo, en el caso 2 existen dos equilibrios de Nash, en el primer y cuarto cuadrante. Que se alcance el más beneficioso socialmente dependerá de las condiciones iniciales y de la trayectoria hacia el equilibrio.

información, el Parlamento caerá en un control improductivo, aunque socialmente no sea la opción más deseable.

El ejemplo anterior no permite analizar los determinantes de la calidad del control del Parlamento, la que estará influida por la interacción con otras instituciones. Probablemente un sistema de partidos políticos más polarizado o la ausencia de instancias técnicas independientes en la sociedad hará menos productiva la función del Parlamento. Lo relevante en este ejemplo es que el equilibrio depende de la calidad de la interacción entre muchas instituciones, especial pero no exclusivamente dentro del Estado.

Para apoyar los mecanismos de control más eficientes es importante separar esta función en al menos tres dimensiones: i) control interno de gestión; ii) control técnico externo, y iii) control político. El control de gestión interno se produce dentro del Ejecutivo. Existen varios instrumentos que pueden operar con eficiencia en este nivel, entre los cuales está la elaboración de un sistema de metas ministeriales para el seguimiento de las acciones públicas y establecer directorios responsables del control de gestión interno en los principales programas públicos. Un buen ejemplo de este tipo de medidas puede encontrarse en la aplicación sistemática de indicadores de desempeño dentro del sector público (Marcel, 1998). La experiencia de Nueva Zelandia de establecer criterios claros de logro (observables) para los distintos organismos públicos y directores ejecutivos por un período limitado, para llevar a cabo ciertos proyectos gubernamentales, son formas que permiten una mayor transparencia en la gestión del Estado (Scott, 1996).

El control técnico externo se puede alcanzar permitiendo que las acciones del Estado sean objeto de una opinión técnica independiente. En la medida en que se realiza en forma sistemática este tipo de control a través del tiempo, las diferentes opiniones especializadas generarán un marco útil para el seguimiento y evaluación de la acción del Estado. En cambio, cuando la evaluación técnica externa es esporádica, su efecto será débil.

La tercera dimensión es la del control político, cuya responsabilidad recae en el Parlamento. Este control será más eficiente si existen el control de gestión interno y el técnico externo, ya que ambos proveen información para apoyar el control político. A su vez, el control técnico externo se puede realizar como una iniciativa del Ejecutivo o del Parlamento. De este modo la sociedad se asegurará de que los costos y beneficios, sean directos o indirectos, en todas las propuestas de gasto público se harán explícitos, creando condiciones de seguimiento y evaluación que permitan apoyar las acciones eficientes y modificar o eliminar los programas que cumplieron su objetivo o cuyos resultados no sean satisfactorios. Es decir, la transparencia

impide la proliferación de malos programas a costa de buenos programas o la utilización de recursos que podrían ahorrarse, asegurando que en las discusiones de gasto concurran y hagan oír su voz todos los intereses afectados, y no sólo los inmediatamente beneficiados.

Sin perjuicio de los beneficios de estas iniciativas, la aplicación de la teoría de agente principal al caso de las instituciones públicas en una sociedad democrática presenta dificultades que se deben considerar. Primero, el alto costo de especificar relaciones complejas y la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de recurrir a contratos para regular la relación entre agente y principal. Siempre estará la ventaja de los contratos simples, que no pueden captar toda la complejidad de la relación. Segundo, al analizar el comportamiento de un agente en una sociedad democrática descentralizada no habrá una sola opinión, sino más bien una variedad de opiniones y evaluaciones, que pueden no ser siempre suficientemente objetivas. Tercero, tampoco existirá un control completo del sistema de incentivos por parte del principal, en especial en el caso del servicio público en que los incentivos no son sólo pecuniarios.

Aunque estas dificultades no son evitables, es posible enfrentar caso a caso las modificaciones institucionales requeridas para permitir una mayor transparencia de la gestión estatal. Los criterios básicos serán siempre los mismos: información y control. A partir de ellos se generan otras rutinas encaminadas a modificar la interacción, en términos de incentivos, entre los diversos agentes y el principal.

2. Credibilidad

La intervención del Estado en la organización de actividades económicas se realiza en interacción con otras instituciones, motivo por el cual es muy relevante analizar, desde distintos puntos de vista, la naturaleza de esta interacción que define la posibilidad de una gestión eficiente por parte del Estado. En la sección anterior se analizaron los problemas que surgen en esta interacción, asociados a la incertidumbre e información asimétrica, cuyas vías de solución se centraron en el incremento de los grados de transparencia de la actividad estatal. En la presente sección se introduce la dimensión temporal en la interacción entre el Estado y los privados (el agente y el principal, respectivamente), la cual permite analizar los problemas de eficiencia que esto trae consigo y los incentivos para modificar las conductas.

Los problemas que aparecen cuando se incorpora el efecto del tiempo son: i) la función objetivo y las acciones del Estado pueden cambiar en

el tiempo, conforme se alteran los incentivos que acompañan dichas acciones; ii) las decisiones privadas tienen un componente de irreversibilidad, lo que puede ser internalizado en las acciones del Estado; iii) los agentes económicos aprenden de los cambios en la conducta del Estado, por lo que sus propias decisiones incorporan la expectativa de que ocurran dichos cambios.

Hay varias razones para que el Estado modifique los objetivos de sus acciones, pero la más relevante es que los incentivos que enfrentan las autoridades políticas varían en el tiempo y su horizonte de cálculo está más bien concentrado en el corto plazo. En el proceso democrático los gobiernos tienen un mandato por un período fijo, lo que es muy importante para obtener los beneficios de la alternancia en el poder. Sin embargo, esta necesaria segmentación temporal del proceso democrático tiene consecuencias negativas. Con la expectativa de alternancia, los gobiernos democráticos tienen menos incentivos para desarrollar políticas cuyos resultados serán observados más allá del período de la próxima elección. Por esta razón, hay riesgo de adoptar decisiones basadas en visiones de corto plazo, de postergar la solución de los problemas durante un período más allá del conveniente, o de actuar de modo oportunista para obtener beneficios del ciclo político. Los efectos del llamado ciclo político no sólo se presentan en los períodos cercanos a una elección, sino que también pueden operar cuando ocurren cambios en las percepciones de la opinión pública que el gobierno desea atender y que llevan a un cambio de objetivos estatales en función del ciclo político[4]. Estos elementos generan incentivos sistemáticos para un cambio en la conducta de las agencias del Estado.

Por su parte, muchas de las decisiones de trabajo, producción e inversión de los agentes privados, que dependen de la acción del Estado, son difíciles de revertir. Este hecho también puede alterar los incentivos como consecuencia de la conducta del Estado, por cuanto en determinadas condiciones se pueden lograr beneficios de corto plazo derivados de un cambio en las reglas del juego que no tiene consecuencias negativas inmediatas en las acciones privadas, ya que ellas corresponden a decisiones adoptadas en el pasado. En estas condiciones se puede llegar a aplicar acciones que no están en línea con el bien común, sino con ventajas transitorias de corto plazo.

---

[4] El enfoque de la 'nueva economía política' ha adquirido una importancia gravitante en la literatura económica de los últimos años. A partir de éste, se ha analizado el comportamiento del ciclo económico como producto de decisiones políticas oportunistas (Alesina, 1988 y 1992, Cukierman, Hercowitz y Liederman, 1992).

En esta interacción entre la conducta del Estado y de los privados se da un proceso de aprendizaje, en que los agentes privados incorporan en sus decisiones los riesgos que representa un cambio en la acción del Estado. Es decir, cuando no existe suficiente certeza de la conducta del Estado se produce una incertidumbre que proviene de la información imperfecta y no de factores exógenos. Así, los agentes privados incorporan en su conducta la expectativa ante los cambios futuros en las acciones del Estado. Bajo estas circunstancias los privados anticipan el comportamiento cambiante del Estado, tomando decisiones ineficientes desde el punto de vista social.

Con ello las decisiones de los agentes privados también se apartarán del bien común y se caerá en soluciones ineficientes para los problemas económicos de la sociedad. Es decir, el logro del bien común depende de la combinación de las acciones de ambos tipos de actores. Conceptualmente, la ineficiencia se produce cuando las acciones de las agencias estatales no son coherentes en el tiempo y los agentes privados incorporan en su análisis esta incertidumbre, de modo que sus acciones se distancian del óptimo social por el intento de anticipar la conducta errática del Estado. Es importante destacar que lo que hace que una organización económica se distancie del bien colectivo es el hecho de que las decisiones privadas anticipen la variación de las acciones estatales, además del efecto directo que pueden tener esas acciones estatales variables no coherentes con el bien común.

Esta diferencia entre lo socialmente deseable y la conducta efectiva se puede manifestar en diferentes áreas de la acción del Estado, especialmente cuando los beneficios y los costos de dichas acciones ocurren en tiempos diferentes y cuando se da algún grado de irreversibilidad en las decisiones privadas. Un caso ampliamente analizado en la literatura académica se presenta en la política monetaria. Una política expansiva incentiva la actividad económica y el empleo, lo que genera prosperidad en el corto plazo. Sin embargo, luego de un tiempo los aumentos en los precios anularán estos beneficios y se hará evidente el costo que representa una inflación más elevada para el crecimiento de largo plazo. De hecho, uno de los debates más importantes sobre la dimensión temporal de las decisiones de los gobiernos se produjo a fines de los años 60, luego que Milton Friedman propusiera que los gobiernos adoptasen reglas fijas (tal como una tasa constante de crecimiento de la cantidad de dinero) en vez de adaptar las políticas a las condiciones económicas de cada período. El argumento que respalda esta propuesta fue que los gobiernos carecen del conocimiento e información necesarios para aplicar una política discrecional exitosa. Ade-

más, aun si tuviesen tal conocimiento, existirían dudas de la capacidad efectiva de aplicar una política discrecional, ya que el resultado de la política monetaria tiene rezagos variables.

Esta discusión entre reglas y discrecionalidad adquirió un nuevo impulso con el artículo de Kydland y Prescott (1977) en que se sostiene que el problema central para las políticas públicas es su credibilidad. De acuerdo con estos autores, las reglas fijas son preferibles porque aumentan la credibilidad de los agentes en las políticas, mientras que la discrecionalidad conduce a "inconsistencia temporal". Ésta ocurre cuando una política que es óptima en un determinado momento, deja de serlo luego que ha transcurrido cierto lapso de tiempo. En estas condiciones, sin un compromiso firme y creíble de la autoridad de mantener la política original, los gobiernos podrían utilizar su discrecionalidad para acomodar su decisión cuando aparezca una opción mejor. El problema será mayor cuando los agentes económicos anticipen cuál será el comportamiento de la autoridad, impidiendo que se alcancen los objetivos de sus políticas.

Los elementos del debate anterior se basan en la experiencia de la política monetaria. Sin embargo, los mismos conceptos se pueden aplicar a otros ámbitos que tienen rasgos similares. Éste es el caso, entre otros, de la administración de los recursos naturales, televisión pública y regulación de monopolios naturales. En estos casos hay decisiones que pueden generar un beneficio transitorio cuyos costos serán percibidos por la sociedad sólo en el largo plazo.

En el diseño de un sistema adecuado de incentivos para la acción del Estado es muy relevante diferenciar entre la incertidumbre que emana de perturbaciones en variables que están fuera del control de la autoridad y la incertidumbre que proviene de cambios en los objetivos de la acción del Estado. La primera es el fundamento de la discreción en la aplicación de las políticas públicas, mientras la segunda sirve de base para el argumento a favor de reglas fijas.

Cuando cambian las condiciones externas, las agencias gubernamentales deben tener la capacidad de ajustar sus políticas a las nuevas circunstancias exógenas. En este contexto el cambio normativo es positivo para todos los agentes económicos, motivo por el cual no se produce un deterioro en la eficiencia económica. Es decir, cuando el cambio en la acción del Estado responde a variaciones exógenas a la economía, no se presentan problemas de organización de la actividad económica, aunque a menudo sea necesario convencer a los agentes económicos y a la ciudadanía de que las nuevas medidas son las más adecuadas en las nuevas condiciones.

En los casos en que las variables exógenas que influyen en una determinada actividad son razonablemente estables es posible el establecimiento de reglas fijas o con un limitado grado de discrecionalidad. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones se presentan cambios permanentes en las condiciones externas a la acción estatal, por lo cual es necesario que el gobierno tenga la flexibilidad para actuar dentro de ciertos parámetros legales y constitucionales, para poder ajustarse a las nuevas circunstancias. De allí que la solución propuesta por Kydland y Prescott de fijar reglas para el funcionamiento de las instituciones del Estado se puede aplicar en muy pocos campos de la acción pública. En otras palabras, la discrecionalidad es muchas veces inevitable por la naturaleza de los problemas que debe enfrentar la autoridad en la economía moderna.

Sin embargo, en la práctica es muy difícil distinguir entre ambos tipos de variaciones, por lo que los agentes económicos no tienen acceso a conocer si un determinado cambio en la acción del Estado responde a un cambio en una variable exógena o a una modificación de su función objetivo. Es decir, desde el punto de vista empírico no es evidente cuándo requieren de cambios las condiciones ni cuáles son las medidas óptimas a aplicar.

En este contexto, ambas soluciones: amplia flexibilidad para las agencias del Estado y reglas rígidas, adolecen de notorias insuficiencias. Por esta razón se hace necesario crear condiciones en que la flexibilidad opere con los resguardos que reduzcan la probabilidad de que la acción del Estado se distancie del bien común. Se trata de diseñar esquemas institucionales que permitan desincentivar conductas temporalmente cambiantes. Sin un cambio en la estructura de los incentivos que acompañan a las acciones públicas, se torna muy difícil lograr conductas más predecibles por parte del Estado.

Se produce una modificación en el esquema de incentivos cuando los agentes privados son capaces de anticipar los cambios en las acciones del Estado, los cuales se basan sólo en alteraciones en las variables exógenas que determinan dichas acciones. En estas condiciones la acción pública tiene credibilidad en los agentes del sector privado. La credibilidad es la condición para que exista flexibilidad y al mismo tiempo sea posible impedir que las políticas se aparten del bien común. A su vez, esta solución conduce a que las decisiones privadas también coincidan con el interés social. Es decir, restablecer las condiciones que permitan alcanzar la eficiencia en la organización de la economía supone una acción estatal no oportunista, que se refleja en una inversión efectiva en credibilidad.

Dada la racionalidad básica de los agentes económicos, cualquier intento por superar los problemas de credibilidad en la gestión de las agencias del Estado debe enfrentar el desafío de acotar aquellos incentivos que favorecen la modificación oportunista de las normas establecidas. Es decir, el Estado fijará compromisos creíbles en la medida en que no existan incentivos para su violación, lo cual no proviene de una declaración de principios sino de una modificación de las condiciones institucionales en las cuales los agentes llevan a cabo sus decisiones. Nuevamente, para el logro de una gestión estatal eficiente, el énfasis debe estar en la estructura de incentivos que afecta la interacción entre el Estado y los demás agentes económicos (entre el agente-Estado, el principal y otros agentes), y con ello en el equilibrio dinámico, en términos de preferencias y hábitos en que se lleva a cabo dicha gestión.

Una manera de desincentivar una determinada actitud de un agente estatal racional es eliminar la posibilidad de que pueda llevarla a cabo, modificando el marco legal o normativo que regula las acciones del Estado, por ejemplo, estableciendo límites constitucionales a determinadas acciones. Sin embargo, como se ha señalado, limitar el rango de opciones disponibles no es recomendable cuando hay variaciones en el contexto externo de la economía. Es decir, en la medida en que se requiera discrecionalidad debido a la variabilidad en las condiciones que se enfrentan, no será razonable la imposición de reglas poco flexibles.

Otra forma, que parece más relevante por su aplicabilidad, es disminuir los incentivos para que se ejecuten las acciones que se desea evitar, lo cual supone intervenir en el arreglo institucional que sirve de base para las decisiones públicas, incluyendo el horizonte de tiempo que se considere relevante para evaluar estas acciones. Es decir, cuando la discrecionalidad sea necesaria se deben buscar mecanismos institucionales que impidan la emergencia de cambios en la función objetivo de las agencias estatales. Dichos mecanismos pueden consistir en ampliar el horizonte temporal que enfrentan los agentes, de modo que incluyan en la evaluación de sus decisiones el efecto que éstas puedan tener en la reputación y credibilidad del agente. También se puede considerar la separación de ciertas funciones entre distintas agencias, que limiten el beneficio esperado de realizar acciones que no concuerden con el bien común .

Volviendo al ejemplo de la política monetaria, los desarrollos de la teoría económica y la experiencia inflacionaria en la década de 1970 y 1980 han llevado a un creciente acuerdo en la prioridad de mantener la estabilidad de precios como el principal objetivo para los bancos centrales (Massad, 1998). Desde el punto de vista académico se ha reconocido que

no es posible obtener beneficios permanentes en la actividad económica y en el empleo a través de las políticas de demanda agregada, las que sí pueden generar efectos duraderos en la inflación. A su vez, se ha tendido a reconocer los costos que tiene la inflación para el funcionamiento de la economía. Desde la perspectiva de la experiencia también se ha adquirido clara conciencia de la influencia que tiene la política monetaria en la inflación. De este modo, existe el riesgo de que una política basada en objetivos de corto plazo conduzca a la economía hacia una situación en que se alcancen beneficios reales transitorios a cambio de un costo más permanente en términos de inflación (Marshall, 1999).

En estas condiciones se ha tendido a buscar mecanismos institucionales que permitan reducir los riesgos que significa conducir la política monetaria con objetivos de corto plazo, los que se traducen a la larga en una mayor inflación. Dentro de tales mecanismos el más importante es la delegación de la política monetaria a un banco central autónomo, concepto que incorpora los criterios de transparencia entre el organismo que recibe la función de conducir la política monetaria y la sociedad.

La autonomía de los bancos centrales es un arreglo institucional que establece un horizonte de mediano plazo en la aplicación de la política monetaria y fortalece la credibilidad en la aplicación de una política coherente con dichos objetivos. Desde un punto de vista teórico, existen dos argumentos que permiten relacionar el grado de independencia de un banco central con un mejor y más eficiente manejo de la política monetaria. Ambos se basan en que la independencia puede aliviar el problema de la inconsistencia temporal. La primera solución teórica es designar un consejo del banco central que tenga una mayor aversión a la inflación que el votante medio. Esta mayor aversión a la inflación actuará como un contrapeso a los incentivos de utilizar la política monetaria para alcanzar objetivos de corto plazo. La segunda solución consiste en que la independencia del banco central permite establecer un contrato con la sociedad (explícito o implícito) de mantener la inflación dentro de rangos aceptables. En la medida en que este contrato entregue los incentivos correctos a las autoridades del banco central se evitará el riesgo de la inconsistencia (Massad, 1998).

3. Intervención comunitaria

En las sociedades democráticas modernas, el funcionamiento de la economía no es independiente de los procesos políticos que ocurren en el conjunto de la sociedad, ya que éstos influyen en el funcionamiento de las

instituciones. En el contexto de los temas tratados en el presente artículo, los sistemas de incentivos que una democracia desarrolle en el ámbito de las interacciones entre sus instituciones y agentes económicos determinan las condiciones de transparencia y credibilidad de la gestión estatal, las que a su vez afectan el grado de eficiencia de dicha acción, y con ello el desempeño de la economía.

Incrementar la transparencia de la gestión estatal es una solución cuando permite remediar la asimetría de información y aumentar la capacidad para observar las acciones de los agentes estatales. Sin embargo, existen situaciones en que dichas acciones son cuantitativamente numerosas y están dirigidas a grupos específicos de la sociedad, motivo por el cual el solo establecimiento de mayor transparencia a un nivel agregado no representa una opción eficaz para el logro del objetivo de alinear la acción pública con el bien común.

En estas condiciones adquiere relevancia la dimensión comunitaria del principal. Es decir, se establece una relación agente-principal entre el grupo específico de la comunidad al que están dirigidas las políticas (el principal) y la agencia encargada de aplicar las políticas (el agente). La calidad del seguimiento de la acción del agente tiene el carácter de bien público, y la falta de información por parte del principal sobre las conductas del agente lleva, por la vía de los incentivos, a un distanciamiento entre los objetivos perseguidos por el agente y los establecidos por el principal. El solo incremento de la transparencia no es una solución eficaz debido a la concurrencia de dos hechos: por un lado, es imposible que un organismo centralizado, como el Parlamento, encargado de establecer estructuras contractuales que posibiliten la transparencia, pueda contar con la información específica requerida para evaluar políticas en una dimensión local; y por otro, el número de dichas acciones es tan extenso que, aunque se contara con la información específica, haría imposible que el organismo controlador se relacione con cada una de las agencias estatales locales para establecer eficientemente los niveles de logro de los objetivos propuestos.

Existen dos mecanismos mediante los cuales los integrantes de las comunidades pueden enfrentar la debilidad institucional descrita, de modo que sea posible, desde el punto de vista de los incentivos, una acción estatal más eficiente: por una parte, pueden intervenir activamente en los procesos que los afectan, estableciendo sus puntos de vista sobre la acción pública; y por otro, pueden elegir individualmente entre diversas comunidades, cada una de las cuales tiene asociada una acción pública específica, estableciendo de este modo su aprobación o desaprobación con los resultados observados. Estas dos opciones básicas constituyen lo que, en un contexto de

análisis similar, Hirschman (1970) denomina la opción política y económica básica de los individuos pertenecientes a una comunidad: "levantar la voz" o castigar abandonando el mercado.

Los individuos pueden preferir cualquiera de estas opciones en función de los beneficios y costos esperados de cada una de ellas. A su vez, los costos dependen de los arreglos institucionales sobre movilidad de los individuos entre comunidades y las expectativas de acceder a una acción pública de mayor calidad. Por ejemplo, si un determinado establecimiento de la educación primaria no satisface las expectativas de los padres, éstos tienen la opción de elegir otro establecimiento para la educación de sus hijos o de participar activamente dentro del establecimiento con el objeto de mejorar la calidad de la educación.

Si bien mantener ambas opciones es deseable desde el punto de vista de la eficiencia de las acciones públicas, ello no es siempre posible. En algunos casos la acción pública tiene el carácter de monopolio local, lo que impide la opción de salida. En otros casos, aun cuando el cambio entre comunidades sea posible, la información disponible no permite una adecuada evaluación del costo y beneficio de esta conducta, lo que debilita el incentivo para mejorar las acciones públicas por la vía de la competencia. Una solución para esta dificultad es mejorar el monitoreo de la calidad de cada una de las acciones públicas, de modo que los individuos puedan adoptar una decisión más informada y aportar sus puntos de vista al proveedor del bien colectivo.

Del mismo modo como fue señalado en el análisis sobre transparencia, la información es una condición necesaria, pero no suficiente. Incrementar la información disponible permite a la comunidad adoptar mejor la decisión de permanecer o salir de la comunidad que recibe el bien colectivo, pero no permite mejorar el monitoreo de dicha acción cuando la opción de salida tiene limitaciones. Incluso la propia complejidad de la información y su incertidumbre constituye un obstáculo para el eficiente funcionamiento de la opción de salida.

Estas razones llevan a considerar más seriamente la intervención comunitaria del tipo 'alzar la voz'. Se trata de incorporar los puntos de vista del principal como un incentivo para la conducta del agente. Ello requiere la participación de las personas en el seguimiento de las acciones colectivas. Pero esta opción tampoco está exenta de dificultades. En particular, el seguimiento tiene el carácter de bien público y representa un costo para todos aquellos que participan en él. Por esta razón, al interior del principal (los miembros de la comunidad) se producirá un problema de *free-rider* que es necesario enfrentar. Cada miembro de la comunidad se

enfrenta a la decisión de cuánto esfuerzo dedicar al proceso de seguimiento que permite disminuir las asimetrías de información. Siempre está la opción de dejar que otros miembros de la comunidad realicen este trabajo, sin dejar de obtener el beneficio del seguimiento. El fenómeno del *free-rider* se produce cuando, ante la presencia de un bien público, ningún individuo desea pagar el costo de proveer un servicio del cual toda la comunidad recibirá beneficios, y esperan que otro miembro incurra en el costo. Es decir, la intervención comunitaria en el seguimiento de las acciones públicas tiene las características de bien público, ya que el costo de dichas acciones es privado, pero su beneficio es obtenido por todos los miembros de la comunidad.

La presencia del fenómeno *free-rider* hace necesario enfrentar el problema de incentivos de los miembros de la comunidad para cooperar en la labor de seguimiento de las acciones colectivas, superando el incentivo de dejar que otros lleven a cabo las acciones necesarias. Si no se generan esfuerzos específicos por parte de los miembros de la comunidad con el objeto de superar esta dificultad, la desalineación entre las acciones públicas y el bien común terminará perjudicando la eficiencia en la gestión estatal. La manera privilegiada para enfrentar este problema es buscar mecanismos que incentiven una mayor intervención comunitaria en forma voluntaria, a pesar de las dificultades que presenta esta opción.

Investigaciones recientes en el campo de la psicología social muestran que la contribución de los individuos a iniciativas colectivas depende del grado de identificación de cada miembro con el grupo (comunidad) y de la percepción subjetiva de la eficacia de la acción individual, donde ambos efectos se refuerzan mutuamente. Si bien las dos variables se encuentran con mayor frecuencia en grupos pequeños, se trata de motivaciones que requieren ser educadas en la población para producir la cooperación necesaria para resolver con eficiencia los dilemas sociales en el ámbito local (De Cremer y van Vugt, 1998).

Coherentes con esta visión, las experiencias de cooperación en comunidades pequeñas son amplias, entre las que se pueden encontrar tanto ejemplos exitosos como negativos. Más allá de intentar una evaluación genérica de experiencias de esta naturaleza, es evidente que dichas organizaciones surgen exitosamente en determinadas circunstancias y ayudan a superar muchos problemas comunitarios (Hirschman, 1986).

Estos comentarios permiten sostener que la intervención comunitaria en la provisión de un servicio colectivo, como es el seguimiento de las acciones públicas locales, es más compleja que como se planteó en el modelo de *free-rider*, en el cual casi inevitablemente se alcanza un equili-

brio de ausencia de cooperación. Además, se debe incorporar el hecho de que las actuales tecnologías de información permiten diseñar mecanismos para reducir el esfuerzo (tiempo) que cada miembro debe asignar a la producción del servicio colectivo. Es decir, existen espacios para ser más optimistas respecto del papel que puede tener la intervención comunitaria en la mejora de la eficiencia de la acción pública. Cuando se logran las motivaciones e incentivos apropiados disminuye la tendencia a actuar como *free-rider*, lo que a su vez permite que una comunidad que se organiza represente sus intereses en los procesos de toma de decisiones.

Las motivaciones necesarias para la cooperación de una comunidad tienen un componente endógeno, que depende de las experiencias pasadas de cooperación (tradición). Por esta razón, la intervención comunitaria debe considerarse como un mecanismo de aplicación gradual, cuyos efectos más importantes sólo se manifestarán en el mediano o largo plazo. En este caso, la propia dinámica de la cooperación evita las conductas no cooperativas.

De la forma descrita, la intervención comunitaria puede resolver el problema del *free-rider* y, de este modo, superar la ineficiencia en la acción pública originada en la falta de control y comprensión de las acciones estatales por parte de las comunidades específicas hacia las cuales están focalizadas dichas acciones.

El énfasis otorgado en esta sección a la intervención comunitaria no pretende debilitar la opción de salida, que también ofrece un incentivo para mejorar la eficiencia de la acción pública, sino sólo reconocer la necesidad de complementar ambos mecanismos para fortalecer el sistema de incentivos, ya que cada uno tiene limitaciones. La ventaja de la opción de salida es que tiene un carácter netamente privado, motivo por el cual no involucra un problema de incentivos para coordinar acciones (como en la presencia de un bien público que induce a actuar como *free-rider*). La amenaza de salirse de la comunidad también puede corregir la ineficiencia provocada por la desalineación entre los objetivos públicos y privados originada en las asimetrías de información entre el agente y el principal. Sin embargo, para que esto sea efectivo debe existir un diseño institucional en el que la salida de los miembros de una comunidad (localidad, establecimiento educacional, servicio de salud) provoque un costo a los agentes encargados de llevar a cabo la política pública en el ámbito local.

Conceptualmente la opción de salida es eficaz para incentivar conductas eficientes del agente cuando se crea un mercado en que los miembros de las comunidades (el principal) pueden elegir entre distintas alternativas. Por su parte, la mayor intervención comunitaria será el me-

canismo privilegiado para lograr una eficiente gestión estatal, cuando no existe la posibilidad institucional de crear mercado, dadas las características del servicio que se está entregando. Sin perjuicio de lo anterior, la intervención de la comunidad es una forma complementaria de lograr eficiencia cuando haya ciertas alternativas imperfectas de salida. La intervención comunitaria es un mecanismo que fortalece la interacción entre los miembros de una comunidad y entre éstos y los encargados de producir el bien o servicio público, fortaleciendo los incentivos que inducen a acciones gubernamentales eficientes.

4. Deliberación

Como se ha señalado en las secciones anteriores, la calidad y eficiencia de las intervenciones del Estado dependen de sus interacciones con el resto de la sociedad (el agente y el principal), las cuales definen el marco de incentivos en que se desenvuelven dichas intervenciones. Un aspecto central de esta interacción es el intercambio de información o comunicación entre la sociedad y los organismos del Estado. En términos generales, en cualquier decisión pública intervienen tres elementos: i) debe existir un propósito o función objetivo bien definido y comprendido; ii) cada organización tiene un conjunto de conocimientos que conforman las opciones relevantes para las decisiones y que incluye las conductas esperadas y consecuencias de cada una de las opciones, y iii) hay una capacidad de decisión para elegir entre las opciones disponibles e informar a la sociedad de esta decisión. En todos estos elementos hay un intercambio de información entre el Estado y la sociedad que influye en la eficiencia de la decisión.

En esta sección se analizan las dificultades que tienen las instituciones del Estado para aprovechar la comunicación con la sociedad en beneficio de la eficiencia de sus acciones. Específicamente, se analizan los incentivos del Estado para buscar nuevos conocimientos en las organizaciones técnicas que están fuera del Estado y aprovecharlos para mejorar la calidad de sus acciones.

La búsqueda de nuevos conocimientos es un ingrediente cada vez más importante en las organizaciones modernas, incluyendo a las empresas privadas e instituciones públicas. De esta manera, la eficiencia de las instituciones es muy sensible a los procesos de incorporación de nuevos conocimientos. Naturalmente, se trata de un campo en el cual tienen enorme importancia la capacitación y el reclutamiento de los recursos humanos, así

como la organización interna de las instituciones. Sin embargo, también es muy importante la capacidad de buscar en forma sistemática conocimientos fuera de los contornos de la organización.

Utilizando el esquema de la teoría de búsqueda, una institución que se encuentra realizando un programa que tiene un propósito determinado debe optar entre mantener dicho programa en el tiempo o buscar nuevas opciones para alcanzar su objetivo. La decisión óptima debe estar basada en la comparación del beneficio social neto de cada una de estas dos estrategias. Si el beneficio esperado de buscar nuevas formas de intervención es mayor, sería un error para la organización seguir la estrategia de mantener el programa vigente. Desde el punto de vista social, la decisión óptima de buscar nuevas opciones depende de dos factores: i) la probabilidad de encontrar conocimientos que permitan mejorar la eficiencia de la acción en curso, y ii) el costo de los recursos que se destinan a la búsqueda.

Respecto a la probabilidad de encontrar nuevos conocimientos relevantes fuera de los contornos de la organización estatal se debe reconocer que existe un conocimiento que se genera en los avances del mundo técnico y académico, tanto por los adelantos científicos como por la sistematización de las experiencias de acciones públicas similares. En general, basta un aumento en la dispersión de los resultados posibles de la búsqueda, manteniendo constante su valor promedio, para que la búsqueda sea más valiosa. Esto se debe a que lo que realmente interesa es el conocimiento que permita introducir mejoras en los programas. Por otra parte, los recursos que se destinan a la búsqueda son una variable de decisión de la organización pública y reflejan la estrategia seleccionada.

Sin embargo, la búsqueda también puede tener costos o beneficios privados que pueden distorsionar la decisión óptima. Hay dos razones por las cuales los agentes del Estado pueden desear reducir la intensidad de la búsqueda. En primer lugar, en un ambiente de información imperfecta, la búsqueda puede ser interpretada como una señal del grado de satisfacción que tiene la institución con sus propias políticas, lo que podría conducir a cuestionar la calidad de las decisiones adoptadas en el pasado. Este temor restringe las acciones de búsqueda y genera estancamiento e inercia en los programas públicos. Nadie desea asumir el eventual costo que pueda implicar tanto el reconocimiento de que no se conoce la solución de un determinado problema, como el hecho de que se pudiesen estar llevando a cabo acciones incorrectas desde la perspectiva social.

En segundo lugar, en una analogía con desarrollos recientes en macroeconomía (Caballero y Hammour, 1996), se puede postular que los factores que intervienen en los procesos productivos de bienes colectivos ge-

neran un grado de especificidad entre sí, lo que significa que quienes participan en un determinado programa incrementan su capital humano al adquirir ciertas habilidades particulares que no son aplicables a cualquier programa alternativo. En este sentido el trabajador tiene un capital humano que es específico a los programas y rutinas que aplica, de modo que si los deja de aplicar tiene una pérdida en su capital humano, proporcional a la diferencia entre los nuevos y viejos programas. Por esta razón el beneficio social y el beneficio privado que se esperan de la búsqueda pueden ser diferentes, ya que el resultado de la búsqueda puede generar información que puede no ser conveniente para los trabajadores que tienen habilidades específicas asociadas a los programas vigentes. Ésta es una razón adicional por la cual no se produce en forma natural un proceso de innovación óptimo en el sector público.

En términos más generales, en condiciones de incertidumbre e información incompleta y asimétrica, la información y experiencia en determinados programas crea rentas que son valiosas para los individuos que las poseen (Stiglitz, 1998). El resultado de estos problemas será reducir la intensidad de la acción de búsqueda y retrasar la identificación de nuevas soluciones a los problemas colectivos. En un ambiente de incertidumbre e información incompleta y asimétrica, aumentan las dificultades para aprovechar el intercambio de información entre el Estado y la sociedad como un mecanismo que apoya la eficiencia de la acción pública. El criterio que se debe seguir consiste en aplicar sistemas de comunicación que permitan aumentar la eficiencia de los programas.

Dos mecanismos para enfrentar las falencias anteriores son transparencia y deliberación. El primero está orientado a corregir el incentivo para compartir información privada en la acción pública y sus elementos relevantes fueron analizados en una sección anterior. El segundo pretende ampliar la calidad de los conocimientos que se pueden obtener a través de las acciones de búsqueda y mejorar la comprensión de la sociedad en las acciones del Estado. Se trata de un instrumento que posibilite conocer nuevas alternativas, elegir soluciones que equilibren los diferentes intereses involucrados en las decisiones colectivas e inducir conductas más cooperativas entre los individuos. La deliberación consiste en contrastar opiniones y conocimientos sobre las políticas públicas, incluyendo sus beneficios y costos. Este proceso cobra gran importancia en las democracias modernas insertas en un contexto de información incompleta e incertidumbre, cuando más de una de las alternativas disponibles tiene la característica de ser razonablemente buena. Las actividades de deliberación potencian la capacidad de innovación de las agencias gubernamentales e incrementan la infor-

mación disponible, tanto respecto a las opciones posibles como respecto a los intereses involucrados.

Bajo la óptica de la asignación de recursos, la inercia estatal caracterizada por la caducidad de las normas y estructuras organizacionales conduce a ineficiencia originada en la falta de innovación, que impide la identificación de soluciones mejores que las vigentes en un momento determinado del tiempo. Por su parte, la inadecuada representación de los intereses sociales, fenómeno muy ligado a la caducidad de las estructuras organizacionales, conduce a inestabilidad política con un sinnúmero de consecuencias negativas para la economía, en términos de eficiencia en la asignación de los recursos.

Para ser eficaz en este propósito, la deliberación debe ser un mecanismo sistemático, que permita la creación de un lenguaje común entre aquellos que la llevan a cabo, favoreciendo de este modo la identificación conjunta de soluciones a los problemas que enfrenta el sector público. Ésta incluye procesos de discusión que permitan identificar las alternativas posibles, procesos de experimentación que favorezcan el análisis empírico de las opciones y procesos de evaluación tanto de las experiencias que se realicen como de las alternativas que se encuentren.

En el contexto de la acción pública, en que no hay un ambiente de competencia comparable al del sector privado, las nuevas ideas tienen mucho mayor dificultad para surgir y difundirse, motivo por el cual los procesos de deliberación cobran una importancia crucial como forma de enfrentar esta dificultad. El proceso de creatividad asociado a la deliberación es de gran relevancia para la gestión gubernamental, ya que los incentivos para modificar mecanismos establecidos no siempre están presentes al interior del aparato estatal. En otras palabras, la deliberación sobre la actividad del Estado genera un beneficio para esta gestión, tanto en términos de innovación como de difusión de las nuevas ideas que se generen.

Cuando existen procesos de deliberación sistemática en una sociedad determinada, disminuyen en forma significativa los incentivos de los agentes estatales para mantener su inmovilidad. La deliberación expone al sector público a nuevas ideas, de las cuales éste debe dar cuenta. Asimismo, lleva a una mayor presencia de los distintos grupos sociales en la generación de soluciones, lo que aumenta la representatividad de la gestión estatal.

La deliberación puede llevarse a cabo a través de la discusión o experimentación de nuevas opciones, o la evaluación de experiencias ya realizadas. Para que esto sea posible debe incentivarse la participación activa en estos procesos de organismos no gubernamentales, tales como

universidades, centros de estudios y organismos técnicos, que garanticen independencia de juicio en los temas tratados. De este modo, la deliberación constituye una forma adicional de redefinir la interacción entre el Estado y la sociedad, lo que ayuda a recrear incentivos compatibles con acciones conducentes al bien común.

Aparte del beneficio de la deliberación para la calidad de los programas del Estado, el intercambio de información con las organizaciones técnicas de la sociedad también permite una mejor representación de los intereses comprometidos en las decisiones públicas. Cuando no existe deliberación, los intereses representados estarán frecuentemente sesgados a favor de los grupos de presión más organizados y en contra de los intereses de la sociedad en su conjunto. En estas condiciones es posible que se adopten decisiones distanciadas del bien común y la sociedad se vea atrapada en una situación de la cual no hay escapatoria fácil. El conocimiento disponible en la toma de decisiones tiene sesgos y son pocos los incentivos para modificarlo. En este aspecto, la comunicación entre el Estado y la sociedad rebasa el ámbito de la tecnología. Permitir que los diferentes grupos sociales manifiesten sus intereses a través de procesos deliberativos supone una capacidad del Estado para administrar las presiones que pudiese recibir. Muchas veces los agentes gubernamentales no tienen la confianza en dicha capacidad, lo que los lleva a evitar conscientemente los procesos de deliberación.

Otro beneficio de la deliberación opera desde el Estado hacia la sociedad. En la eficiencia de los programas públicos es muy importante el conocimiento que la sociedad tenga de ellos. Hay conexiones entre las decisiones que se adoptan en el presente y las opciones u objetivos que estarán disponibles en el futuro. Es posible que la organización deba comprometerse a explicar sus programas para lograr una conducta de cooperación de parte de los individuos involucrados y así se produzcan los efectos esperados. En este caso lo que se busca es influir en el medio en el cual se aplica un programa.

Además del beneficio directo de permitir la germinación de nuevas ideas y la confluencia de intereses sociales, la deliberación, tanto en su dimensión individual (elaboración de las propias preferencias) como colectiva (confrontación de puntos de vista con otros) contribuye al perfeccionamiento de las instituciones democráticas, permitiendo incrementar la información disponible para elegir de acuerdo a las preferencias que se tengan (Manin, 1987). Las actividades de deliberación llevan a formar y adquirir opiniones, lo que constituye un bien que genera utilidad a los individuos, dada la necesidad básica de identidad en nuestra cultura, junto

con fortalecer la democracia, que supone individuos informados. En otras palabras, analizar distintas alternativas en detalle y confrontar con otros las opiniones propias a través de la deliberación, representa una actividad beneficiosa para la comunidad, tanto por el hecho de que tener opiniones constituye un bien, en el sentido económico del término, como por los efectos externos positivos que éstas generan en el funcionamiento de las sociedades democráticas (Hirschman, 1989).

IV. Comentarios finales

El Estado tiene un rol ineludible que jugar para lograr una mayor eficiencia económica en la sociedad moderna. Sin embargo, la tarea de diseñar los incentivos que posibiliten una acción estatal eficiente permanece aún inconclusa. El presente texto ha intentado entregar un aporte conceptual en esta dirección, con el objeto de establecer una perspectiva de trabajo que incorpora la calidad de las interacciones entre las instituciones como un aspecto central para explicar la eficiencia del Estado, complementando un tema que tradicionalmente ha sido tratado desde la óptica de la eficiencia en la gestión interna. En este marco, a continuación se formulan algunos comentarios finales respecto a la reflexión realizada.

En primer lugar, luego de una vasta experiencia llevada a cabo en diversos países en desarrollo, parece claro que el enfoque de la gestión estatal como un problema interno de la organización es útil pero insuficiente, tanto para entender las dificultades enfrentadas como para diseñar soluciones eficaces. Éste debe ser complementado por nuevas perspectivas de la teoría económica moderna, en particular el desarrollo de la teoría de juegos y de los nuevos enfoques institucionales, las cuales muestran que la interacción entre los diversos agentes económicos en el marco institucional en que se desenvuelven juega un rol crucial en la determinación de los incentivos involucrados, y con ello, en las acciones y resultados obtenidos.

En segundo lugar, en la medida en que las interacciones son permanentes y dependen de un conjunto muy amplio de variables socioculturales, sólo la noción de equilibrio dinámico entre agentes permite visualizar la complejidad del problema tratado. Es decir, los cambios que se desee establecer sólo pueden ser eficaces si se modifica el marco institucional, en términos de interacciones entre agentes, para permitir el surgimiento de nuevos equilibrios basados en incentivos diferentes. En este contexto, no existen causalidades únicas que puedan ser consideradas como fuente o solución de determinados problemas.

En tercer lugar, dado lo endogénico de los hábitos y preferencias que subyacen en la toma de decisiones, los procesos de cambio son lentos y no dependen de un acto voluntario de los dirigentes de la sociedad. Sólo es posible pensar en movimientos hacia nuevos equilibrios en la dirección deseada a partir de modificaciones institucionales que posibiliten la aparición de círculos virtuosos, que potencien incentivos coherentes con el logro del bien común.

Por último, los criterios de transparencia, credibilidad, intervención comunitaria y deliberación constituyen un punto de partida para el análisis de la eficiencia institucional. Al profundizar el enfoque desarrollado, incorporando nuevos agentes, tales como los partidos políticos, la contraloría, los gobiernos locales, etc., es razonable pensar que van a surgir otros criterios (además de los cuatro presentados) para mejorar la eficiencia del Estado. Asimismo, trabajar en pos de la creación de mecanismos concretos para la aplicación de los criterios que se identifiquen aparece como una necesidad que complementará los trabajos realizados en el marco de los problemas internos de las organizaciones estatales.

BIBLIOGRAFÍA

Alesina, A. (1988). "Macroeconomics and Politics". En S. Fischer (ed.), *NBER Macroeconomic Annual*. Londres: The MIT Press.

——— (1992). "Political Models of Macroeconomic Policy and Fiscal Reform". Banco Mundial, Working Paper, WPS 970, septiembre.

Banco Mundial (1993). *The East Asian Miracle.* A World Bank Policy Research Report. Nueva York: Oxford University Press.

——— (1995). *Bureaucrats in Business*. World Bank Research Report. Nueva York: Oxford University Press.

——— (1997). *World Development Report 1997.* Nueva York: Oxford University Press.

Bowles, Samuel (1998). "Endogenous Preferences: The Cultural Consecuences of Markets and other Economic Institutions". *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVI (marzo), pp. 75-111.

Caballero, Ricardo; y Hammour (1996). "The Fundamental Transformation in Macroeconomics". *American Economic Review*,Vol. 86, Nº 2 (mayo).

Cukierman; Hercowitz; y Liederman (1992). *Political Economy, Growth and Business Cycle.* Londres: The MIT Press.

De Cremer, David; y Mark van Vugt (1998). "Collective Identity and Cooperation in a Public Goods Dilemma: A Matter of Trust or Self-efficacy?" *Current Research in Social Psychology*, Vol. 3, N. 1. Publicación electrónica de la Universidad de Iowa, abril.

Dixit, Avinash (1997). "Power of Incentives in Private versus Public Organizations". *American Economic Review*, Vol. 37, Number 2, mayo.

Fukuyama, Francis (1992). *El fin de la historia y el último hombre.* Barcelona: Editorial Planeta.

———— (1995). *Confianza*. Buenos Aires: Editorial Atlántida.

Hayo, Bernard (1998). "Inflation Culture, Central Bank Independence and Price Stability". *European Journal of Political Economy*, Vol. 14, pp. 241-263.

Hirschman, Albert (1970. *Exit, Voice and Loyalty*. Cambridge, Massachusetts:Harvard University Press.

———— (1986). *El avance en colectividad: Experimentos populares en América Latina.* México: Fondo de Cultura Económica, Serie de Economía.

———— (1989). "Having Opinions-One of the Elements of Well-Being?" *American Economic Review, Papers and Proceedings*, 19, mayo, pp. 75-79.

Hodgson, Geoffrey (1998). "The Approach of Institutional Economics". *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVI (marzo), pp. 166-192.

Kydland, F.; y Prescott, E. (1977). "Rules Rather Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans". *Journal of Polítical Economy*, Vol. 85, Nº 3, pp. 473-492.

Maier, Charles S. (1994). "Democracy and Its Discontents". *Foreign Affairs* Vol. 74, Nº 4 (julio/agosto), pp. 48-64.

Manin, Bernard (1987). "On Legitimacy and Political Deliberation". *Political Theory*, Vol. 15, Nº 3 (agosto), pp. 338-368.

———— (1994). "The Metamorphoses of Representative Government". *Economy and Society*, Vol. 23, Nº 2 (mayo), pp. 133-171.

Marcel, Mario (1998). "Indicadores de desempeño como instrumentos de la modernización del Estado en Chile". *Revista Perspectivas*, Nº 1 (2). Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería Industrial, pp. 49-82.

Marshall, Jorge (1998). "Orientaciones para la acción reguladora del Estado", *Estudios Públicos*, N° 71 (invierno), pp. 191-202.

———— (1999). "La política monetaria y la distribución del ingreso". *Economía Chilena*, Banco Central de Chile, Vol. 2, Nº 1.

Massad, Carlos (1998). "La política monetaria en Chile". *Economía Chilena*, Banco Central de Chile, Vol. 1, Nº 1, pp. 7-27.

Mirrlees, James (1997). "Information and Incentives: The Carrots and Sticks". *The Economic Journal*, 107 (septiembre), pp. 1.311-1.329.

Przeworski, Adam (1990). "The State and the Economy under Capitalism". *Fundamentals of Pure and Applied Economics*, 40, Chur, Suiza, Harwood Academic Publishers.

———— (1991). *Democracy and the Market.* Nueva York: Cambridge University Press.

———— (1997). "A Better Democracy, a Better Economy". *Boston Review.* Publicación electrónica (www.polisci.mit.edu/BostonReview/Br21.2/Przeworski.html).

Sappington, David (1991). "Incentives in Principal-Agent Relationships. *Journal of Economics Perspectives*, Vol. 5, Nº 2 (primavera), p. 45-66.

Schedler, Andreas (1995). "Credibility: Exploring the Bases of Institutional Reform in New Democracies". Trabajo preparado para el XIXth International Congress of the Latin American Studies Association (LASA), Washington, DC, 28-30 septiembre.

Scott, Graham (1996). "Government Reform in New Zealand". Occasional Paper, Nº 40, FMI (octubre).

Stiglitz, Joseph (1995). "Role of Government in Contemporary World". Conference on Income Distribution and Sustainable Growth, FMI, 1-2 de junio.

———— (1989). "Principal and Agent". En Eatwell, Milgate y Newman (editores), *Allocation, Information and Markets*. Nueva York: W. W. Norton & Company.

———— (1998). "Distinguished Lecture on Economics in Government: The Private Uses of Public Interests: Incentives and Institutions". *The Journal of Economics Perspectives*, Vol. 12, Nº 2 (primavera), pp. 3-22.

Strausz, Roland (1997). "Delegation of Monitoring in a Principal-Agent Relationship". *Review of Economic Studies*, 64, pp. 337-357.

Williamson, Oliver (1994). "Institutions and Economic Organizations: The Governance Perspective". Annual Bank Conference on Development Economics, Banco Mundial, abril, pp. 28-29.

———— (1998). "The Institutions of Governance". *American Economis Review, Papers and Proceedings*, 88 (2), (mayo), pp. 75-79. □

GUÍA BÁSICA PARA LEER A HENRY JAMES*

Gonzalo Contreras

El prestigio de Henry James es tal vez uno de los más esquivos de que ha gozado un escritor de este siglo. Pese a su obstinada indagación acerca de las posibilidades expresivas de la novela moderna, la historia no le ha concedido el merecido sitio entre los grandes renovadores del género. Su originalidad, menos visible, y sin duda más indefinible, lo ha relegado a esa extraña categoría de escritor de culto que nadie se jacta de haber leído. El siguiente artículo, intenta desentrañar el por qué.

Pocas vocaciones literarias se han expresado de manera más pura, rigurosa y hasta obsesiva como la vida de Henry James. Su actitud frente a la creación, lo mismo que su obra, pueden resultar casi irritantes para algunos críticos, vitalistas o de corriente sicoanalítica, que buscan coincidencias biográficas, relaciones causa-efecto, la natural lectura vida-obra. Y digo natural porque de alguna forma así ha actuado el arte moderno. Buena parte de la literatura, de los románticos en adelante, supone la indivisibili-

GONZALO CONTRERAS. Escritor y ensayista. Autor de las novelas *La ciudad anterior* (1991), *El nadador* (1995) y *El gran mal* (Alfaguara, 1998). Colaborador literario en diversas publicaciones nacionales.

dad entre una y otra, como la expresión de garantía de que se está frente a un objeto genuino, que su forma está legitimada por una experiencia que dice relación con algún aspecto de su autor. Podemos explicarnos la obra de escritores cuya vida aparece tan poco interesante como la de Kafka, pero el dato que manejamos acerca de su mínima existencia de burócrata y sus cultivadas torturas internas están nítidamente expresados en sus escritos. Lo mismo se podría decir de Thomas Mann. Su autobiografía no pasa de la veintena de páginas, pero sabemos que tras el burgués que se empeñó en representar, había otro hombre oculto y acechante que pudo escribir con propiedad un libro tan supuestamente ajeno a él como *Muerte en Venecia*. Pues bien, ni aun estos sutiles detalles se encuentran en Henry James y en lo poco que sabemos de él. James se erige como un misterio, un caso excepcional. Si pudiéramos decirlo de cierto modo, James renunció temprana y meditadamente a negociar su vida y su obra, y, como consecuencia de ello, se convirtió en uno de los más singulares precursores de la novela contemporánea. Bien se puede decir que cambió su vida por una nueva y deslumbrante técnica narrativa.

La afirmación puede parecer brutal o simplista respecto de su creación, como si ésta se hubiera reducido a una mera cuestión formal, a problemas de superficie. La verdad es que no es así. Una cosa no invalida la otra. Como ya dijimos, James es uno de los escritores más 'literarios' de la literatura contemporánea, tal vez sólo comparable con Nabokov. James reflexiona constantemente acerca de su trabajo, de las razones que lo llevan a escribir del modo que lo hace, racionaliza la experiencia del acto de la escritura como tal vez pocos autores lo habían hecho. Sus prólogos, reunidos en *Prefaces*, son verdaderos tratados literarios, minuciosos, casi majaderos, de un celo casi autoflagelante, pero a la vez son siempre una afirmación de sus propósitos. Es importante señalar que en la mayoría de los casos los prólogos fueron escritos posteriormente al libro. Todas estas características, opuestas al espontaneísmo o el vitalismo tan sobrevalorados, puede inducir a pensar en una cierta deshumanización de su escritura, a una visión de la literatura como un experimento. Por cierto que James la veía como un experimento. En verdad, toda literatura debiera ser experimental, al menos en los términos como James la concebía. Una caricatura de la época lo muestra paseándose por una habitación y de su boca emerge un sinfín de palabras que lo va envolviendo de la cabeza a los pies. La caricatura corresponde a su última etapa, sus últimos tres libros, *Los embajadores*, *Las alas de la paloma* y *La copa de oro*, cuando James había adoptado el método del dictado. Sin duda que su relación con la palabra no es de índole sentimental en sus orígenes, lo que no quita que sea agudamente

emotiva en sus resultados. Es tal vez ese aspecto lo que deja afuera del mundo jamesiano a multitud de lectores bien dispuestos, y lo que desconcierta a quien se toma la molestia de introducirse en su manera de trabajar. En una ocasión, en que se le acusó de inintelegibilidad, de ahí la caricatura mencionada, respondió: "No importa, en cien años más seré comprendido". James nunca intentó hacerles las cosas fáciles a sus lectores, pero tenía razones bien fundadas para ello. Nada en él es arbitrario, antojadizo y menos esta supuesta criptografía obedece a un amaneramiento con las palabras.

James habló poco y nada de él pero lo suficiente de sus métodos literarios como para que podamos intentar comprenderlo en todos sus aspectos. "Vivir en el mundo de la creación —entrar en él y quedarse en él, frecuentarlo y rondarlo, pensar intensa y fructíficamente, para cortejar combinaciones e inspiraciones y hacerlas esencia por medio de la profundidad y la continuidad de la atención y la meditación— ésta es la única cosa". La frase revela una postura anímica, espiritual; no es específicamente literaria, pero arroja la luz necesaria para comprender la naturaleza del instinto que animaba a James, naturaleza de la que surgirá la revolución narrativa que realiza y que pocos han sabido apreciar. Dado que no perteneció a ningún 'ismo' y que de algún modo es un personaje que queda fuera del historicismo de la evolución de la narrativa, sus hallazgos, si podemos llamarlos así, pasaron discretamente inadvertidos. Lo mismo que su persona. James defendió su intimidad con extremado celo y cualquier dato biográfico que podamos aportar sobre su persona poco dice del hombre que intentó ocultar. Tal vez lo más significativo sea el hecho, oscuro por lo demás, de un accidente de juventud que le habría afectado los genitales y que lo inutilizó para la vida sexual. Tal vez sea esa la explicación del fervor creativo que lo animaba y que le permitía escribir, a veces, tres importantes y complejas novelas en el plazo de un año. Esta sublimación de su mundo afectivo a través de la literatura aún sigue siendo insuficiente para explicarnos la singularidad del personaje. Algunas de las pistas que arroja son deliberadamente confusas: "Un escritor que nos entrega sus obras no está obligado a tirar su vida tras ella, cosa que bien podrían suponer las personas que no perciben que una de las ocupaciones más interesantes del mundo es leer entre líneas de la mejor literatura". James no concebía la literatura de otra forma, del mismo modo que no concebía su propia vida sino como lo había decidido. Ya muy joven a los veinticinco años afirmaba: "Los artistas, a medida que pasa el tiempo, seguramente desconectarán la alarma, vaciarán los cajones de sus escritorios y allanarán la entrada a su privacidad. Los críticos, sicólogos y chismosos podrán

entonces rebuscar entre los rastrojos". De hecho, hacia el final de su vida afirma: "La regla que he seguido en forma casi absoluta estos últimos años a medida que yo mismo me pongo más viejo y pienso más en mi próximo final es ésta: no dejar documentos privados a merced de ningún accidente o incluso de mis albaceas. Guardé todas las cartas por años, hasta que ya casi no cabían en mis receptáculos, entonces hice con ellas una pira gigantesca y desde entonces he vivido tranquilo. Agregaba: "Un hombre tiene el derecho a determinar lo que el mundo sabrá de él y lo que no sabrá; a pesar de la curiosidad natural del mundo a lo contrario, a una cierta santidad en todas las peticiones de generosidad e indulgencia de la posteridad, reclamo el derecho a que ni los cajones del escritorio ni los bolsillos de un hombre deben ser vaciados". Paradójicamente, este pudor atávico sobre su privacidad sea tal vez la única pista que tengamos acerca de su obra. Como suele ocurrir con los artistas, las taras, las debilidades, las manías o los traumas suelen ser el objeto artístico. En James sólo podemos rastrear su soledad. Es esta soledad la que a mi modo de ver determina el nuevo estilo que inaugura James. La privacidad de la conciencia de sus personajes, la cautela con que se adentra en ellas, serán la gran revolución jamesiana, al punto que creará una nueva forma del tratamiento de la tercera persona como voz narrativa.

En este aspecto le cabe un rol importante a su visión de las cuestiones morales respecto de las cuestiones estéticas. En su ensayo *El arte de la ficción*, replica al novelista victoriano Walter Besant, quien en un artículo había sostenido que la novela debía poseer "un propósito moral consciente". Henry James rechaza tal afirmación de plano. Muy tempranamente en su juventud había afirmado: "Nada quería yo tanto como una cosa, lo que yo quería ser, todo, íntimamente, nada más que un ser literario". Más que una mera juvenil declaración vocacional, la frase es un indicio de lo que será su postura frente al fenómeno literario. Supone una inmersión en la vida artística, un ángulo de mirada, una estética, desde donde contemplará la escena de la vida. La literatura no será un intermediario entre él y los hombres, un oficio para cultivar, sino su morada, el lugar donde habitaría e intentaría descifrar el fascinante enigma del comportamiento humano. Aunque resulte de algún modo contradictorio, este ser básicamente sedentario, juzgaba de primerísima importancia la experiencia. ¿Qué clase de experiencia? La que se alimenta de la observación, las impresiones, la contemplación; ésa será *su* experiencia. No se trata entonces de incidentes de orden vital o de grandes peripecias, sino del ejercicio obstinado de la observación. James supone que para observar se debe estar fuera del mundo, pero en ningún caso prescindir de él. "En presencia de la vida tengo reacciones,

tantas como son posibles. Es, supongo, porque soy ese extraño monstruo, el artista, una finalidad obstinada, una sensibilidad inagotable". Agrega: "Es tan sobresaliente como incluyente decir que uno debe escribir a partir de la experiencia... ¿Qué clase de experiencia se pretende y adónde empieza y termina ésta? La experiencia misma es limitada y nunca está completa". De esta incompletitud, de esta parcialidad de la experiencia, James extraerá uno de sus más asombrosos frutos, como veremos más adelante. Esta obsesión por el género humano y la fragmentación de su experiencia tendrá por lógica sus consecuencias. Desde luego, nunca encontraremos en él preocupación por las cuestiones argumentales, por la anécdota, o por el valor temático que tocaba. De ahí su distancia con Besant. El 'propósito moral consciente' implica forzosamente una intencionalidad que, por lógica, se asocia a un afán argumental, en el cual los personajes deben estar al servicio de una idea. En el caso de James, el argumento es la trastienda de sus personajes. Es el resultado de las relaciones que establecen entre ellos. Su foco se agudiza, deja atrás los grandes problemas sociales como lo hacían los victorianos y los naturalistas, y se concentra de manera implacable en sus personajes y su entorno, en atrapar "el extraño e irregular ritmo de la vida". James contempla el mundo tal cual es con una curiosidad desprovista de todo juicio moral. El incidente, lo pintoresco de la historia, su probable amenidad le eran del todo indiferente: "uno dirá que una buena (novela) significa presentar personajes virtuosos y ambiciosos, colocados en lugares prominentes; otro dirá que depende de que tenga un final feliz, una distribución última de premios, pensiones, maridos, mujeres, hijos, millones, párrafos añadidos y observaciones alegres. Y otro dirá que equivale a estar llena de incidentes y movimiento, de modo tal que deseemos seguir adelante para ver quién era el misterioso desconocido, y saber si alguna vez se halló lo robado, sin análisis enojoso alguno. Pero todos convendrán en que la idea 'artística' estropearía la diversión". En otra ocasión resumió este ánimo así: "No se puede pasar uno la vida tomándole la medida al enorme pie plano del público". A la hora de definir sus categorías era taxativo: "movimiento, densidad, vivacidad, intensidad, elasticidad, economía, coherencia, energía moral, retórica y poesía". No deja de asombrar el alto grado de conciencia de su propia singularidad y el desdén que sentía respecto de todo arte convencional. Más aún, era sólo en esta singularidad donde residía la virtud del arte. Si bien puede parecer obvio, no lo es del todo. El arte sólo surgía de la particular visión del mundo del artista. Esto redunda en su distancia estratégica de tendencias, movimientos, teorías, especulaciones cientificistas (recordemos el descubrimiento del sicoanálisis) que lo sitúan como uno de los escritores más ahistóricos del siglo. Si en los hechos él se

convierte en un teórico de la literatura, es de la suya propia de la que trata, es la suma de sus convicciones a las que llega por la praxis literaria misma. Sus ensimismadas conclusiones eran el resumidero de lo que él venía haciendo a través de su literatura. Libertad es una palabra con la que nos encontramos a menudo en la obra ensayística de James. Esta libertad que se adjudicaba para sí mismo, para obrar a su gusto y gana, se la otorga también a sus personajes. Ésta es quizás la nueva senda que James nos ofrece. Solía hablar del "personaje disponible", como un sujeto en el cual se podía trabajar. En el prólogo de *Las alas de la paloma* se plantea así: "La idea, reducida a lo esencial, es la de una joven consciente de su gran capacidad para vivir, pero desde temprano golpeada y condenada, sentenciada a morir en breve plazo, no obstante su amor por la vida..." Podemos suponer que James nunca pudo haber conocido un caso semejante, sino que partía de una hipótesis de la que no quería comprobación alguna, sino el esclarecimiento, la multiplicación de posibilidades de acción que esa encrucijada ofrecía. Cabe entonces en el caso de James hablar con más propiedad de 'asunto' que de 'historia', en el sentido convencional que se le da en la novela. Su punto de partida será siempre la indagación de un personaje en circunstancia, una naturaleza determinada y su situación, y su relación con el mundo. Para James los personajes sólo existen en la medida en que son interpelados por su entorno. Su complejidad sicológica estará determinada en gran medida por éste. A diferencia de la novela decimonónica en que los personajes están estigmatizados por alguna característica peculiar —pensemos en Balzac y sus arquetipos del arribista, del avaro, del conspirador, etc.—, los personajes de James si bien pertenecen en su mayoría a la sociedad y son casi sin excepción ilustrados e inteligentes, se trata de gente común, sin un rasgo definitorio evidente que los separe de los demás. Es como si sorprendiera a un individuo en medio de la multitud y lo llevara a un inquisitorio primer plano. La tarea del escritor será extraer de él todo cuanto éste puede dar. Y claro, cada personaje, lo mismo que cada uno de nosotros, tiene su medida. En esa requisitoria del alma, James procede implacablemente. Pero aquí está el punto. No es el autor quien conduce al personaje, quien le dibuja el sendero por donde ha de transitar; con cierta falta de caridad, el autor se zafa de la mano de la que el personaje insiste en aferrarse. James arroja sus personajes al mundo. Les concede la peligrosa libertad de ser. Todo cuanto les suceda es a su cuenta y riesgo. La célebre frase de Sartre en *Huis Clos*, "el infierno son los otros", bien pudo haberla escrito James. No hay salida, el mundo está poblado de 'otros', ése es el escenario, es la gran montaña y su desfiladero donde podremos oír el eco de la conciencia. Es ante ese otro, no ante el autor, ni tampoco ante el

lector, que el personaje revelará la infinitud de aspectos que todo ser humano contiene. Sin embargo, esta revelación se dará por capas sucesivas, proceso central en el asombro que produce la lectura de cualquier libro de Henry James. Como nosotros, como cada uno —James insiste que "el terreno del arte es la vida toda"—, sus personajes muestran sólo aquello que quieren mostrar de sí; el mundo es un juego de apariencias y las relaciones se darán en esa perturbadora galería de espejos que es la sociedad entre los hombres. Para lograrlo, James renuncia a los vetustos fueros de la voz narrativa en tercera persona, la omnisciencia del narrador. No sabemos de los personajes, más que lo que ellos quieren representar a la audiencia. Aun cuando el narrador entra en la conciencia de su personaje, James 'describe' su pensamiento como un fenómeno más, que no tiene mayor valor que una acción; en cierto modo es una acción más, de tal modo que nuestro personaje, a vista y paciencia del lector, puede pensar 'equivocadamente'. Esta 'técnica', por llamarla de algún modo, es la que ha sido llamada como el 'punto de vista' o, mejor aún, 'el punto de vista limitado'. Los personajes no pueden acceder al mundo sino desde las virtudes o limitaciones que impone su inteligencia, sensibilidad, ingenio, cultura o cuna. Su mirada es por fuerza subjetiva, recoge una porción 'limitada' de la experiencia; el autor le prohíbe el acceso a cualquier idea de totalidad, salvo que se trate de un maníaco o un loco. Cada uno ocupa el lugar que le corresponde en la escena y su rango de maniobra será tan pequeño y restringido, como particular es su carácter. De este modo se da la paradoja que confinando a sus personajes a entrever la vida sólo por una pequeña abertura de la cortina, su interés y su vivacidad estarán dados por el sesgo desde donde observa. James logra así una diferenciación, una particularización de caracteres como la literatura no había conocido hasta entonces, al menos por la vía del diseño meramente sicológico y no por sus atributos externos. Es así como el panorama del mundo cambiará radicalmente según quién lo observe, y por lo mismo ese panorama será más rico y colorido, los conflictos más agudos, los asuntos más interesantes. Este atributo que puede sonar superfluo, era la única categoría que James le exigía a la novela, por la sencilla razón que no podía encontrar otra sin entrar en el tipo de definiciones taxonómicas que tanto detestaba y que Walter Besant representaba de forma tan elocuente. No hay una realidad; son tantas como conciencias intervienen en el tejido de éstas. De ahí el resultado, la inmensa libertad moral de los personajes de James. Tal vez un antecedente de este procedimiento se encuentre en la literatura de Stendhal, pero con un distingo. Hacia donde Stendhal apunta es a poner de manifiesto el relativismo moral de una sociedad, más bien se regocija con ello, que ha dilucidar el tramado

de la conciencia del que resulta el relativismo individual de James. A modo de ejemplo, Stendhal puede escribir refiriéndose al conde Mosca en *La Cartuja de Parma*: "Era muy bueno y muy digno de ser amado, si descontamos las severidades a que lo obligaba su cargo de ministro". Una afirmación así no se encontrará nunca en James. Desde luego porque James nunca calificaría las virtudes de un personaje, pero por sobre todo, porque lo terminante del adjetivo contraría toda su visión del proceder literario. Nadie es puramente bueno y si se es definitivamente perverso, como Gilbert Osmond en *El retrato de una dama*, el lector deberá pesquisarlo con mucha atención para llegar a esa conclusión, y no contará para ello ni siquiera con la ayuda del objeto de su perversión, Isabel Archer, su esposa, que no se decide, vacila, al momento de aceptar que es así. Osmond, de más está decirlo, se considera a sí mismo el más noble de los caballeros y de sus diálogos y sus intenciones se debiera desprender que ésta es una cuestión inobjetable.

James llegó a postular la desaparición total del autor. Éste no debía existir dado que interfería en la vida de sus personajes. Éstos debían librar sus encarnizados combates tras las cerradas puertas de un salón o protegidos por el silencio de los jardines de una villa. Para esta pretendida desaparición del autor, James acude a la escenificación, pone a sus personajes en terreno. El autor no está ahí presente, ni siquiera fisgoneando, se hace presente sólo por 'la firmeza de la descripción', la cual, mientras más vívida, certera y consistente, borra sus propias huellas, es decir, produce la vertiginosa sensación de que el escritor no anduvo por ahí. James comprendió el valor de la visualización escénica como un medio de neutralizar la escritura, como un *vestido* de la naturaleza. Los hechos ocurren por la inevitabilidad de las acciones que los han provocado. Por momentos, el lector quisiera que James asistiera a su personaje, como sucede tan visiblemente con Isabel Archer en *El retrato*, que le tendiera una mano, que le diera una pista acerca del destino al que se precipita. Pero James odiaba esos actos de clemencia, si bien, moralmente, uno puede colegir que él está con ella. Los tropiezos y desventuras de Isabel, sus equivocadas decisiones producto de una malentendida bondad que se confunde con soberbia, serán el caro tributo que deberá pagar para ver con sus propios ojos la realidad de las cosas.

El resuelto desapego entre el autor y su relato, lo que se ha llamado un siglo después la 'distancia narrativa', es en buena parte resultado de las reflexiones de Henry James acerca de las posibilidades de la novela, en la cual cifraba sus máximas esperanzas, calificándola como el género literario del siglo. Metaforizando a través de la pintura, dice en *El futuro de la*

novela: “De todos los cuadros, la novela es el más amplio y el más elástico. Puede dilatarse hasta cualquier punto, puede abarcar absolutamente cualquier cosa. Lo único que necesita es un asunto y un pintor. Por asunto tiene, magníficamente, la totalidad del conocimiento humano”. Es esta totalidad la que atrae a James, el gran panorama de los individuos y su comportamiento, los cuales Henry James contemplaba desde su serena soledad. Restarles cualquier juicio apriorístico a estos comportamientos es su forma de simpatizar con el mundo. Por lo tanto, mientras más amplio es el panorama, menos *normalizable* es. Y si no lo es en el plano de la mirada moral, tanto más lo es en el plano de la ejecución; es en la escritura misma donde James veía residir la diferencia entre bello y vulgar, verdadero o espurio, o superficial, donde el arte bien podía hacer las veces de la vida. Así, James no le fija a la narración reglas, normas y menos límites; por el contrario, ve en ella el único campo donde la experiencia se puede expresar en plenitud, en el detalle capturado, en la multiplicidad de detalles capturados, que en conjunto darán consistencia a la trama, no en su acepción argumental, sino como el espeso tejido de que está hecha la vida. □

EL ESTADO TERRATENIENTE: GESTIÓN DE BIENES NACIONALES*

Antonio Daher

El Estado, el mayor terrateniente, propietario de un tercio del territorio nacional, no dispone aún de un catastro de las tierras fiscales, mayores en superficie a Uruguay o Cuba, y apenas menores a Italia o Japón. Este estudio contribuye, en primer lugar, al análisis de la cartera de propiedades fiscales, urbanas y rurales, en cada región del país. Un segundo aporte del mismo es la evaluación de la gestión de la cartera de bienes nacionales, en términos de adquisiciones, disposición —incluidas las privatizaciones— y administración de los bienes raíces fiscales. Una tercera contribución es el análisis de los precios e ingresos —más de UF 7 millones en dos décadas— obtenidos por ventas y arriendos de tales propiedades, además de un ejercicio de avalúo de la cartera inmobiliaria fiscal.

El estudio, elaborando una base estadística de 1979 a 1997, permite evaluar prácticamente la gestión de los bienes nacionales fiscales de los últimos tres gobiernos, constatando, entre otras conclusiones, que en los 90 el Estado privatiza mucho menos, favoreciendo las ventas directas, a pesar de que los precios obtenidos en subastas y propuestas son sustancialmente mayores. Igualmente, se verifica que

ANTONIO DAHER. Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

* El autor expresa su reconocimiento al Ministerio de Bienes Nacionales por la información proporcionada para este estudio. Asimismo, agradece la valiosa asistencia de Juan Eduardo Bauzá y Cristóbal Crisosto (Departamento de Ingeniería Comercial); Max Spiess (Facultad de Derecho); y Jorge Pinto (Facultad de Arquitectura).

en la misma década los títulos gratuitos otorgados superan ampliamente a los conferidos en los 80.
La investigación demuestra, asimismo, que tanto la cartera de bienes raíces fiscales, como las ventas, los precios, e incluso los títulos gratuitos, presentan un fuerte sesgo geográfico, haciendo recomendable no sólo una 'focalización', sino en rigor una 'localización' de su gestión, abogando por una mayor descentralización a través de los gobiernos regionales y administraciones municipales.
Por último, luego del análisis de casi veinte años de gestión inmobiliaria estatal queda planteada la conjetura de la transición de un Estado terrateniente, en la acepción más bien crítica y peyorativa de este adjetivo —connotando falta de modernidad, menor productividad y escaso espíritu emprendedor—, a un Estado empresario, esta vez bajo la figura del Estado empresario inmobiliario.

I. INTRODUCCIÓN: EL ESTADO NO SABE LO QUE TIENE...

1999, 7 de enero. Valparaíso, Cámara de Diputados de la República de Chile: el Ministerio de Bienes Nacionales y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de dicha Cámara realizaban en conjunto el Seminario "Los Bienes de la Nación: una oportunidad para el Desarrollo y Calidad de Vida de la Ciudadanía". Inaugurando el evento, el presidente de la Cámara, diputado Gutenberg Martínez, denunciaba la existencia de bienes nacionales de uso público que no se sabe de qué instituciones dependen, que se presentan como tierra de nadie, convertidos en basurales y lugares de delincuencia, alcoholismo y drogadicción, agregando que el Estado no sabe cuál es su número y superficie, ni cuál su efectiva propiedad o tenencia... (Martínez, 1999). En la convocatoria al mismo Seminario, ambos organismos del Estado —Ministerio y Cámara— reconocían que "muy a menudo expresiones como bienes fiscales o bienes del Estado esconden una calificación peyorativa de bienes que pueden ser de todos pero que en la práctica no son de nadie" (Ministerio de Bienes Nacionales y Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, 1999:1).

Esta "tierra de nadie", tan peyorativamente considerada como lo ha sido muchas veces el propio Ministerio a su cargo, representa sin embargo ni más ni menos que un tercio del territorio nacional continental, exactamente un 32,1% con 243 mil kilómetros cuadrados, según cifras de la Ministro de esa cartera (Delpiano, 1999). Esta paradoja llevó al diputado

Roberto Dalmastro a expresar —en el mismo Seminario— que Bienes Nacionales era el Ministerio más rico de todos —¡cuánto cuesta el tercio fiscal del territorio nacional!— y, sin embargo, el con menor presupuesto (Dalmastro, 1999).

Patrick Shea, Deputy Assistant Secretary for Land and Mineral Management del Gobierno de los Estados Unidos, expresaba en la misma instancia que el Bureau of Land Management contaba con cerca de 10.000 empleados y un presupuesto para 1999 de US$ 1,2 billones, recordando que la tierra de propiedad pública en los Estados Unidos era también del orden de un tercio del territorio nacional. En broma y en serio, el Deputy Assistant Secretary expresaba: "¡Yo soy el terrateniente más grande de los Estados Unidos!" (Shea, 1999).

El Ministerio de Bienes Nacionales (s/f ¿1998? a:1) constataba que históricamente, en Chile, "la falta de una acción planificada en la gestión de las propiedades fiscales ha generado ocupaciones ilegales de terrenos; desaprovechamiento de ventajas comparativas; grandes desórdenes en el desarrollo territorial; pérdidas de patrimonio, por deterioro de la base de recursos naturales, históricos y paisajísticos contenidos en los terrenos fiscales; acciones especulativas; pérdida de capital para el Estado de Chile".

El propio Ministerio reconocía que el catastro de todos los bienes fiscales inscritos debería concluirse a fines de 1998 y que el de la propiedad fiscal no inscrita se extenderá hasta fines del año 2000 (Ministerio de Bienes Nacionales, s/f ¿1998? b).

La verdad es que a fines del siglo XX, con todo el desarrollo que ha alcanzado el país y a pesar de la modernización del Estado, los bienes nacionales siguen siendo en gran medida una tierra de nadie y el Estado no sabe cuánto vale lo que tiene y ni siquiera sabe lo que tiene.

Este estudio quiere contribuir, en primer lugar, al conocimiento y análisis de la cartera de propiedades fiscales, tanto urbanas como rurales, en cada región del país. Complementariamente, un segundo propósito del mismo es evaluar la gestión de dicha cartera por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, en términos de adquisiciones, disposición y administración de las propiedades fiscales. Finalmente, un tercer objetivo de la investigación es analizar los ingresos obtenidos por ventas y arriendos de tales propiedades y, de acuerdo a los precios involucrados y a otros antecedentes, intentar un ejercicio de avalúo de la cartera inmobiliaria fiscal. Las conclusiones buscan conjugar los resultados del estudio con orientaciones de política, recogiendo algunas experiencias internacionales en la materia.

En términos metodológicos, la investigación se basa en un banco de datos cuya elaboración era de por sí un desafío y un aporte, en atención a la

inexistencia —aún hoy— de un catastro de la propiedad fiscal. La información estadística incluye tanto inventarios regionalizados de bienes raíces fiscales, para 1990 y 1994, cuanto series de datos de adquisiciones, disposiciones, administración e ingresos monetarios, vale decir, del conjunto de operaciones realizadas sobre la cartera inmobiliaria fiscal. Estas últimas, que cubren en general un periodo de diecinueve años —desde 1979, año de inicio del cambio del marco legal del Ministerio del ramo, hasta 1997— hacen posible evaluar la gestión estatal de prácticamente los tres últimos gobiernos.

La fuente de la información primaria sobre la que se construyó la base de datos es, por lo general, el propio Ministerio de Bienes Nacionales. Como se verifica más adelante, en ciertos casos la información es menos confiable, sobre todo en materia de stock, y en otros hay vacíos puntuales, en especial tratándose de operaciones o flujos sobre ese stock. A pesar de ello, el grueso de la información da cuenta de manera relativamente certera del orden de magnitud y características de la cartera inmobiliaria fiscal, y de las tendencias —validadas por su cobertura temporal de casi dos décadas— en la gestión gubernamental de la misma.

La estructura del presente documento ordena los resultados de la investigación en cinco capítulos. El primero, bajo el título "El Estado no sabe lo que tiene", cumple un propósito introductorio, presentándose en él a grandes rasgos las características del 'problema' que enfrenta el Estado en materia de propiedad fiscal y las atribuciones y responsabilidades que en particular tiene el Ministerio de Bienes Nacionales.

El segundo capítulo, denominado "Gestión inmobiliaria del Estado", pasa revista a experiencias y políticas nacionales e internacionales en la materia, y a ciertos conceptos de gestión de portfolios inmobiliarios, preparando así el terreno para el análisis estadístico que prosigue en términos de conferirle un marco empírico y teórico.

"El Estado terrateniente", como su nombre lo indica, es el capítulo destinado al análisis del stock de propiedades fiscales, urbanas y rurales, en cada región de Chile, en 1990 y 1994, en su primera parte, y en su segunda al estudio desagregado de dicha cartera en términos de propiedades administradas, con información provisoria y afectas a alguna reserva, en el año 1990.

El cuarto capítulo describe y evalúa las operaciones y flujos resultantes de la gestión de Bienes Nacionales entre 1979 y 1997. Bajo el título "El Estado, empresario inmobiliario", dicha gestión es revisada en cuatro dimensiones: 1) Adquisiciones fiscales: herencias, desafectaciones, expropiaciones y compras, donaciones y traspasos; 2) Disposición y privatiza-

ción: ventas directas, ventas por subastas y propuestas, transferencias y títulos gratuitos; 3) Administración: arriendos, destinaciones, usos gratuitos y usos onerosos; 4) Ingresos fiscales por ventas directas, ventas por propuestas y arriendos.

El quinto y último capítulo, "Bienes Nacionales ¿un mal nacional?", junto con hacer un ejercicio de avalúo de la cartera inmobiliaria fiscal con el propósito de "ponerla en valor" o valorizarla, sintetiza las principales conclusiones de la investigación y las orienta en términos de ulteriores diseños de políticas.

Al final del documento, amén de las referencias bibliográficas de rigor, se incluye un anexo estadístico con toda la información de base del estudio.

Entremos, pues, en materia, comenzando por algunas definiciones.

A diferencia del dominio particular o privado, el dominio público corresponde a la propiedad del Estado-Nación o bienes nacionales[1]. Entre éstos están, por una parte, los de uso público (cuyo dominio y uso pertenecen a toda la nación, como calles y playas) y, por otra, los bienes fiscales (cuyo uso no pertenece generalmente a todos los habitantes). Son bienes fiscales porque son del Estado o Fisco (es decir, del mismo Estado como sujeto de relaciones económicas), tal como si se tratara de un ente de derecho privado.

Legalmente, el artículo 590 del Código Civil señala que son bienes del Estado todas las tierras (inmuebles) que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. La tuición o facultades de administración, adquisición, disposición y control del uso público de todos los bienes nacionales pertenece directamente al Presidente de la República[2]. Dicha potestad la ejerce por medio del Ministerio de Bienes Nacionales. La forma y modalidades en que se enmarca dicha tuición se señalan en el Decreto Ley Nº 1939 de 1977, el Decreto Supremo Nº 577 de 1978 y el Decreto con Fuerza de Ley Nº 789 de 1978.

> Según indica la Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales (D.L. Nº 3274 de 25 de marzo de 1980 y D.O. Nº 30.681 del 5 de junio de 1980) sus atribuciones y funciones son las siguientes [...]:
>
> a) Las relativas a la adquisición, administración, y disposición de bienes fiscales.

---

[1] Título III, libro II del Código Civil, artículo 589.

[2] Artículos 24 y 60, Nº 9 y 10 de la Constitución Política de la República de Chile y artículo 1º del Decreto Ley Nº 1939 de 1977.

> b) La estadística de los bienes nacionales de uso público, de los bienes inmuebles fiscales y de los pertenecientes a las entidades del Estado, mediante un registro o catastro de dichos bienes.
> c) La coordinación de las demás entidades del Estado [...] en la elaboración de las políticas destinadas al aprovechamiento e incorporación de terrenos fiscales al desarrollo de zonas de escasa densidad de población [...].
> d) Las relativas a la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz particular y constitución del dominio sobre ella, como asimismo de la regularización y constitución de la propiedad de las comunidades [...].
> e) Las demás a que se refieren otras disposiciones legales y reglamentarias. (Ministerio de Bienes Nacionales, s/f ¿1994?: 2).

La facultad de velar por la conservación y recuperación ambiental y ecológica del territorio y la creación de áreas silvestres protegidas fue derogada y entregada a la Ley Nº 18.362 (publicada en el *Diario Oficial* Nº 32.056 de 27 de diciembre de 1984) que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

En un documento reciente del Ministerio de Bienes Nacionales y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados (1999), se señalaba la necesidad de conformar una Política de Estado para la gestión y uso de los Bienes Comunes: esto es de los Bienes Fiscales y Bienes Nacionales de Uso Público.

El Ministerio de Bienes Nacionales (s/f ¿1994?: 19) acuñó el concepto de "gestión inmobiliaria de los bienes del Estado", explicando que "dado que la estructura de la economía se organiza por la dinámica del mercado, ha sido el parecer de esta administración que el Estado puede y debe incursionar con eficiencia en el mercado inmobiliario".

La misma fuente oficial afirmaba a continuación que una gestión eficiente de los bienes del Estado exigiría al menos los siguientes requisitos, en los cuales se ha trabajado en forma permanente en los últimos años: conocimiento e información del stock general de bienes; información perfeccionada del stock propio del inmueble; sistema de información actualizada de los precios (registro de precios de enajenaciones fiscales, prensa, corredores de propiedades, avalúos del Servicio de Impuestos Internos); información sobre proyectos de inversión (efectos valorizantes); uso de publicidad; tasaciones comerciales a valor de mercado.

En términos de estrategia de ventas, se señalaba que, "para la enajenación de activos fijos prescindibles, se diseñó e implementó un sistema de trabajo que resulta innovador en el tema mediante la selección de terrenos de especiales características y aptitudes, para su puesta en valor e incorpo-

ración al mercado inmobiliario", agregándose que "uno de los objetivos principales de los loteos de terrenos fiscales es actuar sobre la base de una planificación territorial que permita un crecimiento armónico con el entorno de los sectores privilegiados para el desarrollo de la gestión inmobiliaria". "En este contexto se proyectaron estudios territoriales tendientes a establecer áreas de potencial desarrollo con destino habitacional, industrial, turístico y agrícola" (Ministerio de Bienes Nacionales, s/f ¿1994?: 21).

Sin duda que los criterios establecidos para lograr una eficiente gestión inmobiliaria de los bienes del Estado resultaban muchas veces impracticables dadas las deficiencias crónicas de información básica, en especial en materia de catastro de las propiedades fiscales.

"Desde los tiempos del Presidente Manuel Bulnes que se intentó llevar un catastro no sólo fiscal, sino que también privado, sin resultados concretos. Durante el Gobierno Militar se creó una comisión que se abocó a estudios preliminares desde 1977. En 1981 la iniciativa fue reactivada con la creación de una segunda Comisión de Estudios para la Elaboración de un Catastro Nacional. En 1985 se dijo que el proyecto demandaría una inversión de US$ 100 millones y se partió con un plan piloto en Melipilla y Las Condes. (Tan sólo generar una cartografía para Melipilla tuvo un costo de $ 46 millones)" (*El Mercurio*, miércoles 3 de agosto de 1994: A12).

"Adriana Delpiano, la actual Ministra de Bienes Nacionales, sostiene [...] que con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta de las propiedades que han salido o ingresado a poder del Fisco y que no quedaron registradas adecuadamente [...] Este esfuerzo nos ha permitido descubrir bienes fiscales que nadie sabía que teníamos [...] Así se descubrió una veintena de propiedades que pese a tener una inscripción (a favor del Fisco) eran administradas por particulares, como un estacionamiento en calle San Francisco y otras propiedades en Carmen y Camino Los Morros. Con la detección de estos inmuebles ya se financió el costo de la investigación, que asciende a $ 23 millones. Pero aún queda pendiente casi todo el territorio de la Provincia Cordillera, donde prácticamente no existen inscripciones en grandes extensiones" *(El Mercurio*, miércoles 3 de agosto de 1994: A12).

La Memoria Técnica relativa a la gestión ministerial del periodo 1990-1993 señalaba al respecto que "se elaboraron proyectos de Actualización de Catastro de las propiedades fiscales en las Regiones I, II, III, V, VIII y IX, en coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales, para ser postulados a financiamiento del FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional).

Dentro de los proyectos ejecutados destaca el de "Actualización y Complementación del Catastro de los Bienes Raíces Fiscales de la Región Metropolitana de Santiago" (financiamiento sectorial de M$ 23.440). A inicios de 1994 se había completado la recopilación de los ocho Conservadores de Bienes Raíces de la R. Metropolitana, "habiéndose detectado un total de 7.897 propiedades fiscales" (Ministerio de Bienes Nacionales, s/f ¿1994?: 34).

Las insuficiencias en el catastro de la Región Metropolitana, e incluso, siguiendo los ejemplos citados por la Ministra, en la propia comuna de Santiago, son una advertencia de lo que puede esperarse para el resto del país y, en especial, para sus regiones extremas.

En efecto, *El Mercurio* (domingo 20 de octubre de 1996: D1 y 24) titulaba "El Negocio del Siglo. Particulares se reparten el mapa de Chile", preguntándose "¿por qué causó tanta expectación entonces la noticia de que un grupo de personas decía ser dueño de 438 mil hectáreas de la Provincia de Palena?", explicando a continuación que "se trata de una franja que tiene un largo similar al comprendido entre Santiago y la Séptima Región, y que va a lo ancho desde la frontera con Argentina hasta el océano Pacífico. Es decir, un trozo de Chile, incluyendo dentro la comuna de Palena completa, con el pueblo, sus accidentes geográficos, diversas villas y las casas que albergan a tres mil quinientas personas", todo esto bajo el subtítulo de "Fraude y prevaricación".

"En la II Región abundan denuncias sobre ventas irregulares de predios fiscales. Una de las acusaciones señala que un asesor de la Intendencia habría adquirido un predio en $ 37 millones y al día siguiente lo habría vendido en $ 147 millones a una empresa constructora" (*El Mercurio*, miércoles 25 de marzo de 1998: C12). "El titular de la Seremi [...] renunció sorpresivamente a su cargo" (*El Mercurio*, viernes 3 de julio de 1998: C9).

La gestión inmobiliaria del Estado no sólo se dificulta por las deficiencias catastrales y las irregularidades que ellas mismas inducen y facilitan, sino también por las facultades otorgadas o reclamadas por otras entidades estatales. A modo de ejemplo resulta oportuno señalar tres casos de muy distinta naturaleza, pero ciertamente ilustrativos de problemas de competencia legal y de coordinación: la participación de los Consejos Regionales en la gestión de los bienes fiscales; las concesiones de estacionamientos en subsuelos fiscales; y la enajenación de propiedades fiscales, a través del Patrimonio de Afectación Fiscal, por las Fuerzas Armadas.

Respecto del primer caso, recientemente se informaba que "la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile pedirá al Parlamento

introducir cambios legales para agilizar el traspaso de bienes fiscales a los Consejos de Gobiernos Regionales (CORES) ante la falta de voluntad del Ministerio de Bienes Nacionales para cumplir con ese propósito. También denunciaron que esa Secretaría de Estado aplica una política centralista y discrecional para vender o enajenar bienes fiscales, sin considerar la opinión de los gobiernos regionales [...] Así "los gobiernos regionales no han logrado conformar su patrimonio propio [...]" (*El Mercurio*, lunes 29 de septiembre de 1997: C2).

En relación al proyecto para construir estacionamientos subterráneos, "la Ministra de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano, indicó que el subsuelo es un bien fiscal y que es una prerrogativa de la repartición que encabeza el poder afectarlo como un bien nacional de uso público", agregando que "al producirse la afectación del bien subsuelo, corresponde a la Municipalidad donde éste se encuentre administrarlo y entregarlo, si así se estima, en concesión a particulares para la construcción de estacionamientos vehiculares subterráneos [...]" (*El Mercurio*, viernes 15 de julio de 1994: A20). Estas concesiones son hoy una realidad.

En fin, respecto del tercer caso en consideración, y que en su momento despertó una fuerte polémica pública, las notas de prensa dan cuenta abreviada del problema en cuestión: *El Mercurio* (domingo 19 de julio de 1998: D21-22), bajo el título "Larga vida y lenta muerte de un DFL. La venta de bienes fiscales por las FF.AA. en 27 años", anotaba que "de hecho, hasta el momento, Bienes Nacionales posee un solo catastro del cual ni siquiera puede afirmarse que está completo: el de los años 1996 a 1998, donde se establece que a través del PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal), las FF.AA. han enajenado propiedades fiscales por un valor de 66 mil millones de pesos", agregando que según el libro de Dauno Tótoro, *La Cofradía Blindada*, "entre 1992 y 1995 los militares habían enajenado propiedades fiscales por 19.200 millones de pesos". En el mismo artículo se explicaba que "todo se inició con el DFL 1, del 14 de julio de 1971, donde se declaró que "los bienes y servicios pertenecientes a los departamentos y subdepartamentos de bienestar social de las FF.AA., serán aquellos que dentro de 90 días, a contar de la publicación del presente decreto con fuerza de ley, sean asignados a su patrimonio de afectación, por decreto o resolución interna" [...] el plazo fatal de 90 días dado por el DFL 1 se alargó inconmensurablemente, pues siguió utilizándose hasta 1988", (año de) dictación de la ley 18.712 (donde) se reprodujo en su artículo 19 la norma del DFL 1, que reconocía, incluso, el plazo fatal de 90 días. Sin embargo, ella se siguió aplicando hasta el 9 de julio (de 1998), es decir, la extensión real de la ley de 1988 fue de tres mil seiscientos cincuenta días

más". El mismo periódico (*El Mercurio*, viernes 10 de julio de 1998) informaba que "un dictamen de la Contraloría General de la República señala que quedó extinguida la facultad contenida en el artículo transitorio del DFL Nº 1 de 1971 [...] y que "no cabe objetar los actos administrativos a través de los cuales se efectuaron asignaciones de bienes fiscales al amparo del criterio que hasta esa fecha sustentara (la misma Contraloría)".

El Ministerio de Bienes Nacionales y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados (1999: 2) reconocían, a propósito de los casos referidos, que "existen evidentes vacíos legales sobre la correcta aplicación de políticas tendientes al resguardo y manejo coherente de los bienes nacionales. Más aún, nuestro ordenamiento legal y la organización de la administración pública entrega competencias diversas a varias Instituciones Públicas que tienen injerencia en los ámbitos de manejo y uso del territorio".

La constitución de un grupo de trabajo para la coordinación catastral de los organismos del Estado —promovida por el Ministerio de Bienes Nacionales en 1996—, con participación del Servicio de Impuestos Internos, el Instituto Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Planificación, el Instituto Geográfico Militar y la Secretaría General de la Presidencia (Ministerio de Bienes Nacionales, s/f ¿1998? b) es un buen precedente de superación de los conflictos entre instituciones estatales.

II. GESTIÓN INMOBILIARIA DEL ESTADO

Algunas iniciativas recientes referidas a la gestión inmobiliaria del Estado están vinculadas a la venta o 'privatización' de propiedades fiscales, a 'concesiones onerosas', y ciertamente también a la regularización de títulos de dominio, abarcando así un espectro que va de lo económico a lo social, y que incluye, entre otros, objetivos de colonización, desarrollo turístico y protección de áreas silvestres.

Una revisión breve de algunas de estas iniciativas parece oportuna para ilustrar la gestión estatal en estas materias. Ella se hará citando, de paso y con fines comparativos, experiencias internacionales afines.

La Memoria de la gestión 1994-1997 del Ministerio de Bienes Nacionales (s/f ¿1998? b) indicaba, en relación a la propiedad fiscal, que en 1994 se otorgó prioridad a las tareas de administración, adquisición, catastro y valorización de los bienes del Estado; en 1995, a la definición de la política para el catastro de dichos bienes; en 1996 se dio comienzo a la

"política intencionada" de administración de la propiedad fiscal; y en 1997 se enfatizó el término de proyectos catastrales en regiones y la definición de la política de administración de bienes fiscales.

A fines de 1997 se informaba que el "Ministerio de Bienes Nacionales enfatizará su gestión en el mejor uso de territorios del Estado, poniéndolos a la venta mediante licitación pública, para la constitución de parques industriales, zonas recreacionales, balnearios y zonas de expansión urbana", agregándose que "el Ministerio de Bienes Nacionales determinará durante 1998 qué parte del territorio que maneja el Estado va a ser 'privatizado' y qué parte no será traspasada a particulares y permanecerá como reservas territoriales" (*El Mercurio*, martes 23 de diciembre de 1997: C4).

El mismo Ministerio de Bienes Nacionales (s/f ¿1998? a) anunciaba una nueva línea de acción ministerial, que se expresaba en el paso de una política tradicional de regularización y colonización a otra de conservación del patrimonio inmobiliario fiscal y desarrollo de los bienes nacionales para el uso y goce de las generaciones futuras. Se afirmaba a continuación que un aspecto importante de esta nueva política es la declaración de "inmuebles imprescindibles" o "bienes nacionales", entendiendo como tales a aquellos que contienen un alto valor patrimonial (histórico, natural o ambiental); a los que conformen Áreas Prioritarias de Gestión (de acuerdo a la "política intencionada"); y a los que se encuentren destinados a servicios públicos. Entre las áreas prioritarias de gestión se indicaban, agregadamente, el desierto (nuevos destinos, playas públicas, desarrollo urbano, loteos industriales); la cordillera (áreas recreativas, de educación ambiental, investigación científica y conservación ambiental); y la Patagonia (circuitos turísticos, áreas recreativas y de conservación ambiental, destinos turísticos).

El Bureau of Land Management de los Estados Unidos planteaba, en un sentido similar, tres prioridades: 1) Ser el buen vecino, manteniendo asociaciones, trabajando conjuntamente, y estableciendo consejos consultivos de recursos; en síntesis, participación; 2) Utilizar lo mejor de la ciencia y la tecnología en la gestión del territorio fiscal, mediante un Consejo Consultivo Científico de alto nivel; y 3) Promover el uso múltiple de las tierras además de preservar el paisaje (Shea, 1999).

Sin duda la nota distinta en estas prioridades es el apoyo científico-tecnológico provisto por una instancia colegiada, y pluralista, en la que tienen expresión diversos ámbitos privados, y muy notablemente las universidades.

Las opciones extremas entre 'privatización' y declaración de 'inmuebles imprescindibles', intermediadas por diversas fórmulas de conce-

siones, parecen marcar el espectro de políticas en materia de gestión inmobiliaria del Estado.

La venta de patrimonio estatal, denominada también 'privatización' —con todo lo que este término connota ideológica y políticamente—, puede tener objetivos muy diversos, en países y contextos históricos muy distintos, y bajo regímenes de gobierno de variado signo.

Un artículo en *The Times* (reproducido por *El Mercurio*, viernes 24 de abril de 1998: A6) señalaba que "una propuesta oficial de poner el Coliseo y otros monumentos antiguos a la venta como parte del programa de privatización del gobierno de centroizquierda causa conmoción en Italia [...] La venta de propiedades estatales incluye cuarteles de ejército, campos aéreos, depósitos, faros y terrenos costeros y agrícolas, como también edificios renacentistas [...] La venta de las propiedades estatales es parte de un intento por reducir el enorme déficit presupuestario de Italia y así satisfacer los criterios de Maastricht para la moneda única europea".

En Chile, una experiencia reciente de venta de predios fiscales, mediante propuesta pública, fue concretada —en la práctica como un plan piloto— en la III Región de Atacama. Agrupados en cuatro sectores, Ramada, Bahía Inglesa, Caldera-Bahía Inglesa y Las Machas, fueron ofrecidos 57 lotes aptos para proyectos inmobiliarios y turísticos, con una superficie total de 2.133.339 m^2 a un precio mínimo total de UF 155.415[3] (aproximadamente US$ 5,1 millones) (Ministerio de Bienes Nacionales, 1997). Según informaciones de prensa, se recibieron 13 ofertas, a pesar de que las bases fueron compradas por más de 100 empresarios, y sólo fueron licitados menos de 10 predios. Según se explicó, no se trataba de que el Estado reuniera fondos, sino de estimular un mecanismo de gestión tanto privada como local. A partir de una iniciativa local tendría que generarse un movimiento global de recursos, donde la puesta en movimiento del patrimonio fiscal —los predios licitados— sería la herramienta para el desarrollo de proyectos de todo orden, incluyendo infraestructura (*El Mercurio*, domingo 7 de diciembre de 1997: C1 y 6).

El objetivo de promoción de inversiones privadas es muy claro en la interesante estrategia de privatización de las tierras del Proyecto Especial Chavimochic, próximo a Trujillo, Perú. La Comisión Especial de Privatización (CEPRI), de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 674 que promulga la Ley de Promoción de la Inversión Privada en el ámbito de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, decidió subastar cuatro sec-

[3] UF: Unidad de Fomento, unidad de valor monetario real con una equivalencia en pesos que se ajusta diariamente según la variación del Índice de Precios al Consumidor.

tores con un total de 84 lotes con superficies fluctuantes entre 50 y 2.323 hectáreas cada uno. La Comisión incluyó el requisito de un compromiso mínimo de inversión dentro de la privatización, con el objeto de crear un polo de desarrollo agroexportador y agroindustrial en la región y garantizar la puesta en operatividad de las tierras del proyecto (CEPRI-Chavimochic, 1996).

El objetivo estratégico del proyecto era "construir una cultura de la productividad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles en el ámbito agrario". Los objetivos económicos explícitos del mismo eran: la generación de empleo productivo y reducción de la pobreza rural; mejorar el ingreso per cápita rural; el incremento de la inversión nacional y externa; el crecimiento de la producción y las exportaciones; la generación de ingresos fiscales; el incremento de la competencia y la calidad, entre otros. En una primera subasta se ofrecían al sector privado 12.580 hectáreas (primera etapa), agregándose luego otros 24.000 hectáreas (CEPRI-Chavimochic, s/f).

El Proyecto Especial Chavimochic incluía una inversión pública realizada (al 31 de diciembre de 1995) de US$ 900 millones (principalmente en infraestructura de riego) y otra pendiente por US$ 537 millones. La inversión privada por realizar era de US$ 280 millones, y el costo total del proyecto ascendía a US$ 1.717 millones. Es interesante destacar que las ofertas mínimas para las subastas debían ser de US$ 800 a US$ 1.800 por hectárea, por concepto de valor de la tierra, más US$ 700 a US$ 1.200 por hectárea, por concepto de inversión a ejecutar en 2 o 3 años. La forma de pago especificaba un 20% al contado y el saldo en 7 años con 2 de gracia, con un interés de Libor + 2% (Instituto Nacional de Desarrollo, 1996).

En 1998, el presidente de la CEPRI, Arturo Woodman, señaló que el gobierno peruano impulsaba la venta de tierras vírgenes de propiedad estatal, las que se encuentran en toda la costa peruana y que en total suman unas 200 mil hectáreas con abundante agua (*El Mercurio*, jueves 20 de agosto de 1998: B4).

Es evidente que hay diversas modalidades de privatización de tierras según los diversos propósitos en juego. Una suerte de 'privatización' menos radical —y con mayor tolerancia política— se traduce en las concesiones. Esta modalidad, bajo la figura de concesiones onerosas, es una de las propuestas como parte de la gestión inmobiliaria del Estado en Chile.

La "Ministra Adriana Delpiano dijo que iniciativa de ley (nuevo sistema de 'concesiones onerosas' tendiente a promover inversiones privadas en bienes fiscales) busca mantener en el patrimonio fiscal terrenos de alto valor, propiciando su desarrollo sustentable (Bienes Nacionales sólo

puede conceder concesiones de uso gratuito por un periodo máximo de cinco años [...])" (*El Mercurio*, jueves 26 de octubre de 1995: C6).

En un comentario editorial referido a la política de terrenos fiscales, *El Mercurio* (martes 2 de abril de 1996: A3) aducía, en relación a la propuesta gubernamental de modificación legal para permitir el traspaso de bienes fiscales a particulares mediante concesión hasta por 30 años, que "un sistema bastante parecido ya fue intentado, por ejemplo en Magallanes a mediados del presente siglo, por la vía de arrendamiento durante 15 años. Se observó que los arrendatarios tendían a actuar en ese plazo con natural criterio de corto plazo [... y que] el deterioro ambiental era mucho mayor en los predios arrendados que en los de dominio privado, (agregando que) los países desarrollados que utilizan la concesión contemplan plazos sustancialmente más largos. Australia, por ejemplo, prevé 99 años de concesión, transmisible a los herederos y asimilada casi enteramente a la propiedad a todos los respectos".

Sin duda la combinación de políticas de venta o privatización y de concesiones confiere a la gestión inmobiliaria estatal un amplio instrumental. La gestión privada de tierras fiscales puede desarrollarse en diversos ámbitos, incluido el de las áreas silvestres protegidas. En efecto, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE, creado por ley en 1984) resguardaba en 1996 casi 15 millones de hectáreas distribuidas en 87 zonas. Al respecto, se señalaba que "la propia CONAF ha contemplado la posibilidad de invitar al sector privado [...] a presentar proyectos de gestión en cinco áreas seleccionadas por su potencial turístico [...] Así cinco parques pasarían a la gestión privada" (*El Mercurio*, sábado 4 de mayo de 1996: A3).

La tendencia a vender o transferir tierras al sector privado ha sido algunas veces precedida, y otras veces acompañada, por la contracorriente de adquisición y acopio de tierras por parte del Estado.

La CEPAL (1986) ha constatado que en América Latina ha habido pocas experiencias significativas en materia de adquisición pública de tierra, y que éstas se han destacado por las características especiales de los problemas urbanos en el subcontinente: la presión social relacionada con el problema de la vivienda, el carácter irregular de los asentamientos urbanos espontáneos y la importancia de la especulación con la tierra.

En relación a lo anterior, un estudio sobre el mercado ilegal de suelos periféricos en Ciudad de México (Castañeda, 1994) afirma que los sectores más empobrecidos de las ciudades tienen como única alternativa de acceder a la vivienda las transacciones ilegales de terrenos ejidales, frente al amplio rezago institucional en materia de vivienda y al desinterés

del sector privado para invertir en la construcción masiva de vivienda popular.

Gómez Navas (1995), refiriéndose a la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU) venezolana, afirma que ésta —en su Título V "Del Régimen Urbanístico de la Propiedad— comienza por desarrollar el principio constitucional que funcionaliza socialmente la propiedad, declarando que "los planes de ordenación urbanística y de desarrollo urbano local delimitan el contenido del derecho de propiedad, quedando éste vinculado al destino fijado por dichos planes" (LOOU, Art. 53). La misma Ley establece la obligatoriedad para las dos autoridades urbanísticas reconocidas legalmente —Ejecutivo Nacional y Municipios— de "constituir reservas públicas de suelos urbanos" (Art. 55) para los diversos fines que describe la norma. El autor concluye que la necesidad de definir una "política nacional de tierras", que fundamentalmente se apoyaba en el dominio público de la misma, nunca llegó a materializarse.

Históricamente la propiedad se constituyó en Venezuela a partir del patrimonio territorial público, proceso que culminó en 1936, fecha desde la cual se entregan documentos que otorgan tenencia y no propiedad (básicamente contratos de arrendamiento por parte de los concejos municipales, títulos supletorios y títulos de 'propiedad' sin autorización de traspaso o hipoteca). Entre 1979 y 1990, la regularización de tenencia gratuita (a favor de pequeños productores) involucró 2,6 millones de hás., mientras que la onerosa (medianos productores) representó 2,2 millones de hás. (Delahaye, 1992).

McAuslan (1992), aludiendo al Programa de Gestión Urbana del Banco Mundial y el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNCHS, Habitat), destaca que los objetivos inmediatos del programa son aumentar la eficacia y la eficiencia de las políticas urbanas, con especial énfasis en tres áreas de focalización: tierra, infraestructura y financiamiento municipal. Respecto de la tierra como componente del programa, el autor destaca —entre otros propósitos— la gestión de los sistemas de información de la tierra pública (catastros, títulos, mapas, etc.).

La experiencia chilena reciente sobre reservas estatales de suelo es comentada por Sabatini (1997) en un estudio relativo a la liberalización de los mercados de suelo en ciudades latinoamericanas. En él se afirma que la más importante de las reservas liquidadas corresponde al banco de tierras creado por el gobierno de Eduardo Frei M. (1964-1970) para los programas estatales de vivienda, especialmente los de renovación urbana.

Posteriormente, el mismo autor, en otra publicación referida a la reforma de los mercados de suelo en Santiago, señalaba textualmente: "En

este trabajo discuto las consecuencias que la temprana y radical liberalización de los mercados urbanos chilenos (1978-1985, aproximadamente) ha tenido en los precios del suelo y en la segregación residencial en Santiago [...] Discutiré resultados de investigación que tienen tintes paradójicos: el alza de los precios del suelo que siguió a la eliminación en 1979 de la norma sobre 'límites urbanos', y la reducción de la escala geográfica de la segregación social provocada por la emergencia de un robusto sector inmobiliario privado en los años ochenta y noventa" (Sabatini, 1998: 1).

Las dos citas anteriores resumen dos políticas de signo contrario —una más estatista, la otra más de mercado— y, lo que es más sorprendente, los efectos inesperados, de "tintes paradójicos", detonados por el cambio de una a la otra. Aunque menos referida a la tierra y más a la vivienda, una recomendación de un Nobel en economía alude a la misma cuestión de fondo.

Garry S. Becker afirma que "aun si la vivienda al alcance de los pobres no se considera aceptable, la vivienda gubernamental no es la mejor solución. Un sistema más efectivo sería darles a los pobres 'vouchers' o vales que los ayuden a conseguir mejores viviendas [...] en el mercado privado. Los 'vouchers' les darían mayor poder de selección sobre donde vivir" (*El Mercurio*, lunes 11 de agosto de 1997: A2). La experiencia chilena reciente en materia de subsidios habitacionales sigue, en cierta medida, esta misma línea de acción.

Luego de revisar diversas políticas y casos como los comentados, y antes de iniciar el análisis estadístico de la gestión inmobiliaria del Estado en los últimos dos decenios, parece pertinente atender brevemente algunas consideraciones sobre el manejo de carteras de bienes raíces o la gestión de portfolios inmobiliarios. Aunque las referencias citadas corresponden a realidades distintas de la chilena y, más aún, aluden al sector privado, no por ello resultan —con las consideraciones necesarias— inaplicables al propósito explícito del Ministerio de Bienes Nacionales de realizar, en el contexto de una economía de mercado, una gestión inmobiliaria del Estado eficiente, tanto más necesaria cuanto mayor sean los activos estatales en bienes raíces.

En un estudio referido a la inversión en bienes raíces, Wiedemer (1994) distingue tres fuentes diferentes de retorno de la inversión: ingresos, apreciación y ganancia de valor. Los ingresos corresponden a flujos de retorno monetario. La apreciación, a un incremento pasivo del valor de una inversión resultante de la carestía e inflación. La ganancia de valor es el incremento activo del valor resultante del *input* de *expertise* de un propieta-

rio o gerente (ej. desarrollo inmobiliario). El incremento activo corresponde a un mayor valor real, mientras que el pasivo a uno sólo nominal.

Gyourko y Keim (1991) señalan —a propósito de lo anterior— que hay diferencias de riesgo y retorno según los diferentes tipos de firmas inmobiliarias (transadas en el New York Stock Exchange y en el American Stock Exchange, NYSE y AMEX). Tales diferencias estarían en parte asociadas al grado de dependencia de la firma inmobiliaria de los flujos de caja por arriendo de edificios existentes. Gyourko y Linneman (1990) afirman a su vez que los flujos de renta de edificios existentes parecen ser más estables que los flujos de caja de las firmas, lo que implicaría que los retornos de la propiedad inmobiliaria podrían no co-variar estrechamente con la bolsa de valores. Por ello recomiendan a los inversionistas institucionales incrementar la participación inmobiliaria en sus portfolios (tradicionalmente inferior al 5%).

Entre los inversionistas institucionales, los Fondos de Inversión Inmobiliaria constituyen un referente interesante de observar. Desde sus inicios, dichos fondos acusaban, en la experiencia chilena, sesgos sectoriales y territoriales en la composición de sus carteras. En términos de demanda, un 75% de los activos inmobiliarios se orientaba al sector empresarial, y sólo un 25% al habitacional. Territorialmente, casi el 90% de las inversiones en bienes raíces se concentraba en la Región Metropolitana y dos tercios de ellas se localizaban en sus comunas de mayores ingresos (Daher, 1995a). Estos Fondos tenían, al 30 de junio de 1997, inversiones por US$ 513,2 millones, y una holgura legal superior a los US$ 2.700 millones por invertir (revista *Capital*, 1997).

Es de especial interés destacar la especialización o diversificación territorial de las carteras inmobiliarias, tanto en términos de riesgo como de retorno de la inversión. Más allá de lo constatado al respecto en las localizaciones de las inversiones de los Fondos inmobiliarios nacionales, es ilustrativo mencionar otros estudios y experiencias.

En la gestión de portfolios, Hensley (1993) verifica que los inversionistas inmobiliarios intentan reducir el riesgo no sólo diversificando por tipos de propiedades, sino también mediante una diversificación regional.

Sanders, Pagliari y Webb (1996) aplican varias técnicas propias del estudio de gestión de portfolios a la gestión de inversiones en bienes raíces, revisando conceptos tales como variación y co-variación de retornos, y riesgos sistemáticos y no sistemáticos.

Brueggemen y Fisher (1993) describen la composición geográfico-regional y funcional del FRC Property Index (Frank Russell Co.) para los Estados Unidos en el cuarto trimestre de 1990. El índice está basado en

información provista por el National Council of Real Estate Investment Fiduciaries, e integrado por 1.453 propiedades avaluadas en 21,9 billones de dólares. La distribución regional de las mismas es: 541 en el Oeste, 336 en el Sur, 298 en el Medio Oeste, y 278 en el Este. Las proporciones de avalúo difieren significativamente: las propiedades del Oeste representan 9,3 billones de dólares; las del Sur, 3,8; las del Medio Oeste, 3,7; y las del Este, 5,1 billones de dólares.

La importancia de una eficiente gestión de portfolios inmobiliarios queda graficada en las fuertes fluctuaciones de valores. Refiriéndose a la capitalización de mercado de las acciones REIT (*Real Estate Investment Trust*), Kostin y Lydon (1994) constatan un crecimiento superior al 118% en 1993, pasando de US$ 11,7 billones en 1992 a US$ 25,6 billones al año siguiente.

No debe olvidarse, asimismo, que una sobrevaloración excesiva de los bienes raíces puede conducir —como de hecho sucedió dramáticamente tanto en los Estados Unidos como en Japón— a fuertes crisis bancarias y financieras que confirmaron inequívocamente la relevancia macroeconómica del sector inmobiliario.

En este contexto cabe plantearse las preguntas a las que se intenta responder en los siguientes capítulos: ¿cuál es la cartera inmobiliaria fiscal en Chile?, ¿cuántas propiedades, de qué tipo, y en qué lugares la conforman?, ¿cómo ha sido la gestión estatal de la propiedad fiscal? Las preguntas no son ni irrelevantes ni puramente académicas: involucran a uno de los mayores activos en manos del Estado y a un gran patrimonio de toda la nación.

III. EL ESTADO TERRATENIENTE

En 1999, la Ministra de Bienes Nacionales señalaba que, de los 757 mil km^2 de superficie continental nacional, 243 mil (32,1%) correspondían a propiedad fiscal, y 514 mil (67,9%) a propiedad privada. Los usos agregados de la superficie fiscal eran los siguientes: 138.700 km^2 (57%) constituían áreas silvestres protegidas; 44.809 km^2 (18,4%) eran territorios disponibles; 25.876 km^2 (10,6%) tenían "otras" destinaciones; 17.615 km^2 (7,5%) correspondían a arriendos, usos gratuitos y usos onerosos; y 16.000 km^2 (6,5%) estaban destinados a las Fuerzas Armadas (Delpiano, 1999).

El Ministerio de Bienes Nacionales (s/f ¿1998? b), en su Memoria de la gestión 1994-1997, indicaba que el patrimonio administrado en todo el país correspondía al 33,4% del territorio chileno continental, con

252.880 km^2. De estos, 143.250 km^2 estaban afectos al Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegidas del Estado, y 13.100 km^2 a las Fuerzas Armadas y Carabineros. El resto, 96.530 km^2, se hallaba bajo administración directa del Ministerio de Bienes Nacionales.

Las diferencias de cifras no hacen sino confirmar la precariedad de la base catastral de los bienes nacionales. No deja de sorprender que en la misma Memoria citada (Ministerio de Bienes Nacionales, s/f ¿1998? b: 36) se anotaba que "en cuanto a estudios catastrales, el año 1996 se decidió complementar estudios anteriores con un diagnóstico de la situación de ocupación y dominio en los terrenos cordilleranos en que no había inscripciones globales a favor del Fisco [...] Así, se identificó una superficie fiscal de 970 mil hectáreas [...]". ¡Casi un millón de hectáreas!

La menor superficie fiscal registrada en 1990, a la que se hace referencia más pormenorizada a continuación, antes que inducir a la suposición de una creciente estatización inmobiliaria, provoca más bien la certeza de que entonces el conocimiento de los haberes fiscales era aún más precario y que el Estado ha ido 'descubriendo' lo que tiene.

1. Stock de propiedades fiscales, urbanas y rurales, por región. Chile, 1990 y 1994

En 1990, la superficie nacional de propiedad fiscal (Cuadro Nº 1) representaba el 28,4% de la superficie continental del país, acusando una alta concentración en las dos regiones más australes (XI y XII) que por sí solas bordeaban el 17%. En contraste, las regiones del Norte Grande (I y II) sumaban un 4,3% del total nacional, mientras las del centro-sur (VII-VIII-IX y X) un 5,4%. El resto de las regiones, correspondientes al Norte Chico (III y IV) y centro (V, R.M. y VI) acumulaban entre todas el 1,8% del total nacional.

En relación a la superficie de cada región, la de propiedad fiscal registraba una participación máxima en la XII Región (53,4%) y una mínima en la IV Región (2,4%). Otras regiones con alta participación fiscal son la XI y la IX (53,3 y 33,1%, respectivamente), y con baja la III y VI (7,2 y 10%). En rangos medios, aunque inferiores al promedio nacional de 28,4%, están las restantes siete regiones del país.

En cifras absolutas y en números redondos, las 20 mil propiedades fiscales registradas en el país suman casi 215 mil kms^2, de los cuales 128 mil pertenecen a las regiones XI y XII, y casi 170 mil a las regiones

localizadas al sur de la Metropolitana, mientras que la propiedad fiscal al norte de esta última sólo bordea los 42 mil kms^2 (Cuadro Nº 1).

El número de propiedades fiscales por región presenta una varianza menor, con un máximo de 2.443 en la R.M. y un mínimo de 774 en la III. Consecuentemente, el tamaño predial medio por región fluctúa entre 62,7 kms^2 (XI Región) y 1,1 kms^2 (IV Región y Metropolitana). En el conjunto del país, dicho indicador alcanza a 10,7 kms^2.

Estas cifras ciertamente varían al desagregar las propiedades fiscales urbanas de las rurales (siempre en el Cuadro Nº 1). Las primeras suman 12.826 con casi 89 millones de m^2, y registran un tamaño predial medio de 1.939 m^2. Las segundas suman 7.257 propiedades con casi 21,5 millones de hás. y, en consecuencia, un tamaño medio de 2.963 hás. Así pues, las propiedades fiscales urbanas, representando cerca del 64% de las propiedades fiscales totales, contribuyen tan sólo con el 0,0004% (89 kms^2) de la superficie fiscal nacional.

Según el Servicio de Impuestos Internos, los predios totales agrícolas al 1º de julio de 1993 eran 498.028, y los no agrícolas 2.554.540, lo que sumaba un total general de 3.052.568 predios enrolados —incluidos los exentos— (Daher, 1995 b). En consecuencia, los predios fiscales urbanos —obviada la diferencia de fechas— equivalían al 0,005% de los registrados por el Servicio, mientras que los rurales al 0,014%, haciendo evidente un sesgo en la cartera inmobiliaria estatal.

La distribución regional de la propiedad fiscal urbana muestra una concentración mayor en la R.M. (2.068 propiedades) y un número menor (509) en la III. En superficie, las regiones VII, VIII, II y V, en ese orden, concentran más del 60% del total fiscal urbano. Los tamaños prediales medios varían entre 21 mil m^2 en la VII Región y sólo 220 m^2 en la Región Metropolitana.

La propiedad fiscal rural registra su mayor número en la X Región (1.020) y su menor en la IV (217). En términos de superficie, dado que ella representa casi el 100% del área fiscal total, la distribución regional rural y total son análogas.

La superficie de propiedad fiscal en Chile puede compararse, guardando las proporciones, con la de otros países.

Sobre la base de datos de 1989 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Dasso, Schilling y Ring (1995) señalan la siguiente distribución de la tierra en ese país (en millones de acres[4]): propiedad privada, 1.380 (60,93%); propiedad pública, 885 (39,07%). Esta última se desagrega

[4] Un acre = 0,4046 hectáreas. Una hectárea = 2,4710 acres.

en tierra federal, 730 (32,23%); y tierra estatal y local, 155 (6,84%). El área total es de 2.265 millones de acres.

La National Geographic Society (1996) constata, por su parte, que el dominio federal cubre un tercio de los Estados Unidos, con más de 700 millones de acres, recordando que, hasta 1890, el gobierno federal había entregado o vendido cerca de un billón de acres.

Un detalle más pormenorizado, según la misma fuente, se expresa en las siguientes magnitudes: tierras del Bureau of Land Management, 270 millones de acres (un octavo de la superficie del país); 155 bosques nacionales con casi 200 millones de acres; 500 reservas nacionales de vida silvestre con cerca de 90 millones de acres; 300 reservas indígenas con 55 millones de acres; 54 parques nacionales con 51 millones de acres; tierras militares, 27 millones de acres; reservas nacionales, 24 millones de acres; 20 praderas nacionales con 4 millones de acres; y 50 sitios de investigación energética (reactores nucleares, reservas petroleras...) con 2,4 millones de acres. Entre otras entidades de gobierno, la administración de estos dominios federales queda mayoritariamente radicada en los Departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Energía e Interior.

La distribución geográfica del dominio federal evidencia una alta concentración en determinados estados: el 83% de Nevada —la mayor proporción de cualquier estado— es de administración federal. También un tercio de Montana está bajo el mismo régimen (National Geographic Society, 1996).

Patrick Shea (1999) exponía bajo el sugerente rótulo ‘Public West, Private East’, que en tanto el porcentaje de propiedad pública en cada estado del este de los EE.UU. fluctúa entre un 0,2% y un 12,6%, en el oeste varía entre un 28,3% y un 82,9%. Las cifras —que confirman el rótulo— muestran una clara y radical dualidad en la geografía de la propiedad pública en los EE.UU.

Otra realidad nacional ilustrativa, precisamente por su disimilitud cuantitativa y cualitativa, es la de Nicaragua.

Un estudio sobre la gestión de la tierra urbana pública en Managua durante el gobierno sandinista (Morales y Lungo, 1991) registra —teniendo como fuente al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MINVAH)— un patrimonio inmobiliario estatal, a julio de 1979, de 5.778 propiedades con 562 hás. (6% del área urbana) en la ciudad de Managua. Las confiscaciones del gobierno sandinista agregaron en 1980 otras 7.800 propiedades, con más de 653 hás., a ese patrimonio. En 1989, la propiedad estatal urbana en Managua ascendía a 2.191 hás., superficie que equivalía

al 25% del área urbana total de la capital. En igual periodo (1979-1989) el área privada se reducía del 73 al 54%.

Retomando el caso chileno, es interesante observar las variaciones registradas en el catastro de propiedades fiscales entre 1990 y 1994.

En 1994, mediando una nueva administración gubernamental, el número de propiedades fiscales urbanas era prácticamente igual al de 1990, aunque su superficie total era casi un 6% menor (Cuadro Nº 1). En las propiedades rurales, en cambio, el número se reduce en más del 22% —1.599 propiedades— aunque la superficie baja sólo del orden del 1%.

Las regiones que más reducen su superficie urbana fiscal son las del norte del país: III (–42%), IV (–19%), I (–15%) y II (–9%), seguidas por las del centro-sur: X (–11%), IX (–8%) y VIII (–7%). La Región Metropolitana es la única con un incremento sustantivo: 105 mil m^2 equivalentes a +23%, triplicándose a la vez el número de propiedades[5].

En el medio rural, la distribución regional de la disminución del número de propiedades fiscales es relativamente análoga a la observada en las áreas urbanas. De hecho, entre 1990 y 1994, las regiones con mayor reducción son la II (–61%), IV (–29%), I (–24%) y III (–19%), todas del área norte, y en el centro-sur la X (–55%) y la VIII (–20%), agregándose la austral XI (–19%). Esta similitud induce a suponer que la gestión inmobiliaria del Estado, a nivel ministerial y probablemente más aún a nivel de gobiernos regionales, es la variable explicativa.

La información relativa a los catastros de propiedades fiscales de 1990 y 1994 puede complementarse —y a la vez especificarse— con la contenida en un catastro de la edificación pública correspondiente también al año 1994.

Según el Catastro de Edificación Pública elaborado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP, 1994), la superficie de los sitios ocupados por el sector público era de 50,4 millones de m^2 correspondientes a 5.805 sitios.

Según el mismo Catastro, la superficie construida de propiedad pública —sin incluir los establecimientos educacionales ni los inmuebles de la Defensa Nacional— era de 5,5 millones de m^2, y la superficie construida ocupada por organismos públicos era de 4,8 millones de m^2.

Más específicamente, el conjunto de las Municipalidades del país ocupaba 1,5 millones de m^2, y entre los organismos públicos destacaba el

[5] El incremento de 2.068 a 5.984 propiedades urbanas en la R.M. (Cuadro Nº 1) no es consistente con las demás estadísticas (Véase Adquisiciones).

Ministerio de Salud con la mayor superficie construida ocupada: 1,1 millón de m^2.

En orden decreciente, el Ministerio de Justicia ocupaba 0,38 millón de m^2; el de Educación, 0,23; el de Obras Públicas, 0,21; el de Hacienda, 0,19; el del Trabajo, 0,15; y el Poder Judicial, 0,12 millón de m^2. Seguían, a continuación, siete organismos con superficies entre 0,10 y 0,05 millón de m^2, y luego otros once organismos con superficies menores a 0,05 millón de m^2 cada uno (MOP, 1994).

De los 5.805 sitios ocupados por el fisco a nivel nacional, 4.793 —con una superficie de 35,4 millones de m^2— estaban edificados, y 1.012 sitios —con 14,7 millones de m^2— no lo estaban a la fecha del catastro. Estos últimos, equivalentes al 29,2% de los 50,4 millones de m^2 ocupados por el fisco, correspondían en un 63,5% a sitios con usos diversos (canchas, cementerios y otros totalizando 564 sitios y 9,4 millones de m^2); en un 24,9% a sitios urbanos sin uso (276 sitios con 3,7 millones de m^2); y en un 11,5% a sitios rurales sin uso (172 sitios con 1,7 millones de m^2).

Los 5.633 sitios urbanos ocupados por el fisco representaban el 43,9% de las 12.824 propiedades fiscales urbanas catastradas en 1994, y sus 48,7 millones de m^2, equivalían, a su vez, al 58,1% de los 83,8 millones de m^2 de propiedad fiscal urbana en igual fecha. Complementariamente, los 172 sitios rurales ocupados por el fisco correspondían al 3% de las 5.658 propiedades fiscales rurales del mismo catastro, y su superficie de 170 hás. resultaba muy marginal frente a las 21,2 millones de hás. registradas en el haber del fisco (Cuadro Nº 1).

La distribución regional de la superficie construida de propiedad pública (5,54 millones de m^2) era, según el mismo catastro y en orden decreciente, la siguiente: Región Metropolitana, 1,93 millones de m^2 (35%); V Región, 0,58 millones de m^2 (10,5%); VII Región, 0,54 millones de m^2 (9,8%); X Región, 0,42 millones de m^2 (7,6%); VII Región, 0,40 millones de m^2 (7,3%); IX Región, 0,39 millones de m^2 (7,1%); VI Región, 0,38 millones de m^2 (6,9%); IV Región, 0,29 millones de m^2 (5,3%); I Región, 0,23 millones de m^2 (4,2%); II Región, 0,14 millones de m^2 (2,5%); III Región, 0,11 millones de m^2 (2%); XII Región, 0,08 millones de m^2 (1,4%); y XI Región, 0,04 millones de m^2 (0,7%).

Hasta aquí las estadísticas más agregadas relativas a la cartera de bienes raíces del fisco. En la siguiente sección se continúa con un análisis más específico sobre la misma, necesario como antesala a la posterior evaluación de la gestión inmobiliaria de Bienes Nacionales.

2. Cartera de propiedades fiscales administradas, con información provisoria y afectas a reserva, 1990

El stock de propiedades fiscales urbanas y rurales a 1990 puede desagregarse, según su tenencia, en propiedades administradas, con información provisoria y afectas a alguna reserva (Cuadros Nº 1.1 y 1.2).

Las propiedades urbanas administradas sumaban 9.062 con 66,7 millones de m^2, representando un 70,6% del total de propiedades fiscales urbanas y un 75% de su superficie. El mayor número de ellas se localizaba en la I Región (1.084) y el menor (443) en la VI, aunque la mayor superficie correspondía a la II Región (12 millones de m^2)[6] y la menor a la Metropolitana (0,32 millones).

Las propiedades rurales administradas alcanzaban a 4.423 (60,9% del total de propiedades fiscales rurales). La carencia de información confiable de superficie para las regiones X y XI —la disponible no es consistente con el stock a igual fecha— impide sacar conclusiones para el total nacional. Excluidas dichas regiones, la mayor superficie fiscal rural se registra en la XII Región (4,1 millones de hás.), aunque el mayor número de propiedades corresponde a la IX Región (789). En el otro extremo, la menor superficie se verifica en la V Región (0,05 millones de hás.) y el menor número en la IV Región (161). Un caso singular es el de la II Región, que registra un segundo lugar tanto en número (673) como en superficie (2,2 millones de hás.).

Las propiedades urbanas con información provisoria en 1990 eran 3.762 (29,3% del total de propiedades fiscales urbanas) con 21,4 millones de m^2 (24% del total). Curiosamente la R.M. registra el mayor número (1.110) y la XII el menor (22). La VII Región destaca con la mayor superficie (8,7 millones de m^2) y la III con la menor (0,05 millones).

Las propiedades rurales con información provisoria sumaban 2.780 (38,3% del total de propiedades rurales fiscales), constatándose números extremos en la X Región (707) y en la III (9). En superficie, excluidas las regiones X y XI por los motivos señalados, las mismas regiones anotan las cantidades polares: X (0,8 millones de hás.) y III Región (con sólo 12 hectáreas).

En fin, en cuanto a las propiedades urbanas afectas a alguna reserva, sólo se registran dos, una en la IV Región y otra en la IX, totalizando 0,76

[6] Es decir, 1.200 hás., que dado el tamaño de los centros urbanos de esa región, es una superficie muy importante.

millones de m^2. En las propiedades rurales el número sube a 62 (0,8% del total fiscal rural), concentrado entre las regiones IX y XII, con 51 propiedades. En superficie —excluidas las regiones X y XI— destaca la XII Región, con 2,9 millones de hás. En contraste, las regiones I, R.M., VI y VII no registran propiedades fiscales afectas a alguna reserva.

En síntesis, el análisis de la información incluida en los Cuadros Nº 1.1 y 1.2 permite concluir que, tanto en número de propiedades como en superficie, la gestión estatal aparece concentrada en las denominadas propiedades administradas. No obstante esto, llama la atención la alta participación de las propiedades rurales, y sobre todo urbanas, e incluso metropolitanas, con información provisoria. En términos geográficos, si bien ciertamente persiste el sesgo a los extremos norte y austral, hay excepciones descritas que escapan a la regla general.

La información relativa a las propiedades fiscales urbanas y rurales administradas, con información provisoria y afectas a alguna reserva se desagrega, en cada caso, de manera específica. Así, las propiedades administradas se clasifican en nueve variables: destinación, arrendamiento, uso gratuito, uso oneroso, radicación, entrega provisoria, usufructo, afectación y sin ocupación[7] (Cuadros Nº 1.1.1 y 1.2.1).

De las propiedades urbanas administradas (9.062 en todo el país) el 64% se clasifica bajo destinación; el 12,5% en arrendamiento; el 10,3% —la tercera cifra más alta, con 935 propiedades— sin ocupación; el 7,8% en uso gratuito; el 1,9% en uso oneroso; el 1,8% en entrega provisoria; el 0,8% en radicación; el 0,5% en afectación y el 0,3% en usufructo.

En cuanto a las superficies involucradas, destacan especialmente las de destinación, 77,7% de los 97,7 millones de m^2 urbanos administrados; sin ocupación, la segunda mayor superficie, con 10,1 millones de m^2 y 10,3% del total; y uso gratuito, con 8 millones de m^2 y 8,2% de participación en la sumatoria nacional.

---

[7] Destinación: asignación de uno o más bienes fiscales a una institución del Estado, para que lo utilice para sus fines propios (Art. 56 del D.L. Nº 1.939 de 1977). Arrendamiento: contrato oneroso y conmutativo en que una de las partes se obliga a conceder el goce de una cosa, y la otra a pagar por este goce (Título III, Párrafo III del D.L. Nº 1.939 y art. 1.915 del Código Civil). Concesiones de uso, onerosas por regla general y gratuitas sólo por excepción autorizada por decreto y fundada (Art. 57 del D.L. Nº 1.939). Radicación: corresponde a una etapa de transición previa a la entrega de título de la propiedad (todavía fiscal). Entrega provisoria: acto por el cual se hace una entrega provisoria por un tiempo determinado de un bien fiscal a un particular, en espera de la perfección del acto definitivo (arriendo, venta, etc.) Usufructo: derecho de uso de una propiedad cedido a favor de un tercero. Afectación: sujeción de un bien al uso público por resolución de la autoridad (Art. 64 del D.L. Nº 1.939).

En términos regionales, y en las mismas tres categorías de mayor significación, sobresalen los 30,3 millones de m^2 bajo destinación en la Región Metropolitana, cifra que representa casi el 40% del total nacional; el segundo lugar corresponde a la VIII Región, con 7,7 millones de m^2 y un 10,1% de la superficie bajo destinación. Al contrario, cuatro regiones —III, IV, VI y X— exhiben los índices más bajos, con sólo un 7% en conjunto. En las propiedades sin ocupación, las regiones que tienen mayor superficie son la XI, II, VII y IX, con 25,7; 20,3; 15,8 y 12,7%, respectivamente. Las menores cifras se registran en la I Región (0%) y en la Metropolitana (0,7%). En fin, en la categoría uso gratuito las regiones II, V y Metropolitana muestran una mayor participación —36,2; 23,1 y 15,7%, respectivamente—, mientras que las regiones IV, VI y XII en conjunto sólo concentran el 1,5% del total nacional.

Las 4.424 propiedades fiscales rurales administradas (Cuadro Nº 1.2.1) se distribuyen porcentualmente en los términos siguientes: 37,7% bajo destinación; 30,4% sin ocupación; 22,7% en arrendamiento; 4,5% en uso gratuito; 2,8% en radicación; 0,7% en entrega provisoria; 0,5% en usufructo; 0,4% en uso oneroso y 0,3% en afectación. Comparativamente con las propiedades urbanas, la menor participación de la clasificación en destinación contrasta con la muy alta incidencia de las propiedades rurales sin ocupación y con la relativamente mayor participación de las propiedades en arrendamiento.

En materia de superficies (con la advertencia ya hecha), la mayor concentración corresponde a la clasificación sin ocupación (32% de los 10,6 millones de hás. rurales administradas) seguida de las categorías destinación (24,5%), uso gratuito (22,4%) y en arrendamiento (10,2%).

La distribución regional de la superficie fiscal rural sin ocupación se concentra fuertemente en la XII Región (2,5 millones de hás. con más del 72% del total), mientras que las regiones I y Metropolitana no registran superficie alguna en esa condición. La superficie bajo destinación se distribuye menos polarizadamente, destacando con alta participación las regiones II, XII, VIII y I —27,4; 19,7; 14,5 y 13,9%, en el mismo orden—, y con baja las regiones V, IV y IX —0,6; 0,7 y 0,9%, respectivamente.

En uso gratuito, dos regiones tienen las mayores superficies: la II (62,6%) y la IX (30,1%). En contraposición, las regiones XI, VI, R.M. y IV juntas sólo concentran el 0,03%. Similar polarización se registra en las superficies regionales bajo arrendamiento, donde la XII Región concentra el 89,7% en tanto que las regiones VIII, VII, R.M. y V, en conjunto, apenas representan el 0,07%.

Las propiedades urbanas y rurales con información provisoria se clasifican según cuatro variables: mera ocupación, tenencia irregular pública, tenencia irregular privada y sin información[8].

De las propiedades fiscales urbanas con información provisoria (3.760 en el país), el 57% se registra bajo tenencia irregular pública; el 28%, sin información; el 8,7% en mera ocupación y el 6,4% bajo tenencia irregular privada. En términos de superficies involucradas, de los 21,4 millones de m^2, el 81,1% corresponde a tenencia irregular pública; el 12,5% a la clasificación sin información; el 4,7% a tenencia irregular privada y el 1,8% a mera ocupación.

Regionalmente, de los 17,3 millones de m^2 bajo tenencia irregular pública las regiones VII, V y VIII registran el 48; 19,8 y 11,1%, respectivamente. De los casi 2,7 millones de m^2 sin información, el 59,5% se concentra en la VIII Región. Del millón de m^2 bajo tenencia irregular privada, las regiones V y VII representan el 63 y el 21% respectivamente. Por último, de los cerca de 0,4 millones de m^2 bajo mera ocupación, la VIII Región registra el 42,5%.

Las propiedades fiscales rurales con información provisoria (2.780 en total) se distribuyen de la siguientes forma: 54,5% bajo tenencia irregular pública, representando el 40,9% de la superficie rural total con información provisoria (1,8 millones de hás.); 27% sin información, con el 34,1% de la superficie; 17,5% en mera ocupación, con el 20,8% del área; y 1% bajo tenencia irregular privada, con el 4,1% de la superficie total. Como puede observarse, las dos primeras clasificaciones representan cifras relativas equivalentes a las de las propiedades urbanas en similar clasificación. Difieren, sin embargo, en el orden de magnitud de las superficies involucradas: la correspondiente a tenencia irregular pública cambia del 81% urbano a sólo el 40,9% rural; y la contabilizada sin información sube del 12,5% urbano al 34% rural.

Las regiones que acusan mayores superficies rurales bajo tenencia irregular pública son la X y la V, con un 55,9 y un 17,3%. En el extremo opuesto, regiones como la II, III y XI tienen un registro casi insignificante. De las propiedades fiscales rurales sin información, las regiones VII, Metropolitana y X concentran, en el mismo orden, el 32,3; 22,9 y 18% de la superficie total (0,62 millones de hás.) en esa clasificación. Por el contra-

[8] Mera ocupación: propiedad sin condición de arrendamiento y sin regularización de su situación de tenencia. Tenencia irregular pública: propiedades ocupadas por entidades estatales sin documento de asignación. Tenencia irregular privada: propiedades ocupadas por personas jurídicas de derecho privado sin documento de asignación. Sin información: propiedades con asignación o disponibilidad desconocida.

rio, las regiones II, III, VI, IX y XII tienen una participación nula o muy marginal. Por último, de la superficie fiscal rural bajo mera ocupación (0,38 millones de hás.), la X Región registra ella sola un 64%, mientras que la participación de las regiones II, III V, R.M. y IX es muy menor (Téngase presente, una vez más, que las superficies rurales para las regiones X y XI, en cada categoría, corresponden a cifras no confiables).

La última clasificación según tenencia corresponde a las propiedades fiscales urbanas y rurales afectas a alguna reserva (Cuadros Nº 1.1 y 1.2). Las primeras se desagregan en parques nacionales y reserva forestal, mientras que las segundas agregan a las dos categorías anteriores la de reserva nacional (Cuadros Nº 1.1.3 y 1.2.3)[9].

Las propiedades urbanas afectas a la condición de parque nacional son sólo dos, en la IV y XI regiones, correspondiendo a esta última una superficie de 755 mil de los 760 mil m^2 totales. No hay propiedades urbanas afectas a reserva forestal.

De las 62 propiedades fiscales rurales afectas a alguna reserva, 28 con 2,3 millones de hás. están bajo la categoría de parque nacional; 33 con 1,6 millones de hás. están afectas a reserva forestal; y 1 propiedad en la IV Región con algo más de 4 mil hás. está catalogada como reserva nacional.

Las mayores superficies de parques nacionales corresponden a las regiones XII (72,4%) y X (19,6%), en tanto que las regiones I, IV, R.M., VI y VII no tienen parques nacionales. En cuanto a las áreas bajo reserva forestal, la XII Región concentra el 78%, seguida por la X con el 9,5%. Las regiones del norte y centro del país, con la excepción de la V, no registran propiedades afectas a esta reserva (Recuérdese que las superficies rurales de las regiones X y XI no son consistentes.)

Información reciente proporcionada por el Ministerio de Bienes Nacionales (s/f ¿1998? b) registra 92 propiedades afectas a reserva: 32 parques nacionales con 8,8 millones de hás.; 47 reservas nacionales con 5,5

[9] La Ley Nº 18.362, que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (*Diario Oficial* Nº 32.056 de 27 de diciembre de 1984), define en su Título II cuatro categorías de manejo: Reserva de Región Virgen, área donde existen condiciones primitivas naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el tráfico de vehículos motorizados, y vedada a toda explotación comercial (art. 4º). Parque Nacional, área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse, y en que las especies de flora y fauna o las formaciones geológicas son de especial interés educacional, científico o recreativo (art. 5º). Monumento Natural, área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural, educativo o científico (art. 6º). Reserva Natural, área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad (art. 7º).

millones de hás.; y 13 Monumentos Nacionales con algo más de 17 mil hás., totalizando así 14,3 millones de hás[10].

Entre los parques nacionales, tres sobresalen por su superficie: el Bernardo O'Higgins (regiones XI-XII) con 3,5 millones de hás.; la Laguna San Rafael (XI Región) con 1,7 millones de hás., y el Parque Alberto de Agostini (XII Región), con 1,5 millones de hás. En conjunto representan el 76,1% del área total de parques nacionales.

A su vez, las mayores reservas nacionales son dos: Alacalufes (XII Región), con 2,3 millones de hás., y Las Guaitecas (XI Región), con 1,1 millón de hás. Ambas concentran casi el 62% del área total de reservas nacionales.

Por último, los monumentos nacionales de mayor superficie son tres: el Salar de Surire (I Región) con 11,3 miles de hás.; El Morado (R.M.) con 3 mil hás.; y Alerce Costero (X Región) con 2,3 miles de hás. En conjunto representan el 94% de la superficie total en dicha categoría.

Más allá de algunas diferencias estadísticas o de ciertas inconsistencias en algunas informaciones, queda claro que el orden de magnitud y la complejidad de la cartera inmobiliaria fiscal requieren de una gestión estatal altamente calificada y eficiente.

Una evaluación de esa gestión desde 1979 a 1997, cubriendo casi tres gobiernos distintos, es el propósito de las próximas páginas.

IV. EL ESTADO, EMPRESARIO INMOBILIARIO (CHILE, 1979-1997)

Concluido el análisis de stock, corresponde ahora el de flujos o movimientos en la cartera inmobiliaria del Estado: adquisición, disposición y administración de bienes raíces y, finalmente, ingresos monetarios generados. Este análisis se hará a partir de series estadísticas que cubren desde 1979 a 1997 —19 años, correspondientes prácticamente a tres gobiernos, en los cuales se implementa y consolida el nuevo modelo económico chilen. Excepcionalmente, las series de adquisición se inician en 1981, cubriendo dos años menos.

1. Adquisiciones fiscales: herencias, desafectaciones, expropiaciones y compras, donaciones y traspasos

Primeramente se revisará la adquisición de bienes raíces urbanos y rurales por parte del Estado, desagregada según se trate de a) herencias,

[10] Cifra muy superior a las 3,9 millones de hás. registradas en 1990 (Cuadros Nº 1.1.3 y 1.2.3) y que representaría dos tercios de la superficie fiscal rural del país.

b) del artículo 590 del Código Civil y desafectaciones, c) de expropiaciones y compras directas, y d) de donaciones y traspasos[11].

La adquisición por concepto de herencias urbanas en el periodo 1981-1997 (Cuadro Nº 2.1) equivale a 455 propiedades con un total de 200.034 m^2. El promedio anual es de 26,8 propiedades con 11.767 m^2. En número de herencias, los años con cifras más altas son 1989 (45), 1992 (42) y 1988 (40). Las mayores superficies anuales heredadas se registran en los años 1992 (25.283 m^2), 1982 (20.914 m^2) y 1989 (20.050 m^2). 1996 es el año con menor número de herencias (15) y 1995 el con menor superficie heredada (4.127 m^2).

Tratándose de propiedades urbanas, la mayor participación de la Región Metropolitana no sorprende: 251 propiedades (55,2%) con 99.933 m^2 (50%). La V Región registra a su vez 82 herencias (18%) con 27.450 m^2 (22,7%), y la VIII sólo 16 (3,5%) con 6.029 m^2 (3%), quedando en evidencia, en este último caso, una desproporción frente a su población urbana. Regiones como la I, III, IX XI y XII presentan registros nulos o muy bajos.

Las adquisiciones de propiedades urbanas por el art. 590 y desafectaciones totalizaron 329 bienes raíces con 1,15 millón de m^2. La media anual en el periodo 1981-97 es de 19,3 propiedades con 67.614 m^2. (Cuadro Nº 2.2). Los años con mayor número de adquisiciones por este concepto corresponden a 1991 (38) y 1981 (33), en tanto que 1997 (2), 1996 (8) y 1995 (8) registran las cifras menores (téngase presente que la información de los últimos años, y sobre todo de 1997, puede estar incompleta). En superficies, los años con mayores cifras son 1994 (138.635 m^2), 1987 (131.208 m^2) y 1985 (128.236 m^2) y, en el otro extremo, 1997 (4.522 m^2), 1996 (5.174 m^2) y 1993 (11.178 m^2) son las fechas con cifras menores.

Las regiones con mayores superficies adquiridas en esta clasificación son la V: 71 propiedades (21,6%) con 410.955 m^2 (35,7%); la VIII, 63 (19,1%) con 290.198 m^2 (25,2%) y la VI, 111 propiedades (33,7%) y 136.799 m^2 (11,9%). La Región Metropolitana sorprende con sólo 4 pro-

[11] Herencias: sucesión por causa de muerte y denuncias de herencias. Incluye herencias vacantes a falta de otros sucesores, herencias yacentes o no aceptadas y testamentos voluntarios de la cuarta parte de libre disposición a favor del fisco (Título II, Párrafo IV del D.L. 1.939 de 1977 y art. 995 del Código Civil). Desafectaciones: los bienes nacionales de uso público sólo se desafectan por ley. Al contrario, la afectación es la sujeción de un bien al uso público (Art. 19, Nº 23 y 24 de la Constitución Política y art. 64 del D.L. Nº 1.939). Expropiación: sólo puede verificarse por causa de utilidad pública y en interés nacional con la debida indemnización (Art. 19 Nº 24 de la Constitución Política y art. 41 del D.L. Nº 1.939). Compra: cualquier compra de bienes raíces que efectúe el fisco deberá ser verificada por medio del Ministerio de Bienes Nacionales (Art. 29 del D.L. Nº 1.939). Donaciones: cualquier persona puede donar al fisco. Las instituciones y empresas del Estado también están autorizadas para así hacerlo (Artículos 36, 37 y 38 del D.L. Nº 1.939).

piedades (1,2%) y 52.380 m^2 (4,6%). Las regiones geográficamente extremas del país (I, II y III, en el norte, y XI y XII en el área austral) prácticamente no registran adquisiciones por el art. 590 y desafectaciones.

La adquisición de propiedades urbanas mediante expropiaciones y compras directas involucró 1.300 bienes raíces con 2,83 millones de m^2 (Cuadro Nº 2.3). Entre 1981 y 1997, el promedio anual de adquisiciones por este concepto fue de 76,5 propiedades y 166.508 m^2. El año 1985 tiene, con mucho, el mayor número de expropiaciones y compras directas: 556 (42,8% del periodo), mientras que a partir de los noventa las cifras caen radicalmente. En efecto, entre 1981 y 1989 el promedio anual fue de 135,7 propiedades, en tanto que entre 1990 y 1997 la media cae a sólo 9,9. En superficies, en los mismos periodos los promedios anuales fueron 297,5 mil m^2 y 1,9 mil m^2, respectivamente.

Tres regiones exhiben una participación destacada en las superficies urbanas expropiadas o compradas directamente: la V, con 1,71 millón de m^2 (60,4%); la X Región, con 0,48 millón de m^2 (17%); y la VII, con 0,31 millón de m^2 (11%). Entre las tres totalizan más del 88% de las adquisiciones por dicha vía. Nuevamente las regiones geográficamente extremas nortinas (I y II) y australes (XI y XII) registran una participación nula o marginal. Lo que sin duda asombra, tratándose de propiedades urbanas, es la bajísima participación de la VIII Región, con apenas 14 mil m^2 (0,5%), y más aún, de la propia Región Metropolitana, con 644 m^2 en 17 años y un increíble 0,02%. Una vez más las cifras acusan desproporciones que inducen a la presunción de errores u omisiones mayores en la información disponible.

La adquisición de propiedades urbanas como consecuencia de donaciones y traspasos totalizó 821 bienes raíces entre 1981 y 1997, con un promedio de 48,3 al año. Aun cuando el promedio hasta 1989 era muy superior al de los años 90 (71,4 versus 22,2), las superficies involucradas son superiores en estos últimos años (1,92 millón de m^2 versus 1,62 millón de m^2) (Cuadro Nº 2.4).

Territorialmente, las donaciones y traspasos acusan una importante concentración en la zona central del país: la V Región registra 1,18 millón de m^2 (33,4%); la VI Región 0,71 millón de m^2 (20,1%); y la R.M. 0,62 millón de m^2 (17,4%). En conjunto, las tres regiones contiguas totalizan cerca del 71% y, si se adiciona la participación de las regiones del centro sur, VII, VIII y IX, se llega a casi el 94% del total nacional. Obviamente, este porcentaje indica que las otras siete regiones contribuyeron en muy menor medida al incremento de los bienes raíces fiscales urbanos.

Al analizar comparativamente las diversas vías de adquisición de propiedades urbanas que incrementaron los bienes nacionales entre 1981 y 1997, se constata que, del total de 2.905 propiedades adquiridas en el periodo, las expropiaciones y compras directas contribuyeron con el 44,8% (1.300), las donaciones y traspasos con el 28,3% (829), las herencias aportaron el 15,7% (455) y las desafectaciones y el art. 590, el 11,3% (329).

Sin embargo, en materia de superficie, las contribuciones difieren sensiblemente. En efecto, las donaciones y traspasos representan el 45,9% (3,54 millones de m^2), las expropiaciones y compras directas, el 36,7% (2,83 millones de m^2), el art. 590 y las desafectaciones, el 14,9% (1,15 millón de m^2), y las herencias el 2,6% (0,20 millón de m^2). En conjunto, las cuatro vías totalizaron 7,72 millones de m^2.

Las 2.905 propiedades urbanas adquiridas en el periodo equivalen a un 22,6% del stock de propiedades fiscales urbanas en 1990. A su vez, la superficie adquirida representa un 8,7% de la registrada en 1990 (89 millones de m^2). Considerando el aporte total —mediante las cuatro vías—, las regiones que mayormente contribuyeron al incremento de la superficie fiscal urbana fueron la V (3,33 millones de m^2 y 43,1% del total nacional); la VI (0,85 millón de m^2 y 11%); y la Región Metropolitana (0,62 millón de m^2 y 8%). Las tres regiones centrales del país aportaron en conjunto 4,8 millones de m^2, casi dos tercios del total de la superficie urbana adquirida por el fisco en el periodo. Es significativa la primacía de la V Región y sobre todo de la VI —con una área y población urbanas claramente menores— por sobre la Metropolitana.

La adquisición de propiedades rurales en el período 1981-1997 sumó 3.143 bienes raíces, equivalentes al 43,3% del stock fiscal rural en 1990. La superficie total adquirida —410.510 hás.— representó, a su vez, sólo el 1,9% de la registrada en 1990 (21,46 millones de hás.) (Cuadros Nº 1, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8)

Una desagregación de estas adquisiciones permite constatar que, en número de propiedades, las expropiaciones y compras directas contribuyeron con el 58,4% (1.837); las donaciones y traspasos con el 19,8% (623); las desafectaciones y el art. 590 con una proporción similar, 19,3% (608); y finalmente las herencias, con 2,4% (75).

La desagregación por superficie evidencia una distribución diferente: por la vía del art. 590 y desafectaciones se adquirió el 64,4% de la superficie adicional (264.412 hás.); las donaciones y traspasos representaron el 23,3% (95.559 hás.); las expropiaciones y compras directas —que tuvieron la mayor incidencia en el incremento del número de propiedades— con sólo el 11,3% (46.492 hás.); y, por último, las herencias, con casi el 1% (4.047 hás.).

Las 3.143 propiedades rurales adquiridas entre 1981 y 1997 se comparan con la adquisición de 2.905 propiedades urbanas en igual periodo. Esta relativa similitud no hace comparable, obviamente, las superficies involucradas. Sin embargo, lo que sí es pertinente es establecer la proporción de superficies adquiridas, tanto urbanas como rurales, con los respectivos stocks a 1990: las primeras representaron el 8,7% del stock, mientras que las segundas sólo el 1,9%.

Las herencias rurales en el periodo 1981-1987 sumaron 75 propiedades, totalizando 4.047 hás. Las mayores superficies se registran en los años 1997 (1.859 hás.), 1988 (1.246 hás.) y 1991 (427 hás.). Estos tres años acumulan el 87,3% de la superficie del periodo. Al contrario, los años con participación nula o marginal fueron 1981, 1982, 1990, 1994 y 1996 (Cuadro Nº 2.5).

Las regiones con mayores aportes por este concepto fueron la XII (1.859 hás.), la X (1.440), y la VII (545), concentrando en conjunto casi el 95% de la superficie total heredada. Ciertamente, el resto de las regiones contribuye marginalmente.

La adquisición de bienes raíces rurales a través del art. 590 y desafectaciones (Cuadro Nº 2.6) sumó, en el periodo de análisis, 608 propiedades: 175 entre 1981 y 1989, con una media anual de 19,4, y 433 entre 1990 y 1997, con un promedio anual de 54,1. En superficies adquiridas, esta proporción se invierte: en efecto, mientras que en los 80 el incremento es de 264,215 hás., en los noventa apenas es de 197 hás. Estas notables diferencias están asociadas a las altas adquisiciones de superficie registradas puntualmente en pocos años: 1986, 1981 y 1988. En conjunto, en ellos se acumula más del 99% del incremento del área y, sólo en 1986, se registra el 84,7%.

Territorialmente, la concentración es también altísima. De hecho, la X Región por sí sola contribuye con 226.823 hás., es decir con el 85,8% del total nacional. Obviamente tal contribución se registra, casi en su totalidad, en 1986, con más de 224.000 hás. Una situación más o menos análoga, aunque en muy menor escala, se verifica en 1981 con la IX Región (26.923 hás., con el 10,2% del total). En las demás regiones y en el resto de los años no hay aportes significativos, salvo el de la VIII Región en 1988 (9.307 hás., con el 3,5%). Así pues, esta vía de adquisición acusa un doble sesgo concentrador: en lo territorial y en lo temporal.

Las expropiaciones y compras directas involucraron un total de 1.837 propiedades rurales con una superficie agregada de 46.492 hás. Si bien en los periodos 1981-1989 y 1990-1997 el promedio anual de adquisiciones por tales conceptos es similar (122,2 y 103,4, respectivamente), no sucede lo mismo con las superficies medias, las que en los 80 llegaban a 1.856 hás. y en los 90 a casi el doble, 3.724 hás.

Los años con mayores expropiaciones y compras directas rurales fueron 1985, 1986 y 1987 (37,7%), y 1996-1997 (24,2%). Al contrario, 1981 y 1990 registraron las menores (1,3% en conjunto) (Cuadro Nº 2.7).

En superficies, los años con aportes más altos fueron 1992 (26.556 hás. y 57,1%); 1982 (9.413 hás. y 20,2%); y 1983 (4.304 hás. y 9,3%). En el otro extremo, nuevamente 1981 y 1990 acumularon los menores (96,3 hás. en total, y 2,1%).

Geográficamente, la IX Región en 1992 (26.510 hás. y 57%); la X Región en 1982 (8.719 hás. y 18,8%); y la IV en 1983 (4.229 hás. y 9,2%) destacaron por su mayor contribución, en área, a la propiedad fiscal rural.

En fin, las donaciones y traspasos (Cuadro Nº 2.8) incrementaron las propiedades fiscales rurales con 623 bienes raíces y 95.559 hás. Aquí se constata una importante divergencia de aportes entre los 80 (65,1 propiedades con 9.228 hás. como promedios anuales), y los 90 (4,6 propiedades con 1.564 hás. como medias anuales). Los mayores incrementos en número de inmuebles corresponden a 1985 (267) y 1984 (144), acumulando ambos dos terceras partes del total del periodo 1981-1997. La sumatoria de las adquisiciones de los 90 apenas representa menos del 6%.

Las mayores superficies se muestran fuertemente concentradas tanto regional como anualmente. En efecto, en 1982 la VIII Región registra 36.505 hás. y la VII, 17.988; y en 1988, la V Región registra 11.074. En total, las tres regiones aportaron un 68,6% del área en el periodo de estudio. Con la excepción de la V, todas las regiones del norte y centro del país, incluidas la VI y Metropolitana, muestran aportes marginales.

Una visión territorial de conjunto, atendiendo las cuatro vías de adquisición de inmuebles rurales, verifica que tres regiones contiguas del sur del país concentran los mayores aportes de superficies: la X, con más de 228.000 hás.; la VIII, con cerca de 46.000 hás.; y la IX, con cerca de 27.000. Las tres regiones acumularon más del 73% de las 410.510 hás. adquiridas por el fisco entre 1981 y 1997. La concentración territorial es sin duda muy fuerte, sobre todo en el caso de la X Región la que, por sí sola, anota más del 55% del total nacional.

2. Privatización y disposición: Ventas directas, ventas por subastas y propuestas, transferencias y títulos gratuitos

En esta sección, a diferencia de la anterior, se analizará, en un periodo levemente más amplio (1979-1997), la disminución de las propiedades fiscales, tanto urbanas como rurales, al disponerse de ellas para efec-

tos de a) ventas directas, b) ventas por subastas y propuestas, c) transferencias, y d) títulos gratuitos (Cuadros Nº 3.1 al 3.8).

El Ministerio de Bienes Nacionales, por la naturaleza de sus atribuciones, realiza diversas acciones de contenido social, dirigidas a los sectores más pobres del país, tales como los programas de títulos gratuitos sobre terrenos fiscales a familias de escasos recursos, la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, la regularización de comunidades rurales (saneamiento de títulos de comunidades agrícolas regidas por el D.F.L. Nº 5 de 1968) y la regularización de tierras indígenas (Ministerio de Bienes Nacionales, s/f ¿1994?).

El número total de propiedades urbanas vendidas, transferidas o entregadas gratuitamente durante el periodo fue de 17.270, cifra que representa un 134,6% del stock urbano fiscal a 1990 (en tales operaciones, y en particular en la entrega de títulos gratuitos, la subdivisión de propiedades explicaría dichas proporciones). La superficie urbana involucrada fue de 48,5 millones de m^2 (4.853 hás.), es decir, un 54,5% de los 89 millones de m^2 catastrados en 1990[12].

Los títulos gratuitos representaron por sí solos más de la mitad (9.413 y un 54,5%) del número total de propiedades vendidas y transferidas; las ventas directas totalizaron 3.941 propiedades (22,8%); las transferencias, 2.761 (16%); y las ventas por subastas y propuestas sumaron 1.155 (6,7%).

En superficies, la distribución es diferente: 30,6 millones de m^2 (63,1%) correspondieron a transferencias; 11,6 millones (23,8%) a ventas directas; 3,5 millones de m^2 (7,2%) a ventas por subastas y propuestas; y, finalmente, sólo 2,8 millones de m^2 (5,8%) a títulos gratuitos. Más agregadamente, las ventas —tanto directas como por subastas y propuestas— totalizaron 15,1 millones de m^2 (31%), mientras que las transferencias y títulos gratuitos acumularon 33,4 millones de m^2 (69%).

Las ventas directas de propiedades urbanas (Cuadro Nº 3.1) evidencian un comportamiento disímil en el periodo 1979-1989 versus el periodo 1990-1997. De hecho, en el primero el promedio anual de propiedades vendidas fue de 272,4 mientras que en el segundo alcanzó a sólo 118, menos de la mitad. Otro tanto ocurrió con las medias anuales de superficies enajenadas: 0,69 y 0,50 millones de m^2, respectivamente.

Las mayores ventas —en número de propiedades— se registraron en los años 1979, 1981 y 1982 (1.292 en conjunto, casi un tercio del total

[12] Recuérdese que el stock de 1990 ya habría 'internalizado' —rebajado— las ventas, transferencias y títulos gratuitos registrados entre 1979 y 1990.

del periodo de 19 años.) Las menores se observaron en el trienio 1992-1994 (197, con un 5% del total). En superficies, 1989 es el año con mayores ventas: 1,4 millones de m^2 (12% del total del periodo). Si a las cifras de ese año se agregan las de 1979, 1982 y 1988, se llega a casi 4 millones de m^2 (más de un tercio del total). En el otro extremo, 1990, y los bienios 1993-1994 y 1983-1984 registran las menores superficies enajenadas. Los cinco años suman sólo 1,65 millones de m^2 (equivalentes al 14,3%).

Territorialmente, las tres primeras regiones del extremo norte del país anotan las mayores enajenaciones de superficies: la II Región con 5,3 millones de m^2, la I con 2,2 y la III con 1,6 millones de m^2. Entre las tres totalizan casi el 79% de las ventas directas del país entre 1979 y 1997. Tratándose de propiedades urbanas, este fuerte sesgo geográfico hacia regiones con concentraciones urbanas de tamaño medio no deja de ser una interrogante. En el polo opuesto, las regiones XII —en el extremo austral— y VI y VIII —en el centro-sur del país— son las que muestran menores superficies enajenadas: 0,02 millones de m^2 la primera; 0,08 y 0,06, respectivamente, las otras dos. En conjunto, representan sólo el 1,4% de las ventas nacionales del periodo.

Las ventas de propiedades fiscales urbanas a través de subastas y propuestas (Cuadro Nº 3.2) también presentan marcadas diferencias al comparar la década de los ochenta con la de los noventa. En efecto, en la primera se observa un promedio anual de 111 propiedades enajenadas, el que cae a sólo 5,3 en la década siguiente. La media de superficie registra igualmente una baja significativa: de 327 a 27 mil m^2. Si bien en los noventa caen también, aunque en mucho menor proporción, las ventas directas —como se verificó más atrás—, es evidente que los gobiernos de la última década no recurrieron preferentemente a las subastas y propuestas para enajenar propiedades fiscales urbanas: en los ochenta, el gobierno vendió 10,9 millones de m^2 urbanos, de los cuales un 30% fue enajenado a través de subastas y propuestas. En los noventa (hasta 1997) se vendió un total de 4,2 millones de m^2 urbanos, de los cuales sólo un 5,1% correspondió a subastas y propuestas.

El mayor número de ventas por esta vía se concentra entre 1980 y 1984: 950, con un 82% del total del periodo 1980-1997 (no hay información para 1979). En superficies se constata una realidad análoga: casi 3 millones de m^2, un 86,2% del total, se enajenan entre 1980 y 1984. Recuérdese que mientras 1982 fue un año de fuertes ventas directas en términos de superficie, el bienio 1983-1984 acusó uno de los menores registros de superficies urbanas vendidas directamente. Esto sugiere un cambio de política de ventas entre 1982 y 1983.

En términos regionales, las mayores superficies enajenadas se observan nuevamente —tal como se verificó con las ventas directas— en el extremo norte del país: la II Región contribuyó con 1,5 millones de m^2 (44,1% del total nacional), y la I lo hizo con 1,2 millones de m^2 (34,4%).

Las transferencias de inmuebles urbanos fiscales (Cuadro Nº 3.3), que entre 1979 y 1997 afectaron a 2.761 propiedades con 30,6 millones de m^2, acusan un cierto cambio de tendencia sobre todo a partir de 1993. Si bien los promedios del periodo 1979-1989 difieren bastante de los correspondientes a los de los años 90 (194 propiedades versus 78,4, y 2,3 millones de m^2 versus 0,64, respectivamente), recién desde 1993 se registra una caída sustantiva en tales transferencias. Por lo demás, la media anual de superficie transferida del primer subperiodo está fuertemente sesgada por la cifra del año 1979 (13,1 millones de m^2, que representa más del 51% del total de superficie transferida entre 1979 y 1989). Otros años con grandes transferencias de superficie son 1989, 1981 y 1987. Estos tres años acumulan 6,1 millones de m^2, y si se agrega la superficie de 1979, se totaliza un 62,7% del total transferido entre 1979 y 1997. Los años con menores transferencias son 1995 y 1982, con menos del 1% del total entre ambos.

La alta incidencia del año 1979 determina que, en términos territoriales, la distribución regional de las superficies transferidas en ese año resulte decisiva. De hecho, tres regiones registran una alta participación: la XI con 5,6 millones de m^2, la IX con 4,4 y la VIII con 1,2 millones de m^2. Estas tres regiones representan, considerando sólo el año 1979, más del 36% del área urbana total transferida en los 19 años del periodo de estudio. La VI y X Región, en cambio, hacen una mínima contribución a la superficie transferida en los casi dos decenios.

Los títulos urbanos gratuitos (Cuadro Nº 3.4) dispuestos entre 1979 y 1989 alcanzaron un promedio anual de 226 propiedades y una media también anual de 66.821 m^2. Desde 1990 hasta 1997, los respectivos promedios subieron a 1.177 y 354.319 m^2, más que quintuplicando los correspondientes al periodo anterior. Esto denota, toda vez que la concesión de títulos gratuitos sea un instrumento de política social, un cambio cuantitativo importante asociado a su vez a los periodos gubernamentales implicados. Mientras —como se observó recién— las ventas directas y por subastas o propuestas declinaron en los 90, la disposición de títulos gratuitos muestra una tendencia claramente inversa.

Es interesante observar, sin embargo, que el cambio de tendencia no conlleva alteraciones significativas en la superficie promedio de los títulos gratuitos: en el primer periodo ella fue de 295 m^2, mientras que en el segundo alcanzó a 301 m^2.

Los años con mayor número de propiedades con títulos gratuitos fueron, sin embargo, los correspondientes al subperiodo 1994-1997: en este cuatrienio se dispusieron 8.407 títulos, es decir, el 70,6% del total comprendido desde 1979 a 1997. En superficie la situación es la misma: el 70,2% del total de los diecinueve años fue entregada en dichos cuatro años.

Esta fuerte 'estacionalidad' acusada por los títulos gratuitos explica que la distribución regional de los mismos entre 1994-1997 defina la territorialidad de esta vía de disposición de propiedades fiscales. En estos cuatro años, tres regiones contiguas —la VIII, la IX y la X— concentraron un tercio de los títulos y la mitad de la superficie dispuesta gratuitamente en el cuatrienio, porcentajes que, referidos ahora al periodo 1979-1997, equivalen al 26,3% y al 39,5%, respectivamente, del total nacional. Entre 1979-1989, en cambio, la región con mayor recepción de títulos y mayor superficie otorgada fue la III.

En situación opuesta están las regiones VI y XII —en el cuatrienio y también en el periodo completo— además de la VIII —obviamente sólo en el periodo 1979-1989. En las dos primeras sólo se concedió el 3,3% de los títulos involucrando menos del 1,1% de la superficie dispuesta gratuitamente en los diecinueve años en todo el país.

En fin, al observar en conjunto la disposición de bienes raíces urbanos a través de las cuatro vías —ventas directas, ventas por subastas y propuestas, transferencias y títulos gratuitos— se concluye que, territorialmente, las regiones con mayores registros corresponden a las del norte —I, II y III—, a las del sur —VIII, IX y X— además de la austral XI Región.

Al contrario, con menores registros en todos los casos aparecen las regiones del centro-sur —VI y VII— y la XII en el extremo austral.

En el periodo 1979-1997 fueron vendidas, transferidas o entregadas gratuitamente 11.767 propiedades fiscales rurales, equivalentes al 162,1% del número de propiedades fiscales rurales catastradas en 1990 (el alto porcentaje se asocia a la subdivisión o parcelación predial). La superficie involucrada en dichas operaciones ascendió a 3,3 millones de hás., es decir, a un 15,5% de los 21,5 millones de hás. registradas en 1990 (Cuadros Nº 3.5 a 3.8).

Nuevamente, tal como se verificó con las propiedades urbanas, los títulos gratuitos acumularon el mayor número de operaciones, 7.971, con el 67,7% del total de ventas y transferencias; las ventas directas fueron 2.977, con un 25,3%; las ventas por subastas y propuestas 431, representando un 37,1%; y las transferencias totalizaron 388, es decir, el 3,3% del total de operaciones.

En superficies la desagregación es muy disímil. De hecho entre las ventas directas (1,7 millones de hás. y el 49,8% de la superficie) y las subastas y propuestas (0,9 millones de hás. y el 27,5%) se llega a más del 77% del total de superficie fiscal rural de la que se dispuso para operaciones de ventas, transferencias y títulos gratuitos. Estos últimos comprendieron 0,5 millones de hás. (15,5%) y las transferencias, 0,2 millones de hás. (7,2%).

Las ventas directas de propiedades fiscales rurales (Cuadro Nº 3.5) exhiben un comportamiento diferente al comparar el subperiodo 1979-1989 con el correspondiente a los años 1990-97. La media anual de propiedades vendidas cae de 191,7 a sólo 108,5, y la de superficie baja de 107.127 a 59.511 hás.

El mayor número de ventas se registra —en el primer subperiodo— en 1980 y 1981, con 659 transacciones en conjunto (31,2% del total de los 11 años). En los noventa, 1997 concentra el mayor número de ventas directas, 213, equivalentes al 24,5% del total del periodo 1990-1997. Años con bajos registros fueron 1983, en el primer subperiodo, y en el segundo 1992, 1993 y 1994.

Las mayores ventas, medidas en superficie, corresponden a los años 1990, 1981 y 1980, en ese orden. Los tres años suman más de 690 mil hás., es decir, el 41,8% del total enajenado entre 1979 y 1997. Las menores superficies vendidas se contabilizaron en los años 1984, 1993 y 1992, que en conjunto sólo acumularon algo más de 47 mil hás. y el 2,9% del total.

Las regiones con mayor participación en las superficies vendidas directamente son las del extremo austral, XII, con 1,2 millones de hás. y 70,7%; y XI, con 0,37 millones de hás. y 22,4% del total. La diferencia (algo más del 6%) se distribuye entre las otras 11 regiones, destacando por su participación marginal las regiones IV a VIII, es decir, las más centrales del país.

Las ventas rurales a través de subastas y propuestas evidencian, al igual que las ventas directas, fuertes diferencias entre los subperiodos analizados. En número de transacciones, el promedio baja de 38,7 a sólo 5,5, antes y después de 1990 (Cuadro Nº 3.6). La media anual de superficie igualmente cae de 76.456 hás. a 18.663 hás. Tal como se pudo verificar con las propiedades urbanas, los gobiernos de los noventa no sólo reducen las ventas totales, sino que, además, preferencian las ventas directas por sobre las subastas y propuestas. Éstas prácticamente se extinguen a partir de 1994.

Los años 1981 y 1988 sobresalen ampliamente por el número de transacciones (185 entre ambos) y por las superficies enajenadas (0,56

millones de hás.). Los dos años representan el 42,9% de las ventas por subastas y propuestas y el 61,3% de la superficie. En los mismos años se define la concentración territorial de la superficie vendida, destacándose nuevamente la XII Región, que en el total del periodo sumó casi 760 mil hás., y la X Región, con algo más de 63 mil hás. La participación de ambas equivale al 90% del total nacional. Extrañamente la XI Región, con ventas directas significativas, tiene una participación marginal en las subastas y propuestas.

Las transferencias de propiedades fiscales rurales, a diferencia de las ventas, no acusan grandes variaciones en su número antes y después de 1990: los respectivos promedios son 21,7 y 18,6. Sin embargo, la media anual de superficie transferida cae fuertemente de 16.782 a 6.843 hás. (Cuadro Nº 3.7).

El año 1988 registra el mayor número de operaciones (46) y, a la vez, la mayor transferencia de superficie, casi 100 mil hás., es decir, el 41,8% del total del periodo 1979-1997. Años con las más bajas superficies son 1996, 1990 y 1983: 212 hás. en total, con apenas el 0,9%.

Las regiones con mayores superficies transferidas son la II (97.531 hás. y el 40,8% del total nacional); la IX (48.406 hás. y el 20,3%); y la VIII (25.423 hás. y el 10,6%). Con menores superficies aparecen las regiones V, VI y VII (379 hás. en conjunto, con sólo el 1,6%).

La disposición de títulos gratuitos rurales (Cuadro Nº 3.8) acusa un fuerte incremento, en términos de promedio anual, al comparar los subperiodos 1979-1989 y 1990-1997. Mientras para el primero la media es de 241,5 títulos, en el segundo ésta sube a 664. Debe advertirse, sin embargo, que dicho incremento se concentra, en realidad, entre los años 1994 y 1996: en este trienio los títulos suman 4.007, más de la mitad del total dispuesto en los 19 años de análisis, y la superficie correspondiente es de 44.744 hás., es decir, un 8,7% del total. Esta 'desproporción' hace evidente otro cambio importante constatable luego de 1990: la media anual de superficie rural dispuesta gratuitamente entre 1979-1989 fue de 39.450 hás., mientras que en los noventa ella cae a sólo 10.277 hás., o sea casi a una cuarta parte.

Los años con mayores registros de superficie corresponden a 1985 y 1986, bienio en que se concentra el 31,8% de los 0,5 millones de hás. involucradas en los títulos gratuitos rurales durante los 19 años estudiados. 1979 es, por el contrario, el año más bajo, con sólo el 0,1%.

La única región del país con una altísima concentración de superficie dispuesta gratuitamente es la XI, con 437 mil hás. y cerca del 85% del total nacional. Ello puede asociarse a los planes de colonización dirigidos a dicha región. Sin embargo, la cantidad de títulos conferidos en esa región

hasta 1990 (842) fue muy superior a los entregados en la X Región (273). A partir de este año, esta última región desplaza ampliamente a la XI, constatándose un cambio de política que se traduce en que, al final del periodo 1979-1997, la X Región acumuló 1.986 títulos gratuitos rurales contra sólo 971 de la XI.

Una síntesis territorializada de la disposición de propiedades fiscales rurales en el periodo 1979-1997 permite expresar que —excepto en transferencias, donde la nortina II Región muestra los mayores índices— las ventas directas y por subastas o propuestas y los títulos gratuitos tienen un fuerte sesgo geográfico hacia las regiones más australes del país —XII y XI— y, en menor medida, las del sur —VIII, IX y X.

En oposición, las regiones del centro, centro-norte y centro-sur, es decir, desde la IV a la VII —excepto la R.M.— muestran los indicadores más bajos en ventas directas y transferencias. Un caso singular es el de la XI Región, con participación muy alta en ventas directas y muy baja en ventas por subastas y propuestas.

Así pues, el sesgo geográfico propio de la disposición de bienes raíces rurales es opuesto al de las propiedades urbanas, donde se constató una fuerte orientación a las regiones del norte y una bajísima hacia la austral XII Región.

3. Administración: Arriendos, destinaciones, usos gratuitos y usos onerosos

Esta sección analiza las estadísticas referidas a las denominadas propiedades administradas, es decir, a los bienes raíces fiscales, urbanos y rurales, entregados en arriendo o sujetos a destinación y afectación, uso gratuito y uso oneroso, siempre para el periodo 1979-1997 (Cuadros Nº 4.1 a 4.8).

Las propiedades urbanas administradas en el periodo fueron 15.643, equivalentes a un 122% del stock de bienes raíces fiscales urbanos de 1990 y a un 172,6% del registro de propiedades administradas ese mismo año (Cuadros Nº 1 y 1.1).

Las propiedades sujetas a destinación y afectación son las más importantes tanto en número (9.686, equivalente al 61,9% del total administrado) como en superficie (29,5 millones de m^2, es decir, un 72,7% del área total bajo administración). Los arriendos constituyen la segunda mayoría en número (3.872 y un 24,8%), seguidos por las propiedades dadas en uso gratuito (1.694 y un 10,8%), aunque tanto éstas como aquéllos involucran

superficies similares (5 millones de m^2 arrendados, 12,4%, y 5,8 millones de m^2 en uso gratuito, 14,2%). En fin, el uso oneroso es la clasificación con registros más bajos: sólo 391 propiedades (2,5%) y menos de 0,3 millones de m^2 (0,7%).

Así pues, tanto los bienes raíces urbanos entregados en arrendamiento como en uso oneroso resultan, en número y superficie, de menor relevancia frente a aquellos sujetos a destinación o afectación y a uso gratuito.

Los inmuebles urbanos arrendados (Cuadro Nº 4.1) registran una caída, en términos de promedio anual, de 224,4 entre 1979 y 1989 a 175,5 desde 1990 a 1997. Más acentuada aún es la caída en la superficie media anual, que baja de 308 mil a sólo 204 mil m^2, respectivamente.

En los diecinueve años de análisis destacan, en número de inmuebles arrendados, 1979 (765), 1997 (281) y 1993 (250). En conjunto representan un tercio del total del periodo. En oposición, el año con menor registro, muy distante del resto, es 1981, con apenas 42 arriendos.

Las superficies mayores corresponden a los años 1979 (1,3 millones de m^2), 1993 (0,45 millones de m^2) y 1996 (0,41 millones de m^2), los que sumados concentran cerca del 42% del área total arrendada. 1990, 1981 y 1991, en ese orden, anotan las menores superficies, las que apenas totalizan un 1,3%.

Geográficamente, las cifras de arriendos urbanos muestran una fuerte concentración en el norte del país, en particular en las regiones II y III, con 1,9 y 1,3 millones de m^2, respectivamente, equivalentes a un 64% del total nacional. Regiones con superficies urbanas arrendadas extremadamente bajas son, paradójicamente, la Metropolitana y la XII; y con cifras también bajas, la VI y VII. Estas cuatro regiones representan en conjunto sólo el 1,1% del total nacional.

Las destinaciones y afectaciones de propiedades fiscales urbanas —principal subconjunto entre las propiedades administradas— hacen evidente un fuerte cambio cuantitativo antes y después de 1990. El promedio anual de inmuebles en esta categoría cae verticalmente de 735,3 a 199,8, y el de superficie de 1,9 a 1,0 millones de m^2 (Cuadro Nº 4.2).

Los años 1986, 1985 y 1980 registran el mayor número de inmuebles, 3.437 en total, más de un tercio (35,4%) del total bajo esta clasificación en el periodo 1979-1997. En contraste, 1996 y 1997 presentan los menores índices, con 151 propiedades y el 1,6%.

Las mayores superficies anuales están contabilizadas en 1988, 1986 y 1989, en ese orden. Estos tres años casi continuos suman 9,5 millones de m^2, algo menos de un tercio del total del periodo. Las menores superficies,

en cambio, están anotadas en 1996 y 1992, sumando ambos 0,6 millones de m^2 (2,1%).

Regionalmente, una fuerte concentración se acusa en la Región Metropolitana (8,4 millones de m^2) y en la VIII (5,1 millones de m^2). Las dos principales regiones del país concentran casi el 46% de la superficie fiscal urbana bajo destinación y afectación. En el otro extremo están las regiones III y IV del Norte Chico, y la austral XI: las tres totalizan 1,5 millones de m^2, es decir, el 5,2% del total.

Las propiedades fiscales urbanas en uso gratuito (Cuadro Nº 4.3) aumentan en número y superficie al comparar los promedios anuales antes y después de 1990. En efecto, entre 1979 y 1989, el promedio fue de 72,7 inmuebles y 273 mil m^2. Desde 1990 a 1997, el mismo indicador sube a 111,8 propiedades y 343 mil m^2. En rigor, el alza se concentra en el trienio 1995-1997, que totaliza 485 bienes raíces con casi 1,9 millones de m^2, es decir, el 28,6% de las propiedades y la tercera parte de la superficie total en uso gratuito entre 1979 y 1997. En contraste, 1987 y 1982 registran las menores superficies y, a la vez, los números más bajos de propiedades en uso gratuito: 98 (5,8%) con 0,18 millones de m^2 (3,1%).

La V Región, con 278 propiedades y 1,7 millones de m^2 destaca en el primer lugar del país en número y superficie de bienes raíces en uso gratuito. Le sigue la II Región, con 1,3 millones de m^2. Entre ambas acumulan más del 52% del área total en uso gratuito. Las regiones australes XII, XI y X, en ese orden, registran, por el contrario, las superficies menores: 0,3 millones de m^2 y un 5,2% en conjunto.

Los inmuebles fiscales urbanos con uso oneroso —marginales en el conjunto de propiedades administradas— estadísticamente presentan una tendencia inversa a la observada para los usos gratuitos. Esta vez el número promedio de propiedades baja de 27,1 a 11,6 luego de 1990, disminuyendo asimismo la superficie media anual de 25.207 m^2 a sólo 1.966 m^2.

Dos años sobresalen por registrar las mayores superficies: 1989 y 1984, que en conjunto concentran cerca del 46% del total. En cambio, la suma de los años 1990, 1992 y 1993 representa sólo el 0,4% de los 293 mil m^2 urbanos en uso oneroso contabilizados entre 1979 y 1997.

Sólo la IX Región presenta un registro significativamente alto de superficie: 124 mil m^2 (42,3%), de los cuales 121 mil corresponden al año 1989. Las regiones XII y XI tienen los índices menores (menos del 1%) seguidos de la V y VIII (2,4% entre ambas).

La 'administración' de propiedades fiscales rurales durante el periodo 1979-1997 comprendió 4.100 bienes raíces, es decir, el equivalente al 56,5% de las propiedades fiscales rurales catastradas en 1990, y el 92,7%

del inventario de propiedades rurales administradas de ese mismo año. (Cuadros Nº 1 y 1.1 y Cuadros Nº 4.5 a 4.8).

La superficie fiscal rural administrada en el periodo, 4,46 millones de hás., corresponde a su vez al 20,8% de la registrada y al 41,9% de la administrada en 1990.

En número de propiedades, las arrendadas constituyen la primera mayoría: 2.445, con un 59,6%; luego le siguen las sujetas a destinación y afectación, 1.290 con el 31,5%, las entregadas en uso gratuito, 335 con el 8,2%, y finalmente las en uso oneroso, 30, con sólo el 0,7%.

El orden varía al considerar las superficies respectivas: las destinaciones y afectaciones suman 2,3 millones de hás. (51,1%); el uso gratuito 1,4 millones de hás. (31,6%); los arriendos 0,77 millones de hás. (17,3%); y el uso oneroso sólo 1.912 hás (0,04%).

Al igual que en el caso de las propiedades urbanas administradas, las destinaciones y afectaciones involucran el área mayor, destacándose a continuación la superficie en uso gratuito, que en las propiedades rurales casi duplica su importancia relativa. Por lo mismo, nuevamente la suma de las áreas arrendadas y en uso oneroso resulta proporcionalmente muy menor (menos del 17,4%).

El análisis de las estadísticas de arriendo de bienes raíces fiscales rurales (Cuadro Nº 4.5) demuestra que el promedio anual de arrendamientos no varía mayormente al comparar los años 80 y 90: de hecho, la media anual de propiedades en arriendo fue de 125 entre 1979-1989 y de 133,8 entre 1990-1997. No obstante, algunos años muestran variaciones significativamente altas o bajas. Entre los primeros destacan 1979 y 1996, con 461 y 333 inmuebles respectivamente, acumulando entre ambos casi un tercio del total del periodo. 1981 y 1990-1991 son, en cambio, los años con cifras menores: 123 arriendos, un 5% del total.

Empero, si bien los promedios de número de propiedades varían muy poco antes y después de 1990, no sucede lo mismo con la media anual de superficie arrendada, la que cae prácticamente a la mitad, de casi 52 mil hás. a menos de 25 mil hás. Nuevamente las cifras anuales son muy disímiles: 1979 registra más de 222 mil hás. (28,8%), mientras que 1982 apenas 1.489 y 1995, 2.052 (menos del 0,5% entre ambos).

Regionalmente se constata una clara situación dual: las regiones extremas del país, tanto del norte (I, II y III) como australes (X, XI y XII) concentran más de 752 mil hás. (97,7%). El resto de las regiones, desde la IV a la IX —donde por lo demás se localiza la mayor población rural y el grueso de la producción silvoagropecuaria— aporta en conjunto sólo algo más de 17 mil hás. Esta dualidad alcanza sus valores extremos en las

regiones Metropolitana, con menos de una hectárea, y XII, con más de 401 mil hás.

Las destinaciones rurales (Cuadro Nº 4.6) muestran una fuerte declinación, tanto en número como en superficie, a partir de 1990: en relación al primero, el promedio anual cae de 91,9 (1979-1989) a 34,9 (1990-1997); en cuanto a la segunda, la caída del promedio es muchísimo más pronunciada: de 200 mil hectáreas a cerca de 9.500. El año 1981 registra la mayor superficie bajo destinación: 764 mil hás., un tercio del total del periodo de diecinueve años; los años 1995, 1997 y 1983, en ese orden, anotan menores aportes: casi 10.500 hás. (menos del 0,5%).

Tal como se verificó para los arriendos rurales, en el caso de las destinaciones se reitera la dualidad ya observada, aunque esta vez con una importante excepción en la Región Metropolitana. En efecto, las regiones extremas del norte, I y II, registran 1,3 millones de hás. (58%) y las australes XI y XII, 0,6 millones de hás. (26,4%). La primacía la tiene, con mucho, la II Región, con 1,1 millón de hás. y la mitad del total nacional en el periodo. La excepción está constituida por la Región Metropolitana, con 241 mil hás. (10,6%). Las otras 8 regiones del país participan sólo del 5% del área bajo destinación.

Las propiedades fiscales rurales dadas en uso gratuito (Cuadro Nº 4.7) aumentan en número y, muy sustantivamente, en superficie en el subperiodo 1990-1997. Mientras que entre 1979-1989 el promedio anual, en número, fue de 15,5, en los noventa subió a 20,5. En iguales periodos, el área media anual fue, en el primer caso, de 27.877 hás., y en segundo, de 137.835 hás.

Dos años presentan registros muy superiores a la media: 1990, con 658 mil hás., y 1996, con 378 mil hás. Ambos equivalen al 73,5% del total de superficie rural en uso gratuito entre 1979 y 1997. Los valores menores corresponden a 1994, 1988, 1991, 1981 y 1995, en ese orden: estos cinco años suman sólo 1.378 hás., casi el 1% del total.

Tres regiones, la II, III y XII, contabilizan las mayores superficies: 907 mil, 393 mil y 78 mil hás., respectivamente, totalizando el 97,8% del área fiscal rural del país en uso gratuito. La participación de las otras 10 regiones resulta obviamente marginal.

Los bienes raíces rurales fiscales en uso oneroso —poco significativos— exhiben una tendencia decreciente en número y área desde 1990. En el subperiodo 1979-1989, el promedio anual de propiedades en esta categoría fue de 2,2, y la superficie media anual alcanzó a 151,5 hás. Entre 1990 y 1997, dichos índices fueron, respectivamente, 0,8 y 30,5 hás. Los años con mayores registros de superficie son 1979 y 1987, acumulando dos tercios

del total del periodo. 1986, 1990 y el cuatrienio 1994-1997 no registran usos onerosos.

Territorialmente, las regiones XII —con 902 hás. (47,2%)— y X —con 424 hás. (22,2%)— muestran las mayores superficies en uso oneroso, aunque ciertamente se trata esta vez de órdenes de magnitud muy menores. Las regiones II, V, R.M. y XI no registran, en todo el periodo, propiedades en esta categoría.

Una síntesis geográfica relativa a las propiedades fiscales rurales administradas puede expresarse en los siguientes términos: en general las tres regiones más septentrionales del país (I, II y III), junto a las más australes (X, XI y XII), concentran las mayores superficies en arriendo, destinación —con excepción de la III y X— y uso gratuito —con excepción de la I, X y XI. En uso oneroso sólo las regiones X y XII validan la afirmación anterior.

El resto de las regiones —ciertamente con áreas jurisdiccionales menores, pero también en general más densamente pobladas— tienen una participación menor en términos de la administración de propiedades fiscales rurales. Un caso singular lo constituye la Región Metropolitana, con participación en general muy baja, pero proporcionalmente alta en materia de destinaciones.

4. Ingresos monetarios por ventas directas, ventas por propuestas y arriendos

Esta sección analiza los ingresos generados —expresados en Unidades de Fomento, UF— por concepto de a) venta directa de inmuebles urbanos; b) venta por propuestas de inmuebles urbanos; c) venta directa de inmuebles rurales; d) ventas por propuestas de inmuebles rurales y e) ingresos generados por arriendos de inmuebles urbanos y rurales, agregadamente. Las series estadísticas de ventas cubren desde 1980 a 1997; las de arriendo, de 1979 a 1997.

Los ingresos generados por ventas entre 1980 y 1997 —tanto directas como por propuestas (Cuadros Nº 5.1 a 5.4)— y por arriendos desde 1979 a 1997 (Cuadro Nº 5.5), de propiedades fiscales urbanas y rurales, suman UF 7.178.659 (a valores de agosto de 1998 del orden de US$ 219 millones). Esta cifra es ciertamente menor en relación a las magnitudes propias de los negocios inmobiliarios y ciertamente muy menor en proporción a otros activos del Estado. Esta percepción se precisará y confirmará en el análisis más pormenorizado que prosigue.

De las UF 7.178.659, un 86,9%, es decir UF 6.235.843, corresponde a ventas, y sólo el 13,1% restante, UF 942.816, a ingresos por arriendos.

En el periodo 1980-1997 se vendieron 8.008 propiedades fiscales a un precio promedio de UF 778,7 (algo más de US$ 24 mil). De éstas, 4.276 (59%) corresponden a propiedades urbanas, las que generaron ingresos por UF 2.840.357 (45,5% del total de ingresos por ventas). Por consiguiente, el precio de venta medio fue de UF 601. En el mismo periodo fueron vendidos 3.282 bienes raíces rurales (41%), los que totalizaron UF 3.395.486 (54,5% del total de ingresos por ventas). El precio promedio de venta de los predios rurales fue, en consecuencia, de UF 1.034,6. Más adelante se verá el precio promedio unitario, por m^2 o hectárea, resultante de las ventas urbanas y rurales.

De las 4.726 propiedades urbanas vendidas, 3.571 (75,6%) fueron ventas directas, y 1.155 (24,4%) correspondieron a ventas por propuestas. La primera modalidad aportó ingresos por UF 1.888.030 (66,5% del total recaudado por ventas urbanas) y la segunda vía proporcionó UF 952.327 (33,5%). Así pues, las ventas directas urbanas representaron tres cuartas partes del total de propiedades vendidas y aportaron dos tercios de los ingresos, mientras que el tercio restante fue generado por las ventas por propuestas, equivalentes a una cuarta parte de las transacciones.

Las cifras anteriores permiten calcular que el precio promedio de las propiedades urbanas vendidas en forma directa fue de UF 528,7, mientras que el correspondiente a las ventas por propuesta alcanzó a UF 824,5, casi un 56% superior.

En el caso de las propiedades rurales vendidas en el periodo, 3.282 en total, 2.856 (87%) corresponden a ventas directas y sólo 426 (13%) a ventas por propuesta. Los ingresos respectivos fueron UF 2.901.415 (85,4%) y UF 494.071 (14,5%), respectivamente. Los precios promedios fueron, para las operaciones de venta directa, de UF 1.015,9, y de UF 1.159,8 para las ventas por propuesta. Esto implica una diferencia de precio de sólo 14,2% entre ambas modalidades de venta, bastante menor a la verificada para las transacciones urbanas.

En fin, si se compara agregadamente —sin distinción urbano rural— el número de propiedades transadas, el ingreso generado y el precio promedio obtenido en cada una de las modalidades de venta comentadas, se concluye que 6.427 propiedades (80,3%) fueron vendidas directamente, a un precio medio de UF 742,2, aportando ingresos por UF 4.789.445 (76,8%), y que 1.581 propiedades (19,7%) se transaron vía propuestas, a un precio promedio de UF 914,9, generando ingresos por UF 1.446.398

(23,2%). De este análisis comparado agregado se concluye que el precio medio de las propuestas superó en 23,6% al de las ventas directas.

Si se tiene presente que la venta directa urbana involucró una superficie de 10.682.583 m^2, y la venta por propuesta, 3.485.812 m^2 (Cuadro Nº 3.1 y 3.2, excluido 1979), se concluye esta vez que el precio promedio por m^2 urbano fue de UF 0,18 en la venta directa, y de UF 0,27 (50% superior) en la venta por propuesta.

Asimismo, dado que la venta directa rural involucró 1.599.045 hás., y la por propuesta, 913.857 hás. (Cuadro Nº 3.5 y 3.6, excluido 1979) el precio medio por há. en la primera modalidad fue de UF 1,81, y de sólo UF 0,54 en la segunda (menos de un tercio).

En términos agregados —indistintamente de la modalidad de venta— la superficie urbana vendida, 14.168.395 m^2, generó ingresos por UF 2.840.357, lo que da un precio medio por m^2 de UF 0,20 (aproximadamente US$ 6,14). La superficie rural vendida, 2.512.902 hás., aportó a su vez ingresos por UF 3.395.486, lo que implica un precio promedio por há. de UF 1,35 (equivalente a US$ 41,50).

Los precios promedio por unidad de superficie pueden compararse —guardando las diferencias y sólo en orden de magnitud— con recientes licitaciones del Ministerio de Bienes Nacionales (1997) en el litoral de la III Región de Atacama. Dichos terrenos, con aptitud urbana y turística, fueron ofrecidos a un precio medio mínimo de UF 0,07 por m^2. Las ofertas reales alcanzaron a UF 0,055 por m^2 (*El Mercurio*, domingo 7 de diciembre de 1997: C1 y 6).

La venta total urbana y rural del periodo de análisis equivale a US$ 191 millones. Esta cifra puede compararse con la venta de bienes fiscales por las Fuerzas Armadas a través del Patrimonio de Afectación Fiscal, la cual, según un catastro del Ministerio de Bienes Nacionales, equivaldría a unos US$ 146 millones (*El Mercurio*, domingo 19 de julio de 1998: D21-22).

Los ingresos por venta directa de inmuebles urbanos (Cuadro Nº 5.1) crecen desde un promedio anual de UF 84.195 (1980-1989) a un promedio de UF 130.760 (1990-1997). En relación al número de propiedades vendidas directamente, dicho crecimiento es aún mayor, ya que de 263,7 inmuebles vendidos como promedio anual en el primer subperiodo, se pasa a sólo 116,8 en el segundo.

En términos de valores unitarios por m^2, entre 1980 y 1989 el precio promedio obtenido fue de UF 0,12. De 1990 a 1997, dicho precio asciende a UF 0,26 (Cuadros Nº 3.1 y 5.1). Esta más que duplicación del precio en moneda constante (UF) podría estar asociada al incremento real de los

valores de suelo en el tiempo acentuado por el mayor crecimiento económico en los años 1990-1997 versus el periodo 1980-1989.

Los años con mayores ingresos absolutos corresponden a 1997 (UF 236.630) y 1995 (UF 199.194). Con menores ingresos aparecen los años 1984, 1986, 1994, 1983 y 1985, en ese orden. En conjunto, esos 5 años totalizan ventas por UF 208.040, monto inferior al del año 1997.

Territorialmente, las regiones I y II aportaron más de la mitad (52,5%) de los ingresos en el periodo 1980-1997. En tercer lugar figura la Región Metropolitana, con un 18,6%. Las regiones VI, X y VII registran los menores ingresos, totalizando tan sólo el 3,6%.

Los precios unitarios por regiones fueron de UF 0,25 en la I y 0,08 en la II. En la Región Metropolitana, el precio medio fue de UF 1,01, obviamente superior tratándose de suelos urbanos, pero sólo cuadruplicando el promedio de la I Región, y ciertamente bajo en términos de mercado en la propia Región Metropolitana

En efecto, según series del Boletín de Mercado de Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago —citadas por Sabatini (1998)—, el precio promedio del metro cuadrado en Santiago, entre 1982 y 1997, fue de UF 2,39. Los valores extremos se registraron en los mismos años, UF 0,64 en el primero y UF 7,51 en el segundo.

Los ingresos por ventas de propiedades urbanas a través de propuestas (Cuadro Nº 5.2) decrecen desde una media anual de UF 74.186 (1980-1989) a un promedio anual de UF 26.309 (1990-1997). Esta baja está asociada a la caída del número de transacciones por propuestas, las que pasan de un promedio de 111,3, en el primer subperiodo, a otro de sólo 5,3. El valor medio por operación sube, sin embargo, de UF 667 a UF 4.964.

El precio medio unitario por m^2 sube de UF 0,23, en el primer subperiodo, a UF 0,98 (Cuadros Nº 3.2 y 5.2). Mientras el alza registrada en las ventas directas entre ambos subperiodos fue de 116,7%, el incremento del precio de venta por propuesta es de 326%, pudiendo inferirse que esta modalidad tiende a maximizar el precio y que, por ende, debería preferenciarse, en términos generales, por sobre las operaciones de venta directa.

En valores absolutos, sólo dos años destacan por sus altos ingresos: en 1980 y 1981, las ventas por propuesta suman UF 477.815, equivalentes a la mitad de lo recaudado entre 1980 y 1997. Años sin ingresos o con ingresos muy bajos son 1985, 1986, 1993 y 1997.

Las regiones con mayores aportes en términos de ingresos corresponden, al igual que en el caso de las ventas directas, a la I, II y R.M. Esta vez, sin embargo, es la Región Metropolitana la que registra la mayor contribución (46%), seguida por la I (22,9%) y II (13,2%). Regiones con

baja participación en los ingresos son la XI, IV, VI y XII, en ese orden, generando en conjunto sólo el 2,56% de aquéllos.

Los precios unitarios por regiones fueron UF 0,18 en la I, UF 0,08 en la II, y UF 6,25 en la Región Metropolitana. En comparación con los precios de las ventas directas en las mismas regiones, se verifica una disminución de 25% en la I, un fuerte incremento de 518,8% en la Región Metropolitana, y un precio constante en la II. A pesar del decremento en la I Región, la gran diferencia observada en la R.M. —comparando los mismos periodos— aboga por la modalidad de venta por propuesta como la más conveniente.

En las propiedades rurales, las ventas directas registran ingresos medios anuales, entre 1980 y 1989, de UF 182.855, y de UF 134.109 entre 1990 y 1997. Al bajar asimismo el número de operaciones desde un promedio anual de 198,8 a sólo 108,5, en los respectivos periodos, la media por operación de venta directa sube de UF 919,8 a UF 1.236 (Cuadro Nº 5.3).

El precio medio por hectárea rural vendida directamente fue de UF 1,71 entre 1980 y 1989, y de UF 2,25 entre 1990 y 1997, lo que involucra un incremento del orden de 32% (Cuadros Nº 3.5 y 5.3).

Los años con mayores ingresos corresponden a 1988, 1997 y 1984, en ese orden. En conjunto concentran cerca del 48% de los ingresos del periodo de estudio. El año con ingresos menores, y claramente atípico, es 1983, con sólo el 0,6% de los mismos.

Territorialmente, las regiones que aportaron mayores ingresos son, en orden decreciente, las siguientes: R.M. (29,2%), XII (21,6%), I (18,3%), III (10,7%) y II (9,9%). Estas tres últimas, correspondientes al área norte, totalizan un 38,9%. En contraste, las regiones V y VIII —que, como la Metropolitana, tienen importancia agraria o silvícola además de urbana— registran los más bajos aportes, sumando apenas el 0,56% de los ingresos.

Los precios promedios por há. fueron UF 21,8 en la I Región; UF 20,3 en la II; UF 7,3 en la III; y UF 339,1 en la Región Metropolitana. Este último precio, razonable en términos agrícolas, podría ciertamente estar influido por un eventual uso potencial urbano. Ya que las operaciones en la R.M. prácticamente se concentran en dos años —1984 y 1988—, donde 6 ventas aportan el 99,8% de los ingresos de todo el periodo 1980-1997, sería necesario un estudio de esos casos para llegar a conclusiones más precisas.

Las ventas por propuesta de propiedades rurales (Cuadro Nº 5.4) generaron ingresos anuales medios muy diferentes en los ochenta y en los noventa. De hecho, entre 1980 y 1989 el promedio anual fue de UF 45.195, y sólo de UF 5.625 entre 1990 y 1997. Esta fuerte baja se correlaciona con la reducción en el número de propiedades vendidas bajo esta modalidad, el

que cae, en promedio, de 38,2 a sólo 5,5, de donde se sigue que el ingreso medio por operación de venta fue, en los ochenta, de UF 1.183,1, mientras que en los noventa alcanzó a UF 1.022,7.

Los precios promedios por unidad de superficie (Cuadros Nº 3.6 y 5.4) fueron UF 0,59 la hectárea en el primer subperiodo, y UF 0,30 en el segundo. Estos valores, claramente inferiores a los observados en las ventas directas (65% y 87% menores, respectivamente), indicarían que, para las propiedades rurales, la venta por propuesta sería una modalidad de menor rendimiento en términos de ingresos.

Llama la atención, asimismo, que mientras el precio promedio por venta directa subió 32% en los noventa respecto de los ochenta, en las ventas por propuesta y en los mismos periodos el precio promedio cae prácticamente a la mitad.

La revisión de los ingresos en cada año revela que sólo 1981 destaca con un aporte muy significativo (46%) respecto del total del periodo. En oposición, 1994, 1997, 1993 y 1996, en ese orden, sólo tienen una contribución nula o muy marginal.

Dos regiones registran los mayores aportes de ingresos: la X y XII, con 31,9% y 30,6%, respectivamente. Otras dos, la II y la V, presentan las contribuciones menores: 0,10% y 0,13%, en cada caso.

El precio medio por hectárea en la X Región alcanzó a UF 2,48; y en la XII, a UF 0,20, es decir, menos del 10% del precio obtenido en la propia X Región.

Los arriendos de propiedades fiscales urbanas y rurales (Cuadro Nº 5.5) representaron ingresos por UF 942.816 entre 1979 y 1997 (19 años). Este total corresponde a la suma —no hay información desagregada— de los ingresos generados por 3.872 propiedades urbanas y 2.445 rurales involucrando las primeras una superficie de 5,03 millones de m^2, y 0,77 millones de hectáreas las segundas (Cuadros Nº 4.1 y 4.5).

El promedio anual de ingresos por arriendos fue de UF 43.990 entre 1979 y 1989, y de UF 57.366 entre 1990 y 1997.

En el primer subperiodo, las regiones con mayor generación de ingresos por arriendos fueron la I (UF 91.553, equivalentes al 18,9% del total generado entre 1979-1989); la XII (UF 89.497 y 18,5%); y la Región Metropolitana (UF 49.799 y 10,3%). Es decir, dos regiones geográficamente extremas del país junto a la región capital totalizaron casi la mitad de los ingresos (47,7%).

Regiones con muy baja contribución en los mismos años fueron la IX (UF 10.371 y 2,1%); la VII (UF 13.696 y 2,8%); y la XI (UF 13.961 y 2,9%).

Al considerar el periodo total (incluidos los años 1990 a 1997), la II Región sube su participación a 31,9% (UF 301.025); la XII la baja a 10,2% (UF 95.768); y la R.M. también la reduce, aunque en menor medida, a 8,5% (UF 80.341). A su vez, las 3 regiones con menores aportes de ingresos reducen aún más su participación porcentual: la IX a 1,5% (UF 13.724); la VII a 2,3% (UF 22.020); y la XI a 1,8% (UF 17.149).

La no disponibilidad de información de ingresos por arriendo desagregada en términos urbano-rurales impide obtener conclusiones sobre valores de arrendamiento por unidad de superficie (m^2 o há.), tanto para el país en su conjunto como a nivel de cada región.

De acuerdo a estadísticas de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales (1997), los ingresos recaudados en 1997 por ventas fueron $ 7,33 mil millones, de los cuales —según el art. 19 de la Ley 19.259 de 10 de noviembre de 1993— un 65% ($ 4,77 mil millones) se asignó al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), un 25% ($ 1,83 mil millones) a Rentas Generales, y un 10% ($ 0,73 mil millones) al propio Ministerio de Bienes Nacionales. A su vez, los ingresos recaudados por arriendos sumaron $ 1,05 mil millones, de los cuales el 93,5% ($ 0,99 mil millones) se destinó a Rentas Generales, el 6,3% ($ 0,07 mil millones) al FNDR, y sólo el 0,1% ($ 0,001 mil millones) al Ministerio. Finalmente, 'otros ingresos' recaudados en 1997 sumaron $ 0,19 mil millones, de los cuales el 99,5% fue a Rentas Generales y la diferencia (menos de $ 1 millón) al FNDR.

V. CONCLUSIONES: BIENES NACIONALES ¿UN MAL NACIONAL?

Las cifras y reflexiones planteadas en este estudio permiten formular dos tipos de conclusiones: unas, referidas a la cuantía, composición y avalúo del patrimonio inmobiliario fiscal; otras, a la evaluación de la gestión estatal de los bienes nacionales. Ambas con el propósito de proponer orientaciones de política pública al respecto.

Ciertamente no existe tasación alguna de la cartera total de bienes raíces fiscales y, dada su cantidad y sobre todo heterogeneidad, resultaría metodológicamente muy complejo y de alto costo realizarla. De manera extraordinariamente simple, y sólo con fines referenciales, puede hacerse el ejercicio de valorizar el stock de propiedades fiscales registrado en 1990 según los precios promedios mencionados en las páginas precedentes.

Los 89 millones de m^2 urbanos tendrían un avalúo de UF 17,8 millones (del orden de US$ 546,6 millones). Las 21,46 millones de hás.

rurales resultarían avaluadas en UF 29 millones (es decir, US$ 890,6 millones). La cartera total de bienes raíces fiscales (de 1990) tendría, en consecuencia, una tasación de UF 46,8 millones (US$ 1.437,2 millones).

Por cierto este ejercicio de cálculo puede ser muy objetado, pero sin duda los bajos precios promedio por unidad de superficie resultan decisivos en los valores resultantes, relativamente menores frente a las órdenes de magnitud de otros activos inmobiliarios privados y también de otros activos estatales.

Al inicio de 1993, el Servicio de Impuestos Internos avaluaba los bienes inmobiliarios privados de todo Chile en US$ 30.000 millones de igual fecha. Al cierre de 1992, el PIB nacional fue de US$ 39.155 millones (Daher, 1995 b). Si se considera —muy simplificadamente— que las propiedades fiscales representaban el 28,13% de la superficie nacional continental a junio de 1994, ello implicaría que, proporcionalmente, su avalúo sería de US$ 11.742 millones. Debe tenerse presente, sin embargo, que el grueso de la propiedad fiscal es rural y de menor valor comercial, pero también que las tasaciones del Servicio de Impuestos Internos registraban un fuerte subavalúo a esa fecha.

Para el país en su conjunto, el avalúo unitario predial promedio era (al 1º de julio de 1993 y sin aplicar reavalúo) de $ 3 millones para los predios agrícolas y de $ 4,1 millones para los no agrícolas. Los primeros fluctuaban entre valores extremos de $ 0,7 millones en la I Región a $ 16,7 millones en la XII Región (estancias). Los avalúos promedio por unidad predial no agrícola variaban entre un mínimo de 2,7 millones en las Regiones IV y XI, hasta un máximo de $ 7,9 millones en Santiago Centro (R.M.) (Daher, 1995 b).

Un informe preliminar de un estudio de María Soledad Arellano y Matías Braun estimaba en US$ 155.943 millones el stock de capital físico de Chile al año 1995. De ese total, US$ 111.355 millones (71,4%) correspondían a construcciones y otras obras, desagregadas como sigue: edificación habitacional US$ 54.654 millones, (35,0%); edificación no-habitacional, US$ 21.357 millones (13,7%); e infraestructura, US$ 27.962 millones (17,9%). Según información de prensa, en dicho estudio se estimaba que el valor total del suelo ascendía a US$ 181.033 millones (*El Mercurio*, miércoles 16 de diciembre de 1998: B6).

La proporción de construcciones en el total de capital físico (71,4%) es coincidente con la indicada por Dasso, Schilling y Ring (1995) para los Estados Unidos (71,25%). La relación entre el capital físico y el producto nacional, y más aún el avalúo total del suelo señalado, requerirían de un

análisis más pormenorizado sobre cifras menos preliminares que las entregadas. Si se acepta el valor total señalado para el suelo como referencia —excluyendo construcciones—, la superficie fiscal (32,1% del total en 1998) tendría un avalúo de US$ 58.000 millones.

El propio Ministerio de Bienes Nacionales (s/f ¿1998? b) daba cuenta en su Memoria que mientras en 1994 administró un patrimonio fiscal por un monto cercano a $ 40 mil millones correspondiente a 100.000 hectáreas, en 1995 dicho monto fue sólo de $ 20 mil millones, a pesar de que las hectáreas involucradas subieron a 320.000, y en 1996, con una superficie nuevamente de 100.000 hectáreas sujetas a operaciones o actos administrativos, sólo se involucró un patrimonio fiscal de $ 14.800 millones.

Las cifras precedentes implican precios promedio por hectárea de $ 400 mil para 1994, $ 62.500 para 1995 y $ 148 mil para 1996. En el trienio, el precio medio ponderado es de $ 143,8 mil por hectárea. Este valor, traducido en dólares estadounidenses y multiplicado por los 24,3 millones de hectáreas fiscales reconocidas en 1999 da, simplificadamente, un avalúo de US$ 8.505 millones para el patrimonio inmobiliario fiscal.

Dasso, Schilling y Ring (1995) avaluando el capital fijo tangible de los Estados Unidos —según fuentes del periodo 1986-1992— indican que los activos en bienes raíces suman 11.132 billones de dólares (71,25%), en tanto que el resto de los activos fijos representa 4.491 billones de dólares (28,75%). Los primeros están integrados por (en billones de dólares): propiedades residenciales, 8.703 (55,71%); y propiedades no residenciales, 2.429 (15,54%). Estas últimas se desagregan en oficinas, 958 (6,13%); comercio, 854 (5,46%); industria manufacturera, 325 (2,08%); y galpones de almacenamiento, 292 (1,87%).

Dipascuale y Wheaton (1996) cifraban la construcción privada en Estados Unidos en 1990 en US$ 338 billones (6,1% del Producto) y la pública en US$ 109 billones (2,0% del Producto). La construcción nueva total correspondía, en consecuencia, al 8,1% del PIB. Para el mismo año, dichos autores avaluaban en US$ 6.122 billones los bienes raíces residenciales y en US$ 2.655 billones los no residenciales, es decir, 69,8% y 30,2% del total de US$ 8.777 billones. Esta última cifra equivaldría al 56% de la riqueza de la nación en 1990, estimada en US$ 15.600 billones por la Reserva Federal.

En el mismo año —coincidente por lo demás con el año base del stock de propiedades fiscales de este estudio— el Banco Central de Chile (1990) señalaba que la construcción y otros rubros de incidencia menor: plantaciones, mejoras de tierras, etc., aportaban el 55,6% de la formación

bruta de capital fijo. Según la misma fuente, la tasa de inversión en edificación habitacional (exclusivamente) fluctuó en torno al 7% del PGB (Producto Geográfico Bruto) en la década del sesenta, situándose alrededor del 4% en la del ochenta. (En el primer periodo la tasa de inversión fue de 20,2% como promedio anual, cayendo en el segundo a una media de 15,8%.)

Así pues, más allá de las diversas estimaciones y cálculos posibles, es clara y contundente la relevancia económica de la propiedad fiscal, ya sea tratándose de tierras contenedoras de recursos y potencialmente aptas para múltiples usos y fines, o bien de edificios ligados a la producción y los servicios.

La estimación menor, cercana a los US$ 1.500 millones, y la mayor, de US$ 58.000 millones, pueden impugnarse por múltiples causales, entre las cuales cabe señalar —para la primera— la base de precios promedio históricos que subestiman la valorización real de los bienes raíces, a la vez que dichos precios probablemente correspondían a bienes de menor valor en la cartera; para la segunda estimación, las objeciones pueden ser las opuestas, en atención a la predominancia de superficies rurales en el stock estatal y, adicionalmente, al posible menor valor económico de los bienes fiscales mayoritariamente concentrados en áreas geográficamente extremas.

Las estimaciones intermedias, de US$ 11.742 millones —basada en los avalúos del Servicio de Impuestos Internos— y de US$ 8.505 —según datos del patrimonio administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales entre 1994 y 1996— también son vulnerables: una, por el subavalúo generalizado existente en 1993, que llevó a un sustantivo reavalúo posterior; la otra, porque los valores promedio de cada uno de los tres años son muy disímiles, al punto de dudarse del método de valorización del patrimonio o, al menos, de la representatividad del periodo considerado.

Parece razonable, sin embargo, aceptar un orden de magnitud y un rango de fluctuación a falta de mejor información, y con el propósito de dimensionar económicamente una cartera inmobiliaria fiscal que nadie, ni el propio Estado, sabe cuánto vale. Ese rango se estima aquí, hechas todas las consideraciones, entre US$ 15.000 y US$ 30.000 millones. Este orden de magnitud es un dato para repensar la gestión inmobiliaria del Estado y orientar las líneas estratégicas de las políticas referidas a los bienes nacionales.

Ese es el posible valor de esa ‘tierra de nadie’, de esa verdadera ‘terra incógnita’ nunca catastrada, a la que se alude peyorativamente, de-

pendiente de muchas —y por lo mismo a veces de ninguna— de las instituciones del Estado, y principalmente de la tuición del Ministerio menos importante, 'pariente pobre' entre sus pares y, por paradoja, el mayor terrateniente del país.

El mayor terrateniente, cuya cartera de tierras fiscales supera en superficie a Uruguay y Cuba, Holanda y Grecia; más que sextuplica el área de Suiza; y es sólo algo inferior al territorio de Italia o Japón, la segunda economía más grande del mundo.

El Estado no sabe lo que tiene: ayer, algunos reclamaron ser propietarios de más de medio millón de hectáreas, incluyendo el pueblo y la comuna de Palena enteros; hoy, el Estado sigue descubriendo nuevas propiedades fiscales en plena comuna de Santiago; ¿mañana? Así, entre especulaciones, fraudes, depredación de recursos naturales en las tierras fiscales, pérdida de patrimonio nacional y potencialidades subutilizadas u ociosas que se restan al desarrollo, surge la imperiosa necesidad de conocer, cuantificar, valorizar y gestionar uno de los mayores activos en manos del Estado.

A falta de catastro de las propiedades fiscales inscritas, sabiendo que hay que esperar al siglo XXI para hacer otro tanto con las no inscritas, y considerando el limbo en que está la valorización de la cartera inmobiliaria fiscal, algunas de las conclusiones estadísticas derivadas de este estudio resultan orientadoras en materia de opciones de políticas.

En primer lugar, algunos grandes números deben tenerse presentes: más de la mitad, 57%, del patrimonio de tierras fiscales corresponde a áreas silvestres protegidas; casi un quinto, 18,4%, a territorios disponibles; proporciones similares, 6,5 y 7,5%, a las Fuerzas Armadas y a arriendos, usos gratuitos y onerosos, respectivamente. Esto implica, primero, una gran relevancia del SNASPE y de su gestión —incluidas las fórmulas de participación privada y las múltiples modalidades de obtener rentabilidad compatible con la conservación, y segundo, y sobre todo, una decisión político-estratégica respecto de la cantidad y cualidad de las áreas protegidas y, con ella, de alternativas parciales de privatización y desarrollo sujetas a la correspondiente evaluación ambiental.

Enseguida, el casi quinto del patrimonio, correspondiente a 'territorios disponibles' plantea un gran desafío: ¿disponibilidad para qué?, ¿disponibilidad para quién?, ¿y para cuándo? Tal vez esta disponibilidad involucre tierras de menor valor —no calificaron para ser protegidas por el Estado, tampoco están arrendadas o dadas en uso gratuito, ni destinadas a nadie— y, si así fuera, requieren de un esfuerzo preferencial por 'ponerlas en valor'.

En fin, que todas las propiedades fiscales arrendadas y entregadas en uso gratuito u oneroso equivalgan, en superficie, a las destinadas a las FF.AA., sugiere que, o bien estas últimas disponen de áreas amplísimas —en rigor, 15.795 km^2— o, lo que sin duda es indiscutible más allá de la comparación, que las áreas arrendadas y dadas en uso son muy menores en relación al territorio fiscal: 18.225 km^2 de un total de 243.000 km^2. Esta proporción —o desproporción— advierte sobre la necesidad de 'activar' mayores territorios, en especial entre los calificados como disponibles.

Continuando en las grandes líneas, debe tenerse presente el fuerte sesgo geográfico de la cartera de bienes raíces fiscales y, en consecuencia, el acento regional de la gestión estatal. En efecto, que más del 50% de toda la superficie continental fiscal esté concentrado en dos de las trece regiones del país —las australes XI y XII— mientras que las cinco regiones del Norte Chico y Centro —de la III a la VI, incluida la Metropolitana— tengan una participación marginal, focaliza y en rigor 'localiza' en gran medida la acción del Estado. De los 215.000 km^2 fiscales registrados en 1990, 170.000 estaban al sur de la Región Metropolitana.

Esta 'localización' implica también una atención singular de los gobiernos regionales, abogando por una creciente descentralización en la gestión de los bienes nacionales, sin que ello signifique necesariamente —en un sentido restrictivo— transformarlos en 'bienes regionales'. Esta diferenciación interregional resulta evidente al observar que, mientras en la XII Región el 53,4% del territorio es fiscal, en la IV Región lo es sólo el 2,4%.

Por lo demás, no es casual el sesgo geográfico anotado. Es cierto que en general se trata de áreas de fronteras naturales y en muchos casos de menor habitabilidad. Pero no es menos cierto que las regiones de mayor desarrollo en el país tienden a registrar una menor propiedad estatal.

En términos urbano-rurales, una vez más se torna ineludible el sesgo geográfico en la cartera de bienes raíces fiscales: casi dos tercios, 64%, de todas sus propiedades son urbanas, pero ellas representan sólo el 0,0004% de la superficie fiscal nacional. La conclusión es obvia: en relación al número de propiedades, la gestión inmobiliaria del Estado es urbana; en relación a la superficie, es rural. La carencia de valorización de la cartera dificulta, nuevamente, estimar el sesgo urbano o rural en términos económicos.

Todo indica, sin embargo, que la gestión inmobiliaria del Estado debería especializarse, en atención a la muy disímil realidad y administración de bienes raíces urbanos y rurales, sin perjuicio de la necesaria coordinación, sobre todo en áreas potencialmente urbanizables.

El sesgo urbano en el número de propiedades fiscales hace posible precisar, en consecuencia, el sesgo geográfico inherente a la cartera inmobiliaria fiscal como un todo: el predominio rural en la superficie de la misma la asocia a las regiones del extremo austral; en cambio, la primacía urbana en la cantidad de propiedades la refiere, sin perjuicio de diferencias interregionales, al país en su conjunto.

Otra variable general de relevancia para la formulación de políticas es la tenencia. Las estadísticas de 1990, más allá de su relativa confiabilidad, son contundentes en los grandes números: 3.762 propiedades fiscales urbanas, 29,3% del total, estaban calificadas con información provisoria; y otro tanto sucedía con 2.780 propiedades rurales, que representaban el 38,3% del respectivo total. Así pues, más o menos un tercio de la cartera total estaba afecta a una situación de provisoriedad. He aquí un argumento adicional en favor de la urgente necesidad de catastrar adecuadamente la propiedad fiscal inscrita y no inscrita, subsanando la inexcusable omisión de información, difícilmente aceptable dado el nivel de desarrollo alcanzado por el país, sobre todo en el ámbito científico y tecnológico.

Pero hay más: de las propiedades fiscales urbanas con información provisoria, 2.143 —el 57%, con ni más ni menos que 17,3 millones de m^2— correspondían a ¡tenencia irregular pública!, y sólo el 6,4% a tenencia irregular privada, mientras que el resto estaba afecto a mera ocupación o sin información. En el área rural la situación era análoga.

Doble responsabilidad para el Estado: tanto por la provisoriedad de la información de una proporción mayúscula de la cartera de bienes nacionales cuanto por la tenencia irregular pública de más de la mitad de la misma. Las directrices de política a seguir no necesitan de mayor comentario.

Siempre en términos de tenencia, las cifras señalan que, de las propiedades urbanas fiscales administradas, 935 —el 10,3%— estaban registradas sin ocupación en 1990. Ello involucraba la significativa suma de 10,1 millones de m^2. Entre las propiedades rurales, 1.345 —un 30,4%— estaban igualmente sin ocupación, afectando a 3,4 millones de hectáreas. La conclusión de política es obvia: agilidad y creatividad para combatir capacidades instaladas ociosas, recursos subutilizados, activos inactivos, capitales fijos que se deprecian, en fin, bienes y medios que se restan del desarrollo.

Las estadísticas de venta o privatización de propiedades fiscales en los últimos dos decenios también resultan aleccionadoras en términos de políticas a seguir. En el periodo 1979-1997, fueron vendidas directamente 3.941 propiedades urbanas, con 11,6 millones de m^2, además de 1.155

propiedades subastadas, con 3,5 millones de m^2. El promedio anual, bajo la primera modalidad de venta, fue de 272,4 propiedades en los ochenta, cayendo a sólo 118 —menos de la mitad— en los gobiernos de los noventa. En subastas y propuestas, las medias correspondientes fueron 111 en la primera década, y sólo 5,3 en la segunda. La venta, expresada en superficie, marca igualmente diferencias categóricas: en los ochenta, el gobierno vendió 10,9 millones de m^2, correspondiendo un 30% de ellos a subastas. En los noventa —ocho años— los gobiernos vendieron 4,2 millones de m^2, de los cuales sólo un 5,1% se transó mediante propuesta o subasta. En síntesis, se privatiza mucho menos, y se da preferencia a las transacciones directas.

En el ámbito rural la situación es más o menos la misma. En todo el periodo de estudio, fueron vendidas directamente 2.977 propiedades, con 1,7 millones de hás., y subastadas 431, con 0,9 millón de hás. Las ventas directas rurales alcanzaron un promedio anual, entre 1979 y 1989, de 191,7 propiedades con 107 mil hás. En los noventa, el número cae a 108,5 y la superficie a 59,5 mil hás. Las transacciones por subastas caen de un promedio de 38,7 propiedades en los ochenta a sólo 5,5 en los noventa, y la superficie media también baja de 76,4 mil hás. a tan sólo 18,7 mil hás. anuales. La conclusión es evidente y concordante con la correspondiente a las transacciones urbanas: en los noventa, el Estado privatiza menos, favoreciendo mucho más las ventas directas que las propuestas y subastas.

Las consecuencias en términos de precios obtenidos a través de una u otra modalidad de venta fueron las siguientes: en todo el periodo (1979-1997), el precio medio obtenido por las propiedades urbanas vendidas directamente fue de UF 528,7, mientras que el logrado mediante propuestas y subastas alcanzó a UF 824,5, es decir ¡un 56% más alto! En las propiedades rurales la media sube un 14,2%, de UF 1.015,9 a UF 1.159,8, respectivamente.

Pero hay más: el precio promedio por m^2 urbano fue de UF 0,18 en ventas directas y de UF 0,27 en las subastas ¡un 50% más alto!

Los precios medios rurales presentan, sin embargo, un comportamiento distinto, de signo opuesto: la hectárea subastada bajó en un tercio de precio frente a la vendida directamente. Esta última se transó a UF 1,81 y la primera sólo a UF 0,54.

Salvo en este último caso, las cifras son contundentes y las conclusiones inequívocas: los precios obtenidos en subastas y propuestas son sustancialmente mayores —entre un 14% y un 56% más altos— que los logrados mediante ventas directas. Esto se cumple tanto al contrastar precios medios de propiedades como precios medios unitarios por m^2.

¿Por qué entonces los gobiernos de la década de los noventa favorecieron claramente la modalidad de venta que minimiza los precios obtenidos? ¿No era más obvio suponer que la venta por subastas y propuestas en general los maximiza, aumentando la concurrencia y de paso la transparencia?

La recomendación de política es una y categórica, respaldada por una experiencia de ventas de 19 años: preferenciar modalidades de venta lo más públicas y competitivas posibles.

Es interesante observar, sin perjuicio de lo anterior, el comportamiento de los precios de venta durante las dos décadas, sabiendo de antemano que, en valor real, ellos tienden naturalmente al alza, y esperando que dicha tendencia se fortalecería por el buen desempeño de la economía nacional entre 1990 y 1997.

En efecto, el precio medio en las ventas directas urbanas sube de UF 0,12 m^2, en los ochenta, a UF 0,26 en los noventa (más 116,7%). El alza real es aún mayor en las propuestas o subastas: de UF 0,23 a UF 0,98 el m^2 (más 326%). Este último incremento confirma las conclusiones anteriores.

Las ventas directas rurales registran una alza real de 32% en el precio promedio, pasando éste de UF 1,71 por hectárea, en la primera década, a UF 2,25, en la siguiente. En las subastas se confirma la excepción anotada, registrándose una baja de UF 0,59 a UF 0,30 en los mismos decenios.

El sesgo geográfico observado en la composición regional de la cartera de bienes nacionales también se constata en la trayectoria de las ventas. De hecho, en el periodo 1979-1997, el 79% de la superficie urbana vendida directamente en todo el país se localiza en las tres primeras regiones del norte, y el 80% del área total vendida por subastas y propuestas se concentra en las dos regiones del Norte Grande. En las ventas rurales el sesgo geográfico es igualmente acentuado, pero esta vez hacia el extremo austral: más del 93% del total vendido directamente se localiza en las regiones XI y XII, y el 90% del total subastado corresponde a las regiones X y XII, siempre con predominio de esta última.

En materia de precios, la variable geográfica es también de gran incidencia. Basten algunos ejemplos: en ventas directas urbanas, los precios por m^2 medios (1979-1997) por región fueron de UF 0,08 en la II y de UF 1,01 en la Metropolitana; en subastas urbanas, el precio en la II Región fue el mismo, pero en la Metropolitana alcanzó a UF 6,25. En el medio rural, las ventas directas tuvieron precios medios por há. de UF 7,3 en la III y de UF 339,1 en la Región Metropolitana; en subastas, los valores fueron de UF 2,48 en la X Región y de sólo UF 0,20 en la XII.

Estos diferenciales regionales de precios, como asimismo la alta concentración regional de las ventas tanto urbanas como rurales, abogan nuevamente por una mayor descentralización en la gestión inmobiliaria del Estado, no sólo a través de las secretarías regionales ministeriales, sino también mediante un rol más protagónico de los gobiernos regionales.

Junto a las ventas, los arriendos constituyen ciertamente otra fuente de ingresos fiscales a la vez que una modalidad alternativa de activar el patrimonio inmobiliario estatal. En el periodo 1979-1997 fueron arrendadas 3.872 propiedades urbanas con un total de 5 millones de m^2. Entre los ochenta y los noventa, el promedio anual de propiedades urbanas arrendadas cae de 224,4 a 175,5, y la superficie media anual baja de 308 mil a 204 mil m^2. Las propiedades rurales bajo arriendo entre 1979 y 1997 fueron 2.445, y la superficie total alcanzó a 0,77 millones de hás. El número promedio de arriendos por año no varió significativamente en ambas décadas, pero sí lo hizo la superficie media, la que bajó de casi 52 mil hás. anuales en los ochenta a menos de 25 mil hás. en los noventa.

Así pues, los gobiernos posteriores al militar no sólo vendieron o privatizaron menos: también, por lo general, arrendaron menos propiedades y con menores superficies ¿por qué? Podría esperarse un menor afán privatizador, pero ¿por qué arrendar menos, disminuyendo los ingresos fiscales potenciales y, lo que es más grave, restando recursos al desarrollo nacional?

Se trata de ingresos nada despreciables, que por ley se abonan a Rentas Generales, al fondo Nacional de Desarrollo Regional y al propio Ministerio de Bienes Nacionales. Las cifras hablan por sí solas: los ingresos por ventas y arriendos en el periodo 1979-1997 sumaron UF 7,2 millones, correspondiendo casi un 87% a las primeras y el 13% restante a los segundos.

Este monto histórico, más bien bajo en relación a la cartera de bienes fiscales, podría multiplicarse con una mejor gestión gubernamental, tanto en modalidades de venta cuanto en arriendos y concesiones onerosas. De paso el Estado contribuiría al crecimiento económico del país y, en especial, de las regiones con mayor concentración de bienes raíces fiscales.

Es cierto que el Estado tiene también una responsabilidad social en la gestión de los bienes nacionales fiscales, la que se hace particularmente evidente en el otorgamiento de títulos gratuitos. En relación a éstos, las estadísticas del periodo acusan muy diversas políticas y resultados antes y después de 1990.

En efecto, entre 1979 y 1989, se entregaron en promedio 226 títulos urbanos gratuitos anuales; en los noventa, el promedio sube verticalmente a

1.177 títulos. En el primer decenio, la superficie media anual involucrada fue de 66.821 m^2; en el segundo, de 354.319 m^2. Si bien la superficie unitaria por título se incrementa levemente —de 295 a 301 m^2—, el número de títulos conferidos y la superficie total se quintuplicaron en los noventa. Sin duda las cifras reflejan una voluntad política y un acento social en la gestión de bienes nacionales en los últimos años.

Los títulos gratuitos rurales registran, en parte, una tendencia análoga: en el periodo 1979-1989, se entregó un promedio de 241,5 títulos rurales, subiendo esa cifra a 664 en los noventa. La superficie involucrada anualmente cae, sin embargo, de 39.450 hás. a sólo 10.277 hás. En el ámbito rural, este último indicador podría sugerir una orientación hacia sectores campesinos o rurales de menores recursos, aunque la gratuidad de los títulos tendría ese supuesto como norma general.

Geográficamente, también los títulos gratuitos otorgados presentan una importante concentración en ciertas regiones. Entre 1979 y 1997, tres regiones contiguas —la VIII, IX y X— registraron más del 26% de los títulos urbanos y cerca del 40% de la superficie otorgada gratuitamente. Es más, esa participación sube a un tercio de los títulos y a la mitad del área otorgados en todo el país durante el cuatrienio 1994-1997.

El sesgo geográfico detectado en los títulos gratuitos rurales es también significativo: en todo el periodo de análisis, la XI Región —frontera de colonización— concentró el 85% de la superficie nacional otorgada, y la contigua X Región, el 25% de todos los títulos gratuitos rurales.

La geografía, tan determinante en la composición de la cartera de bienes raíces fiscales, tan fuertemente presente en las ventas tanto urbanas como rurales, y tan radicalmente nítida incluso en la distribución de títulos gratuitos reincide, una vez más, en favor de una mayor descentralización en la gestión de los bienes nacionales, tanto a nivel regional como —sobre todo en materia de títulos gratuitos— a nivel comunal.

Si se hace una apretada síntesis de las políticas gubernamentales implícitas en las estadísticas de gestión de bienes nacionales antes y después de 1990, se concluye gruesamente que el acento más privatizador, vía ventas, en los ochenta es sustituido por un acento más privatizador, vía títulos gratuitos, en los noventa.

Se trata sin duda de dos acentos distintos pero complementarios, compatibles y necesarios ambos: apuntan y responden a demandas distintas, e incluso los ingresos de uno, las ventas, pueden ayudar a subsidiar los egresos del otro, los títulos gratuitos. La incorporación de tierras a distintos procesos productivos y actividades económicas en general —que redundan en beneficio del país y sus regiones, con efectos multiplicadores e incluso

tributarios— no se opone en absoluto a políticas sociales y redistributivas como el otorgamiento de títulos gratuitos rurales y urbanos. Otro tanto sucede con los arriendos y concesiones onerosas. Lo que sí no debe olvidarse de la experiencia reciente es que las transacciones comerciales resguardan por lo general mejor los intereses del Estado cuando se ejecutan vía propuestas y subastas.

La 'privatización' de parte de la cartera de bienes nacionales puede tener múltiples objetivos, que van desde respuestas a requerimientos de empresas privadas, instituciones y particulares, hasta planes de colonización y razones geopolíticas y de soberanía nacional, pasando por programas sociales y necesidades de desarrollo urbano, entre otros. A esos diversos objetivos pueden corresponder, a su vez, variadas modalidades de 'privatización': ventas, *leasing*, concesiones onerosas y gratuitas, títulos gratuitos, participación de los fondos de inversión inmobiliaria y previsionales, sociedades mixtas y otras formas de cooperación público-privada. En cualesquiera de ellas pueden tomarse los resguardos ambientales necesarios, incluidos, por cierto, los propios del sistema de evaluación de impacto ambiental.

La voluntad política actual del Ministerio del ramo de definir "inmuebles imprescindibles" —de acuerdo a ciertos criterios generales— puede conducir en la práctica, según se implemente, a dos resultados más o menos extremos: uno —el menos probable—, que se agilice el traspaso de los bienes prescindibles, sea al sector privado, sea al patrimonio de los gobiernos regionales, siendo esta última alternativa la más explícitamente planteada. Otro, que la cuantía de los bienes declarados imprescindibles —sobre todo bajo el argumento de preservarlos para las generaciones futuras— sea tal que, de hecho, se frene el proceso privatizador o se lo restrinja sólo a la gestión privada vía concesiones. La evidencia empírica de los años noventa —registrada estadísticamente— permite constatar que no sólo han caído verticalmente las ventas, sino también los arriendos de propiedades fiscales. Y la actual promoción de concesiones onerosas —con las reformas legales del caso— termina por confirmar que uno de los mayores activos en manos del Estado sería, salvo excepciones, preservado de la privatización tradicional vía ventas.

Esta alternativa, cuyos fundamentos conceptuales pueden resultar en principio aceptables, tiene el riesgo, si se extralimita el criterio de imprescindibilidad, de reeditar —adaptándolo por analogía a las propiedades fiscales— la superada tesis de las empresas 'estratégicas' como entes necesariamente estatales y no privatizables.

Otro riesgo que se asume es el de un exceso de celo conservacionista, preservando incluso muchos bienes nacionales no por legítimas razones ambientales, sino por tácitas, pero no por ello menos radicales, posiciones ecologistas.

Si este último riesgo puede llevar a la tradicional opción de mantener un Estado terrateniente, en la acepción más bien crítica y peyorativa de este adjetivo, connotando falta de modernidad, menor productividad y escaso espíritu emprendedor, el otro riesgo —el de las 'tierras-empresas estratégicas'— puede conducir de nuevo al Estado empresario, esta vez bajo la figura del Estado empresario inmobiliario.

Una política de Estado para la gestión del patrimonio de la Nación, en el contexto de una economía de mercado, es el gran desafío pendiente. Ese desafío comienza por el convencimiento de que, más allá de las 'tierras de nadie', del desconocimiento y del abandono, de los fraudes e irregularidades, y de su 'desadministración' secular, los bienes nacionales no son un mal nacional.